RV: Acción de inconstitucionalidadLey de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. “POR LA CUAL SE REGULALA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS", por violentarel derecho fundamental a la consulta previa del Pueblo indíge...

secretaria4 corte constitucional <secretaria4@corteconstitucional.gov.co>

Mié 10/02/2021 16:25

Para: Secretaria3 Corte Constitucional <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>

15 archivos adjuntos (17 MB)

ACCIÓN DE INCOSNTITUCIONALIDAD - REGALIAS.pdf; ANEXO 5 CONCEPTO PUEBLO INDIGENA YUKPA, MNISTERIO DEL INTERIOR.PDF; ANEXO 6 CONCEPTO DEFENSORIA DEL PUEBLO.pdf; ANEXO 3 SEGUNDO CONCEPTO ICHAN.pdf; ANEXO 2 CONCEPTOS NOMADAS- ICHAN.pdf; ANEXO 4 CONCEPTO YUKPA UNVERSIDAD EXTERNADO.pdf; ANEXO 9 OFICIO ENVIADO Y RECIBIDO DNP.pdf; ANEXO 14 OFICIO MINITERIO DEL INTERIOR IROKA.pdf; ANEXO 10 RESPUESTA DEL DANE , OFICIO- DANE RESPUESTA DE DERECHO PETICION RADICADONo 20202300009781.pdf; ANEXO 11 DERCHO DE PETICIÓN ENVIADO GOBIERNO NACIONAL.pdf; ANEXO 12 CONSTANCIA PUEBLO YUKPA DEL 202020201209_18085865.pdf; ANEXO 7 INFORME DEFESNORIA YUKPA AUTO 004 YUKPA.pdf; ANEXO 15 RESPUESTA OFICIO MINISTERIO DEL INTERIOR.pdf; ANEXO 17 OFICIO TRASLADO HALLAZGOS DICIPLINARIOS FISCALIA - ANLA -MINERIA.pdf; ANEXO 16 APROBADA Acta MPC 27, 28, 29 y 30 de julio de 2020 (2) (1).pdf;

De: Juridica Iroka <juridicairoka@gmail.com>
Enviado: miércoles, 10 de febrero de 2021 16:19
Para: Presidencia Corte Constitucional <presidencia@corteconstitucional.gov.co>; secretaria@corteconstitucional.gov.co <secretaria@corteconstitucional.gov.co>; Secretaria1 Corte Constitucional <secretaria1@corteconstitucional.gov.co>; Secretaria2 Corte Constitucional <secretaria2@corteconstitucional.gov.co>; Secretaria3 Corte Constitucional <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>; secretaria4 corte constitucional <secretaria4@corteconstitucional.gov.co>; Quejas <quejas@procuraduria.gov.co>; Procesos Judiciales - Oficina Juridica <procesosjudiciales@procuraduria.gov.co>; procurador@procuraduria.gov.co <procurador@procuraduria.gov.co>; grupoinsistenciasdet@procuraduria.gov.co <grupoinsistenciasdet@procuraduria.gov.co>; arvargas@procuraduria.gov.co <arvargas@procuraduria.gov.co>; laborde@procuraduria.gov.co <laborde@procuraduria.gov.co>; asuntosdefensor@defensoria.gov.co <asuntosdefensor@defensoria.gov.co>; bernardo_pz@hotmail.com <bernardo_pz@hotmail.com>; fherrera@defensoria.gov.co <fherrera@defensoria.gov.co>; idhoea@oas.org <idhoea@oas.org>; cidhdenuncias@oas.org <cidhdenuncias@oas.org>; cidhproteccion@oas.org <cidhproteccion@oas.org>; cidhoea@oas.org <cidhoea@oas.org>
Asunto: Fwd: Acción de inconstitucionalidadLey de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. “POR LA CUAL SE REGULALA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS", por violentarel derecho fundamental a la consulta previa del Pueblo indíge...

Serranía del Perijá, Municipio de Agustín Codazzi, diez (10) de diciembre de 2020

Doctora
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Honorable Magistrada Corte Constitucional
presidencia@corteconstitucional.gov.co
secretaria@corteconstitucional.gov.co

secretaria1@corteconstitucional.gov.co
secretaria2@corteconstitucional.gov.co
secretaria2@corteconstitucional.gov.co
secretaria3@corteconstitucional.gov.co
secretaria4@corteconstitucional.gov.co

Doctor
ALBERTO ROJAS RÍOS
Honorable Magistrado Corte Constitucional

Doctor
CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO
Honorable Magistrado Corte Constitucional

Doctora
DIANA FAJARDO RIVERA
Honorable Magistrada Corte Constitucional

Doctor
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Doctor
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Honorable Magistrado Corte Constitucional

Doctor
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Honorable Magistrado Corte Constitucional

Doctora
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Honorable Magistrada Corte Constitucional

Doctor
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Honorable Magistrada Corte Constitucional

Doctora
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General Corte Constitucional

Doctor
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ.
Procurador General de la Nación
quejas@procuraduria.gov.co
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
procurador@procuraduria.gov.co
grupoinsistenciasdet@procuraduria.gov.co
arvargas@procuraduria.gov.co
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
laborde@procuraduria.gov.co
grupoinsistenciasdet@procuraduria.gov.co

Doctor
CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSIS
Defensor Regional del Pueblo
asuntosdefensor@defensoria.gov.co
bernardo_pz@hotmail.com
fherrera@defensoria.gov.co

Doctor
PAULO ABRAO
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos (OEA)
idhoea@oas.org
cidhdenuncias@oas.org
cidhproteccion@oas.org

Doctor
ALBERTO BRUNORI,
Representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
abrunori@ohchr.org
gmuyuy@ohchr.org

Doctor
EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos (OEA)
idhoea@oas.org
cidhdenuncias@oas.org
cidhproteccion@oas.org

Doctor
PAULO ABRÃO
Secretario Ejecutivo de la CIDH
cidhoea@oas.org
cidhproteccion@oas.org
cidhdenuncias@oas.org

REFERENCIA: Acción de inconstitucionalidad Ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. "*POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*", por violentar el derecho fundamental a la consulta previa del Pueblo indígena Yukpa de la Serranía del Perijá.

ACCIONANTE: LOS (06) SEIS GOBERNADORES DEL PUEBLO INDÍGENA YUKPA, JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ, ALFREDO PEÑA FRANCO, ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO, EMILIO OVALLE MARTÍNEZ, ALIRIO OVALLE REYES Y ANDRÉS VENCE VILLAR.

ACCIONANDO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Los (06) seis Gobernadores del Pueblo Indígena Yukpa, Jaime Luis Olivella Márquez, Alfredo Peña Franco, Esneda Saavedra Restrepo, Emilio Ovalle Martínez, Alirio Ovalle Reyes y Andrés Vence Villar, por medio de la presente nos permitimos radicar Acción de inconstitucionalidad Ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. "*POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL*

DE REGALÍAS", por violentar el derecho fundamental a la consulta previa del Pueblo indígena Yukpa de la Serranía del Perijá, con sus respectivos anexos.

1. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - REGALÍAS
2. ANEXO 1. Escritura Pública número 0317 del dos (02) de agosto del año 2019.
3. ANEXO 2, Concepto número 105. 4446, número recibido 3013-2019, del veintiséis (26) de agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN*)*
4. ANEXO 3, Concepto número 4962 del diez (10) de septiembre de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN*)*
5. ANEXO 4, Concepto de la Facultad de Antropología Universidad Externado de Colombia, emitido el pasado ocho (08) de agosto de 2019.
6. ANEXO 5, Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y seminómadas del pueblo Yukpa Ministerio del Interior, mediante concepto firmado por el señor viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, radicado número OFl19-52777-DAl-2200, del veintisiete (27) de noviembre de 2019.
7. ANEXO 6, Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y seminómadas del pueblo Yukpa de la Defensoría del Pueblo, año 2018.
8. ANEXO 7, Informe defensoría auto 004, Corte Constitucional.
9. ANEXO 8, Respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al derecho de petición de fondo, radicado 2020ER0009884, de fecha veintisiete (27) de febrero de 2020
10. ANEXO 9, Oficio recibido DNP, oficio Radicado No. 2020230000978, del día treinta y uno (31) de enero de 2020.
11. ANEXO 10, Oficio recibido DANE, mediante oficio con radicado número 20203130033152, el día trece (13) de febrero de 2020.
12. ANEXO 11, Derecho de petición enviado al Gobierno Nacional, del día 11 de febrero de 2020, radicado número 20196630086372 y respuesta fecha 12 de marzo de 2020, radicado número 20194600173961.
13. ANEXO 12, Constancia del pueblo indígena Yukpa del 2020
14. ANEXO 13, Acta de taller de medidas de manejo de la consulta previa de la orden tercera (3) de la Sentencia T-713 de 2017, veintidós (22), veintitrés (23) y veinticuatro (24) de noviembre del año 2018.
15. ANEXO 14, oficio recibido 20 de febrero del 2020, por el Ministerio del Interior, mediante radicado número OFI2020-4214-DAI 2200.
16. ANEXO 15, Oficio enviado el 21 de febrero 21 de 2020, donde el pueblo Yukpa responde el oficio del Ministerio del Interior.
17. ANEXO 16, Oficio acta de concertación de Consulta previa, de la Ley de regalías, El día 28, 29, 30 y 31 de julio y 1 de agosto de 2020.
18. ANEXO 17, Oficio enviado por el Contralor Delegado para el Sector Ambiente, el día veintidós (22) de junio del año 2018, mediante radicado número 2018EE0076686 al Fiscal General de la Nación, Doctor **NÉSTOR HUMBERTO NEIRA,** de iniciar las investigaciones penales a la ANLA, CORPOCESAR.
19. ANEXO 18, Oficio por el Contralor Delegado para el Sector Ambiente, al doctor **FERNANDO CARRILLO FLÓREZ,** Procurador General de la Nación, radicado número 2018EE0076678 al Procurador General de la Nación, Doctor **FERNANDO CARRILLO FLÓREZ.**
20. ANEXO 19, Carta enviada por la Defensoría del Pueblo a la Honorable Corte Constitucional, 2020.
21. ANEXO 20 DERECHO DE PETICIÓN-DNP 2020

Atentamente,

Pueblo Yukpa
Serranía del Perijá.

---------- Forwarded message ---------
De: **Juridica Iroka** <juridicairoka@gmail.com>
Date: jue, 10 dic 2020 a las 10:03
Subject: Acción de inconstitucionalidadLey de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. "POR LA CUAL SE REGULALA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS",

por violentarel derecho fundamental a la consulta previa del Pueblo indígena Yukpa de laSerranía del Perijá.
To: <presidencia@corteconstitucional.gov.co>, <secretaria@corteconstitucional.gov.co>, <secretaria1@corteconstitucional.gov.co>, <secretaria2@corteconstitucional.gov.co>, <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>, <secretaria4@corteconstitucional.gov.co>, <quejas@procuraduria.gov.co>, <procesosjudiciales@procuraduria.gov.co>, <procurador@procuraduria.gov.co>, <grupoinsistenciasdet@procuraduria.gov.co>, <arvargas@procuraduria.gov.co>, <laborde@procuraduria.gov.co>, <asuntosdefensor@defensoria.gov.co>, <bernardo_pz@hotmail.com>, <fherrera@defensoria.gov.co>, <idhoea@oas.org>, <cidhdenuncias@oas.org>, <cidhproteccion@oas.org>, <abrunori@ohchr.org>, <gmuyuy@ohchr.org>, <cidhoea@oas.org>, edwar alvarez vacca <edwar775@hotmail.com>, Herlinda Iroka <herlindairoka@hotmail.com>

Serranía del Perijá, Municipio de Agustín Codazzi, diez (10) de diciembre de 2020

Doctora
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Honorable Magistrada Corte Constitucional
presidencia@corteconstitucional.gov.co
secretaria@corteconstitucional.gov.co
secretaria1@corteconstitucional.gov.co
secretaria2@corteconstitucional.gov.co
secretaria2@corteconstitucional.gov.co
secretaria3@corteconstitucional.gov.co
secretaria4@corteconstitucional.gov.co

Doctor
ALBERTO ROJAS RÍOS
Honorable Magistrado Corte Constitucional

Doctor
CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO
Honorable Magistrado Corte Constitucional

Doctora
DIANA FAJARDO RIVERA
Honorable Magistrada Corte Constitucional

Doctor
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Doctor
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Honorable Magistrado Corte Constitucional

Doctor
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Honorable Magistrado Corte Constitucional

Doctora

CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Honorable Magistrada Corte Constitucional

Doctor
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Honorable Magistrada Corte Constitucional

Doctora
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General Corte Constitucional

Doctor
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ.
Procurador General de la Nación
quejas@procuraduria.gov.co
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
procurador@procuraduria.gov.co
grupoinsistenciasdet@procuraduria.gov.co
arvargas@procuraduria.gov.co
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
laborde@procuraduria.gov.co
grupoinsistenciasdet@procuraduria.gov.co

Doctor
CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSIS
Defensor Regional del Pueblo
asuntosdefensor@defensoria.gov.co
bernardo_pz@hotmail.com
fherrera@defensoria.gov.co

Doctor
PAULO ABRAO
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos (OEA)
idhoea@oas.org
cidhdenuncias@oas.org
cidhproteccion@oas.org

Doctor
ALBERTO BRUNORI,
Representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
abrunori@ohchr.org
gmuyuy@ohchr.org

Doctor
EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos (OEA)
idhoea@oas.org
cidhdenuncias@oas.org
cidhproteccion@oas.org

Doctor

PAULO ABRÃO
Secretario Ejecutivo de la CIDH
cidhoea@oas.org
cidhproteccion@oas.org
cidhdenuncias@oas.org

REFERENCIA: Acción de inconstitucionalidad Ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. "*POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*", por violentar el derecho fundamental a la consulta previa del Pueblo indígena Yukpa de la Serranía del Perijá.

ACCIONANTE: LOS (06) SEIS GOBERNADORES DEL PUEBLO INDÍGENA YUKPA, JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ, ALFREDO PEÑA FRANCO, ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO, EMILIO OVALLE MARTÍNEZ, ALIRIO OVALLE REYES Y ANDRÉS VENCE VILLAR.

ACCIONANDO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Los (06) seis Gobernadores del Pueblo Indígena Yukpa, Jaime Luis Olivella Márquez, Alfredo Peña Franco, Esneda Saavedra Restrepo, Emilio Ovalle Martínez, Alirio Ovalle Reyes y Andrés Vence Villar, por medio de la presente nos permitimos radicar Acción de inconstitucionalidad Ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. "*POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*", por violentar el derecho fundamental a la consulta previa del Pueblo indígena Yukpa de la Serranía del Perijá, con sus respectivos anexos.

1. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - REGALÍAS
2. ANEXO 1. Escritura Pública número 0317 del dos (02) de agosto del año 2019.
3. ANEXO 2, Concepto número 105. 4446, número recibido 3013-2019, del veintiséis (26) de agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN*)*
4. ANEXO 3, Concepto número 4962 del diez (10) de septiembre de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN*)*
5. ANEXO 4, Concepto de la Facultad de Antropología Universidad Externado de Colombia, emitido el pasado ocho (08) de agosto de 2019.
6. ANEXO 5, Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y seminómadas del pueblo Yukpa Ministerio del Interior, mediante concepto firmado por el señor viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, radicado número OFl19-52777-DAl-2200, del veintisiete (27) de noviembre de 2019.
7. ANEXO 6, Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y seminómadas del pueblo Yukpa de la Defensoría del Pueblo, año 2018.
8. ANEXO 7, Informe defensoría auto 004, Corte Constitucional.
9. ANEXO 8, Respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al derecho de petición de fondo, radicado 2020ER0009884, de fecha veintisiete (27) de febrero de 2020
10. ANEXO 9, Oficio recibido DNP, oficio Radicado No. 2020230000978, del día treinta y uno (31) de enero de 2020.
11. ANEXO 10, Oficio recibido DANE, mediante oficio con radicado número 20203130033152, el día trece (13) de febrero de 2020.
12. ANEXO 11, Derecho de petición enviado al Gobierno Nacional, del día 11 de febrero de 2020, radicado número 20196630086372 y respuesta fecha 12 de marzo de 2020, radicado número 20194600173961.
13. ANEXO 12, Constancia del pueblo indígena Yukpa del 2020
14. ANEXO 13, Acta de taller de medidas de manejo de la consulta previa de la orden tercera (3) de la Sentencia T-713 de 2017, veintidós (22), veintitrés (23) y veinticuatro (24) de noviembre del año 2018.
15. ANEXO 14, oficio recibido 20 de febrero del 2020, por el Ministerio del Interior, mediante radicado número OFI2020-4214-DAI 2200.

16. ANEXO 15, Oficio enviado el 21 de febrero 21 de 2020, donde el pueblo Yukpa responde el oficio del Ministerio del Interior.
17. ANEXO 16, Oficio acta de concertación de Consulta previa, de la Ley de regalías, El día 28, 29, 30 y 31 de julio y 1 de agosto de 2020.
18. ANEXO 17, Oficio enviado por el Contralor Delegado para el Sector Ambiente, el día veintidós (22) de junio del año 2018, mediante radicado número 2018EE0076686 al Fiscal General de la Nación, Doctor **NÉSTOR HUMBERTO NEIRA,** de iniciar las investigaciones penales a la ANLA, CORPOCESAR.
19. ANEXO 18, Oficio por el Contralor Delegado para el Sector Ambiente, al doctor **FERNANDO CARRILLO FLÓREZ,** Procurador General de la Nación, radicado número 2018EE0076678 al Procurador General de la Nación, Doctor **FERNANDO CARRILLO FLÓREZ.**
20. ANEXO 19, Carta enviada por la Defensoría del Pueblo a la Honorable Corte Constitucional, 2020.
21. ANEXO 20 DERECHO DE PETICIÓN-DNP 2020

Atentamente,

Pueblo Yukpa
Serranía del Perijá.

ANEXO 1 ESCRITURA PUBLICA 0317 NOMADISMO.pdf

ANEXO 8 RESPUESTA MINISTERIO DE VIVIENDA.pdf

ANEXO 13 ACTA 21, 22 Y 23 DE NOVIEMBFRE 2018.pdf

Serranía del Perijá, Municipio de Agustín Codazzi, diez (10) de diciembre de 2020

Doctora
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Honorable Magistrada Corte Constitucional
presidencia@corteconstitucional.gov.co
secretaria@corteconstitucional.gov.co
secretaria1@corteconstitucional.gov.co
secretaria2@corteconstitucional.gov.co
secretaria2@corteconstitucional.gov.co
secretaria3@corteconstitucional.gov.co
secretaria4@corteconstitucional.gov.co

Doctor
ALBERTO ROJAS RÍOS
Honorable Magistrado Corte Constitucional

Doctor
CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO
Honorable Magistrado Corte Constitucional

Doctora
DIANA FAJARDO RIVERA
Honorable Magistrada Corte Constitucional

Doctor
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Doctor
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Honorable Magistrado Corte Constitucional

Doctor
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Honorable Magistrado Corte Constitucional

Doctora
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Honorable Magistrada Corte Constitucional

Doctor
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Honorable Magistrada Corte Constitucional

Doctora
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General Corte Constitucional

Doctor
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ.
Procurador General de la Nación
quejas@procuraduria.gov.co
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
procurador@procuraduria.gov.co
grupoinsistenciasdet@procuraduria.gov.co
arvargas@procuraduria.gov.co
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
laborde@procuraduria.gov.co
grupoinsistenciasdet@procuraduria.gov.co

Doctor
CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSIS
Defensor Regional del Pueblo
asuntosdefensor@defensoria.gov.co
bernardo_pz@hotmail.com
fherrera@defensoria.gov.co

Doctor
PAULO ABRAO
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos (OEA)
idhoea@oas.org
cidhdenuncias@oas.org
cidhproteccion@oas.org

Doctor
ALBERTO BRUNORI,
Representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
abrunori@ohchr.org
gmuyuy@ohchr.org

Doctor
EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos (OEA)
idhoea@oas.org
cidhdenuncias@oas.org
cidhproteccion@oas.org

Doctor
PAULO ABRÃO
Secretario Ejecutivo de la CIDH
cidhoea@oas.org
cidhproteccion@oas.org
cidhdenuncias@oas.org

REFERENCIA: Acción de inconstitucionalidad Ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. "*POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*", por violentar el derecho fundamental a la consulta previa del Pueblo indígena Yukpa de la Serranía del Perijá.

ACCIONANTE: LOS (06) SEIS GOBERNADORES DEL PUEBLO INDÍGENA YUKPA, JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ, ALFREDO PEÑA FRANCO, ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO, EMILIO OVALLE MARTÍNEZ, ALIRIO OVALLE REYES Y ANDRÉS VENCE VILLAR.

ACCIONANDO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

> "*Hace mucho tiempo la tierra se empezó a llenar de agua, muchos Yukpa murieron porque el agua cubría todo, los animales también se murieron, pero estaban los cerros que tenían vida y empezaron a crecer, ellos le decían a la gente que se subieran para que se salvaran, entonces el cerro más fuerte vencía subiendo más alto que los demás, ese se llama Sekeimu y así fue como se salvó el Yukpa*".

Excelentísimos Magistrados de la Honorable Corte Constitucional, Doctor ALBERTO BRUNORI, Representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Doctor CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSIS, Defensor Nacional del Pueblo, Doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, Procurador General de la Nación, Doctor PAULO ABRÃO, Secretario Ejecutivo de la CIDH, nosotros, JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ, mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.067.808.333 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo el Rosario, Bella Vista y Yukatan asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según constancia expedida por el Ministerio del Interior con fecha de dos (02) de abril del 2014 y acta de posesión del diecisiete (17) de marzo de 2014 suscrita por la Alcaldía Municipal de La Paz, ALFREDO PEÑA FRANCO mayor de edad, con domicilio en el municipio Agustín Codazzi, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.956.993 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Iroka asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha veintiocho (28) de junio de 2018, acta de elección del veinte (20) de junio de 2018 y acta de posesión N° 0378 del veinticinco (25) de junio de 2018 suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO, mayor de edad, con domicilio en el municipio Becerril del Campo, Cesar, identificada con la cédula de ciudadanía N° 49.748.586 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADORA DEL CABILDO del Resguardo Sokorhpa asentado en la serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Becerril, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha veintiuno (21) de julio de 2015 y acta de elección del veintiocho (28) de mayo de 2015 y acta de posesión del doce (12) de junio de 2015 suscrita por la Alcaldía Municipal de Becerril, EMILIO OVALLE MARTÍNEZ, mayor de edad, con domicilio en el municipio Agustín Codazzi, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.939.440 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Menkwe, Mishaya, La Pista asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, según acta de posesión N° 0347 del veintinueve (29) de enero de 2018 suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, ALIRIO OVALLE REYES, mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 77.040.052 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Caño Padilla asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha doce (12) de junio de 2016 y acta de posesión de fecha trece (13) de marzo de 2002 suscrita por la Alcaldía Municipal del Municipio de La Paz, ANDRÉS VENCE VILLAR, mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.676.395 expedida en el municipio San José de Oriente, Cesar, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El Coso asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según acta N° 03 del catorce (14) de junio de 2016.

Acudimos a la Honorable Corte Constitucional en uso de nuestros derechos y deberes consagrados en el numeral 6 del artículo 40 y en el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución Política, con el fin de interponer Acción de Inconstitucionalidad de la Ley de Regalías 2056 del treinta (30) de septiembre de 2020. "*POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*", por violentar el derecho fundamental a la consulta previa del pueblo indígena Yukpa, artículo 6 del convenio 169 de 1989 de la OIT, Ley 21 de 1991, que hace parte del bloque de constitucionalidad., máximo cuando nosotros el pueblo indígena Yukpa, somo sujetos de alta protección constitucional, entre otros motivos porque nuestro estado de alta vulnerabilidad por estar en riesgo de exterminio fisco y cultural, AUTO 004 DE 2009.

I. ACLARACIÓN DEL POR QUÉ, SE ENVÍA ESTE RECURSO DE INCOSNTITUCIONALIDAD A LOS ORGANISMOS DE CONTROL, ONU, CIDH Y A LA ONIC.

1. Al ministerio público, representado en el Doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, Procurador General de la Nación y al Doctor CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSIS, Defensor Nacional del Pueblo, para que en el marco de sus funciones participen y coadyuven la presente acción de inconstitucionalidad.

2. Doctor ALBERTO BRUNORI, Representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, emitir un concepto a la Honorable Corte Constitucionalidad sobre la presente demanda, con fundamento al mandato establecido en el literal B, numeral 7 del acuerdo sede entre la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y el Gobierno de Colombia, suscrito el pasado treinta (30) de octubre de 2019.

. Ante el Doctor PAULO ABRÃO, Secretario Ejecutivo de la CIDH, para que incorpore las irregularidades que se manifestarán en el siguiente recurso, al expediente de solicitud de medidas cautelares mc-683-19, del día cinco (5) de septiembre de 2019, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor del pueblo Yukpa, como quiera que la discriminación y el racismo del Gobierno Nación en medio de la discusión de la Ley de Regalías, fue evidente, máximo cuando nuestro territorio ancestral Yukpa, se extrae más del 50% del carbón del país.

II. PUEBLO YUKPA GOZA DE ALTA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR SU COMPLEJO ESTADO DE DESPROTECCIÓN, DISCRIMINACIÓN Y RACISMO.

1. AÑO DE 1989 Y 1991, PUEBLO INDÍGENA YUKPA GOZA DE ALTA PROTECCIÓN INTERNACIONAL POR SU CONDICIÓN DE NÓMADA Y SEMINÓMADA.

El Estado Colombiano contrajo la obligación internacional al suscribir el convenio 169 de 1989 de la OIT, convenio que fue ratificado por el Estado Colombiano mediante la Ley 21 de 1991 y declarado exequible en sentencia de la Honorable Corte Constitucional.

En tal sentido el Estado Colombino, se obligó a proteger de manera especial al pueblo indígena Yukpa, por su condición de nómada, seminómada y agricultores itinerantes. Al respecto el artículo 14 del Convenio 169 de 1989 de la OIT, menciona:

> *"Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho al Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes*[1].

2. AÑO 1995, PROTECCIÓN DE LAS TIERRAS DEL PUEBLO YUKPA POR SU CONDICIÓN DE NÓMADA Y SEMINÓMADA.

El Estado Colombiano promulgó la Ley 2da de 1959, con el fin de desarrollar la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, en una parte del territorio nacional, y para ello crea la figura de protección de Zonas de Reserva Forestal. En este orden de ideas, creó en territorio ancestral Yukpa de la Serranía del Perijá la Zona de Reserva de los Motilones y la Zona de Reserva del Río Magdalena.

En tal sentido el propio Estado Colombiano previó en dicha ley, que estas zonas bajo aparentes procedimientos rigurosos podrían ser sustraídas y que su función del suelo y demás cambien, pero puso como única salvaguarda y protección de los territorios y tierras de los pueblos indígenas nómadas y seminómadas la siguiente:

De la misma manera el decreto 2164 de 1995, establece que las zonas de reserva forestal no se pueden destinar para otro uso diferente a la destinación de tierras para los pueblos indígenas, cuando estas se traslapen con pueblos indígenas nómadas, seminómada o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, como es el caso del Pueblo Indígena Yukpa. El artículo es claro en mencionar la siguiente protección que el Estado Colombiano y las multinacionales Mineras vienen violentando:

> *"Artículo "3o. Protección de los derechos y bienes de las comunidades." Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, semi-nomada o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de la ley 160 de 1994, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas. Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las*

[1] Artículo 14 de Convenio 169 de La OIT

tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sólo podrán adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos".[2]

Es decir, desde el año 1994 en adelante, no se debieron haber sustraído áreas de las zonas de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones y del Río Magdalena, pues su función solo es compatible para la constitución y ampliación del territorio ancestral Yukpa. Lamentablemente el Estado desde el día tres (03) de agosto de 1994 al cuatro (04) de junio de 2019, sustrajo o despojó 10.176,3 ha, de la Zona de Reserva de los Motilones y la Zona de Reserva del Río Magdalena, que son del territorio ancestral Yukpa, para darle paso a la minería, las cuales han secado los ríos y matar a nuestros niños y niñas.

La condición cultural del pueblo indígena Yukpa, como nómada, seminómada y agricultores itinerantes, fue ampliamente analizada mediante los siguientes conceptos documentos y conceptos jurídicos:

A. El pueblo Yukpa mediante escritura pública número 0317 del dos (02) de agosto del año 2019, se auto reconoció como pueblo indígena nómada, semi-nomada, semi-nomada y agricultores itinerantes.

En dicho documento se mencionan los conceptos de la Defensoría del pueblo y los demás documentos públicos.

ANEXO 1. Escritura Pública número 0317 del dos (02) de agosto del año 2019.

B. Concepto número 105. 4446, numero recibido 3013-2019, del veintiséis (26) de agosto de 2019 del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN) y aclarado con el número 4962 del diez (10) de septiembre de 2019, se reconoce la condición de semi- nomadismo del pueblo indígena Yukpa.

ANEXO 2, Concepto número 105. 4446, numero recibido 3013-2019, del veintiséis (26) de agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN)[3]

ANEXO 3, Concepto número 4962 del diez (10) de septiembre de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN)[4]

C. Concepto de la a Facultad de Antropología, de la Universidad Externado de Colombia, emitió el pasado ochos (08) de agosto de 2019, concepto sobre nomadismo y movilidad en relación con los procesos históricos, territoriales y culturales del pueblo indígena. Donde se reconoce la condición del

[2] Decreto Presidencial 2164 del 7 de diciembre de 1995.,
[3] Concepto número 105. 4446,26 de agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN), Condición de seminomadismo.
16. Concepto aclarado número 4962 del 10 de septiembre de 2019. agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICHAN), Condición de seminomadismo
[4] Concepto número 105. 4446,26 de agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN), Condición de seminomadismo.
16. Concepto aclarado número 4962 del 10 de septiembre de 2019. agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICHAN), Condición de seminomadismo

pueblo Indígena Yukpa como nómada y seminómada y señala las afectaciones de nuestro pueblo por la minería a gran escala, como la muerte de nuestros niños y niñas.

ANEXO 4, Concepto de la Facultad de Antropología Universidad Externado de Colombia, emitido el pasado ocho (08) de agosto de 2019.

D. El Ministerio del Interior, mediante concepto jurídico firmado por el señor viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, radicado número OFl19-52777-DAl-2200, del veintisiete (27) de noviembre de 2019, señala lo siguiente frente a la condición de nómadas y seminómadas del pueblo Yukpa e implementación de la Política Pública Especial: "*Efectivamente de los estudios científicos y académicos enunciados y en particular el concepto emitido por el ICANH se concluye desde su perspectiva técnica la condición de semi-nomada del pueblo Yukpa".*

Es pertinente mencionar que el señor viceministro del Interior, para la Participación e Igualdad de Derechos, reconoce en la página cinco (05) del mencionado concepto "*De esta manera, el Ministerio del Interior* ***admite la urgencia de implementar políticas públicas a nivel nacional, y, asimismo, de elaborar un instrumento jurídico que permita que estas sean definidas por las entidades y organismos que interactúan con el pueblo Yukpa.*** *Para el caso en particular, contamos con un concepto emitido por el ICANH, que es un soporte con valor científico y académico para las demás entidades públicas, por lo que finalmente se constituye como un criterio orientador para desarrollar programas, planes, proyectos y políticas públicas en pro del pueblo Yukpa".*[5]

ANEXO 5, Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y seminómadas del pueblo Yukpa emitido por Ministerio del Interior, mediante concepto firmado por el señor viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, radicado número OFl19-52777-DAl-2200, del veintisiete (27) de noviembre de 2019.

E. La Honorable Defensoría Nacional del Pueblo, por intermedio del señor Defensor Delegado para los Grupos Étnicos, emite el concepto del año 2018, donde claramente reconocen nuestra condición de nomadismo, caza, recolección y agricultores itinerantes, pese a que el conflicto armado que viene azotando a nuestro pueblo indígena Yukpa.

ANEXO 6, Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y seminómadas del pueblo Yukpa de la Defensoría del Pueblo, año 2018.

[5] Oficio número OFl19-52777-DAl-2200, del 27 de noviembre de 2019, Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y semi-nómadas del Pueblo Yukpa e implementación de la Política Pública Especial, Ministerio del Interior.

3. AÑO 1996, PUEBLO YUKPA, DECLARADO PRIMER PUEBLO AMENAZADO EN COLOMBIA.

Debido a la grave discriminación, la desatención del Estado, la grave situación social, humanitaria, territorial, y ambiental de nuestro pueblo Yukpa, el Estado Colombiano por primera vez en nuestra historia de vida republicana, por intermedio de la propia Presidencia de la Republica de Colombia, suscribe el Decreto Presidencial con fuerza de Ley 1397 del siente (07) de agosto de 1996, donde de manera contundente declara al pueblo Yukpa junto con seis (6) pueblo indígenas más de Colombia, como pueblos indígenas amenazados, todos ellos tienen la misma características: son nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes y con graves afectaciones territoriales por fenómenos de colonización, conflicto armado, minería e hidrocarburos.
En tal sentido el decreto presidencial menciona lo siguiente:

> *"Artículo 2o. funciones* ***(…)*** *3o. Concertar la programación para períodos anuales de las acciones de constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardos y saneamiento y conversión de reservas indígenas que se requieran de acuerdo con la información a que se refiere el numeral anterior, para su ejecución a partir de la vigencia presupuestal de 1997; priorizando las siguientes(…) b) Ampliación, constitución y/o saneamiento de resguardos para pueblos indígenas* ***amenazados:*** *Chimila, Nukak,* ***Yukpas****, Kofan, Embera de Risaralda (Caldas), pueblos indígenas de Arauca, la comunidad Kuti del Río Tolo en el Departamento del Chocó y la conversión de reservas en resguardos y su saneamiento; Artículo* ***3o. apropiación presupuestal.*** *El Gobierno Nacional incluirá anualmente en el proyecto de ley de presupuesto, las partidas necesarias para la ejecución de la programación de que trata el numeral 3o. de conformidad con el estimativo de costos de que trata el numeral 4o. del mismo artículo y de acuerdo con los procedimientos determinados por las normas vigentes. Articulo 8o. obras e inversiones****. Ninguna obra, exploración, explotación o inversión podrá realizarse en territorio indígena sin la previa concertación con las autoridades indígenas, comunidades y sus organizaciones. Artículo 10. mesa de concertación****. Créase la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas.*[6]

4. AÑO 2009, PUEBLO INDÍGENA YUKPA EN EXTERMINIO FÍSICO Y CULTURAL.

A. En el año 2008, el conflicto armado, la minería y los conflictos territoriales desplazaron forzosamente a 1.200 miembros de nuestro pueblo Yukpa desde la Serranía del Perijá hacia Valledupar y Bosconia, departamento del Cesar, Buriticá y el casco urbano de Santa Marta, en el departamento del Magdalena y Dibulla en el departamento de la Guajira. Hoy nuestros familiares Yukpas están viviendo en situación de miseria y en riesgo de indigencia, bajo la indiferencia y abandono del Estado en su conjunto.

[6] Ddecreto presidencial397 de 7 de agosto de 1996

Es por ello, que la Honorable Corte Constitucional declaró nuestro pueblo Yukpa y su territorio en riesgo de exterminio físico y cultural mediante Auto 004 del 2009. En el marco del estado de cosas inconstitucionales en sentencia T-025 de 2004. Es decir, la máxima instancia constitucional y garante de los derechos fundamentales y territoriales, ha constatado que nuestro pueblo y nuestro territorio presenta vulneración masiva, repetida y constante de derechos fundamentales que afectan al conjunto de nuestro pueblo.

B. La Honorable Corte Constitucional, nuevamente mediante Auto 266 de 2017, mantiene el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a las comunidades indígenas y afrodescendientes afectados por el desplazamiento, en riesgo de estarlo y con restricciones a la movilidad entre ellas el pueblo Yukpa.

C. La Honorable Defensoría Nacional del Pueblo, por intermedio del señor Defensor Delegado para los Grupos Étnicos, el día veinticuatro (24) de julio del año 2019, radica ante la Honorable Corte Constitucional el Informe de seguimiento al cumplimiento del Auto 004 de 2009 Plan de Salvaguarda Indígena Yukpa.

En dicho informe la Defensoría informa al máximo tribunal constitucional lo siguiente:

> *"Su movilidad y sus prácticas económicas tradicionales como la caza y la recolección está n en riesgo por el despojo territorial debido a intereses económicos legales asociados a la gran minería y la expansión de agroindustria, en su mayoría Palma de aceite, e ilegales en su territorio. Esta situación implica una pérdida de su autonomía y su seguridad alimentaria la cual ha generado problemáticas de desnutrición en la población infantil en los timos años. Frente esta problemática los Yukpa han denunciado la muerte de 27 niños yukpa entre el año 2018 y lo que va de 2019 por causas asocia das a la falta de territorio para garantizar la subsistencia alimentaria a la desnutrición"*[7]
>
> *"La Defensoría observa que el Ministerio del Interior no tiene en cuenta el territorio tradicional y/ o ancestral del pueblo yukpa más allá del resguardo, para certificar la presencia y garantizar el derecho fundamental a la consulta previa. En este sentido no se aplica lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a que el territorio ancestral de los pueblos indígenas que estos ocupaban o utilizan de alguna manera"*[8]

[7] Informe Defensoría Nacional del Pueblo al seguimiento al cumplimiento del Auto 004 de 2009 Plan de Salvaguarda Indígena Yukpa, ante la Honorable Corte Constitucional, 24 de Julio del año 2019.
[8] Informe Defensoría Nacional del Pueblo al seguimiento al cumplimiento del Auto 004 de 2009 Plan de Salvaguarda Indígena Yukpa, ante la Honorable Corte Constitucional, 24 de Julio del año 2019.

ANEXO 7, Informe Defensoría Nacional del Pueblo al seguimiento al cumplimiento del Auto 004 de 2009 Plan de Salvaguarda Indígena Yukpa, ante la Honorable Corte Constitucional, veinticuatro (24) de julio del año 2019.

D. La Honorable Corte Constitucional emite el Auto 471 de 2019, en favor del pueblo indígena Yukpa. En uno de sus antecedentes la Honorable Corte Constitucional menciona:

> *"Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo señaló que la situación territorial y humanitaria de los Yukpa es crítica, debido a que su movilidad y sus prácticas tradicionales (como la caza y la recolección) se afectan por el despojo territorial y la expansión de proyectos mineros y de agroindustria. En tal sentido, la "situación implica una pérdida de su autonomía y su seguridad alimentaria la cual ha generado problemáticas de desnutrición en la población infantil"[9]. En tal sentido, debido al estancamiento en el cumplimiento de las órdenes de la Sala Especial y la crítica situación de los Yukpa, la Defensoría solicitó a esta Corporación adoptar medidas para culminar la implementación del Plan de Salvaguarda y el Plan de Acción[10]. "[11]*

Lamentablemente por el no acatamiento de estas sentencias del máximo poder constitucional del Estado Colombiano, la situación al interior de los territorios empeoró drásticamente, por lo que el pueblo Yukpa tiene hoy más de 2. 800 miembros recorriendo las calles de más de quince (15) ciudades de Colombia en total indigencia, bajo la mirada indiferente del Gobierno Nacional y los entes territoriales.

III. SOLICITUD RESPETUOSA A LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL.

PRIMERO: Solicitamos a la Honorable Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de toda Ley de Regalías 2056 del treinta (30) de septiembre de 2020. "*POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*" por violentar el derecho fundamental a la participación y a la Consulta Previa del pueblo indígena Yukpa, artículo 6 del convenio 169 de la OIT, como quiera que no hacemos parte de la Mesa Permanente de Concertación, escenario donde el gobierno nacional consultó dicha norma, hasta tanto no se realice el proceso de consulta Previa con el pueblo indígena Yukpa, representado por los seis (06) cabildos Gobernadores.

SEGUNDO: Solicitamos a la a la Honorable Corte Constitucional condicionar los artículo 6, 23, 50, 74 y 75 a:

[9] Defensoría del Pueblo. Informe de seguimiento al cumplimiento del Auto 004 de 2009 Plan de Salvaguarda Indígena Yukpa. Presentado el 24 de julio de 2019.
[10] Defensoría del Pueblo. Informe de seguimiento al cumplimiento del Auto 004 de 2009 Plan de Salvaguarda Indígena Yukpa. Presentado el 24 de julio de 2019. Pág. 5.
[11] Auto 471 de 2019, Corte Cosntitucional

1. Vincular a un representante del pueblo indígena a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regional y los COCAD PAZ, con derecho a voz y voto.

2. Aumentar de un 5% a un 10% las asignaciones directas de los municipios productores de la Serranía del Perijá, y permitir que dichos recursos se destinen también para programas de seguridad alimentaria, acceso a tierras productivas, minidistritos de riego, centros de salud e infraestructura educativa.

3. Incluir dentro de las áreas ambientales estratégicas de escala nacional y regional la Serranía del Perijá.

4. Incluir dentro de las Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas, un representante del Pueblo Indígena Yukpa, con derecho a voz y voto.

IV. NORMA ACUSADA

Se demanda la inconstitucionalidad o condicionar la exequibilidad de la Ley de Regalías 2056 del treinta (30) de septiembre de 2020. "*POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*", por violentar el derecho fundamental a la participación y la consulta previa del pueblo indígena Yukpa, artículo 6 del convenio 169 de 1989 de la OIT, Ley 21 de 1991, que hace parte del bloque de constitucionalidad., máximo cuando nosotros el pueblo indígena Yukpa, somo sujetos de alta protección constitucional, entre otros motivos porque nuestro estado de alta vulnerabilidad por estar en riesgo de exterminio fisco y cultural, AUTO 004 DE 2009,

V. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Política, numeral 4, según el cual dicho tribunal decidirá "*sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicio de procedimiento en su formación".*[12]

VI. PUEBLO YUKPA SE LE VIOLENTA EL ARTÍCULO 6 DEL CONVENIO 169 LEY DE REGALÍAS 2056 DEL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2020.

PRIMERO: El polígono del territorio ancestral Yukpa se encuentra invadido por títulos mineros. Los títulos mineros en solicitud son 314, que equivalen a 261.809 Ha y concedidos 126 polígonos, es decir 149.529 Ha.

[12] Numeral 4, Articulo 214, de la Constitución Política de Colombia.

SEGUNDO: El Gobierno Nacional nunca ha consultado al pueblo Indígena Yukpa en ninguna medida administrativa o legislativa que dieron paso a el otorgamiento de títulos mineros y de pozos de hidrocarburos en concesión en nuestro territorio ancestral; de igual manera se otorgaron decenas de licencias ambientales para explotar el carbón a cielo abierto, infraestructura vial y férrea sin haber agotado el proceso de consulta previa con nuestro pueblo.

TEECERO: El Pueblo Indígena Yukpa no fue consultado en Ley de Regalías 2056 del treinta (30) de septiembre de 2020. "*POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*", pese a que:

1. Del territorio ancestral Yukpa, cordón minero de la Serranía del Perijá, producto de la actividad del Carbón a cielo abierto ha generado para la "prosperidad" o corrupción: NUEVE MIL, NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE BILLONES, SEISIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($9. 917.692.000.000.000). Mientras cada año por la actividad minera se mueren más de treinta (30) niños y niñas Yukpa por desnutrición o enfermedades asociadas a la pérdida del territorio y afectaciones directa de las actividades mineras. A pesar de lo anterior nuestro pueblo Indígena Yukpa no ha recibido ni un solo peso, ni por la vía de compensaciones ni por vía de Ley General de Regalías, por lo contrario; nuestro pueblo Indígena al igual que los miles de pobladores donde se encuentra este gran cinturón minero en la Serranía del Perijá a gran escala es cada día más pobre, se enferma y se mure más, mientras estos recursos solo han servido para acrecentar la corrupción nacional, regional y local.

Recientemente el Pueblo Indígena Yukpa envío derecho de petición al Gobierno Nacional para entender que sucede con los recursos de regalías, las respuestas resultaron desconcertantes, es por ello que mencionamos alguna de ellas:

A. Derecho de petición de fondo al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde se le pregunta:

> *"Favor informar cuantos proyectos de agua potable y saneamiento urbano sector urbano, cuantos recursos, los lugares y el valor, han sido financiados con recursos del sistema General de Regalías, en los Municipios de: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguaná y Curumaní. Favor indicar año tras año desde el año 1990 al año 2019."*
>
> *"Favor informar cuantos proyectos de agua potable y saneamiento urbano sector Rural, cuantos recursos, los lugares y el valor, han sido financiado con recursos del sistema General de Regalías, en los Municipios de: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguaná y Curumaní. Favor indicar año tras año desde el año 1990 al año 2019."*

La respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al derecho de petición de fondo se produce mediante radicado 2020ER0009884, de fecha veintisiete (27) de febrero de 2020.

La respuesta a las preguntas fue la siguiente:

> "Al revisar *El* ***Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico SIGEVAS*** del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; no se encontraron registros de proyectos con concepto favorable en los municipios de Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de lbirico, Chiriguaná y Curumaní. Lo anterior concluye que no fueron postulados proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico ante los *OCAD Departamental o Regional por parte de la Gobernación del Cesar o de los municipios antes mencionados."*[13]

Es decir, honorable magistrados de la Corte Constitucional, que función tienen los recursos del Sistema General de Regalías, para qué nos beneficia la mega industria del carbón a Indígenas, campesinos y pobladores de este gran cinturón minero y de pobreza, cuando ni siquiera estos recursos se dedican a resolver el problema sentido de nuestras poblaciones como es el agua. Si hay agua hay bienestar, no hay desnutrición, se puede cultivar y menos nos enfermamos.

ANEXO 8, Respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al derecho de petición de fondo, radicado 2020ER0009884, de fecha veintisiete (27) de febrero de 2020.

B. El día quince (15) de enero de 2020 y mediante radicado número No. 20203130011382, el pueblo Yukpa le solicita al DEPARTAMENTO ADMINISTRATNO NACIONAL DE ESTADISTCA, (DANE), lo siguiente, entre otras preguntas:

> *"Informar cuantas personas se encontraban* o *se encuentran en pobreza, pobreza extrema y pobreza monetaria en cada uno de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumani, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. Favor indicar año tras año desde el año 1990 al año 2019".*

El DNP responde el día treinta y uno (31) de enero de 2020, mediante oficio Radicado No. 2020230000978, lo siguiente:

[13] Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, respuesta derecho de petición de fondo, radicado 2020ER0009884, de fecha veintisiete (27) de febrero de 2020.

Índice de Pobreza Multidimensional. 2018.

Departamento	IPM total	1PM cabeceras	1PM centros poblados y rural disperso
Cesar	33,2	26,7	53,5

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2018.

Tabla 6. Incidencia de la pobreza municipal. Cifras en porcentaje. 2018.

MUNICIPIO	POBREZA
AGUSTIN CODAZZI	47,9
BECERRIL	50,2
CHIRIGUANA	43,1
CURUMANI	46,2
LA JAGUA DE IBIRICO	36,8
LA PAZ	44,4
SAN DIEGO	44,3
MANAURE	39,7

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018.

No es Justo que el sector rural del departamento del Cesar se concentra el 53,35 pobreza multidimensional, donde una buena parte de sus territorios están anclados los mayores proyectos minero-energéticos.

Pero es mayor la injusticia en los municipios donde está el gran cinturón minero del Perijá, la pobreza campea en nuestro territorio ancestral Yukpa, tanto al sector rural como urbano, es injusto que nuestros municipios donde hay minería a gran escala y a cielo abierto y donde nos afecta drásticamente nuestra salud, nuestro ambiente, nuestras vidas, se vean la inversión social y ambiental. Todo esto en contravía de la Sentencia SU-123 de 2018, cuando en su jurisprudencia acoge los principios de la CIDH ya al respecto menciona:

> *"La Corte IDH ha destacado que los derechos de propiedad comprenden el uso y goce de los recursos naturales que se encuentran en las tierras que tradicionalmente han poseído o en los terrenos adyacentes a los mismos."*[14]

[14] Sentencia SU-123 de 2018.

ANEXO 9, Oficio recibido DNP, oficio Radicado No. 2020230000978, del día treinta y uno (31) de enero de 2020.

C. Es alarmante la riqueza que proporciona nuestro territorio ancestral Yukpa, mediante la minería a gran escala y a cielo abierto, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATNO NACIONAL DE ESTADISTCA, (DANE), mediante oficio con radicado número 20203130033152, el día trece (13) de febrero de 2020, nos informa que la actividad de la minería representa en nuestro territorio fue del 42,8% del producto interno bruto en el departamento del Cesar; por su parte esta misma actividad en el país representó el 5,7% del PIB, tan solo para el año 2018.

Por otro lado, el DANE nos informa como mencionamos anteriormente que del territorio ancestral Yukpa, cordón minero de la Serranía del Perijá, producto de la actividad del Carbón a cielo abierto ha generado para la prosperidad o corrupción: NUEVE MIL, NOVECIENTOS DIECISETE BILLONES, SEISIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($9. 917.692.000.000.000).

ANEXO 10, Oficio recibido DANE, mediante oficio con radicado número 20203130033152, el día trece (13) de febrero de 2020.

CUARTO: El pueblo indígena Yukpa, el día once (11) de febrero de 2019, radica al gobierno nacional mediante derecho de petición de fondo, radicado número 20196630086372, mucho antes de que se radicara al congreso el proyecto de Ley de Regalías. El cual fue enviando a la Doctora, GLORIA ALONSO, Directora de Planeación Nacional, al Doctor JULIAN POLANIA, director - Dirección Sistema General de Regalías y a la Doctora NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, ministra del Interior, donde se alertaba y se solicitaba realizar un proceso de consulta previa con el pueblo indígena Yukpa al presentarse la Ley de Regalías. Dicha solicitud se evidencia en las solicitudes noveno y décimo del mencionado oficio:

> *"NOVENO**:** Solicitarle a la Doctora **GLORIA ALONSO,** Directora de Planeación Nacional, Doctor **JULIAN POLANIA,** director - Dirección Sistema General de Regalías, DNP, Doctora **NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA,** ministra del Interior; que es su obligación en al marco del artículo 6 del convenio 169 de la OIT, convoque a los seis (6), cabildos indígenas del pueblo Yukpa, un proceso de Consulta previa, al momento de presentarse el proyecto de Ley de reforma al Sistema General de Regalías.*
>
> ***DECIMO:** Recordarle de manera respetuosa a la Doctora **GLORIA ALONSO,** Directora de Planeación Nacional, Doctor **JULIAN POLANIA,** director - dirección Sistema General de Regalías, DNP, Doctora **NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA,** ministra del Interior, que es su obligación en el marco de sus funciones, acatar lo mencionado por la Honorable de la Corte Cosntitucional en Sentencia*

SU 123 de 2018, cuando menciona en la página en la parte 8 Consulta previa y justicia ambiental:

"10.1. En caso de afectaciones ambientales, el derecho a la consulta previa tiene conexiones íntimas con la justicia ambiental, como lo ha mostrado esta Corte, pues ante la perturbación ambiental de los pueblos indígenas y tribales ha activado la consulta previa para recomponer, a través de la participación, el reparto desigual de las cargas y los beneficios ambientales.

10.2. La justicia ambiental ha sido entonces utilizada por esta Corte para resolver asuntos de distribución inequitativa de cargas ambientales entre los diferentes grupos sociales y defender la participación de colectividades afectadas. Esta construcción teórica ha servido para identificar afectaciones directas a una comunidad como resultado de un proyecto productivo que trae consecuencia o efectos a los ecosistemas.

10.3. Según la Sentencia T-294 de 2014, la justicia ambiental puede ser entendida como el "tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales". La justicia ambiental es entonces un marco analítico que ha permitido terciar ante un conflicto ecológico distributivo, dado que intenta eliminar la discriminación que padecen algunas comunidades en relación con el acceso de servicios ambientales y de la exposición superlativa a los desechos de ciertas industrias. La Corte ha considerado que la justicia ambiental, dentro del marco de la Constitución[15], está compuesta por cuatro elementos interrelacionados: i) la justicia distributiva; ii) la justicia participativa; iii) el principio de sostenibilidad; y iv) el principio de precaución.

10.4. El componente de justicia distributiva[16] respalda el reparto equitativo de las cargas y beneficios ambientales para los habitantes de un Estado, sin que sea aceptable diferenciar algún sector de la población debido a su origen étnico, de su género o de su condición socioeconómica. Una justicia participativa[17] significa que en las decisiones ambientales se exige la intervención activa y significativa de las personas que resultan afectadas por la ejecución de determinada actividad. El principio de sostenibilidad reclama que los sistemas económicos y sociales deben ser reproducibles sin el deterioro de los ecosistemas en que se apoyan, esto es, la viabilidad ecológica. Conforme a este principio, las actividades humanas

[15] Sentencia T-294 de 2014.
[16] Esa característica se justifica en los siguientes mandatos: i) un principio de equidad ambiental prima facie, esto es, debe justificarse el reparto inequitativo de bienes y cargas ambientales en el diseño, implementación y aplicación de una política ambiental o en la realización de un programa, obra o actividad que entraña perjuicios ambientales; y ii) un principio de efectiva retribución o compensación, que implica que las personas que padecen cargas o pasivos ambientales producto de una obra o proyectos deben ser compensadas.
[17] Esto incluye la intervención de las comunidades étnicas diversas a través de la consulta previa. Tal elemento incluye la apertura de espacios para comunidad con el fin de que ésta intervenga en: i) las decisiones del proyecto; ii) la planeación; y iii) la evaluación de impactos, al igual que la forma de mitigarlos, compensarlos y prevenirlos. En este aspecto, la idea es que coexista el conocimiento técnico con el saber nativo sobre los asuntos locales.

tienen la obligación de respetar los límites de absorción y de regeneración del ambiente, de modo que no se comprometa su disfrute para las generaciones futuras y para otras especies vivas no humanas[18]*. En este escenario, se construyó un "imperativo ambiental". El principio de precaución prescribe que los agentes ambientales deben abstenerse de ejecutar una actividad que causa una perturbación ambiental inaceptable, siempre y cuando exista una duda razonable de que el acto pueda causar un daño a la naturaleza. Este principio se convierte entonces en una guía de acción humana para comportarse ante la incertidumbre de perjuicio en un ecosistema y prevenir ese riesgo. Además, reconoce la falibilidad de la ciencia, lo cual impone al ser humano la obligación de ser prudente ante la incertidumbre de una eventual lesión. El principio de precaución materializa los deberes de protección y salvaguarda del medio ambiente.*

10.5. En las sentencias T-294 de 2014, SU-133 de 2017, SU-217 de 2017 y T-272 de 2017, la Corte consideró que el derecho a la consulta previa puede ser entendido, entre otras cosas, como una garantía procedimental para lograr justicia ambiental para las minorías étnicas. La razón: la justicia ambiental permite referirse a la administración y al manejo de las acciones humanas que impactan en el ambiente, la distribución de los costos negativos que causan los actos productivos de las personas, y el acceso a los recursos naturales, como sucede en los casos de exploración y extracción de recursos bióticos no renovables, ya sea minería o hidrocarburos-."[19]

La respuesta al mencionado de parte del doctor JULIAN EDUARDO POLANIA, director - dirección Sistema General de regalías, mediante oficio de fecha doce (12) de marzo de 2020, radicado número 20194600173961. En dicho oficio en la hoja número cuatro (04), nos informa que no se estaba iniciando la reforma al sistema general de regalías, cuando el propio presidente en su campaña electoral y a principio del año 2019, estaba anunciando la mencionada reforma,

ANEXO 11, Derecho de petición enviado al Gobierno Nacional, del día once (11) de febrero de 2020, radicado número 20196630086372 y respuesta fecha doce (12) de marzo de 2020, radicado número 20194600173961.

QUINTO: El Gobierno Nacional debido a la grave situación de los pueblos indígenas en Colombia, sus discriminación y exclusión de las decisiones que nos atañe, promulgó el decreto 1397 del ocho (08) de agosto de 1996, donde crea en su artículo 10, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones; paradójicamente uno de los motivos para crear esta instancia es la grave situación de los pueblos indígenas amenazados: Chimila, Nukak, Yukpas, Kofan, Embera de Risaralda (Caldas), pueblos indígenas de Arauca, la comunidad

[18] En Sentencia T-411 de 1992, la Corte manifestó que la protección al medio ambiente está ligada al derecho a la vida de las generaciones actuales y de las ulteriores. Así consideró que: "*El patrimonio natural de un país pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes"*

[19] Setencia de la Honorabel Corte Cosntitucjonal SU-123 de 2018.

Kuti del Río Tolo en el departamento del Chocó, tal como lo establece el literal b, numeral 2 del decreto 1397 del ocho (08) de agosto de 1996.

SEXTO: La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos viene siendo consultadas en muchas medidas legislativas y por diferentes Gobiernos, sin embrago, desde sus inicios, el pueblo indígena Yukpa no ha participado en dichas consultas sobre a aquellas medidas legislativas que nos afectan como las leyes de minería, tierras, hidrocarburos, fronteras y regalías.

SEPTIMO: La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos, esta representadas por las principales organizaciones indígenas de la nación, entre ellas, La Organización Indígena de Colombia ONIC, organización con las que mantenemos excelentes relaciones y en muchas oportunidades hemos de manera conjunta realizados algunas acciones, pero bajo ninguna razón esta importante organización representa los interés de nuestro pueblo.

OCTAVO: Los seis (06) Resguardos Indígenas Yukpa mediante documento público dejamos la siguiente constancia.

> ***“ QUE,*** *Los siguientes resguardos Indígena asentados en el Departamento del Cesar, Serranía del Perijá:* ***A.*** *Resguardo Indígena el Rosario, Bella Vista y Yukatan, jurisdicción del municipio de La Paz,* ***B,*** *Resguardo Indígena Iroka asentado en el municipio de Agustín Codazzi,* ***C,*** *Resguardo Indígena de Menkwe, Mishaya, La Pista asentado en el municipio de Agustín Codazzi,* ***D,*** *Resguardo Indígena Caño Padilla, asentado en el Municipio de La Paz y* ***E****, El Resguardo Indígena de La Laguna, Cinco Caminos y El Coso asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz.*
>
> ***1.*** *Nunca hemos hecho parte de la Organización Indígena de Colombia ONIC, ni de manera formal e informal.*
> ***2.*** *Tampoco hemos hecho parte de la Mesa Peramente de Concertación (MCP).*
> ***QUE****, De los seis (6) Resguardos Indígenas Yukpa de la Serranía del Perijá, tan solo el resguardo de Sokorpa, ha hecho y hace parte de la ONIC y por ende de la Mesa permanente de Concertación (MPCP) y que pese a ellos no fue invitado a la Consulta previa de Ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. “POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS,"*
>
> ***QUE****, el Gobierno de* ***IVAN DUQUE MARQUEZ,*** *no consultó con los seis (6) Cabildos Gobernadores del Pueblo indígena Yukpa, Ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. “POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS,"*

ANEXO 12, Constancia del pueblo indígena Yukpa del 2020

NOVENO: En el marco de las medidas de manejo de la consulta previa de la orden tercera (03) de la Sentencia T-713 de 2017, Los días veintidós (22), veintitrés (23) y veinticuatro (24) de noviembre del año 2018, el Pueblo Indígena Yukpa, El Ministerio del Interior y La Oficina del Comisionado para la Paz, acordaron como una de las medidas de manejo al impacto P21, crear la Mesa Nacional de Concertación Permanente con el Pueblo Yukpa, Homologable a (MPC Yukpa)

1. El impacto P21 claramente señala *"No realización de la consulta previa con las autoridades indígenas en el momento anterior al establecimiento de ZVTN y de transformación en ETCR vulnera la autonomía y el autogobierno".*

2. El impacto P21 contó con una calificación unánime entre el Ministerio del Interior, La Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Pueblo Yukpa, como MALO- ALTO, considerada la ponderación de afectación más alta de la escala acordada.

El acuerdo fue el siguiente, tal como aparece en la matriz de la respectiva acta y suscrito por las partes:

> *"Creación De una mesa de concertación para medidas administrativas y legislativas por parte del Ministerio del Interior para el Pueblo Yukpa.*
> *1. Acto administrativo sancionado por la señora ministra del Interior.*
> *2.Deberá estar suscrito para la fase de protocolización de la consulta previa. (pendiente por definir fechas por trámite administrativo)*
> *3.secretaria técnica compartida, entre el Ministerio del Interior y el pueblo Yukpa.*
> *4. Integrantes: El ministerio del Interior o su delegado, Los Ministros, directores o jefes de las entidades que correspondan o sus delegados con poder de decisión según el tema a tratar, el Pueblo Yukpa representado en los seis Cabildos Gobernadores, que hacen parte de las asociación de autoridades tradicionales del pueblo Yukpa SEKEIMO, mas es el presidente y secretario de este.*
> *5.La mesa técnica en común acuerdo convocará a los entes territoriales, Corpocesar o sus delegados que crean conveniente, el gobernador del Departamento del Cesar o su delegado según el tema a tratar.*
> *6. La mesa se reunirá ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente, cuando las autoridades indígenas del pueblo yukpa y el ministerio del interior los convoque, previa convocatoria por la secretaría técnica.*
> *7.El ministerio del Interior financiará las actividades operativas y técnicas de la MPC Yukpa frente aquellas actividades que se estén realizando sin que genere ningún tipo de vinculación laboral con el Ministerio del Interior.*
> *8. Funciones de la Mesa: Dialogar, Concertar y Consultar al pueblo Yukpa sobre las medidas administrativas, legislativas, proyectos de orden nacional susceptibles de afectar. De acuerdo con el artículo 6 del convenio 169 de la OIT ley 21 de 19914.*
> *9.Distencionar los conflictos territoriales.*

10. Hacerles Seguimiento, control, evaluación y monitoreo a los acuerdos protocolizados en esta consulta y a la sentencia T-713.
11. Como garantes de la mesa, serán invitados permanentes las siguientes entidades: Defensoría del Pueblo, Procurador delegado para asuntos étnicos y minoría o su delegado, contralor delegado para el sector agropecuario y ambiental o su delegado, procurador delegado para asuntos agrarios y ambiental.
12. Funciones de la Secretaría técnica: Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias.
Recoger y organizar la información que será sometida a la mesa técnica.
Elaborar y custodiar las actas y videos de las reuniones.
Nota: la OACP se encargará del seguimiento al proceso."[20]

ANEXO 13, Acta de taller de medidas de manejo de la consulta previa de la orden tercera (03) de la Sentencia T-713 de 2017, veintidós (22), veintitrés (23) y veinticuatro (24) de noviembre del año 2018.

3. El día trece (13) de noviembre del año 2019, el Ministerio del Interior nos envía la propuesta de borrador del acto administrativo de la MPC –Yukpa, donde de manera ilegal e irresponsable muchos acuerdos fueron desconocidos en su borrador de decreto y más concretamente en cuanto a "*Concertar y Consultar al pueblo Yukpa sobre las medidas administrativas, legislativas, proyectos de orden nacional susceptibles de afectar. De acuerdo con el artículo 6 del convenio 169 de la OIT ley 21 de 19914."*

4. El pueblo indígena Yukpa envía la realimentación del borrador el día dieciocho (18) de diciembre de 2019 y no hay respuesta del Ministerio del Interior hasta le fecha.

5. Han pasado casi dos (02) años después de haber acordado esta medida de manejo y el Ministerio del Interior no ha promulgado el mencionado acto administrativo que según lo acordado y lo manifestado por el propio viceministro del Interior, doctor JUAN CARLOS SOLER, este espacio debe crearse lo antes posible y antes de la protocolización, para entre otras cosas, diseccionar los conflictos territoriales.

6. Es evidente que el Gobierno nacional sabe y reconoce que al pueblo Yukpa se le ha invisibilizado, discriminado y no se la ha consultado ninguna medida administrativa, legislativas, proyectos obra o actividad; por lo que fue premeditado la no consulta previa con el pueblo indígena Yukpa de la Ley de Regalías 2056 del treinta (30) de septiembre de 2020. "*POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*"

[20] Matrzi, Consulta Previa sentencia T-713 de 2017.

DECIMO: El día veinte (20) de febrero del 2020, el Resguardo indígena Iroka del pueblo Yukpa, recibió una comunicación del Director de Asuntos Indígenas; Romo y Minorías, mediante radicado número OFI2020-4214-DAI 2200, donde invita solo al resguardo Iroka, a participar en el proceso de Consulta previa de la Ley de Regalías.

ANEXO 14, oficio recibido veinte (20) de febrero del 2020, por el Ministerio del Interior, mediante radicado número OFI2020-4214-DAI 2200.

DECIMO PRIMERO: El día veintiuno (21) de febrero el pueblo indígena Yukpa responde el derecho de petición al Ministerio del Interior, pues el interés siempre ha sido dividir el pueblo indígena Yukpa, y por ello solo invitó al resguardo Iroka, dejando por fuera a los demás cinco (5) resguardos.

En el mencionado documento se le informa a la doctora ALICIA ARANGO:

> ***1.*** *Informar que no nos es posible asistir el próximo 24 y 25 de febrero de 2020 a la sesión de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y las Organizaciones Indígenas, para realizar el proceso de consulta previa del "Proyecto de Ley por la cual se Regula la Organización y el Funcionamiento del Sistema General de Regalías". Por qué en dicha ´fecha el pueblo Yukpa se encuentra en reunión con la Agencia Nacional de Tierras en la ciudad de Valledupar".*
>
> ***2.*** *Informar que no nos es posible asistir el próximo 24 y 25 de febrero de 2020 a la sesión de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y las Organizaciones Indígenas, para realizar el proceso de consulta previa del "Proyecto de Ley por la cual se Regula la Organización y el Funcionamiento del Sistema General de Regalías"., porque cinco (5) de los síes (6) resguardos indígenas Yukpas de la Serranía del Perijá, no hacemos parte de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y Organizaciones Indígenas.*
>
> *Por primera vez y en la pasada Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo, fuimos invitados a una consulta previa de una medida legislativa, pero el resultado fue nefasto, no pudimos de manera apropiada participar y presentar nuestras observaciones y preocupaciones, ni tampoco fueron tiendas en cuenta, pues nuestra asistencia fue más protocolaría que activa y sentimos que se nos cuartaba nuestra participación por no hacer parte del espacio mencionado.*
>
> ***3.*** *Informarle que el escenario acordado o pactado con el Gobierno Nacional y en especial con el Ministerio del Interior, sobre los procesos de consulta previa en a aquellas medidas legislativas, administrativas, proyectos obras o actividades susceptibles de afectarnos, es la Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa (MCP- YUKUPA).*

Este espacio fue pactado como medida de manejo de la consulta previa de la orden Tercera, sentencia T- 713 de 2017, en talleres de los días veintidós (22), veintitrés (23) y veinticuatro (24) de noviembre del año 2018, donde claramente se acordó que dicho o espacio de concertación tendrá como "Funciones de la Mesa: Dialogar, Concertar y Consultar al pueblo Yukpa sobre las medidas administrativas, legislativas, proyectos de orden nacional susceptibles de afectar. De acuerdo; 11 artículo 6 del convenio 169 de la OIT ley 21 de 1991."[21].

4. *En tal sentido nos permitimos de manera respetuosa solicitar, se nos garantizar el derecho fundamental del pueblo indígena Yukpa de la Serranía del Perijá, a la consulta previa del "Proyecto de Ley por la cual se Regula la Organización y el Funcionamiento del Sistema General de Regalías", de una forma adecuada y al interior de la Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa (MCP- YUKUPA). Para lo cual deberá de manera rápida concertar con el pueblo indígena Yukpa el acto administrativo (MCP- YUKUPA).*

5. *El pueblo Yukpa le solicita al ministerio del Interior, convocarnos de manera urgente al pueblo indígena Yukpa de la Serranía del Perijá, a la consulta previa del "Proyecto de Ley por la cual se Regula la Organización y el Funcionamiento del Sistema General de Regalías", Al interior de Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa (MCP- YUKUPA). Todo esto para dar cumplimiento a los siguientes principios que rigüe la consulta previa, según sentencia SU -123 de 2018.*

"Entre otras, en las sentencias T-129 de 2011, C-389 de 2016, SU-133 de 2017, SU- 217 de 2017, T-298 de 2017 y T-103 de 2018, esta Corte ha explicado que el objetivo de la consulta es intentar genuinamente lograr un acuerdo con las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre medidas que las afecten directamente (esto es, normas, políticas, planes, programas, etc.)[22]*. Así mismo se ha decantado que el principio de buena fe debe guiar la actuación de las partes, condición imprescindible para su entendimiento y confianza y, por lo tanto, para la eficacia de la consulta y que por medio de las consultas se debe asegurar una participación y efectiva*[23] *de los pueblos interesados. Sobre este tópico la jurisprudencia ha explicado que el significado de la participación es que no pueda admitirse como tal a la simple notificación a los pueblos interesados o a la celebración de reuniones informativas. Que esa participación sea efectiva significa que el punto de vista de los pueblos debe tener incidencia en la decisión que adopten las autoridades concernidas.*

[21] Tomada del acta del 22,23 y 23 de noviembe de 2019

[22] Véase, además, la Observación 2010/81 sobre el Convenio 169 de la OIT

[23] Este aspecto fue abordado, entre otras, en Sentencias SU-039 de 1997, Sentencia T-376 de 2012 y T-550 de 2015. Así mismo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam del de 28 de noviembre de 2007, párr. 140; Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia (fondo y reparaciones) del 27 de junio de 2012 Párr. 163 y 179; Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras. Sentencia de 08 de octubre de 2015 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 160 – 162 y 216; y Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Sentencia de 25 de noviembre de 2015 Fondo, Reparaciones y Costas. Párr.181 y 204

La Corte igualmente ha señalado que la consulta constituye un proceso de diálogo intercultural entre iguales, en el entendido de que esto significa que ni los pueblos indígenas tienen un derecho de veto que les permita bloquear decisiones estatales, ni el Estado tiene un derecho a la imposición sobre los pueblos indígenas para imponerles caprichosamente cualquier decisión[24] sino que opera un intercambio de razones entre culturas que tiene igual dignidad y valor constitucional (CP art 70). Esto no significa que, desde el punto de vista fáctico, los pueblos indígenas o las comunidades afrodescendientes tengan un igual poder a los particulares o al Estado en este proceso de consulta pues usualmente se encuentran en una situación de desventaja frente a ellos por la discriminación a que han sido sometidos. Por eso el Estado tiene el deber de tomar las medidas compensatorias necesarias para reforzar la posición de estos pueblos en estos procesos de consulta para que efectivamente opere ese diálogo intercultural entre iguales.

La jurisprudencia también ha indicado que la consulta debe ser flexible[25] de manera que se adapte a las necesidades de cada asunto, sin que esto se pueda desconocer con la simple alusión del interés general, pues debe atenderse a la diversidad de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Además, la consulta debe ser informada[26], por lo cual no puede tratarse de un asunto de mero trámite formal sino de un esfuerzo genuino del Estado y los particulares implicados por conocer las perspectivas de los pueblos afectados y por efectivamente lograr un acuerdo. Es entonces imperativo respetar la diversidad étnica y cultural[27] lo que permitirá encontrar mecanismos de satisfacción para ambas partes."[28] [29]

ANEXO 15, Oficio enviado el veintiuno (21) de febrero de 2020, donde el pueblo Yukpa responde solicitud del Ministerio del Interior.

DECIMO SEGUNDO: Del veintiocho (28) de julio al primero (01) de agosto de 2020, el Gobierno Nacional y la MCP protocolizan la consulta previa de la Lay de Regalías, promovida por el Gobierno del señor IVAN DUQUE MÁRQUEZ, presidente de Colombia; consulta previa donde no participó el pueblo indígena Yukpa, tal como aparece en la firma de la respectiva acta.

[24] Véase sentencia T-704de 2016. Fundamento 2.30.
[25] Véase el artículo 6.1.a del Convenio 169 OIT, y las sentencias de la Corte IDH Saramaka vs Surinam y Sarayaku vs Ecuador y C-175 de 2009 de esta corporación.
[26] Sentencias C-891 de 2002, C-389 de 2016, SU-039 de 2003 y T-769 de 2009, así mismo en Corte IDH el Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras. Sentencia de 08 de octubre de 2015 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 160 – 162 y 216.
[27] La Corte IDH ha señalado que los procedimientos deben ser culturalmente adecuados, según las costumbres y tradiciones de los pueblos. Al respecto, es obligación tener en cuenta los métodos de toma de decisión de las comunidades. Ello implica respetar las autoridades escogidas por el colectivo para entablar el diálogo. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam del de 28 de noviembre de 2007, párr. 133. En el mismo sentido ver Sentencia (fondo y reparaciones) Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, del 27 de junio de 2012 Párr. 177
[28] Sentencia SU 123 de 2018
[29] Oficio enviado el 21 de febrero 21 de 2020, donde el pueblo Yukpa responde el oficio del Ministerio del Interior.

ANEXO 16, Oficio acta de concertación de Consulta previa, de la Ley de regalías, el día 28, 29, 30, 31 de julio y 1 de agosto de 2020.

DECIMO TECERO: Ley de Regalías 2056 del treinta (30) de septiembre de 2020. "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS", aprobada por el Congreso de Colombia, en el primer Párrafo del Artículo 6, denominado Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regional, que hace perta del título II Órganos del Sistema General de Regalías, menciona:

> *"Créanse los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regional, como responsables de aprobar y designar el ejecutor de los proyectos de inversión que se financiarán con cargo al 40% de los recursos de la Asignación para la Inversión Regional, de conformidad con lo previsto en la presente Ley"*[30]
>
> *(...)*
>
> *"En cada uno de estos órganos habrá un representante con voz de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, será elegido de manera conjunta por las Comisiones Consultivas Departamentales que conforman la respectiva región. La Dirección de Asuntos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior informará de la decisión a quien corresponda, anexando el acta respectiva. Un representante con voz de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el cual será informado por la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas. La participación de estos representantes se realizará con plena autonomía,* ***con voz y sin voto****"*[31]

1. El artículo 6 del Ley de Regalías 2056 del treinta (30) de septiembre de 2020. "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS", es inconstitucional y altamente discriminatorio y nocivo al pueblo indígena Yukpa, pues no le permite ni con vos ni con voz participar en los beneficios de los recursos que se extraen en su territorio ancestral, debido a que no hace parte de la Mesa Permanente de Concertación y por ende se da por hecho que no se le tendrá en cuenta en las Comisiones Consultivas Departamentales.

Esta actitud premeditada del gobierno nacional de no invitar a los seis (6) cabildos Gobernadores del pueblo Indígena Yukpa a la Consulta Previa de la ley de Regalías, violenta enormemente un cúmulo de derechos fundamentales de nuestro pueblo indígena y está en contravía con la Sentencia Honorable de la Corte Cosntitucional SU 123 de 2018, en lo relación con la Consulta previa y justicia ambiental:

[30] Ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS,", aprobada por el Congreso de Colombia, en el primer Párrafo del Artículo 6

[31] Ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS,", aprobada por el Congreso de Colombia, en el primer Párrafo del Artículo 6

"10.1. En caso de afectaciones ambientales, el derecho a la consulta previa tiene conexiones íntimas con la justicia ambiental, como lo ha mostrado esta Corte, pues ante la perturbación ambiental de los pueblos indígenas y tribales ha activado la consulta previa para recomponer, a través de la participación, el reparto desigual de las cargas y los beneficios ambientales.

10.2. La justicia ambiental ha sido entonces utilizada por esta Corte para resolver asuntos de distribución inequitativa de cargas ambientales entre los diferentes grupos sociales y defender la participación de colectividades afectadas. Esta construcción teórica ha servido para identificar afectaciones directas a una comunidad como resultado de un proyecto productivo que trae consecuencia o efectos a los ecosistemas.

10.3. Según la Sentencia T-294 de 2014, la justicia ambiental puede ser entendida como el "tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales". La justicia ambiental es entonces un marco analítico que ha permitido terciar ante un conflicto ecológico distributivo, dado que intenta eliminar la discriminación que padecen algunas comunidades en relación con el acceso de servicios ambientales y de la exposición superlativa a los desechos de ciertas industrias. La Corte ha considerado que la justicia ambiental, dentro del marco de la Constitución[32], está compuesta por cuatro elementos interrelacionados: i) la justicia distributiva; ii) la justicia participativa; iii) el principio de sostenibilidad; y iv) el principio de precaución.

10.4. El componente de justicia distributiva[33] respalda el reparto equitativo de las cargas y beneficios ambientales para los habitantes de un Estado, sin que sea aceptable diferenciar algún sector de la población debido a su origen étnico, de su género o de su condición socioeconómica. Una justicia participativa[34] significa que en las decisiones ambientales se exige la intervención activa y significativa de las personas que resultan afectadas por la ejecución de determinada actividad. El principio de sostenibilidad reclama que los sistemas económicos y sociales deben ser reproducibles sin el deterioro de los ecosistemas en que se apoyan, esto es, la viabilidad ecológica. Conforme a este principio, las actividades humanas tienen la obligación de respetar los límites de absorción y de regeneración del ambiente, de modo que no se comprometa su disfrute para las generaciones futuras y para otras especies

[32] Sentencia T-294 de 2014.

[33] Esa característica se justifica en los siguientes mandatos: i) un principio de equidad ambiental prima facie, esto es, debe justificarse el reparto inequitativo de bienes y cargas ambientales en el diseño, implementación y aplicación de una política ambiental o en la realización de un programa, obra o actividad que entraña perjuicios ambientales; y ii) un principio de efectiva retribución o compensación, que implica que las personas que padecen cargas o pasivos ambientales producto de una obra o proyectos deben ser compensadas.

[34] Esto incluye la intervención de las comunidades étnicas diversas a través de la consulta previa. Tal elemento incluye la apertura de espacios para comunidad con el fin de que ésta intervenga en: i) las decisiones del proyecto; ii) la planeación; y iii) la evaluación de impactos, al igual que la forma de mitigarlos, compensarlos y prevenirlos. En este aspecto, la idea es que coexista el conocimiento técnico con el saber nativo sobre los asuntos locales.

vivas no humanas[35]*. En este escenario, se construyó un "imperativo ambiental". El principio de precaución prescribe que los agentes ambientales deben abstenerse de ejecutar una actividad que causa una perturbación ambiental inaceptable, siempre y cuando exista una duda razonable de que el acto pueda causar un daño a la naturaleza. Este principio se convierte entonces en una guía de acción humana para comportarse ante la incertidumbre de perjuicio en un ecosistema y prevenir ese riesgo. Además, reconoce la falibilidad de la ciencia, lo cual impone al ser humano la obligación de ser prudente ante la incertidumbre de una eventual lesión. El principio de precaución materializa los deberes de protección y salvaguarda del medio ambiente.*

10.5. En las sentencias T-294 de 2014, SU-133 de 2017, SU-217 de 2017 y T-272 de 2017, la Corte consideró que el derecho a la consulta previa puede ser entendido, entre otras cosas, como una garantía procedimental para lograr justicia ambiental para las minorías étnicas. La razón: la justicia ambiental permite referirse a la administración y al manejo de las acciones humanas que impactan en el ambiente, ***la distribución de los costos negativos que causan los actos productivos de las personas, y el acceso a los recursos naturales, como sucede en los casos de exploración y extracción de recursos bióticos no renovables, ya sea minería o hidrocarburos****-. "*[36]

2. El artículo 6 de la Ley de Regalías 2056 del treinta (30) de septiembre de 2020. "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS", es inconstitucional, pues no permite que los pueblos indígenas participen activamente con sus voto en los proyectos que se presenten en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regional, único órgano de participación eficaz regional, puesto que la Ley derogó los OCAD departamentales y municipales; solo los pueblos indígenas participan con su voz, pero a la hora de tomar determinaciones sobre a aquellos asuntos que los atañe o de su interés son de manera inconstitucional excluidos y discriminados, violentando gravemente:

2.1. El artículo 2 del convenio 169 de 1989 de la OIT: "*Artículo 2 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos*

[35] En Sentencia T-411 de 1992, la Corte manifestó que la protección al medio ambiente está ligada al derecho a la vida de las generaciones actuales y de las ulteriores. Así consideró que: "*El patrimonio natural de un país pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes"*

[36] Setencia de la Honorabel Corte Cosntitucjonal SU-123 de 2018.

interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida"[37].

2.2. El artículo 2° del Decreto 2164 de 1995 define los Cabildos como: " (...) *una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad*". El honorable Consejo de Estado al respecto ha indicado "*...El cabildo indígena es una entidad atípica, que cumple las funciones previstas en la Constitución y en las leyes. El cabildo indígena es una de las "autoridades de los pueblos indígenas" a que alude el art. 246 de la C.P. Respecto de las entidades de carácter especial ha dicho la Corte Constitucional: "Si bien por razones técnicas y sistemáticas toda organización administrativa debería concebirse sobre la base de tipos definidos de entidades, la dinámica y las cada vez más crecientes y diversas necesidades del Estado no hacen posible la aplicación de esquemas de organización estrictamente rígidos; en ciertas circunstancias surge la necesidad de crear entidades con características especiales que no corresponden a ningún tipo tradicional¿" - Sentencia C-508/97- Los elementos estructurales que se desprenden de la definición son los siguientes : (...)[1] Mediante el proceso democrático de elección se asegura la representación de las comunidades indígenas exclusivamente en cabeza de sus miembros, manera de preservar su identidad cultural, mantener la cohesión social del grupo y legitimar sus autoridades.*

En estas condiciones, los gobernadores de cabildo y los cabildantes gozan de un régimen excepcional para el cumplimiento de las funciones atribuidas a esta entidad, pues la naturaleza de éstas no permite encasillarlas en la clasificación de servidores públicos Sentencia C-230/95 (...). (Subraya fuera de texto)

Es decir, el Congreso de la República desconoce y discrimina la función del cabildo indígena a la hora de participar efectivamente con sus votos sobre los proyectos de regalías y lo coloca en estado de inferioridad y desigualdad frente a los demás entes territoriales como la Alcaldías y las Gobernaciones, lo que constituye una fragante violación a nuestros derechos.

2.3. Artículo 4, b Convenio 169 de la OIT "*Deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos"* Artículo 6, c, Convenio 169 de la OIT "*Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin*." Artículo 8 1. Convenio 169 de la OIT "*Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario*.".

[37] Articulo 2 del Convenio 169 de la OIT.

2.4. De la misma manera el mencionado artículo de Ley de Regalías violenta fragante mente los artículos 5, 7, 8, 13 de la constitución Política de Colombia

DECIMO CUARTO: El Artículo 23 de la Ley de Regalías 2056 del treinta (30) de septiembre de 2020. "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS", menciona *"Anticipo del 5% para los municipios productores. Los municipios en cuyo territorio se exploten recursos naturales no renovables, podrán pactar con las personas jurídicas que desarrollen actividades de exploración de estos recursos o requerir con cargo al Sistema General de Regalías, el anticipo de hasta el 5% que les corresponda por concepto de asignaciones directas. Los recursos provenientes de este anticipo se podrán destinar a la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión en agua potable, saneamiento básico, vivienda, vías terciarias, energías renovables, electrificación rural y conectividad. El Gobierno nacional reglamentará las condiciones para efectuar el anticipo a que se refiere este artículo."*[38].

De nuestro territorio ancestral Yukpa se extrae el 50% del Carbón de la nación y esta actividad acabó nuestro ríos fauna y flora, que era nuestra alacenas y es por lo que nos enfermamos y morimos más rápido que otras poblaciones, por lo que se requiere que la Ley de Regalías en territorios como el nuestro se permita un anticipo superior al 5%, de asignación directa y que dichos recursos se puedan invertir también para programas de seguridad alimentaria, acceso a tierras productivas, minidistritos de riego, centros de salud e infraestructura educativa.

DECIMO QUINTO: El Artículo 50 de la Ley de Regalías 2056 del treinta (30) de septiembre de 2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS", dispone que *"Dentro de las convocatorias a las que se refiere el presente artículo se deberán realizar convocatorias que prioricen las áreas ambientales estratégicas de escala nacional y regional, las áreas protegidas, las reservas forestales, las zonas de bosque protector, entre otras, el Macizo Colombiano, los páramos, cuenca del río la vieja, la Amazonia, el complejo cenagoso de la región de la Mojana y del San Jorge, Área de manejo especial de la Macarena, el pacífico, las sabanas inundables de la Orinoquia y la cuenca del rio Meta, la Sierra Nevada de Santa Marta, Ciénaga Grande de Santa Marta, Ciénaga de Zapatosa, Ciénaga de San Silvestre, los manglares de Morrosquillo, los humedales Ramsar en Colombia, el nudo de Paramillo, el río Chicamocha, la Cuenca Alta y media del río Bogotá, la Reserva de Biosfera Seaflower del Archipiélago de San Andrés providencia y Santa Catalina, la región hídrica del valle de Atriz y el Piedemonte Amazónico".*[39].

Entendemos perfectamente que los recursos de Sistema General de Regalías deben ser destinados para proteger todos los ecosistemas de Colombia, tanto para territorios productores como no productores, pero es insólito, injusto, ilegal e inconstitucional que la Ecorregión de la Serranía del

[38] El Artículo 23. Ley de La ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.
[39] El Artículo 50 de la Ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Perijá, donde ha soportado los impactos directos de la minería a gran escala, no se le haya tenido en cuenta en el mencionado artículo, todo esto en contravía de la propia Corte Constitucional cuando menciona que es deber la aplicación de la justicia ambiental y la justicia distributiva, es decir a mayor impacto ambiental mayores beneficios.

La importancia de la Serranía del Perijá fue descrita en el Estudio realizado por el Banco de la República Serranía del Perijá: Geografía, capital humano, economía y medio ambiente, María Aguilera Díazii, en el año de 2016, En él se describe lo siguiente:

> "*La serranía del Perijá está ubicada al norte de Colombia y comparte frontera con Venezuela. Es un territorio de importancia biológica para el país y la humanidad por los servicios ambientales. Además, tiene resguardos que favorecen a los indígenas yuko-yupkas y los baris, etnias que están casi extinguidas. La economía se base en el sector primario, una parte agropecuaria y otra minera. En la primera se destacan los cultivos permanentes de palma de aceite, café, cacao y la ganadería bovina extensiva, y en la segunda la extracción de carbón que provee regalías y paga impuestos, pero contamina las fuentes hídricas, el suelo y el aire. La población rural, la cual padece altos índices de pobreza, ha sido la principal afectada por el conflicto armado en la región*."[40]
>
> *"Esta serranía tiene una importancia biológica por los recursos naturales de flora y fauna. Contiene bosques húmedos, secos y páramos cubiertos de pajonales, matorrales y frailejones. Los bienes y servicios que ellos producen benefician directamente a la población de los municipios de los tres departamentos en donde se encuentra este ecosistema. Además, es un patrimonio para el país y la humanidad por los servicios ambientales como la producción de agua, sumidero de carbono y hábitat de muchas especies de fauna y flora. Sus cuencas hidrográficas nutren las arterias fluviales de los departamentos que cruzan y en el Cesar alimentan a la Ciénaga de Zapatosa, el cuerpo de agua dulce más extenso de Colombia (Viloria, 2011)."*[41]
>
> *"Después de la Sierra Nevada de Santa Marta, la serranía del Perijá es la segunda fábrica natural de agua de la región Caribe colombiana. El sistema hidrográfico está constituido por ríos, quebradas y caños que alimentan el complejo cenagoso de Zapatoza y el río Magdalena. Algunos de los ríos que nacen en esta serranía son: Urumita, Marquezote, Marquezotico, Villanueva, Los Quemaos, El Molino, Cañaverales, Capuchino, Totolee, Carraipía, Chiriamio y Manaure. Este último nace en la zona del cerro El Pintao y recorre 29 Kms en el municipio de su mismo nombre, en dirección este – oeste (Municipios de Fonseca, Manaure y Urumita, 2012)"*[42]

[40] Banco de la República Serranía del Perijá: Geografía, capital humano, economía y medio ambientei María Aguilera Díazii, en el año de 2016

[41] Banco de la República Serranía del Perijá: Geografía, capital humano, economía y medio ambiente María Aguilera Díazii, en el año de 2016

[42] Banco de la República Serranía del Perijá: Geografía, capital humano, economía y medio ambientei María Aguilera Díazii, en el año de 2016

"*La serranía de Perijá drena sus aguas hacia dos regiones: la cuenca del río Cesar al oeste en el Caribe colombiano; y al este la cuenca del Catatumbo y el Zulia que vierten sus aguas al lago de Maracaibo. De la primera cuenca cabe mencionar las quebradas de Calenturitas, Casacará, Pernambuco, Maracas, Magiriaimo, Sicarare; y los ríos Apón, Santa Ana con sus tributarios principales: el río Negro y El Tucuco (Jaramillo, 2000a). En la segunda cuenca se encuentra el río de Oro que lo forman dos ríos principales, el del noroeste en el territorio Bari, venezolano, y el intermedio o Motilón que constituye la frontera entre Colombia y Venezuela (Jaramillo, 2000b).*"[43]

DECIMO SEXTO: El artículo 74 y 75 de la Ley de Regalías 2056 del treinta (30) de septiembre de 2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS", Desconoce la participación del pueblo Indígena Yukpa, en las decisiones de los proyectos de inversión en su territorio, debido a que el Pueblo Yukpa los que se ha venido reiterando en la presente acción de inconstitucionalidad he puesto que de hecho estará por fuera de dichas decisiones.

"Artículo 74. Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Es la responsable de definir los proyectos de inversión susceptibles de financiación con cargo al porcentaje de los recursos de la Asignación para la Inversión Local correspondiente a los Pueblos y Comunidades Indígenas. Esta instancia de decisión viabilizará, priorizará y aprobará los proyectos de inversión y designará la entidad ejecutora, en los términos señalados en la presente Ley."[44]

"Artículo 75. Naturaleza e integración de la Instancia de Decisión de los Pueblos y las Comunidades Indígenas. La Instancia desempeñará funciones públicas en los términos establecidos en la Ley, su propio reglamento y lo señalado por la Comisión Rectora y no tendrá personería jurídica. Estará integrada por: (i) Un delegado de cada una de las cinco (5) organizaciones que conforman la Mesa Permanente de Concertación y (ii) Un delegado por cada Macrorregión de conformidad con el artículo 10 del Decreto 1397 de 1996 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Elegidos para periodos de dos años. Esta Instancia contará con una secretaría técnica ejercida por uno de sus integrantes que será elegido conforme con su reglamento. Para su funcionamiento la Instancia contará con el apoyo de un equipo técnico. La Instancia podrá invitar a delegados de Ministerios o Departamentos Administrativos de acuerdo con los proyectos de inversión objeto de cada sesión, quienes participarán con voz y sin voto. Los miembros de la Instancia elaborarán su propio reglamento, así como el de la secretaría técnica, los cuales deberán estar en concordancia con las normas que regulan el Sistema General de Regalías.

[43] Banco de la República Serranía del Perijá: Geografía, capital humano, economía y medio ambientei María Aguilera Díazii, en el año de 2016

[44] Artículo 74 y 75 de la Ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

Parágrafo. Las decisiones sobre la regulación de esta Instancia estarán guiadas por los mandatos de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, en el marco del Sistema General de Regalías.'"[45]

DECIMO SEPTIMO: El señor Contralor Delegado para el Sector Ambiente, el día veintidós (22) de junio del año 2018, mediante radicado número 2018EE0076686 al Fiscal General de la Nación, Doctor NESTOR HUMBERTO NEIRA, de iniciar las investigaciones penales a la ANLA, CORPOCESAR y demás autoridades ambientales por los ocho (08) hallazgos de la auditoría a los proyectos mineros energéticos de la Serranía del Perijá, alguno de ellos relacionados con el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Calenturitas y el desvió de ríos.

ANEXO 17, Oficio enviado por el Contralor Delegado para el Sector Ambiente, el día veintidós (22) de junio del año 2018, mediante radicado número 2018EE0076686 al Fiscal General de la Nación, Doctor NESTOR HUMBERTO NEIRA, de iniciar las investigaciones penales a la ANLA, CORPOCESAR.

DECIMO OCTAVO: El señor Contralor Delegado para el Sector Ambiente, el día veintidós (22) de junio del año 2018, radicado número 2018EE0076678 al Procurador General de la Nación, Doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, de investigar disciplinariamente a la ANLA, CORPOCESAR y demás autoridades ambientales por los treinta y seis (36) hallazgos de la auditoría a los proyectos mineros energéticos de la Serranía del Perijá, muchos de ellos relacionados con el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Calenturitas y el desvió de nuestros ríos sin licencia o permiso de las autoridades ambientales..

ANEXO 18, Oficio por el Contralor Delegado para el Sector Ambiente, radicado número 2018EE0076678 al Procurador General de la Nación, Doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ.

VII. LA AFECTACIÓN DIRECTA AL PUEBLO INDIGENA YUKPA, DE LOS PROYECTOS MINERO ENERGÉTICOS, FUENTE DE LAS REGALÍAS PARA LA NACIÓN Y NO PARA LOS YUKPAS

1. INTRODUCCIÓN.

Desde hace más de tres (03) décadas empezaron a llegar a nuestro territorio ancestral grandes proyectos minero-energéticos. En el año 1995 iniciaron a licenciar decenas de proyectos extractivistas

[45] Artículo 74 y 75 de la Ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

no solo de grandes minas de cielo abierto, también las vías férreas y los puertos, todo este proceso coincide milimétricamente con el ingreso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y terminaron de licenciarlos en el año 2005, fecha en que el señor RODRIGO TOVAR PUPU, alias Jorge 40 realizó el proceso de paz, es decir, el principal propósito de estas estructuras paramilitares se cumplió, no solo de brindar la seguridad privada de las empresas mineros energéticas, si no también, presionar las licencias espurias otorgadas por la ANLA y Corpocesar.

La mayoría es de carácter extractivo, y que se vienen consolidando en la zona del valle del Perijá, siendo las cabeceras municipales de la Jagua de Ibirico, Becerril, Agustín Codazzi y La Paz, centros urbanos que han volcado parte de su dinámica en torno a la consolidación de grandes empresas en las zonas rurales. Estos proyectos vienen impactando el territorio Yukpa, ya que se consolida la degradación del territorio ancestral y se difunden los efectos colaterales hacia las áreas de resguardo.

Debido a la gravedad de los que a continuación presentaremos y cómo estos proyectos extractivistas se traslapan con nuestro territorio ancestral, relacionaremos el texto del Plan de Salvaguarda que fue ordenado por la Honorable Corte Constitucional en auto 004 de 2009 y que fue elaborado con el apoyo del Ministerio del Interior. Dicho Plan de Salvaguarda del pueblo Yukpa, se encuentra en la página oficial del Ministerio del Interior bajo la siguiente dirección: https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_yukpa_diagnostico_comunitario.pdf

2. AFECTACIONES DIRECTA DE LA MINERÍA A CIELO ABIERTO.

Desde 1995 grandes explotaciones carboníferas se vienen desarrollando en los Municipios de Becerril, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, El Paso. Estos megaproyectos han sido liderados por la empresa transnacional estadounidense Drummond Ltda. y la filial suiza Prodeco (Glencore AG – Xstata), mediante la apertura de grandes complejos mineros como La Loma, La Jagua y el Descanso. El Hatillo, La Francia, Calenturitas y El Tesoro, son otros proyectos secundarios en el área, pero que, en conjunto, hacen del centro y sur del departamento del Cesar un núcleo central de extracción carbonífera a nivel nacional. En suma, todos estos yacimientos se destacan a nivel mundial por su nivel de producción y colocan a la Drummond como el segundo gigante explotador del carbón en Colombia, detrás de la empresa Cerrejón ubicada en la Guajira. Una de las minas más grandes (Pribbenow) puede alcanzar los 9 Kms de largo por 4 Kms de ancho, encontrándose en la zona de Guajira – Cesar, varias de las minas a cielo abierto más grandes del planeta, lo cual concede un poder de grandes dimensiones a varias empresas líderes del sector a nivel mundial y que allí hacen presencia.

Ahora bien, no sólo en el centro y sur del departamento del Cesar continua con niveles de pobreza y atraso generalizado, a pesar de la cercanía de los grandes capitales invertidos para la extracción de mineral, sino que las secuelas ambientales de estos proyectos son críticas, especialmente por la

emisión del polvillo del carbón fruto de esta actividad. Este se libera a la atmósfera por las explosiones en el yacimiento para la obtención del mineral, así como por el embarque y transporte de este. En toda el área se reportan cultivos y animales domésticos cubiertos por este polvillo, así como afecciones respiratorias en pobladores de asentamientos vecinos. Igualmente, dada la magnitud de las excavaciones y los explosivos empleados, se genera un desequilibrio en los niveles freáticos de la región (nivel de agua del subsuelo) y el desecamiento de cursos de agua cercanos, por efecto de los fenómenos de infiltración desencadenados por la operación de la minería a cielo abierto

Los indígenas Yukpa de los resguardos de Sokorhpa e Iroka, donde se impacta directamente la actividad minera, dan cuenta de algunos de estos procesos. Afirman que la desviación, reducción y contaminación de los causes hídricos que bajan de la Serranía, están directamente relacionados con la muerte de por lo menos treinta (30) niños y niñas Yukpa al año, pues su lugar de pesca, principal fuente proteínica, fue acabada por las multinacionales.

Además, hay impactos directos en nuestra cultura. El pueblo Yukpa, damos cuenta del arrasamiento de un antiguo cementerio donde yacían nuestros ancestros cerca al municipio de la Jagua de Ibirico. Por efecto de la ampliación de la zona de operaciones de las minas de la Drummond, se ha venido destruyendo directamente el patrimonio cultural y sagrado de nuestro pueblo. En ese sentido, varios de los sitios sagrados Yukpa de la zona del plan, pasaron a estar bajo el control territorial de los grandes proyectos extractivos. De hecho, nuestro pueblo Yukpa señala que los territorios ancestrales que cubrían las áreas que hoy son dedicadas a la explotación carbonífera a gran escala, llamaban la atención de los indígenas siglos atrás, particularmente por el humo que emergía naturalmente del suelo y las altas temperaturas prevalecientes, un fenómeno extraño que hacía que se consideraran lugares sagrados a este tipo de escenarios (llamados Shirapa).

Existen otra clase de proyectos mineros en la región, aquellos de menor escala, que pueden llegar a tener serias implicaciones. Se trata de empresas de mediana envergadura que se ubican en inmediaciones de la Serranía del Perijá, especializadas en la captación de materiales para la construcción. Estas extraen material de arrastre de ríos principales de la zona (como el río Maracas), ocasionando deforestación y afectación de los causes hídricos.

3. AFECTACIONES DIRECTA A LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS RECIENTEMENTE.

El pueblo Yukpa sigue presenciando y sin ningún control la incursión de técnicos y profesionales ejecutando labores de exploración de hidrocarburos. Se ha detectado el ingreso de geólogos con la intención de realizar operaciones de sísmica, cuyo fin es determinar la existencia de posibles concentraciones de gas o petróleo en la zona montañosa. Su presencia fue observada en todos los resguardos Yukpa, pero es claro que son actores extraños para nuestro pueblo indígena, dado que

resulta inquietante la forma como agentes ajenos al territorio, sondean las potenciales riquezas del subsuelo. Se trata de la empresa UTK (Unión Temporal Kapital), quien realizó labores de sísmica hacia el año 2006, realizando operaciones de perforado y sondeo para determinar la riqueza del subsuelo. Sin agotar el proceso de consulta previa con el pueblo Yukpa, este equipo de trabajo ingresó con herramientas de medición, estudiando un territorio que no les pertenece y escudriñando recursos sin conocerse los resultados o los destinatarios finales a los que beneficia este tipo de información. De forma sistemática, los técnicos trazaron varias líneas de medición para realizar barridos del terreno, primero marcando una línea que partía desde el sur de la Guajira hasta el municipio de Becerril y desde allí se desprendían cuatro líneas perpendiculares de exploración y que se internaban en territorio Yukpa (en los municipios de La paz, Agustín Codazzi y Becerril, del departamento del Cesar) para realizar el sondeo detallado del área. Siguiendo estas líneas que avanzan sobre la Serranía, se hacen puntos de control secuencial y sistemático, donde se abre trocha y se ponen a prueba los respectivos equipos (GPS, sistemas informáticos y dispositivos de sísmica). En esa labor, pronto se dejó ver la inconformidad de las comunidades locales. Se ha advertido sobre la amenaza que representan estos agentes externos, dado que ellos determinan la posibilidad de colocación futura de capitales para la extracción, potenciando así la usurpación del territorio Yukpa. Ahora, hemos sufrido de cerca la locomotora extractiva, la cual plantea buscar presurosamente la rentabilidad de los territorios y en esa carrera se teme un impacto social a gran escala, dada la avanzada de empresas ávidas por la explotación de recursos naturales.

4. AFECTACIÓN DIRECTA DESPOJO DE TIERRAS PARA DARLE PASO A LOS PROYECTOS MINEROS ENERGÉTICOS.

La fecha que se tiene como parámetro es el año 1994, cuando el propio estado mediante Decreto 2164 del siete (07) de diciembre de 1995 suscrito por el Gobierno Nacional, señala en su artículo 3º. Protección de los derechos y bienes de las comunidades*:*

> *"Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, semi-nomada o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de la ley 160 de 1994, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas. Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sólo podrán adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos".*[46]

[46] Decreto Presidencial 2164 del 7 de diciembre de 1995.,

La información es producto de un análisis cartográfico realizado a través del traslape de polígonos con superficies en común. El análisis data de 1994 hasta la fecha, por la explicación jurídica anteriormente señalada, lo que se constituye en un despojo técnico territorial por parte del Estado en contra de nuestro pueblo Yukpa.

Los polígonos base del análisis son: Territorio ancestral Yukpa, sitios sagrados, polígonos legalmente constituidos de los (06) resguardos y sus expectativas de ampliación a corto y mediano plazo. **Frente a los polígonos:** límites municipales y departamentales, títulos mineros concedidos y solicitados, licencias ambientales, zonas de reserva forestal los motilones y río magdalena (ley 2 de 1959).

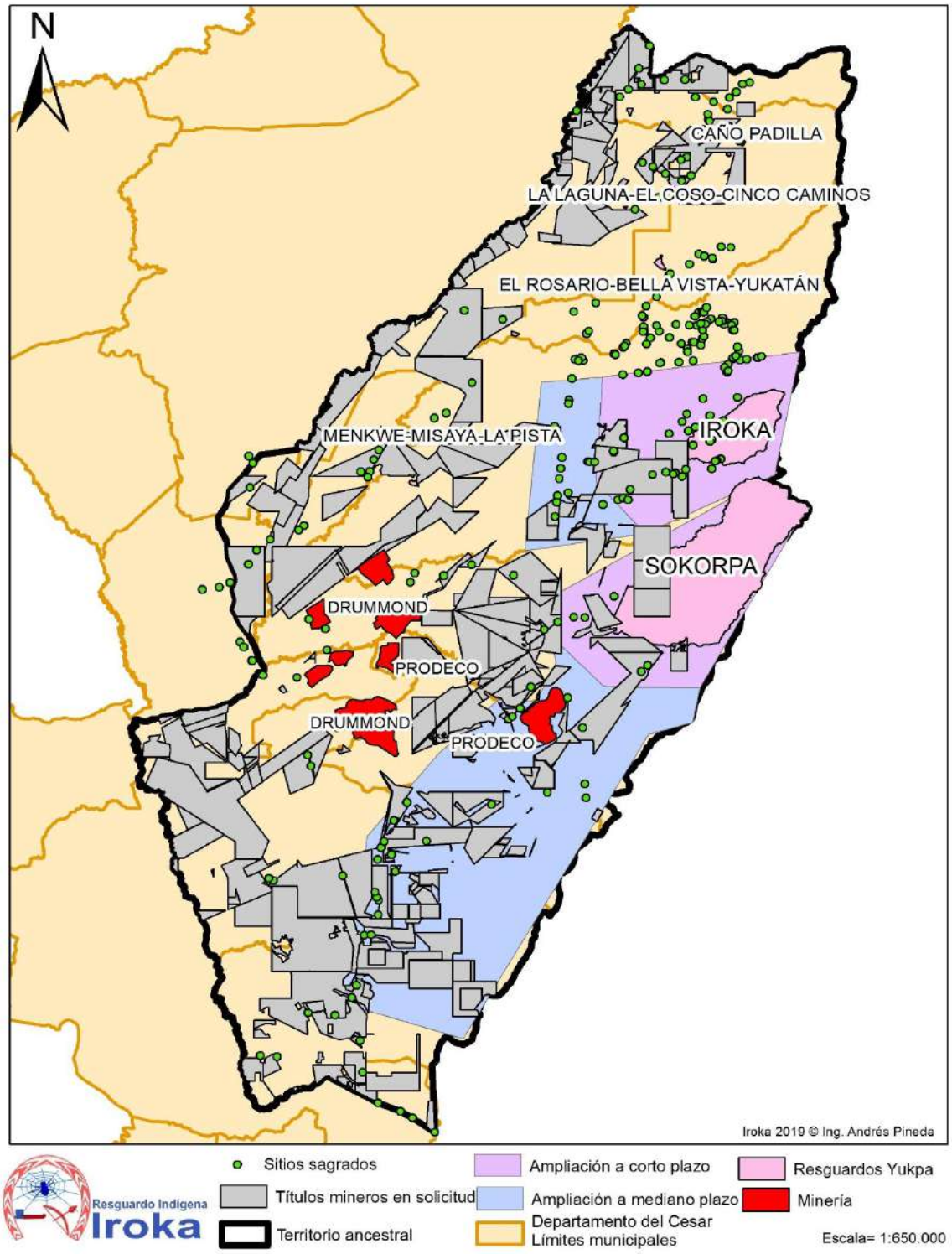
Fuentes de información:

1. SIAC (Sistema de Información Ambiental de Colombia) ANLA.
2. Tierra minada: Títulos mineros concedidos y solicitados.
3. IGAC: Cartografía base.
4. Geodatabase Resguardo Iroka, proyecto Owaya 2017.

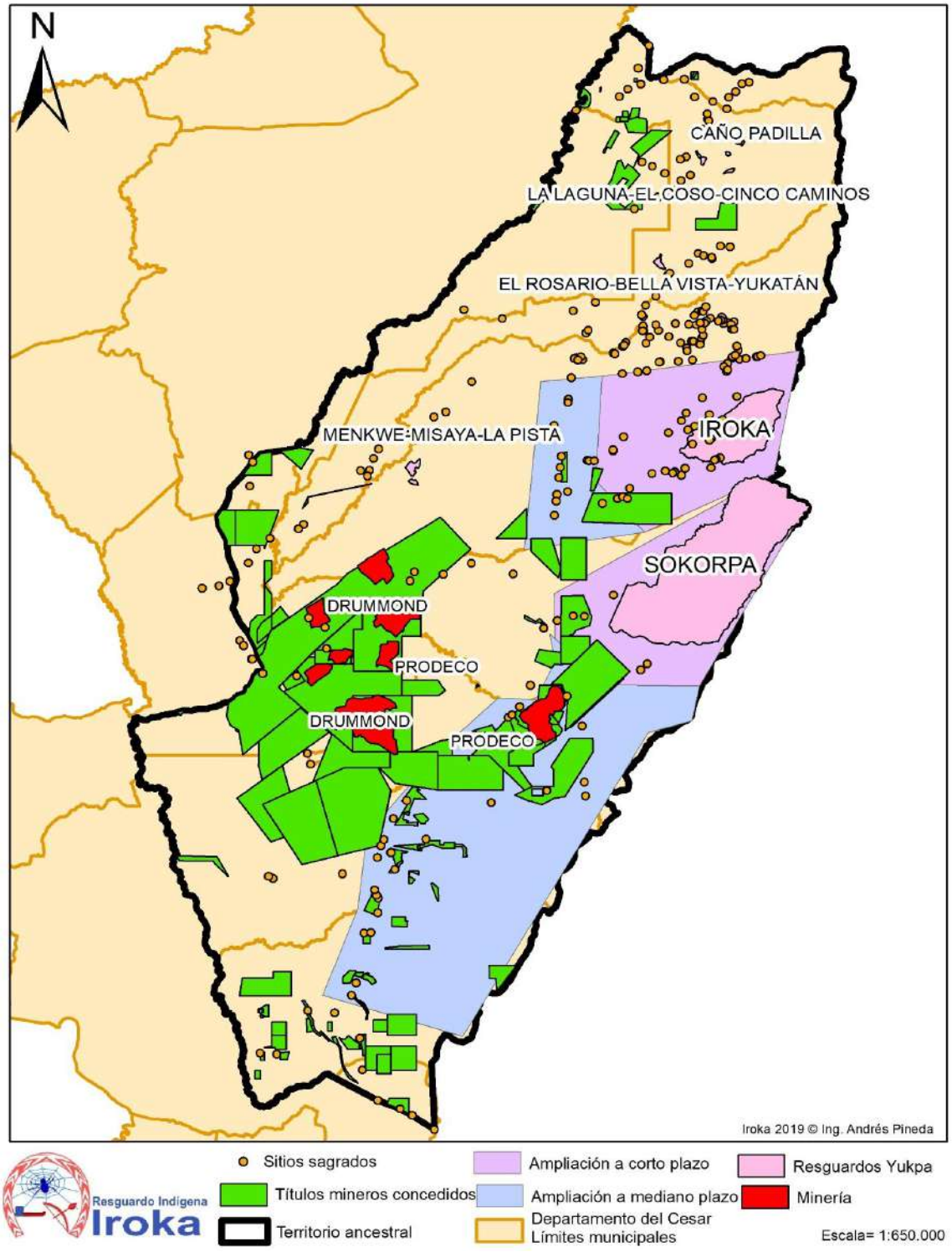
5. TÍTULOS MINEROS Y EMPRESAS EN EL TERRITORIO ANCESTRAL Y SU AFECTACIÓN DIRECTA.

En contexto el polígono del territorio ancestral Yukpa el cual se encuentra invadido en gran medida por títulos mineros en solicitud e incluso algunos concedidos. Los títulos mineros en solicitud son 314, que equivalen a 261.809 Ha y concedidos 126 polígonos, es decir 149.529 Ha. Estas dos (02) tipologías de títulos mineros se traslapan ampliamente con las expectativas de ampliación de los seis (6) resguardos. Así mismo, los sitios de importancia ancestral y espiritual del Pueblo Yukpa también se encuentran traslapados con estos títulos mineros, lo cual representa una invasión a la cosmovisión y cultura de nuestra etnia. Importante resaltar que los polígonos de explotación minera de las empresas Drummond y Grupo Prodeco desarrollan sus labores operativas y administrativas sobre y en cercanías de sitios sagrados y de expectativas de ampliación de resguardos. ***(ver mapas: Títulos Mineros en Solicitud y Concedidos).***

Títulos Mineros En Solicitud

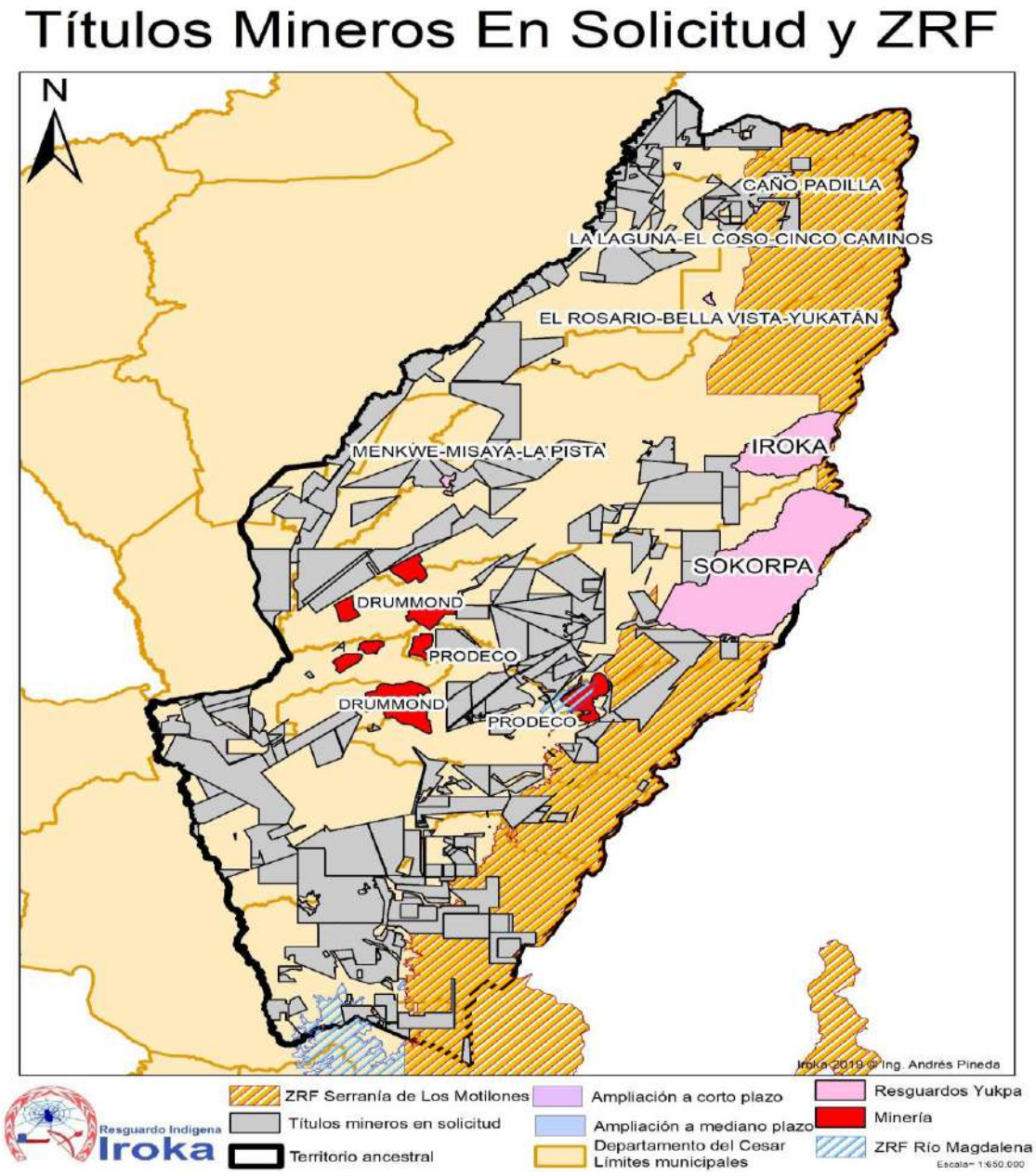


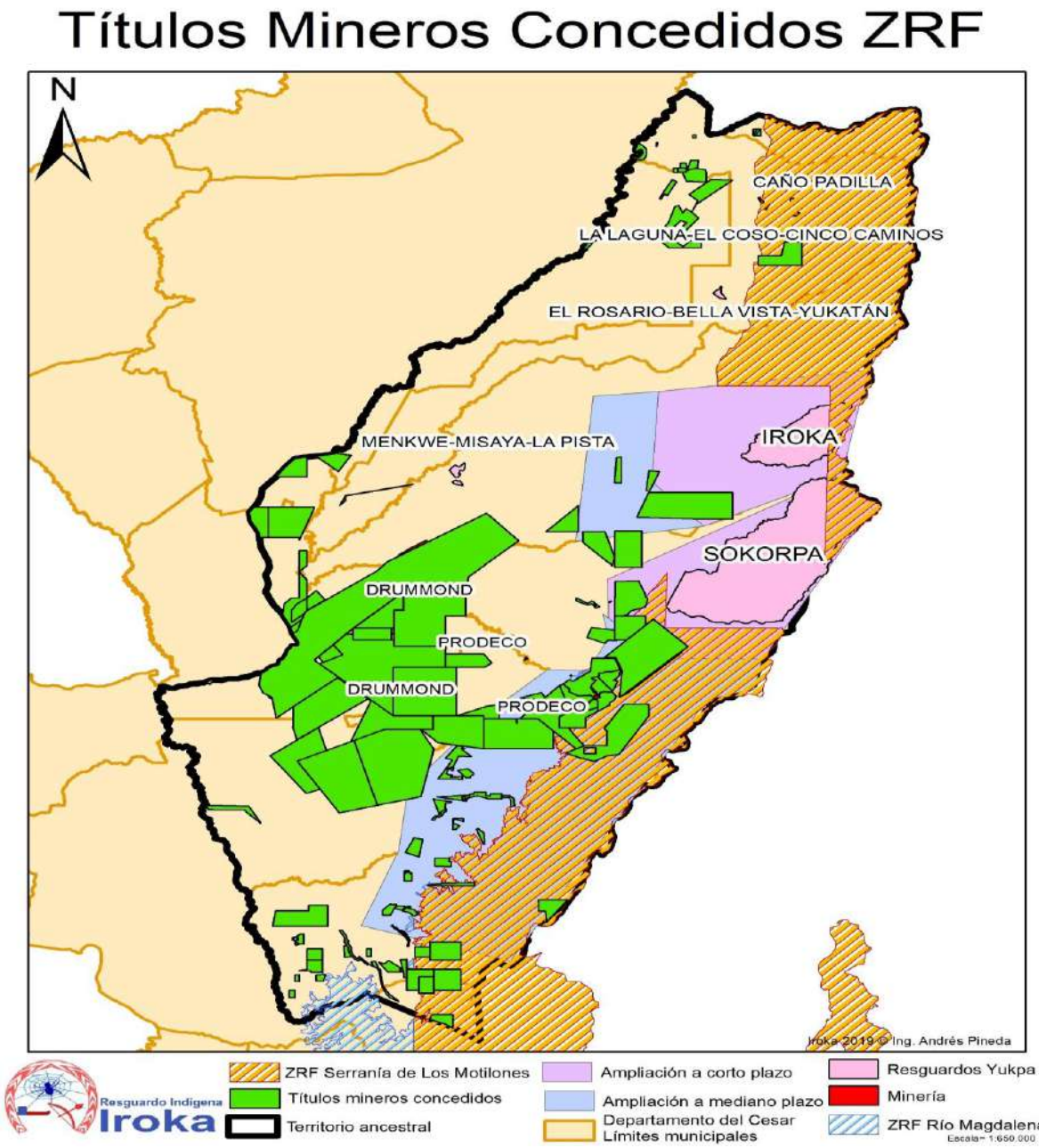
Títulos Mineros Concedidos



6. TÍTULOS MINEROS Y ZONAS DE RESERVA FORESTAL LEY 2 DE 1959 Y SU AFECTACIÓN DIRECTA.

La zona de reserva forestal de la Serranía de los Motilones y la zona de reserva forestal del Río Magdalena fueron declaradas en la Ley 2da de 1959, estas áreas que debieron haberse dedicado para la ampliación de los seis (06) resguardos indígenas Yukpa, el estado procedió a sustraerlas para proyectos minero-energéticos, constituyéndose no sólo en actos administrativos ilegales, sino también, en un despojo técnico territorial hacia el Pueblo Yukpa. Al respecto, presentaremos las áreas de las zonas de reserva forestal que de manera ilegal se traslapan con los títulos mineros. ***(ver mapas: Títulos Mineros en Solicitud ZRF y Concedidos ZRF).***



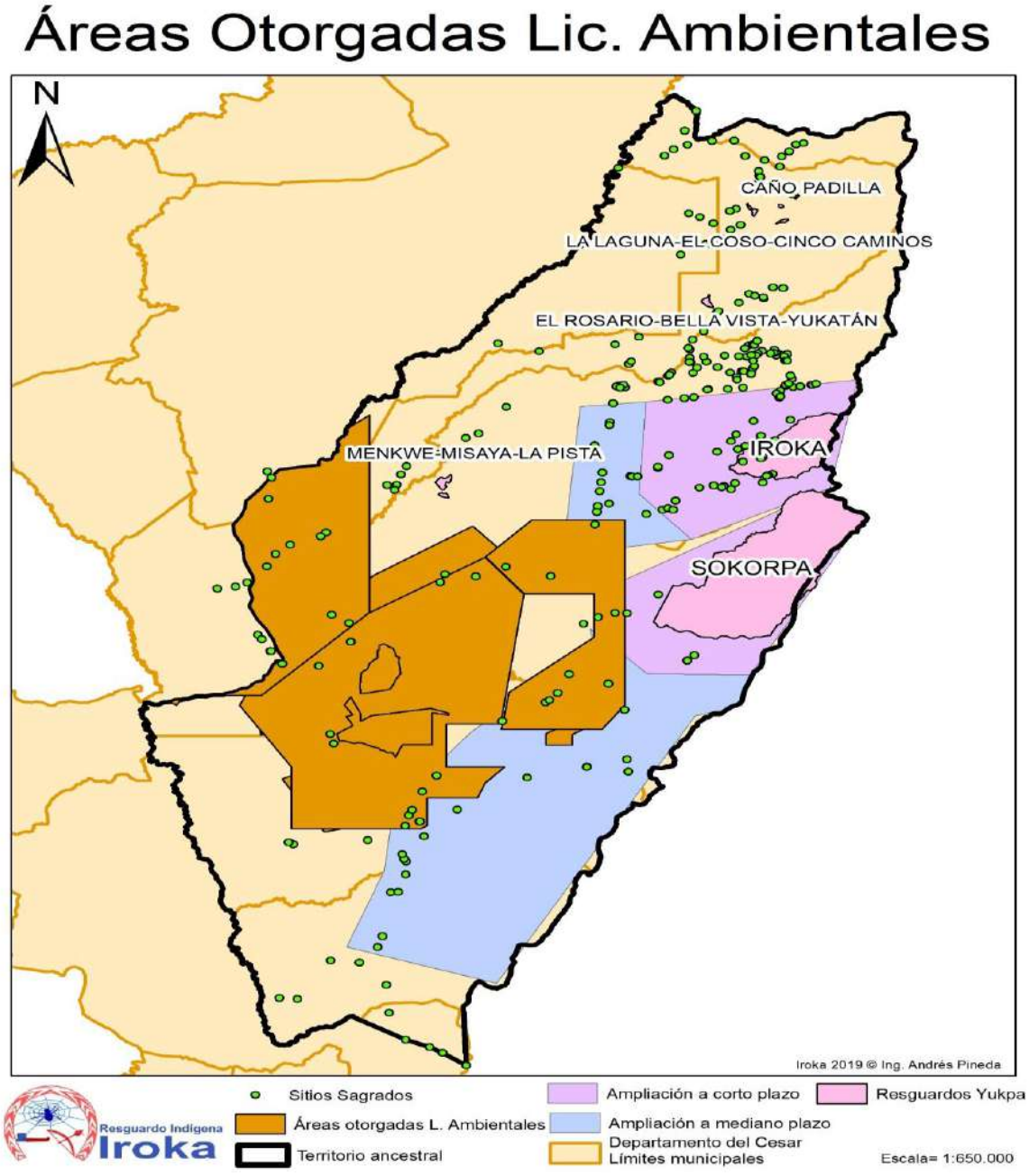


7. OTORGAMEINTO DE LICENCIAS AMBIENTALES SIN CONSULTA PREVÍA Y LA AFECTACIÓN DITRECTA.

Los mapas a continuación son producto de la compilación de capas en formato (shp) disponibles como datos abiertos en el SIAC dispuestas por la ANLA. En ellas se observan polígonos los cuales representan superficies dispuestas para proyectos energéticos, infraestructura, hidrocarburos y viales.

7.1. HIDROCARBUROS, INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS DE ENERGÍA Y EMPRESAS EN EL TERRITORIO ANCESTRAL Y SU AFECTACIÓN DIRECTA.

A continuación, se detalla la información referente a los 27 polígonos de hidrocarburos localizados en el territorio ancestral según la ANLA. Cabe resaltar que estos polígonos se encuentran en traslape con sitios de importancia ancestral y espiritual para el Pueblo Yukpa, por otra parte, se traslapan de igual forma con las expectativas de ampliación a corto y mediano plazo de los resguardos Iroka y Sokorhpa. Por último, ocupa gran superficie (347.079 Ha) en la zona centro del territorio ancestral. ***(ver mapa: Áreas Otorgadas Lic. Ambientales)***



ÁREAS PROYECTOS HIDROCARBUROS EN EL TERRITORIO ANCESTRAL			
N°	**Operador**	**Proyecto**	**Extensión (Ha)**
1	C.I. PRODECO S. A	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARBONÍFERA EL HATILLO.	6.677,033855
2	CARBONES DE LA JAGUA S. A	EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBON DEL FLANCO OCCIDENTAL DEL SINCLINAL DE LA JAGUA DE IBIRICÓ MINA CARBONES DE LA JAGUA S.A., EN EL DEPTO DEL CESAR. REHABILITACION DE LA VIA JAGUA DE IBIRICO - BOQUERON	540,222237
3	CARBONES DE LA JAGUA S. A	EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBON DEL FLANCO OCCIDENTAL DEL SINCLINAL DE LA JAGUA DE IBIRICÓ MINA CARBONES DE LA JAGUA S.A., EN EL DEPTO DEL CESAR. REHABILITACION DE LA VIA JAGUA DE IBIRICO - BOQUERON	424,912647

4	CARBONES DE LA JAGUA S. A	EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBON DEL FLANCO OCCIDENTAL DEL SINCLINAL DE LA JAGUA DE IBIRICÓ MINA CARBONES DE LA JAGUA S.A., EN EL DEPTO DEL CESAR. REHABILITACION DE LA VIA JAGUA DE IBIRICO - BOQUERON	1.869,684602
5	CARBONES DE LA JAGUA S. A	EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBON DEL FLANCO OCCIDENTAL DEL SINCLINAL DE LA JAGUA DE IBIRICÓ MINA CARBONES DE LA JAGUA S.A., EN EL DEPTO DEL CESAR. REHABILITACION DE LA VIA JAGUA DE IBIRICO - BOQUERON	25,930704
6	COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARBONÍFERA EL HATILLO.	999,904301
7	COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.	EXPLORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE CARBONÍFERA A	35,000138

		CIELO ABIERTO DENOMINADO PROYECTO CARBONÍFERO CALENTURITAS QUE SE REALIZA EN UN ÁREA DE 6.677 HA., EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	
8	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NORCARBÓN S.A.S. - C.I. NORCARBÓN S.A.S.	PMA PARA MEDIANA MINERÍA DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE CARBÓN. 096-94.	488,060816
9	CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S.	PASO VIAL POR LOS CENTROS POBLADOS: LA FLORESTA, LAS VEGAS Y PELAYA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, QUE HACEN PARTE DEL SECTOR 2 TRAMO 7: ENTRE LA MATA – SAN ROQUE DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL.	0
10	DRUMMOND LTD	EXPLOTACIÓN CARBONÍFERA LA LOMA - MINA LA LOMA - PRIBBENOW.	6.560,029697
11	DRUMMOND LTD	MODIFICACIÓN PMA MINA CERRO	213,275561

		LARGO (SORORIA) CJA 275-91	
12	DRUMMOND LTD	EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS (GAS Y PETRÓLEO) Y GAS METANO ASOCIADO A CARBON DENOMINADO LA LOMA	115.085,000042
13	DRUMMOND LTD	AREA DE DESARROLLO IGUANA	2.726,653102
14	DRUMMOND LTD	PRODUCCIÓN DE GAS EN EL ÁREA DE DESARROLLO CAPORO NORTE	6.462,035762
15	DRUMMOND LTD	EXPLOTACIÓN CARBONÍFERA DESCANSO NORTE	31.559,57098
16	DRUMMOND LTD	EXPLOTACIÓN MINERA EN LAS ÁREAS DE LOS CONTRATOS 144/97 EL DESCANSO, 283/95 Y 284/95 RINCÓN HONDO	6.937,915993
17	DRUMMOND LTD	EXPLOTACIÓN MINERA EN LAS ÁREAS DE LOS CONTRATOS 144/97 EL DESCANSO, 283/95 Y 284/95 RINCÓN HONDO	9.459,354607

18	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA LOMA 500 KV Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS, UPME-01-2014	16,901617
19	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	CENTRAL CARBOELÉCTRICA LA LOMA	7000,68805
20	LA LUNA MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	PROYECTO DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE CARBÓN MINA LA LUNA	0
21	QRC COLOMBIA LTDA	BLOQUE DE PERFORACION EXPLORATORIO "IRACA"	38.350,000117
22	SLOANE ENERGY COLOMBIA S.A. S0	CENTRAL TERMOELÉCTRICA LA LUNA	0,05
23	SLOANE ENERGY COLOMBIA S.A. S0	CENTRAL TERMOELÉCTRICA LA LUNA	3,91
24	TEXICAN OIL LTD	BLOQUE DE PERFORACION EXPLORATORIA MARACAS	92.060,549941
25	TEXICAN OIL LTD	LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL PARA EL PROYECTO CAMPO DE EXPLOTACION DE GAS NATURAL COMPAE	8.851,771545

26	VALE COAL COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA	EXPLOTACIÓN CARBONÍFERA LA LOMA - MINA LA LOMA - PRIBBENOW.	9.638,778273
27	VALE COAL COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA	PROYECTO CARBONÍFERO CERRO LARGO SUR.	1.092,629846

ÁREAS PROYECTOS ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA EN EL TERRITORIO ANCESTRAL			
N°	**Operador**	**Proyecto**	**Extensión (Ha)**
1	COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARBONÍFERA EL HATILLO.	999,904301
2	DRUMMOND LTD	EXPLOTACIÓN CARBONÍFERA LA LOMA - MINA LA LOMA - PRIBBENOW.	6.560,029697
3	C.I. PRODECO S. A	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARBONÍFERA EL HATILLO.	6.677,033855
4	COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.	EXPLORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE CARBONÍFERA A CIELO ABIERTO DENOMINADO PROYECTO CARBONÍFERO CALENTURITAS QUE SE REALIZA	35,000138

		EN UN ÁREA DE 6.677 HA., EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	
5	VALE COAL COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA	EXPLOTACIÓN CARBONÍFERA LA LOMA - MINA LA LOMA - PRIBBENOW.	9.638,778273
6	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NORCARBÓN S.A.S. - C.I. NORCARBÓN S.A.S.	PMA PARA MEDIANA MINERÍA DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE CARBÓN. 096-94.	488,060816
7	DRUMMOND LTDA.	EXPLOTACIÓN CARBONÍFERA DESCANSO NORTE	31.559,57098
8	CARBONES DE LA JAGUA S. A	EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBON DEL FLANCO OCCIDENTAL DEL SINCLINAL DE LA JAGUA DE IBIRICÓ MINA CARBONES DE LA JAGUA S.A., EN EL DEPTO DEL CESAR. REHABILITACION DE LA VIA JAGUA DE IBIRICO - BOQUERON	540,222237
9	CARBONES DE LA JAGUA S. A	EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBON DEL FLANCO OCCIDENTAL DEL	424,912647

		SINCLINAL DE LA JAGUA DE IBIRICÓ MINA CARBONES DE LA JAGUA S.A., EN EL DEPTO DEL CESAR. REHABILITACION DE LA VIA JAGUA DE IBIRICO - BOQUERON	
10	DRUMMOND LTD	MODIFICACIÓN PMA MINA CERRO LARGO (SORORIA) CJA 275-91	213,275561
11	VALE COAL COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA	PROYECTO CARBONÍFERO CERRO LARGO SUR.	1.092,629846
12	CARBONES DE LA JAGUA S. A	EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBON DEL FLANCO OCCIDENTAL DEL SINCLINAL DE LA JAGUA DE IBIRICÓ MINA CARBONES DE LA JAGUA S.A., EN EL DEPTO DEL CESAR. REHABILITACION DE LA VIA JAGUA DE IBIRICO - BOQUERON	1.869,684602
13	CARBONES DE LA JAGUA S. A	EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBON DEL FLANCO OCCIDENTAL DEL	25,930704

		SINCLINAL DE LA JAGUA DE IBIRICÓ MINA CARBONES DE LA JAGUA S.A., EN EL DEPTO DEL CESAR. REHABILITACION DE LA VIA JAGUA DE IBIRICO - BOQUERON	
14	DRUMMOND LTDA.	EXPLOTACIÓN MINERA EN LAS ÁREAS DE LOS CONTRATOS 144/97 EL DESCANSO, 283/95 Y 284/95 RINCÓN HONDO	6.937,915993
15	DRUMMOND LTDA.	EXPLOTACIÓN MINERA EN LAS ÁREAS DE LOS CONTRATOS 144/97 EL DESCANSO, 283/95 Y 284/95 RINCÓN HONDO	9.459,354607
16	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. - EPM	CENTRAL CARBOELÉCTRICA LA LOMA	7.000,68805
17	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA LOMA 500 KV Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS, UPME-01-2014	16,901617

18	CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S.	PASO VIAL POR LOS CENTROS POBLADOS: LA FLORESTA, LAS VEGAS Y PELAYA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, QUE HACEN PARTE DEL SECTOR 2 TRAMO 7: ENTRE LA MATA – SAN ROQUE DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL.	0
19	LA LUNA MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	PROYECTO DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE CARBÓN MINA LA LUNA	0
20	SLOANE ENERGY COLOMBIA S.A. S0	CENTRAL TERMOELÉCTRICA LA LUNA	0,05
21	SLOANE ENERGY COLOMBIA S.A. S0	CENTRAL TERMOELÉCTRICA LA LUNA	3,91
22	QRC COLOMBIA LTDA	BLOQUE DE PERFORACION EXPLORATORIO "IRACA"	38.350,000117
23	DRUMMOND LTD	EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS (GAS Y PETRÓLEO) Y GAS METANO ASOCIADO A CARBON DENOMINADO LA LOMA	115.085,000042

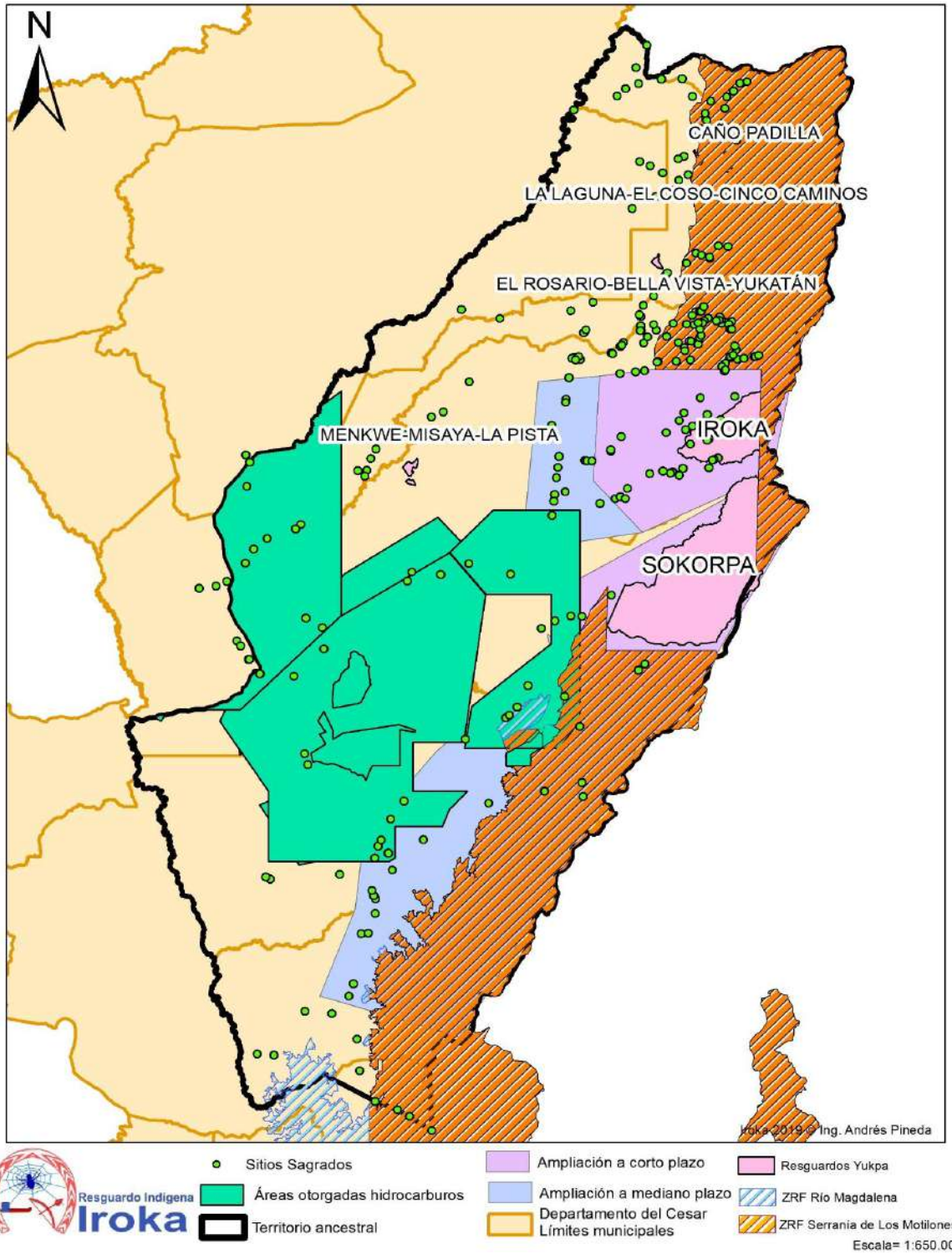
24	DRUMMOND LTD	AREA DE DESARROLLO IGUANA	2.726,653102
25	TEXICAN OIL LTD SUCURSAL COLOMBIA	LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL PARA EL PROYECTO CAMPO DE EXPLOTACION DE GAS NATURAL COMPAE	8.851,771545
26	TEXICAN OIL LTD	BLOQUE DE PERFORACION EXPLORATORIA MARACAS	92.060,549941
27	DRUMMOND LTD	PRODUCCIÓN DE GAS EN EL ÁREA DE DESARROLLO CAPORO NORTE	6.462,035762

Fuente: Catálogo de mapas SIAC, ANLA. http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas.

8. HIDROCARBUROS, INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS DE ENERGÍA Y EMPRESAS EN EL TERRITORIO ANCESTRAL EN ZRF Y SU AFECTACIÓN DIRECTA.

Como se ha referenciado anteriormente, se identifica un nuevo traslape entre las denominadas áreas otorgadas para hidrocarburos y la Serranía de Los Motilones, Zona de Reserva Forestal Ley 2da de 1959. ***(ver mapa: Áreas Otorgadas Lic. Ambientales ZRF).***

Áreas Otorgadas Lic. Ambientales ZRF



9. AFECTACIONES MINERO-ENERGÉTICAS.

9.1. El Plan de Salvaguarda ordenado por la Honorable Corte Constitucional, mediante auto 004 de 2009 y que fue elaborado con el apoyo del Ministerio del Interior, describe y alerta las siguientes afectaciones:

> *"Otra gran afectación que preocupa al pueblo Yukpa, consiste en que los espacios que se requieren para ampliación del resguardo, en la actualidad están siendo solicitados y explotados por multinacionales para la extracción del carbón. Esto preocupa mucho a la población, ya que si antes fueron los grupos armados los que los abatieron, hoy lo están haciendo las multinacionales quienes han encontrado la manera de enriquecerse en estos territorios ancestrales, en los espacios donde la comunidad Yukpa realiza pagamentos, actividades de caza, pesca y crecimiento como pueblo. "Hoy se encuentran multinacionales mineras como Drummond, que están explotando el carbón que inunda nuestros sitios sagrados y nuestros ríos, tales como el río Maracas, el río Tucuy, el Sororia y los caños que se desprenden de ellos. Esto nos ocasiona un inmenso daño, sobre todo porque afecta el equilibrio espiritual del pueblo Yukpa, así como la armonía del territorio propio, dañando la sangre de nuestra madre que son las aguas de nuestros RÍO s, donde sube todo el pescado que consumimos. Allí también están nuestros cementerios sagrados, donde están profanando nuestros entierros de donde no se pueden mover a las personas porque se vienen enfermedades, inundaciones, terremotos, huracanes, etc. Lo que hoy llaman fenómenos (naturales) se presenta por este desequilibrio armónico; el agua de nuestros ríos es la sangre de nuestra madre, las piedras negras (el carbón) tienen su significado y hacen parte integral de nuestra naturaleza, que es nuestra madre, al destruirla nos están dejando huérfanos, nos están destruyendo, nos están exterminando. Los paramilitares apoyaron a estas multinacionales, nadie podía denunciar. Aún hoy, permanecen nuevos grupos que colocan en riesgo a nuestros líderes por los intereses que tienen estas multinacionales sobre la riqueza de nuestra tierra"* [47]

En la parte baja de la zona de los municipios de Agustín Codazzi y Becerril, hoy se encuentran cultivos que han logrado inundar las zonas bajas con sus vastas extensiones como es el cultivo de la palma africana y la yuca amarga, la cual ha hecho crecer a estos municipios, a costa de que el Yukpa sea más pobre y a que la tierra se deteriore, ya que como es sabido, estos cultivos generan infertilidad en los territorios, desplazando los cultivos nativos. Las grandes extensiones se encuentran ubicadas en las zonas que se están solicitando en ampliación de los resguardos, ya que son las zonas bajas y productivas donde el Yukpa cazaba y tenía a su disposición las plantas tradicionales para sus medicinas.

[47] Plan de Salvaguarda Yukpa, pag. 23-35. Ministerio de Interior- 30 de Junio 2014.

9.2. El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, lo había advertido en el año 2009. (Se adjunta como prueba el Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Yukpa municipios con presencia del pueblo Yukpa del año 2009).

En el año 2009, el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, elaboró el Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Yukpa municipios con presencia del pueblo yukpa.

> *"Las características nómadas de la etnia Yukpa en muchos casos hacen que algunos asentamientos pequeños desaparezcan, debido a la movilidad de las familias que la componen, buscando mejores recursos en otro territorio; lo anterior hace posible que surjan y desaparezcan asentamientos a través del tiempo, en su mayoría dentro de los mismos resguardos. Según información proveniente del Departamento Nacional de Planeación, existen asentamientos Yukpa en San José de Oriente, municipio de San Diego y en el municipio El Copey; estos asentamientos no estaban constituidos como resguardos, pero hacían parte de su territorio ancestral7. Allí, se ubican alrededor de 4 familias con un número de integrantes no mayor a 11 personas8. En cuanto a la información reciente que posee el Observatorio, no aparecen reportadas estas comunidades, desconociendo la situación actual de estos asentamientos, razón por la cual no fueron consideradas en el presente informe."*[48]
>
> ***Situación nutricional***
>
> *"El 7 de diciembre de 2007, el Relator Especial sobre el derecho a la salud junto con el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación adecuada y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, enviaron una carta al Gobierno de Colombia en seguimiento a previas comunicaciones enviadas por Naciones Unidas con referencia a la situación nutricional de la comunidad indígena Yukpa. En el comunicado se informaba de algunos problemas nutricionales dentro de la comunidad, específicamente en el resguardo de Iroka en el municipio de Codazzi, que pudieron haber causado la muerte de al menos 20 menores de la etnia en 2006. Del mismo modo, se presentaban problemas respiratorios, resultado de los sistemas de producción de la comunidad como la quema de porciones de bosque, sumado a la fuerte temporada de verano que causó incendios que destruyeron unas 4.000 hectáreas de tierra fértil y perjudicó a las fuentes de agua en la zona."*[49]

[48] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Yukpa municipios con presencia del pueblo Yukpa, página 3

[49] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Yukpa municipios con presencia del pueblo Yukpa, página 17

"Aunque la queja de algunos líderes de la comunidad Yukpa persiste, "Antes sólo nos mencionaban por la muerte de niños y ancianos por física desnutrición, producto de la falta de tierra productiva, bloqueo por los actores armados y colonos que nos han expropiado y confinado en tierras que no nos permiten cumplir con nuestros usos y costumbres alimenticios, debido a que milenariamente hemos pervivido de lo que la madre tierra nos aporta"; "después por los incendios forestales, lo que agudizó nuestra crítica situación de desnutrición, a lo cual el Gobierno responde con asistencialismo y no con política pública integral de atención, que nos garantice la pervivencia en nuestro territorio ancestral" [50]

Situación Humanitaria y su incidencia en del proyecto minero.

"En abril de 2008 se reunieron la Defensoría del Pueblo, Movimiento por la Paz (MPDL), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), Organización de Estados Americanos (OEA), Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que conformaron la mesa de Atención Humanitaria, aunque el tema principal fue la incidencia del proyecto minero en la región y de los grupos armados ilegales, se discutió la necesidad de conocer más a fondo la situación para formular acciones coherentes en los planes de desarrollo del departamento."[51]

Conflictos por las tierras

"La Décima Brigada Blindada informa que existen varios conflictos por el desplazamiento de comunidades Yukpa hacia tierras tituladas por colonos, la queja de la comunidad Yukpa a las instituciones es que la mayoría del territorio de los resguardos es inapropiada para el cultivo y otra porción está invadida por colonos que incluso afectan sus territorios ancestrales. Los colonos basan su economía en el cultivo del café, según la Gobernación la producción se ubica en el millón y medio de kilos por cosecha. El 22 de julio de 2009, se tiene programada una reunión en el resguardo Iroka con todos los señores Cabildos Gobernadores y autoridades municipales de Codazzi - Cesar, con la finalidad de solucionar estas situaciones especiales que se han presentado en el resguardo Iroka y Menkue, con unos colonos de la región."[52]

[50] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Yukpa municipios con presencia del pueblo Yukpa, pagina 18 y 19.

[51] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Yukpa municipios con presencia del pueblo Yukpa, pagina 18 y 19.

[52] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Yukpa municipios con presencia del pueblo Yukpa, página 20

"Con relación a la garantía de los derechos territoriales, dentro del marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), se habrá priorizado el saneamiento de los resguardos Iroka y Socorra. Se informa que las acciones de adquisición y adjudicación de los predios en la jurisdicción de los municipios de Codazzi, Becerril y la Paz, se adelantarían, reconociendo la disponibilidad logística y presupuestal. La Gobernación en su Plan de Desarrollo propone adquirir y/o cofinanciar 1.500 hectáreas en áreas protegidas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993."[53]

Conflictos territoriales y proyectos de minería e Hidrocarburos.

"En relación a la falta de seguridad jurídica en los resguardos Yukpa, las Naciones Unidas también se refirieron al tema en 2008 por medio del Relator Especial para Asuntos Indígenas, quien en su comunicado al Gobierno Nacional plantea la realización del Plan Integral para el Apoyo a las Comunidades Indígenas en Extremo Grado de Vulnerabilidad y Riesgo de Desaparición, que requiere la compra inmediata de las tierras en manos de los colonos en las áreas de los resguardos, para poder avanzar con el saneamiento territorial, tanto como para limitar la tala de árboles, quemas, y la extracción de plantas por parte de los colonos. Según los alegatos, "el Estado no ha destinado recursos para el tema territorial, y, en consecuencia, ningún compromiso se ha cumplido hasta la fecha. También, se alega que la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, creada por el Decreto 1397 en 1996, donde el saneamiento de los resguardos Iroka fue priorizado según el Gobierno, fue desactivada el 31 de mayo de 2007. A consecuencia de su descontinuación, además de la falta de presentación de propuestas de presupuesto por parte del Estado, ya no está previsto el saneamiento del resguardo Iroka ni su ampliación, según los 19 compromisos del Gobierno. Además, se alega el descubrimiento de petróleo tras pruebas sísmicas, así como otros recursos naturales en sus territorios. La justificación es que la falta de seguridad jurídica en la tenencia de sus tierras tradicionales empeoraría la situación alimentaria que los Yukpa". [54]

"Otro factor que perjudica los territorios de las comunidades Yukpa es que la Resolución 414 del 11 de marzo de 2008 autorizó la explotación minera de la mina de carbón "Descanso Norte" por parte de la multinacional Drummond, que será la más grande del mundo a cielo abierto. La mesa sectorial de Atención Humanitaria del Cesar se muestra preocupada debido a que el desarrollo de la mina en El Paso – Cesar, afectaría por lo menos a dos resguardos de la comunidad en temas como salud y seguridad alimentaria. El nacimiento de veinte ríos principales y un sin número de quebradas y arroyos que bañan los valles de los ríos Cesar, Magdalena y Lebrija y alimentan el complejo de ciénagas y el río Magdalena, donde se

[53] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Yukpa municipios con presencia del pueblo Yukpa, pagina 18 y 19.

[54] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Yukpa municipios con presencia del pueblo Yukpa, pagina 20 -21

desarrollan diferentes actividades económicas del departamento del Cesar, le dan un carácter estratégico para el desarrollo económico del departamento, al igual que la Ciénaga de Zapatosa, la Serranía de Perijá está sometida a fuertes presiones y demanda de sus recursos en la zona de explotación minera entre las fronteras de los municipios de Becerril, La Jagua, Chiriguaná y Curumaní por los impactos que allí ocasiona la minería. La perspectiva de nuevas explotaciones amenaza con intervenir zonas de protección y nacimientos de agua, destruir bosques de galería, afectar acuíferos y desviar cauces superficiales. Aunque la Gobernación en su plan de desarrollo apunta al avance de la mina como primordial en asuntos como generación de empleo y mejoramiento estructural como vías y prestación de servicios, la mesa de atención humanitaria recomienda incluir dentro del plan compromisos con los Yukpa alrededor del tema de la explotación carbonífera".[55]

9.3. El pasado cuatro (04) de abril de 2019, la prestigiosa Revista Semana, promulgó un duro y desgarrador informe de la situación del pueblo Yukpa en la Serranía del Perijá, para ello se internaron durante una semana y pudieron evidenciar nuestra catástrofe. Debido a la gravedad de lo relatado por este medio periodístico se trascribe literalmente (Se adjunta como prueba investigación periodística Semana Sostenible, Un Pueblo Invisible para los colombianos, abril 4 de 2019).

*" **Un pueblo invisible para los colombianos***[56]

Ubicados en la serranía del Perijá, los indígenas Yukpa parecen condenados al abandono, al exilio y al olvido. Víctimas de la colonización, la explotación minera, él y el conflicto armado, luchan por recuperar su territorio ancestral.

En la mirada inocente de los niños y niñas yukpa todavía hay esperanza. Ellos juegan, ríen y saltan pese a las dificultades de su pueblo. Sin embargo, los ojos de los adultos reflejan algo distinto: impotencia, rabia y dolor por las condiciones en que viven, por la falta de tierras, por el hambre que padecen, por la deforestación y el desvío de ríos. Pero sobre todo por la indiferencia del Estado.

El pasado y el presente de los indígenas yukpa tienen tintes lúgubres. Los niños y niñas presentan altos índices de desnutrición y baja escolaridad; pocos adultos superan los 65 años. Según el Censo de 2005, en el país viven 4.761 yukpa, repartidos en seis resguardos ubicados en los municipios de La Paz, Agustín Codazzi y Becerril en el departamento del Cesar, Caribe colombiano, que suman 34.064 hectáreas.

[55] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Yukpa municipios con presencia del pueblo Yukpa, pagina 21.

[56] https://sostenibilidad.semana.com/consumo-responsable/articulo/el-numero-de-adultos-obesos-en-el-mundo-superaria-el-de-personas-con-hambre/44038

En estos territorios se encuentran varias zonas de reservas con ecosistemas frágiles y la mayoría de la población yukpa vive hacinada en la parte alta de la serranía del Perijá, donde la tierra es más árida. Los ríos en los que pescaban sus ancestros están contaminados, algunos casi secos, y los peces escasean por la falta de oxígeno. Además, los predios de los palmicultores han desviado los pocos afluentes que sobreviven. El futuro para ellos es desolador.

Semana Sostenible y Mongabay Latam visitaron los resguardos Iroka (que tiene 8.678 hectáreas de tierra y más de 3.000 habitantes) y Sokorpa (de 25.000 hectáreas y 1.362 personas), para conocer de primera mano los problemas que atraviesan los yukpas. Ese pueblo transfronterizo con Venezuela que sufre los rigores de muchas comunidades en zonas limítrofes olvidadas por los gobiernos local, regional y nacional.

Arremetida feroz

El pueblo yukpa es semi nómada, recolector, cazador, pescador y agricultor, y vive de lo que la naturaleza le provee. Antes de la llegada de los españoles, su territorio ancestral se extendía desde la franja occidental del río Cesar, en Colombia, hasta la parte oriental del lago Maracaibo, en Venezuela. Pero poco a poco perdieron sus tierras por el avance de la colonización del hombre blanco.

Luego de superar la tragedia de la conquista española, los yukpas vivieron un periodo de calma hasta finales de la década de los cuarenta. En medio de la violencia bipartidista colombiana, la colonización de su territorio ancestral renació, esta vez por personas que huían del conflicto político de esos años o por las políticas de ampliación de la frontera agraria llevadas a cabo por el Estado.

En ese contexto aumentó el despojo de tierras al yukpa: "La migración no tuvo en cuenta nuestra cultura y ocupación de territorios, muchos de estos eran manejados por la Iglesia católica, que los cedió a privados; otros fueron concebidos por el Estado como baldíos y titulados a otras personas. Nuestros ancestros fueron engañados: les cambiaban tierras por grabadoras o burros. Ellos no tenían la concepción de propiedad del mundo occidental y así fuimos perdiendo la parte plana, el valle", cuenta Javier Clavijo, coordinador territorial del resguardo Iroka.

A finales de la década de los sesenta llegó la bonanza algodonera y el municipio de Agustín Codazzi se convirtió en la ciudad blanca de Colombia. Pero ese auge afectó profundamente al yukpa. La ampliación de las tierras dedicadas al algodón los hizo migrar a partes más altas de la serranía. "Desde ese momento y en adelante ya no podíamos cazar o pescar en predios que otros consideraban privados, en muchos

lugares nos sacaban a bala y el Estado nunca hizo nada por proteger nuestra cultura o forma de vida", dijo Luis Uribe, del resguardo de Sokorpa.

La situación se complicó con la bonanza marimbera de los años setenta, la cual causó una nueva migración de personas que vieron en los cultivos de marihuana una forma rápida de obtener riquezas. Esta vez la migración llegó acompañada de un alto grado de violencia, nunca visto en la región, ocasionado por el control de rutas de la planta. En la serranía del Perijá aparecieron los cultivos de amapola y coca, que desplazaron aún más al yukpa. Décadas después el gobierno, en su lucha contra las drogas, optó por la aspersión del glifosato y los yukpas terminaron bañados por este herbicida.

Año tras año, el número de actores armados creció, al igual que el de los muertos. A finales de los años ochenta, el frente 41 de las Farc ocupó gran parte de la serranía del Perijá, así como el ELN con el frente Camilo Torres. A finales de los años noventa llegaron los paramilitares al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandante del bloque Norte. En esa guerra fratricida por el control del territorio los yukpas sufrieron el desplazamiento, el asesinato y la desaparición de varios de sus miembros.

La comunidad de la Frontera, una de las siete zonas del resguardo Iroka, cerca de donde ahora está el Batallón de Alta Montaña de la Serranía del Perijá, vivió de forma cruenta este conflicto en el que también participaron las Fuerzas Militares. "Mis hermanos Nelson y Jaime, quien solo tenía 12 años, fueron a pescar en 2004 y nunca volvieron. El ejército pensó que eran guerrillero a pesar de que solo llevaban sus flechas, y los mató. A Nelson lo llevaron al valle en helicóptero y Jaime, el menor, nunca apareció. Caminamos dos días entre las montañas buscándolos, fuimos a Venezuela, hasta que nos dijeron que estaban muertos", contó Ricardo Martínez, de 36 años.

La desmovilización de los paramilitares y el proceso de paz con las Farc no han mejorado la situación. El frente Camilo Torres del ELN, que domina el Catatumbo, el Perijá y la zona de frontera con Venezuela, amenaza con tomar posesión de estas tierras. Líderes indígenas como Javier Clavijo; el cabildo gobernador del resguardo Iroka, Alfredo Peña; y el cabildo gobernador del resguardo Sokorpa, Esneda Saavedra, han sido amenazados.

Bañados en desgracia

Los problemas de salud en el pueblo yukpa forman parte de su diario vivir. Sufren con frecuencia afecciones gastrointestinales, cutáneas, respiratorias, abortos espontáneos, malformaciones y desnutrición. En la comunidad de la Frontera sorprende la cantidad de niños y jóvenes con labio leporino o paladar hendido. Para ellos, estas desgracias

se deben a las fumigaciones con glifosato hechas años atrás: "Cada 15 días nos bañaban con ese químico que dañaba nuestra tierra para cultivar y nuestra salud. Hay una gran cantidad de niños con labio leporino y paladar hendido como consecuencia de las fumigaciones", dijo José Manuel García, del resguardo Iroka.

No hay trabajos determinantes que concluyan que el glifosato causa este tipo de malformaciones. Sin embargo, el estudio 'Factores ambientales asociados con labio o paladar hendido no sindrómico en una población del Magdalena Medio colombiano', realizado por investigadores de la Universidad Santo Tomás y publicado en la Revista UstaSalud en 2014, afirma que hay "datos que apuntan contundentemente a una asociación clara entre la exposición al glifosato y la creciente aparición de malformaciones al nacer".

El aislamiento al que han confinado al yukpa ha afectado su calidad vida. Replegados en lo alto de las montañas y sin acceso a tierras y agua, sobreviven con la escasa siembra de frijol, maíz cariaco (semilla propia de los indígenas), yuca y malanga. Los casos de desnutrición en ambos resguardos están disparados, así como las muertes de niños y mujeres embarazadas. Según información de autoridades indígenas de Sokorpa, en lo corrido de este año han muerto por desnutrición cinco niños y tuvieron que llevar otros nueve a Valledupar para salvarlos.

Es probable que haya un subregistro de niños muertos por desnutrición y de muchas otras enfermedades, sobre todo en los resguardos de Iroka y Sokorpa. En el primero, el 60 % no posee registro civil, por lo cual los decesos pasan desapercibidos y los entierran en la misma serranía.

Este aislamiento también les ha traído problemas para trasladar a sus enfermos a los centros urbanos. A la comunidad de Santa Rita, desde el resguardo Sokorpa, solo se puede llegar a pie o a lomo de mula entre peñascos, piedras y barro, en un trayecto de una hora y media, solo de ida. Llevan a las embarazadas o los enfermos en hamacas. En otras comunidades los trayectos pueden superar las 7 horas, pues se encuentran a más de 2.600 metros de altura.

Promesas en el aire

Los yukpas han tenido en el papel pequeñas victorias en su lucha por recuperar el territorio, y buscan materializarlas. Empezando por la misma Constitución de 1991, que reconoce el carácter diverso y multicultural del país, o por el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, que determinó proteger a 36 pueblos indígenas (entre esos los Yukpa). Este alto tribunal consideró que, ante los asesinatos sistemáticos y el desplazamiento sufrido por el conflicto interno, del cual eran ajenos, estaban en un

proceso de exterminio físico y cultural. La Corte ordenó crear planes especiales de salvaguardia y desarrollar una política pública para atender estos pueblos. Pero hasta el día de hoy el Ministerio del Interior no la ha protocolizado y afirma haber adelantado una serie de reuniones técnicas con las comunidades.

Por otra parte, la sentencia T-713 de 2017, también de la Corte Constitucional, entre otros apartes ordenó a la Agencia Nacional de Tierras "resolver las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación del territorio ancestral Yukpa". Esa actuación debería culminar en el término máximo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia. En febrero se cumplió el plazo fijado por la Corte.

Frente a esto, la Agencia Nacional de Tierras afirmó que actualmente adelantan las actuaciones administrativas para ampliar los territorios de los seis resguardos yukpa. Han realizado las visitas técnicas correspondientes y han incluido un programa de compra de predios liderado por la Dirección de Asuntos Étnicos, procesos que continuarán durante este año.

Para Esneda Saavedra, gobernadora del resguardo de Sokorpa, estos avances solo han quedado en el papel. "Nosotros como pueblo yukpa sí le hemos apostado a la paz, pero a nosotros nunca nos tuvieron en cuenta. Pusieron una zona veredal en nuestro territorio ancestral sin un proceso de consulta previa. Además, al gobierno se le venció el plazo para ampliar y delimitar nuestro territorio y no ha comprado los terrenos". A este reclamo se suma la advertencia del cabildo gobernador del resguardo Iroka, Alfredo Peña: "Estamos cansados de los incumplimientos del gobierno, va a tocar buscar otra estrategia para ver si nos ponen atención. Si nos toca protestar, vamos a protestar; si nos toca poner los muertos, vamos a poner los muertos. Lo que vivimos es una realidad y tenemos una necesidad de territorio".

La frontera abandonada

Más allá de acoger a los Yukpa, la serranía del Perijá es también una frontera natural con el estado Zulia, en Venezuela, en sus más de 295 kilómetros que recorren parte de los departamentos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira.

En las entrañas de la serranía varias trochas conectan a Colombia con el país vecino. Por esos caminos no solo circulan los pueblos indígenas binacionales, sino también el tráfico de gasolina, personas, ganado y hasta armas. Por estos senderos llegan yukpas venezolanos en situación de miseria, que buscan atención en el país. Pero los resguardos colombianos no aceptan a muchos y terminan en las calles de Codazzi, Becerril y Valledupar, o regresados en buses a su país.

"No tenemos tierra o comida para nosotros, cómo vamos a hacer para atender a los yukpas venezolanos. Además, a muchos jóvenes de allá les dañaron la cabeza: no piensan como yukpa, quieren vivir durmiendo y que les den todo. Otros trabajan con el ELN escoltando ganado; por estos caminos entró la aftosa, una enfermedad que contagió a miles de cabezas de ganado, dejándolos sin posibilidad de usar su carne o leche. La situación que se vive acá es igual o peor que la de Venezuela y nadie nos atiende", concluyó Clavijo.

La serranía agoniza

Bosques húmedos, secos y páramos adornan la serranía del Perijá, aunque cada vez menos. En las partes altas aparecen con frecuencia los parches negros y las columnas de humo producto de la quema indiscriminada de los bosques. La montaña ya no huele a cedro o caracolí, sino a ceniza.

Para este trabajo no hay descanso: hasta los domingos campesinos con bidones de gasolina queman sin control miles de hectáreas de bosques ante la indolente mirada de las autoridades ambientales. A esto se le suma que la construcción de carreteras o trochas en la parte alta de la serranía ha afectado los nacederos de los ríos que alimentan a Agustín Codazzi, Becerril y otras poblaciones.

"Nosotros somos la autoridad encargada de poner sanciones ambientales desafortunadamente lo más difícil es probar un incendio, todo el mundo acusa, pero nadie denuncia o sirve de testigo. Por otra parte, nadie en el país puede desviar un río y nosotros ya iniciamos procesos sancionatorios por mayor captación de agua contra los palmicultores que realizan estas actividades", informó Julio Suárez, director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar).

Ríos como el Sicarare o el Casacará terminan desviados hacia plantaciones de palma de aceite. La poca agua que sigue su caudal normal baja contaminada de agroquímicos o succionada con motobombas hacia fincas. Orlando Rangel, biólogo y profesor titular del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, explica las consecuencias de estas acciones: "Los desvíos a los cultivos de palma alteran el ciclo del agua, eso trae consecuencias para los ecosistemas y para la atmósfera; el agua que debe subir se está consumiendo toda. En el Perijá habitan más de 260 especies, de las cuales 10 % son endémicas y están en grave riesgo". Por esta situación los yukpas no tienen acceso a agua y a la pesca.

Multinacionales carboníferas también han desviado afluentes como el Maracas o el Sororia, o los han usado como canteras de extracción de material. En el Cesar extraen 60% de la producción nacional de carbón, principalmente en los municipios de La

Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril y Agustín Codazzi, en territorios ancestrales yukpa. Aunque en 2016 las exportaciones del departamento alcanzaron los 90 millones de toneladas y generaron miles de millones en regalías, los indígenas yukpas dicen no hacer recibido un solo peso. Por el contrario, aseguran verse afectados por la situación crítica en la que se encuentran los ríos.

"Es incomprensible la alteración que realizan a la naturaleza. En su afán de riqueza, no piensan en lo que les van a dejar a sus hijos o nietos; van a vivir en una tierra acabada. En 2016 pescamos por última vez en el Maracas, y desde entonces los peces no volvieron a subir, en parte por la afectación minera", concluyó Luis Ortiz, líder indígena de la comunidad de Santa Rita, en el resguardo de Sokorpa.

En 2019, el país celebra 200 años de independencia, pero los Yukpas parecen vivir un año más de colonización y atropellos. Mientras esperan que el Estado cumpla sus promesas, los niños y niñas indígenas, a pesar de su situación, siguen con una mirada llena de esperanza."

10. LA NUEVA AMENAZA, PROYECTOS FRACKING, TERRITORIO ANCESTRAL YUKPA

El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, amenazan nuestro territorio ancestral con proyectos FRANCKING, con quince (15) pozos de exploración y explotación de gas asociados a los mantos de Carbón, con el proyecto de la multinacional estadounidense Drummond denominado Caporo Norte y que se encuentran en nuestro territorio ancestral, bajo el nombre de Rancharía Cesar, donde se encuentran los doce (12) pozos de exploración, se adjudicaron, se permitió la fase de exploración y explotación sin ningún tipo de consulta previa, violentando gravemente nuestros derechos fundamentales, consagrados en del artículo 6 del convenio 169 de la OIT, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad fisca, cultural y territorial de nuestro pueblo indígena Yukpa. Para ello presentamos los siguientes impactos territoriales.

La gravedad de lo aquí anunciado fue publicada por el diario el Tiempo, el pasado 29 de marzo de 2020, donde menciona que el peritaje de 460 páginas elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, a solicitud del propio Consejo de Estado, la afectación grave y directa de nuestro pueblo indígena Yukpa.

"*Los expertos también compararon los 12 bloques de yacimientos no convencionales (YNC) asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos a julio del 2019 y encontraron que en algunos puntos se traslapan con ecosistemas estratégicos como el bosque seco tropical, bosque húmedo y 32.632 hectáreas de humedales.*

Igualmente se ***cruzan con 7 resguardos indígenas wayuu en La Guajira, dos resguardos yukpa, un consejo comunitario y una zona de reserva campesina.***

Además, dijeron que por la cantidad de agua que usa la técnica –que consiste en inyectar el líquido con químicos en la tierra para fracturar rocas que guardan hidrocarburos– puede generar una competencia por la misma con las comunidades, y que hay riesgo de que el agua contaminada que vuelve a la superficie llegue a otras fuentes.

Pero este peritaje de 460 páginas –al que accedió EL TIEMPO– es una de las pruebas claves, pues abarca las discusiones en lo regional, local y global desde lo económico, social, ambiental, ***de salud, cómo impacta la técnica la lucha contra el cambio climático, entre otros."***[57]

11. CONCLUSIONES:

11.1. Es evidente como el Estado Colombiano ha desconocido la presencia del pueblo Yukpa en la Serranía del Perijá y el departamento del Cesar, dado que ha cedido y permitido que se desarrollen actividades mineras en su territorio ancestral desde 1994 hasta la fecha y de esta manera produciendo un despojo técnico de nuestras tierras.

11.2. En la actualidad, los sitios de importancia ancestral y espiritual del pueblo Yukpa están siendo objeto de violación e irrespeto por actividades mineras, no obstante, con expectativas de ampliar el espectro de prospección y explotación en el departamento del Cesar a manos de empresas mineras.

11.3. Los títulos mineros en solicitud son 314 para un total de (261.809 Ha) y concedidos 126 polígonos (149.529 Ha) a lo largo del territorio ancestral del pueblo Yukpa. Estos títulos se traslapan con las expectativas de ampliación de los seis (06) resguardos Yukpa y con sitios sagrados.

11.4. Existen títulos mineros en solicitud y concedidos en la Serranía de los Motilones, declarada como zona de reserva forestal en la ley 2da de 1959.

11.5. En el polígono del territorio ancestral del pueblo Yukpa, hay presencia de multinacionales las cuales tienen intereses sobre el desarrollo de proyectos energéticos, mineros, hidrocarburos y de infraestructura, los cuales también se traslapan con sitios de importancia ancestral y espiritual.

11.6. Existe un traslape entre las superficies otorgadas a través de licencias ambientales por la ANLA y las Zonas de Reserva Forestal del Río Magdalena y la Serranía de los Motilones (ley 2 de 1959).

[57] Diario el Tiempo,29 de marzo de 2020.

11.7. Respecto a la base catastral del IGAC y el territorio ancestral, se evidencia que los sitios de importancia ancestral y espiritual del pueblo Yukpa se encuentran en predios de colonos y campesinos, los cuales restringen el acceso y circulación sobre los mismos a las comunidades indígenas.

11.8. En el Territorio Ancestral hay presencia de 27 polígonos dispuestos para proyectos energéticos, infraestructura, hidrocarburos y viales según la ANLA. Es importante destacar que estos polígonos se encuentran en traslape con sitios de importancia ancestral y espiritual para el Pueblo Yukpa, también, se traslapan con las expectativas de ampliación a corto y mediano plazo de los resguardos Iroka y Sokorhpa. Por último, ocupan gran superficie (347.079 Ha) en la zona centro del Territorio Ancestral.

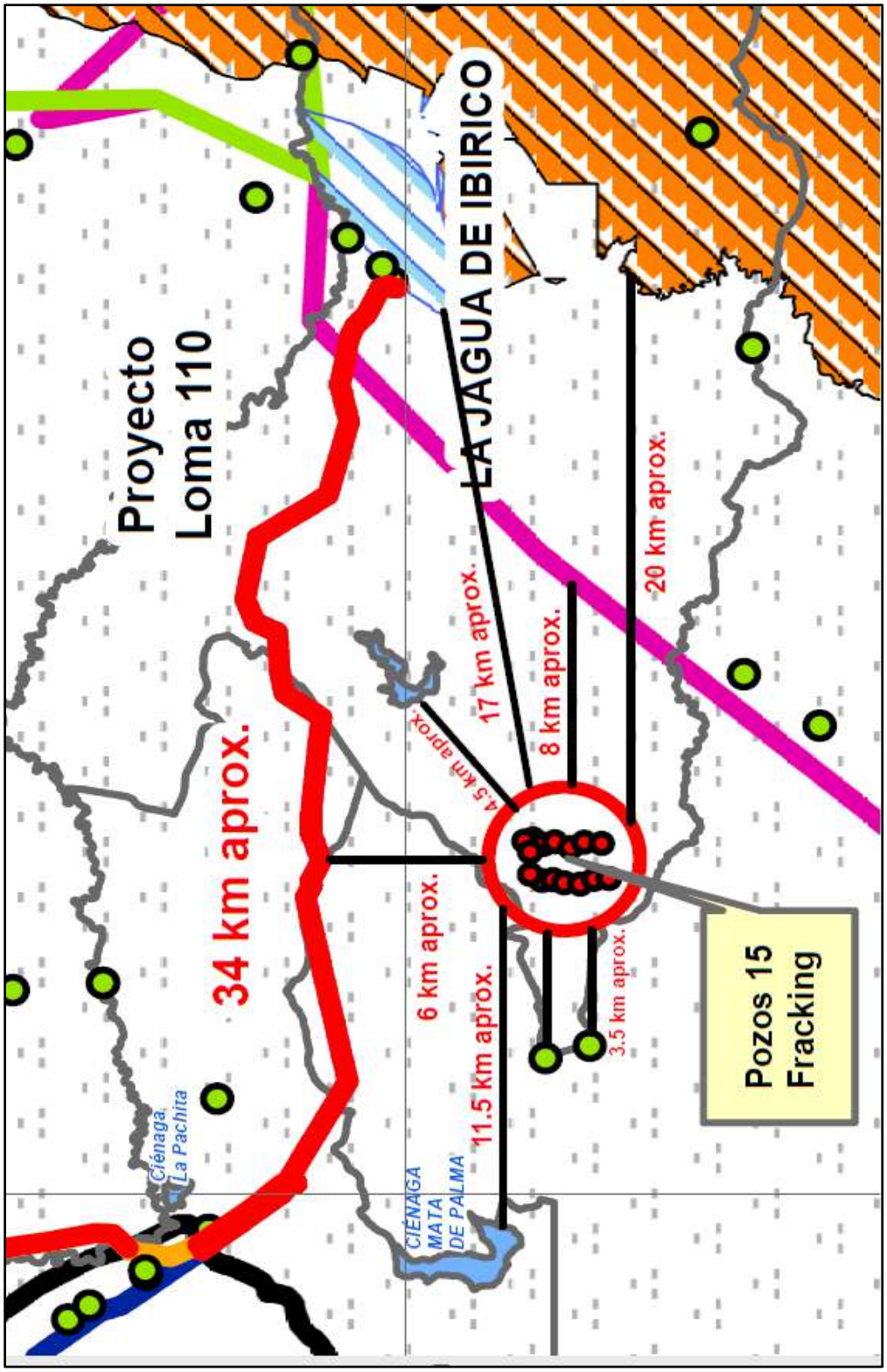
MAPA 1

Se relacionan los traslapes de los shapefile correspondientes a los Pozos del Proyecto Caporo Norte con el Territorio Ancestral Yukpa y relacionados.

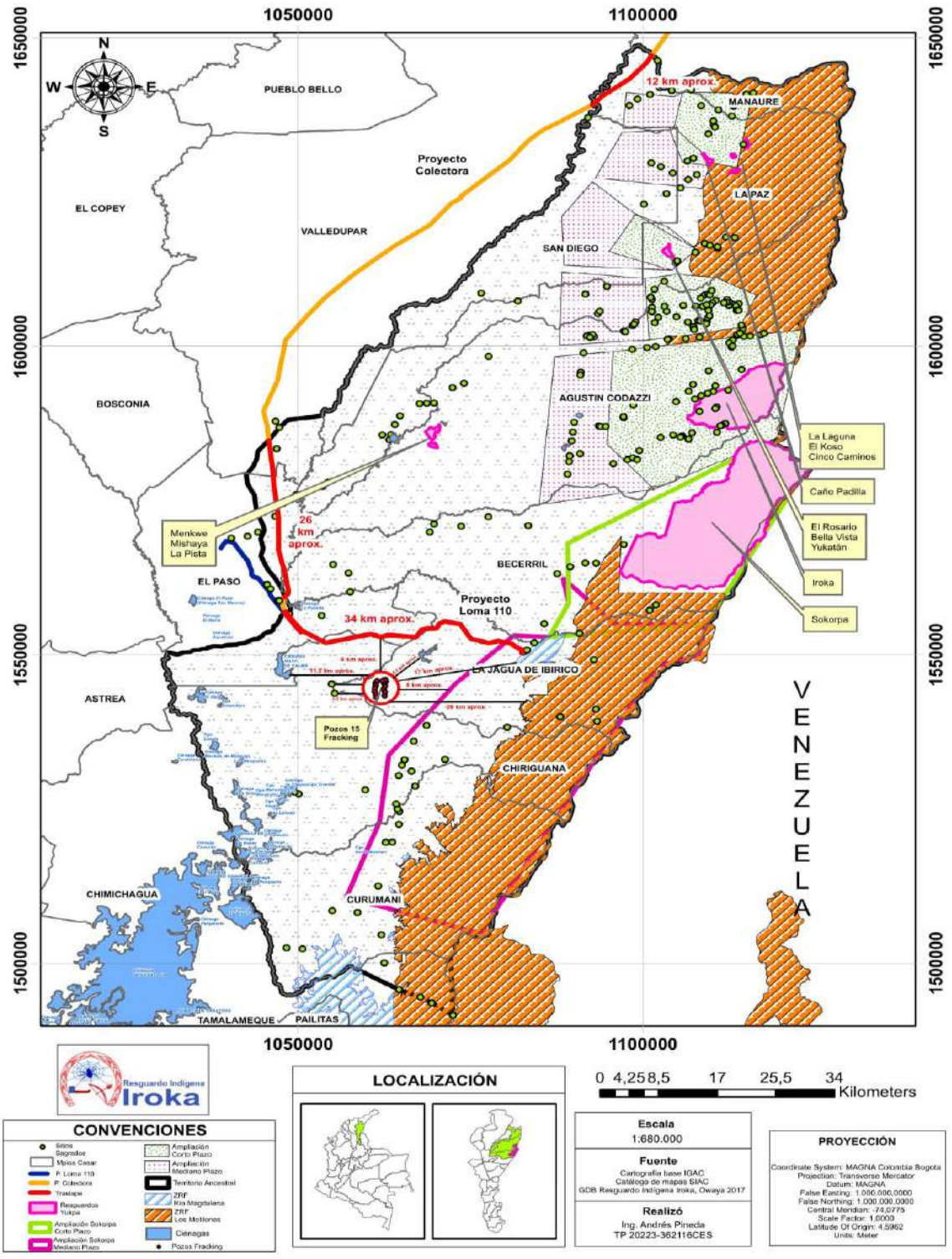
Se evidencian: Sitios sagrados, ciénagas, ZRF Serranía los Motilones, ZRF Río Magdalena, ampliaciones de resguardos Yukpa a corto y mediano plazo y proyectos colectora y loma 110 del Grupo Energía Bogotá-Con relación a lo anterior:

Se ubican quince (15) pozos en traslape con Territorio Ancestral Yukpa, localizados en la parte central del mismo, todos localizados en el municipio de La Jagua de Ibirico. De igual manera, estos quince (15) pozos se encuentran a: 11.5 km de la ciénaga mata de palma, 3.5 km de sitios de importancia ancestral y espiritual del Pueblo Yukpa, 8 km del área de expansión a mediano plazo del Resguardo Indígena Sokorhpa, a 17 km de la ZRF Río Magdalena, a 20 km de la ZRF Serranía de los Motilones y por último a 34 km de la línea del proyecto Loma 110 del Grupo de Energía Bogotá.

Por último, cabe resaltar que la localización de estos pozos se encuentra rodeada en su totalidad de sitios sagrados o de importancia espiritual, con un radio de 12 km aproximadamente.


Proyecto
Loma 110
LA JAGUA DE IBIRICO
34 km aprox.
4.5 km aprox.
17 km aprox.
8 km aprox.
20 km aprox.
6 km aprox.
11.5 km aprox.
3.5 km aprox.
Pozos 15
Fracking
Ciénaga
La Pachita
CIÉNAGA
MATA
DE PALMA

TERRITORIO ANCESTRAL YUKPA



MAPA 2

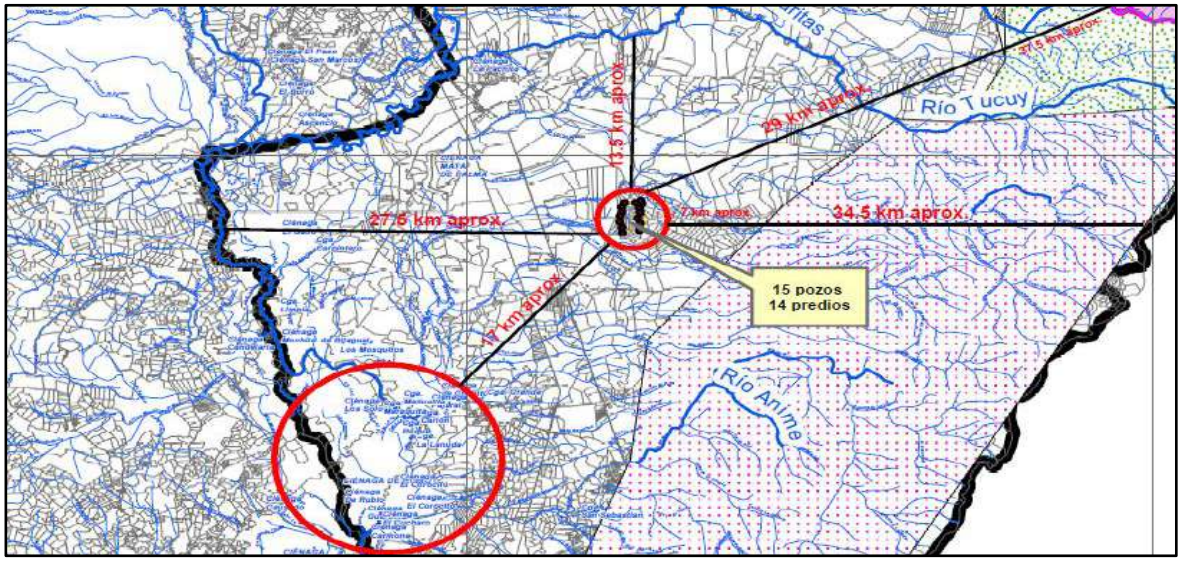
En análisis: Toda la red hídrica del Territorio Ancestral (Ríos principales, drenajes, arroyos, quebradas, nacederos) y la base catastral del IGAC.

Los quince (15) pozos fracking en traslape con el Territorio Ancestral Yukpa afectan catorce (14) predios según la base catastral del IGAC, los cuales suman en total 360.5 Ha. En promedio cada predio tiene alrededor de 27 Ha y en su mayoría su destino económico es minero, aunque sólo uno es de destino agropecuario, lo anterior basado en la información catastral suministrada por el geoportal IGAC.

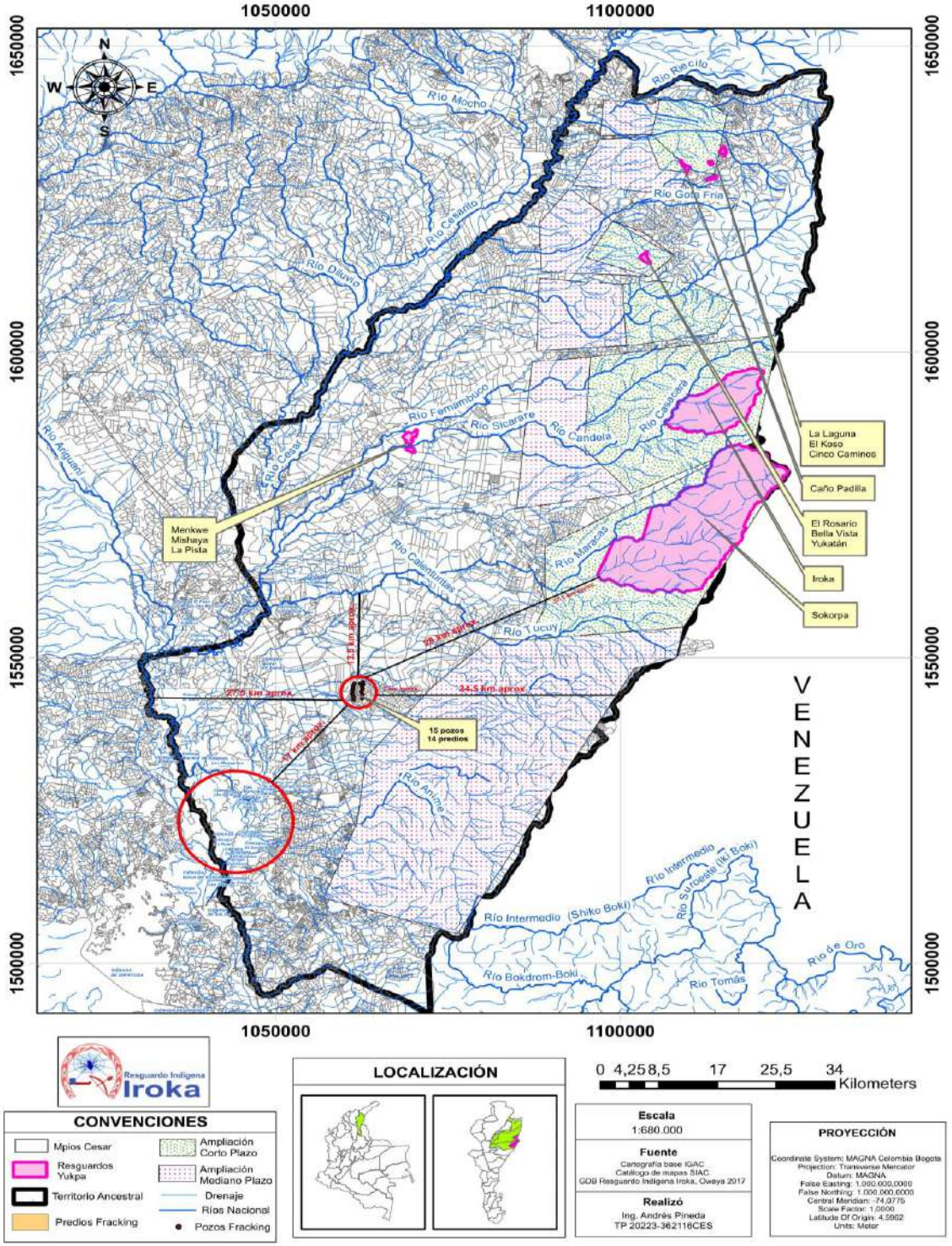
Por otra parte, los quince (15) pozos se localizan a: 27.5 km del río cesar al Este, a 17 km de un complejo de humedales o ciénagas al Suroeste, a 13.5 km al Norte del Río Calenturitas, a 29 km del Territorio Legalmente Constituido del Resguardo Indígena Sokorhpa, a 7 km del área de ampliación a mediano plazo del Resguardo Indígena Sokorhpa y por último a 34.5 km de la frontera al Oeste con Venezuela.

Información catastral de los catorce (14) predios afectados por los 15 pozos Fracking:

PREDIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD DE FRACKING							
FID	OBJECTID	CODIGO	VEREDA_COD	CODIGO_ANT	HA	DESTINO ECONÓMICO	TIPO
1	16297	20013000300000000000000000000	20013000300000000	20013000300030500000	31,788928	AGROPECUARIO	Fracking
2	34040	20400000300000000000000000000	20400000300000000	20400000300030500000	18,315842	MINERO	Fracking
3	34041	20400000300000000000000000000	20400000300000000	20400000300030500000	16,332937	MINERO	Fracking
4	34042	20400000300000000000000000000	20400000300000000	20400000300030500000	23,706401	MINERO	Fracking
5	34043	20400000300000000000000000000	20400000300000000	20400000300030500000	26,053938	MINERO	Fracking
6	34044	20400000300000000000000000000	20400000300000000	20400000300030500000	29,050165	MINERO	Fracking
7	34049	20400000300000000000000000000	20400000300000000	20400000300030500000	26,658189	MINERO	Fracking
8	34133	20400000300000000000000000000	20400000300000000	20400000300030500000	25,992295	MINERO	Fracking
9	34136	20400000300000000000000000000	20400000300000000	20400000300030500000	25,56177	MINERO	Fracking
10	34138	20400000300000000000000000000	20400000300000000	20400000300030500000	36,237168	MINERO	Fracking
11	34139	20400000300000000000000000000	20400000300000000	20400000300030500000	26,634928	MINERO	Fracking
12	34141	20400000300000000000000000000	20400000300000000	20400000300030500000	26,322904	MINERO	Fracking
13	34143	20400000300000000000000000000	20400000300000000	20400000300030500000	26,980975	MINERO	Fracking
14	34145	20400000300000000000000000000	20400000300000000	20400000300030500000	21,877505	MINERO	Fracking
				TOTAL	360,512945		



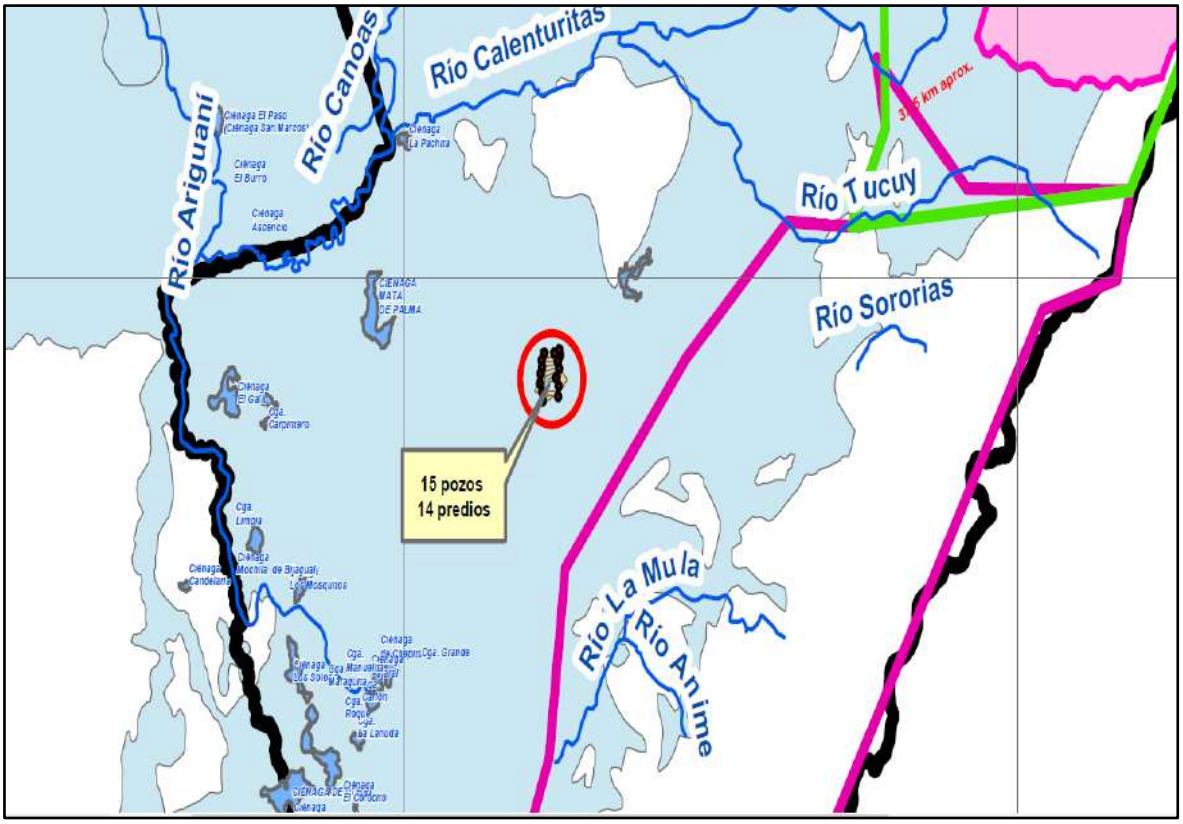
TERRITORIO ANCESTRAL YUKPA



MAPA 3

En análisis: sistemas de acuíferos de Colombia en Territorio Ancestral Yukpa, zonas de ampliación a corto y mediano plazo, ríos principales de Colombia.

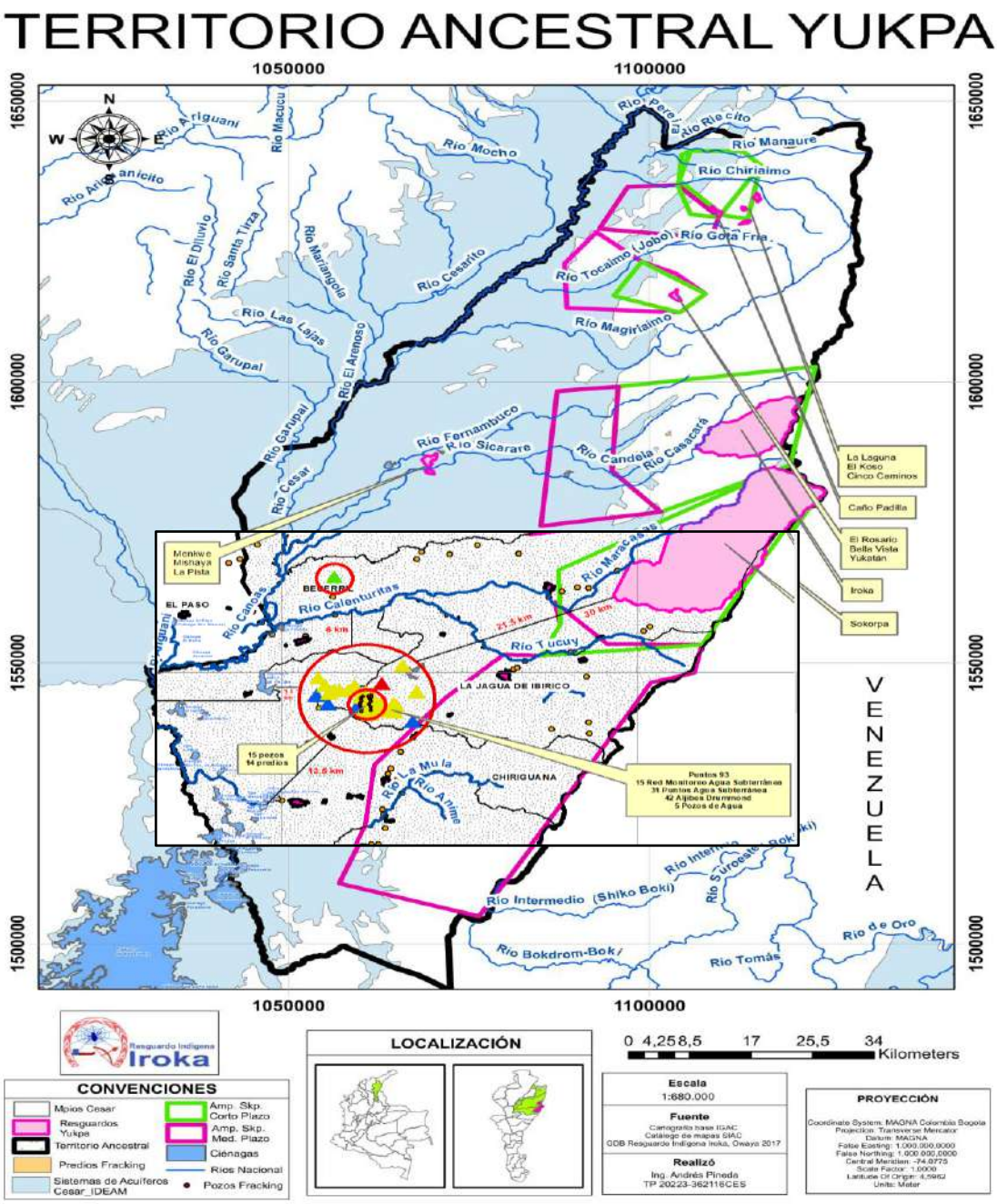
Se evidencia que los quince (15) pozos Fracking se encuentran en traslape con el sistema de acuíferos_Cesar, información suministrada del portal *Información Geográfica de Datos Abiertos IDEAM – Sistemas de Acuíferos de Colombia ENA2014*. Como se mencionaba anteriormente, estos quince (15) pozos Fracking se encuentran afectando una importante red hídrica subterránea del departamento del Cesar y del Territorio Ancestral Yukpa, esto denota una afectación considerable a la contribución a los caudales de los ríos, manantiales, lagos, humedales y estuarios, por último, por encontrarse en un radio rodeado de ciénagas y principales ríos de Colombia.



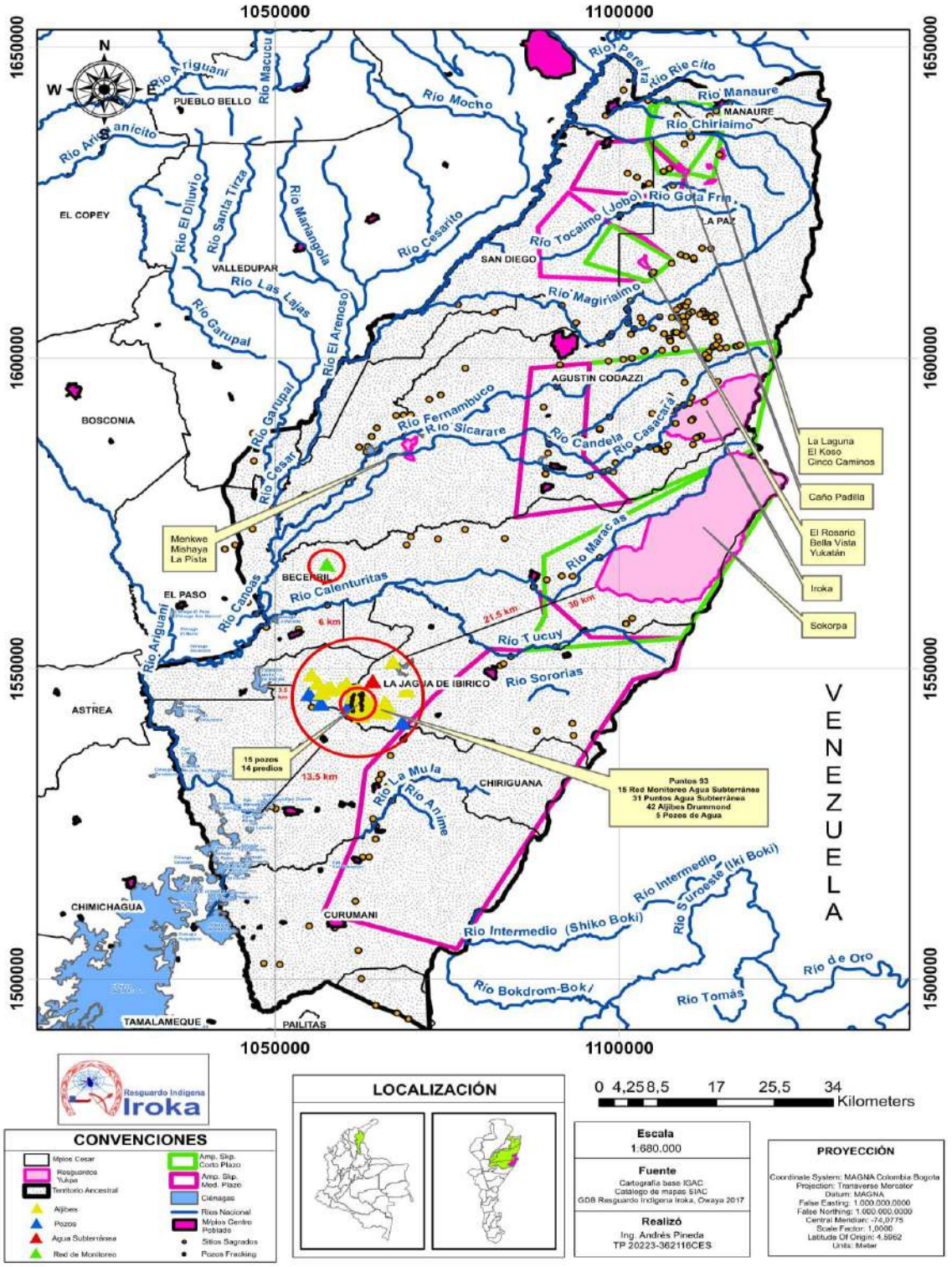
MAPA 4

En análisis: Puntos georreferenciados del informe de Drummond 2014. Divididos en cuatro (04) grupos: Red Monitoreo Aguas Subterráneas (15), Puntos Agua Subterránea (31), Aljibes Drummond (42) y Pozos de Agua (5).

Se evidencian traslapes entre: Redes, aljibes, puntos y pozos (Drummond)→Territorio ancestral, zona de ampliación a mediano plazo resguardo Sokorhpa (Pueblo Yukpa). Se presentan 93 tipologías de puntos traslapados, las cuales se encuentran a: 6 km del río calenturitas, a 3.5 km de la ciénaga mata de palma, a 13.5 km del completo de ciénagas localizadas al sureste del territorio ancestral, a 21.5 km de la zona de ampliación a mediano plazo del resguardo indígena Sokorhpa, a 30 km del territorio legalmente constituido del resguardo indígena Sokorhpa.



TERRITORIO ANCESTRAL YUKPA



12. CONSECUENCIAS MORTALES, DE LA MINERÍA A GRAN ESCALA, MUERTE DE VEINTINUEVE (29) NIÑOS Y NIÑAS YUKPA, DESDE EL SIETE (07) DE AGOSTO DE 2018 HASTA EL OCHO (08) DE MAYO DE 2019.

Como se ha venido explicando, la muerte de niños y niñas Yukpa tienen una correlación, la perdida de territorio y la desviación de sus ríos, principal fuente proteínica; nuestra situación por ser una población minoritaria, pues tan solo somos 13.000 indígenas, comparada con la nación Wayuu, que son 270.000, refleja de manera proporcional una situación aún más grave que la del pueblo Wayuu, por la cantidad de niños y niñas fallecidos por enfermedades curables asociados a la pérdida del territorio, la calidad y cantidad del agua y la extrema pobreza.

De manera lamentable nos permitimos presentar la siguiente estadística suministrada por la IPS DUSAKAWI, sobre los niños y niñas fallecidos del pueblo Yukpa desde el siete (07) de agosto de 2018, fecha en que se posesionó el señor presidente de la República, doctor IVAN DUQUE MARQUEZ, hasta el día ocho (8) de mayo del año 2019.

1. Veintinueve (29) niños y niñas Yukpa muertos, por discriminación del Estado, pérdida del territorio y conflictos ambientales, todos nuestros niños menores de cinco (05) años, es decir, el bono generacional de nuestro pueblo indígena en riesgo de exterminio físico y cultural se está muriendo.

2. De los veintinueve (29) niños y niñas Yukpa muertos, por discriminación del Estado, pérdida del territorio y conflictos ambientales, cuatro (04) corresponden al municipio de Becerril, Resguardo Sokorhpa, veintidós (22) corresponden al municipio de Agustín Codazzi, de los cuales ocho (08) pertenecen al resguardo Menkwe, Misaya, La Pista, y catorce (14) pertenecientes al resguardo Iroka, uno (01) del municipio de La Paz, resguardo La Laguna, y dos (02) corresponden al municipio de Bosconia.

3. De los veintinueve (29) niños y niñas Yukpa muertos, por discriminación del Estado, pérdida del territorio y conflictos ambientales, catorce (14) fueron reportados al Sistema de Vigilancia en Salud SIVIGILA.

4. Vale la pena aclarar, que los niños que no fueron reportados de los veintinueve (29) niños y niñas Yukpa muertos, por discriminación del Estado, pérdida del territorio y conflictos ambientales, es porque no estaban registrados en el sistema de seguridad social en salud, entre otros, porque muchos de ellos ni siquiera pudieron acceder al derecho fundamental a la identificación, porque la Registraduría Nacional del Estado Civil, no realiza ningún tipo de campañas en el territorio.

5. Es importante mencionar que las cifras que aquí se presentan no son reales porque hay un evidente subregistro de nuestros niños fallecidos, el ejemplo más emblemático, es que, entre

diciembre de 2018 y marzo de 2019, cinco (05) niños indígenas Yukpa fallecieron en el municipio de Bosconia. Esta comunidad se encuentra en condición de desplazamiento forzado, que el Estado no ha querido retornar, porque no tienen territorio para vivir; sin embargo, las cifras que se presentan son de dos (02) niños fallecidos.

Tabla [58]niños Yukpa fallecidos desde agosto de 2018 hasta marzo de 2019 Dusakawi IPSi.

	MES DE REPORTE		NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES DEL PADRE	NOMBRE DE LA MADRE	FECHA NACIMIENTO	ASENTAMIENTO	FECHA DE DEFUNCION	CAUSA DE DEFUNCION	FECHA DEL REPORTE	MUNICIPIO	SIVIGILA	EPS
1	SEPTIEMBRE	M	ANDRES FRANCO PEÑALOZA		ELISABETH PEÑALOZA	8/03/2016	SOCOCIA	13/09/2018	EDA	15/10/2018	CODAZZI	SI	DUSAKAWI
3	OCTUBRE	F	WENDIS TATIANA CAPITAN ROMERO		NANCY ROMERO JIMENEZ	3/10/2017	SAN GENARO	12/10/2018	DNT+IRA	11/11/2018	BECERRIL	SI	**DUSAKAWI**
4	OCTUBRE	M	LUIS DAVID GUERRA QUINTERO	HUMBERTO GUERRA OVALLE	ESTHER QUINTERO LUCERO	5/08/2018	MENKUE	10/10/2018	DESCONOCIDA	15/11/2018	CODAZZI	NO	**PPNA**
5	OCTUBRE	M	DARIO JOSE ESTRADA RAMIREZ	JOSE ANTONIO ESTRADA FRANCO	NIDIA RAMIREZ HERRERA	2/08/2017	WARACHA	20/10/2018	DNT	22/10/2018	CODAZZI	SI	DUSAKAWI
6	OCTUBRE	F	OLIVIA PEREZ PEÑALOZA	LUIS ALFONSO PEREZ GARCIA	VIVIANA PEÑALOZA PEREZ	10/11/2016	ACACHA	16/10/2018	EDA	19/10/2018	CODAZZI	NO	PPNA
7	OCTUBRE	F	ANA ANDREINA ESTRADA SANCHEZ		MERCEDES SANCHEZ	19/12/2015	KONONE	15/10/2018	DNT	10/11/2018	CODAZZI	SI	DUSAKAWI
8	NOVIEMBRE	M	JAINER DAVID RODRIGUEZ TARIFA	NICASIO RODRIGUEZ MARTINEZ	LORENA TARIFA OVALLE	27/06/2018	MENKUE	8/11/2018	DESCONOCIDA	9/11/2018	CODAZZI	NO	PPNA
9	DICIEMBRE	M	REINALDO PEÑALOZA FRANCO	ELIAS PEÑALOZA PEÑA	ELISA FRANCO FRANCO	18/10/2015	MOWA	14/12/2018	INTOXICACION	15/12/2018	CODAZZI	NO	DUSAKAWI
10	DICIEMBRE	F	LUISA FERNANDA PEÑALOZA FRANCO	ELIAS PEÑALOZA PEÑA	ELISA FRANCO FRANCO	14/12/2018	MOWA	14/12/2018	INTOXICACION	15/12/2018	CODAZZI	NO	DUSAKAWI
11	DICIEMBRE	M	FRANCO CUELLO	ARCENIO FRANCO PEÑALOZA	YULEIMA CUELLO PEÑALOZA	5/12/2018	ACAHA	12/12/2018	MALFORMACION	13/12/2018	CODAZZI	NO	PPNA
12	DICIEMBRE	F	MAIRELYS SOFIA LOPEZ ARAUJO	SABAS LOPEZ SUAREZ	MILENA ARAUJO MEZQUETE	22/11/2018	LA LAGUNA	30/12/2018	DIFICULTAD RESPIRATORIA	20/01/2019	LA PAZ	NO	PPNA
13	DICIEMBRE	M	JAMES RODRIGUEZ PEÑALAOZA	JORGE RODRIGUEZ PEÑALOZA	LUZ DARIS PEÑALOZA PEREZ	13/01/2016	ACAHA	11/12/2018	OBSTRUCCION INTESTINAL	11/12/2018	CODAZZI	NO	PPNA
14	DICIEMBRE	F	YULIET ALEJANDRA TARIFA OVALLE	AGUSTIN TARIFA QUINTERO	CECILIA OVALLE RODRIGEUZ	20/11/2017	MISAHYA	12/12/2018	NEUMONIA	12/12/2018	CODAZZI	NO	PPNA
15	DICIEMBRE	F	YENNIS SANDRITH ESTRADA FRANCO		MILENA FRANCO PEÑALOZA	25/01/2018	CONONE	dic-18	DNT		CODAZZI	SI	DUSAKAWI

[58] Registro de Dusakawi IPSi de niños Yukpa fallecidos de agosto 2018 a marzo de 2019.

16	DICIEMBRE	M	ANDERSON GARCIA JIMENEZ		DANIELA JIMENEZ FERNANDEZ	5/11/2017	LAURELES	dic-18	DNT + IRA	15/01/2019	BECERRIL	SI	DUSAKAWI
17	ENERO	M	DIOMEDEZ HERNNADEZ WEPA	MARIOHERNANDEZ MAESTRE	DIOSELINA WEPA SANCHEZ	15/12/2018	MENKUE	ene-19	NEUMONIA	20/02/2019	CODAZZI	NO	PPNA
18	ENERO	M	BREINER JOSE QUINTERO MANZANO		VERMINA MANZANO MARTINEZ	18/12/2015	MISAHYA	26/01/2019	MENINGITIS BACTERIANA	15/02/2019	CODAZZI	SI	DUSAKAWI
19	FEBRERO	F	DARLIS PATRICIA FERNANDEZ RODRIGUEZ		CLARA MARIA RODRIGUEZ	9/10/2017	COSARY	13/02/2019	DNT	feb-18	BECERRIL	SI	DUSAKAWI
20	FEBRERO	F	ELINA SOFIA OVALLE MAESTRE	ALVARO OVALLE GUERRA	KATHERINE MAESTRE LUQUEZ	19/12/2018	MENKUE	15/02/2019	IRA	feb-19	CODAZZI	NO	PPNA
21	FEBRERO	F	DINA MARCELA PEREZ GONZALEZ		AMIRA GONZALEZ	2/10/2017	COSARY	feb-19	DNT	feb-19	BECERRIL	SI	DUSAKAWI
22	FEBRERO	F	DULCE MARIA ESTRADA ESTRADA		ELISA ESTRADA	16/04/2018	BOSCONIA	25/02/2019	DNT	28/02/2019	BOSCONIA	SI	PPNA
23	FEBRERO	F	DAMARIS PEÑALOZA PEREZ		LUZ MERY PEREZ MEZA	7/01/2017	EL ONCE	26/02/2019	DNT		CODAZZI	SI	DUSAKAWI
24	MARZO	M	SEBASTIAN ESTRADA ESTRADA		MARIA CLAUDIA ESTRADA ESTRADA	26/06/2017	BOSCONIA	mar-19	DNT	mar-19	BOSCONIA	SI	DUSAKAWI
25	MARZO	F	BEATRIS CASUPALLE BERNAL		ALLIX BERNAL	8/03/2017	9 DE ABRIL	2/03/2019	DNT		CODAZZI	SI	DUSAKAWI
26	ABRIL	F	VALENTINA FRANCO FRANCO	JAIRO FRANCO PEREZ	YOLIS FRANCO SANCHEZ	6/04/2019	MESTA	20/04/2019	DESCONICIDA	23/04/2019	CODAZZI	NO	PPNA
27	ABRIL	F	ERIKA PATRICIA SILVANO GARCI	ENRRIQUE SILVANO GARCIA	MERCEDES GARCI AMARTINEZ	25/02/2019	SEKEIMO	25/03/2019	IRA	4/04/2019	CODAZZI	NO	PPNA
28		M	ESTEBAN TARIFA MEJIA	VICENTE TRARIFA MEJIA	MARTHA MEJIA OVALLE	6/05/2017	MENKUE	28/04/2019	MUERTE SUBITA	21/05/201	CODAZZI		DUSAKAWI
29		F	MARI LUZ OVALLE MANZANO	JONY OVALLE LUCERO	LILIANA MANZANO MAESTRE	21/05/2018	MENKUE	8/05/2019	DESCONICIDA	21/05/2019	CODAZZI		DUSAKAW

El pasado veinticinco (25) de mayo de 2019 en el marco del Taller Construyendo País en la ciudad de Valledupar, el Pueblo Yukpa tuvo la oportunidad de hablar con el presidente de la República de Colombia, doctor IVAN DUQUE MARQUEZ, y mostrarle la caja con las historias clínicas de veintinueve (29) niños fallecidos desde el ocho (08) de agosto de 2018 al veinticinco (25) de marzo de 2019, el señor presidente se comprometió a prevenir la muerte de nuestros niños y niñas. En tal sentido él se comprometió a realizar una reunión de urgencia en el Palacio de Nariño con el pueblo Yukpa, reunión que a la fecha no se ha realizado.

De igual manera se acordó que la directora nacional del ICBF estaría el día seis (6) de junio de 2019 en una reunión con los seis (06) cabildos indígenas en Valledupar. La reunión no se realizó por que la directora solo envió un delegado de la sede nacional.

Otro compromiso fue que la directora de la Agencia Nacional de Tierras acudiera a Valledupar el día treinta (31) de mayo de 2019, la reunión tampoco se pudo realizar, porque la directora envió una delegada.

VIII. NORMAS CONSTITUCIONALLES INFRINGIDAS

La Presidencia de La República de Colombia, La Dirección Nacional de Planeación Nacional, El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, El Ministerio del Interior y El Congreso de La República de Colombia; vienen violentando el siguiente cumulo de derechos fundamentales y sentencias de la Honorable Corte Constitucional conexos con el artículo 6 del convenio 169 de 1989 de la OIT, Ley 21 de 1991:

La norma infringida es el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, donde claramente señala que es obligación de los Estados miembros del mencionado convenio, "*Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente"*[59] En este contexto, el pueblo indígena Yukpa nunca fue consultado en la medida administrativa Ley de Regalías 2056 del treinta (30) de septiembre de 2020. "*POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*"

En este sentido, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo sabían antes de iniciar la discusión de la medida legislativa Ley de Regalías, que debían consultar con el pueblo indígena Yukpa, pues tal como se probó anteriormente, habíamos alertado que debía realizarse el proceso de Consulta previa con nuestro pueblo indígena.

La omisión premeditada del poder ejecutivo y el legislativo, al no garantizar que el pueblo indígena Yukpa participara en el debido proceso de consulta previa, violenta además los siguientes derechos fundamentales y territoriales del pueblo indígena Yukpa.

1. COSNTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA

1.1. Artículo 5 de la Constitución Política de Colombia, "*El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad."*[60]

[59] artículo 6 del Convenio 169 de la OIT
[60] Artículo 5 de la constitución Política de Colombia

1.2. Art. 7 de la Constitución Política de Colombia**:** *"El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana y le corresponde garantizar el principio de igualdad y en tal sentido "promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados".*[61]

1.3. Art. 8 de la Constitución Política de Colombia[62]: "*Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación".*[63]

1.4. Artículo 11 de la Constitución Política de Colombia: "*El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte."* [64]

1.5. Artículo 12 de la Constitución Política de Colombia *"Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes."*[65].

1.6. Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia "*Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica."*[66]

1.7. Artículo 17 de la constitución Política de Colombia, *"Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas"*[67]

1.8. Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia "*Son **derechos** fundamentales de los **niños**: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión."*

1.9. Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia "*La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad."*[68]

[61] Art. 7 de la constitución Política de Colombia
[62] Art. 8 de la constitución Política de Colombia
[22] artículo 8 de la constitución Política de Colombia
[64] Artículo 11 de la constitución Política de Colombia
[65] Artículo 12 de la constitución Política de Colombia
[66] Artículo 13 de la constitución Política de Colombia
[67] Artículo 17 de la constitución Política de Colombia
[68] Artículo 49 de la constitución Política de Colombia

2. LEYES DE ORDEN INTERNO

2.1. Artículo sexto (6) Ley 21 de 1991.

2.2. Ley 1448 de 2011. Nuestros pueblo indígenas Yukpa, es víctima del conflicto armado y gozamos de alta protección Constitucional, en el marco de la sentencia T-025 de 2004.

2.3. Articulo 24 y 25 de la Ley 21 de 1991, Convenio 169 de la OIT.

3. LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS PREVALECEN SOBRE LA LEY DE REGALÍAS 2056 DEL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2020. "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS"

3. 1. Artículo 3**,** Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador del diecisiete (17) de diciembre de 1988.

> *"Obligación de no Discriminación, los Estados parte en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."*[69]

3.2. Artículo 4. Derecho a la Vida. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Suscrita en San José de Costa Rica el veintidós (22) de noviembre de 1969.

3.3. Artículo 10, derecho a la salud. Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador del diecisiete (17) de diciembre de 1988. Y demás artículos conexos con las violaciones que se relatarán en el presente escrito.

> *"1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.*
> *2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados parte se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:*
> *a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;*

[69] Artículo 3, Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador del 17 de diciembre de 1988

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables."[70]

3.4. Artículos I, II, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XVIII, XVII, de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre aprobada en la novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948. Y demás artículos conexos con las violaciones que se relatarán en el presente escrito.

3.5. Artículos de 1 al 22 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en el año de 1985. Y demás artículos conexos con las violaciones que se relatarán en el presente escrito.

3.6. Artículo 2, Derecho a la Alimentación. Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador del diecisiete (17) de diciembre de 1988.

"1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.
2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados parte se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia."

3.7. Artículo 26. Desarrollo Progresivo, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Suscrita en San José de Costa Rica el veintidós (22) de noviembre de 1969 "*Los Estados parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura"*,

3.8. Artículo 11, Derecho a un Medio Ambiente Sano, Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador del diecisiete (17) de diciembre de 1988.

[70] Artículo 10, derecho a la salud, Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador del 17 de diciembre de 1988.

"1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente."[71]

3.9. Artículo 4, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará de 1994. Y demás artículos conexos con las violaciones que se relatan en el presente escrito.

"Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;"[72]

3.10. Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales Ley 74 de 1968 29/10/1969.

3.11. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer Adoptado por la Asamblea General en su Resolución A/54/4 de seis (06) de octubre de 1999. Entró en vigor el veintidós (22) de diciembre de 2000 Ley 984 de 2005.

3.12. Enmienda al Artículo 8º. de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1992). Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 2106 A (XX) de veintiuno (21) de diciembre de 1965. Entró en vigor el cuatro (04) de enero de 1969 Ley 467 de 1998.

3.13. Protocolo Adicional a la Convención americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Protocolo de San Salvador" suscrito en San Salvador el diecisiete (17) de noviembre de 1988, Ley 319 de 1996. Entró en vigor el dieciséis (16) de noviembre de 1999.

[71] Artículo 11, Derecho a un Medio Ambiente Sano, Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador del 17 de diciembre de 1988.
[72] Artículo 4, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará de 1994.

3.14. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. "Convención de Belém do Pará" Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el nueve (09) de junio de 1994. Entro en vigor el cinco (05) de marzo de 1995 (Art.21).

3.15. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Adoptada por la Asamblea General en su Resolución Ley 70 de 1986 5 Degradantes 39/46, de diez (10) de diciembre de 1984. Entró en vigor el veintiséis (26) de junio de 1987.

3.16. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 34/180, de dieciocho (18) de diciembre de 1979. Entró en vigor el tres (03) de septiembre de 1981. Ley 51 de 1981.

3.17. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 2106 A (XX) de veintiuno (21) de diciembre de 1965. Entró en vigor el cuatro (04) de enero de 1969 Ley 22 de 1981.

3.18. Convención Americana sobre Derechos Humanos. "Pacto de San José" Suscrita en San José de Costa Rica el veintidós (22) de noviembre de 1969. Entró en vigor el dieciocho (18) de julio de 1978.

3.19. Ley 74 de 1968 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de dieciséis (16) de diciembre de 1966. Entró en Vigor el tres (03) de enero de 1976.

3.20. Convenio 169 de la OIT.

4. EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

De acuerdo con el artículo 1° de la Constitución, Colombia es un Estado social de derecho democrático, participativo y pluralista, fundado en el respeto por la dignidad humana. Por su parte, el artículo 7° superior establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana y, el artículo 70 prevé que la cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad, siendo un deber reconocer con igual dignidad a todas las culturas que conviven en el país. En concordancia con lo anterior, los artículos 8° y 9° de la Carta establecen la obligación de proteger la riqueza cultural de la Nación y la importancia de la autodeterminación de los pueblos.

De los anteriores mandatos se deriva el denominado principio de diversidad étnica y cultural, como expresión del carácter democrático, participativo y pluralista del Estado colombiano, a través del

reconocimiento de la diversidad y la aceptación de la multiplicidad de formas de vida y cosmovisiones[73].

Lo anterior ha sido interpretado por la Corte como una manifestación de los principios en que se funda el Estado social de derecho y, como garantía de protección a las diferentes culturas que coexisten en el territorio nacional. En este sentido, la sentencia T-461 de 2014 afirmó que "*El reconocimiento de la diversidad étnica colombiana, como manifestación de su multiculturalidad y pluralismo, fue consagrado en la Constitución de 1991 a través de la integración de las comunidades indígenas a las visiones y procesos de las mayorías, otorgándoles la posibilidad de participación dentro de los mismos para de esta manera garantizar y proteger sus derechos como minorías, consistentes en el crecimiento y desarrollo de acuerdo con sus costumbres y valores propios"*. Así mismo, lo destaca esta Corporación en sentencia T-646 de 2014, al advertir el cambio de paradigma dado el reconocimiento de la diversidad cultural como un elemento relevante objeto de protección.

En el caso de los pueblos indígenas o tribales, el principio en mención implica el otorgamiento de un tratamiento especial, conforme a los valores culturales y las particularidades propias de su condición. Como parte de su reconocimiento se encuentran disposiciones constitucionales como el derecho de propiedad de resguardos y tierras colectivas inalienables, imprescriptibles e inembargables,[74] la jurisdicción especial para los pueblos indígenas, el derecho a gobernarse por sus propias autoridades según sus usos y costumbres, y un régimen especial de representación en el Congreso para las comunidades indígenas y los grupos étnicos[75].

El principio de diversidad étnica y cultural de la Nación, no sólo se manifiesta a partir de la declaratoria de existencia del grupo minoritario diferenciado, sino que implica también el reconocimiento y ejercicio efectivo de la autodeterminación de los pueblos indígenas o tribales, sus instituciones y autoridades de gobierno, y la posibilidad de guiarse por sus propias normas, costumbres, opciones de desarrollo, visión del mundo y proyectos de vida.

En ese sentido, la jurisprudencia ha determinado que el amparo de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas es indispensable para garantizar la supervivencia, lo que implica la conservación de su cultura, tradiciones ancestrales, valores, cosmovisión e identidad social, religiosa y jurídica, entre otros. Además, debe resaltarse que la existencia física de los pueblos étnicos está íntimamente relacionada con el lugar donde se asientan porque allí desarrollan y expresan su identidad y cultura diferenciada, de lo cual también se deriva el derecho a la tierra y el territorio[76].

73 Ver sentencias T-857 de 2014, T-646 de 2014, T-461 de 2014 y T-1105 de 2008.
74 Constitución, artículos 63 y 329.
75 Constitución, artículos 171 y 176.
76 Así lo advirtió esta Corte en la sentencia T-252 de 1998, al afirmar que la propiedad colectiva "*sobre los territorios indígenas reviste la mayor importancia dentro del esquema constitucional, pues resulta ser esencial para la preservación de las culturas y valores espirituales de los pueblos que dentro de ellos se han asentado durante siglos."*

En conclusión, la Constitución reconoce el principio de diversidad étnica y cultural de la Nación y, en virtud de ello, otorga a las comunidades indígenas una protección especial de sus costumbres, autonomía y territorio, garantías que deben ser prestadas de forma efectiva por las autoridades a través de mecanismos adecuados que faciliten la participación libre e informada de los pueblos étnicos. Lo contrario, amenaza la supervivencia de estas comunidades como grupo diferenciado.

5. LA CONSULTA PREVIA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.

El Convenio 107 de 1957[77] sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT constituyó el primer intento de codificar las obligaciones internacionales de los Estados en relación con la protección e integración de los pueblos indígenas, tribales y semitribales[78]. Dicho instrumento abordó asuntos relacionados con los derechos a las tierras; contratación y condiciones laborales; formación profesional, artesanías e industrias rurales; seguridad social y salud; y educación y medios de comunicación[79]. El mencionado convenio propendía por la progresiva integración de las poblaciones indígenas, tribales y semitribales a la vida que se desarrollaba en sus correspondientes países.

Sin embargo, la visión del Convenio 107 de 1957 fue revaluada en años posteriores cuando en 1986 la ONU convocó una Comisión de Expertos, cuya conclusión fue que el "*enfoque integracionista del*

77 Incorporado mediante la ley 31 de 1967.

78 *"Artículo 2 1. Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas coordinados y sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones en cuestión y a su integración progresiva en la vida de sus respectivos países. 2. Esos programas deberán comprender medidas: a) que permitan a dichas poblaciones beneficiarse, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás elementos de la población; b) que promuevan el desarrollo social, económico y cultural de dichas poblaciones y el mejoramiento de su nivel de vida; c) que creen posibilidades de integración nacional, con exclusión de cualquier medida tendiente a la asimilación artificial de esas poblaciones. 2. Se deberá velar por que tales medidas especiales de protección: a) no se utilicen para crear o prolongar un estado de segregación; y b) se apliquen solamente mientras exista la necesidad de una protección especial y en la medida en que la protección sea necesaria. 3. El goce de los derechos generales de ciudadanía, sin discriminación, no deberá sufrir menoscabo alguno por causa de tales medidas especiales de protección. Artículo 4 Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la integración de las poblaciones en cuestión se deberá: a) tomar debidamente en consideración los valores culturales y religiosos y las formas de control social propias de dichas poblaciones, así como la naturaleza de los problemas que se les plantean, tanto colectiva como individualmente, cuando se hallan expuestas a cambios de orden social y económico; b) tener presente el peligro que puede resultar del quebrantamiento de los valores y de las instituciones de dichas poblaciones, a menos que puedan ser reemplazados adecuadamente y con el consentimiento de los grupos interesados; c) tratar de allanar las dificultades de la adaptación de dichas poblaciones a nuevas condiciones de vida y de trabajo. Artículo 5 Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la protección e integración de las poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán: a) buscar la colaboración de dichas poblaciones y de sus representantes; b) ofrecer a dichas poblaciones oportunidades para el pleno desarrollo de sus iniciativas; c) estimular por todos los medios posibles entre dichas poblaciones el desarrollo de las libertades cívicas y el establecimiento de instituciones electivas, o la participación en tales instituciones. Artículo 12 1. No deberá trasladarse a las poblaciones en cuestión de sus territorios habituales sin su libre consentimiento, salvo por razones previstas por la legislación nacional relativas a la seguridad nacional, al desarrollo económico del país o a la salud de dichas poblaciones. 2. Cuando en esos casos fuere necesario tal traslado a título excepcional, los interesados deberán recibir tierras de calidad por lo menos igual a la de las que ocupaban anteriormente y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando existan posibilidades de que obtengan otra ocupación y los interesados prefieran recibir una compensación en dinero o en especie, se les deberá conceder dicha compensación, observándose las garantías apropiadas. 3. Se deberá indemnizar totalmente a las personas así trasladadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. Artículo 13 2. Se deberán adoptar medidas para impedir que personas extrañas a dichas poblaciones puedan aprovecharse de esas costumbres o de la ignorancia de las leyes por parte de sus miembros para obtener la propiedad o el uso de las tierras que les pertenezcan. Artículo 14 Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a las poblaciones en cuestión condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la colectividad nacional, a los efectos de: a) la asignación de tierras adicionales a dichas poblaciones cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; b) el otorgamiento de los medios necesarios para promover el fomento de las tierras que dichas poblaciones ya posean."*

79 http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no107/lang--es/index.htm

Convenio estaba obsoleto y que su aplicación era prejudicial en el mundo moderno" y, por tanto, el mencionado instrumento fue objeto de revisión entre los años 1988 y 1989.

Como resultado de lo anterior se adoptó el Convenio 169 de 1989[80] que introdujo una serie de modificaciones respecto del anterior, en tanto que: (i) se apartó de la idea de que los pueblos indígenas y tribales eran sociedades temporarias destinadas a desparecer con la modernidad al afirmar que constituyen sociedades permanentes; (ii) dejó de hacer referencia a poblaciones para identificarlos como pueblos indígenas y tribales; y (iii) superó la idea de fomentar la integración y pasó a reconocer y respetar la diversidad étnica y cultural[81].

El Convenio 169 de 1989 de la OIT, se fundamenta en los principios generales de (i) identificación de los pueblos indígenas y tribales a partir de los estilos tradicionales de vida, cultura y modo de vida diferenciado, organización social, costumbres, lengua, y leyes propias, entre otras[82]; (ii) no discriminación[83]; (iii) la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardarlos como comunidad y a sus miembros, instituciones, bienes, trabajo, culturas y medio ambiente[84]; (iv) el reconocimiento de su cultura y otras características específicas[85]; (v) la consulta y participación informada, previa y libre en todas las decisiones que los afectan[86]; y (vi) el derecho a decidir las prioridades para el desarrollo[87].

---

80 Ibídem

81 Ibídem

82 Convenio 169, Artículo 1 1. *"El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio."*

83 Convenio 169, Artículo 3 1. *"Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos."* Artículo 4 3. "*El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales."* Artículo 20. 2. *"Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores."*

84 Convenio 169, Artículo 4 1. *"Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales."*

85 Convenio 169, Artículo 5 "*Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo."*

86 Convenio 169, Artículo 6 1. *Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.*

87 Convenio 169, Artículo 7 1. "*Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.*

Este instrumento dispuso que los gobiernos de los distintos Estados tienen la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con el propósito de proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales, asegurando la concurrencia de las instituciones y mecanismos apropiados de participación, donde exista una articulación entre los procesos de desarrollo.

En Colombia el Convenio 169 fue incorporado al derecho interno mediante la ley 21 de 1991 "*Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.*" Y forma parte del bloque de constitucionalidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 superior, según el cual "*Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia*".

La protección del derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos indígenas se ha visto reflejada en diversos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a través del estudio de casos concretos ha desarrollado el alcance del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, la libre autodeterminación y la consulta previa, al resolver los casos de la comunidad indígena Xákmok Láser vs. Paraguay, sentencia de veinticuatro (24) de agosto de 2010; del Pueblo Saramaka vs. Surinam, sentencia del veintiocho (28) de noviembre de 2007; comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006 Yatama vs. Nicaragua, sentencia de veintitrés (23) de Junio de 2005; comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia de diecisiete (17) de junio de 2005; de la comunidad Moiwana vs. Suriname, sentencia de quince (15) de junio de 2005; de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia de treinta y uno (31) de agosto de 2001; Aloeboetoe y otros vs. Surinam, sentencia de cuatro (04) de diciembre de 1991.

En suma, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido parámetros de protección de los derechos a la propiedad y a la participación de los pueblos indígenas y tribales en la adopción de decisiones ambientales y sociales que los involucran, a través de la consulta previa[88].

Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan."

88 Ver sentencia T-462A de 2014.

6. LA CONSULTA PREVIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL

En este contexto, la consulta previa introducida por el Convenio 169, en el artículo 6º establece para los gobiernos la obligación de consultar a los pueblos interesados, en ejercicio de la buena fe y mediante procedimientos apropiados, las decisiones legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; y para las comunidades indígenas el derecho fundamental a que en ejercicio de su autonomía, participen libremente a través de sus autoridades o instituciones representativas, en la aprobación de las medidas propuestas[89]. De acuerdo con la sentencia SU-039 de 1997, la consulta previa tiene como objetivos:

> *"(i) dotar a las comunidades de conocimiento pleno sobre los proyectos y decisiones que les conciernen directamente -como los proyectos destinados a explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les pertenecen, así como los mecanismos, procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en ejecución; (ii) ilustrar a las comunidades sobre la manera como la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una afectación o menoscabo a los elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, económica y política y, por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo humano con características singulares; (iii) brindar la oportunidad a las comunidades para que libremente y sin interferencias extrañas, mediante la convocatoria de sus integrantes o representantes, valoren conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto; sean oídas en relación con las inquietudes y pretensiones que tengan en lo que concierne a la defensa de sus intereses y puedan pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto."*
>
> *Asimismo, por vía jurisprudencial esta Corporación sintetizó los principios bajo los cuales se rige la consulta previa[90], así:*
>
> *(i) Prevención de las afectaciones, es decir, que debe ser previa a la realización de la obra, proyecto o actividad, dado que lo perseguido por consulta es evitar causar alguna afectación a las comunidades adoptando las medidas que sean necesarias, adecuadas y suficientes para prevenir y minimizar los impactos negativos que tienen los proyectos. Sin embargo, de manera excepcional procede como mecanismo de compensación e indemnización de daños ya causados, porque a pesar del carácter preventivo, existen casos en que la medida fue adoptada y ejecutada de manera inconsulta, produciendo el impacto*

89 En sentencia T-969 de 2014, esta Corporación advirtió: "*el ejercicio del derecho a la consulta implica una serie de deberes correlativos, como pueden serlo el velar por los derechos de los pueblos y comunidades respectivas, y en consecuencia, entre otros, el de asistir y participar en las consultas. Por lo tanto, como regla general, no pueden las autoridades de un pueblo o comunidad dejar de asistir a una consulta, o desatender una convocatoria, so pretexto de representar con ello los intereses de la comunidad. Esto implicaría desatender los deberes que tienen como representantes válidos de su comunidad. Desde la primera sentencia que abordó el tema, la jurisprudencia ha dicho que en tales casos, el Estado y el ejecutor del proyecto, deben garantizar que ninguna de las decisiones pueda adoptarse de manera arbitraria, y que en todo caso deben consultarse los intereses de las comunidades potencialmente afectadas*."

90 Sentencia T-969 de 2014.

negativo en la comunidad, lo cual no significa que no deba agotarse el procedimiento, sino que este debe encaminarse a corregir los perjuicios ocasionados[91].

(ii) Información adecuada y suficiente, esto significa que la medida propuesta debe ser puesta en total conocimiento de la comunidad, identificando los riegos de afectación ambiental, social o cultural, con el fin de que pueda adoptar una posición y formular alternativas de prevención o corrección de los impactos negativos que se pudiesen ocasionar[92].

(iii) Buena fe[93]*, entendido como el deber de que las relaciones entre particulares y con el Estado se desarrollen mostrando una conducta honesta y leal, a fin de darle seguridad, confianza y credibilidad a la contraparte. Específicamente, en la consulta previa este principio debe estar presente en todas las etapas y es vinculante para las partes, lo cual implica "desde la perspectiva de las autoridades del Estado y de los particulares interesados en la medida susceptible de afectar a las comunidades indígenas: La disposición para adelantar la consulta, acudir a los escenarios de participación que resulten pertinentes, suministrar la información necesaria para que las comunidades puedan evaluar el impacto de la medida, ser receptivos a las inquietudes que surjan en el trámite de la consulta, valorarlas y obrar en consecuencia. Por el contrario, se opone al postulado de la buena fe, la reticencia en participar en los escenarios de consulta, o la obstaculización a los mismos, retener o demorar información relevante, actuar con actitud refractaria hacia las inquietudes de las comunidades indígenas y en plan de confrontación con ellas"*[94].

(iv) Participación externa, interpretado de dos formas: (i) en la consulta previa tanto el ejecutor o el Estado, como las comunidades, deben participar en el planteamiento y elaboración de los riesgos y afectaciones que generan el proyecto, obra o actividad a llevar a cabo, en relación con la integridad cultural, la autonomía política y organizativa y, el goce efectivo de los derechos territoriales del pueblo indígena[95]*; y (ii) la participación en los beneficios que el Estado reciba de la ejecución de la medida, programa, proyecto u obra que se realice en territorio de la comunidad étnica.*[96]

---

91 En sentencia T-652 de 1998 esta Corporación ordenó llevar a cabo una consulta con las comunidades Embera Chamí a pesar de que el proyecto hidroeléctrico de Urrá ya se había realizado sin haberse consultado previamente.

92 En sentencia SU-383 de 2003, esta Corte sostuvo que siguiendo los lineamientos del Convenio 169 de la OIT, la consulta no puede entenderse como un mero formalismo, sino que la buena fe en la ejecución supone que el programa, proyecto u obra a implementar, debe ser puesto en conocimiento de las comunidades, de manera que estén en capacidad de discutir diferentes propuestas y formular alternativas.
Ver sentencias T-969 de 2014 y T-769 de 2009.

93 Constitución, artículo 83.

94 Sentencia T-547 de 2010.

95 En sentencia C-175 de 2009, se afirmó que "*Los procesos de consulta se deben llevar a cabo mediante relaciones de comunicación efectiva, basadas en el principio de buena fe. Por ende, dicho procedimiento estará dirigido a proteger los derechos fundamentales de las comunidades étnicas, mediante instrumentos de participación que, amén de su disposición y diseño, puedan incidir en la definición del contenido y alcance de la medida legislativa o administrativa."*

96 Convenio 169, art. 2, núm. 1. En sentencia T-969 de 2014, sobre este principio explicó que "*En lo que se refiere a la distribución de los beneficios de la extracción de recursos minerales, esta norma está justificada a partir de dos argumentos distintos. El primero es un argumento de justicia histórica. En nuestro país, como en muchos otros de América Latina, las comunidades negras fueron esclavizadas y llevadas a las cuencas de los ríos para trabajar en la minería. Por su parte, desde la época de la conquista, las comunidades indígenas fueron sometidas al sistema de "reducciones de indios", de resguardos y otras similares, para garantizar la producción agropecuaria que abasteciera las necesidades de la industria minera. El segundo argumento, que resulta aplicable tanto a la explotación de recursos como a otro tipo de proyectos, obras y actividades, consiste en que su ejecución y operación puede significar cargas para quienes ocupan o utilizan las áreas donde se van a llevar a cabo. En esa medida, un principio de justicia retributiva supone que quienes deben soportar dichas cargas, deban también ser partícipes de los beneficios."*

La consulta previa es una garantía de reconocimiento de los pueblos indígenas o tribales como sujetos de derecho susceptibles de protección del Estado, siendo imprescindible asegurar su participación libre e informada en la adopción de las decisiones que afecten directamente su subsistencia, integridad y cultura.

De lo anterior se deriva el carácter ius fundamental de la consulta, al asegurar la protección y preservación de la integridad étnica y cultural de las comunidades como grupo social diferenciado[97]; además de estar íntimamente ligado al derecho de participación de los pueblos indígenas sobre cualquier decisión que pueda afectarles directamente[98].

El derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas o tribales[99], según lo precisa la Corte en la sentencia C-293 de 2012, reiterando lo expuesto en el fallo T-973 de 2009, tiene tres ámbitos de protección, relacionados con diversos factores de interacción, así:

"En el ámbito externo, el respeto por la autonomía de las comunidades indígenas exige reconocer el derecho de tales grupos, a participar en las decisiones que los afectan. Ese reconocimiento supone que, en las relaciones entre estos pueblos y el Estado, la consulta previa a las comunidades indígenas juega un rol necesario en los términos previamente enunciados, para asegurar que las aspiraciones culturales, espirituales y políticas de los pueblos indígenas sean consideradas en el ejercicio de las demás atribuciones y competencias de la Administración. (…) Un segundo ámbito de protección, también externo, tiene que ver con la participación política de estas comunidades, en la esfera de representación nacional en el Congreso. Así, las comunidades indígenas tienen el derecho de participar en la circunscripción especial electoral prevista para ellas, de acuerdo con la Constitución. (…) Finalmente, existe un tercer ámbito de reconocimiento a la autonomía de estas comunidades que es de orden interno, y que está relacionado con las formas de autogobierno y de autodeterminación de las reglas jurídicas al interior de los pueblos indígenas. Ello supone el derecho de las comunidades, (i) a decidir su forma de gobierno (CP art. 330); (ii) el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (C.P. art. 246) y (iii) el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios, con los límites que señale la Constitución y la ley. La autonomía política y jurídica, relacionada de este modo con una autogestión territorial, actúa, así como un instrumento de reafirmación de la identidad de las comunidades indígenas, las cuales,

97 Sentencias T-857 de 2014, C-366 de 2011 y SU-039 de 1997.
98 Sentencia C-063 de 2010.
99 Acerca de la participación en las decisiones que les afectan, la sentencia T-462A de 2014 expresó: *"Adicionalmente, la obligación de adelantar procesos de consulta con los pueblos indígenas y tribales antes de la adopción y ejecución de decisiones que puedan afectarles directamente, es una expresión y desarrollo, no sólo de las disposiciones generales de participación ciudadana, sino también de los preceptos constitucionales específicas que protegen a estas comunidades, como el artículo 7º Superior que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, el artículo 70 que considera la cultura fundamento de la nacionalidad, y de los artículos 329 y 330 que reconocen a las entidades territoriales indígenas como propiedad colectiva no enajenable, y prevén su gobierno y reglamentación de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad, respectivamente."*

mediante el ejercicio de sus prácticas tradicionales, avanzan en el fortalecimiento de sus autoridades internas y en el auto-reconocimiento de sus espacios de expresión colectiva."

De lo anterior se extrae que, dada la identidad étnica y cultural propia de los pueblos indígenas o tribales, derivada de una cosmovisión y valores particulares[100], debe garantizárseles el derecho a la supervivencia como grupo diferenciado a través del ejercicio a la libre autodeterminación, en virtud de lo cual pueden establecer sus instituciones y autoridades, darse sus propias normas, tomar decisiones y optar por formas de desarrollo o proyectos de vida[101]. Sin que ello implique que se trate de una garantía absoluta, ya que dicha prerrogativa debe ejercerse "de conformidad con sus referentes propios y conforme con los límites que señalen la Constitución y la ley[102], pues el pluralismo y la diversidad no son ajenos a la unidad nacional[103], ni a los valores constitucionales superiores[104 ,,105].

"*En el asunto resuelto en la Sentencia T-652 de 1998 la Corte procedió a estudiar el caso de la comunidad Embera-Katío del Alto Sinú, la cual alegaba que en la expedición de la licencia ambiental que autorizó la construcción de la hidroeléctrica Urrá (1) en el río Sinú se había pretermitido el trámite de consulta previa. En esta oportunidad la Corte se pronunció sobre el derecho a la integridad territorial y el dominio sobre el resguardo; el derecho fundamental a la supervivencia del pueblo indígena; a la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y la protección que debe el Estado a la identidad e integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas; la consulta para el llenado y funcionamiento de la represa; el derecho al mínimo vital y cambio forzado de una economía de subsistencia de bajo impacto ambiental a una agraria de alto impacto y menor productividad; las autoridades Embera-Katío del Alto Sinú y la representación de ese pueblo y sobre las formas tradicionales de organización y cabildos. Debido a que la obra ya se había ejecutado y a las problemáticas derivadas de la misma, la Corporación resolvió ordenar la indemnización a la comunidad, la unificación del resguardo, la concertación del régimen especial en salud de los afectados, la supervivencia de la comunidad y el etnodesarrollo de los afectados, entre otras medidas.*"

Posteriormente, la misma providencia, luego de insistir en el carácter fundamental del derecho a la consulta previa y de señalar algunas de las condiciones bajo las cuales ha sido protegido por parte de las sentencias de tutela, concretó que la base normativa de esa atribución se encuentra establecida en el artículo 6.1 del convenio 169 de 1989 de la OIT y relacionó sus diferentes características de la siguiente manera:

100 Cfr. Sentencia T-778 de 2005.
101 Sentencias T-800 de 2014, T-973 de 2009 y T-514 de 2003.
102 Sentencia T-973 de 2009.
103 Sentencia T-254 de 1994.
104 Sentencia T-811 de 2004.
105 Sentencia T-601 de 2011.

"*En síntesis, todo tipo de acto, proyecto, obra, actividad o iniciativa que pretenda intervenir en territorios de comunidad étnicas, sin importar la escala de afectación, deberá desde el inicio observar las siguientes reglas:* [106]

(i) La consulta previa es un derecho de naturaleza fundamental y los procesos de consulta previa de comunidades étnicas se desarrollarán conforme a este criterio orientador tanto en su proyección como implementación.
(ii) No se admiten posturas adversariales o de confrontación durante los procesos de consulta previa. Se trata de un diálogo entre iguales en medio de las diferencias.
(iii) No se admiten procedimientos que no cumplan con los requisitos esenciales de los procesos de consulta previa, es decir, asimilar la consulta previa a meros trámites administrativos, reuniones informativas o actuaciones afines.
(iv) Es necesario establecer relaciones de comunicación efectiva basadas en el principio de buena fe, en las que se ponderen las circunstancias específicas de cada grupo y la importancia para este del territorio y sus recursos.
(v) Es obligatorio que no se fije un término único para materializar el proceso de consulta y la búsqueda del consentimiento, sino que dicho término se adopte bajo una estrategia de enfoque diferencial conforme a las particularidades del grupo étnico y sus costumbres. En especial en la etapa de factibilidad o planificación del proyecto y no en el instante previo a la ejecución de este.
(vi) Es obligatorio definir el procedimiento a seguir en cada proceso de consulta previa, en particular mediante un proceso pre-consultivo y/o post consultivo a realizarse de común acuerdo con la comunidad afectada y demás grupos participantes. Es decir, la participación ha de entenderse no sólo a la etapa previa del proceso, sino conforme a revisiones posteriores a corto, mediano y largo plazo.
(vii) Es obligatorio realizar un ejercicio mancomunado de ponderación de los intereses en juego y someter los derechos, alternativas propuestas e intereses de los grupos étnicos afectados únicamente a aquellas limitaciones constitucionalmente imperiosas.
(viii) Es obligatoria la búsqueda del consentimiento libre, previo e informado. Las comunidades podrán determinar la alternativa menos lesiva en aquellos casos en los cuales la intervención: (a) implique el traslado o desplazamiento de las comunidades por el proceso, la obra o la actividad; (b) esté relacionado con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras étnicas; y/o (c) representen un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad étnica, que conlleve a poner en riesgo la existencia de esta.

(…)

106 Respecto del contenido del derecho fundamental a la consulta previa y las reglas jurisprudenciales que serán enunciadas, se recomiendan especialmente los desarrollos efectuados por la Corte en las Sentencias C-461 de 2008 y C-175 de 2009. En virtud de ello la Sala procederá a trascribirlos y reiterarlos en lo que concierne especialmente a la consulta previa criterios plasmados igualmente en la línea jurisprudencial elaborada en esta providencia; de otra parte se anexan los nuevos ámbitos de protección estudiados.

(ix) Es obligatorio el control de las autoridades en materia ambiental y arqueológica, en el sentido de no expedir las licencias sin la verificación de la consulta previa y de la aprobación de un Plan de Manejo Arqueológico conforme a la ley, so pena de no poder iniciar ningún tipo de obra o en aquellas que se estén ejecutando ordenar su suspensión.[107]
(x) Es obligatorio garantizar que los beneficios que conlleven la ejecución de la obra o la explotación de los recursos sean compartidos de manera equitativa. Al igual que el cumplimiento de medidas de mitigación e indemnización por los daños ocasionados.
(xi) Es obligatorio que las comunidades étnicas cuenten con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en el proceso de consulta y búsqueda del consentimiento. Incluso de la posibilidad de contar con el apoyo de organismos internacionales cuyos mandatos estén orientados a prevenir y proteger los derechos de las comunidades étnicas de la Nación."

Lo expuesto evidencia la importancia del derecho fundamental a la consulta previa, siendo preciso advertir que no existe una única fórmula de hacerla efectiva, porque depende de las características de la comunidad afectada, así como de los componentes de la medida. Con todo, la complejidad de este sí implica la adopción de todas las atribuciones establecidas en cabeza de la administración pública, de manera que el proceso logre articular a todas las personas y permita un diálogo claro, sincero, completo y fructífero[108].

Sobre el goce efectivo del derecho, esta Corporación en sentencia T-172 de 2013 concluyó: "Con todo, las obligaciones cardinales adscritas al goce efectivo del derecho están radicadas en cabeza de las entidades públicas correspondientes en todos los niveles territoriales. Son ellas las que deben garantizar que se identifique a las comunidades que se verán afectadas por el proyecto, que se defina un cronograma concertado y sensato, que el diálogo entre las partes realmente garantice los derechos de las partes y que este se realice de manera fructífera. Lo anterior también implica el concurso proactivo y serio de las partes, especialmente de la(s) empresa(s) o sociedad(es) que ejecutarán el proyecto". Al respecto, en la sentencia T-129 de 2011 se afirmó lo siguiente:

"(iii) La consulta previa y el consentimiento no son las únicas garantías que debe prestar el Estado y los concesionarios al momento de considerar los planes de "infraestructura o desarrollo", ya que se debe permitir la participación y compartir de forma razonable los beneficios del proyecto con el pueblo o la comunidad étnica que sea directamente afectada. Este derecho está contemplado en el artículo 15 del Convenio 169 de 1989, en los siguientes términos:

107 Capítulo (4) de esta sentencia relativo a la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, así como de la obligatoriedad de la licencia ambiental y del Plan de Manejo Arqueológico (4.3).
108 Cfr. Sentencia T-172 de 2013.

Será deber de la contraparte, sea de naturaleza pública o privada, facilitar la identificación plena de la afectación o perjuicios, rendir informes consistentes y verídicos sobre los alcances de la obra, proyecto o labor y cumplir cabalmente con los compromisos que se hayan pactado con las comunidades. La falta a cualquiera de esas obligaciones constituirá una vulneración del derecho a la consulta previa y dará paso a que se proceda legítimamente a la suspensión o terminación –si es del caso- de los trabajos".”

7. NATURALEZA Y FUNDAMENTO NORMATIVO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU 123 de 2018, mencionó lo siguiente.

“El derecho fundamental a la consulta previa se funda en la defensa de los pueblos indígenas y tribales y en la eliminación de las exclusiones históricas que han padecido. Establece un modelo de gobernanza, en el que la participación es un presupuesto indispensable para garantizar los demás derechos e intereses de las comunidades, como ocurre con la integridad cultural, la libre determinación, el territorio y el uso de los recursos naturales etc., por lo cual tiene un carácter irrenunciable e implica obligaciones tanto al Estado como a los particulares. Este derecho implica que las comunidades indígenas y tribales deban ser consultadas sobre cualquier decisión que las afecte directamente, de manera que puedan manifestar su opinión sobre la forma y las razones en las que se cimienta o en las que se fundó una determinada medida, pues esta incide o incidirá claramente en sus vidas.

La consulta previa se desprende de que Colombia se constituye como una república democrática, participativa y pluralista (C.P. art. 1), que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural como un valor constitucional (C.P. arts. 7 y 70) y que las comunidades étnicas gozan de plenos derechos constitucionales fundamentales. Además, la Constitución reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas en sus territorios (CP art. 330), por lo cual Colombia es un Estado multicultural y multiétnico, y la consulta previa es un instrumento y un derecho fundamental para amparar esos principios constitucionales. Por eso esta Corte ha establecido que "la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que puedan afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales ofrece como particularidad (...) que la referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social."[109] (Subraya fuera del texto).

En particular, la exploración y explotación de los recursos naturales en el subsuelo, en sintonía con las normas que protegen la diversidad cultural y el medio ambiente en la

[109] Sentencia SU-039 de 1.997.

Constitución, deben ser compatibles con el nivel de protección que el Estado y la comunidad internacional exigen para preservar la integridad de las comunidades nativas y su existencia digna así como la diversidad étnica y cultural de Colombia, que deben ser armonizados con el desarrollo económico del país, la protección de las riquezas naturales y la multiculturalidad del Estado-Nación. Por consiguiente, no es posible desconocer esos valores constitucionales con una simple alusión al contenido abstracto de interés general.

Además, el derecho a la consulta previa se incorpora vía bloque de constitucionalidad[110], a través de varios instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, dentro de los cuales se destacan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo[111] –en adelante Convenio 169 OIT–, el Pacto Internacional sobre los Derechos, Civiles y Políticos –en adelante PIDCP–, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales –en adelante PIDESC-, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos –en adelante CADH–. Dichos instrumentos son vinculantes para la definición de las controversias y además marco de acción para garantizar la consulta de los Estados con los pueblos indígenas, como un principio de derecho internacional público. Adicionalmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Resolución 61/295 y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial junto con la Recomendación General Nº 23 de 1997 relativa a los derechos de los pueblos indígenas, permiten darle alcance al contenido del derecho fundamental a la consulta previa.

El Convenio 169 OIT prescribe que los principios de participación y consulta son fundamentales. En su artículo 6º, se establece el deber general del Estado de consultar a los pueblos indígenas y tribales que sean susceptibles de verse afectados directamente por la expedición de medidas administrativas o legislativas. Dispone que la consulta previa debe adelantarse con herramientas y procedimientos pertinentes y adecuados para llegar a un acuerdo con las autoridades representativas de la comunidad y el artículo 7.3 prevé que los Estados posibiliten la realización de estudios en cooperación con los pueblos interesados para evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente, que puedan recaer ante las actividades que se desarrollen.

[110] Corte Constitucional. Sentencia SU-383 de 2003. Respecto a este Convenio y el bloque de constitucionalidad, ha reiterado la Corte Constitucional: "*el Convenio 169 de la OIT , y concretamente el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa conforma con la Carta Política bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por los artículos 93 y 94 del ordenamiento constitucional, no sólo porque el instrumento que la contiene proviene de la Organización Internacional del Trabajo y estipula los derechos laborales de dichos pueblos -artículo 53 C.P.- sino i) en virtud de que la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que se adopten respecto de la explotación de recursos naturales en sus territorios, prevista en el artículo 330 de la Carta, no puede ser entendida como la negación del derecho de éstos pueblos a ser consultados en otros aspectos inherentes a su subsistencia como comunidades reconocibles –artículo 94 C.P.-, ii) dado que el Convenio en cita es el instrumento de mayor reconocimiento contra las discriminaciones que sufren los pueblos indígenas y tribales*"

[111] Aprobado por el Congreso de la República de Colombia mediante la Ley 21 de 1991. Tal instrumento define a los pueblos étnicos y tribales, sus derechos, las hipótesis de concertación y las obligaciones del Estado, como aspectos más relevantes.

Por su parte, el PIDCP y el PIDESC tienen un artículo común que se refiere al derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, que implica que estos determinan su desarrollo económico, social y cultural, y pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Este derecho ha sido interpretado en forma pacífica por la jurisprudencia internacional, en especial gracias a la labor del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que son los intérpretes autorizados de estos tratados, como normas aplicables a los pueblos indígenas, sin que esto implique la posibilidad de independencia política de estos pueblos frente a los Estados de los cuales hacen parte (autodeterminación externa) pero si un derecho a tomar decisiones relativas a su desarrollo económico, social y cultural y a disponer de sus riquezas y recursos naturales en sus territorios, conforme a sus usos y costumbres, dentro de los límites constitucionales y el respeto a la integridad territorial de los Estados (autodeterminación interna). Esto apareja, entre otros, el deber de los Estados de demarcar y proteger adecuadamente los territorios de estos pueblos y consultarlos en relación con las medidas que los impactan directamente.

5.7. En la CADH no hay un artículo expreso de la consulta previa. Sin embargo, con sustento en los mandatos de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en adelante Corte IDH-, en el caso Sarayaku vs Ecuador, advirtió que la obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas o tribales es un principio de derecho internacional público. La Corte IDH ha indicado que estas consultas con las comunidades indígenas y tribales tiene una relación directa con el artículo 1.1, que establece la obligación general de garantizar el libre pleno ejercicio de los derechos conocidos en la Convención[112]. También ha advertido que la consulta y participación de las comunidades garantizan los demás derechos, por ejemplo, territorio, ambiente e integridad cultural, y esto le ha permitido ligar la consulta con el artículo 23 de la CADH[113].

8. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA PREVIA Y EL CONCEPTO DE AFECTACIÓN DIRECTA.

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU 123 de 2018, mencionó lo siguiente.

"Para determinar qué debe consultarse a las comunidades étnicas la jurisprudencia constitucional ha indicado[114], de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y con los desarrollos del derecho internacional, que deben consultarse las medidas legislativas o administrativas que tengan la susceptibilidad de impactar directamente a los pueblos étnicos. El presupuesto clave para la activación del deber de consulta previa es entonces que una determinada medida sea susceptible de afectar directamente a un pueblo étnico. Por economía

[112] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 166. En el mismo sentido ver, Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015.
[113] Corte IDH. Caso Yamata contra Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Párr.. 225.
[114] Corte Constitucional Sentencia T-236 de 2017. Pueden además consultarse las decisiones SU-383 de 2003, C-030 de 2008, C-075 de 2009, C-175 de 2009, T-661 de 2015, T-226 de 2016, T-080 de 2017 y SU-217 de 2017.

de lenguaje suele hablarse del concepto de "afectación directa"[115], que, si bien es un concepto indeterminado, no significa que carezca de contenido, pues ha sido delimitado por el Convenio 169 de la OIT, por la legislación interna, y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte IDH.

***La jurisprudencia constitucional, en armonía con el derecho internacional, ha definido la afectación directa como el impacto positivo[116] o negativo[117]** que puede tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica[118]. Procede entonces la consulta previa cuando existe evidencia razonable de que una medida es susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena o a una comunidad afrodescendiente.*

La Corte ha explicado que, entre otros, existe afectación directa a las minorías étnicas cuando: (i) se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales[119]; (ii) existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica[120]; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento[121] y (iv) se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio[122]. Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido.

En particular, en relación con las leyes o las medidas de orden general, la Corte ha señalado que la consulta previa procede si la medida general afecta con especial intensidad o de manera diferenciada a los pueblos étnicos. Así, la sentencia C-075 de 2009 destacó que en principio "las leyes, por su carácter general y abstracto, no generan una afectación directa de sus destinatarios, la cual sólo se materializa en la instancia aplicativa", por lo cual en general no procede la consulta previa frente a ellas pero que esta es necesaria "cuando la ley contenga disposiciones susceptibles de dar lugar a una afectación directa a los destinatarios, independientemente de que tal efecto sea positivo o negativo, aspecto éste que debe ser, precisamente, objeto de la consulta". Esto significa que "no toda medida legislativa que de alguna manera concierna a los pueblos indígenas y tribales está sujeta al deber de consulta,

[115] Corte Constitucional Sentencia SU-217 de 2017.
[116] Un ejemplo del impacto positivo de una afectación directa se estudió en la sentencia T-201 de 2017 en el que se demandó la procedencia de la consulta previa para la ejecución de los programas de alimentación en el Consejo comunitario de negritudes Julio Cesar Altamar.
[117] Dentro de los casos de afectación directa por un impacto negativo se puede citar, entre otras, la sentencia T-704 de 2016 que estudió la procedencia de la consulta previa en el caso del pueblo Media Luna Dos por la ampliación del puerto de la empresa Cerrejón.
[118] Corte Constitucional. Sentencias T 733/2017, T 236/2017, T 080/2017, SU 217/2017.
[119] Sentencia T-1045A de 2010, T-256 de 2015 y SU-133 de 2017
[120] Sentencia T-733 de 2017
[121] Sentencia T-1045A de 2010
[122] Sentencia T-256 de 2015

puesto que como se ha visto, en el propio Convenio se contempla que, cuando no hay una afectación directa, el compromiso de los Estados remite a la promoción de oportunidades de participación que sean, al menos equivalentes a las que están al alcance de otros sectores de la población".

En el caso específico de proyectos de exploración y explotación de recursos no renovables, que es el asunto para resolver en el presente caso, esta Corte ha entendido que la afectación directa incluye, el impacto en (i) el territorio de la comunidad tradicional[123]; o (ii) en el ambiente, la salud o la estructura social, económica, así como cultural del grupo[124]. Cuando se trata de esta última hipótesis, la afectación debe resolverse a partir del concepto de justicia ambiental, criterio que se explicará ulteriormente.

7.6. La Corte también ha destacado[125] que el concepto de afectación directa difiere del de área de influencia de un proyecto. Este último concepto se refiere a un requisito meramente técnico que determina los impactos sobre un espacio geográfico en el que se desarrollará un proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos, en tanto la afectación directa, como se indicó, es un concepto esencial para determinar cuándo se activa la consulta previa y se identifican los impactos que se ocasionan a las comunidades étnicas, tanto en su territorio, como en su ambiente, salud y estructuras sociales y culturales[126], como se explica en el cuadro a continuación:

	Afectación directa	***Área de influencia***
Concepto	*Identificación de medidas que impactan o amenazan los derechos e intereses de las comunidades indígenas desde el punto de vista territorial, cultural, social, espiritual o económico.*	*Instrumento solicitado en las licencias ambientales para identificar los impactos de los proyectos de exploración y explotación en el ambiente y la sociedad. (Decreto 1076 de 2015, ARTÍCULO 2.2.2.3.1.1).*
Propósito	*Identificar medidas que perturben a los indígenas en sus derechos, intereses y en sus ámbitos territorial, cultural, político, espiritual, ambiental y de salud, para celebrar Consulta Previa. Se identifica a través de un diálogo intercultural.*	*Fijar unos criterios técnicos para delimitar el área de los proyectos en relación con la valoración de los impactos sociales, ambientales y económicos de los mismos.*
Fuente normativa	*Convenio 169 OIT, PIDESC, PDCP, UNIDRIP, Constitución Política.*	*Consagración legal y reglamentaria.*

[123] Corte Constitucional. Sentencias SU 039/1997, T 880/2006, T 769/2009, T 733/2017.
[124] Corte Constitucional. Sentencia T 129/2011, T 693/2011, T 849 de 2014, T 298 de 2017.
[125] Sentencia SU-217 de 2017.
[126] Sentencia SU-217 de 2017.

> *Por razón de los hechos del presente caso, procede la Corte a sistematizar con mayor detalle los dos criterios de afectación directa en proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables: (i) impactos sobre los territorios de los pueblos indígenas y sobre (ii) la salud, el ambiente y las estructuras social y cultural de estos pueblos."*

A partir de las reglas previstas en el Convenio 169 de la OIT y la Guía de Aplicación del citado Convenio, la jurisprudencia constitucional ha identificado dos (02) niveles de afectación en el caso de las comunidades indígenas y tribales: "*de un lado, el que corresponde a la definición de aquellas políticas y programas que de alguna manera les conciernen, caso en el cual existe un derecho general de participación; y, del otro, el que se refiere al establecimiento de medidas legislativas o administrativas que los afectan directamente, evento en el que surge entonces la obligación de efectuar el proceso de consulta previa*[127]".[128]

En la sentencia C-175 de 2009 la Corte precisó: *"en lo que tiene que ver con la previsión de medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas y tribales, el Convenio 169 de la OIT dispone la obligación a cargo de los gobiernos de consultar a las comunidades interesadas, a través de sus autoridades representativas"*. En igual sentido agregó: *"es un procedimiento distinto a los escenarios generales y concretos de participación antes enunciados, reservado para aquellas medidas que tengan incidencia particular y directa en los intereses de las comunidades diferenciadas. Existe, en relación con esas medidas, un derecho fundamental de los pueblos indígenas y afrodescendientes a la consulta previa y un deber estatal correlativo de llevar a cabo los trámites idóneos y eficaces para que las comunidades tradicionales participen en el diseño de las políticas que, habida cuenta su contenido material, les conciernen."*

A partir del deber que le asiste al Gobierno de someter a consulta previa las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a las comunidades, esta Corporación ha señalado que este concepto es consecuencia del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, en virtud del cual están en libertad de decidir acerca de las prioridades en su proceso de desarrollo; y la protección de la cultura y preservación de la integridad étnica[129].

De acuerdo con la jurisprudencia, es necesario consultar a las comunidades indígenas y garantizar su participación efectiva, libre e informada, cuando se establece que la medida legislativa o administrativa genera un impacto sobre su "*autonomía, diversidad e idiosincrasia"*[130], en los siguientes casos:

(i) En los eventos señalados expresamente en la Constitución en los artículos 329 y 330, es decir, cuando se van a crear entidades territoriales indígenas y, la adopción de decisiones relacionadas con la explotación de recursos naturales que se encuentren en los territorios indígenas[131].

127 Sobre este tema puede consultarse la sentencia C-030 de 2008.
128 Sentencias T-857 de 2014 y T-800 de 2014.
129 Ibídem.
130 La sentencia T-857 de 2014 reiteró lo dicho en la T-698 de 2011.
131 Según la sentencia T-857 de 2014, el concepto de *territorio* de las comunidades étnicas "*no solamente se refiere a las áreas "tituladas, habitadas y explotadas por la comunidad", sino también en las que tradicionalmente se desarrolla la vida social de la misma. En ese*

(ii) A partir de la sentencia SU-383 de 2003 esta Corte ha sostenido que debe agotarse el procedimiento de la consulta previa cuando existe una *afectación directa* de otros aspectos inherentes a la subsistencia de la comunidad indígena como grupo reconocible.

Recientemente, la sentencia T-800 de 2014 reiteró los criterios jurisprudenciales fijados en las sentencias T-769 de 2009, C-882 de 2011 y C-030 de 2008, concluyendo que la consulta previa "*resulta obligatoria cuando las medidas que se adopten sean susceptibles de afectar específicamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales, por lo que en cada caso concreto resulta necesario distinguir dos niveles de afectación: (i) el que se deriva de las políticas y programas que de alguna forma les conciernen y (ii) el que se desprende de las medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos directamente. De lo anterior, se dedujo que existían varios escenarios ante los cuales existe el deber de consulta:* (i) d*ecisiones administrativas relacionadas con proyectos de desarrollo: licencias ambientales, contratos de concesión y concesiones mineras, entre otros*; (ii) p*resupuestos y proyectos de inversión financiados con recursos del presupuesto nacional"*; (iii) d*ecisiones sobre la prestación del servicio de educación que afectan directamente a las comunidades; y (iii) medidas legislativas"*.

A través de la jurisprudencia se ha establecido algunos criterios para identificar la afectación directa a las comunidades indígenas por la adopción de medidas legislativas o administrativas que les conciernan. En este sentido, la sentencia C-030 de 2008 precisó que independientemente de que la alteración al estatus de la persona o la comunidad sea positiva -porque le representa un beneficio- o negativa -al imponerle una restricción, limitación o gravamen-, debe ser objeto de consulta.

Luego, la sentencia C-175 de 2009 estableció los criterios específicos para identificar cuándo existe una vulneración directa, específica y particular sobre los grupos étnicos, derivada de una medida legislativa o administrativa, así:

> *"(i) 'Para el caso particular de las medidas legislativas, la consulta se predica sólo de aquellas disposiciones legales que tengan la posibilidad de afectar directamente los intereses de las comunidades. Por lo tanto, aquellas medidas legislativas de carácter general, que afectan de forma igualmente uniforme a todos los ciudadanos, entre ellos los miembros de las comunidades tradicionales, no están prima facie sujetas al deber de consulta, excepto cuando esa normatividad general tenga previsiones expresas, comprendidas en el ámbito del Convenio 169 de la OIT, que sí interfieran esos intereses'*
> *(ii) '(…) el deber de consulta previa respecto de medidas legislativas resulta jurídicamente exigible cuando las mismas afecten directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Ello sucede cuando la materia del proyecto está*

sentido, para efectos de establecer el derecho a la consulta previa, no basta con examinar de manera exclusiva que el grupo étnico tenga un asentamiento permanente en determinada ubicación geográfica, sino que el lugar resulte tener una verdadera vinculación con el desarrollo de actividades propias de su cosmovisión y de su identidad cultural."

relacionada con aspectos que tienen una vinculación intrínseca con la definición de la identidad étnica de dichos grupos. Por ende, no existirá deber de consulta cuando la medida legislativa no pueda predicarse de forma particular a los pueblos indígenas y tribales y, a su vez, el asunto regulado no tenga relación con aspectos que, razonable y objetivamente, conformen la identidad de la comunidad diferenciada'.

(iii) '(…) para acreditar la exigencia de la consulta previa, debe determinarse si la materia de la medida legislativa tiene un vínculo necesario con la definición del ethos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En otras palabras, el deber gubernamental consiste en identificar si los proyectos de legislación que pondrá a consideración del Congreso contienen aspectos que inciden directamente en la definición de la identidad de las citadas comunidades indígenas y, por ende, su previa discusión se inscribe dentro del mandato de protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana'.

(iv) 'Como se señaló en la sentencia C-030/08, uno de los parámetros para identificar las medidas legislativas susceptibles de consulta es su relación con las materias reguladas por el Convenio 169 de la OIT'

(v) 'la determinación de la gravedad de la afectación de la medida legislativa o administrativa deberá analizarse según el significado que para los pueblos indígenas y tribales afectados tengan los bienes o prácticas sociales interferidas. En otras palabras, el mandato de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural implica que el análisis del impacto de las medidas se realice a partir de las características específicas de la comunidad y la comprensión que éstas tienen del contenido material de dichas políticas'.

(vi) 'aquellas políticas que debido a su contenido o implicaciones interfieran directamente con los intereses de las comunidades diferenciadas'."

Adicionalmente, la sentencia C-063 de 2010 explicó que hay una afectación directa cuando una norma regula principalmente una o varias comunidades indígenas o cuando a pesar de ser general tiene mayores efectos sobre ellos que sobre el resto de la población, siendo en estos casos obligatorio agotar el procedimiento de la consulta previa.

Recientemente la sentencia T-462A de 2014 decidió la acción de tutela interpuesta por las comunidades indígenas Honduras y Cerro Tijeras, Cauca, a quienes les fueron vulnerados sus derechos fundamentales a propósito de la construcción de la represa Salvajina, que funciona desde hace 25 años. Por lo que se ordenó la consulta previa para formular diagnósticos de impacto, identificar aquellas afectaciones que fueron imprevisibles a la hora de ejecutar la obra y establecer las medidas de compensación, corrección y mitigación más acordes con los intereses de las comunidades.

9. LA AFECTACIÓN DIRECTA POR INTERVENCIÓN DEL TERRITORIO

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU 123 de 2018, mencionó lo siguiente

> *"El territorio se encuentra vinculado al concepto de afectación directa y en consecuencia a la aplicación de la consulta previa. No existe duda ni disputa sobre la regla precisada. La dificultad de aplicación es porque la noción de territorio étnico va más allá de un espacio físico formalmente demarcado, como un resguardo, y se vincula a elementos culturales, ancestrales, así como espirituales (artículo 14 Convenio 169 OIT).*
>
> *Desde la Asamblea Nacional Constituyente se reconoció que el territorio y las comunidades indígenas poseen una relación simbiótica[132], esencial y constitutiva, que no puede ser equiparada a la que se deriva de la titularidad del derecho de propiedad clásico. Esa dimensión cultural del territorio se replica en el sistema regional de protección de derechos humanos.*
>
> *En múltiples decisiones, la Corte IDH advirtió que en relación con los pueblos indígenas debe superarse el concepto físico de propiedad del derecho civil clásico. Por ejemplo, en los casos de las comunidades Mayagna (Sumo) Awás Tingni vs. Nicaragua[133], Yakye Axa vs. Paraguay[134], Sawhoyamaxa vs. Paraguay[135], Xákmok Kásek vs. Paraguay[136], Moiwana vs. Surinam[137], Saramaka vs Surinam[138], Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador[139], Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros vs. Honduras[140] así como Kaliña y Lokono vs Surinam[141], se subrayó el vínculo que tiene la tierra con la cultura, la espiritualidad, la integridad de la colectividad, la supervivencia económica y la preservación de su ethos para las generaciones futuras. Así "el territorio tradicional de la [sociedad indígena o tribal abarca] aldeas, zonas de caza, pesca, lugares de entierro, fuentes de plantas medicinales y puntos relevantes en su*

[132] Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional N° 40.
[133] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awás Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
[134] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 17 de junio de 2005 (fondo, reparaciones y costas) Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay.
[135] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 29 de marzo de 2006 (fondo, reparaciones y costas) Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay.
[136] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 24 de agosto de 2010 (fondo, reparaciones y costas) Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay.
[137] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 15 de junio de 2005 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname.
[138] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam Sentencia del 28 de noviembre de 2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
[139] Corte Interamericana de Derechos Humanos Pueblo Indígena Kichwa De Sarayaku Vs. Ecuador Sentencia De 27 De Junio De 2012 (Fondo y Reparaciones).
[140] Corte Interamericana de Derechos Humanos Pueblo Indígena Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras, Sentencia de 8 de octubre de 2015 (Fondo y Reparaciones).
[141] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam, Sentencia de 25 de Noviembre de 2015.

historia[142]. También se indicó que dentro de los derechos de propiedad se comprende el uso y goce de los recursos naturales en sus territorios[143].

De manera que, conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH, que la Corte Constitucional comparte integralmente, la titularidad de ese derecho surge de la ocupación de un espacio determinado por parte de la minoría étnica y no de la formalización del derecho de propiedad que reconoce la administración, verbigracia un registro[144]. La posesión tradicional reemplaza el título que otorga el Estado[145]. La visión cultural de posesión y ocupación de tierras no corresponde con el concepto occidental de propiedad, pues tiene una significación colectiva y cultural, que merece ser salvaguardada, de conformidad con el artículo 21 de la Convención Americana[146].

El Tribunal internacional ha indicado entonces que la relación de los pueblos indígenas con el territorio debe analizarse en cada caso particular y dependiendo de los siguientes criterios[147]: i) las características de la comunidad, así como de las circunstancias en que ésta se encuentra; y ii) la posibilidad de que el grupo mantenga el vínculo con la tierra. El nexo puede expresarse con la presencia tradicional del pueblo, los lazos espirituales o ceremoniales, los asentamientos, los cultivos ocasionales, el uso de recursos naturales ligados a su costumbre y las formas tradicionales de subsistencia, por ejemplo, la caza, la pesca, la relación estacional o nómada con las tierras[148]. Ello se acompaña con la verificación de que la comunidad tuvo la opción de realizar sus prácticas sociales y culturales, de manera que no existían barreras de acceso[149].

La Corte IDH ha destacado que los derechos de propiedad comprenden el uso y goce de los recursos naturales que se encuentran en las tierras que tradicionalmente han poseído o en los terrenos adyacentes a los mismos. Esa salvaguarda permite que un colectivo pueda "continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas"[150]. Obviamente, como la autodeterminación de los pueblos

[142] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 24 de agosto de 2010 (fondo, reparaciones y costas) Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Párr 94-95.
[143] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, Sentencia de 12 de Agosto de 2008 (Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones Y Costas)". Ver párr 54 y 119.
[144]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 15 de junio de 2005 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, párr. 131.
[145]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam, Sentencia de 25 de Noviembre de 2015, párr. 131.
[146]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 24 de agosto de 2010 (fondo, reparaciones y costas) Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Párr 87.
[147]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam, Sentencia de 25 de Noviembre de 2015, párr. 151
[148] Ver sentencias de fondo y reparaciones de los casos de las Comunidades Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, párr. 154, Xkamok Kasek Vs. Paraguay, párr. 113 y Sarayaku Vs Ecuador, párr. 148.
[149] Ver Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, párr. 132, Caso Xákmok Kásek Vs. Paraguay, párr. 113, Sarayaku Vs Ecuador, párr. 148 y Kaliña y Lokono Vs Surinam, párr. 133.
[150] Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, Sentencia de 12 de Agosto de 2008 (Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones Y Costas).

indígenas y comunidades afrodescendientes reconocida constitucionalmente y por el derecho internacional es un derecho a la autodeterminación interna, que es distinto al derecho a la autodeterminación externa que opera en otras hipótesis, estos derechos de estos pueblo sobres sus recursos naturales deben ejercerse dentro del marco de la Constitución y el respeto a la integridad territorial del Estado (CP art 1).

Directamente ligado a las particularidades del presente caso, es claro que el territorio al que se desplazan las comunidades étnicas, por razones como el conflicto armado o por las grandes obras de infraestructura, también es protegido, cuando estos pueblos se han reconstituido claramente en esos nuevos espacios y desarrollan allí sus prácticas de supervivencia.[151] Esto es evidente por cuanto estos nuevos territorios al que han sido llevados los pueblos étnicos representan el soporte material de su diversidad cultural que el Estado tiene el deber de proteger.

Con tales derroteros la jurisprudencia constitucional ha reconocido dos conceptos de territorio, a saber: i) el geográfico, que comprende el espacio reconocido legalmente bajo la figura del resguardo[152] u otras figuras semejantes, como la de territorios colectivos de las comunidades afro descendientes; y ii) el territorio amplio, que incluye las zonas que habitualmente ha ocupado la comunidad indígena, al igual que los lugares en donde tradicionalmente los mencionados sectores de la sociedad han desarrollado sus actividades sociales, económicas, espirituales o culturales[153].

La Corte entiende que la noción de territorio amplio implica posibilidades de situaciones complejas e incluso territorios complejos. Por eso, para determinar el alcance de este territorio amplio y si procede la consulta previa por efecto de la posibilidad de afectación directa por una determinada medida, las autoridades deben tomar en consideración en el caso concreto los elementos económicos, culturales, ancestrales, espirituales que vinculan a un pueblo étnico a un determinado espacio como soporte material de su existencia y diversidad cultural.

Igualmente, conforme al principio de proporcionalidad, en este territorio amplio es posible que las autoridades competentes, para determinar si existe o no afectación directa por impacto en el territorio, tomen en consideración la intensidad y permanencia efectiva con la cual un pueblo étnico ha ocupado o no un determinado espacio específico, el grado de exclusividad con el cual ha ocupado esas porciones territoriales, al igual que sus particularidades culturales y económicas como pueblo nómada o sedentario, o en vía de extinción.

[151] Corte Constitucional Autos A-004 de 2009 y A-174 de 2011.
[152] Sentencias SU-039 de 1997 y T-005 de 2016, T-698 e 2011 y T 235 de 2011 estas últimas señalaron que el "título" de propiedad los grupos indígenas y tribales se deriva de la ancestralidad.
[153] Sentencias T-525 de 1998, SU-383 de 2003, T-880 de 2006, T-693 de 2011, T-698 de 2011, T-235 de 2011, T-282 de 2012, T-009 de 2013, T 197 de 2016 y T-436 de 2016.

Esto es así por cuanto los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio amplio no tienen el mismo alcance que aquellos que poseen y ejercen en el territorio geográfico. Por consiguiente, no toda medida que pueda tener algún impacto en el territorio amplio de un pueblo étnico implica automáticamente que exista una afectación directa que haga exigible la consulta previa. Será necesario que las autoridades en el caso concreto, y tomando en cuenta factores como los mencionados anteriormente (grado de permanencia y ocupación exclusiva en un territorio del pueblo respectivo, sus características propias) evalúen si la medida implica realmente una afectación directa, entendida, como ya se explicó (cfr. supra Fundamento 7.2.), como el impacto positivo o negativo que puede tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. El análisis de estos elementos, de intensidad, permanencia o exclusividad, debe guiarse por un enfoque étnicamente diferenciado en la valoración de la afectación directa. Igualmente, para realizar dicho análisis y evaluación, la Corte considera que resulta particularmente relevante lo dispuesto en el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT, según el cual los "gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas".

Con base en esa delimitación conceptual, la jurisprudencia ha explicado que el territorio es un criterio para determinar la afectación de una comunidad e identificar la procedibilidad de la consulta previa[154]. En la jurisprudencia se ha decantado que:

(i) El territorio de las comunidades se define con parámetros geográficos y culturales. La demarcación es importante para que el derecho de propiedad de las comunidades pueda tener una protección jurídica y administrativa. Sin embargo, ello no puede soslayar que esa franja se expande con los lugares religiosos o culturales. En efecto, estas áreas tienen protección así estén o no dentro de los terrenos titulados. (Sentencias T-525 de 1998, Sentencia T-693 de 2011, T-698 de 2011, T-235 de 2011 y T-282 de 2012).

(ii) Los argumentos sobre la ausencia de reconocimiento oficial de una comunidad son insuficientes para que el Estado o un privado se nieguen a consultar una medida con una comunidad étnica. (Sentencias T-372 de 2012, T-693 de 2012, T-993 de 2012, T-657 de 2013 y T-172 de 2013).

[154] 110. En la reciente Opinión Consultiva OC-23/17, la Corte IDH instó a *"proteger esta conexión, entre el territorio y los recursos naturales que tradicionalmente han usado y que son necesarios para su supervivencia física y cultural y para el desarrollo y continuidad de su cosmovisión, a efecto de garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico"* no se vean afectados.

(iii) La propiedad colectiva se funda en la posesión ancestral, de manera que el reconocimiento estatal no es constitutivo. Por lo tanto: la ausencia de reconocimiento no implica la inexistencia del derecho; y la tardanza o la imposición de trámites irrazonables para la obtención de ese reconocimiento constituye, en sí misma, una violación al derecho. (Sentencias T-693 de 2011 y T-698 de 2011).

(iv) La interferencia que padecen los grupos étnicos diferenciados en sus territorios comprende las zonas que se encuentran tituladas, habitadas y exploradas y todas aquellas franjas que han sido ocupadas ancestralmente y que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, religiosas y espirituales. En esta concepción amplia de territorio adquieren importancia los lugares sagrados que no se encuentran al interior de los resguardos, pues en ellos la comunidad indígena puede desenvolverse libremente según su cultura y mantener su identidad.

De manera que, conforme lo explicado, no es posible restringir el concepto de territorio a reglas abstractas y formalistas, sin atender las particularidades de cada comunidad étnica[155] *pues el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas implica respetar su concepción sobre el territorio o establecer las razones de su reasentamiento, y por ello además deberá indagarse en la ley consuetudinaria de la colectividad o derecho mayor y con la comunidad en los términos del artículo 7.3 del Convenio 169 OIT*[156] *sin que, en ningún caso pueda establecerse un criterio uniforme rígido de delimitación territorial*[157].

10. AFECTACIÓN DIRECTA BASADA EN PERTURBACIÓN AL AMBIENTE, A LA SALUD O A LA ESTRUCTURA SOCIAL, ESPIRITUAL, CULTURAL O ECONÓMICA DE LA COLECTIVIDAD.

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU 123 de 2018, mencionó lo siguiente

Como se explicó la afectación directa es determinante para establecer si procede o no la consulta previa. Además de la perturbación al territorio, se ha establecido que también se concreta si es existe evidencia razonable de que, con la medida, se perjudique i) la salud, así como el ambiente, representado en la inequidad frente a la distribución de cargas y beneficios ambientales; y ii) las estructuras sociales, espirituales, culturales y ocupacionales en un colectivo[158]*, que no pueden ser percibidos por estudios técnicos ambientales.*

[155] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos: comunidades Mayagna (Sumo) Awás Tingni Vs. Nicaragua, Yakye Axa Vs. Paraguay, Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Xákmok Kásek Vs. Paraguay, Moiwana Vs. Suriname, Saramaka Vs Surinam, Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras así como Kaliña y Lokono Vs Surinam.
[156] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos: comunidades Mayagna (Sumo) Awás Tingni Vs. Nicaragua, Yakye Axa Vs. Paraguay, Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Xákmok Kásek Vs. Paraguay, Moiwana Vs. Suriname, Saramaka Vs Surinam, Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras así como Kaliña y Lokono Vs Surinam.
[157] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos: comunidades Mayagna (Sumo) Awás Tingni Vs. Nicaragua, Yakye Axa Vs. Paraguay, Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Xákmok Kásek Vs. Paraguay, Moiwana Vs. Suriname, Saramaka Vs Surinam, Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras así como Kaliña y Lokono Vs Surinam.
[158] Sentencia SU-133 de 2017.

Sobre el primer tópico la Corte IDH[159] y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Observación General N° 24)[160] han afirmado que la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan de manera directa el goce de los derechos humanos. En el caso concreto de las comunidades étnicas, han manifestado que la relación entre el ambiente y la protección de algunas garantías, como los derechos de propiedad y de consulta previa permiten salvaguardar a las comunidades y garantizar la continuidad del estilo de vida de esos pueblos. Adicionalmente, los grupos indígenas se ven afectados de manera desproporcionada porque se enfrentan a obstáculos especiales para acceder a los mecanismos de rendición de cuentas y reparación.[161]

Entre otras, en las Sentencias T-129 de 2011, T-693 de 2011, T-359 de 2015, T-704 de 2016, T-730 de 2016, T-272 de 2017 y T-733 de 2017[162], esta Corte ha considerado que ocurre afectación directa de una comunidad indígena en el evento en que la explotación del proyecto apareja un impacto negativo ambiental, el cual causa un reparto inequitativo de los bienes y cargas de los nichos ecológicos. Esto por cuanto se produce un desconocimiento de los artículos 79 y 13 Superiores, al lesionar los derechos a la salud, al goce del ambiente sano y a la igualdad, puesto que impide el "acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las cargas contaminantes, al igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales discriminados o marginados"[163]. Esa ruptura es la que obliga a que se produzca una retribución y compensación como resultado de los daños originados en las actividades lícitas que se desarrollan en ejercicio del interés general.

Ahora bien, en cuanto al segundo tópico, relacionado con la afectación directa por perturbaciones en la estructura social, espiritual, cultural o económica de los pueblos indígenas o tribales, en las Sentencias T-1045A de 2010 y SU-133 de 2017 la Corte concluyó que era obligatorio proceder a la consulta previa, comoquiera que la suscripción de una concesión minera o la autorización de una cesión de derechos de explotación constituía una afectación directa, al poner en riesgo la supervivencia cultural y económica de las colectividades, dado que éstas derivaban su sustento de la minería, actividad que quedaba en incertidumbre por los actos mencionados".

---

[159] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. párr. 148. En el mismo, sentido ver Opcit, Opinión Consultiva OC- 023 de 2017, párr. 47. En el mismo sentido ver los casos Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 129; Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párrs. 31 a 39; Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, supra, párr. 205; Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras, supra. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 156, y Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam, supra, párrs. 214 y 215.

[160] Organización de las Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 24, Distr. General 10 de agosto de 2017, E/C.12/GC/24, párrafo N° 8.

[161] Ibídem.

[162] Allí se indicó que la concertación era necesaria, porque la explotación de minerales causaba las perturbaciones al ambiente (agua, aire, animales y plantas), así como a la salud y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas de la zona. Esto no fue afectado por la nulidad que se resolvió en el Auto 616 de 2018.

[163] Sentencia SU-133 de 2017

11. CONSULTA PREVIA Y JUSTICIA AMBIENTAL

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU 123 de 2018, mencionó lo siguiente

> *"En caso de afectaciones ambientales, el derecho a la consulta previa tiene conexiones íntimas con la justicia ambiental, como lo ha mostrado esta Corte, pues ante la perturbación ambiental de los pueblos indígenas y tribales ha activado la consulta previa para recomponer, a través de la participación, el reparto desigual de las cargas y los beneficios ambientales.*
>
> *La justicia ambiental ha sido entonces utilizada por esta Corte para resolver asuntos de distribución inequitativa de cargas ambientales entre los diferentes grupos sociales y defender la participación de colectividades afectadas. Esta construcción teórica ha servido para identificar afectaciones directas a una comunidad como resultado de un proyecto productivo que trae consecuencia o efectos a los ecosistemas.*
>
> *Según la Sentencia T-294 de 2014, la justicia ambiental puede ser entendida como el "tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales". La justicia ambiental es entonces un marco analítico que ha permitido terciar ante un conflicto ecológico distributivo, dado que intenta eliminar la discriminación que padecen algunas comunidades en relación con el acceso de servicios ambientales y de la exposición superlativa a los desechos de ciertas industrias. La Corte ha considerado que la justicia ambiental, dentro del marco de la Constitución[164], está compuesta por cuatro elementos interrelacionados: i) la justicia distributiva; ii) la justicia participativa; iii) el principio de sostenibilidad; y iv) el principio de precaución.*
>
> El componente de *justicia distributiva*[165] respalda el reparto equitativo de las cargas y beneficios ambientales para los habitantes de un Estado, sin que sea aceptable diferenciar algún sector de la población debido a su origen étnico, de su género o de su condición socioeconómica. Una *justicia participativa*[166] significa que en las decisiones ambientales se exige la intervención activa y significativa de las personas que resultan afectadas por la ejecución de determinada actividad. El *principio de sostenibilidad* reclama que los sistemas económicos y sociales deben ser reproducibles sin el deterioro de los ecosistemas en que se

[164] Sentencia T-294 de 2014.
[165] Esa característica se justifica en los siguientes mandatos: i) un principio de equidad ambiental prima facie, esto es, debe justificarse el reparto inequitativo de bienes y cargas ambientales en el diseño, implementación y aplicación de una política ambiental o en la realización de un programa, obra o actividad que entraña perjuicios ambientales; y ii) un principio de efectiva retribución o compensación, que implica que las personas que padecen cargas o pasivos ambientales producto de una obra o proyectos deben ser compensadas.
[166] Esto incluye la intervención de las comunidades étnicas diversas a través de la consulta previa. Tal elemento incluye la apertura de espacios para comunidad con el fin de que ésta intervenga en: i) las decisiones del proyecto; ii) la planeación; y iii) la evaluación de impactos, al igual que la forma de mitigarlos, compensarlos y prevenirlos. En este aspecto, la idea es que coexista el conocimiento técnico con el saber nativo sobre los asuntos locales.

apoyan, esto es, la viabilidad ecológica. Conforme a este principio, las actividades humanas tienen la obligación de respetar los límites de absorción y de regeneración del ambiente, de modo que no se comprometa su disfrute para las generaciones futuras y para otras especies vivas no humanas[167]. En este escenario, se construyó un "*imperativo ambiental*". El *principio de precaución* prescribe que los agentes ambientales deben abstenerse de ejecutar una actividad que causa una perturbación ambiental inaceptable, siempre y cuando exista una duda razonable de que el acto pueda causar un daño a la naturaleza. Este principio se convierte entonces en una guía de acción humana para comportarse ante la incertidumbre de perjuicio en un ecosistema y prevenir ese riesgo. Además, reconoce la falibilidad de la ciencia, lo cual impone al ser humano la obligación de ser prudente ante la incertidumbre de una eventual lesión. El principio de precaución materializa los deberes de protección y salvaguarda del medio ambiente.

En las sentencias T-294 de 2014, SU-133 de 2017, SU-217 de 2017 y T-272 de 2017, la Corte consideró que el derecho a la consulta previa puede ser entendido, entre otras cosas, como una garantía procedimental para lograr justicia ambiental para las minorías étnicas. La razón: la justicia ambiental permite referirse a la administración y al manejo de las acciones humanas que impactan en el ambiente, la distribución de los costos negativos que causan los actos productivos de las personas, y el acceso a los recursos naturales, como sucede en los casos de exploración y extracción de recursos bióticos no renovables, ya sea minería o hidrocarburos".

12. LA INTENSIDAD DE LA AFECTACIÓN, EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y LOS NIVELES DE CONSULTA CON LOS GRUPOS ÉTNICOS.

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU 123 de 2018, mencionó lo siguiente

"La consulta previa es constitucionalmente exigida cuando una medida puede afectar directamente a un grupo étnico. Pero ¿qué sucede si existe afectación al grupo étnico, pero es de menor intensidad, al punto de que no pueda ser calificada de afectación directa? O, por el contrario, ¿qué sucede en otros eventos en donde estamos en presencia de una afectación tan intensa que puede llegar, por ejemplo, a comprometer la existencia del pueblo indígena? Esta pregunta es relevante frente al caso concreto pues la Corte deberá interrogarse acerca del eventual nivel de afectación del pueblo indígena que presentó la tutela. Ahora bien, en todos los casos, existe un cierto derecho de participación de los pueblos indígenas cualquiera que sea la afectación, como manifestación del derecho a la participación, pero, conforme al principio de proporcionalidad, el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia constitucional han entendido que los tipos de participación son diversos.

[167] En Sentencia T-411 de 1992, la Corte manifestó que la protección al medio ambiente está ligada al derecho a la vida de las generaciones actuales y de las ulteriores. Así consideró que: "*El patrimonio natural de un país pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes"*

Las opciones son la participación de la colectividad en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos, el derecho a la consulta previa o la necesidad de la obtención del consentimiento previo libre e informado (CPLI). Esa diversificación por escalas es el resultado de una comprensión de los derechos de las comunidades indígenas en clave del principio de proporcionalidad. Se trata entonces de establecer límites en la aplicación de los derechos fundamentales, entre ellos los de los grupos étnicos diversos en materia de autodeterminación, autonomía, territorio, recursos naturales y participación, a partir del balance adecuado entre los principios.

Cuando la medida no afecte directamente al pueblo étnico[168]*, la participación corresponderá al estándar de intervención básico que se relaciona con la inclusión de las comunidades en los órganos decisorios nacionales o la mediación de sus organizaciones en cualquier escenario que les interese*[169]*.*

Cuando la medida sea susceptible de afectación directa al pueblo étnico, se aplican todas las reglas de deliberación con las comunidades tradicionales, conforme al derecho a la consulta previa y con el propósito genuino de llegar a un acuerdo. En caso de que la consulta sea adecuadamente realizada pero no conduzca a un acuerdo, la administración deberá implementar la medida con base en los principios de razonabilidad y proporcionalidad[170]*.*

La afectación directa intensa aplica cuando una medida amenace la subsistencia de la comunidad tradicional, por lo cual, en principio, la ejecución de la medida requiere el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades tradicionales y en caso de no llegar a un acuerdo, prevalecerá la protección de las comunidades tradicionales. Se da en estos tres casos excepcionales, conforme a los desarrollos jurisprudenciales y del derecho internacional[171]*: (i) Traslado o reubicación del pueblo indígena o tribal de su lugar de asentamiento*[172]*; (ii) el almacenamiento o depósito de materiales peligrosos o tóxicos en sus territorios*[173]*: (iii) medidas que impliquen un alto impacto social, cultural y ambiental que pone en riesgo su subsistencia*[174]*.*

No obstante, en algunos casos la Corte se ha abstenido de calificar el grado de afectación, pese a que ha identificado la existencia de una perturbación de la entidad suficiente para ordenar la consulta previa. Esa determinación se ha sustentado en que la comunidad debe

[168] La jurisprudencia de la Corte ha entendido que la afectación leve es un sinónimo de afectación indirecta.
[169] Corte Constitucional Sentencia T-236 de 2017 y T-298 de 2017.
[170] Sentencia C-389 de 2016.
[171] Sentencia T-129 de 2011 y T-769 de 2009.
[172] Sentencia T-256 de 2015
[173] Sentencia T-129 de 2011. Art. 29-1 Declaración Ds Pueblos Indígenas.
[174] Sentencias T-129 de 2011, T-376 de 2012, C-068 de 2013 T-766 de 2015, C-371 de 2014, T-969 de 2014, T-197 de 2016, T-766 de 2015, T-764 de 2015, T-661 de 2015, T-550 de 2015 y, T-256 de 2015. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam.

ser quién determine ese aspecto en el marco de la consulta previa[175]*. En otras situaciones, el Tribunal ha verificado la afectación directa, pero ha modulado el grado de afectación ante la existencia de intereses constitucionales en tensión, verbigracia la seguridad nacional*[176]*.*

El siguiente cuadro señala las distinciones fundamentales entre el derecho a la consulta previa y el derecho al consentimiento libre e informado.

	CONSULTA PREVIA	***CONSENTIMIENTO PREVIO LIBRE E INFORMADO***
CONCEPTO	*Es el derecho que tiene los pueblos indígenas de ser consultados ante medidas (legislativa o administrativa) que los afecten de manera directa. Se trata de un instrumento de diálogo entre las comunidades indígenas, gobiernos, sociedad civil y agentes productivos en aspectos y decisiones que causen afectación en este sector de la población.*	*Es derecho que tiene los pueblos indígenas a que la implementación de una medida (legislativa o administrativa) que los afecta de manera intensa y requiera su consentimiento previo, libre e informado.*
FINALIDAD	*Un esfuerzo genuino por lograr un acuerdo con las comunidades indígenas frente a las medidas que les causan una afectación directa y obtener su consentimiento.*	*Garantizar los derechos fundamentales y la supervivencia (física-cultural) de las comunidades étnicas diversas*
SUJETOS QUE INTERVIENEN	*Las autoridades ancestrales de la comunidad, y los representantes del Estado y del agente productivo*	*Las autoridades ancestrales de la comunidad, y los representantes del Estado y de la agente productivo*
CRITERIOS MÍNIMOS	*Buena fe, participación y eficaz de la comunidad, diálogo entre iguales y, procedimiento flexible y adecuado.*	*Buena fe, participación y eficaz de la comunidad, diálogo entre iguales y, procedimiento flexible y adecuado.*
HIPÓTESIS DE ACTIVACIÓN	*Medidas legislativas y administrativas que afecten de*	*Aplica ante las medidas que se enuncian a continuación: i) el*

[175] Sentencia T-698 de 2011. La Sala consideró que la construcción de una estación de comunicaciones podría afectar claramente el derecho a la salud, al medio ambiente y a la cosmovisión de la comunidad.

[176] Sentencias T-005 de 2016. En esa ocasión, la Corte encontró probada la afectación directa a las costumbres ancestrales de comunidades étnicas, por la construcción de un batallón en un territorio ancestral, y sin embargo ordenó como consulta la construcción de un diálogo concertado y continuo encaminado a modificar las características del proyecto, sin considerar la necesidad del consentimiento previo, y sin ordenar la suspensión de las operaciones del batallón.

	manera directa a una comunidad indígena	*traslado o reubicación del pueblo indígena o tribal de su lugar de asentamiento; ii) medidas que implican un alto impacto social, cultural y ambiental alto que pone en riesgo su subsistencia; o iii) las relacionadas con el almacenamiento o depósito de materiales peligrosos –tóxicos- en sus tierras y territorios.*
VINCULACIÓN DE LA DECISIÓN	*En caso de que haya acuerdo, el Estado y el agente económico tiene la obligación de materializar y cumplir lo pactado.* *Si no hay acuerdo, el Estado puede tomar e implementar la medida, siempre y cuando su decisión: i) esté desprovista de arbitrariedad y autoritarismo, ii) esté basada en criterios de 'razonabilidad, proporcionalidad y objetividad respecto del deber de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación; iii) tome en consideración hasta donde sea posible las posiciones expresadas por las partes, y en especial el pueblo étnico, durante la consulta; iv) respete los derechos sustantivos reconocidos en el Convenio 169 OIT; y v) prevea mecanismos para atenuar los efectos negativos de la medida."*	*El Estado en principio sólo tiene la facultad de implementar la medida si obtiene el consentimiento, previo, libre e informado de la comunidad indígena.* *La anuencia del pueblo étnico diverso es en principio vinculante, puesto que, sin éste, la implementación de la medida entraña una violación de los derechos de estos colectivos. En casos excepcionales, la medida podrá ser implementada sin el consentimiento de los pueblos, pero el Estado deberá en todo caso garantizar los derechos fundamentales y la supervivencia (física-cultural) de las comunidades étnicas diversas y deberá realizar las correspondientes reparaciones a los pueblos por esta determinación."*

13. EL DEBER ESTATAL DE RESPETAR Y GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA Y EL PROBLEMA DE LOS CERTIFICADOS DE PRESENCIA DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS.

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU 123 de 2018, mencionó lo siguiente:

> *"Una vez recordados los criterios jurisprudenciales sobre la naturaleza de la consulta previa y los principios que rigen su procedencia y su forma de realizarse, la obvia pregunta que surge es a quién corresponde respetarla y garantizar su observancia.*
>
> *Conforme a la Constitución y al derecho internacional de los derechos humanos, la responsabilidad esencial corresponde al Estado, quien debe no sólo respetar el derecho a la consulta previa, esto es, evitar que sus agentes desconozcan ese derecho, sino también proteger y garantizar ese derecho de los pueblos indígenas incluso frente a actuaciones de los particulares, y en especial de las empresas. Esto significa que es deber del Estado tomar todas las medidas necesarias para amparar ese derecho de los grupos étnicos, lo cual incluye, entre otras, una adecuada demarcación de sus territorios y la existencia de una institucionalidad capaz de asegurar que las consultas sean realizadas en debida forma en aquellos casos exigidos por la Constitución.*
>
> *La mejor forma de compatibilizar el derecho irrenunciable a la consulta previa de los grupos étnicos con la importancia de lograr seguridad jurídica y proteger la confianza legítima de los inversionistas que quieren desarrollar proyectos de inversión es que exista una demarcación adecuada de los territorios étnicos y que el Estado esté dotado de una institucionalidad robusta en este campo que permita que una autoridad competente certifique rigurosamente que la consulta fue debidamente realizada o no es requerida frente a un determinado proyecto.*
>
> *En este contexto, la Corte no puede dejar de recordar los problemas prácticos derivados de las certificaciones expedidas por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que han sido constatados en numerosas sentencias de esta Corporación, como la T-693 de 2011 o la T-298 de 2017, entre muchas otras.*
>
> *La primera dificultad radica en la debilidad administrativa y financiera y la precaria independencia técnica de esa dirección, que le impide muchas veces realizar adecuadamente sus funciones, por lo cual en casos decididos por esta Corte esa dirección ha certificado equivocadamente que no existían grupos étnicos en territorios en donde efectivamente había presencia de esos grupos, con lo cual no fue realizada una consulta previa que era requerida constitucionalmente. Estas situaciones afectan los derechos de los grupos étnicos y generan inseguridad jurídica para los inversionistas. La Corte concluye que es necesario fortalecer la capacidad institucional del Estado en esta materia, por lo cual exhortará en la parte*

resolutiva de esta sentencia al gobierno y al congreso a que tomen las medidas institucionales para que exista una institucionalidad sólida e independiente en relación con la expedición de este tipo de certificaciones, que compatibilice así el derecho a la consulta de los grupos étnicos con la seguridad jurídica a los inversionistas

La segunda dificultad consiste en que dicha certificación tiene como objetivo establecer si en el área de interés del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar una empresa, se registra o no la presencia de una comunidad étnica sobre la cual se debería garantizarse el derecho fundamental a la consulta previa. De acuerdo con el artículo 3°[177] del Decreto 1320 de 1998[178], le corresponde al Ministerio del Interior –Dirección de Consulta Previa– adelantar el procedimiento de verificación de la presencia de las comunidades indígenas y afrodescendientes en "el ***área de influencia directa del proyecto****, obra o actividad". Como se explicó en el apartado correspondiente de esta sentencia de unificación, para determinar la procedencia de la consulta previa no es suficiente la constatación de la presencia de comunidades étnicas en el área de influencia de un proyecto, obra o actividad. El criterio adecuado e indispensable para establecer la aplicación de la consulta previa es el de afectación directa.*

Lo anterior, porque los estudios técnicos en los que se basa el concepto de "área de influencia" no dan cuenta de los impactos ambientales, a la salud, culturales, sociales o espirituales que pueden ocasionarse sobre los pueblos indígenas o tribales. "Por ello, el área de influencia directa de una medida (especialmente, de medidas ambientales) es un criterio de gran importancia para evaluar si existe una afectación directa, pero no es una condición definitiva, ni el único elemento de juicio para los operadores jurídicos"[179]. En otras palabras, el área de influencia no establece toda la afectación directa ni la comprende, pues no tiene ese propósito. Por el contrario, el concepto de afectación es el criterio determinante para establecer si procede la consulta previa, por lo que es esencial para este derecho fundamental.

[177] "*ARTÍCULO 3o. IDENTIFICACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y NEGRAS. Cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda realizar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas con el proyecto,* ***le corresponde al Ministerio del Interior certificar la presencia de dichas comunidades, el pueblo al que pertenecen, su representación y ubicación geográfica****. El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria - Incora, certificará sobre la existencia de territorio legalmente constituido. Las anteriores entidades, expedirán dicha certificación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud que para el efecto haga el interesado en el proyecto obra o actividad, la cual contendrá: A Identificación del interesado: a) Fecha de la solicitud; b) Breve descripción del proyecto, obra o actividad; c) Identificación del* ***área de influencia directa del proyecto****, obra o actividad, acompañada de un mapa que precise su localización con coordenadas geográficas o con sistemas Gauss 8…*

[178] "*Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.*"

[179] Sentencia SU-217 de 2017

Los problemas de dicha distinción han sido reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde las Sentencias T-880 de 2006[180], T-547 de 2010[181], T-693 de 2011[182], T-284 de 2014[183], T-849 de 2014[184], T-549 de 2015[185], T-436 de 2016[186] y T-298 de 2017[187]. En esos casos las Salas de Revisión concluyeron que el certificado expedido por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior carecía de eficacia jurídica, comoquiera que no tenía en cuenta todos los parámetros que establece el Convenio 169 de la OIT para identificar la afectación directa que sufren las comunidades con un proyecto. En esos casos, las decisiones administrativas asimilaron el concepto de área de influencia del proyecto con el de afectación directa.

La Corte considera que, con el fin de eliminar la inseguridad jurídica en esta materia, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior debe interpretar su competencia conforme a los principios constitucionales relativos al derecho a la consulta previa de los pueblos étnicos, por lo cual no debe limitarse a señalar la presencia o ausencia de dichos pueblos dentro del territorio correspondiente al área de afectación del proyecto, sino que debe incorporar dentro de los certificados que expida un estudio particular y expreso sobre la posible afectación directa que pueda causar el proyecto, obra o actividad a las comunidades étnicas con independencia de la limitación del área de influencia. Dicho estudio debe seguir las reglas fijadas en relación con el concepto de afectación directa señaladas en la presente sentencia.

---

[180] En ese caso se presentó una perturbación a un sitio sagrado de la comunidad, por lo que se reprochó el concepto geográfico de territorio expuesto en la certificación de la presencia de comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto, que constataba que en esta área no había ese tipo de grupos.

[181] Aquí se defendió un concepto amplio de territorio y se censuró que la certificación del Ministerio del Interior hubiese desconocido que existía una afectación directa a los miembros de la comunidad indígena, al intervenir un área sagrada que se encontraba fuera de la línea negra.

[182] En el caso se estudió la procedencia de la consulta previa en la construcción del Oleoducto del Llano. La Sala Séptima de Revisión censuró que las autoridades dieran validez a la certificación y obviaran las demás pruebas que evidenciaban la presencia de la comunidad actora de ese entonces, pues se encontraba en un territorio ancestral.

[183] En la construcción del relleno sanitario de Cantagallo, la Sala Primera de Revisión reprochó al Ministerio del Interior que hubiese certificado la inexistencia de las colectividades indígenas, debido a que esa decisión significaba que había olvidado las manifestaciones del Cabildo Mayor del Resguardo de San Andrés de Sotavento, que indicaban que en zona del proyecto se encontraban comunidades indígenas afectadas.

[184] La Corte declaró que el certificado del Ministerio del Interior, que había negado la presencia de comunidades indígenas, violó sus derechos fundamentales, pues, lo que determina la procedencia de la consulta es la posible incidencia en sus derechos y no las coordenadas geográficas en que, por regla general, se basan estos certificados. Inclusive, resaltó que se había desconocido que el proyecto recaía sobre un terreno que se conoce como "Línea Negra", el cual se entiende que hace parte del territorio ancestral de la comunidad.

[185] En el asunto sometido a revisión, se concluyó que el Ministerio del Interior había vulnerado el derecho a la consulta previa de las parcialidades indígenas de Maisheshe La Chivera, Flores de Chinchelejo, Tatachio Mirabel, Mateo Pérez, Sabanalarga – Palito y Lomas de Palito, porque certificó que no había presencia de comunidades tribales en el área de influencia de la construcción de la segunda calzada de la carretera de Sincelejo-Toluviejo, concepto que no tuvo en cuenta parámetros que evaluaran el impacto espiritual y ritual del proyecto en los cerros de Sierra Flor y una visión amplia del territorio de las comunidades étnicas diferenciadas.

[186] En una demanda propuesta por el Cabildo de la Comunidad Awá del Alto Temblón, a propósito de una explotación petrolera adelantada a 1600 metros de distancia de una comunidad que habitaba en la vereda el Naranjito, la Sala Octava de Revisión descartó el argumento de no presencia de las comunidades con base en que dicha afectación no puede ser obviada con fundamento en argumentos formales, como resoluciones que niegan la existencia de comunidades en el área de influencia del proyecto (cuando se ha comprobado que esta comunidad habita veredas que se sufren las consecuencias de la explotación de hidrocarburos) o la inexistencia de requisitos que las tuvieran en cuenta al momento de autorizar la explotación de recursos naturales en el entorno que habitan.

[187] En ese caso se descartaron las certificaciones de ausencia de presencia de comunidades indígena en la zona de influencia de un proyecto petrolero adelantado en el Municipio de Puerto Gaitán Meta. Lo anterior, en razón de que el programa significaba la intervención del Río Guarrojo, el cual tiene un significado espiritual y ritual para comunidad. Así, se intervino el territorio extendido de la comunidad, por lo que era imposible expedir un concepto de no presencia de las comunidades étnicas.

La Corte también considera que el Ministerio Público, conforme a sus atribuciones legales y constitucionales, tiene responsabilidades en el procedimiento de expedición de certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas. La Corte entiende entonces que la Defensoría del Pueblo[188] y la Procuraduría General de la Nación[189], en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en el trámite de certificación de presencia, estarán habilitados para advertir y adelantar, con base en las medidas de control que les corresponde, las eventuales omisiones en el deber de identificación de la posible afectación directa de una determinada comunidad étnica.

Adicionalmente, para determinar la presencia y afectación de las comunidades étnicas, las autoridades competentes deberán, cuando sea relevante, recurrir a las entidades territoriales, a las corporaciones regionales y a las instituciones académicas, culturales o investigativas especializadas (p.e. el Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICAHN– o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC–) con el fin de obtener la información que permita establecer con la mayor seguridad jurídica si un pueblo indígena o afrocolombiano se encuentra o podría resultar afectado por un proyecto o actividad dentro de un determinado territorio. Esta consulta a las entidades territoriales y a las instituciones especializadas se justifica por cuanto ellas poseen en muchas ocasiones la información más actualizada y precisa sobre la presencia y características de los grupos étnicos en los territorios."

14. LA DEBIDA DILIGENCIA DE LOS PARTICULARES Y EN ESPECIAL DE LAS EMPRESAS FRENTE AL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA.

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU 123 de 2018, mencionó lo siguiente:

"Aunque la responsabilidad esencial frente a la consulta previa es del Estado, eso no implica que los particulares, y en particular las empresas, no tengan deberes frente a este derecho fundamental. Esta conclusión deriva no sólo del efecto frente a terceros que tienen los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional colombiano sino también en el reconocimiento por el derecho internacional de los derechos humanos de que las empresas

[188] *El artículo 13 del Decreto 25 de 2014 (Orgánico de la Defensoría del Pueblo) señala que son funciones de las Defensorías Delegadas "2. Velar por el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos y la observancia del Derecho Internacional Humanitario y adelantar las acciones y estrategias que se requieran para el efecto. // 3. Adelantar las acciones y estrategias que se requieran para la protección de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, bajo los lineamientos del Defensor del Pueblo. // 4. Presentar las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares, en caso de amenaza o violación de los Derechos Humanos y la inobservancia del Derecho Internacional Humanitario. // 5. Adelantar las investigaciones de oficio o a petición de parte, sobre las presuntas violaciones de los Derechos Humanos y la inobservancia del Derecho Internacional Humanitario y rendir los informes sobre el resultado de las mismas al Defensor del Pueblo."*

[189] *El artículo 24 del Decreto 262 de 2000 (Orgánico de la Procuraduría General de la Nación), en concordancia con la Resolución No. 017 del mismo año y la misma entidad, establece como función de la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, la de "intervenir ante las autoridades públicas, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público o las garantías y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas".*

tienen ciertas obligaciones frente a los derechos humanos, que no son equivalentes a las de los Estados pero que distan de ser menores e irrelevantes.

La Declaración de Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (conocidos como los "Principios Ruggie"), que fueron avalados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas[190], confirman la máxima bien establecida del derecho internacional de que (i) los Estados tienen el deber de ***proteger*** *los derechos humanos, por ejemplo, contra violaciones cometidas por las empresas comerciales y otras terceras partes, mediante medidas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia; pero que las (ii) las empresas deben* ***respetar*** *los derechos humanos, actuando con la debida diligencia para no vulnerar los derechos humanos o contribuir a vulnerarlos; y que existe (iii) la necesidad de que sean establecidas vías de recurso efectivas para* ***reparar*** *las violaciones cuando se producen. El Principio 17 de esta Declaración, relativo a "la debida diligencia en materia de derechos humanos", señala que, sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos, a fin de identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas de sus actividades.[191]*

*Por su parte, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, a través de la Observación General número 24[192] indicó que los Estados tienen ciertas obligaciones en el contexto de la actividad empresarial. Señaló que se debe velar por que, cuando proceda, los efectos de las actividades empresariales en los pueblos indígenas (en particular, las consecuencias adversas reales y potenciales sobre los derechos a la tierra, los recursos, los territorios, el patrimonio cultural, los conocimientos tradicionales y la cultura de los pueblos indígenas) se incorporen de manera específica en las evaluaciones del impacto en los derechos humanos.[193] Adicionalmente, la Observación General señaló que las empresas deben seguir el estándar de "****diligencia debida"*** *en materia de derechos humanos, con base en el cual deberán celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de las instituciones representativas de los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de iniciar actividades. Esas*

---

[190] *Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, "Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para 'proteger, respetar y remediar", resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, A/HRC/17/31.*

[191] Según el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este proceso debe incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. En criterio del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la debida diligencia en materia de derechos humanos: a) Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales; b) Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de graves consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el contexto de sus operaciones; c) Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el contexto operacional de las empresas. Al respecto consultar el documento "Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos", documento de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, disponible en versión digital en el link: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf

[192] Organización de las Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 24, Distr. General 10 de agosto de 2017, E/C.12/GC/24.

[193] *Op. Cit.* Observación General número 24, párrafo 15.

consultas deben permitir la identificación de los posibles efectos negativos de las actividades y de las medidas a fin de mitigarlos y contrarrestarlos. También deben propiciar la creación de mecanismos de participación en los beneficios derivados de las actividades.

Igualmente, en el ámbito interamericano, la Corte IDH, en el caso Pueblos Kaliña Lokono contra Surinam, sentencia del 25 de noviembre de 2015, tuvo en cuenta los "Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos" de Naciones Unidas para señalar los deberes de debida diligencia de las empresas frente a los derechos humanos en general y, en particular, frente a los derechos de los pueblos indígenas, que incluye el derecho a la consulta previa.

En el mismo sentido, el Relator Especial para los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas[194], ha señalado el deber que tienen los Estados y las empresas de seguir los parámetros mínimos de ***debida diligencia*** *para la garantía de los derechos de las comunidades indígenas, en particular, la consulta previa. Específicamente, de acuerdo con los informes del Relator[195], existen dos tipos de responsabilidades: (a) los deberes generales; y (b) la configuración del estándar mínimo de la protección de las comunidades indígenas (estándar de debida diligencia). En todo caso, para la definición de estos asuntos, son determinantes (i) el deber de debida diligencia en el reconocimiento, (ii) el deber de diligencia sobre las tierras, territorios y recursos naturales, y (iii) el deber de diligencia en consultar incorporados en el referido informe.*

La Corte considera que, en los casos de consulta previa, estos parámetros son referentes razonables para valorar la actuación de las empresas en relación con el deber de desarrollar la consulta previa. Lo anterior, teniendo en cuenta que, como ha explicado la jurisprudencia constitucional[196], los pronunciamientos de las instancias internacionales, encargadas de interpretar los diferentes instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, constituyen un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales. La Corte, en aplicación de la función interpretativa del bloque de constitucionalidad, de forma reiterada ha utilizado las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los comités de monitoreo de tratados de Naciones Unidas (como el PIDESC) así como las recomendaciones de los comités de monitoreo de Naciones Unidas, las recomendaciones generales de estos mismos órganos y los reportes emitidos en el marco de los sistemas interamericano y Universal, entre otros, como criterio hermenéutico relevante para establecer el alcance de la protección de los derechos fundamentales.[197]

[194] Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, Informe del Relator Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, informes A/HRC/15/37 del 19 de julio de 2010 y A/HRC/21/47 del 6 de julio de 2012, presentados por el Relator Especial para los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas, en 15° y 21° periodos de sesiones.
[195] Informes A/HRC/15/37 del 19 de julio de 2010 y A/HRC/21/47 del 6 de julio de 2012.
[196] Sentencia C-715 de 2012 y C-327 de 2016.
[197] Ibídem.

Para la Sala Plena al utilizar el estándar de debida diligencia de las empresas en relación con el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas es posible determinar si se vulneró el derecho a la consulta previa de una comunidad étnicamente diferenciada, para, posteriormente, valorar la posibilidad de ordenar el remedio judicial correspondiente. Para el efecto resulta necesario, primero, verificar si el comportamiento de las empresas fue diligente para la protección los derechos de los pueblos tradicionales, con base en los estándares expuestos anteriormente. Una vez verificado el cumplimiento del deber de diligencia por parte de las empresas, corresponde al juez constitucional, en segundo lugar, verificar, a través del principio de proporcionalidad si es procedente o no adoptar determinada medida frente a las actividades de exploración y explotación, teniendo en cuenta los valores constitucionales en tensión. En otras palabras, la verificación de la debida diligencia sirve para que las autoridades, en un eventual ejercicio de ponderación, puedan determinar cuáles han sido ejercidos legítimamente.

Estos criterios de valoración (el estándar de debida diligencia y el principio de proporcionalidad) son necesarios, además, para encausar la discrecionalidad del juez a la hora de asignar los remedios eficaces para proteger el derecho a la consulta previa. Asimismo, constituyen el balance adecuado para evaluar si se está ante intereses privados o ante valores protegidos por la Constitución. Es pues el justo medio entre la vulnerabilidad de la comunidad indígena, la función ecológica de la propiedad, la función social de la economía, el desarrollo sostenible y la seguridad jurídica.

Para la Sala Plena, al utilizar el estándar de debida diligencia de las empresas en relación con el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas es posible determinar si se vulneró el derecho a la consulta previa de una comunidad étnicamente diferenciada para, posteriormente, valorar la posibilidad de ordenar el remedio judicial correspondiente. Los parámetros de debida diligencia permiten, además, adecuar las actuaciones de las autoridades y de los particulares a los principios constitucionales de buena fe (artículo 83 C.P.) y confianza legítima, pues otorgan estabilidad a los actores involucrados en relación con los lineamientos y criterios que deben seguir para cumplir con los mandatos de la consulta previa."

15. LA CONSULTA PREVIA EN EL TIEMPO, SU OPERATIVIDAD Y EL DEBER DE REPARAR CON PERSPECTIVA ÉTNICA (ETNOREPARACIONES)

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU 123 de 2018, mencionó lo siguiente:

"*La consulta previa, como su nombre lo indica, debe anteceder a la medida que sea susceptible de afectar al pueblo indígena sea tomada, y obviamente antes de que el proyecto económico haya sido iniciado. Es por ello por lo que la jurisprudencia tiene establecido que*

es obligatorio que el Estado defina junto con las comunidades el modo como será realizada la consulta misma, por lo cual debe existir una preconsulta o consulta de la consulta[198].

Una dificultad surge cuando se evidencia la existencia de una afectación directa sobre una comunidad y el proyecto que debía ser consultado ya se encuentra en fase de ejecución o ya se cumplió con su implementación total.

Obviamente esta situación implica una violación del derecho a la consulta previa. No obstante, cuando es pretermitida el deber de consulta no desaparece con la iniciación del proyecto pues la jurisprudencia constitucional ha explicado que su obligatoriedad debe regir todas las etapas de la materialización de los programas y planes, de manera que existe una obligación de mantener abierto los canales de diálogo durante todo el seguimiento del proyecto[199]*. Bajo tal entendido, la consulta sobre actividades que afectaron a los pueblos indígenas y que no fueron sometidos a consulta previa opera, incluso (i) después del inicio de la ejecución de la actividad, o (ii) pese a su implementación total.*

En el primer caso, es decir, cuando ya se ha iniciado la implementación del proyecto, la obligación de consulta persiste y pese a su omisión no se invalida, pues se trata de la vulneración de un derecho humano fundamental cuya afectación es continua en el tiempo. Adicionalmente, en caso de existir un cambio sustancial en las condiciones del proyecto, que implique la adopción de nuevas medidas o la alteración del significado concreto de medidas ya tomadas, el deber de consulta se renueva pese a que el proyecto se encuentre en desarrollo.[200] *En estas circunstancias, la jurisprudencia ha indicado que esta obligación exige la identificación de las nuevas afectaciones que surjan en la realización de la actividad, al igual que las fases restantes del proyecto*[201].

En el segundo evento, es decir cuando el proyecto ha finalizado, la consulta se dirige a buscar los remedios para reparar, recomponer y restaurar la afectación al tejido cultural, social, económico o ambiental, los cuales, deben responder a la clase de daño sufrido por la comunidad étnica. Tal regla tiene fundamento no solo en el principio general del derecho según el cual todo daño antijurídico debe ser reparado, sino porque el juez constitucional no puede avalar la vulneración de los derechos fundamentales o declarar la ocurrencia de un daño consumado en materia de consulta previa, pues se crearía un incentivo indebido para evadir esta obligación constitucional.

En todo caso, la jurisprudencia tiene bien establecido que, independientemente de cuál sea la vía procesal apropiada, el desconocimiento del derecho a la consulta previa implica en

[198] Ver, entre otras, las sentencias T-129 de 2011 y T-080 de 2017.
[199] Corte Interamericana sentencias de las comunidades Saramaka Vs. Surinam, Sarayaku Vs. Ecuador, Garífuna de Punta Piedra Vs y Kaliña y Lokono Vs Surinam.
[200] Corte Constitucional, Sentencias T-733 de 2017 y T-359 de 2015.
[201] Corte Constitucional, Sentencias T-652 de 1992, SU-383 de 2003, T-693 de 2011, T-462A de 2014, T-436 de 2016, T-080 de 2017 y T-236 de 2017.

general un deber de reparar, por lo cual corresponde a las autoridades identificar los daños causados, las medidas de restauración y recomposición para mitigarlos y, en general, los remedios que se deban adoptar.[202] *En particular, la Corte ha señalado que esas reparaciones deben ser establecidas e implementadas con un enfoque étnico diferencial (etnoreparaciones), que tome en cuenta, entre otros, la particular identidad cultural del pueblo específico, la dimensión colectiva de las violaciones ocurridas y de las medidas reparatorias, las necesidades particulares de esos pueblos y que les permita un control de su implementación.*[203] ''

16. LA FALTA DE CONSULTA, EL DEBER DE REPARAR Y LAS SOLUCIONES JUDICIALES EFICACES PARA PROTEGER EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA EN PROYECTOS EXTRACTIVOS.

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU 123 de 2018, mencionó lo siguiente:

"El juez constitucional tiene la obligación de dictar remedios judiciales eficaces para garantizar los derechos vulnerados. La principal medida para salvaguardar el derecho a la consulta previa es disponer su celebración con la observancia de los criterios fijados en la jurisprudencia. También debe dejar sin efecto los certificados del Ministerio o disponer la modificación de las licencias ambientales, producto de los acuerdos de la deliberación. Las disputas más críticas se relacionan con la orden de suspensión de proyectos, debido a que entran en tensión el ámbito de protección de los derechos de los pueblos indígenas con el interés general –seguridad o desarrollo económico-.

La jurisprudencia ha resuelto ese tipo de situaciones a través de la ponderación de los derechos en juego. Aquí se debate sobre los ámbitos de protección del derecho y el alcance que debe otorgarse al mismo, lo cual no es una tarea fácil, pues, a la dificultad de fijar un remedio judicial eficaz, se suma la necesidad de entablar un diálogo que sea capaz de trazar estándares mínimos en el escenario constitucional de la consulta previa. Bajo ese contexto, la Sala considera importante precisar las reglas o criterios que pueden regir la atribución o no del remedio judicial de suspensión en un caso determinado. Jamás se pretende cercenar ni restringir la autonomía judicial a la hora de identificar las medidas protectoras y reparadoras de los derechos humanos.

En el caso de la comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz Vs Honduras, la Corte IDH manifestó que el derecho a la propiedad colectiva no es absoluto, por lo que puede ser restringido por los Estados, siempre que se observen una serie de condiciones, las cuales deben ser establecidas por ley, ser necesarias, proporcionales y con el fin de lograr un

[202] Corte Constitucional, Sentencia T-236 de 2017.
[203] Ver, entre otras, las sentencias T-080 de 2017 y T-300 de 2017.

objetivo legítimo en una democracia. Ello supone la opción de someter a ponderación los derechos de las comunidades étnicas con otros principios. Aunque, se dejó a salvo la idea de que la interferencia a los derechos tiene el límite de una denegación de subsistencia del pueblo tribal.

A nivel nacional, en Sentencia T-298 de 2017, la Corte Constitucional indicó que el derecho a la consulta previa muestra un equilibrio o ponderación entre: "(i) el interés general, representado en los proyectos o medidas que potencialmente pueden incidir en los derechos de los pueblos indígenas, y (ii) el goce efectivo de estos últimos derechos, particularmente, en materia de autodeterminación, autonomía, territorio, recursos y participación." Las Sentencias SU-383 de 2003, T-080 de 2017 y T-236 de 2017 ponderaron entre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y la seguridad nacional en la implementación de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos por medio de fumigación de glifosato. En esas ocasiones, el resultado de ese análisis concluyó que las facultades del Estado se condicionan a esta ponderación, de modo que debe tener en cuenta la efectiva protección de los derechos de las comunidades indígenas. De ahí que se indicara que la garantía de ese interés general no puede llegar a menoscabar los derechos de estos colectivos. En todos los casos se dispuso a celebrar consulta previa con los pueblos étnicos diversos, debido a que los programas de aspersión se efectuaron en los territorios indígenas.

En este mismo escenario normativo, la Sentencia T-005 de 2016 consideró que el concepto de seguridad nacional debía garantizarse respecto del derecho de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes vieron perturbado un territorio sagrado con la construcción de un batallón del Ejército Nacional en la década de 1950. Sin embargo, esa decisión no significó la anulación del derecho de los pueblos indígenas, dado que, también, se ordenó que se asegurara para sociedad Arhuaca el acceso al sitio sagrado. Se llegó a un equilibrio donde permanecía la edificación y salvaguardaba los derechos espirituales y de territorio amplio de la comunidad. Aunado a lo antepuesto, se ordenó el proceso consultivo.

En materia de construcción de carreteras, la Sentencia T-428 de 1992 ponderó, por primera vez, el principio de interés general y el de protección de la diversidad, integridad y autonomía de los grupos étnicamente no dominantes, y se sustentó en que "La norma que establece la prioridad del interés general no puede ser interpretada de tal manera que ella justifique la violación de los derechos fundamentales de unos pocos en beneficio del interés de todos. Aquí, en esta imposibilidad, radica justamente uno de los grandes avances de la democracia y de la filosofía política occidental en contra del absolutismo y del utilitarismo. La persona es un fin en sí mismo; el progreso social no puede construirse sobre la base del perjuicio individual así se trate de una minoría o incluso de una persona. La protección de los derechos fundamentales no está sometida al vaivén del interés general; ella es una norma que encierra un valor absoluto, que no puede ser negociado o subestimado".

De la reseña jurisprudencial expuesta, se advierte que es posible ponderar el derecho a la consulta previa con otros intereses. Sin embargo, este ejercicio del derecho se efectúa para precisar el alcance de los remedios y no para discutir el orden de precedencia de los derechos o decidir si los derechos de la comunidad ceden ante los demás. De ahí que esa ponderación recae sobre el ámbito de protección del derecho, sin afectar el supuesto de hecho de este.

Las Salas de Revisión suspendieron las labores extractivas ante el incumplimiento de la consulta previa que debía realizarse por la afectación directa al territorio físico, cultural o espiritual de los pueblos tribales (Sentencias T-880 de 2006, T-769 de 2009 y T-129 de 2011). Las razones expuestas para tomar esa determinación se justificaron en que los demandados de ese entonces realizaron actividades en manifiesta oposición con los artículos 1°, 7°, 8°, 9°, 10°, 93, 94, 290, 329 y 330 de la Constitución Política. A su vez, se advirtió que ese remedio judicial había sido usado en otras oportunidades, en las cuales se presentaron graves problemáticas generadas por los proyectos que afectan los territorios de las comunidades étnicas. Lo propio sucedió ante la excesiva contaminación del ambiente que causa la actividad de explotación o de exploración (Sentencia T-359 de 2015). A su vez, se tomó esa misma decisión como resultado del menoscabo de las condiciones laborales y de subsistencia de la comunidad indígena para conseguir el cumplimiento de fallo (T-1045 A de 2010).

En contraste se han negado las suspensiones de los proyectos con base en las siguientes razones: i) la medida se ejecutó totalmente (Sentencia T-693 de 2011); ii) la orden implica la afectación del interés público representado en beneficios económicos y sociales que trae la actividad para el país y sus pobladores (Sentencias T-693 de 2011 y T-730 de 2016); iii) el remedio conlleva a desconocer los derechos de los trabajadores de las empresas extractivas (Sentencia T-730 de 2016); iv) la actuación de buena fe de las compañías afectadas con la suspensión (Sentencia T-730 de 2016); v) la detención de la actividad desconocería la seguridad jurídica de los explotares y exploradores de minera e hidrocarburos. (Sentencia T-730 de 2016); y vi) el objeto de la consulta recayó sobre reales afectaciones y no sobre los posibles perjuicios (Sentencia T-272 de 1998).

La Sala Plena observa que no han existido criterios uniformes para adoptar la decisión de suspender la ejecución de actividades extractivas de recursos naturales. La alternativa de detener las labores se ha sustentado en las particularidades del caso en relación con grado de afectación que sufrió la comunidad. La negativa de detener los proyectos se fundamentó en razones de conveniencia económica, de implementación de la medida, de conductas de las empresas privadas y de objeto de la consulta. De ahí que sea pertinente acudir a la normatividad constitucional ambiental o étnica para identificar las hipótesis donde hay prohibición de realización de actividades, así como evidenciar el grado de afectación que padecen las comunidades y tomar la decisión de suspender los proyectos. También será relevante revisar el nivel de afectaciones que causa el plan en el caso concreto.

Otro parámetro que debe ser tenido en cuenta es la conducta de los agentes económicos, para evaluar si son o no diligentes y hasta qué punto opera el principio de confianza legítima. Sin embargo, ese escrutinio no se puede realizar con figuras del derecho civil, porque éstas son ciegas a los derechos de las comunidades indígenas y a su forma de comprender el mundo. Para tener un parámetro de medición en clave de derechos humanos, se deberá acudir a los parámetros de responsabilidad de las empresas en relación con el derecho de los pueblos indígenas.

Después de valorar todos esos estándares normativos y constatar que no hubo el desconocimiento de estos y se demuestre que actor el privado actuó con la diligencia propia que supone respetar los derechos de las comunidades indígenas, se podrá aplicar el modelo de ponderación.

Ese estadio se tendrá en cuenta las circunstancias particulares del caso. A la hora de determinar el remedio judicial correspondiente y valorar las actuaciones que se desarrollan en el marco de la consulta previa, solo se pueden permitir limitaciones que sean constitucionalmente legítimas, es decir, que se trate de una medida necesaria para salvaguardar un interés de superior jerarquía y que se trate de la medida menos gravosa para la autonomía que se les reconoce a las comunidades étnicas.[204]

Para el efecto se deben ponderar y explorar los siguientes elementos: (i) la posición y las propuestas de los actores, (ii) el comportamiento de la empresa y en particular si ésta tuvo o no la debida diligencia frente a los derechos del grupo étnico, (iii) cuál es la mejor forma de garantizar los derechos fundamentales de los miembros de los pueblos indígenas y de los demás habitantes de los respectivos territorios –tales como el derecho a la vida e integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad y a la salud-, (iv) la protección del interés general de la nación colombiana a la diversidad étnica y cultural; (v) los derechos de terceros que podrían verse afectados por la suspensión o, por el contrario, por la continuación del proyecto, y (vi) el interés general y las potestades inherentes al Estado colombiano.[205] ”

17. CONCLUSIÓN: SÍNTESIS DE LAS REGLAS APLICABLES EN MATERIA DE CONSULTA PREVIA

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU 123 de 2018, mencionó lo siguiente:

[204] Sentencias SU-383 de 2003 y C-175 de 2009.
[205] Sentencias SU-383 de 2003, C-461 de 2008 y C-175 de 2009.

"Dado que se trata de una sentencia que tiene como uno de sus propósitos esenciales unificar la jurisprudencia constitucional, procede entonces la Corte a sintetizar los conceptos, principios y reglas que surgen del examen de la jurisprudencia colombiana y que coinciden plenamente con los criterios evolutivos desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos.

En relación con su naturaleza y finalidad este Tribunal Constitucional ha indicado que la consulta previa es un derecho fundamental, que protege a los pueblos indígenas y tribales y tiene carácter de irrenunciable. Esto implica que: (i) el objetivo de la consulta previa es intentar lograr en forma genuina y por un diálogo intercultural el consentimiento con las comunidades indígenas y tribales sobre las medidas que las afecten; (ii) el principio de buena fe debe guiar la actuación de las partes; (iii) por medio de la consulta se debe asegurar una participación activa y efectiva de los pueblos interesados; (iv) la consulta debe ser un proceso intercultural de diálogo en el que el Estado debe entonces tomar las medidas necesarias para reducir las desigualdades fácticas de poder que puedan tener los pueblos étnicos; (v) en este diálogo intercultural ni el pueblo tiene un derecho de veto ni el Estado un poder arbitrario de imposición de la medida prevista; (vi) la consulta debe ser flexible, es decir, adaptarse a las necesidades de cada asunto; (vii) la consulta debe ser informada, esto es dispensar a los pueblos indígenas y tribales la información suficiente para que ellos emitan su criterio; (viii) la consulta debe respetar la diversidad étnica y cultural lo que permitirá encontrar mecanismos de satisfacción para ambas partes.

Como se indica en esta sentencia la consulta previa procede siempre que exista la posibilidad de ***afectación directa*** *del grupo étnico. La afectación directa es un concepto jurídico indeterminado que hace referencia al impacto positivo o negativo que tiene una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. En el caso concreto de la afectación directa por proyectos de exploración y explotación de recursos no renovable incluye: (i) el impacto en el territorio de la comunidad tradicional; o (ii) el impacto en el ambiente, la salud o la estructura social, económica, así como cultural del grupo.*

El concepto de afectación directa difiere del de área de influencia, este último se refiere a un requisito meramente técnico que determina los impactos sobre un espacio geográfico en el que se desarrollará un proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos, en tanto la afectación directa, como se indicó, es un concepto esencial para determinar cuándo se activa la consulta previa y se identifican los impactos.

El concepto de territorio de las comunidades étnicas trasciende el espacio físico (concepto geográfico de territorio) y se vincula a elementos culturales, ancestrales, así como espirituales (concepto amplio de territorio), de manera que no es posible equipararlo al concepto de propiedad del derecho civil.

El concepto geográfico de territorio comprende el espacio reconocido legalmente bajo la figura del resguardo. El concepto amplio de territorio incluye las zonas que habitualmente ha ocupado la comunidad indígena, al igual que los lugares en donde tradicionalmente los mencionados sectores de la sociedad han desarrollado sus actividades sociales, económicas, espirituales o culturales. Esta hipótesis comprende también el territorio al que se desplazan las comunidades étnicas, por razones como el conflicto armado, grandes proyectos ambientales, o por las grandes obras de infraestructura, cuando allí desarrollan sus prácticas de supervivencia. Además, la jurisprudencia ha precisado que la ausencia de reconocimiento oficial de una comunidad es insuficiente para que el Estado o un privado se niegue a consultar una medida con una comunidad étnica.

Para determinar el alcance de este territorio amplio, las autoridades deben tomar en consideración en el caso concreto los elementos económicos, culturales, ancestrales, espirituales que vinculan a un pueblo étnico a un determinado espacio. Es igualmente posible que las autoridades competentes, para establecer si existe o no afectación directa por impacto en el territorio, tomen en consideración la intensidad, la permanencia efectiva y la exclusividad con la cual un pueblo étnico ha ocupado o no un determinado espacio específico, al igual que sus particularidades culturales y económicas como pueblo nómada o sedentario o en vía de extinción. Para el efecto, será determinante verificar la intensidad, permanencia efectiva o grado de exclusividad de las prácticas culturales, ancestrales, espirituales o económicas de la comunidad en el territorio amplio, lo cual realizaran las autoridades, en diálogo con las autoridades indígenas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT.

La afectación directa se presenta si existe evidencia razonable de que, con la medida, se perjudique i) la salud, así como el ambiente, representado en la inequidad frente a la distribución de cargas y beneficios ambientales; y ii) las estructuras sociales, espirituales, culturales y ocupacionales en un colectivo, que no pueden ser percibidos por estudios técnicos ambientales. Por tal razón el derecho a la consulta previa se encuentra vinculado a los imperativos de justicia ambiental, que busca un reparto equitativo y participativo de los costos y beneficios de los proyectos con impactos ambientales diferenciados.

Para determinar la posible afectación de los mandatos de la consulta previa, la Corte considera necesario tomar en cuenta los parámetros (deberes) de debida diligencia del Estado y las empresas, previstos en la Observación General número 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos[206] *(Principios Rugeo), y los informes del Relator*

[206] Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, "*Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para 'proteger, respetar y remediar"*, resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, A/HRC/17/31.

Especial para los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas, a través de sus informes[207], dado que constituyen criterios relevantes de interpretación normativa para valorar su actuación, en relación con el deber de desarrollar la consulta previa.

A la luz del principio de proporcionalidad, la consulta previa como manifestación del derecho a la participación se presenta en diferentes niveles: participación básica, consulta y el consentimiento previos, libre e informado. Una afectación intensa requiere del consentimiento previo, libre e informado y procede ante: i) el traslado o reubicación del pueblo indígena o tribal de su lugar de asentamiento; ii) medidas que implican un alto impacto social, cultural y ambiental que ponga en riesgo su subsistencia; o iii) las relacionadas con el almacenamiento y eliminación de materiales peligrosos –tóxicos- en sus tierras y territorios. En los demás casos procederá, por regla general, la consulta previa, salvo en el caso en el que se evidencia que no existe afectación directa de la comunidad, situación en la que se deberá aplicar el estándar básico de participación.

En relación con la operatividad de la consulta previa y su aplicabilidad en el tiempo, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la consulta debe ser previa, por lo cual debe existir una preconsulta, pero que en todo caso opera en todas las fases del proyecto, obra o actividad. En este sentido, todo cambio sustancial en las condiciones del proyecto que implique la adopción de nuevas medidas o altere significativamente el sentido de las medidas ya tomadas renueva el deber de consulta previa.

De manera especial, la consulta procede aun cuando el proyecto esté en marcha, e incluso, cuando haya finalizado. En este caso, se dirige a la adopción de actividades, obras o medidas de contingencia para reparar, recomponer, restaurar o recuperar la afectación al tejido cultural, social, económico o ambiental, según el daño sufrido por la comunidad étnica. Las medidas reparatorias deben realizarse con un enfoque diferencial que tome en cuenta las particularidades del pueblo afectado (eteno-reparaciones).

En cuanto a la validez de la certificación que expide el Ministerio del Interior sobre la no presencia de comunidades indígenas y tribales en el área de influencia de un proyecto, esta sentencia precisa que esta no es válida para eximirse de la consulta previa cuando se advierta o acredite una afectación directa a un pueblo étnico. El operador administrativo será responsable en este trámite por incumplimiento de las normas del Convenio 169 OIT. Por tal razón, la Corte considera que los certificados de presencia de las comunidades étnicas deben incluir un estudio particular y expreso sobre la posible afectación directa que pueda causar un proyecto, obra o actividad a las comunidades étnicas, con independencia de la limitación del área de influencia.

[207] Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, Informe del Relator Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, informes A/HRC/15/37 del 19 de julio de 2010 y A/HRC/21/47 del 6 de julio de 2012, presentados por el Relator Especial para los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas, en 15° y 21° periodos de sesiones.

En cuanto a los acuerdos, se precisa que el Estado y el agente económico tienen la obligación de materializar y cumplir lo pactado. En caso de que la consulta haya sido realizada en debida forma y no haya acuerdo, el Estado puede tomar e implementar la medida, mediante decisión motivada, siempre y cuando su decisión: (i) esté desprovista de arbitrariedad y autoritarismo, (ii) esté basada en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad respecto del deber de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación; (iii) tome en consideración, hasta donde sea posible, las posiciones expresadas por las partes, y en especial el pueblo étnico, durante la consulta; (iv) respete los derechos sustantivos reconocidos en el Convenio 169 OIT; y (v) prevea mecanismos eficaces, idóneos y eficientes para atenuar los efectos negativitos de la medida.

Cuando se requiera CPLI, el Estado en principio sólo tiene la facultad de implementar medida si obtiene el consentimiento, previo, libre e informado de la comunidad indígena. Sin embargo, en casos excepcionales, la medida podrá ser implementada sin el consentimiento de los pueblos, pero el Estado deberá en todo caso garantizar los derechos fundamentales y la supervivencia (física-cultural) de las comunidades étnicas diversas y deberá realizar las correspondientes reparaciones a los pueblos por esta determinación.

A la hora de determinar el remedio judicial correspondiente y valorar las actuaciones que se desarrollan en el marco de la consulta previa, solo se pueden permitir limitaciones que sean constitucionalmente legítimas, es decir, que se trate de una medida necesaria para salvaguardar un interés de superior jerarquía y que se trate de la medida menos gravosa para la autonomía que se les reconoce a las comunidades étnicas. Para el efecto se deben ponderar y explorar los siguientes elementos: (i) la posición y las propuestas de los actores, (ii) el comportamiento de la empresa y en particular si ésta tuvo o no la debida diligencia frente a los derechos del grupo étnico, (iii) cuál es la mejor forma de garantizar los derechos fundamentales de los miembros de los pueblos indígenas y de los demás habitantes de los respectivos territorios –tales como el derecho a la vida e integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad y a la salud-, (iv) la protección del interés general de la nación colombiana a la diversidad étnica y cultural; (v) los derechos de terceros que podrían verse afectados por la suspensión o, por el contrario, por la continuación del proyecto, y (vi) el interés general y las potestades inherentes al Estado colombiano."

18. DERECHO DE PROPIEDAD COLECTIVA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.

El derecho de propiedad colectiva sobre los territorios indígenas reviste gran importancia para la supervivencia de la cultura y valores espirituales de los pueblos aborígenes. Esta circunstancia fue reconocida por el Convenio 169 de 1989 de la OIT, al establecer el deber de los Estados de promover

la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones. Además, le impuso ayudar a los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

El reconocimiento de la estrecha relación que existe entre los indígenas y el territorio por ser el espacio donde desarrollan su identidad cultural y social, fue abordado por el Convenio 169 en la parte II, haciendo referencia a "Tierras"[208].

En este sentido, la Asamblea Nacional Constituyente en la ponencia sobre "*Los Derechos de los Grupos Étnicos*" al enunciar los derechos fundamentales étnicos, resaltó la importancia del derecho al territorio, al afirmar que, sin este, las garantías superiores a la identidad cultural y la autonomía son un formalismo, ya que las comunidades indígenas necesitan el territorio en el cual se han asentado, para desarrollar su cultura[2].

En igual sentido, esta Corte desde sus inicios, en la sentencia T-188 de 1993 destacó "*la especial relación de las comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes."*

208 *"Artículo 13.1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.*
"La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.
Artículo 14. Deberán reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
Artículo 15. 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
Artículo 16. 1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación.
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización con las garantías apropiadas.
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento."

[2] http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa668528.pdf Asamblea Nacional Constituyente. Ponencia Los Derechos de los Grupos Étnicos. Gaceta Constitucional Núm. 67.Pág. 18.

Sobre la base de lo anterior, el Tribunal ha ratificado el carácter de derecho fundamental de la propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre sus territorios, atendiendo el significado que tiene para las comunidades indígenas, como elemento que constituye un aspecto esencial de su cosmovisión y religiosidad y es la base de su subsistencia[209], así no esté incluido dentro del catálogo de garantías previsto en el capítulo 1 del título II de la Constitución.

En la sentencia T-380 de 1993, afirmó que el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de los resguardos, previsto en el artículo 329[210] de la Carta Política a favor de las comunidades indígenas, comprende a la propiedad colectiva de éstas sobre los recursos naturales no renovables existentes en su territorio; y en la T-525 de 1998, reiteró que la propiedad colectiva de los territorios indígenas reviste gran importancia dentro del esquema constitucional, por cuanto es esencial para asegurar la supervivencia y preservación de la cultura y valores espirituales de los pueblos.

Luego, en la sentencia T-634 de 1999, acerca de la propiedad colectiva, la Corte concluyó que la Carta Política constitucionalizó los resguardos, otorgándoles el carácter de propiedad colectiva inajenable, imprescriptible e inembargable y que más allá del concepto de "tierra" involucra el de "cultura", al considerar que las comunidades indígenas *"enriquecen la cultura nacional, e inclusive a la cultura universal porque es sabido que los indígenas tienen como eje de la vida a la naturaleza, luego ésta, al no ser una simple mercancía, adquiere una connotación indispensable para un equilibrio ecológico que permita que sobreviva la humanidad. Ese solidarismo indígena alrededor de la naturaleza se contrapone al economicismo liberal del modelo de Estado liberal que proyectaron las revoluciones burguesas. No es justo, en ningún momento, que se afecte, o lo que es peor, se hunda esa cultura indígena, que como toda cultura está ubicada en la superestructura de las sociedades, y en ocasiones cumple funciones que el propio Estado descuida o está incapacitado para dar. Es decir, cuando se afecta la cultura indígena se afecta un derecho colectivo."*

En la sentencia SU-380 de 2003 mantuvo el enfoque de derecho fundamental sobre la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y últimamente ha avanzado al ligarlo a la noción de posesión ancestral, desvinculándolo de los requisitos de titulación exigidos por la regulación civil al interpretarlo como una protección derivada del bloque de constitucionalidad -el Convenio 169 de 1989 de la OIT- en concordancia con los artículos 58, 63 y 329 de la Carta Política, tal y como lo señalan las sentencias T-617 de 2010, T-235, T-693 y T-698 de 2011.

La idea de la ancestralidad como "*título*" de propiedad desarrollada en la sentencia T-235 de 2011 fue reiterada en los fallos T-282 y T-698 del mismo año, precisándose que: "*el término "título" se utiliza entre comillas porque no es del todo posible categorizar la propiedad del territorio colectivo con un*

209 Sentencia T-698 de 2011 reiterando la SU-510 de 1998: "*La propiedad colectiva que las comunidades indígenas ejercen sobre sus resguardos y territorios tiene el carácter de derecho fundamental, no sólo porque tales territorios constituyen su principal medio de subsistencia sino, también, porque forman parte de su cosmovisión y religiosidad".*

210 Constitución, Artículo 329: "*La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. || Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. (…)."*

vocablo propio del derecho civil de corte romano. Los atributos del territorio colectivo se derivan de ese continuum entre cultura, autonomía y territorio que ha sido puesto de presente por la jurisprudencia".

Asimismo, en la sentencia T-693 de 2011 esta Corporación sostuvo que la noción de territorio que tienen los pueblos indígenas es diferente a la visión de la cultura occidental, porque *"Para estos pueblos, la tierra está íntimamente ligada a su existencia y supervivencia desde el punto de vista religioso, político, social y económico; no constituye un objeto de dominio sino un elemento del ecosistema con el que interactúan. Por ello, para muchos pueblos indígenas y tribales la propiedad de la tierra no recae sobre un solo individuo, sino sobre todo el grupo, de modo que adquiere un carácter colectivo*[211]*(...). Esta visión contrasta con la de la cultura occidental, para la que el territorio es un concepto que gira en torno al espacio físico poblado en el que la sociedad se relaciona, coopera y compite entre sí, y sobre el que se ejerce dominio. Otro aspecto que vale la pena resaltar, se relaciona con la propiedad, ya que, contrario al concepto comunal que manejan las comunidades étnicas, la cultura occidental mantiene una visión privatista de la propiedad."*

En ese orden de ideas, el territorio indígena está asociado a una noción de ancestralidad y no al reconocimiento estatal a través de los títulos de dominio, ya que para los pueblos étnicos la tierra significa el espacio donde desarrollan su identidad cultural. Así lo sostuvo este Tribunal en sentencia T-698 de 2011, al concluir que: "*en relación con el contenido del concepto de territorio de una comunidad étnica conducen a anticipar que un título de propiedad no descarta, de suyo, la realización de la consulta. Sencillamente, porque la eventual afectación que puede sufrir una comunidad étnica como consecuencia de una medida administrativa que avala la ejecución de un proyecto u obra sobre determinado predio no depende de que el mismo pueda clasificarse o no como territorio ancestral. Para efectos de la consulta, lo relevante es que la intervención avalada por la administración tenga la capacidad de generar la afectación directa a la que tantas veces se ha hecho referencia. Y esa afectación puede ocurrir cuando la medida interviene en una zona con presencia de minorías étnicas, independientemente de quién aparezca como su propietario."*

211 La Corte reiteró, en ese punto, el precedente antes citado de la Corte IDH, y la Sentencia SU-383 del 2003. Esta última incorporó la doctrina expuesta en "Territorialidad Indígena y ordenamiento de la Amazonía", una publicación de la Universidad Nacional de Colombia que explica que, para el indígena "*La territorialidad no se limita únicamente a una ocupación y apropiación del bosque y sus recursos, pues la trama de las relaciones sociales trasciende el nivel empírico y lleva a que las técnicas y estrategias de manejo del medio ambiente no se puedan entender sin los aspectos simbólicos a los que están asociadas y que se articulan con otras dimensiones que la ciencia occidental no reconoce"*. Carlos Eduardo Franky y Dany Mahecha, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Leticia, y Antropóloga de la Fundación Gaia Amazonas respectivamente.

Recientemente las sentencias T-849 de 2014[212] y T-461 de 2014 reiteraron la idea de ancestralidad, la conservación y protección del territorio propendiendo por el uso y goce efectivo de las tierras de acuerdo con su tradición, cultura y cosmovisión[213].

En conclusión, la protección a la propiedad colectiva y al territorio ancestral se derivan de la relación espiritual y ancestral que existe con la tierra, por ser el lugar donde desarrollan sus actividades culturales, religiosas y económicas de acuerdo con sus tradiciones y costumbres, de modo que el concepto va más allá del título de propiedad, y en ese orden de ideas, es deber del Estado proteger a las comunidades indígenas frente a las perturbaciones que puedan sufrir en el ejercicio de sus actividades en lo que han considerado su territorio ancestral, y adoptar todas las medidas pertinentes para evitar que conductas de particulares puedan afectar sus derechos, siendo el mecanismo idóneo la consulta previa."[214]

19. EL CONCEPTO AMPLIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL TERRITORIO INDÍGENA Y SU PROTECCIÓN ESPECIAL CUANDO SE TRATA DE ÁREAS SAGRADAS Y DE IMPORTANCIA CULTURAL PARA LAS COMUNIDADES, INCLUSO CUANDO SE TRATA DE ZONAS FUERA DE LOS RESGUARDOS TITULARIZADOS.

19.1. Compromisos del Gobierno Colombiano de Delimitar los Territorios Ancestrales Indígenas en Colombia:

19.2. En la Minga Indígena realizada en el mes de octubre de 2013, los pueblos indígenas exigimos garantías jurídicas para nuestros territorios ancestrales. Esta expresión social culmina con un acuerdo nacional de catorce (14) puntos: "*1. Protección jurídica de todos los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Se concretará la expedición de un decreto que la garantice con fundamento en la Ley 21 de 1991, las sentencias de la Corte interamericana y la Corte Constitucional*".

19.3. Cumplimiento del decreto 2333 del diecinueve (19) de noviembre del 2014. El presidente JUAN MANUEL SANTOS se comprometió a establecer los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la

212 "En conclusión, debido al sentido particular que tiene para los pueblos indígenas la tierra, la protección de su territorio no se limita a aquellos que se encuentran titularizados, sino que se trata de un concepto jurídico que se extiende a toda la zona indispensable para garantizar el pleno y libre ejercicio de sus actividades culturales, religiosas y económicas, de acuerdo como las ha venido desarrollando de forma ancestral. En ese orden de ideas, el Estado tiene la obligación de proteger a las comunidades indígenas frente a las perturbaciones que puedan sufrir en el ejercicio de sus actividades en lo que han considerado su territorio ancestral, y debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar que conductas de particulares puedan afectar sus derechos. Tanto en el derecho internacional como en el derecho interno, se ha establecido que el mecanismo de protección idóneo para garantizar que con medidas o actuaciones del Estado o de particulares, no se ven afectados los intereses de los indígenas, es la consulta previa."

213 Ver sentencia T-009 de 2013.

214 La Core Constitucional en sentencia Sentencia T-005/16, menciona y ratifica la siguientes normas de protección a Pueblo Indígenas en Colombia":

OIT, y se adicionan los artículos 13,16 y 19 del Decreto 2664 de 1994, es decir, delimitar nuestro territorio ancestral, compromiso no cumplido.

19.4. El presidente JUAN MANUEL SANTOS se comprometió a delimitar nuestro territorio ancestral Yukpa, en el acta de concertación y protocolización que hace parte integral del Plan Nacional de Desarrollo Todos para un Nuevo país, del año 2015. Es decir, la delimitación de nuestro territorio se enmarca en la Ley 1753, Plan Nacional de Desarrollo- 2014-2018, compromiso no cumplido. De igual manera la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-713 de 2017, ordenó a la Agencia Nacional de Tierras en su orden cuarta (04), delimitar el Territorio Ancestral Yukpa y ampliar y sanear los seis (06) resguardos indígenas, orden que va a cumplir tres (03) años y que la ANT no ha querido cumplir.

El Honorable Consejo de Estado, resolvió en Acción de Tutela de última instancia y bajo el principio de precaución, radicado número, 20001-23-33-000-2019-00275-01 del tres (03) de marzo de 2020, y bajo suspender todos los futuros proyectos mineros energéticos, entrega de títulos mineros y concesiones de hidrocarburos y licencias ambientales, hasta tanto no se delimite el territorio ancestral Yukpa.

19.5. La Corte ha sido Clara, Consulta Previa y protección de territorios ancestrales. El concepto amplio de territorio indígena y su protección especial cuando se trata de áreas sagradas y de importancia cultural para las comunidades, incluso cuando se trata de zonas fuera de los resguardos titularizados**.**

La Corte Constitucional[215] y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han pronunciado sobre la importancia que tiene la protección de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas en el marco del respeto y la garantía de sus derechos humanos. Como prerrequisito para lograr la eficacia de esa protección al interior de los Estados, es necesario comprender la noción distinta que tienen los indígenas y el resto de la población que, en países como el nuestro, se ciñen a parámetros occidentales de propiedad privada.

Es por eso, que resulta imperativo reconocer la estrecha relación que tienen las comunidades indígenas con la tierra y comprenderla *"como la base fundamental de sus culturas,* ***su vida espiritual****, su integridad y su supervivencia económica. Para tales pueblos, su nexo comunal con el territorio ancestral no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras".*[216] (Subrayado fuera del texto).

215 Corte Constitucional, Sentencia T-513 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, 6 de julio de 2012: "*Otras decisiones que también han reconocido la importancia del territorio en el desarrollo y subsistencia de las comunidades indígenas como sujeto cultural diferenciado son la* ***SU-039 de 1997, la SU-383 de 2003, la T-208 de 2007 y la T-129 de 2011****, todas ellas resaltando lo importante que resulta la comprensión del territorio como un elemento esencial de su cultura y, por tanto, la trascendencia que tienen las medidas legislativas o administrativas que lo afectan".*

216 Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149. Corte IDH, Caso de la Comunidad Moiwana, Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 131.

En ese mismo sentido, se pronunció la Corte Interamericana en el caso de la Comunidad Yayo Axa del Pueblo Enxet – Lengua, en el que se alegó que el Estado de Paraguay había vulnerado el derecho a la propiedad ancestral de la Comunidad:

> *"La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas**, sus artes y rituales**, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. En función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas".*[217] (Subrayado fuera del texto)

También lo hizo el Tribunal Internacional en el Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku en contra del Estado de Ecuador, al explicar el sentido distinto que frente a la pertenencia de la tierra, los recursos naturales y los elementos incorporales que se desprende de ellos tienen las comunidades indígenas en virtud de su cosmovisión, y la necesidad que la Convención Americana sobre Derechos Humanos proteja a través del derecho a la propiedad privada esa noción, pues no hacerlo implicaría desconocer "*las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, [y] equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección de tal disposición para millones de personas"*.[218] Continúa en su pronunciamiento la Corte Interamericana:

> *"Debido a la conexión intrínseca que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio, la protección del derecho a la propiedad, uso y goce sobre éste es necesaria para garantizar su supervivencia. Es decir, **el derecho a usar y gozar del territorio carecería de sentido en el contexto de los pueblos indígenas y tribales si dicho derecho no estuviera conectado con la protección de los recursos naturales que se encuentran en el territorio.** Por ello, la protección de los territorios de los pueblos indígenas y tribales también deriva de la necesidad de garantizar la seguridad y la permanencia del control y uso de los recursos naturales por su parte, lo que a su vez permite mantener su modo de vida. Esta conexión entre el territorio y los recursos naturales que han usado tradicionalmente los pueblos indígenas y tribales y que son necesarios para su supervivencia física y cultural, así como el desarrollo y continuidad de su cosmovisión, es preciso protegerla bajo el artículo 21 de la Convención para garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres,*

217 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia del 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 154.
218 Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párrs. 145.

creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados".[219]

Esa noción amplia del territorio que tienen los indígenas y estrechamente relacionada con su cosmovisión, fue recogida por la comunidad internacional en la parte II. Tierras del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, el cual fue incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 21 del 4 de marzo de 1991. En concreto, el artículo 13 de ese instrumento establece en su parte relevante que *"(…) los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación"*. En el segundo numeral del mismo artículo, se complementa el concepto de tierras del Convenio con el de territorio, dándole un sentido más amplio a la luz del cual se *"cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera"*.[220]

En el artículo 14 de mismo Convenio, adicionalmente a establecer el deber de reconocer en favor de los pueblos indígenas el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que ocupan de forma tradicional, *"en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia".*

Sobre la materialización de estos deberes se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia T-880 de 2006, en la que hace referencia a la Sentencia de Unificación SU-383 de 2003, y reconoció la obligación que tiene el Estado de brindar una especial protección a las comunidades indígenas en cuanto a su delimitación territorial, se centra en dos factores principales, entre otros: *"comoquiera que la concepción territorial de los pueblos indígenas y tribales no concuerda con la visión que al respecto maneja el resto de la población", y " habida cuenta que la delimitación de las tierras comunales de los grupos étnicos no puede desconocer los* ***intereses espirituales****, como tampoco los patrones culturales sobre el derecho a la tierra, usos y conductas ancestrales*". (Negrilla fuera del texto)

Concretamente, la Sentencia SU-383 de 2003, al establecer parámetros para la delimitación geográfica de la región de la amazonia, en su relación con los territorios indígenas, estableció:

219 Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párrs. 145 – 147. Ver adicionalmente: Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párrs. 148 y 149. Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia del 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 124, 135 y 137. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrs. 118 y 121. Corte IDH Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párrs. 85 - 87.

220 La Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la relación que tienen los conceptos de "tierra" y "territorio", en la Sentencia T-763 de 2012, 2 de octubre de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: *"Existe una relación intrínseca entre los conceptos de tierra y territorio: la tierra hace alusión a la base física de un asentamiento humano, mientras que el territorio hace referencia a las relaciones espirituales, sociales, culturales, económicas, entre otras, que construyen las personas y las comunidades alrededor de la tierra (…)"*

> *"(…) cabe considerar que la concepción territorial de los pueblos indígenas y tribales no concuerda con la visión de ordenamiento espacial que maneja el resto de la nación colombiana, "porque para el indígena, la territorialidad no se limita únicamente a una ocupación y apropiación del bosque y sus recursos, pues la trama de las relaciones sociales trasciende el nivel empírico y lleva a que las técnicas y estrategias de manejo del medio ambiente no se puedan entender sin los aspectos simbólicos a los que están asociadas y que se articulan con otras dimensiones que la ciencia occidental no reconoce".*[221] || *De ahí que el profesor e investigador de la Universidad Nacional, Juan Álvaro Echeverri, define el vocablo territorio, atendiendo a la cosmovisión indígena así:* || *"Entonces tenemos que el territorio es un espacio y es un proceso que lleva a la configuración de una palabra de ley, entendida como palabra de consejo, educación. Ese espacio no es necesariamente un espacio geográfico marcado por afloramientos rocosos, quebradas, lomas, cananguchales, pozos, barrancos. Ese espacio geográfico es memoria, es efectivamente escritura de ese proceso de creación que está ocurriendo todo el tiempo: en la crianza de los hijos, en las relaciones sociales, en la resolución de problemas, en la curación de las enfermedades".*[222]

Resalta la referenciada providencia, que un aspecto que se debe *"tener en cuenta para la delimitación de la entidad territorial indígena [es] la concurrencia de intereses en los lugares sagrados -como lo advierte el profesor Clemente Forero de la Universidad Nacional".*[223]

La Corte Constitucional ha materializado la protección a los territorios de las comunidades indígenas más allá de las áreas titularizadas a favor de ellos, en la Sentencia T-693 de 2011, en donde hizo referencia a la protección de áreas sagradas y de importancia cultural del pueblo indígena Achagua Piapoco, interpretando el Convenio 169 de la OIT:

> *"Con relación al* ***derecho a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural****, incluso si están ubicadas fuera de los resguardos, se observa que el Convenio 169 acoge un concepto amplio de territorio, al indicar que se consideran como tal, aquellas áreas de una comunidad que comprenden, no sólo las tituladas o habitadas, sino también aquellas que* ***constituyen el ámbito tradicional de sus actividades tradicionales, sagradas o espirituales.*** || *Bajo este entendido, el territorio viene a ser el lugar donde las comunidades indígenas pueden desenvolverse según su cultura, su saber y sus costumbres. Es decir, un espacio físico bajo la influencia cultural y control político de sus propias costumbres.*

221 Carlos Eduardo Franky y Dany Mahecha, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Leticia, y Antropóloga de la Fundación Gaia Amazonas respectivamente, "La Territorialidad entre los pueblos de tradición nómada del noroeste amazónico colombiano" en Territorialidad Indígena y ordenamiento de la Amazonía, Universidad Nacional de Colombia, Fundación GAIA Amazonas, Bogotá 2000. En: Corte Constitucional, Sentencia SU-383 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, 13 de mayo de 2003.

222 Corte Constitucional, Sentencia SU-383 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, 13 de mayo de 2003. Reiterada en: Corte Constitucional, Sentencia T-880 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, 26 de octubre de 2006, y Corte Constitucional, Sentencia T-693 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 23 de septiembre de 2011.

223 Ibídem

(...)

Así, en consonancia con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia sobre el concepto de territorio en las comunidades étnicas, entendiendo por tal, no sólo las áreas tituladas a una comunidad, ***sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales, religiosas y económicas****, etc. el Charcón Humapo, por ser el lugar donde la comunidad indígena puede desenvolverse libremente según su cultura, su saber y sus costumbres,* ***hace parte de su territorio ancestral****".*[224] (Negrilla en el texto original).

Como fue establecido en la Sentencia T-009 de 2013, en aras de garantizar la protección a los derechos de las comunidades indígenas, especialmente los culturales relacionados con la práctica de rituales, y reconociendo el carácter espiritual que ellos tienen en su cosmovisión la tierra y los recursos naturales que provienen o se encuentran en ella, es necesario que el concepto de territorio indígena no sea exclusivamente geográfico, sino que tenga una connotación jurídica en donde se reconozcan las definiciones antes expresadas. En ese sentido se pronunció el Tribunal Constitucional en la citada providencia de este año:

"Dada la relación de las comunidades con el hábitat, su concepto de territorio es dinámico, pues para ellas comprende, como indica la doctrina, "todo espacio que es actualmente imprescindible para que un pueblo indígena acceda a los recursos naturales que hacen posible su reproducción material y espiritual (...) || De ahí, la importancia de ampliar el concepto de territorio de las comunidades étnicas a nivel jurídico, para que comprenda no sólo las áreas tituladas, habitadas y explotadas por una comunidad –por ejemplo bajo la figura del resguardo-, sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales y económicas, de manera que se facilite el fortalecimiento de la relación espiritual y material de estos pueblos con la tierra y se contribuya a la preservación de las costumbres pasadas y su transmisión a las generaciones futuras"[225].

En conclusión, debido al sentido particular que tiene para los pueblos indígenas la tierra, la protección de su territorio no se limita a aquellos que se encuentran titularizados, sino que se trata de un concepto jurídico que se extiende a toda la zona indispensable para garantizar el pleno y libre ejercicio de sus actividades culturales, religiosas y económicas, de acuerdo como las ha venido desarrollando de forma ancestral.

Tanto en el derecho internacional como en el derecho interno, se ha establecido que el mecanismo de protección idóneo para garantizar que con medidas o actuaciones del Estado o de particulares, no se ven afectados los intereses de los indígenas, es la consulta previa.

224 Corte Constitucional, Sentencia T-693 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 23 de septiembre de 2011.
225 Corte Constitucional, Sentencia T-009 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 21 de enero de 2013.

19.6. La Consulta Previa como mecanismo de protección del territorio indígena y de los derechos de las comunidades relacionados con la Consulta previa ha sido considerada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como un derecho fundamental de las comunidades étnicas.[226] El mismo se encuentra consagrado en el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la OIT en Ginebra en 1989, he incorporada en el ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 21 del cuatro (04) de marzo de 1991.

Por tratarse de un Convenio internacional ratificado por Colombia que reconoce derechos humanos, al tenor del artículo 93 de la Constitución, los derechos en él contenidos adquieren rango constitucional y prevalecen en el ordenamiento interno.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el profesor James Anaya, ha resaltado en sus informes la relevancia del deber de celebrar consultas con los pueblos indígenas, usando las palabras de un comité tripartito del Consejo de Administración la OIT: *"el espíritu de consulta y participación constituye la piedra angular del Convenio Nº 169 en la que se fundamentan todas las disposiciones de este".*[227]

El convenio impone obligaciones puntuales al Estado colombiano frente a la comunidad internacional, dirigidas a salvaguardar los derechos de las comunidades étnicas, como se evidencia en el artículo 2º del Convenio: *"[l]os gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad".* El cumplimento de esta obligación, se desarrolla en nuestro ordenamiento, en concordancia con lo prescrito por nuestra Carta Política, que en su artículo 7º reconoce la obligación que tiene el Estado de proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.[228]

Como lo ha sostenido en reciente jurisprudencia la Corte Constitucional, *"la consulta previa no debe considerarse como una garantía aislada. Constituye el punto de partida y encuentro de todos los derechos de los pueblos indígenas, en tanto condición de eficacia de su derecho a adoptar decisiones autónomas sobre su destino, sus prioridades sociales, económicas y culturales".*[229] Tiene esa doble

226 Ver en este sentido: Corte Constitucional, SU-383 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, 13 de mayo de 2003, "Esta Corte ha sostenido, de manera reiterada, dada la especial significación que para la subsistencia de los pueblos indígenas y tribales comporta su participación en las decisiones que puedan afectarlos, mediante el mecanismo de la consulta previa, que éste es un derecho fundamental, *"pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social económica y cultural de las comunidades indígenas y para asegurar por ende su subsistencia como grupo social";* Corte Constitucional, Sentencia SU-039 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell, 3 de febrero de 1997; Corte Constitucional, T-652 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, 10 de noviembre de 1998; Corte Constitucional, T-547 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, 1 de julio de 2010.

227 Informe del Comité establecido para examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por el Ecuador del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (Nº 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), párr. 31. En: Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Promoción y Protección de todos los derechos humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el derecho al desarrollo – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, 12º periodo de sesiones, 15 de julio de 2009. Doc. N.U. A/HCR/12/34. párr. 39.

228 Constitución Política de Colombia, Artículo 7º El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

229 Corte Constitucional, Sentencia T-376 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa, 18 de mayo de 2012.

connotación de derecho fundamental y obligación del Estado a celebrar consultas con los pueblos indígenas, la cual se fundamenta en el reconocimiento universal *"de las características distintivas de los pueblos indígenas y de la necesidad de medidas especiales que permitan corregir sus condiciones desfavorecidas"*.[230]

20. OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA Y DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DELIMITAR LOS TERRITORIOS ANCESTRALES.

21.1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007; "Decide por unanimidad, que: "*Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos del párrafo 195 de la misma. 1. El Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio de los miembros del pueblo Saramaka, de conformidad con su derecho consuetudinario, y a través de consultas previas, efectivas y plenamente informadas con el pueblo Saramaka, sin perjuicio de otras comunidades indígenas y tribales. Hasta tanto no se lleve a cabo dicha delimitación, demarcación u otorgamiento de título colectivo respecto del territorio Saramaka, Surinam debe abstenerse de realizar actos que podrían dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros, actuando con consentimiento o tolerancia del Estado, puedan afectar la existencia, valor, uso o goce del territorio al cual tienen derecho los integrantes del pueblo Saramaka, a menos que el Estado obtenga el consentimiento previo, libre e informado de dicho pueblo. Respecto de las concesiones ya otorgadas dentro del territorio tradicional Saramaka, el Estado debe revisarlas, a la luz de la presente Sentencia y la jurisprudencia de este Tribunal, con el fin de evaluar si es necesaria una modificación a los derechos de los concesionarios para preservar la supervivencia del pueblo Saramaka, en los términos de los párrafos 101, 115, 129-137, 143, 147, 155, 157, 158 y 194(a) de esta Sentencia."*

21.2. La falta de demarcación y titulación de los territorios ancestrales, al impedir o dificultar el acceso de los pueblos indígenas y tribales a sus territorios y el uso y disfrute de los recursos naturales que en ellos se encuentran, les coloca en **una situación de vulnerabilidad extrema que incide directamente sobre sus demás derechos humanos, incluidos los derechos a la alimentación, al agua potable y a la salud,** entre otros. En igual medida, la recuperación, reconocimiento, demarcación y registro de las tierras significan **derechos esenciales para la supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria** (CIDH, *Democracia y Derechos Humanos en Venezuela.* Doc. OEA, 30 de diciembre de 2009, y CIDH, *Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú*. 2 de junio de 2.000).

21.3. Siguiendo esta línea, la CIDH ha establecido que mientras que las tierras indígenas o tribales no hayan sido demarcadas, delimitadas y tituladas, los Estados **deben abstenerse** de "*todo acto que pueda dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros actuando con aquiescencia o tolerancia*

230 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Promoción y Protección de todos los derechos humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el derecho al desarrollo – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, 12º periodo de sesiones, 15 de julio de 2009. Doc. N.U. A/HCR/12/34. párr. 42.

de éste, afecte la existencia, el valor, el uso o goce de los bienes ubicados en la zona geográfica ocupada y usada por el pueblo [indígena]" (CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 197 – Recomendación 2.)

21.4. Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que **se prevenga la ocurrencia de conflictos con terceros por causa de la propiedad de la tierra,** en particular en los casos en que el retardo en la demarcación, o la falta de demarcación, tengan el potencial de generar conflictos294; en tal medida, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que la titulación efectiva de sus tierras se realice sin retardos, para así prevenir conflictos y ataques causados por los procesos de reivindicación territorial295. En efecto, la falta de demarcación de las tierras ancestrales, o el retardo en la demarcación, pueden causar conflictos territoriales graves entre los pueblos indígenas y tribales y terceros, a menudo violentos.

21.5. La demarcación de sus tierras se debe realizar **sin retardos** y los Estados deben abstenerse de obrar en forma **negligente o arbitraria** frente a las solicitudes de demarcación territorial de las comunidades indígenas. (CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 104). Y CIDH, *Democracia y Derechos Humanos en Venezuela.* Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137 – Recomendación 2. 295 CIDH, *Democracia y Derechos Humanos en Venezuela.* Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1063).

21.6. Los Estados violan el derecho al uso y el goce de los bienes de los miembros de las comunidades indígenas al no delimitar y demarcar su propiedad comunal, como lo exige el artículo 21 de la Convención Americana (Corte IDH. *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001).

21.7. Los Estados están en la **obligación jurídica internacional** de definir y demarcar el territorio de los pueblos indígenas y tribales de conformidad con sus propias tradiciones y culturas; el cumplimiento de esta obligación se debe realizar en plena colaboración con el pueblo respectivo, y de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias de uso de la tierra. CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 130.

21.8. Los Estados miembros de la OEA tienen la obligación de respetar y proteger el derecho colectivo a la posesión de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas y tribales mediante la adopción de "medidas especiales para garantizar el reconocimiento del interés particular y colectivo que el pueblo indígena tiene en la ocupación y el uso de sus tierras y recursos tradicionales". El incumplimiento de esta obligación compromete la responsabilidad internacional de

los Estados. 311 CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 131. La Corte Interamericana también ha precisado que el derecho a la posesión puede tener "una significación colectiva protegida bajo la Convención Americana" [Corte IDH. *Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 89]. En la sentencia sobre el caso del pueblo Saramaka v. Surinam, la Corte Interamericana ordenó, como medida de reparación: "adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para proporcionar a los integrantes del pueblo Saramaka los recursos efectivos y adecuados contra actos que violan su derecho al uso y goce de la propiedad de conformidad con su sistema de propiedad comunal" [Corte IDH. *Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194(f)]. 312 CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 115.

21.9. Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que **se les proteja de conflictos con terceros por la tierra**, a través del otorgamiento pronto de un título de propiedad, y de la delimitación y la demarcación de sus tierras sin demoras, para efectos de prevenir conflictos y ataques por otros. Cuando surgen conflictos, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a obtener protección y reparación a través de procedimientos adecuados y efectivos; a que se les garantice el goce efectivo de su derecho a la propiedad; a que se investigue efectivamente y se sancione a los responsables de dichos ataques; y a que se establezcan mecanismos especiales rápidos y eficaces para solucionar los conflictos jurídicos sobre el dominio de sus tierras. (CIDH, *Democracia y Derechos Humanos en Venezuela.* Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1062-1066; 1071; 1137) – **En el informe de 2009 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la CIDH se refirió a la situación del pueblo Yukpa de la Sierra de Perijá. Debido a la falta de titulación efectiva y al retardo en la demarcación de las tierras tituladas, se habían generado conflictos violentos entre varias comunidades Yukpa y ganaderos y terratenientes de la zona; en el marco de dichos conflictos, personas y comunidades Yukpa habían sufrido hostigamiento constante destinado a expulsarles de las tierras ancestrales que habían venido recuperando, a través del amedrentamiento y la violencia verbal y física. Se alegó que en algunos casos se habría contado para estos ataques con el apoyo de efectivos de la Guardia Nacional. Otros conflictos habían surgido con los terceros interesados en el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de carbón, cuyo impacto se habría agudizado por la ausencia y retardo de los procesos de titulación y demarcación territorial. La CIDH explicó que el problema subyacente era el de la falta de implementación de las normas constitucionales y legales internas que consagran los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En consecuencia, la CIDH llamó al Estado a "*adoptar las medidas necesarias para dar vigencia inmediata a las normas constitucionales e internacionales que consagran este derecho de los pueblos indígenas"* [párr. 1062]. La CIDH recomendó al Estado:**

21.10. En este mismo ámbito, los pueblos indígenas o tribales y sus miembros tienen derecho a que su territorio sea **reservado para ellos,** sin que existan dentro de sus tierras asentamientos o presencia de terceros o colonos no indígenas. El Estado tiene una obligación correlativa de prevenir la invasión o colonización del territorio indígena o tribal por parte de otras personas, y de realizar las gestiones y actuaciones necesarias para reubicar a aquellos habitantes no indígenas del territorio que se encuentren asentados allí. La CIDH ha clasificado las invasiones e intrusiones ilegales de pobladores no indígenas como amenazas, usurpaciones y reducciones de los derechos a la propiedad y posesión efectiva del territorio por los pueblos indígenas y tribales, que el Estado está en la obligación de controlar y prevenir. (CIDH, *Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil*. Doc. OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 29 rev. 1, 29 de septiembre de 1997, Capítulo VI, párrs. 33, 40.).

21.11. Los pueblos indígenas o tribales que pierdan la posesión total o parcial de sus territorios mantienen sus derechos de propiedad sobre tales territorios, y **tienen un derecho preferente a recuperarlos**, incluso cuando se encuentren en manos de terceras personas. La CIDH ha resaltado la necesidad de que los Estados tomen medidas orientadas a restaurar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, y ha indicado que la restitución de tierras es un derecho esencial para la supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria. (La Corte Interamericana se ha preguntado si el derecho a la restitución de tierras tiene un límite temporal, o si "permanece indefinidamente en el tiempo". Ha concluido que el derecho permanece mientras subsista la relación fundamental con el territorio ancestral. (Corte IDH. *Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrs. 126-131)

22. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE PROFIERE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SEDE DE REVISIÓN. EFECTOS INTER COMUNIS.

Por regla general, los efectos de las providencias que profiere la Corte Constitucional en su labor de revisión de las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela son *inter-partes*, es decir, que solo afectan situaciones particulares de quienes intervienen en el proceso de revisión.

Sin embargo, en los términos definidos por la jurisprudencia de esta Corporación, la Corte, con estricto apego a la Constitución, también puede determinar o modular los efectos de sus fallos, decidiendo en un caso concreto cuál es el efecto que mejor protege los derechos constitucionales fundamentales y garantiza su plena eficacia.

Haciendo uso de esa potestad, esta Corte ha proferido numerosas sentencias de tutela a las que ha dotado de efectos que tienen un alcance mucho mayor al *inter-partes*, cuando advierte en un determinado asunto que amparar exclusivamente los derechos invocados por quien promueve la acción, sin considerar los efectos que tal decisión tendría respecto de quienes en circunstancias comunes no acudieron a dicho mecanismo, podría implicar el desconocimiento de otras garantías fundamentales. A estos efectos se les ha denominado *inter comunis* (entre comunes).

Sobre el particular, en la sentencia **SU-1023 de 2001**, se señaló que existen circunstancias especialísimas en las cuales la acción de tutela no se limita a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes. Este supuesto se presenta cuando la protección de derechos fundamentales de los peticionarios atente contra derechos fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no puede contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse en mecanismo de vulneración de derechos, dispone también de la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos igualmente fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al accionado se encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.

En otras palabras, hay eventos excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho fundamental del demandante como del derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o particular accionado.

Desde esa óptica, los efectos *inter comunis* pueden definirse como aquellos efectos de un fallo de tutela que de manera excepcional se extienden a situaciones concretas de personas que, aun cuando no promovieron el amparo constitucional, se encuentran igualmente afectadas por la situación de hecho o de derecho que lo motivó, producto del actuar de una misma autoridad o particular, justificado en la necesidad de dar a todos los miembros de una misma comunidad un trato igualitario y uniforme que asegure el goce efectivo de sus derechos fundamentales.

23. INTERÉS SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE:

> ***"****Ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional y que está conformado por numerosas cláusulas constitucionales que constituyen lo que se ha denominado la "Constitución Ecológica" o "Constitución Verde". Este conjunto de disposiciones permite afirmar la trascendencia que tiene el medio ambiente sano y el vínculo de interdependencia con los seres humanos y el Estado"*[231]

En este sentido y luego de repasar algunas de las principales características de la política minero-energética colombiana y las disposiciones constitucionales que garantizan la protección del medio ambiente, en tanto *interés superior*, para la Corte resulta claro que la actividad minera, es una actividad que tiene la potencialidad de afectar el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos

[231] [231] Sentencia T-622/16, donde la Honorable Corte Cosntitucional, RECONOCE al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado

naturales, por lo cual, el Estado debe tomar medidas estrictas de regulación y control de su ejercicio legal -desde el nivel local al nacional-, en tanto la Carta Política de 1991 -que ha sido denominada por la jurisprudencia de la Corte una *Constitución Ecológica*- protege el **interés superior del medio ambiente** y su disfrute por las comunidades humanas. Este juicio tiene aún mayor relevancia respecto de la llamada **minería ilegal**, que, sin mayor control estatal, como consecuencia de una política minero-energética que ha mostrado ser inefectiva, se desarrolla en el país y que debe ser tratada de manera prioritaria e integral.

24. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL.

En el ámbito internacional, el principio Núm. 15 de la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se refiere al principio de precaución de la siguiente manera:

> *"Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".*

Esta idea, a su vez, fue expresamente incluida por el artículo primero de la Ley 99 de 1993, el cual sostiene que el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro. De hecho. Esta ley le confiere una importancia mayúscula al principio de precaución al señalar que la formulación de las políticas ambientales, si bien tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica, debe prevalecer una orientación encaminada a la precaución y a evitar la degradación del medio ambiente[232].

Sus elementos constitutivos han sido abordados por la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos:

> "*Para tal efecto, debe constatar que se cumplan los siguientes elementos: 1. Que exista peligro de daño; 2. Que éste sea grave e irreversible; 3. Que exista un principio de certeza científica, así no sea esta absoluta; 4. Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente. 5. Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.*
>
> *Es decir, el acto administrativo por el cual la autoridad ambiental adopta decisiones, sin la certeza científica absoluta, en uso del principio de precaución, debe ser excepcional y motivado. Y, como cualquier acto administrativo, puede ser demandado ante la Jurisdicción*

[232] Ley 99 de 1993, art.1 (6).

> *de lo Contencioso Administrativo. Esto hace que la decisión de la autoridad se enmarque en el Estado de Derecho, en el que no puede haber decisiones arbitrarias o caprichosas, y que, en el evento de que esto ocurra, el ciudadano tiene a su disposición todas las herramientas que el propio Estado le otorga. En este sentido no hay violación del debido proceso, garantizado en el artículo 29 de la Constitución*"[233].

El principio de precaución se erige como una herramienta jurídica de gran importancia, en tanto responde a la incertidumbre técnica y científica que muchas veces se cierne sobre las cuestiones ambientales, por la inconmensurabilidad de algunos factores contaminantes, por la falta de sistemas adecuados de medición o por el desvanecimiento del daño en el tiempo[234]. No obstante, partiendo de que ciertas afectaciones resultan irreversibles, este principio señala un derrotero de acción que "*no sólo atiende en su ejercicio a las consecuencias de los actos, sino que principalmente exige una postura activa de anticipación, con un objetivo de previsión de la futura situación medioambiental a efectos de optimizar el entorno de vida natural*"[235].

En el orden internacional, la aplicación del principio de precaución sigue generando posiciones encontradas. Dentro de ciertos sectores se considera una herramienta eficaz para lograr una acción jurídica oportuna que atienda desafíos ecológicos cruciales como el cambio climático y la reducción de la capa de ozono. Mientras que los opositores de la medida describen con recelo el potencial para generar regulaciones excesivas que terminan por limitar la actividad humana. Aún no existe consenso en la comunidad internacional respecto a su entendimiento y alcance. El punto central de la discrepancia consiste en establecer cuál es el nivel de evidencia científica que debe exigirse para poder ejecutar un proyecto. En este sentido, se ha propuesto incluso una interpretación más extensiva, en virtud de la cual la carga de la prueba se traslada sobre el agente potencialmente contaminante (sea un Estado, una empresa o un ciudadano), quien deberá demostrar que su actividad o los residuos que se produzcan no afectarán significativamente el entorno[236].

En similar sentido, por ejemplo, el profesor Cass Sunstein, ha reflexionado sobre los graves problemas relacionados con el **concepto de irreversibilidad del daño ambiental** y las medidas que para tratar de evitarlo han sido diseñadas e implementadas a nivel internacional, como es el caso del principio de precaución. A este respecto, ha señalado que "*muchos problemas ambientales tienen importantes elementos de irreversibilidad. Si, por ejemplo, una especie desaparece, muy probablemente se perderá para siempre; el mismo concepto aplica y es cierto para áreas vírgenes. Los organismos genéticamente modificados también podrían llegar a producir un daño ecológico*

[233] Corte Constitucional, sentencia C-293 de 2002. Ver también C-339 de 2002 y C-071 de 2003.
[234] Algunos doctrinantes atribuyen la aparición del principio de precaución a tres características evidentes del medio ambiente: "primero, las personas son, en general, propensas a prestar poca atención a cierto tipo de riesgos, ya que algunos daños pueden llegar a ser manifiestos sólo muchos años después de los eventos que los originaron; segundo, los impactos en el medio ambiente pueden ser difíciles o imposibles de invertirse en escalas humanas de tiempo; tercero, recurrir a la política una vez las elecciones están hechas, es con frecuencia inútil, ya que algunas decisiones son literalmente irreversibles en la práctica" D. Uribe Vargas, F. Cárdenas Castañeda. Derecho Internacional Ambiental, Bogotá, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2010, p. 194. Citado en las sentencias T-397 de 2014 y T-080 de 2015.
[235] Corte Constitucional, sentencia C-595 de 2010.
[236] Corte Constitucional, sentencia T-080 de 2015.

irreversible; las semillas transgénicas podrían imponer pérdidas irreversibles por el incremento de la resistencia frente a las plagas. Recientemente, el problema del cambio climático ha despertado las más serias preocupaciones acerca del concepto de irreversibilidad. Algunos gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera por siglos, y por esa simple razón el cambio climático amenaza con ser irreversible", a lo anterior, agrega que: "*la preocupación global acerca del problema del cambio climático ha llevado a que las naciones consideren la adopción de un principio internacional que permite combatir esta clase de peligro: el principio de precaución que alude específicamente a tratar de evitar un daño irremediable*"[237].

A nivel local, tanto la jurisprudencia constitucional como la administrativa han acogido este principio como una disposición crucial del derecho ambiental. Su impacto es tal que supone un cambio en la lógica jurídica clásica. Por contraposición a la teoría del daño cierto y verificable, vigente desde la tradición romana, la precaución opera sobre el riesgo del desarrollo, el riesgo de la demora, y produce una inversión de la carga de la prueba[238]. Con razón, la Corte ha aseverado que este postulado materializa "*en gran medida*" los deberes de protección con la naturaleza[239].

En este escenario, la Corte encontró satisfechos los requisitos jurisprudenciales para darle aplicación al principio de precaución, no sólo para la protección del medio ambiente sino específicamente para la salud del niño[240]. Atendiendo lo anterior, dispuso el desmonte de la antena. Igualmente, se ordenó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, dentro del marco de sus funciones y en aplicación del principio de precaución, regulara la distancia prudente entre las torres de telefonía móvil y las viviendas, instituciones educativas, hospitales y hogares geriátricos.

En resumen, para la Corte no ofrece duda que el cambio de paradigma que ha venido operando con el paso del tiempo ha implicado un redimensionamiento de los principios rectores de protección del medio ambiente, **como su fortalecimiento y aplicación más rigurosa bajo el criterio superior del *in dubio pro ambiente* o *in dubio pro natura***, consistente en que ante una tensión entre principios y derechos en conflicto la autoridad debe propender por la interpretación que resulte más acorde con la garantía y disfrute de un ambiente sano, respecto de aquella que lo suspenda, limite o restrinja[241].

[237] Sunstein, Cass R. "Two conceptions of irreversible environmental harm". Public Law and Legal Theory Working Paper No. 218, Reg-Markets Center, The Law School, The University of Chicago. [Traducción libre].
[238] Según Néstor Cafferatta, "Los principios y reglas del Derecho ambiental". Citado por el Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Sentencia del 28 de marzo de 2014. Radicación número: 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
[239] Corte Constitucional, C-988 de 2004.
[240] A este respecto, la Corte consideró lo siguiente: "a) La exposición del menor a la radiación electromagnética producida por la antena de telefonía móvil, situada aproximadamente a 25 metros de distancia del lugar en el que habita, conlleva el riesgo, aunque no la certeza científica absoluta, de una afectación grave en su salud a largo plazo, teniendo en cuenta que se trata de un niño de muy corta edad, que tiene en desarrollo su sistema nervioso. b) Es evidente que, si ese riesgo se llega a concretar en el futuro, las consecuencias en la salud del menor serán graves e irreversibles. c) Si bien el principio de precaución suele aplicarse como instrumento para proteger el derecho al medio ambiente sano, también ha sido aplicado por esta Corporación a favor del derecho a la salud en casos como los resueltos en las Sentencias T-104 de 2012 y 1077 del mismo año".
[241] Corte Constitucional, sentencias C-339 de 2002 y C-449 de 2015.

Ante el deterioro ambiental a que se enfrenta el planeta, del cual el ser humano hace parte, en gran medida debido al desarrollo de industrias extractivas como la minería, es preciso seguir implementando medidas que busquen preservar la naturaleza, bajo regulaciones y políticas públicas que se muestren serias y más estrictas para con su garantía y protección, incentivando un compromiso real y la participación de todos -incluidas las comunidades- con la finalidad de avanzar hacia un mundo respetuoso con los demás. Se impone entonces una *mayor consciencia, efectividad y drasticidad* en la política defensora del medio ambiente frente a las potenciales amenazas que plantean los proyectos extractivos y de desarrollo en general.

Se trata, entonces, de establecer instrumentos jurídicos que reconozcan la *progresividad* en los derechos, resguarden el principio *pluralista* y ofrezcan una mayor *justicia y equidad*, apartando una concesión de simple benevolencia por una de reconocimiento colectivo de nuestra especie consistente en que compartimos el planeta con otros seres vivos en un nivel de interdependencia. La justicia con la naturaleza debe ser aplicada más allá del escenario humano, ya que la sociedad es capaz de preocuparse y ocuparse por lo cercano y lo lejano, de cuestionarnos sobre el deterioro ambiental -más allá de los beneficios que nos procuren- y de reconocer un valor al mundo natural. El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (art. 174), ha avanzado en el establecimiento de otros principios que gobiernan la política ambiental europea, pudiendo destacarse el de "*corrección en la fuente de los atentados al medio ambiente*", cuyo alcance está dado en que la política ambiental debe luchar contra el daño a la naturaleza *evitando su nacimiento mismo*.

25. PROHIBICIÓN DE AFECTAR TERRITORIO INDIGENAS EN PROCESO DE DELIMITACIÓN ANCESTRAL, BAJO EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN.

La Corte Constitucional ha expuesto en la Sentencia T-530 del 27 de septiembre de 2016, respecto al *"deber de precaución"* relacionado con la existencia de la comunidad étnica:

> *"(.) el mencionado deber de precaución está justificado por el especial carácter que reviste el territorio para las comunidades indígenas pues de él derivan su sustento económico, social y cultural y en él* se *materializan sus derechos fundamentales, por lo que* es *necesario que las distintas instituciones del Estado desplieguen sus competencias con el propósito de garantizar en la mayor medida posible la integridad de este, hasta tanto no sea delimitado y titulado definitivamente.* ***Lo anterior porque, si durante el proceso de delimitación*** **se** ***concesionan partes del territorio o*** **se** ***autoriza la explotación del mismo por parte de empresas privadas*** **o** ***entes públicos,*** **se** ***están limitando a futuro, de manera grave, los derechos que la comunidad tendría sobre dicho espacio y, con ello, su supervivencia de allí en adelante, por lo que abstenerse de otorgar licencias en un territorio que está siendo objeto de delimitación y titulación para beneficio de una comunidad étnica*** **es** ***una obligación en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.*** *De este modo, la ANM tiene el deber de otorgar*

prelación al derecho fundamental al territorio de los pueblos indígenas por encima de las solicitudes de terceros porque, de lo contrario, cuando finalmente sea *delimitado el territorio del Resguardo, la extensión final de terreno* se *puede ver drásticamente reducida con las concesiones existentes."* (Negrilla fuera del texto original)

26. PROHIBICIÓN DE SUSTRAER ZONA DE RESERVA FORESTAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS NÓMADAS Y SEMINÓMADAS.

El Decreto 2164 del 7 de diciembre de 1995, señala en su artículo 3º. Protección de los derechos y bienes de las comunidades.

"Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, semi-nomada o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de la ley 160 de 1994, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas. Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sólo podrán adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos".[242]

IX. LOCALIZACIÓN, COSMOVISIÓN, USOS Y COSTUMBRES Y POBLACIÓN DEL PUEBLO YUKPA

El pueblo indígena Yukpa, nómada y seminómada, ubicado en el Serranía del Perijá, departamento del Cesar, frontera con Venezuela, Costa Norte de la República de Colombia, únicos hablantes de la lengua Caribe; de igual manera habitantes forzosos en quince (15) ciudades del país, por el conflicto armado, las afectaciones mineras energéticas y el despojo territorial por las multinacionales del Carbón.

1. LOCALIZACIÓN DEL TERRITORIO ANCESTRAL YUKPA

Norte: Limita con el departamento de la Guajira, incluyendo al municipio de Manaure departamento del Cesar, en la Latitud Norte 10° 26.170 y Longitud 72° 53.656. En el municipio de Valledupar, en el inicio de la Rivera del Río Cesar, Latitud norte 10° 27.791 y Longitud 73° 10.621.

Sur: Hasta la parte alta del municipio de Curumaní, límites con el municipio del Carmen, Norte de Santander, Región del Catatumbo hasta el Pueblo Barí, iniciando en la Latitud Norte 9° 23.510 y Longitud 73° 55.033, hasta Latitud Norte 9° 9.605 y Longitud 73° 22.075, que es en límites con la República Bolivariana de Venezuela, territorio Yukpa Venezolano.

[242] Decreto Presidencial 2164 del 7 de diciembre de 1995.,

Todo el territorio ancestral bordea la parte oriental del Río Cesar, desde Manaure hasta Chiriguana, y todo el límite fronterizo de Colombia con la República Bolivariana de Venezuela, por la Serranía del Perijá, en el departamento del Cesar.

2. LA LENGUA YUKPA

> *"Es la única de la familia Caribe viva en Colombia, esto resalta la importancia de que como tal debe ser protegida, sus parientes de alguna manera que todavía quedan se llaman los Carijona, pero que se considera una lengua extinta (Robayo 1987)".*

Muchos son los estudios tipológicos de diferentes autores sobre esta lengua, Swadesh 1959 lo incluye como parte de la Gran Familia Caribe, Hanes 1955 y Durbin, Seijas 1973, realizan gran parte de las descripciones sobre todo en Venezuela.

La lengua Yukpa presenta ciertas características especiales en cuanto a su diversidad dialectal, a pesar de ser un grupo con una población no mayor a los diez mil hablantes, se pueden llegar a distinguir siete variantes dialectales (Largo 2008).

Esta gran diversidad obedece principalmente a factores geográficos y culturales, en especial estos últimos. Su carácter de pueblo nómada y de tendencia bélica ha hecho que la separación sea intencional, la cual se refleja en su misma lengua y algunas prácticas culturales (ibid)".[243]

3. COSMOVISIÓN Y ORALIDAD

> *"La oralidad para los Yukpa no sólo se restringe al contar historias, por el contrario, es la forma como inmortalizan procesos históricos y de abstracción del mundo. El relato oral se convierte en una metáfora de cultura en la cual se expresan los orígenes, razones y saberes que hoy día siguen practicando. Cada vez que se hace una pregunta sobre un comportamiento u objeto cultural, la respuesta es desarrollada por medio de una historia. Cada relato entonces se convierte en una meta-representación individual de la cultura y una macro-representación social acordada.*
>
> *La historia no individualiza los saberes, por el contrario, los integra y justifica. La historia es la memoria colectiva del pueblo Yukpa y también es su estrategia de comunicación más efectiva por la cual comparten sus saberes primordiales, la historia Yukpa nunca es explicita en sus contenidos, sino que se hace un relato deductivo proponiendo una forma de aprendizaje dentro del mismo contexto cultural. En este ejercicio es fundamental el Ywatpʉ puesto que este es quien inicia el diálogo y permite la transmisión de los saberes, ahora bien, es importante señalar que cada historia está adaptada al momento y situación particular razón por la cual los mayores nunca cuentan la misma historia e incluso si se le pregunta a*

243 Plan de Salvaguarda Yukpa, Identidad Cultural, Lengua, Estado actual, pag. 97-98. Ministerio de Interior- 30 de Junio 2014.

un anciano por una en momentos diferentes, es posible que haya variaciones en la misma. Esto implica que la oralidad es también una forma de control social, puesto que se busca que a través de ellas que los Yukpa respeten sus leyes de origen y establezcan una relación armónica con el territorio, los espíritus y demás personas que habitan en él. Es preocupante el hecho de que en algunos asentamientos los mayores manifestaron que los jóvenes han perdido el interés por escuchar las historias y que incluso si se les pidiera que narraran alguna historia no la conocen o la conocen a medias."[244]

4.. NUESTRA LEY DE ORIGEN

"La dinámica cultural del pueblo Yukpa en el territorio de Iroka se teje con los múltiples saberes aprendidos y transmitidos de generación en generación, los saberes se enseñan por medio de la tradición oral, pero cada uno de ellos es la constitución ancestral de una ley de origen.

La ley de origen es el soporte político y cultural para que el pueblo Yukpa pueda regular todos sus comportamientos, por la ley de origen se entiende: el origen de las cosas, la relación constante entre la naturaleza y el hombre. En el principio no era como hoy se ven las cosas, los animales tenían una relación dialogante con el Yukpa, se compartían los saberes y también se aprendía de la misma naturaleza, lo que es el Yukpa hoy día, es el resultado de un proceso de enseñanza. En el principio estaba "atantocha" él o un ancestro de los Yukpa, él sabía y conocía todo su entorno y también le fue comunicado los secretos de la naturaleza, su responsabilidad fue compartir todos esos conocimientos para que sus descendientes pudieran tener una relación armónica con su entorno.

Cuando se habla de la ley de origen se habla de todos los comportamientos culturales realizados en la actualidad, la manera como confeccionar artesanías, la cacería, la pesca, la muerte, la resolución de conflictos. Toda acción hacia la naturaleza debe ser regulada por esta ley de origen, si es infringida se puede desencadenar situaciones que perjudican la pervivencia de los Yukpa. El territorio también es explicado y pensado desde esa ley de origen, este es integral e integrador de saberes.

La evaluación de todos los comportamientos de los Yukpa no se puede hacer separada de esta, la gobernabilidad y autonomía son una manera de dar prioridad a una ley que ha perdurado durante muchas generaciones, es su historia, su presente y su relación con el mundo. "El origen se da en el principio de los tiempos (tamoĉhye ktawo), Papsh es quien hace todas las cosas, encuentra al yukpa dentro de un árbol, de allí lo saca y es así como se da origen al pueblo yukpa". La historia es una de las fuentes más importantes de saber propio, también se constituye como uno de los elementos que conforman la ley de origen, las

244 Plan de Salvaguarda Yukpa, pag. 99. Ministerio de Interior- 30 de Junio 2014.

lógicas que expresan son distintas a occidente y de aquí la importancia de recuperar y fortalecer la historia propia, la historia de este pueblo no solo es una línea cronológica explicada, es la forma como dan sustento a las cosas que ocurren hoy día, todo cuanto ocurre a su alrededor se explica desde la ley de su pueblo.

"¿Me pregunta usted sobre el canasto? Eso tiene una historia, eso fue cuando atantocha existía, el un día se fue a cazar. Fue un día cuando se encontró con okoĉhaĉhe, era un animal muy grande… yo creo que hoy ya no lo hay por ahí, tenía muchos brazos y muy peligroso.

La ley de origen habla de la autonomía como un proceso de continuidad cultural, desde tiempos primordiales el Yukpa ha aprendido como relacionarse y ejercer gobierno dentro de su territorio. La autonomía se debe considerar como la sabiduría ancestral que dicta las normas en cómo se ejerce derecho sobre su mundo y la comunidad, la autonomía permite la continuidad de los procesos culturales ancestrales, las prácticas de siembra, caza, recolección entre otras son el ejercicio de presencia dentro de su territorio."[245]

6. AUTONOMÍA Y AUTODETERMINACIÓN GARANTIZA LA CONTINUIDAD DEL PUEBLO YUKPA

"La ley de origen habla de la autonomía como un proceso de continuidad cultural, desde tiempos primordiales el Yukpa ha aprendido como relacionarse y ejercer gobierno dentro de su territorio.
La autonomía se debe considerar como la sabiduría ancestral que dicta las normas en cómo se ejerce derecho sobre su mundo y la comunidad, la autonomía permite la continuidad de los procesos culturales ancestrales, las prácticas de siembra, caza, recolección entre otras son el ejercicio de presencia dentro de su territorio.

La responsabilidad de una armonía espiritual entre Yukpa y territorio se aplica por medio de la autonomía. No se puede mal entender como una voluntad arbitraria o separada de un Estado, ésta va en dirección a los derechos propios de su pueblo, el cambio se evidencia en la forma de ver el gobierno muy distinto a como lo ve el "blanco".

Hoy día esta autonomía se ve amenazada por los actos voluntariosos del Estado, gobiernos locales y colonización. Estos en muchas ocasiones abordan a la población Yukpa como una cifra más de nuestro país. En el caso de la educación todavía hay resistencia a las propuestas propias de educación imponiendo sanciones o normas que distan de una realidad étnica, se ejercen contratos o proyectos lejos del mismo sentido de autonomía de los pueblos originarios, mucho menos se tiene en cuenta la ley de origen como orientación metodológica.

[245] [245] Plan de Salvaguarda Yukpa, Identidad Cultural, Lengua, Estado actual, pag. 12-13. Ministerio de Interior- 30 de Junio 2014

Las alcaldías son otro factor de violación de autonomía, por muchos años ejercen presiones políticas sobre todo tipo de proceso y presupuestos que atienden a las necesidades básicas de este pueblo. Las políticas lingüísticas se quedan en archivo dentro de estas instituciones municipales desconociendo toda una realidad cultural, imponiendo criterios que solo son entendidos por la gente de afuera.

Son muchos los casos de violación de autonomía y desconocimiento de la ley de origen que lo único que logran es el desánimo y deterioro de una relación en conflicto por siglos.
La ley de origen no es un documento escrito con letras de Wateya, es un saber compartido, que habita en la memoria de este pueblo, se encarna en las costumbres, las relaciones y en el territorio.” [246]

7. VENEZUELA Y COLOMBIA DIVIDIERON EL TERRITORIO YUKPA EN DOS, COMO DIVIDIR DEL VIENTRE DE LA MADRE A DOS GEMELOS.

“*En líneas generales, lo primero que se observa es una tajante división del pueblo Yukpa que parte en dos un extenso territorio. Se trata de la imposición de la frontera colombo venezolana, aquella que fracciona dos tipos de Estados nacionales, pero que en principio es totalmente ajena la dinámica Yukpa. Si bien, la cima de la Serranía es una barrera natural que divide socialmente las poblaciones, los Yukpa han superado este obstáculo y han hecho intercambios entre sí desde hace muchas décadas y siglos atrás. De modo que los Yukpa llaman la atención sobre la unidad de este pueblo indígena y el extenso territorio que abarcan, tanto en Colombia como en Venezuela.*

Pero inevitablemente, esta división termina incidiendo en la dinámica indígena, al imponerse un concepto centralista de nacionalidad que les es externo. Este trazado limítrofe oficial, no coincide con la territorialidad Yukpa, al no reconocer su compleja construcción histórica y cultural. Es otra forma de negar y recortar su amplio territorio ancestral, el cual se fragmenta tajantemente ante estas divisiones internacionales. Ya concentrando la labor de estudio en suelo colombiano, se puede afirmar que la presión de los colonos desde la época de la conquista finalmente ha dado como resultado el arrinconamiento de la población en lo que hoy se conoce como Resguardo.”[247]

Durante muchas décadas nuestro pueblo Yukpa del lado colombiano, dependíamos de los alimentos venezolanos, por ser exageradamente más baratos que los nuestros, los Yukpas venezolanos nos ayudaban. Hoy la grave crisis migratoria venezolana impacta con brutalidad a nuestros hermanos Yukpa del lado venezolano, quienes llegan todos los días a solicitar ayudas, pero con dolor es poco lo que podemos ayudar, los Yukpa Venezolanos al igual que los colombianos nos encontramos como indigentes o habitantes en situación de calle en gran parte de los municipios de Norte de Santander y

246 Plan de Salvaguarda Yukpa, pag. 7, 8 y 9. Ministerio de Interior- 30 de Junio 2014.
247 Plan de Salvaguarda Yukpa, pag. 32 y 38 Ministerio de Interior- 30 de Junio 2014.

la Costa Caribe. Los Yukpa venezolanos son deportados de manera inhumana violentando el Convenio 169 de la OIT.

El Estado Colombiano no cuenta con una política de enfoque diferencial étnico para migrantes trasnacionales, ello contribuirá a que la etnia Yukpa del lado venezolano esté desapareciendo, de la misma manera que nuestro pueblo Yukpa del lado colombiano.

X. DATOS POBLACIONALES, SALUD Y TERRITORRIO

Los datos poblacionales que a continuación se presentan, son el resultado del estudio epidemiológico de la EPS Dusakawi, denominado análisis de la situación de salud pueblo Yukpa afiliado a Dusakawi EPSI, comprendido en el periodo 2017- 2018.

"1. DEMOGRAFÍA

De acuerdo con la información suministrada por la oficina de aseguramiento institucional, en la Base de Datos Única de Afiliación BDUA, corte a treinta (31) de diciembre de 2018 en DUSAKAWI EPSI, se encuentran 9374 afiliados reconocidos como indígenas de la comunidad YUKPA, lo que indica un crecimiento del 6,5% con relación al año 2016, representado en 595 afiliados más; este grupo étnico en su mayoría se encuentra asentado en la Serranía del Perijá, 99,57% habitan en asentamientos indígenas del Departamento del Cesar, de los cuales 62,34% se concentran en Codazzi, seguido por Becerril con 23,84% y La Paz 9,91%, aunque por la movilidad hay en menor proporción en Valledupar y Pueblo Bello; también hay población Yukpa en los Departamento de La Guajira y Magdalena. Ver Tabla 1.

Tabla 1. Distribución de la Población YUKPA, Afiliada a DUSAKAWI EPSI, Según Departamento y Municipio. 2018.

CESAR	MUNICIPIO	YUKPAS	TOTAL
CESAR	VALLEDUPAR	324	3,46
	AGUSTIN CODAZZI	5844	62,34
	BECERRIL	2235	23,84
	PUEBLO BELLO	2	0,02
	LA PAZ	929	9,91
SUBTOTAL		**9334**	**99,57**
LA GUAJIRA	RIOHACHA	8	0,09
	ALBANIA	1	0,01
	BARRANCAS	7	0,07
	DIBULLA	3	0,03
	HATO NUEVO	3	0,03
	MAICAO	2	0,02
	SAN JUAN DEL CESAR	5	0,05
	URIBIA	3	0,03
SUBTOTAL		**32**	**0,34**
MAGDALENA	SANTA MARTA	13	0,14
	ARACATACA	2	0,02
	CIENAGA	1	0,01
	FUNDACION	5	0,05
SUBTOTAL		**8**	**0,09**
TOTAL		9374	100,00

Fuente: Aseguramiento

Al revisar la población según grupos de edad, observamos que los niños y niñas entre 5 y 14 años, son el grupo más numeroso los cuales aportan el 29,09% del total de los afiliados, seguido por las mujeres de 19 a 44 años que aportan el 16,44%, mientras los hombres en este mismo grupo de edad suman 15,21%, los niños con edades entre 1 y 4 años representan el 14,58% y los menores de un año 2,54%, es decir que los niños y niñas menores de cinco años ocupan el segundo lugar en población con 17,1%, entretanto los mayores de 65 alcanzan 3,61%. Ver Tabla 2.

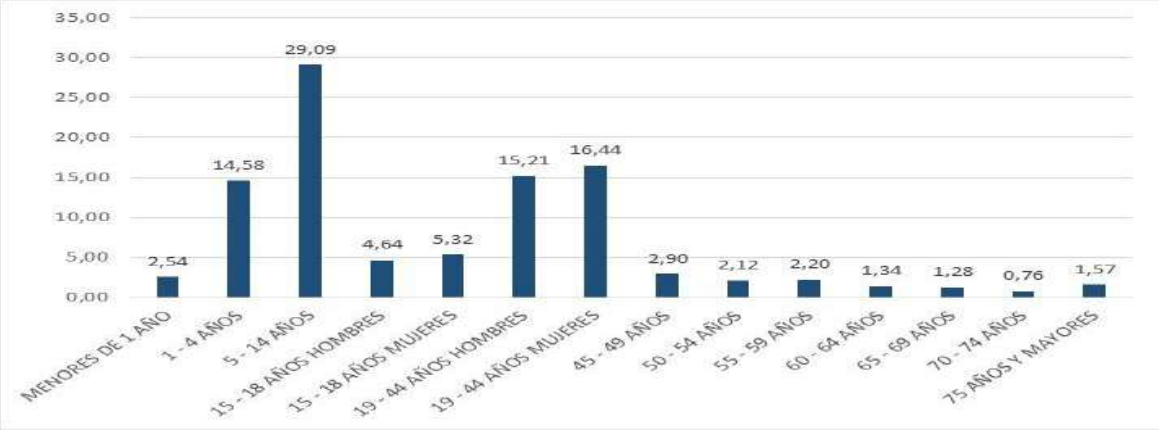
Tabla 2. Distribución de la Población YUKPA, Afiliada a DUSAKAWI EPSI, Según Grupos de Edad. 2018

ETNIA	GRUPO EDAD	AFILIADOS	%
YUKPA	MENORES DE 1 AÑO	238	2,54
	1 - 4 AÑOS	1367	14,58
	5 - 14 AÑOS	2727	29,09
	15 - 18 AÑOS HOMBRES	435	4,64
	15 - 18 AÑOS MUJERES	499	5,32
	19 - 44 AÑOS HOMBRES	1426	15,21
	19 - 44 AÑOS MUJERES	1541	16,44
	45 - 49 AÑOS	272	2,90
	50 - 54 AÑOS	199	2,12
	55 - 59 AÑOS	206	2,20
	60 - 64 AÑOS	126	1,34
	65 - 69 AÑOS	120	1,28
	70 - 74 AÑOS	71	0,76
	75 AÑOS Y MAYORES	147	1,57
TOTAL		**9374**	**100,00**

Fuente: Aseguramiento DUSAKAWI EPSI

53% de los indígenas yukpa son mayores de 15 años, el 47% restante corresponde a menores de 15 años, las mujeres en edad fértil representan 23%, los menores de 5 años representan el 17,1%, de los cuales el 14,58% tienen entre 1 y 4 años, mientras que los menores de un año suman el 2,54%, entre tanto los adultos mayores de 65 años solo alcanzan el 3,61%. Ver Gráfico 1.

Gráfico 1. Distribución de la Población Yukpa, Afiliada a DUSAKAWI EPSI, Según Grupos de Edad 2018.



Fuente: Oficina Aseguramiento

Según grupos quinquenales los niños de 5 a 9 años son los más numerosos aportan el 15,48%, seguido por los de 1 a 4 años con 14,58% mientras los de 10 a 14 suman 13,61, entretanto los menores de un año suman el 2,55%, y los mayores de 65 años solo alcanza el 3,61%. Tabla 3

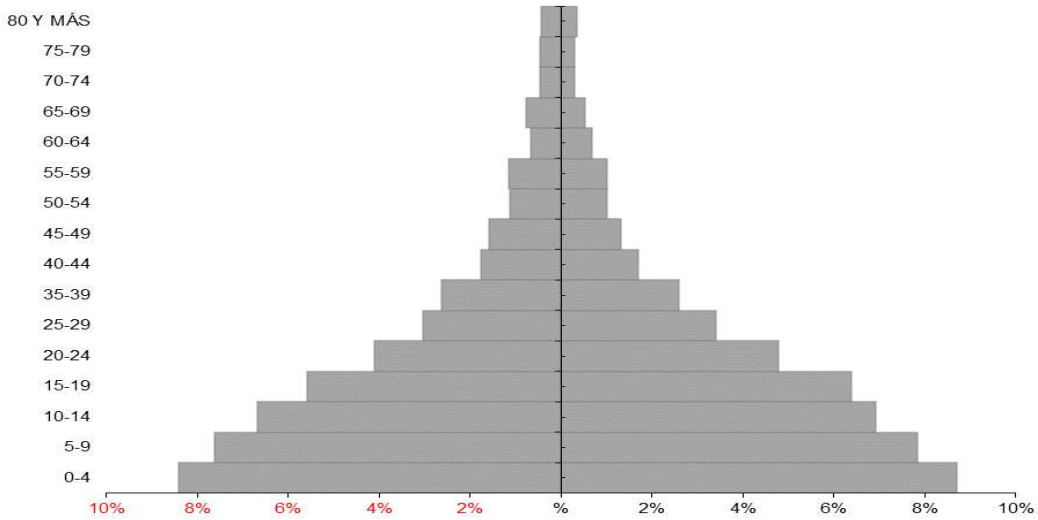
Tabla 3. Distribución de la Población YUKPA, Afiliada a DUSAKAWI EPSI, Según Grupos de Edad y Sexo. Diciembre de 2018.

ETNIA	GRUPO EDAD	MUJERES	HOMBRES	TOTAL	%
YUKPA	MENORES DE 1 AÑO	124	115	239	2,55
	1 - 4 AÑOS	692	675	1367	14,58
	5 - 9 AÑOS	735	716	1451	15,48
	10 - 14 AÑOS	650	626	1276	13,61
	15 - 19 AÑOS	600	523	1123	11,98
	20 - 24 AÑOS	449	385	834	8,90
	25 - 29 AÑOS	320	284	604	6,44
	30 - 34 AÑOS	267	258	525	5,60
	35 - 39 AÑOS	244	246	490	5,23
	40 - 44 AÑOS	160	165	325	3,47
	45 - 49 AÑOS	123	149	272	2,90
	50 - 54 AÑOS	94	106	200	2,13
	55 - 59 AÑOS	95	109	204	2,18
	60 - 64 AÑOS	64	62	126	1,34
	65 - 69 AÑOS	49	72	121	1,29
	70 - 74 AÑOS	28	43	71	0,76
	75 - 79 AÑOS	29	43	72	0,77
	80 AÑOS Y MAYORES	33	41	74	0,79
TOTAL		**4756**	**4618**	**9374**	**100,00**

Aseguramiento DUSAKAWI EPSI

La pirámide poblacional muestra una base ancha es decir hay un crecimiento en los grupos con edades entre los 0 y 19 años, en este grupo se concentra el 60% del total de YUPAS, afiliados a DUSAKAWI EPSI, con predominio del grupo de 5 a 9 años, que concentran el 15,02%, seguido niños de 1 a 4 años con 14,81%, mientras los jóvenes de 10 a 14 años aportan el 14,09%. Lo que nos indica que la población yukpa es joven, por tal motivo se deben fortalecer las acciones de promoción, prevención y detección temprana, asimismo potencializar los programas de AIEPI, nutrición y crecimiento y desarrollo. Le sigue en importancia el grupo de 15 a 49 años en el que se encuentran las mujeres en edad fértil y el adulto joven donde se debe implementar estrategias de gestión del riesgo individual para los eventos prevenibles. El grupo de edad minoritario corresponde a los adultos mayores de 65 años, que representan el 3,39%. Ver Gráfico 2.

Gráfico 2. Pirámide Poblacional Pueblo YUKPA, afiliados a DUSAKAWI EPSI, Según Grupos de Edad, diciembre de 2018.



Fuente: Aseguramiento, DUSAKAWI EPSI

Tabla 4. Índices Demográficos, Pueblo Yukpa 2018

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	Representa la relación entre hombre y mujeres. En el año 2018 por cada 100 mujeres hay 97,0984020185029 hombres.
Razón ninos mujer	Representa la relación entre niños y mujeres en edad fertil. En el año 2018 por cada 100 mujeres en edad fertil, entre 15 y 49 años, hay 74,2487286176606 niños y niñas entre 0 y 4 años
Indice de infancia	Representa la relación entre los menores de15 años y la población total. En el año 2018 por cada 100 personas 46,2235971836996 correspondían a población menor de 15 años.
Indice de vejez	Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. En el año 2018 de cada 100 personas, 3,60571794324728 tienen 65 años y más.
Indice de envejecimiento	Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. En el año 2018 por cada 100 niños y jovenes menores de 15 años hay 7,8006000461574 personas mayores de 65 años
Indice demografico de dependencia	Representa la relación entre la pobalción menor de 15 y mayor de 65 años y la pobalción entre 15 y 64 años. En el año 2018 de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay 99,3195832447374 menores de 15 y mayores de 65 años
Indice de dependencia infantil	Representa la relación entre la población menor de 15 años y la pobalción entre 15 y 64 años. En el año 2018, de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay 92,1326812672762 personas
Indice de dependencia mayores	Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la pobalción entre 15 y 64 años. En el año 2018, de cada 100 personas entre 15 y 64 años 7,1869019774612 tienen más de 65
Indice de Friz	Representa la relación entre la población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto a la población entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Aseguramiento, DUSAKAWI EPSI

2. ANÁLISIS DETERMINANTES SOCIALES

Los pueblos indígenas comparten características demográficas similares mientras que culturalmente existen muchas diferencias usos y costumbres, lo que sí tienen en común son condiciones similares con las determinantes sociales, las cuales afectan y deterioran la salud de los pueblos indígenas convirtiéndose en el primer factor que predispone la aparición y mantenimiento de las enfermedades en la comunidades estamos seguros que si estos factores y determinantes son intervenidas mejorarían las condiciones de salud de las comunidades, entre algunas de ellas tenemos:

- El pueblo Yukpa, ha sido constantemente objete de despojo y desalojo, situación que lo tiene sumido en la carencia de Tierra no solo para producir sino también para su actividad principal como lo son la caza, la pesca y la recolección lo cual afecta a esta comunidad y se constituye en uno de los factores determinantes de esta comunidad es por ello el reclamo permanente por el despojo del cual han sido objeto, sin tierras no hay comida y es la falta de comida uno de los principales inconvenientes por los graves problemas de desnutrición en la población infantil.

- No existe garantía de servicios básicos, especialmente Agua Potable, lo que hace que las comunidades deban abastecerse de los ríos y acequias, consumiéndola sin ningún tratamiento, esta situación hace que en las comunidades las enfermedades infecciosas y parasitarias al igual que la Diarrea, sean las primeras causas de morbi – mortalidad.

- Debilidades en el saneamiento básico, manejo de residuos, se registra contaminación y con ello la alta incidencia de enfermedades del sistema respiratorio.

- Condiciones y características de las viviendas.

- Manipulación y conservación de los alimentos.

- Inconvenientes en el aseguramiento nutricional que conlleva a problemas de malnutrición, especialmente relacionados con desnutrición aguda y/o severa en la población menor de cinco años.

- Baja escolaridad de padres, responsables y cuidadores de niños y niñas, que hace que no se identifiquen y reconozcan signos de alarma y de peligro frente a una enfermedad que ponga en riesgo la vida e integridad de los menores.

- Vías intransitables.

Mientras las entidades territoriales no intervengan de manera efectiva las determinantes descritas por muchos esfuerzos que se hagan a través de la prestación de los servicios de salud los resultados no van a ser los mejores.

3. MORTALIDAD

Durante el año 2018 en el Pueblo Yukpa, se registraron 33 defunciones de las cuales el 63,6% (21/33), corresponde a Mortalidades calificadas como evitables, entre las que se encuentran la Mortalidad por Desnutrición, considerada como una de las primeras causas de mortalidad en el pueblo yukpa, asimismo Mortalidad Materna y perinatal, mientras que la mortalidad general aporto el 36,4% (12/33). Tabla 18.

Tabla 18. Distribución de Casos de Mortalidad Según Tipo, Pueblo YUKPA, 2018

ETNIA	TIPO DE MORTALIDAD		TOTAL
	EVITABLE	GENERAL	
YUKPA	21	12	33
%	63,6	36,4	100

Fuente: SIVIGILA, Censo Concurrencia Aseguramiento

A pesar de que en el Municipio de Codazzi se concentra el mayor número de muertes registradas en 2018, 69,7% (23/33), por el denominador poblacional, es el Municipio de Becerril el que registra la tasa más alta de mortalidad con 4,03 muertes por cada mil afiliados yukpas, mientras que en general la población Yukpa afiliada a la EPSI, durante el año 2018, registro una tasa de mortalidad de fue de 3,5 defunciones por cada mil afiliados. Tabla 19.

Tabla 19. Tasa General de Mortalidad Según Municipio de Residencia, Pueblo YUKPA, 2018

MUNICIPIO	TIPO DE MORTALIDAD		TOTAL	POBLACION	TGM
	EVITABLE	GENERAL			
AGUSTIN CODAZZI	14	9	23	5844	3,94
BECERRIL	6	3	9	2235	4,03
VALLEDUPAR	1		1	324	3,09
LA PAZ	0	0	0	929	0,00
Total General	21	12	33	9374	3,52

Fuente: SIVIGILA, Censo Concurrencia Aseguramiento

Los asentamientos indígenas de San Genaro en el municipio de Becerril y la comunidad de Iroka en Codazzi, son las zonas donde se concentra el mayor número de muertes en la población yukpa afiliada a la EPSI, seguido por Tekuimo y Sospa; 69,7% de las muertes se registran en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, seguido por Becerril con 27,3%, mientras que, en La Paz, solo se registró una muerte en 2018. Tabla 20

Tabla 20. Distribución de la Mortalidad Según Asentamiento y Municipio de Procedencia, Pueblo YUKPA, 2018

ASENTAMIENTO	MUNICIPIO			TOTAL	%
	AGUSTIN CODAZZI	BECERRIL	VALLEDUPAR		
SAN GENARO		4		4	12,1
IROKA	4			4	12,1
TECUIMO	3			3	9,1
SIN ASENTAMIENTO	1	1		2	6,1
SOSPA	2			2	6,1
$KEME	1			1	3,0
CAMPO ALEGRE	1			1	3,0
CASCO URBANO	1			1	3,0
CONONE	1			1	3,0
GRANADOS		1		1	3,0
KURARAPA			1	1	3,0
LAS PEÑAS		1		1	3,0
MENKUE	1			1	3,0
NEMO	1			1	3,0
PAKIMANA	1			1	3,0
PASHAYA	1			1	3,0
PITAS	1			1	3,0
SANTA RITA		1		1	3,0
SASHA	1			1	3,0
SICHAYE	1			1	3,0
WUAYICO	1			1	3,0
YIWOKO	1			1	3,0
SOKORPA		1		1	3,0
Total General	23	9	1	33	100,0
%	69,7	27,3	3,0	100,0	

Fuente: SIVIGILA, Censo Concurrencia Aseguramiento

Al realizar el análisis de la mortalidad registrada en el pueblo Yukpa, según ciclos de vida, se observa claramente que, durante el año 2018, el grupo con mayor afectación es el de menores de cinco años (Primera Infancia) que aportaron el 60,6% del total de muertes, en segundo lugar, se ubica el grupo de la juventud es decir hombres y mujeres con edades entre los 18 y 28 años. Tabla 21

Tabla 21. Primeras Causas de Mortalidad, Menores de un año Pueblo YUKPA, 2018

MUNICIPIO	CICLOS DE VIDA						TOTAL
	ADOLESCENCIA	ADULTEZ	INFANCIA	JUVENTUD	PRIMERA INFANCIA	VEJEZ	
AGUSTIN CODAZZI		2	2	4	13	2	23
BECERRIL	1			2	6		9
VALLEDUPAR					1		1
Total General	1	2	2	6	20	2	33
%	3,03	6,06	6,06	18,18	60,61	6,06	100,00

Fuente: SIVIGILA, Censo Concurrencia Aseguramiento

Los niños y niñas menores de 5 años son los que aportan el mayor número de muertes en el pueblo Yukpa, comunidad que se encuentra en exterminio, han dejado la responsabilidad de las comunidades solo en el sector salud, cuando vemos que la mayoría de estas son prevenibles si mejoran las condiciones de vida; 25% de las muertes están relacionadas con Enfermedad Diarreica Aguda, evidentemente son comunidades donde el agua que se consume no es apta, en segundo lugar se ubica la Desnutrición Aguda y Mortalidad Perinatal; asimismo las patologías de origen respiratorio son de gran impacto en este grupo de edad. Tabla. 22

Tabla 22. Primeras Causas de Mortalidad, Niños 0 a 5 años Pueblo YUKPA, 2018

CICLO DE VIDA	CAUSA DE LA MUERTE	No.	%
PRIMERA INFANCIA 0 A 5 AÑOS	MORTALIDAD POR EDA 0-4 AÑOS	5	25
	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA	3	15
	MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	3	15
	SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA	2	10
	V.I.DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA/EDA - DNT	2	10
	CARDIOMIOPATIA, NO ESPECIFICADA	1	5
	J159 : NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1	5
	J969 - INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	1	5
	MORTALIDAD POR IRA	1	5
	PARO RESPIRATORIO	1	5
Total General		20	100

Fuente: SIVIGILA, Censo Concurrencia Aseguramiento

En los niños con edades entre los 6 y 10 años, solo se registran dos defunciones una de ellas por mordedura por serpientes el otro caso por enfermedad degenerativa. Tabla. 23

Tabla 23. Primeras Causas de Mortalidad, Grupo de 5 a 14 años Pueblo YUKPA, 2018

CICLO DE VIDA	CAUSA DE LA MUERTE	No.	%
INFANCIA	EFECTO TOXICO DEL CONTACTO CON ANIMALES VENENOSOS:	1	50
	PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA	1	50
Total General		2	100

Fuente: SIVIGILA, Censo Concurrencia Aseguramiento

En el grupo de Adolescentes, es decir jóvenes con edades entre los 11 y 17 años, se registró durante el año 2018 una sola Mortalidad, que corresponde a Mortalidad Materna, la cual se considera uno de los indicadores de inequidad y trazadores de gestión en salud pública, esta no está relacionada con el embarazo, parto o puerperio, sino que tenía otra enfermedad de base que fue la causa directa de la Muerte. Tabla. 24

Tabla 24. Primeras Causas de Mortalidad, Población de 11 a 17 años, Pueblo YUKPA, 2018

CICLO DE VIDA	CAUSA DE LA MUERTE	No.	%
ADOLESCENCIA	MORTALIDAD MATERNA	1	100
Total General		1	100

Fuente: SIVIGILA, Censo Concurrencia Aseguramiento

Los jóvenes entre 18 y 28 años son el segundo grupo que aporta mayor número de muertos en el pueblo Yukpa, 67% (4/6), con patologías de origen respiratorio, Neumonía, Infección Aguda de Vías Respiratorias, Paro Respiratorio entre otras, asimismo se registra una Mortalidad Materna Indirecta y Meningitis Bacteriana. Tabla. 25

Tabla 25. Primeras Causas de Mortalidad, Población de 18 a 28 años, Pueblo YUKPA, 2018.

CICLO DE VIDA	CAUSA DE LA MUERTE	No.	%
JUVENTUD (18 A 28 AÑOS)	J159 : NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1	16,7
	J22X : INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS IN	1	16,7
	MENINGITIS BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1	16,7
	MORTALIDAD MATERNA	1	16,7
	PARO RESPIRATORIO	1	16,7
	R060: DISNEA	1	16,7
Total General		6	100,0

Fuente: SIVIGILA, Censo Concurrencia Aseguramiento

En los afiliados Yukpas con edad entre los 29 a 59 años, grupo llamado como el de la adultez, se registraron dos defunciones una de ellas asociada con enfermedad renal y la otra por lesiones y traumatismos múltiples en la cabeza. Tabla. 26

Tabla 26. Primeras Causas de Mortalidad, Población de 45 a 49 años, Pueblo YUKPA, 2018.

CICLO DE VIDA	CAUSA DE LA MUERTE	No.	%
ADULTEZ	INSUFICIENCIA RENAL NO ESPECIFICADA	1	50
	TRAUMATISMOS MULTIPLES DE LA CABEZA	1	50
Total General		2	100

Fuente: SIVIGILA, Censo Concurrencia Aseguramiento

En los afiliados Yukpas mayores de 60 años, se registran dos muertes, ambas de creer están asociadas con enfermedades crónicas, un registro causa directa insuficiencia cardiaca, mientras la otra ocurrida al interior de la comunidad registrada como muerte instantánea, la cual podría estar asociada con infarto agudo de miocardio. Tabla. 27.

Tabla 27. Primeras Causas de Mortalidad, Población Mayor de 60 años, Pueblo YUKPA, 2018.

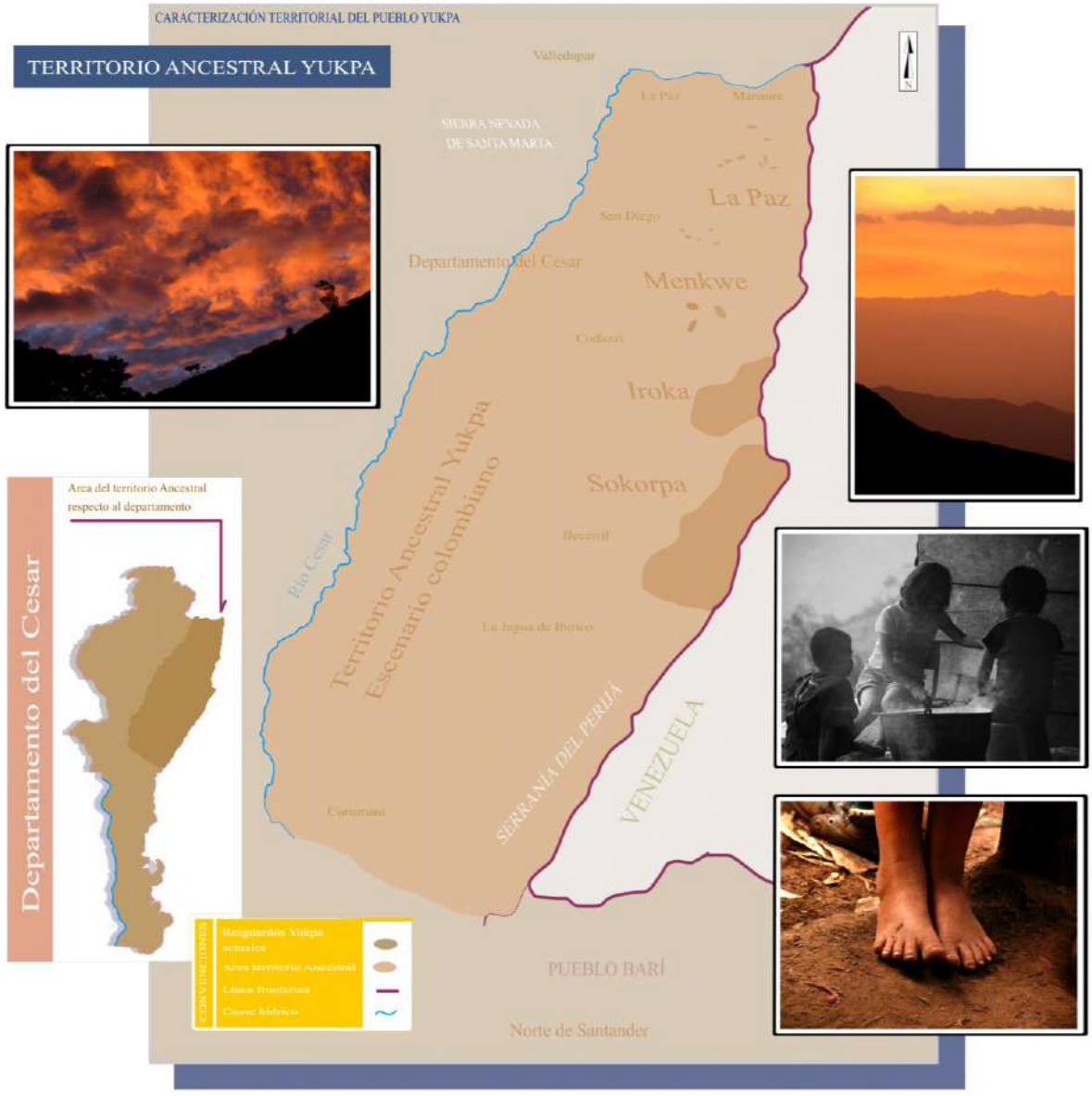
CICLO DE VIDA	CAUSA DE LA MUERTE	No.	%
VEJEZ MAYOR 60 AÑOS	I500 : INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	1	50
	MUERTE INSTANTANEA	1	50
Total General		2	100

Fuente: SIVIGILA, Censo Concurrencia Aseguramiento"[248]

[248] Análisis de la situación de salud pueblo Yukpa afiliado a Dusakawi EPSI, comprendido en el periodo 2017- 2018.

XI. DESCRIPCIÓN DEL DESPOJO DE NUESTRO TERRITORIO Y NUESTRAS TIERRAS POR EL ESTADO COLOMBIANO

1. CROQUIS DE TERRITORIO ANCESTRAL YUKPA DE LA SERRANÍA DEL PERIJÁ



2. TOPONIMIAS DEL TERRITORIO ANCESTRAL YUKPA.

Otra forma de entender el territorio ancestral es por medio de sus toponimias, que son la relación histórica, territorial y lingüística con sus espacios de vida. El gran río Cesar es uno de los ríos a los cuales los Yukpa ancestralmente acudieron para la práctica de la pesca tradicional, este tiene su etimología en la palabra Yukpa (*sasache)* que tiene su significación en la palabra: arena. También lo es la Serranía del Perijá, el río maracas (*marhaka*), el rio Casacará (*kasakacha*), río sikarare (*sekachach*), río la duda (*tchucha*), Magiriaimo (*mashechamu*), tocaimo (*tokaymu*), los tupe. Todos estos ríos y espacios hacen parte de la historicidad y de la etimología caribe de la lengua yukpa; develando la importancia de su riqueza etnolingüística.

3. ANTECEDENTES

> "*El territorio ancestral se refiere a aquel basto espacio dominado antiguamente por el pueblo Yukpa, el cual existe desde hace muchos siglos atrás, incluso previo al proceso de conquista española. Este territorio en su zona sur llega hasta lo que hoy es el área media del departamento del Cesar, limitando incluso con el antiguo territorio del pueblo indígena Barí. En ese extremo sur del territorio ancestral, se referencia una antigua presencia del pueblo Yukpa hacia áreas cubiertas por ciénagas. Estas eran alimentadas por los grandes ríos provenientes de la Región Andina. Los Yukpa abarcaban las áreas del plan y casi toda la Serranía del Perijá, extendiéndose hasta el extremo nororiental de dicho departamento. Al occidente, el Río Cesar es una especie de límite natural dentro de su lógica territorial.*[249] *Al oriente, el territorio Yukpa sobrepasaba el filo de la Serranía y se internaba en territorio venezolano llegando a las orillas del Lago Maracaibo. Seguidamente, se muestra en un mapa la ocupación original del territorio ancestral, contrastando con la ubicación actual de los resguardos.*
>
> *De tal modo que, hasta antes de colonización ibérica en el continente americano, el pueblo Yukpa ejerció un dominio territorial que limitaba con los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, con los pueblos de las planicies del caribe y con el ya nombrado pueblo Barí. Los conquistadores y misioneros se abrieron paso a través del río. Este fenómeno conllevó al movimiento de los asentamientos indígenas y cambio de su dominio territorial, conforme el blanco iba ganando sus propios espacios. Tras la irrupción de diferentes actores sociales,*

249 "Cuando los españoles llegaron a tierras colombianas, el territorio que hoy pertenece al municipio de Codazzi se encontraba habitado por los indios Yukpa, quienes inicialmente ocuparon la región de Maracaibo en Venezuela, y después penetraron a la hoya del Cesar por la Guajira y se radicaron en la serranía del Perijá (Cordillera Oriental), en la vertiente colombiana. Luego se extendieron por el pie de monte hasta la zona oriental del valle del río Cesar, al norte del actual departamento del mismo nombre. Sus vecinos más cercanos eran los indios Arhuacos y los Chimilas, al oeste; los Guajiros al norte y los Motilones al sur" (Pachón Reyna Aurora, Plan)"

se produjo la consecuente reducción de este escenario cultural y de vida Yukpa, lo que implicó el corrimiento y usurpación del territorio indígena de las zonas del valle, confinando a este pueblo a los relieves montañosos de la Serranía. El territorio ancestral era así arrebatado de la apropiación física Yukpa. Posteriormente, el territorio Yukpa se vio presionado en la propia zona montañosa, hasta reducir a estos grupos indígenas a espacios fragmentados y relativamente discontinuos entre sí, como aún se puede observar en la actualidad.

Luego de abandonar forzadamente sus territorios originales, pervivieron ciertos sitios sagrados en la memoria del pueblo Yukpa, fundamentales como marcas territoriales de la cultura y de su identidad propia. Varios de los sitios sagrados son accesibles en la actualidad, pero otros quedaron localizados en las zonas arrebatadas abruptamente a este pueblo. Se generan vacíos en su ritualidad, porque estos escenarios prevalecen en la mente de los pobladores Yukpa, pero hay una fractura territorial entre lo cultural y lo material, al no poder palpar y visitar directamente varios de estos lugares. De tal forma, que hay un enorme abismo que separa al territorio ancestral, frente al territorio donde se desarrollan las prácticas cotidianas contemporáneas de este pueblo.

Para su supervivencia, este pueblo llevó a cabo una complementariedad entre los diferentes pisos climáticos, aprovechando los recursos propios de las tierras altas y bajas, dinamizando un ciclo productivo según las características de las planicies y las elevaciones montañosas. Pero el paisaje que dominaba el pueblo Yukpa era radicalmente diferente al actual. Siguiendo la tradición oral de los indígenas, se indica que la selva (la montaña según su propia denominación), era la cobertura vegetal dominante del territorio hace unos cien años y que prevaleció siglos atrás, tanto en los relieves de ladera, como en los de la planicie. Hoy son ecosistemas prácticamente desaparecidos en espacios llanos y seriamente reducidos en el área cordillerana.

De hecho, las huellas de aquella relación entre el indígena y la selva circundante perduran aún con el paso del tiempo. Por testimonios recogidos, se sabe incluso de sistemas de cultivo tradicionales desarrollados en interacción con densas coberturas vegetales, muy similar a otras culturas indígenas en Colombia. Un sistema tipo chagra se rastreaba décadas atrás, en donde los grupos familiares se asentaban por un determinado periodo de tiempo, tumbaban un trozo de selva, creaban un claro dentro del entorno selvático, realizaban uno o dos ciclos de cultivo y luego se trasladaban a otro espacio selvático para repetir nuevamente el proceso. De tal forma que este sistema rotativo los hacía una cultura semi nómada, quienes complementaban su supervivencia con ciclos de caza, la pesca y la recolección de frutos. Se trataba un ecosistema selvático humanizado, que tenía la oportunidad de regenerarse ante este movimiento geográfico continuo, basado en una fase de producción indígena que no desencadenaba peligrosos procesos de deforestación masiva.

Algunos habitantes Yukpa alcanzaron a utilizar este sistema hasta la década de 1960 y eran escépticos frente a la llegada los nuevos métodos de producción, pero pronto la selva desaparecería abruptamente por la introducción de otros sistemas pecuarios y de cultivo, trastornando de alguna manera el nomadismo característico de esta etnia. Igualmente, la selva ha sido proveedora de elementos medicinales, de tinturas, de tejidos, de materiales para la construcción de viviendas o de elementos para uso espiritual y que hoy en día perviven en la cultura Yukpa. De ahí la importancia natural y cultural de la existencia de los espacios selváticos que aún prevalecen en la zona montañosa, dotados de una rica diversidad en flora y fauna. En cuanto a esa biodiversidad, en los testimonios se denota aún la presencia del jaguar, del tigrillo, del oso, del venado, del coatí, de monos, de ardillas, de armadillos y de una gran variedad de colibríes en las selvas que aún perviven. Se advierte sobre avanzados procesos de deforestación actual, que disminuyen el hábitat de la fauna propia de la Serranía del Perijá, causando serios efectos en el pueblo Yukpa, ya que las áreas de caza se reducen drásticamente y se hace frágil esta fuente alimenticia para las comunidades indígenas.

La riqueza ambiental de la zona ha sido reconocida por el propio Estado, declarándose en ese sentido Zonas de Reserva Forestal en el área. Igualmente, se han declarado algunas zonas de protección ambiental por parte de las entidades competentes.

Con esta disminución de los ecosistemas se ha visto afectada la posibilidad de tener una nutrición más variada y completa pues la carne de los animales es una significativa fuente proteica (Arias, 2009). Con la destrucción paulatina del bosque alto, se pierde el hábitat natural de varias especies biológicas que son el objetivo de sus actividades tradicionales de recolección y caza, y factores fundamentales para la dieta proteínica de las familias Yukpa (Arias, 2009).

Frente al territorio ancestral propiamente dicho, en un comienzo, en este convergían la presencia física y la esencia cosmológica Yukpa, sin embargo, esa realidad cambiaría drásticamente. Conforme se afianzó el proceso de la colonia ibérica y luego, con el desarrollo de la ruralidad colombiana en esta región durante el siglo XIX, el territorio ancestral Yukpa se vería seriamente menguado y transformado. Justamente, el pueblo Yukpa ha sufrido diferentes embates a lo largo de la historia que han reducido su territorio, transformado su cultura y modificado su relación con el entorno. Un viaje en el tiempo revela esa pérdida del territorio por la intervención de otros actores.

Luego de algunos contactos con los blancos en la época de la colonia, ya se empezaban a vislumbrar procesos de arrebato territorial por parte de agentes externos, quienes en ese entonces deseaban consolidar su proyecto colonial. En la zona del plan se empezaron a fundar estancias ganaderas y cultivos de plantación (caña y cacao), en lo que hoy es el

municipio de Codazzi. Posteriormente, diferentes oleadas evangelizadoras han tratado de hacer conexión con el pueblo Yukpa a través de la realización de diferentes misiones.

Así, gradualmente, con el avance de las creencias espirituales occidentales, varios grupos religiosos han logrado trasmitir parcialmente sus valores y preconcepciones a este pueblo indígena, lo que resta fuerza a su cosmología, cultura y saberes originales. Se afirma que los Yukpa han estado expuestos a la eliminación y sometimiento, particularmente desde comienzos del siglo XIX, por medio de facciones políticas y religiosas. Pero no es hasta la llegada del siglo XX, cuando la avanzada territorial de diferentes actores sociales se ha hecho realmente notable, ampliándose la introducción de pastos y cultivos, que los anteriores grupos religiosos o hacendados ya habían impulsado en menor escala.

El Estado colombiano también ha impactado con fuerza en el pueblo Yukpa contribuyendo parcialmente con su desintegración. Este ha impulsado, especialmente durante el último siglo, procesos de inserción a la sociedad civil de las comunidades indígenas, ya sea imponiendo una nacionalidad, un sistema educativo, una lengua oficial o un sistema jurídico territorial. Así también ha fomentado procesos de colonización en áreas de frontera, sin resolver los agudos procesos de concentración de la propiedad al interior del país.

Existe un desplazamiento histórico donde hay una gran responsabilidad de la cultura occidental y posteriormente los Estados nación, hoy representados por los gobiernos de Colombia y Venezuela, respectivamente. Hoy se puede apreciar que las condiciones de vida del pueblo Yukpa son el resultado de un largo proceso de casi 500 años, en donde la población no indígena ha intentado aniquilarlo o integrarlo, (tanto al Pueblo como a su territorio) al dominio político y a los procesos de producción occidental. Las consecuencias no han sido favorables para los indígenas, por el contrario, con la reducción del territorio se hace cada vez más palpable su desmembramiento cultural y social."[250]

4. LOS RESGUARDOS

El Estado Colombiano ha reconocido el derecho a la propiedad colectiva de los territorios de los Pueblos Indígenas como un derecho fundamental constitucional[251], particularmente, en el caso del pueblo Yukpa de la Serranía del Perijá- departamento del Cesar, República de Colombia, se han constituido 6 pequeñísimos resguardos a sabiendas de nuestra condición de nómadas y seminómadas, cazadores, recolectores y pescadores, es decir nos encajonó en las partes altas, en las tierras menos productivas , en peñascos y en ecosistemas frágiles.

250 Plan de Salvaguarda Yukpa, pag.23-35. Ministerio de Interior- 30 de Junio 2014.
251 Artículos 63 y 329 de la Constitución Política, artículo 14 Convenio 169 de la OIT, Sentencia T-188/93 Corte Constitucional

MUNICIPIO	ZONA	RESGUARDO	SECTORES
Becerril	Sokorhpa	Resguardo Indígena Sokorhpa	Sector 1 Sokorhpa
			Sector 2 San Genaro
			Sector 3 La Mayoría
			Sector 4 Ipika
Codazzi	Iroka	Resguardo Indígena Iroka	Sector 1 Nana Echpo
			Sector 2 Sospa
			Sector 3 Tekuymo
			Sector 4 Sheku Ape Ywano
			Sector 5 Yowa
	Menkwe	Resguardo Indígena Menkwe	Sector 1 Menkwe
			Sector 2 Mishaya
			Sector 3 La Pista
La Paz	La Paz	Resguardo La Laguna, El Koso, Cinco Caminos	Sector 1 El Koso
		Resguardo El Rosario, Bella Vista, Yukatán	Sector 2 Rosario
		Resguardo Caño Padilla	Sector 3 Caño Padilla
Cesar	Valledupar		Población en situación de desplazamiento
	Bosconia		Población en situación de desplazamiento
Magdalena	Buritaca		Población en situación de desplazamiento

XII. DISCRIMINACIÓN Y DESPOJO TERRITORIAL AL NO CUMPLIR CON LO ORDENADO EN EL AUTO 004 DE 2009 Y AUTO 266 DE 2017, PROFERIDO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA.

En el año 2009**,** la Honorable Corte Constitucional, mediante Auto 004, decide Proteger los derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en Sentencia T-025/04.

PRIMERO. - DECLARAR que los pueblos indígenas de Colombia, según lo advertido en esta providencia, están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario, todo lo cual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo de indígenas.

El Pueblo Yukpa fue declarado en exterminio físico y cultural, en tal sentido ordena al Ministerio del Interior la formulación e implementación de un plan de Salvaguarda del Pueblo Yukpa, el plan no ha concluido frente a las graves afectaciones ambientales, es por ello por lo que no se ha protocolizado ni implementado. Desde el año 2014 el plan está estancado.

El día 12 de junio del año 2017, la honorable Corte Constitucional en Auto 266 decide ordenar una serie de acciones con miras a proteger los derechos individuales, colectivos, territoriales, humanitarios, sociales y ambientales. En el caso del pueblo Yukpa, no ha cumplido en nada, sigue despojando nuestro territorio sin la debida consulta previa.

XIII. DISCRIMINACIÓN AL AUTOGOBIERNO Y A LA PARICIPACIÓN DEL PUEBLO YUKPA DE COLOMBIA

1. AL NO TENER CASA INDÍGENA DE GOBIERNO EN VALLEDUPAR:

Todos los pueblos Indígenas del departamento del Cesar cuentan con una casa indígena o de gobierno ubicada en la Avenida Hurtado del Municipio de Valledupar, desde hace más de tres (03) décadas, sin embargo, el pueblo Yukpa se la ha negado la posibilidad de ejercer sus funciones de gobierno y administración en ese lugar o en otro. El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio del Interior, el día treinta (30) de septiembre de 2016 y el día diecinueve (19) de abril de 2017, se comprometieron a otorgarle al pueblo Yukpa su casa de Gobierno para el funcionamiento de sus seis (06) Resguardos Indígenas. Al Gobierno no le conviene que nuestro pueblo se organice, estudie y conozca de mejor forma nuestros derechos y un articular importante de estas discusiones es contar con un lugar de encuentro e inclusive donde todos sepan donde buscarnos.

2. DISCRIMINACIÓN EN LOS ESCENARIOS DE CONCERTACIÓN.

El Pueblo Yukpa no hace parte de ningún espacio de diálogo y concertación con el Estado Colombiano, ha sido marginado y discriminado de los siguientes espacios creados:

1. Mesa permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas.
2.Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para Pueblos Indígenas – CONTCEPI.
3. Subcomisión Nacional de Salud Propia e Intercultural de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.
4. Comisión de Seguimiento y Monitoreo del Decreto Ley 4633 de 2011. Artículo 180.
5. Comisión Técnica del Decreto Ley 4633 de 2011.
6. Comisión Nacional de Comunicación para pueblos indígenas - CONCIP.
7. Comisión Nacional de Mujeres Indígenas.
8. Comisión Técnica del ICBF.
9. Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena. – COCOIN.
10. Comisión de impulso del Decreto 1953 de 2014.
11. Comisión Nacional Ambiental Indígena - CNAI.
12. Comisión Nacional de Territorios.

Esta actitud premeditada obedece a que el Estado Colombiano está interesado en que no conociéramos y defendernos nuestros derechos y ellos se traslaparan con los grandes intereses minero-energéticos y de la palma de aceite.

La Presidencia de la Republica de Colombia, suscribe el Decreto Presidencial con fuerza de Ley 397 de siete (07) de agosto de 1996, donde de manera contundente declara al pueblo Yukpa junto con seis (06) pueblos indígenas más de Colombia, como pueblos indígenas amenazados, todos ellos tienen la misma característica: son nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes y con graves afectaciones territoriales por fenómenos de colonización, conflicto armado, minería e hidrocarburos.

En tal sentido el decreto presidencial menciona lo siguiente ". *Artículo 10. Mesa de concertación.* ***Créase la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas.***[252]

Este decreto tiene como motivación la declaratoria del pueblo Yukpa por el propio ejecutivo como amenazado, como explicarse que las acciones que se toman son para detener dicha situación al pueblo Yukpa y no se le permita asistir por intermedio de sus resguardos o la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del pueblo Yukpa (Sekeymu); creada mediante Resolución 0079 de trece (13) de julio de 2007, por el Ministerio del Interior.

El Pueblo Yukpa ha solicitado que se le tenga en cuenta y se le ha negado formalmente su participación, en el marco de la orden tercera de la Sentencia T-713 de 2017, se viene acordando este especio de orden nacional, pero a la fecha no ha sido posible.

[252] Ddecreto presidencial397 de 7 de agosto de 1996

XIV. LA DISCRIMINACIÓN DE NUESTRO PUEBLO YUKPA FUE PLANEADA PARA DESPOJAR NUESTRAS TIERRAS Y TERRITORIOS

Señores magistrados, nosotros estamos seguros de que en algún momento ustedes van a venir a realizar una audiencia en la ciudad de Valledupar, esta hermosa tierra donde nuestros antepasados los Tupes le dio la independencia a todo el departamento del Cesar, ustedes podrán observar al llegar al aeropuerto, al recorrer la ciudad, en los lobby de los hoteles y en las oficinas del Estado, que no habrá ni una sola imagen, fotografía o monumento a los Yukpa.

La discriminación hacia nuestro pueblo Yukpa no es involuntaria, es un acto premeditado y milimétricamente calculado, cuyo único fin es el exterminio de toda nuestra etnia para despojar nuestro territorio y extraer nuestros recursos naturales.

La discriminación del Estado hacia nuestro pueblo Yukpa, no es con palabras, son con acciones reales, técnicas y "jurídicas", cuyo único fin, es no reconocer nuestros derechos fundamentales para darle paso al interés de grandes empresarios y multinacionales: En la discusión hay un tema de fondo, nuestro pueblo es nómada, seminómada y agricultores itinerantes, ello implica reconocer un amplio territorio que se traslapa con el 60 % por ciento de la minería a gran escala en Colombia y con grades proyectos de palma de aceite.

XV. DISCRIMINACIÓN Y DESPOJO TERRITORIAL POR NUESTRA CONDICIÓN DE NÓMADAS, SEMINÓMADAS Y AGRICULTORES ITINERANTES.

El pueblo Yukpa, es un pueblo nómada, seminómada y agricultores itinerantes, por nuestra condición requiere que el Estado y las empresas privadas desplieguen mayor atención, cuidado y precaución a la hora de intervenir en nuestros territorios.

El reconocimiento por parte del estado de nuestra condición de nómada, seminómada y agricultores itinerantes, es vista por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras y la Dirección de Bosques y de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, al igual que las demás entidades del Estado, según ellos sería un gran obstáculo para el desarrollo del país, pues nuestro territorio claramente se traslapa con las zonas de reserva forestal de los motilones y el río magdalena y ello implica que a la luz del Decreto 2164 del siete (07) de diciembre de 1995, no se podrían sustraer y cambiar el uso del suelo diferentes a darle cumplimento al artículo 3 donde clara mente afirma:

> "*Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, semi-nomada o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de la ley 160 de 1994, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas. Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que*

constituyan su hábitat, sólo podrán adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos".[253]

En Colombia nuestro pueblo Yukpa y el pueblo Nukak Maku, viven similares situaciones, lejos de nuestros territorios, viviendo como indigentes y nuestras niñas y mujeres como prostitutas en municipios y ciudades, porque el Estado no respeta, desconoce y discrimina nuestra condición de nómadas y permite la invasión de nuestras tierras.

Honorables Magistrados, un Yukpa por esta condición fuera de su territorio y en ciudades, por su costumbre de caminar y caminar, es más fácil convertirse en habitante en situación de calle y/o indigente que otro ciudadano.

Es por lo que suplicamos que se proteja al Yukpa dentro del territorio ancestral y fuera de su territorio ancestral

XVI. DISCRIMINACIÓN Y DESPOJO TERRITORIAL AL SUSTRAER DE MANERA ILEGAL LA ZONA DE RESERVA FORESTAL.

1. ANTECEDENTES ZONAS DE RESERVA FORESTAL Y PUEBLO YUKPA.

1.1. El Estado promulgó la Ley 2da de 1959, en donde menciona en su artículo primero que, para el desarrollo de la economía agrícola forestal y proyección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se crearán las zonas de reserva forestal. En tal sentido el Estado crea la Zona de Reserva Forestal de los Motilones y del Río Magdalena: Estas dos zonas de reserva forestal se traslapan con el territorio ancestral Yukpa y la zona de ampliación de los seis (06) resguardos indígenas.

1.2. Los artículos 13, 14, 15,16,17 y 18 del Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado Colombiano menciona:

Parte II. Tierras:

Artículo 13

"*Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera."*

[253] Decreto Presidencial 2164 del 7 de diciembre de 1995.,

Artículo 14

"*Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados."*

Artículo 15

"*Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos compren den el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.*

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades."

Artículo 16.

"A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtener su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.

Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación.

Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización con las garantías apropiadas.

Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento."

Artículo 17

"Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.

Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, a la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos."

Artículo 18

"La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones."

1.3. El Decreto 2164 del siete (07) de diciembre de 1995 suscrito por el Gobierno Nacional, señala en su artículo 3º. Protección de los derechos y bienes de las comunidades.

"Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, semi-nomada o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de la ley 160 de 1994, sólo podrán destinarse a la

constitución de resguardos indígenas. Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sólo podrán adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos".[254]

2. EL DESPOJO DE LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DE LA SERRANÍA DE LOS MOTILONES Y EL RÍO MAGDALENA EN TERRITORIO ANCESTRAL YUKPA.

El pueblo Yukpa por intermedio del Resguardo Iroka, interpuso el pasado cuatro (04) de junio del año 2019, el siguiente derecho de petición a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

"Agustín Codazzi, 4 de junio del 2019

DOCTOR
EMILIO RODRÍGUEZ
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
erodriguezb@minambiente.gov.co

Respetado Doctor.

El Pueblo Yukpa se permite de manera respetuosa, solicitar el favor de urgencia:

Favor informar cuantas hectáreas fueron declaradas o protegidas de la Zona de Reserva Forestal de los Motilones, Ley 2 de 1959, en el polígono que se adjunta en el anexo 1. (Polígono territorio ancestral Yukpa)
Favor informar cuantas hectáreas se han sustraído de la Zona de Reserva Forestal de los Motilones, Ley 2 de 1959, desde el día 3 de agosto de 1994 al 4 de junio de 2019, en el polígono que se adjunta en el anexo 1. (Polígono territorio ancestral Yukpa)
Favor informar cuantas hectáreas se han sustraído de la Zona de Reserva Forestal de los Motilones, Ley 2 de 1959, desde el día 3 de agosto de 1994 al 4 de junio de 2019, en el polígono que se adjunta en el anexo 2. (polígono solicitud de ampliación Territorio Ancestral Yukpa)
Favor informar cuantas hectáreas fueron declaradas o protegidas de la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, Ley 2 de 1959, Ley 2 de 1959, en el polígono que se adjunta en el anexo 1. (Polígono territorio ancestral Yukpa)
Favor informar cuantas hectáreas fueron sustraídas de la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, Ley 2 de 1959, Ley 2 de 1959, desde el día 3 de agosto de 1994 al 4 de junio de 2019, en el polígono que se adjunta en el anexo 1. (Polígono territorio ancestral Yukpa)
Favor informar cuantas hectáreas se han sustraído de la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, Ley 2 de 1959, desde el día 3 de agosto de 1994 al 4 de junio de 2019, en el polígono que se adjunta en el anexo 2. (polígono solicitud de ampliación Territorio Ancestral Yukpa)

[254] Decreto Presidencial 2164 del 7 de diciembre de 1995.,

Se anexan coordenadas de los polígonos del territorio ancestral Yukpa y de expectativas de ampliación en archivos adjuntos, uno en documento word y el segundo en archivo comprimido WinRAR.

Quedamos atentos a su valiosa atención.

Cordialmente,

ALFREDO PEÑA FRANCO
Gobernador Territorio Yukpa de Iroka"

La respuesta al derecho de petición mediante oficio No. DBD-8201, radicado 13683, del veintiséis (26) de junio del 2019, por parte de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, evidencia el despojo técnico de nuestro territorio al sustraer zonas de reserva forestal sólo y exclusivamente para la ampliación de nuestros resguardos.

Debido a la gravedad de lo mencionado por el Ministerio de Ambiente se transcribe literalmente dicha respuesta:

1. *"Traslape entre Zona de Reserva Forestal de los Motilones y Polígono identificado en la solicitud como "territorio ancestral Yukpa"* ***Respuesta: 191.106,8 Ha.***
2. *Áreas sustraídas de la Zona de Reserva Forestal de los Motilones del Polígono identificado en la solicitud "territorio ancestral yukpa" desde el día 3 de agosto de 1994 al 4 de junio de 2019.* ***Respuesta: 10.176,3 Ha.***
3. *Áreas sustraídas de la Zona de Reserva Forestal de los Motilones del Polígono identificado en la solicitud "territorio ancestral yukpa_ ampliación resguardos" desde el día 3 de agosto de 1994 al 4 de junio de 2019.* ***Respuesta: 10.046,08 Ha.***
4. *Traslape entre la Zona de Reserva Forestal Río Magdalena y Polígono identificado en la solicitud como "territorio ancestral yukpa".* ***Respuesta: 3.790,90 Ha.***
5. *Áreas sustraídas de la Zona de Reserva Forestal Río Magdalena del Polígono identificado en la solicitud "territorio ancestral yukpa" desde el día 3 de agosto de 1994 al 4 de junio de 2019.* ***Respuesta: 96,49 Ha.***
6. *Áreas sustraídas de la Zona de Reserva Forestal Río Magdalena del Polígono identificado en la solicitud "territorio ancestral yukpa_ampliación resguardos" desde el día 3 de agosto de 1994 al 4 de junio de 2019.* ***Respuesta: 96,49 Ha".***

En conclusión, como se ha dicho hasta la saciedad, el propio Estado determinó que en el artículo 3°, Decreto 2164 del siete (07) de diciembre de 1995"*Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, semi-nomada o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de la ley 160 de 1994,*

sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas. Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sólo podrán adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos".[255] En este orden de ideas, el Estado sustrajo de manera ilegal 10.046,08 Ha de la zona de reserva forestal de la Serranía de los Motilones, que deberían haberse otorgado para la ampliación y creación de los resguardos del Pueblo Yukpa, en su condición nómadas, seminómadas y agricultores itinerantes. De igual manera sustrajo 96,49 Ha de la zona de reserva forestal del Río Magdalena.

En total, el Estado de manera premeditada vulnerando el Decreto 2164 del siete (07) de diciembre de 1995, despojó al Pueblo Yukpa en su condición de nómada y seminómada de 10.142,57 Ha que hacían parte de la Zona de Reserva de la Serranía de los Motilones y la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena.

XVII. ANEXOS Y PRUEBAS

1. ANEXO 1. Escritura Pública número 0317 del dos (02) de agosto del año 2019.
2. ANEXO 2, Concepto número 105. 4446, numero recibido 3013-2019, del veintiséis (26) de agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN)[256]
3. ANEXO 3, Concepto número 4962 del diez (10) de septiembre de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN)[257]
4. ANEXO 4, Concepto de la Facultad de Antropología Universidad Externado de Colombia, emitido el pasado ocho (08) de agosto de 2019.
5. ANEXO 5, Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y seminómadas del pueblo Yukpa Ministerio del Interior, mediante concepto firmado por el señor viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, radicado número OFl19-52777-DAl-2200, del veintisiete (27) de noviembre de 2019.
6. ANEXO 6, Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y seminómadas del pueblo Yukpa de la Defensoría del Pueblo, año 2018.
7. ANEXO 7, Informe defensoría auto 004, Corte Constitucional.
8. ANEXO 8, Respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al derecho de petición de fondo, radicado 2020ER0009884, de fecha veintisiete (27) de febrero de 2020
9. ANEXO 9, Oficio recibido DNP, oficio Radicado No. 2020230000978, del día treinta y uno (31) de enero de 2020.
10. ANEXO 10, Oficio recibido DANE, mediante oficio con radicado número 20203130033152, el día trece (13) de febrero de 2020.

[255] Decreto Presidencial 2164 del 7 de diciembre de 1995.,
[256] Concepto número 105. 4446,26 de agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN), Condición de seminomadismo.
16. Concepto aclarado número 4962 del 10 de septiembre de 2019. agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICHAN), Condición de seminomadismo
[257] Concepto número 105. 4446,26 de agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN), Condición de seminomadismo.
16. Concepto aclarado número 4962 del 10 de septiembre de 2019. agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICHAN), Condición de seminomadismo

11. ANEXO 11, Derecho de petición enviado al Gobierno Nacional, del día 11 de febrero de 2020, radicado número 20196630086372 y respuesta fecha 12 de marzo de 2020, radicado número 20194600173961.
12. ANEXO 12, Constancia del pueblo indígena Yukpa del 2020
13. ANEXO 13, Acta de taller de medidas de manejo de la consulta previa de la orden tercera (3) de la Sentencia T-713 de 2017, veintidós (22), veintitrés (23) y veinticuatro (24) de noviembre del año 2018.
14. ANEXO 14, oficio recibido 20 de febrero del 2020, por el Ministerio del Interior, mediante radicado número OFI2020-4214-DAI 2200.
15. ANEXO 15, Oficio enviado el 21 de febrero 21 de 2020, donde el pueblo Yukpa responde el oficio del Ministerio del Interior.
16. ANEXO 16, Oficio acta de concertación de Consulta previa, de la Ley de regalías, El día 28, 29, 30 y 31 de julio y 1 de agosto de 2020.
17. ANEXO 17, Oficio enviado por el Contralor Delegado para el Sector Ambiente, el día veintidós (22) de junio del año 2018, mediante radicado número 2018EE0076686 al Fiscal General de la Nación, Doctor **NESTOR HUMBERTO NEIRA,** de iniciar las investigaciones penales a la ANLA, CORPOCESAR.
18. ANEXO 18, Oficio por el Contralor Delegado para el Sector Ambiente, al doctor **FERNANDO CARRILLO FLÓREZ,** Procurador General de la Nación, radicado número 2018EE0076678 al Procurador General de la Nación, Doctor **FERNANDO CARRILLO FLÓREZ.**
19. ANEXO 19, Carta enviada por la Defensoría del Pueblo a la Honorable Corte Constitucional, 2020.
20. ANEXO 20, DERECHO DE PETICIÓN-DNP 2020.

XXI. NOTIFICACIONES

Se recibirá las notificaciones en la calle 12 # 15 – 26 centro, Municipio Agustín Codazzi, Departamento del Cesar: Teléfono: Cel. 3114114548, 3005011049, 3135939951, 3173837809.
Correo electrónico:

serraniaresguardosokorpa@gmail.com, juridicairoka@gotmail.com

Atentamente,



JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo el Rosario, Bella Vista Yukatan
Municipio de la Paz, Serranía del Perijá.



ALFREDO PEÑA FRANCO
GOBERNADOR DEL CABILDO del resguardo Iroka
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá.



ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO
GOBERNADORA DEL CABILDO del Resguardo Sokorhpa
Municipio de Becerril del Campo, Serranía del Perijá.



EMILIO OVALLE MARTINEZ
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Menkwe, Mishaya, La Pista
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá.



ALIRIO OVALLE REYES
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Caño Padilla.
Municipio de La Paz, Serranía del Perijá.



ANDRÉS VENCE VILLAR
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El Coso
Municipio de La Paz, Serranía del Perijá.

República de Colombia

Aa061828543

Ca329276264

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: CERO TRESCIENTOS DIECISIETE --- (0317) ------

DE FECHA: DOS (02) DE AGOSTO ----------

DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019) ----------

CLASE DE ACTO: **00000411 PROTOCOLIZACION SIN CUANTIA** ----------

CLASE DE ACTO: **AUTORRECONOCIMIENTO PUEBLO INDÍGENA YUKPA, NÓMADA, SEMI-NOMADA Y AGRICULTORES ITINERANTES EN COLOMBIA.** ----------

OTORGANTES: Autoridad, **ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO C.C. No.** 49.748.586, Autoridad, **ALFREDO PEÑA FRANCO C.C. No.** 18.956.993, Autoridad, **EMILIO OVALLE MARTÍNEZ C.C. No.** 18.939.440, Autoridad, **JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ C.C. No.** 1.067.808.333, Autoridad, **ALIRIO OVALLE REYES C.C. No.** 77.040.052, Autoridad, **ANDRÉS VENCE VILLAR C.C. No.** 6.676.395. ----------

En el municipio de Agustín Codazzi, Departamento del Cesar, República de Colombia, ante el despacho de la NOTARÍA UNICA, quien es titular la doctora **LUCY TERESA CHAVEZ CORPAS,** Notario Único de este círculo notarial. Se extiende esta escritura de **AUTORRECONOCIMIENTO DEL PUEBLO YUKPA DE COLOMBIA COMO UNA CULTURA INDÍGENA NÓMADA, SEMINÓMADA Y AGRICULTORA ITINERANTE**, de conformidad por lo dispuesto por los artículos 1, 4, 7, 9, 246, 286, 287, 330 de la Constitución Política de Colombia de 1.991, Ley 21 de 1991, convenio 169 de 1989 de la OIT y demás normas y sentencias constitucionales. Al efecto comparecen las autoridades representativas de los seis resguardos indígenas del pueblo Yukpa que habitan en su territorio ancestral, en el departamento del Cesar así: En representación del Resguardo Indígena Sokorpa, asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Becerril, entidad con personería jurídica de derecho público de carácter especial, constituida legalmente por el INCORA (hoy Agencia Nacional de Tierras ANT) según Resolución N° 0050 del 21 de julio de 1983, con NIT No. 824002172-7, la Autoridad indígena, **ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO,** de sexo femenino, mayor de edad, con domicilio en el municipio Becerril del Campo, Cesar, identificada con la cédula de ciudadanía N° 49.748.586 expedida en Becerril, actuando en mi condición de Gobernadora del Cabildo del Resguardo Indígena Sokorpa, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 23 de julio de 2019, acta de reelección del 17 de junio de 2017 y acta de posesión del 27 de junio de 2017 suscrita por la Alcaldía Municipal de Becerril. En representación del Resguardo Indígena Iroka, asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi,

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario
10844HYMMaYCDDMC
108Z3HDEPPPCaAHQ
25-04-19
28-06-19
Ccadena s.a. Nit. 890.900.346

entidad con personería jurídica de derecho público de carácter especial, constituida legalmente por el INCORA (hoy Agencia Nacional de Tierras ANT) mediante Resolución No. 043 del 21 de julio de 1983, con NIT No. 824002010-2, la autoridad Indígena, **ALFREDO PEÑA FRANCO**, de sexo masculino, mayor de edad, con domicilio en el municipio de Agustín Codazzi, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.956.993 expedida en Agustín Codazzi, actuando en su condición de Gobernador del Cabildo del Resguardo Indígena Iroka, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 7 de febrero de 2019, acta de elección del 20 de junio de 2018 y acta de posesión N° 0378 del 25 de junio de 2018 suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi. En representación del Resguardo Indígena Menkwe – Misaya y La Pista, asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, entidad con personería jurídica de derecho público de carácter especial, constituida legalmente por el INCORA (hoy Agencia Nacional de Tierras ANT) mediante Resolución No. 0044 del 10 de diciembre del 1997, con NIT No. 824002013-4, la Autoridad indígena, **EMILIO OVALLE MARTÍNEZ,** de sexo masculino, mayor de edad, con domicilio en el municipio Agustín Codazzi, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.939.440 expedida en Agustín Codazzi, actuando en mi condición de Gobernador del Cabildo del Resguardo Indígena Yukpa Menkwe, Mishaya y La Pista asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 5 de febrero de 2019, acta de elección del 16 de diciembre 2017 y acta de posesión N° 0347 del 29 de enero de 2018 suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi. En representación del Resguardo Indígena El Rosario – Bella Vista – Yukatán, asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, entidad con personería jurídica de derecho público de carácter especial, constituida legalmente por el INCORA (hoy Agencia Nacional de Tierras ANT) mediante Resolución No. 034 del 03 de octubre del 2000, con NIT No. 824004424-7, la Autoridad Indígena, **JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ,** de sexo masculino, mayor de edad, con domicilio en el municipio de La Paz, Cesar, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.067.808.333 expedida en La Paz, actuando en su condición de gobernador del cabildo del Resguardo El Rosario, Bella Vista y Yukatán, asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según constancia expedida por el Ministerio del Interior con fecha de 25 de abril del 2018 y acta de posesión del

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

30 de octubre de 2017 suscrita por la Alcaldía Municipal de La Paz. En representación del Resguardo Indígena Caño Padilla, asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, entidad con personería jurídica de derecho público de carácter especial, constituida legalmente por el INCORA (hoy Agencia Nacional de Tierras ANT) mediante Resolución No. 012 del 29 de junio del 2000, con NIT No. 824004424-7, la Autoridad Indígena, **ALIRIO OVALLE REYES,** de sexo masculino, mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 77.040.052 expedida en La Paz, actuando en su condición de Gobernador del Cabildo del Resguardo Indígena Caño Padilla asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según constancia expedida por el Ministerio del Interior con fecha de 12 de junio del 2016 y acta de posesión de fecha 15 de enero de 2015 suscrita por la Alcaldía Municipal del Municipio de La Paz, Y en representación del Resguardo Indígena La Laguna, El Coso y Cinco Caminos, asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, entidad con personería jurídica de derecho público de carácter especial, constituida legalmente por el INCORA (hoy Agencia Nacional de Tierras ANT) mediante Resolución No. 183 del 30 de septiembre de 2009, con NIT No. 900353765-5, la Autoridad Indígena, **ANDRÉS VENCE VILLAR,** de sexo masculino, mayor de edad, con domicilio en el municipio de La Paz, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.676.395 expedida en el municipio San José de Oriente, Cesar, actuando en su condición de Gobernador del Cabildo del Resguardo La Laguna, El Coso y Cinco Caminos, según constancia expedida por el Ministerio del Interior con fecha de 04 de agosto del 2017 y acta de posesión de fecha 26 de julio de 2016 suscrita por la Alcaldía Municipal del Municipio de La Paz. **PRIMERO.** El **OBJETO** del presente instrumento jurídico, es elevar a escritura pública el **DERECHO FUNDAMENTAL DE AUTORRECONOCIMIENTO** como cultura originaria indígena Yukpa nómada, seminómada, como un sistema de relacionamiento territorial dedicado a la caza, recolección, pesca, además de agriculturas itinerarias y estacionarias, bajo la facultad como pueblo de decidir su autoidentificación, autorreconocimiento y autogobierno, la cual representa una manifestación al principio de alta protección constitucional relacionado con el derecho a la identidad cultural, que cuenta con un reconocimiento jurídico normativo internacional y nacional. El **DERECHO DE AUTORRECONOCIMIENTO DEL PUEBLO INDÍGENA** bajo la Identidad cultural,

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

10824QHHDEQPPCaA 25-04-19 26-06-19

10845CMHYMMaOCDD

diversidad étnica y cultural, conciencia de compartir ciertas creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un determinado grupo humano. **El DERECHO DE AUTORRECONOCIMIENTO DEL PUEBLO INDÍGENA,** bajo el autogobierno, que se deriva de un derecho de alta protección constitucional para los pueblos indígenas de autoidentificarse e identificar a sus semejantes como parte de la comunidad y ser reconocidas por el Estado y la sociedad como tales, en virtud de una conciencia de identidad cultural diversa, de identidad real de la comunidad y de sus miembros con sus usos y costumbres ancestrales, la cual no puede ser negada arbitrariamente. Estos derechos están contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991, Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado mediante Ley 21 de 1991, y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. **SEGUNDO. JURISDICCIÓN TERRITORIAL: 1.** La localización territorial de las prácticas, usos y costumbres de autorreconocimiento, autoidentificación y autogobierno, del pueblo Yukpa de cultura nómada, semi nómada, agricultura itinerante, y un sistema de relacionamiento territorial fundamentado en la caza, pesca, recolección, prácticas de agricultura itinerante y estacionaria, es la siguiente: **Norte:** Limita con el departamento de la Guajira, incluyendo al municipio de Manaure Cesar, en la Latitud Norte 10° 26.170 y Longitud 72° 53.656. En el municipio de Valledupar, en el inicio de la rivera del Río Cesar, Latitud Norte 10° 27.791 y Longitud 73° 10.621. **Sur:** Hasta la parte alta del municipio de Curumaní, límites con el municipio del Carmen, Norte de Santander, Región del Catatumbo hasta el Pueblo Barí, iniciando en la Latitud Norte 9° 23.510 y Longitud 73° 55.033, hasta Latitud Norte 9° 9.605 y Longitud 73° 22.075, que es en límites con la República Bolivariana de Venezuela, territorio Yukpa Venezolano. Todo el territorio ancestral bordea la parte oriental del Río Cesar, desde Manaure hasta Chiriguaná, y todo el límite fronterizo de Colombia con la República Bolivariana de Venezuela, por la Serranía del Perijá, en el departamento del Cesar. **2.** La ubicación geográfica, también territorio ancestral donde se ejerce prácticas, usos y costumbres de autorreconocimiento del pueblo Yukpa de cultura nómada, semi nómada, agricultores itinerantes, y un sistema de relacionamiento territorial fundamentado en la caza, pesca, recolección, prácticas de agricultura itinerante y estacionaria, es la siguiente: Municipios de La Paz, Becerril, Agustín Codazzi, San Diego; Manaure Balcón del Cesar, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Curumaní, departamento del Cesar, en la Costa Norte colombiana,

COPIA AUTENTICA
Lucy Teresa
NOT

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Serranía del Perijá **3.** La localización fuera de su territorio ancestral, donde se ejercen las practicas, usos y costumbres de autorreconocimiento del pueblo Yukpa de cultura nómada, semi nómada, agricultores itinerantes, y un sistema de relacionamiento territorial fundamentado en la caza, pesca, recolección, prácticas de agricultura itinerante y estacionaria, por razones de desplazamiento forzado a causas del conflicto armado y acciones antrópicas y de cambio climático, asentamientos de transición Yukpa en el municipio de Valledupar, Bosconia, Pueblo Bello, en el del departamento del Cesar, Municipio de Santa Marta, Ciénaga, Aracataca y Fundación, en el departamento del Magdalena, Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, Hato Nuevo, Maicao, San Juan del Cesar y Uribia en el departamento de la Guajira, Barranquilla en el departamento del Atlántico y Ocaña en el departamento de Norte de Santander. **TERCERO: PUEBLO YUKPA SUJETO DE ALTA Y ESPECIAL PROTECCIÓN COSNTITUCIONAL: 1.** El Estado Colombiano contrajo la obligación internacional al suscribir el Convenio 169 de 1989 de la OIT, de prestar atención a los pueblos indígenas nómadas y agricultores itinerantes. Al respecto el artículo 14 del Convenio 169 de 1989 de la OIT, menciona: *"Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho al Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes*[1]. **2.** El Decreto Presidencial 2164 del 07 de diciembre de 1995, señala en su artículo 3º. Protección de los derechos y bienes de las comunidades. *"Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, semi-nomada o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de la ley 160 de 1994, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas. Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sólo*

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario
10841CDDMCYHMMMa
Cadena s.a. 25-04-19 10825AaQHHDEEPPC
Cadena s.a. 28-06-19

[1] Artículo 14 de Convenio 169 de La OIT

podrán adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos".[2] **3.** El Decreto Presidencial con fuerza de Ley 1397 de 07 de agosto de 1996, de manera contundente declara al pueblo Yukpa junto con seis (6) pueblos indígenas más de Colombia, como pueblos indígenas amenazados, todos ellos tienen la misma característica: son nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes y con graves afectaciones territoriales por fenómenos de colonización, conflicto armado, minería e hidrocarburos. En tal sentido el Decreto presidencial menciona lo siguiente: *"Artículo 2o. funciones (...) 3o. Concertar la programación para períodos anuales de las acciones de constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardos y saneamiento y conversión de reservas indígenas que se requieran de acuerdo con la información a que se refiere el numeral anterior, para su ejecución a partir de la vigencia presupuestal de 1997; priorizando las siguientes(...) b) Ampliación, constitución y/o saneamiento de resguardos para pueblos indígenas* ***amenazados:*** *Chimila, Nukak,* ***Yukpas****, Kofan, Embera de Risaralda (Caldas), pueblos indígenas de Arauca, la comunidad Kuti del Río Tolo en el Departamento del Chocó y la conversión de reservas en resguardos y su saneamiento; Artículo* ***3o. apropiación presupuestal.*** *El Gobierno Nacional incluirá anualmente en el proyecto de ley de presupuesto, las partidas necesarias para la ejecución de la programación de que trata el numeral 3o. de conformidad con el estimativo de costos de que trata el numeral 4o. del mismo artículo y de acuerdo con los procedimientos determinados por las normas vigentes. Articulo 8o. obras e inversiones. Ninguna obra, exploración, explotación o inversión podrá realizarse en territorio indígena sin la previa concertación con las autoridades indígenas, comunidades y sus organizaciones. Artículo 10. mesa de concertación. Créase la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas.*[3] **4.** En el año 2008, el conflicto armado y los conflictos territoriales desplazaron forzosamente a 1.200 miembros de nuestro pueblo Yukpa desde la Serranía del Perijá hacia Valledupar y Bosconia, departamento del Cesar, Buritica y el casco urbano de Santa Marta, en el departamento del Magdalena y Dibulla en el departamento de la Guajira. Hoy nuestros familiares Yukpa están viviendo en situación de miseria y en riesgo de indigencia, es por ello que la Honorable Corte Constitucional declaró a nuestro pueblo Yukpa en riesgo de exterminio físico y cultural mediante Auto 004 del 2009, en el marco del Estado de Cosas Inconstitucionales de la

COPIA AUTENTO
Lucy
NOT

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escritura pública - No tiene costo para el usuario

[2] Decreto Presidencial 2164 del 7 de diciembre de 1995,
[3] Ddecreto presidencial397 de 7 de agosto de 1996

Sentencia T-025 de 2004. Es decir, la máxima instancia constitucional y garante de los derechos fundamentales y territoriales, ha constatado que nuestro pueblo y nuestro territorio presenta vulneración masiva, repetida y constante de derechos fundamentales que afectan al conjunto de nuestro pueblo. **5.** La Honorable Corte Constitucional, nuevamente mediante Auto 266 de 2017, mantiene el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a las comunidades indígenas y afrodescendientes afectados por el desplazamiento, en riesgo de estarlo y con restricciones a la movilidad entre ellas el pueblo Yukpa. **CUARTO: ANTECEDENTES: 1.** Las investigaciones etnográficas del científico de la ciencia de la antropología, señor Gerardo Reichel-Dolmatoff, que en su estudio denominado: "*Contribuciones al conocimiento de las Tribus, de la región del Perijá*", de la página 161 a la página 194, es una de las pruebas escritas más contundentes sobre la "habitabilidad del Yukpa en la Serranía del Perijá desde el municipio de la Paz hasta el municipio de Curumaní, abarcando la riveras del Río Cesar en las partes más planas, hasta llegar a la parte más alta de la Serranía del Perijá, frontera con la república Bolivariana de Venezuela. El trabajo realizado por Gerardo Reichel- Dolmatoff fue hecho palmo a palmo, tramo a tramo del territorio Yukpa. El señor Gerardo Reichel-Dolmatoff es considerado el padre de la antropología Colombiana, fundó en Santa Marta el Instituto Etnológico del Magdalena y Museo, y en 1964, fue fundador y primer Director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes (1964), así como Visiting Scholar en la Universidad de Cambridge, y la Universidad de Oxford; además profesor investigador en la Universidad de California en Los Ángeles, como también profesor visitante y conferencista en otros países de América Latina y de otros piases del mundo. Reichel-Dolmatoff fue miembro de la Academia de Ciencia de Colombia y otros países. Su obra científica fue reconocida por sus aportes no solo a la antropología y ciencias sociales, sino en las investigaciones y valoración del pasado y presente de las culturas y pueblos de Colombia. En la investigación el texto "*Contribuciones al conocimiento de las Tribus, de la región del Perijá*". La investigación es referencia ineludible del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, el Banco de la República, las entidades del Estado y los centros de pensamiento y antropología de Colombia y el mundo. **2.** En la página Web del Ministerio del Interior, https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_yukpa -diagnostico_comunitario, plan de salvaguarda del pueblo Yukpa, que fue ordenado por la Honorable Corte

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario
10842aHCODMCYHMM
10821PPCaAHQDHME
Cadena s.a. Nit. 890.930.940 25-04-19
Cadena s.a. Nit. 890.930.940 26-06-19

Constitucional en el Auto 004 de 2009, se menciona claramente su condición de seminómada: *"Así las cosas tenemos que decir que en la familia yukpa es un grupo semi nómadas, los cuales nunca tuvieron presencia directa sobre un territorio especifico, sino que asimilaron que todo el territorio era propio tal como lo habían señalado sus ancestros, el denominado territorio ancestral, de tal forma que dentro del mismo realizan ciclos de rotaciones con el objeto de dejar descansar la tierra y realizar diversas actividades propias de su cultura; es decir que durante determinado tiempo viven y conviven en un territorio especifico y delimitado, luego de esto abandonan esta zona por lapsos de tiempo que pueden ir desde 1 año hasta 10 años dejando que la misma se regenere naturalmente y regresan nuevamente a la zona que habitaron a volver a realizar actividades de caza, pesca y recolección". "De hecho, las huellas de aquella relación entre el indígena y la selva circundante perduran aún con el paso del tiempo. Por testimonios recogidos, se sabe incluso de sistemas de cultivo tradicionales desarrollados en interacción con densas coberturas vegetales, muy similar a otras culturas indígenas en Colombia. Un sistema tipo chagra se rastreaba décadas atrás, en donde los grupos familiares se asentaban por un determinado periodo de tiempo, tumbaban un trozo de selva, creaban un claro dentro del entorno selvático, realizaban uno o dos ciclos de cultivo y luego se trasladaban a otro espacio selvático para repetir nuevamente el proceso. De tal forma que este sistema rotativo los hacía una cultura semi nómada, quienes complementaban su supervivencia con ciclos de caza, la pesca y la recolección de frutos. Se trataba un ecosistema selvático humanizado, que tenía la oportunidad de regenerarse ante este movimiento geográfico continuo, basado en una fase de producción indígena que no desencadenaba peligrosos procesos de deforestación masiva. "Que es el desplazamiento? Para el hombre wateya o blanco se puede decir que es una migración que se hace de un lugar a otro dentro del territorio nacional; sin embargo para el yukpa esta palabra no es muy conocida, debida a sus dinámicas semi nómadas, él aprendió a estar moviéndose de un lugar a otro y muchas veces lo toma como algo normal y no se dan cuenta que son víctimas de uno de los mayores afectaciones que se cometen en Colombia" "Debido a sus dinámicas seminómadas, "el yukpa asentado en un lugar al momento de ocurrir un hecho que afecta a la familia o al terminar el ciclo que ellos establecen para recoger sus cosechas, se marchan dejando descansar la tierra que tenían para que esta se regenere y vuelva a vivir en*

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia
Aa061828547
Ca329276270

ella el animalito, la pava, los espíritus pero sobre todo la medicina que es una de las garantías de supervivencia" **3.** Las resoluciones No. 0228 del 7 de febrero del 2014 y No. 0231 del 17 de febrero del año 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con su respectivo concepto técnico menciona claramente "*El territorio ancestral para la comunidad se encuentra ubicado desde el valle de río Cesar hasta la Serranía del Perijá en la cordillera oriental. Se afirma que en este territorio ancestral están presentes los lugares que poseen un carácter simbólico y que son la raíz cosmogónica del resguardo. Las corrientes de agua, las colinas, los cementerios, los lugares en donde se encuentran las plantas medicinales, tienen un carácter significativo y espiritual que muchas veces no corresponden con la jurisdicción de los resguardos, sino que se encuentran repartidos y distribuidos en todo el territorio ancestral. Tener presente este rasgo contribuye al entendimiento de las dinámicas de migración de las comunidades y las prácticas de ordenamiento ambiental y territorial*" **4.** El observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario elaboró el diagnóstico de la situación del pueblo indígena Yukpa en municipios con presencia del pueblo yukpa. En donde claramente menciona la condición de nómadas del pueblo Yukpa, las afectaciones nutricionales, territoriales, ambientales y minero energéticas en su pueblo. "*Las características nómadas de la etnia Yukpa en muchos casos hacen que algunos asentamientos pequeños desaparezcan, debido a la movilidad de las familias que la componen, buscando mejores recursos en otro territorio; lo anterior hace posible que surjan y desaparezcan asentamientos a través del tiempo, en su mayoría dentro de los mismos resguardos. Según información proveniente del Departamento Nacional de Planeación, existen asentamientos Yukpa en San José de Oriente, municipio de San Diego y en el municipio El Copey; estos asentamientos no estaban constituidos como resguardos, pero hacían parte de su territorio ancestral7. Allí, se ubican alrededor de 4 familias con un número de integrantes no mayor a 11 personas8. En cuanto a la información reciente que posee el Observatorio, no aparecen reportadas estas comunidades, desconociendo la situación actual de estos asentamientos, razón por la cual no fueron consideradas en el presente informe.*"[4]. **5.** El día 10 de septiembre de 2018, la doctora LIZBETH OMIRA BASTIDAS JACANAMIJOY, Subdirectora de Asuntos Étnicos, de la

[4] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Yukpa municipios con presencia del pueblo Yukpa, página 3.

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario
10845CMAYMMa9CDD
Cadena s.a. NIT. 830.095.213-0 25-04-19 10BZZEHPPCaAHODH 26-06-19
República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Agencia Nacional de Tierras, le informa a la doctora NATALIA RAMÍREZ MARTÍNEZ, Directora de Bosques y Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante oficio número 20185100772241, donde le informa: "*Con el fin de dar cumplimiento a la Sentencia T-713 de 2017, y en atención a los compromisos derivados de la última reunión protocolizada bajo el acta No. 003 de 28 de agosto de 2018, que indica "De conformidad con la solicitud del pueblo Yukpa, la ANT enviara oficio MADS, Ministerio del Interior, Dirección de Bosques y Biodiversidad, ANLA Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Infraestructura. Informando que las pretensiones de delimitación, ampliación, saneamiento y protección del territorio ancestral Yukpa se traslapan con 196.742 has que hacen parte de la zona de reserva forestal de los motilones, en el sector Serranía del Perijá , Departamento de Cesar, ley 2da de 1959; teniendo en cuenta que el pueblo Yukpa de acuerdo al decreto con fuerza de ley 2164 de 1995 en su artículo tercero claramente establece la protección de los derechos y bienes de las comunidades, los territorios tradicionales utilizados por los pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de la ley 160 de 1994, solo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas. Por lo anterior se allega a su despacho en formato shape la expectativa territorial de legalización y protección de territorio ancestral del pueblo Yukpa, sobre el cual se están adelantado los procedimientos correspondientes por parte de la Agencia Nacional de Tierras, para los fines pertinentes".* **6.** En la página Web del Ministerio del Interior, Diagnóstico pueblo indígena Yukpa, https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_yukpa.pdf, se menciona claramente la economía del pueblo Yukpa *"Su forma de subsistencia principal es a través de la siembra, la caza, la pesca, la recolección.* **7.** La Dirección Poblacional del Ministerio de Cultura, en el Documento Caracterización de los pueblos Indígenas en Colombia, Yukpa Cazadores, Recolectores y Agricultores, describe claramente la condición de nuestro pueblo de la siguiente manera en la página Web http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20YUKPA.pdf *" Los indígenas Yukpa son tradicionalmente cazadores, pescadores,*

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia
Aa061828548
Ca329276271

recolectores y agricultores de maíz" " Debido al desplazamiento que sufrió el pueblo Yukpa a la llegada de los españoles, tuvieron que buscar refugio en las partes altas de la Serranía del Perijá, se ha perdido la práctica del consumo de comidas tradicionales como los hongos, los caracoles, los gusanos de monte y otros insectos. En la actualidad este pueblo practica una agricultura de rotación y un sistema de caza y recolección. Los alimentos principales que consumen son el maíz, el millo, las caraotas, las bananas y la yuca (Jaramillo, 1992). Sin embargo, debido al constante contacto con los no indígenas y por las difíciles condiciones que tiene el terreno para ser sembrado, su dieta se ha visto modificada y es similar a la de sus vecinos campesinos, con la incorporación de alimentos no tradicionales como arroz, harinas, lentejas, enlatados, leche, entre otros" **8**. En la Galería virtual del Ministerio de Educación se describe al pueblo Yukpa de la siguiente manera en la página Web https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-161393.html*"Los indígenas Yukpas son seminómadas y sus niños, y niñas, por lo general no estudian porque se casan muy jóvenes. Con este material podrán estudiar toda la primaria y prepararse para ingresar a la secundaria*". **9.** El artículo de la doctora Diana Oliveros, de Julio 19 de 2018, docente Universitaria y Antropóloga, publicado en la página Web de, https://www.las2orillas.co/ser-nomada-en-colombia-el-caso-de-los-yukpa-del-, denominado ser nómada en Colombia: el caso de los yukpa del Perijá, dan cuenta de nuestra característica. **10.** La revista Semana en su página Web https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/un-pueblo-invisible-para-los-colombianos/43399, describe nuestra condición de seminómada de la siguiente manera "*El pueblo yukpa es seminómada, recolector, cazador, pescador y agricultor, y vive de lo que la naturaleza le provee. Antes de la llegada de los españoles, su territorio ancestral se extendía desde la franja occidental del río Cesar, en Colombia, hasta la parte oriental del lago Maracaibo, en Venezuela.* ***Pero poco a poco perdieron sus tierras por el avance de la colonización del hombre blanco."*** **11. El medio de comunicación Noticas Uno, recientemente describe nuestra condición de nómadas en el reporte periodístico del presente enlace de la página Web** https://canal1.com.co/noticias/yukpas-piden-ayuda-para-investigar-como-asesinato-la-muerte-de-dos-ninos-envenenados/, **12.** En el marco del primer congreso del pueblo Yukpa realizado los días 15,16 y 17 de noviembre de 2016, el pueblo Yukpa proclama claramente 72 mandatos, en dichos mandatos nos autorreconocemos como

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario
10841CDDMCYAMMCa
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
República de Colombia
Aa061828548
Ca329276271
10823HDEAPPCaAHQ
25-04-19
26-06-19
Cadena s.a. Nit. 890.900.5340

seminómadas " *Nosotros el pueblo Yukpa, realizamos ciclos de rotaciones de la tierra, con el objeto de dejarla descansar y realizar diversas actividades propias de nuestra cultura; es decir, que durante determinado tiempo vivimos y convivimos en un territorio específico y delimitado, luego de esto abandonan esta zona. Los intervalos de tiempo oscilan entre 1 año y 10 años, con esto se permite que la tierra se regenere naturalmente. Luego regresan nuevamente a la zona que habitaron a realizar actividades de caza, pesca y recolección. Es decir, somos el único pueblo indígena semi-nómada en la costa caribe".* **13.** En el año 2017, el Ministerio del Interior realizó un convenio interadministrativo con el resguardo Iroka, con el propósito de identificar y caracterizar los sitios sagrados del territorio ancestral del pueblo Yukpa en la Serranía del Perijá. En dicho documento denominado Owaya, se describe nuestra condición de nómada, cazadores, recolectores y pescadores de la siguiente manera *"Una característica del pueblo yukpa hoy especialmente en la zona central, es la costumbre de nomadismo territorial, ellos pueden moverse de un lugar a otro a su voluntad, no tienen un arraigo a la tierra con respecto a la vivienda, esto se evidencia en la manera como construyen sus casas, son temporales fáciles de desmontar. Esta práctica da ese sentido colectivo de la tierra, hoy una familia puede ocuparla, pero en meses o años puede desplazase a otro lugar y cederlo a otro grupo familiar." "Con la noción de territorio no se protege un valor económico sino el valor de la vida en general y de la vida cultural en particular, pero infortunadamente la concepción de territorio que abarca una relación de lo espiritual y la naturaleza, que lo es todo, es lo que Papsh dejó para que se viviera y en donde está la memoria colectiva, lugares sagrados, montañas, cerros, piedras, lugares de pesca y caza que son de provisión para la salud al igual que los sitios donde se encontraban las plantas medicinales, hoy por hoy se encuentra afectado porque el territorio está separado, fragmentado y rodeado por quienes no son yukpa" "Desde otra perspectiva el territorio no está limitado por algún tipo de artificio o línea imaginaria inventada o impuesta por los no yukpa "wateya-watiya". El territorio es por donde el yukpa camina, hasta allí llega su territorio, está en su memoria que les impulsa a retornar a aquellos lugares donde siempre obtuvieron su sustento, donde pescan, cazan y siembran." "El territorio lo define también las actividades sociales y culturales vinculado con los diferentes ciclos de vida en un contexto de cultura nómada y guerrera" "Durante los meses de pesca todos los yukpas por costumbre se desplazan a las partes bajas de su territorio en busca de las*

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

riveras de los ríos, allí junto a la práctica espiritual del uso de barbasco dan inicio a una temporada que les permite recolectar los peces que serán parte de su dieta ocasional." "Pretende describir y caracterizar todos los sitios de importancia territorial, ancestral y espiritual de todos los yukpas en Colombia. Identifica los lugares de cacería tradicional, de pesca, recolección y delimitación. También los sitios considerados de gran importancia espiritual que hacen referencia a una historia de presencia yukpa en relación con la naturaleza, sus dueños espirituales y espacios de interacción." **14.** En el año 2018, el Doctor Pedro Santiago Posada Arango, Defensor Delegado para Indígenas y Minorías de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a un concepto solicitado por el pueblo Yukpa, describe al pueblo Yukpa de la siguiente manera "*De acuerdo con la literatura historiográfica, antropológica y etnográfica, los Yukpa han tenido un territorio ancestral, que si bien no alcanzó alguna forma de reconocimiento jurídico temprano (en la Colonia), como en cambio sí lo lograron pueblos indígenas del país, ha estado ligado al desarrollo de varias prácticas sociales, económicas y culturales con las cuales construyeron una frontera espacial definida. Hablamos de prácticas como:* ***A****. Ciertas formas de nomadismo o itinerancia en función de las ofertas estacionales, a las que han accedido mediante faenas de caza, la -pesca y la recolección, pero alternadas con algunos tipos de horticultura básica,* ***B****. Un patrón disperso de residencia y de ocupación del territorio, comandado por unidades familiares que entre sí han establecido vínculos matrimoniales y de parentesco en general, bajo reglas específicas de autoridad doméstica (suegro),* ***C****. Un sistema de organización social en el que la figura de gran jefe (jefatura) ha asumido la función de liderazgo para enfrentar la necesidad de las alianzas y de resolución de diferencias entre los diferentes segmentos. Estas y otras prácticas han entrado en crisis, en buena medida por el conflicto armado, el confinamiento en las partes altas de la Serranía del Perijá y la colonización, de modo que también su territorio ancestral ha sido igualmente afectado. Sin embargo no han desaparecido. Aunque en mucho menor medida, los Yukpa practican actividades económicas (caza, pesca, recolección) juntamente con la agricultura, que implica que la movilidad en el territorio tiene un gran valor. Igualmente cuentan con una noción de territorio ancestral, donde se encuentran sus lugares de origen, donde habita su memoria, su historia, que hace parte fundamental de su identidad cultural. Igual que otros pueblos indígenas, el Wayuu por ejemplo, los Yukpa tienen un complejo territorial que incluso es transfronterizo, toda*

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario
10824QHHDEDPPCaA
Cadena S.A. 25-04-19
Cadena S.A. 26-06-19

vez que los de ambos lados de la frontera observan diferentes formas de intercambio. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas comprenden dos acepciones: el ámbito territorial sobre el que ejercen prácticas culturales, funcionales y de supervivencia material, independientemente del régimen de propiedad de la tierra; y la tierra titulada de forma colectiva (resguardo), considerada inembargable, imprescriptible e inajenable. Tal rasero aplica también para el pueblo Yukpa. Ellos poseen un territorio ancestral (y un ámbito territorial), que, si bien está lesionado por fenómenos como los descritos, no inhibe la observancia de otros derechos asociados a su supervivencia (como moverse, cazar pescar, asentarse), así como el derecho a que se les delimite y reconozca en los términos del Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT) el Decreto 2333 de 2014, y la Sentencia T/713 de 2017." **QUINTO. DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE MOVIMIENTO Y RELACIONAMIENTO TERRITORIAL ENDÓGENO Y EXÓGENO DE UNA CULTURA NÓMADA, SEMI-NOMADA Y AGRICULTORES ITINERANTES EN COLOMBIA: 5.1. Cultura de nomadismos del pueblo Yukpa, 5.1.1 La guerra como sistema de relacionamiento endógeno en culturas nómadas**. Los Yukpa, se identifican con la imagen de una persona que puede portar su arco y flecha a todos lados parte de un proceso de autoidentificación y autorreconocimiento, implicando un sistema de relacionamiento endógeno, estableciendo vínculos con aquellos objetos a tal grado que se les considera íntimos y de uso personal. El *wakaĉha* es el vocablo Yukpa que se usa para un arco hecho de macana, sin embargo, su significación se extiende más allá implicando una estructura de significados sobre la categoría arma u objeto de protección. El *wakaĉha* es el arma de defensa de un Yukpa, esto como parte de su cotidianidad, que implica una forma de vida y relación no solo con un mundo físico sino espiritual (Largo, 2016). Este contexto evoca una gran necesidad de la protección y una constante confrontación con todo tipo de entidades físicas o espirituales, dicha necesidad de protección o confrontación también establece una manera de relacionamiento que motiva procesos de movimiento. La guerra como parte de ese sistema de relacionamiento es un concepto que trasciende el pensamiento Yukpa. Uno de los contextos en lo que se presenta con mayor prominencia es en las reconstrucciones orales que realizan por medio de la narración de sus historias de origen, gran porcentaje de las narraciones que realizan los Yukpa están enfocadas en la guerra ente diferentes seres incluyendo a los Yukpa. El relato oral Yukpa es unos

COPIA AUTENTI
Lucy Teres
NO

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia
Aa061828550
Ca329276273

de los principales documentos argumentativos sobre la realidad de confrontación endógena de los Yukpa, los animales y seres de todo tipo también son portadores de este sistema. La serpiente, los insectos ponzoñosos o venenosos son vistos como seres que son portadores de un arma *wakaĉha* que les fue dado para defenderse, así las cosas, toda la visión Yukpa gira en una realidad donde la confrontación es lo común, y la desconfianza se establece como mecanismo de defensa. La oralidad yukpa más allá de ser un mito que justifica el origen, es la meta-representación crítica de los sistemas de comportamiento (Rateau & Lo-Monaco, 2013), orienta los sistemas de regulación, justifica el ser, expone la idea de vida de un pueblo que se comporta y sigue comportándose como se le ha enseñado. En este contexto el Yukpa vive en relación con la protección de sus espacios a tal punto que han hecho una ingeniería social que trasciende en sus comportamientos y objetos culturales que de igual forma se asocian a una forma de vida del movimiento que puede no ser comprensible hoy día en sociedades de la urbanidad y la sedentarización. **5.1.2 El territorio ancestral, territorio extendido como sistema de relacionamiento exógeno en culturas nómadas**. Los Yukpa desde la investigación consignada en distintos documentos, han habitado las partes bajas de la Serranía del Perijá por toda la rivera del rio Cesar en Colombia hasta las estribaciones del mar de Maracaibo en Venezuela (Jaramillo, 2000). Esta historia ha cambiado a fuerza de diferentes procesos históricos de colonización y reducción por invasión del territorio inicial habitado por los Yukpa, incluso este aniquilante proceso de perdida de territorio generó una marca que se evidencia de manera metafórica y analógica en el relato oral Yukpa que explica el gran diluvio, allí los Yukpa describen que todo su territorio era plano, perspectiva cosmogónica de los Yukpa desde el mito de la creación, entonces surgió una gran inundación que empezó a matar a los Yukpa y solo por el emerger de los tres grandes cerros, *shkemu*, *tutaĉhe* y *akashkatopo* se pudo salvar la población Yukpa de un inminente exterminio; esta narración posiblemente permite ser evidencia de una realidad histórica, es decir, permite la reconstrucción arqueológica de una pérdida del territorio (Escamilla, 2016). El rio Cesar es un gran afluente alimentado con los diferentes ríos que nacen en la parte alta de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada, este gran río ha sido el límite territorial de los Yukpa e históricamente han establecido una relación vital con este, debido a que de el han obtenido su alimento para **(a)** una cultura nómada y **(b)** prácticas de la pesca estacionaria. La **(c)** toponimia es otro

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario
10843MMaSCDDMCYA
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
República de Colombia
Aa061828550
Ca329276273
10825AaQHHDM9PPC
25-04-19
26-06-19

recurso de vinculación y relación con el territorio, implicando posesión, la gran mayoría de las toponimias Yukpa refieren a la descripción de la abundancia de algún elemento, es usual los vocablos que designan especies de árboles. La palabra Cesar tiene su origen en el vocablo caribe sasaĉhe que refiere a la palabra arena en Yukpa, y no solo este, sino todos los ríos que están dentro de su territorio conservan los nombres dados por los Yukpa. El Casacará de vocablo kasakaĉha, el Tocaimo de tokaymu, Majiraimo de maseĉhamu, Maraca, la Duda, Manaure entre otros, son nombres que por la influencia del castellano se han transliterado en otras formas pero que son vocablos Yukpa que obedecen a sus reglas lingüísticas y de la categoría de toponimias y reconstruyen una memoria del territorio (Hernández, 2005). Un aspecto importante de la cultura Yukpa, es su relación constante con los ríos que es su territorio por naturaleza y desde ese contexto han establecido sus maneras de vivir. El río es la fuente de una de sus principales dietas, el pescado proveía la proteína durante los veranos de principio y mitad de año dentro de su calendario propio. Es una práctica que se ha visto amenazada debido al concepto propiedad privada o las afectaciones directas a los cauces donde los Yukpa pescan. La pesca no solo es una práctica de recolección desde una perspectiva económica, esta tiene unas implicaciones rituales que son las que posibilitan el buen relacionamiento con el mundo natural y espiritual. "*los escogidos para dirigir la pesca son sabios dentro de la estructura social yukpa, estos se apartan y preparan ritualmente, luego preparan a todo un asentamiento para salir a la pesca*" (Largo 2018). El rio es su contexto natural y refuerza ese sentido del territorio, pero con una característica interesante y es la noción de movimiento del mismo pues los Yukpa se **(d)** mueven en relación a esa trayectoria del Yukpa como una cultura que se debe moverse a razón de unas necesidades básicas de subsistencia como lo son la guerra y la pesca, que también se evidencia en la cacería, pero es necesario ir ahondando en el sentido o definición de una realidad nómada entre los Yukpa o la cultura del movimiento. El nomadismo pasa por varios niveles de conceptualización, inicialmente se define como un relacionamiento espacial que puede tener un grupo social donde no desarrolla su forma de vida para estar en un solo punto (Galaty & Salzman, 1981). Un segundo nivel corresponde a una estructura social que en esa independencia de sitio fijo; establece unos patrones, conductas que facilitan la pervivencia en el tránsito, es decir una cultura, sociedad y economía del movimiento. Un tercer nivel es el pensamiento

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia
Aa061828551
Ca329276274

que definitivamente está ligado y se estructura o estructura desde la perspectiva del nomadismo, es decir, una epistemología del movimiento frente a sociedades sedentarias. En continuidad a este sentido del movimiento que también es motivado según el contexto, se encuentra las prácticas de **(d1)** recolección, actividad ancestral y actual, donde los Yukpa buscan parte de su dieta en las partes bajas y medias de la Serranía del Perijá, frutos como guáimaro, caimito, y en la actualidad el mango, además de otros frutos que son predilectos para los Yukpa. Por tanto, es una práctica de relacionamiento territorial, en la actualidad se constituye en la única fuente de alimentación debido al impacto del cambio climático, especialmente en las épocas de verano, razón por la cual se desplazan las familias a la parte plana en búsqueda de mango que es la fruta predilecta en la actualidad. **5.1.3 El asentamiento como sistema de relacionamiento endógeno en culturas nómadas y nomadismo endógeno.** La primera categoría que se sujeta a este tipo de relacionamiento es la forma o visión sobre la casa, que es objeto, lugar y conocimiento. La palabra para casa en Yukpa es *ᴍᴜɴᴜ*, esta es una estructura básica que se compone de cuatro estantillos enterrados y con una cubierta de paja u hojas de platanillo, no tiene paredes, por lo menos la gran mayoría de las casas tradicionales no sobrepasa la altura promedio de 1,80 mts en la parte más alta. Las casas Yukpa son **(e)** estructuras temporales, no se hacen con el ánimo de durar mucho tiempo, son pasajeras, incluso en los tiempos más calurosos duermen afuera de estas (Largo, 2016). Si se da el caso de **(f)** la muerte de un miembro de la familia esta casa es destruida por completo y se ven obligados a trasladarse a otro sitio como una manera de protegerse de un espíritu malo. Cuando **(g)** se ven amenazados o si **(h)** perciben que las enfermedades son constantes toman la decisión de moverse desarmando su casa y buscando lugares más seguros (Resguardo Iroka, 2016). Durante la pesca o cacería acostumbran a movilizarse por familias ubicándose a la orilla de los ríos o sitios seguros para la caza, donde la estructura de vivienda suele ser solo cubiertas de hojas, es decir, **(i)** no existe un arraigo a la vivienda o noción de hogar como las sociedades sedentarias. De igual forma se puede observar que los Yukpa no son acumuladores, no es común ver entre los más tradicionales muchas cosas, suelen vivir con lo básico y es lo que les permite transitar sin mucha complicación: La acumulación va vinculado a un comportamiento de no tomar más de lo necesario, para un Yukpa es "malo" cazar demasiado, pescar demasiado o tomar de la naturaleza irracionalmente sus recursos.

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario
10844AYMMaYCDDMC
10821PPCaAHQDHCM
25-04-19
26-06-19
Cadena S.A. NIT. 890939936

Otro horizonte sobre sistemas de relacionamiento territorial endógeno se observa en los comportamientos rituales especialmente en los bailes como el maíz o el desentierro. En la danza del desentierro las personas se reúnen en **(j)** un gran círculo girando en un solo sentido, en una mano llevan un bastón con el cual van golpeando la tierra armonizado con un grito melodioso, se golpea la tierra para ahuyentar los espíritus malos, y se grita para confundirlos. Este baile en círculo es común en las celebraciones Yukpa. Otro caso es durante la cosecha del maíz donde todos se reúnen, de la misma manera hay dos personas que se ubican en el centro, quienes tocan una flauta mientras que los demás danzan en torno a ellos, pero en esta ocasión el círculo es hecho por parejas de hombre y mujer (Largo, 2016). **(j1)** El círculo es otra figura que trasciende en el pensamiento Yukpa y tiene un sentido relacionado con la vida, en tejidos se usa la metáfora del crecimiento de una persona, en el caso del tejido de la mochila. Cuando se teje la mochila, dicen los Yukpa que es como cuando un niño nace, primero se hace el ombligo y así va creciendo, como las personas, hasta que ya se hace adulto, así es cuando se termina la primera parte. En el baile se refleja este símbolo del círculo, muy posiblemente indica la vida diaria, es como **(k)** caminar hacia adelante sin parar, dicen los mayores o sabedores, posiblemente como sentido de **(l)** una vida errante, de caminar su territorio. Durante el desentierro todos giran en círculo sin parar, pueden hacerlo todo un día e incluso varios días. Así pues, la temporalidad es un caminar constante, no se detienen, está unido a un pensamiento, una espiritualidad y formas de relacionarse con su entorno en este caso el territorio. Si alguien muere en un asentamiento es obligatorio partir de tal lugar, si se observa constantes enfermedades se debe mover las familias, si existe una amenaza de conflicto entonces la mejor alternativa es caminar a donde existen mejores condiciones. **5.2. Prominencia de nomadismo endógeno, exógeno y transición en procesos de restricción territorial.** Dentro del sistema de relacionamiento territorial existen diferentes tendencias en mayor o menor prominencia hacia una cultura del nomadismo, que están estrechamente relacionados con procesos históricos de restricción territorial, que surgen de las acciones directas por parte del Estado e indirectas por parte de una historia del conflicto armado. **(a)** Existe un territorio ancestral que ha sido fragmentado bajo la figura restrictiva de resguardo, de los cuales hoy existen seis localizados en tres municipios, sin embargo, el énfasis aquí está en que las trasformaciones de una cultura nómada en el marco de

COPIA AUTENTICA
NOTAR

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

diferentes situaciones o contextos territoriales. **(b)** Existe una escala de prominencia en relación al nomadismo endógeno y exógeno, teniendo que los territorios Yukpa de la parte norte presentan disminución y transformación del sistema de relacionamiento territorial exógeno, evocando mayormente un sistema endógeno del movimiento. En la parte central especialmente en el territorio Yukpa de Iroka se presenta una mayor vitalidad en estos sistemas de relacionamiento territorial exógeno y endógeno. En la parte sur del territorio en el territorio de Sokorhpa existe una transición entre el sistema endógeno y exógeno. **(c)** Los procesos de transformación de prácticas de relacionamiento territorial son causados por las acciones de la explotación minera, la imposición del concepto de culturas sedentaria sobre propiedad privada y la colonización masiva de los territorios. **I. En la parte norte del territorio Yukpa de Jojmaye** se encuentra que **(b, d,)** prácticas de la pesca estacionaria y movimiento en la trayectoria del río se han reducido drásticamente por la pérdida de afluentes debido a la explotación de arena y piedra, además de la gran deforestación de la parte alta. Por la gran influencia de la cultura campesina el indicador las casas Yukpa son **(e)** estructuras temporales, se ha perdido casi en su totalidad, junto a esto el indicador, **(f, g, h, i)** de desplazamiento endógeno se ve afectado por que no existe territorio a donde moverse debido a que sus pocas tierras están encerradas en predios de campesinos. **II. En la parte sur del territorio Yukpa de Sokorhpa.** Aún están vigentes los indicadores de vitalidad de relacionamiento endógeno, pero los que están relacionados con el relacionamiento exógeno están en transición debido a que también han perdido acceso a muchas partes de su territorio ancestral, por culpa de la explotación minera, tanto de extracción de carbón, y material de arrastre. **III. Práctica de seminómadas del pueblo Yukpa fuera del territorio ancestral.** Todos los indicadores están en riesgo, debido a que estos asentamientos en transición sufren los procesos de alienación y asimilación cultural que producen desvinculación generacional territorial, sin embargo, se debe diferenciar dos grupos importantes en este contexto, **1.** Todos los Yukpa que desde el tiempo de la violencia causada por los grupos armados han salido a fuerza de su territorio o por fenómenos climatológicos, es decir, un desplazamiento no tradicional, están en el indicador más bajo de vitalidad de relacionamiento territorial, esto para los Yukpa asentados en Santa Marta y que son originarios del grupo norte, municipio de La Paz. **2.** Todos los Yukpa que se encuentran fuera de su territorio ancestral debido a que han extendido sus formas de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario
10845CMCMMMaOCDD
10822MOPPCaAHODH
Cadena s.a. NIT 860.035.340 25-04-19 26-06-19
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
República de Colombia

relacionamiento exógeno, que aún conservan vínculos territoriales pero que presentan situaciones de distorsión por la influencia de la cultura no Yukpa, también por condicionamientos con relación a los principios de la guerra dentro de su territorio ancestral. Estos grupos conservan la cultura nómada exógena, pero presentan un deterioro en las prácticas endógenas, se puede decir que tienen tendencias seminómadas, en riesgo y vulnerables en sus prácticas de relacionamiento territorial. SE PRESENTARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: RESOLUCIONES, CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE HACEN EL RECONOCIMIENTO A LAS AUTORIDADES INDIGENAS---FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE LOS COMPARECIENTES. -- En consecuencia yo el suscrito Notario declaro protocolizado los documentos relacionados bajo el número que le corresponda a esta escritura para su guarda y conservación y para que su contenido sea insertado en cada una de las copias que de ella se expidan y surtan todos los efectos legales. Leída la presente escritura a los comparecientes, quienes lo aprueban y firman de conformidad por ante mi el suscrito Notario de todo lo cual doy fe. El suscrito Notario deja expresa constancia que advirtió a los comparecientes a leer y constatar los datos aquí consignados y que cualquier corrección posterior implicará el otorgamiento de una nueva escritura. Se autorizó esta escritura en las hojas de papel notarial números: Aa061828543 Aa061828544 Aa061828545 Aa061828546 Aa061828547 Aa061828548 Aa061828549 Aa061828550 Aa061829551 Aa061829552 Aa061829553. DERECHOS NOTARIALES RESOLUCIÓN 0691 DEL 24 DE ENERO DEL 2019 $ 59.400 $3700 Cada hoja papel Notarial. $ 12400 Superintendencia y Fondo nacional del Notariado. RETEFUENTE $-0- IVA $ 69.635

LOS COMPARECIENTES – 26:

Esneda Saavedra R.

ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO
AUTORIDAD INDIGENA
C.C. 49748586
Dirección: Resguardo Sokorpa.
Domicilio: Becerril Cesar.
Teléfono fijo y/o celular: 3132067281
Estado civil: Casado Con Hijos

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos notariales - Prohibida su comercialización

República de Colombia

Aa061828553

Ca329276318

Actividad económica: Gobernadora del cabildo yoleppa sokopa

Correo electrónico: oneda 19772017@hotmail.com.

ALFREDO PEÑA FRANCO
AUTORIDAD INDIGENA
C.C. 12956993

Dirección: Resguardo Iroka

Domicilio: codazzi cesar

Teléfono fijo y/o celular: 3107146186

Estado civil: Soltero

Actividad económica: Gobernador de Iroka

Correo electrónico: yukpadeiroka@hotmail.com

EMILIO OVALLE MARTINEZ
AUTORIDAD INDIGENA
C.C. 18939440

Dirección: Resguardo menkue

Domicilio: Codazzi

Teléfono fijo y/o celular: 3217926477 64

Estado civil: union libri

Actividad económica: Gobernador de menkue

Correo electrónico: yukpademenkue0044@gmail.com

JAIME LUIS OLIVELLA MARQUEZ
AUTORIDAD INDIGENA
C.C. 1067808333

Dirección: El Rosario Bellavista Yukatan

Domicilio: La Paz

Teléfono fijo y/o celular: 3218671956

Estado civil: Union Libre

Actividad económica: Cabildo de El Rosario

Correo electrónico: marquezOLIVELLA@gmail.com

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

10843MMaACDDMCOQ

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Aa061828553

Ca329276318

1082JHDMPPPCaAHQ

25-04-19

26-06-19

Alirio Ovalle Reyes

ALIRIO OVALLE REYES
AUTORIDAD INDIGENA
C.C. 71040052
Dirección: caño Padilla
Domicilio: La Paz
Teléfono fijo y/o celular: 3233247941
Estado civil: Unión Libre.
Actividad económica: Gobernador del Resguardo Caño Padilla.
Correo electrónico: CabildoAlirioOvalle@hotamil.com

Andres Vence

ANDRES VENCE VILLAR
AUTORIDAD INDIGENA
C.C. 6676395
Dirección: Resguardo La Laguna
Domicilio: La Paz
Teléfono fijo y/o celular: 3137507729
Estado civil: Unión libre
Actividad económica: Gobernador La Laguna, el Roso y Cinco Caminos.
Correo electrónico: andresvencevillar1982@gmail.com

LA NOTARIA UNICA: LUCY TERESA CHAVEZ CORRAS.

0317 del 02 de Agosto de 19
Se expide en Setenta y dos (72)
Para entrega

Dado en Codazzi a los 02 días del mes de Agosto de 19

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE AGUSTÍN CODAZZI
LUCY TERESA CHAVEZ CORRAS
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE AGUSTIN CODAZZI

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública. No tiene costo para el usuario

Ca329276408

AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA ESCRITURA PÚBLICA

25400

En la ciudad de Agustin Codazzi, Departamento de Cesar, República de Colombia, el dos (02) de agosto de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Única del Círculo de Agustin Codazzi, compareció:

ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0049748586.



-------- Firma autógrafa --------

5dnfw31rf4hh
02/08/2019 - 16:19:37:067

ALFREDO PEÑA FRANCO, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0018956993.



-------- Firma autógrafa --------

4ctbussitesx
02/08/2019 - 16:20:41:440

EMILIO OVALLE MARTINEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0018939440.



-------- Firma autógrafa --------

5yq0k7swm9ke
02/08/2019 - 16:21:56:676

JAIME LUIS OLIVELLA MARQUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #1067808333.



-------- Firma autógrafa --------

1zaz0amla7cw
02/08/2019 - 16:22:53:792

ALIRIO OVALLE REYES, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0077040052.



-------- Firma autógrafa --------

5h8od0sfkirm
02/08/2019 - 16:24:59:847

ANDRES VENCE VILLAR, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0006676395.



-------- Firma autógrafa --------

57ee4ucjvsof
02/08/2019 - 16:26:03:002

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
COPIA AUTENTICA DEL ORIGINAL
Dra. Teresa Chávez Campos
NOTARIA
Cadena s.a. NIT. 800.096.806-6 28-06-19
T0843MM8ACDDMCMC

COPIA FIEL Y AUTENTICA DE
Lucy Teresa Chávez
NOTARIA

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, los comparecientes fueron identificados mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al contrato de PROTOCOLIZACION SIN CUANTIA, con número de referencia ESCRITURA 0317 del día 02 de agosto de 2019.

Notaria Única de Agustin Codazzi - Cesar

LUCY TERESA CHAVEZ CORPAS
Notaria Única del Círculo de Agustin Codazzi

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 5dnfw31rf4hh

HOJA EN BLANCO

Instituto Colombiano de Antropología e Historia
ICANH

La cultura es de todos
Minicultura

ICANH 105 4446
No. Recibido: 3013-2019
Bogotá, 26 AGO 2019

Doctor:
Manuel Eduardo Aljure Salame
Director de Asuntos, Indígenas, Rom y Minorías (E.)
Ministerio del Interior
Calle 12 B No. 8 – 42
manuel.aljure@miniterior.gov.co
Bogotá

Asunto: Insumo técnico para la definición de la condición de nómada y semi-nómada del pueblo yukpa

Respetado Director,

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura que tiene por objeto el fomento, la realización, la publicación y divulgación de investigaciones antropológicas, arqueológicas, históricas y sobre el patrimonio cultural de la Nación. Para dar cumplimiento a lo solicitado mediante comunicación Numerada OFI 19-17971-DAI-2200 del 30 de mayo de 2019, envíanos el insumo que fue elaborado por esta institución

En espera de contribuir con los procesos a su cargo.

Cordialmente

Marta Saade G.
MARTA SAADE GRANDAOS
Directora General Instituto Colombiano de Antropología e Historia (E.)

Proyectó: Marcela Quiroga Zuluaga
Revisó: Marta Saade Granados y Ernesto Montenegro

Introducción

El presente documento se elaboró para dar respuesta al oficio de traslado por competencias (OFI19-17971- DAI- 2200, del 30 de mayo de 2019) tramitado por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en el cual se expresa la necesidad de elaborar un concepto que permita resolver la solicitud elevada por el pueblo yukpa , en el marco del proceso de Consulta Previa del ETCR- La Paz- Cesar, de emitir un " *Acto administrativo para establecer la condición de nómada y semi-nómada del pueblo yukpa*". Al respecto, es necesario señalar que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) estima que dicho acto administrativo no puede ser emitido por esta institución, ya que éste es la manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos;y tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico. Adicionalmente el ICANH considera que las prácticas socio-culturales de un pueblo, siempre ricas en matices, no pueden ser reducidas a dichas acciones administrativas, en tanto corren el riesgo de ser instrumentalizadas, transgrediendo el dinamismo y la fluidez que las caracterizan.

No obstante, el ICANH consciente de sus funciones misionales realiza este concepto, el cual explica desde una perspectiva antropológica las distintas formas de movilidad del pueblo yukpa, entre ellas aquellas relacionadas con el nomadismo y semi-nomadismo, pues estas nociones tienden a confundirse con otras formas de desplazamiento espacial culturalmente cimentadas. Realizar la caracterización de una práctica como el nomadismo, implica como en cualquier ejercicio sociológico o antropológico, trasegar de una categoría tipo o ideal (por lo tanto, no describible en sentido concreto); a contrastar estas categorías con las relaciones sociales concretas y precisas de una sociedad. Por lo tanto, la investigación realizada en el Instituto, avanza en una perspectiva etnográfica (que describe a actores, a comunidades, situadas espacial e históricamente); y describe cómo se encuentran, en este caso, las formas de movilidad espaciales en la práctica y en el seno de

un contexto cultural preciso. En este ejercicio, el ICANH espera contribuir a la comprensión de una sociedad indígena poco conocida para la mayoría de los colombianos, y cuyas formas sociales y culturales se alejan notablemente de las nuestras motivando en ocasiones su estigmatización.

Para lograr tal objetivo este texto, inicia con una exploración de la definición del nomadismo y de otras formas de movilidad espacial en un marco cultural determinado. El interés es analizar desde un punto de vista técnico estas nociones para evitar confusiones comunes que dificulten la comprensión de dichas formas de movilidad, las cuales son planteadas en tres apartados. El primero de ellos observa, de manera general, las migraciones y las transformaciones territoriales que sufrieron los ancestros de este pueblo desde el momento de la llegada de los españoles. La segunda analiza la práctica del semi-nomadismo, y otras formas de migración orientadas por las características de la organización social yukpa. La tercera, estudia otras dinámicas de migración estimuladas por las formas de "hacer política" de estos pueblos.

Es necesario precisar que para la elaboración del presente texto se recurrió a la información etnográfica existente e igualmente se desarrolló una visita de campo en tres comunidades yukpas, localizadas fuera de los territorios de resguardo y de su área de influencia política, ya que los Cabildos de los seis resguardos yukpas condicionaron la investigación del problema a la realización de un taller, el cual desafortunadamente el ICANH no puede realizar dentro d ellos tiempos del presente requerimiento. Sin embargo, vale la pena señalar, que el ICANH podría prestar el acompañamiento a dicho ejercicio con el apoyo financiero necesario y con la disposición de tiempo requerido para su adecuado desarrollo.

Este concepto emitido por el ICANH se constituye en un sustento técnico y científico de acuerdo con la misionalidad del ICANH: "Prestar asesoría científica a los organismos de carácter público o privado en el diseño y ejecución de estudios de impacto cultural, arqueológico y antropológico." (decreto 2667 de 1997). El concepto, que no tiene un carácter vinculante, contribuye a comprender la existencia o ausencia de la práctica del

nomadismo o del semi-nomadismo, en el seno de los procesos de dinamismo cultural y de la transformación de las prácticas espaciales del pueblo Yukpa en la actualidad.

1. Sobre el nomadismo.

En su sentido etimológico la palabra nómada remite a las formas vida pastoral *nomas* (pastor, del griego *nemeim*: pastar). Usualmente empleamos este término de forma vulgar o corriente para designar a un individuo o a un grupo que se encuentra en continuo desplazamiento o cambia frecuentemente de lugar. Sin embargo, desde un punto de vista antropológico todo tipo de movilidad o de movimiento espacial no puede ser asimilado a una categoría estándar de nomadismo, de hecho, dicha percepción puede ocasionar confusiones a la hora de comprender a las sociedades que lo practican (Le Grand, 2007, Retaille, 1998). En efecto, como lo muestra este apartado, el nomadismo más que un comportamiento o una práctica o estrategia social vinculada con factores residenciales (lugar donde se duerme y come), relacionados con las formas de producción o de subsistencia de una sociedad, constituyen un "modo de vida", una experiencia de desplazamiento específica en términos culturales (Khanazov, 1994). Esta experiencia cultural se distingue de otras formas de desplazamiento espacial como las migraciones, la dispersión, la trashumancia y se caracteriza, como lo expresa el antropólogo André Bourgeot (2008) por ser un: "modo de vida móvil consolidado por grupos sociales organizados ... que sostienen relaciones orgánicamente mediadas con la naturaleza, a través de formas particulares, y que propician actividades específicas adaptadas a la explotación de recursos que se encuentran en la naturaleza"[1]. De tal forma que la noción de nomadismo es mucho más compleja de lo que pensamos usualmente, pues define un principio organizador de la vida social, sustentado en una forma particular de relación con la naturaleza, e implicando una organización de la sociedad concreta- incluso en el desarrollo de sus desplazamientos- que se expresa en todos los ámbitos de la vida social. En este

[1] Traducción libre

sentido la noción "técnica" del nomadismo se aleja notablemente de la idea romántica del nomadismo como errancia sin sentido, y sin un orden social y sin un propósito establecidos.

Sin ánimo de establecer una tipología reductora, pues las sociedades nómadas son muy diversas, podemos decir que en antropología los estudios sobre este tipo de sociedades se han concentrado principalmente en cuatro de ellas: 1. Los cazadores -recolectores; 2. los pastores nómadas; 3. los pescadores nómadas; y 4. los *tzigane*, *gens du voyages* o gitanos. Entre estas sociedades, los gitanos son los más conocidos en tanto sus desplazamientos se han dado históricamente en territorios ya ocupados por sociedades urbanas en Europa y América (Williams, 1994). Los otros tipos de sociedades, menos conocidas, ameritan ser ilustrados. Para los pueblos cazadores-recolectores, los pueblos makú del Noreste Amazónico, y entre ellos los Nukak, son un buen ejemplo. Se trata de pueblos con una alta movilidad que fundan sus formas de subsistencia, principalmente, en la actividad de recolección, y en menor medida en la caza y, en algunos casos, en la pesca (Cabrera, 1999)[2]. Por su parte, los pastores -nómadas, aluden a aquellas sociedades en las cuales el nomadismo se asocia con formas de subsistencia como el pastoreo de animales domesticados; de allí el origen de la palabra nómada, como por ejemplo los *beduinos* habitantes de las estepas del medio oriente árabe, *los tuareg* del Sahara, en África o los mongoles en Asia. Finalmente, los pescadores nómadas pueden se ejemplificados con los *moken* del golfo de Bengala, cuya movilidad está determinada por la actividad de la pesca en la estación seca y una "agricultura simbólica" en la época de lluvias (Ivanoff, 1994)[3]. Vale la pena mencionar, que en estas sociedades la agricultura se practica, pero no constituye la actividad principal de subsistencia.

[2] La movilidad del pueblo nukak es referenciada por el antropólogo Gabriel Cabrera: "una proyección del cambio de residencia arrojaba una ocupación de 68.64 campamentos por año, recorriendo 6.9 kilómetros entre un lugar y otro, con una ocupación promedio por campamento de 5.31 días" (Franky et al., 1995)

[3] Se habla de agricultura simbólica, pues si bien los moken la practican en las estaciones de lluvia, y se agrupan en las islas donde viven, el producto de la actividad agrícola no es destinado al consumo, sino para sus ceremonias rituales. (Williams, 1994)

A pesar de la diversidad de sociedades nómadas, desde un punto teórico, ellas poseen en común dos aspectos. En primer lugar, una percepción particular del espacio y del territorio, en la cual las relaciones sociales priman sobre aspectos como la posesión de la tierra y los límites político-administrativos. En este contexto "el territorio es espacialmente discontinuo, constituido por sitios alejados unos de otros y vinculados por una circulación causada por motivos variables que son reconocidos por todos aquellos que son susceptibles de frecuentar los mismos sitios" (Retaille, 1998:40). El espacio nómada no es una superficie sino una constelación (*Ibíd.*)[4]. El otro aspecto, relacionado igualmente con esta manera particular de organización espacial y territorial, está delimitado por el tipo de desplazamiento que define el nomadismo, es decir, los pueblos nómades siguen un itinerario fijo a través de desplazamientos estacionarios anuales, escalonados o en varios años; dichos desplazamientos están restringidos a ciertos límites y se desarrollan de manera cíclica o periódica (Krader, 1959:519). Esta forma de movilidad cíclica distingue el nomadismo de otro tipo de desplazamientos como la migración, la cual puede ser definida de manera definitiva, consecuencia de la necesidad de un grupo o población de satisfacer necesidades fundamentales para su supervivencia (Le Grand, 2007). También se distingue de la trashumancia, que indica una forma de residencia regular, año tras año en los mismos sitios de habitación estacionarios (D'Hont, 2005).

También se distingue del nomadismo la noción de semi-nomadismo: "término que define aquellos grupos o poblaciones que alternan en un periodo de tiempo un año, por ejemplo, una fase de carácter nómada, a *mínima* con una instalación de larga duración en el mismo sitio. Los semi-nómadas disponen de un sitio de anclaje regular, estacionario, en su territorio". (D'Hont, 2005: 198). Como lo veremos posteriormente, en el caso de los yukpas este tipo de movilidad "estacionaria" orientada por el ejercicio de un modelo económico

[4] Traducción libre

mixto que combina la agricultura itinerante, la caza, la pesca y la recolección corresponde a una de las tantas formas de movilidad practicada por los miembros de dicho pueblo[5].

Teniendo en cuenta el alto grado de diversificación de formas culturalmente establecidas de permanencia y de circulación espaciales; y reconociendo que éstas se establecen por las maneras en que una misma sociedad combina una y otra; es posible argumentar que el pueblo Yukpa es en primera instancia semi-nómada, y que además pone en práctica diversos tipos de migraciones y desplazamientos espaciales anclados culturalmente. Estas distintas maneras de moverse por el territorio constituyen unas lógicas prácticas de relacionamiento espacial orientadas por las formas de organización socio-políticas y productivas de los yukpas; por lo mismo, reconocerlas permite ir más allá de las representaciones simplificadoras que los esbozan como *salvajes* errantes y mendigos en busca de recursos alimenticios sin ningún orden social.

1. Primeras migraciones

Los testimonios recogidos durante el trabajo de campo muestran claramente que en la tradición oral de los yukpas aún se rememoran los sitios de habitación usados antes de la llegada de los españoles, los cuales se localizaban en las partes bajas adyacentes en la serranía del Perijá, como por ejemplo en el actual municipio de Codazzi (Largo,2018). En realidad, el movimiento espacial hacia las zonas altas de la serranía del Perijá fue la consecuencia de la ocupación española y republicana de las tierras bajas que perduró hasta finales del siglo XX (Cariage, 1979 y Jaramillo 1993). Además de esto, desde una perspectiva histórica los yukpas como todas las sociedades indígenas del país son el resultado de las transformaciones, adaptaciones y restructuraciones que implicó la instalación española y, en este caso, de la constante expansión de la frontera de colonización durante el periodo republicano. Es posible, rastrear a los ancestros de los actuales yukpa en los testimonios documentales del periodo colonial.

[5] Traducción libre

Los eventos rememorados en la tradición oral que mencionan a estas primeras migraciones exigen comprender la relación entre una serie de grupos mencionados en las fuentes históricas con los actuales yukpas, aun cuando su identificación es confusa no sólo por las constantes relaciones de confrontación que mantuvieron con los españoles, sino también como consecuencia de sus propias formas de organización social. Como lo describen los estudios etnográficos realizados sobre esta sociedad, los pueblos yukpas pueden ser definidos como una sociedad segmentaria en la cual priman las divisiones sociales, la dispersión y la autonomía territorial y sociopolítica de sus unidades; que además se expresa en las variaciones dialectales de la lengua yukpa[6]. Por esta razón, han sido designados bajo la categoría de tribu, es decir, un conjunto social constituido por varias segmentos o unidades territoriales y socio-políticas autónomas y aisladas, en algunos casos llamadas como sub-tribus ((Ruddle y Wilbert, 1963), en otros, grupos locales (Dolmatoff, 1945) (Cariage, 1979).

En realidad, el ejercicio de auto-identificación en términos de un pueblo unificado es un ejercicio identitario reciente, resultado de una experiencia histórica común y de la construcción de una memoria del despojo y de estigmatización (Sletto, 2013; Largo, 2018), así como de los imperativos que propone la necesidad de resolver sus actuales problemas y asegurar su supervivencia física y sociocultural. Por otra parte, pese a la autonomía política, el aislamiento de los grupos y sus variaciones dialectales, ya desde los años cuarenta el antropólogo manifestaba que estos grupos "formaban una unidad cultural" (Dolmatoff, 1960: 163).

Las dificultades para la identificación de los grupos yukpas se iniciaron con la definición española de "motilón" que cobijó dos grupos étnicos con características culturales muy distintas: por una parte, los pueblos yukpas de filiación lingüística Karib, y el pueblo Barí, su vecino, de filiación lingüística Chibcha (Ruddle y Wilbert, 1963). Una vez aclarada esta

[6] Actualmente se conocen seis grupos dialectales entre los yukpa, de los cuales tres se hablan en Colombia (Largo, 2016).

confusión, posteriormente, los trabajos etnográficos han profundizado en la clasificación de los yukpas diferenciando su etnónimo por criterios nacionales dependiendo de su localización en Colombia o Venezuela. Así, yukpa sería la denominación empleada para definir estos grupos del lado venezolano, mientras que del lado colombiano se emplearía el termino yuko (Dolmatoff, 1960, Cariage, 1979). Sin embargo, ambos términos en la lengua yukpa más que designar grupos distintos, hacen referencia a condiciones ontológicas diferentes: yukpa acercándose a la noción de humanidad apela a "los hombres o gente", y yuko, como lo expresaban algunos de los miembros entrevistados, define en un primer momento a los "yukpa guerreros", es decir "los hombres guerreros", pero en un segundo momento también designaría a los enemigos o la "no-gente" : "el término mal usado ÿuko"(...) tiene un significado negativo y solo se usa con lo enemigos y muy profundamente aduce a no gente"(Largo, 2016:34)[7]

En este sentido, las diferenciaciones nominales yuko/yukpa responden a construcciones de la etnología realizadas en cada país, y a pesar de la gran flexibilidad de la sociedad yukpa y de las diferencias en los desarrollos históricos de este pueblo en ambos países, estos términos no establecen diferencias étnicas; de hecho, hasta hace pocos años algunos de los miembros yukpas de ambos países estaban vinculados por relaciones de parentesco (Sletto, 2013). Así, actualmente los grupos colombianos se auto-reconocen como yukpas, "gente", al igual que sus parientes venezolanos.

Ahora bien, durante los primeros siglos de la colonia, los ancestros de los yukpas pueden ser reconocidos en las naciones indígenas denominadas por los españoles como Tupes, Itotos, Guanaos y probablemente los Cariachiles, fronterizos a la ciudad de Valledupar. Quienes opusieron una gran resistencia a la instalación española durante los siglos XVI y

[7] "La etimología de la palabra "yukpa" se compone de tres morfemas; "yu-k -pa ʉ " en donde el prefijo "yu-" (su) se usa como prefijo posesivo en sustantivos íntimos, el morfema "kʉ" que indica macho y el sufijo "-pa" que expresa género más humano. Según estos datos es muy 37 posible que la palabra yukpa tenga una significación hacia persona, o como dicen los yukpa: 'gente'". (Largo, 2016: 37)

XVII en la región comprendida por las entonces jurisdicciones de las ciudades de Maracaibo, Ocaña, Valledupar y Pamplona. La relación más directa entre estas naciones y los actuales yukpa puede ser establecida con los Tupes nombrados como *chaques* en las vertientes orientales de la serranía del Perijá (Dolmatoff, 1951: p.102); aunque este término no es reconocido por los actuales yukpas, la documentación histórica permite establecer claramente este vínculo. Así por ejemplo en un documento que relata lo acontecido durante uno de los ataques indígenas tupes a la ciudad de Valledupar en 1609, se mencionan los nombres de algunas de sus autoridades, cuyos vocablos pueden ser relacionados con la lengua yukpa. A manera de ilustración, se refieren entre otros al cacique *Urosunaymo*, quien habitaba el río *Magiriaymo*, ya su hijo el cacique Panocha, también se nombra al cacique *Chiryaimo*, y al cacique Blanco de la provincia de Sicarare; algunos de estas denominaciones se usan como topónimos de la región[8] .

Además, los tupes incluyeron a otros grupos como los *cayares o itotos*. Así lo manifiesta una breve transcripción de la documentación colonial realizada por Reichel-Dolmatoff sobre las incursiones españolas ejecutadas en la región comprendida entre el río Ticuy [Ticuyo], en cercanías de Becerril, y el Arroyo Animas, aproximadamente a 17 km de Chiriguana (Cariage, 1979): "Los indios *cayares* de nación tupes, el cacique llamado Oçonapu" (Dolmatoff, 1951: p.102). De acuerdo con las informaciones del alférez Antonio Flores en 1580, en realidad, Cayare era la denominación del asentamiento mientras que itototos era el nombre de sus habitantes (AGNC, *Poblaciones varias*, t.2. f. 429r). De esta manera, el gentilicio tupe o itotos, recubría una serie de grupos que, siguiendo las pautas de dispersión y autonomía territorial de estos pueblos, parecían independientes y de difícil localización para los españoles, generando gran confusión. En efecto, esta fragmentación y dispersión es evidente cuando se observan los testimonios documentales de las incursiones españolas realizadas como represalia al ataque de los tupes a la ciudad de Valledupar en

[8] De acuerdo con el etno-lingüista Wilson Largo: "Aquellos lugares que terminan en {-mo} se originan de la forma yukpa [-mu] que designa a lugares especiales de cacería, es el término general para monte." Estos lugares que hoy son topónimos son un referente histórico para el pueblo yukpa. (Largo, 2018: 6).

1609. Dichas incursiones se extendieron al Valle de Ziqui o Aratomo, en la provincia de Maracaibo, de Opanache, Sicarare y Espíritu Santo (actual municipio de Codazzi). (AGNC, Encomiendas, t. 11, f.312r, 357r, 523v, 685r) [9]. Este mismo año por orden del gobernador de Santa Marta, por ejemplo, se nombró a Cristóbal de Almonacid como:

> "Capitán general para la conquista y pacificación" de : "los indios y provincias de los indios que están de la otra banda del río Cesar nombrado tupes e itotios, animes y cintaraes y los de ocanayuto, susuyute, [del] Valle Hermoso, Sicarara, [del]valle de la Yucana, Magiriaimo, rio de Toto, valle del Espíritu Santo y San Lázaro, y los demás situados y poblados en las cordillera de frente de dicho río del río Cesar, los cuales están alzados y rebelados. (AGC, Caciques e Indios t.67, f.809v)"

Desde el siglo XVI, las distintas incursiones para pacificar y conquistar a estos indígenas "rebeldes" y someterlos al poder español, permitieron someter algunos indígenas que fueron puestos bajo el régimen de las encomiendas y congregados en *pueblos de indios* con miembros de otras naciones indígenas como los arhuacos, y cariachiles[10]. Este proceso de congregación dio origen a los pueblos de San Lucas del Molino y Santo Tomás de Villanueva (AGNC, Encomiendas, t. 11, 523r; AGI, Santa fe, 184 no 12, f. 4r).

En el siglo XVIII la llegada a la región de las misiones capuchinas valencianas, traídas por la administración española para controlar y evangelizar estas poblaciones localizadas a lo largo de los territorios de la Serranía del Perijá de los actuales países de Colombia y Venezuela, suministran datos más precisos sobre los distintos grupos o sub-tribus que la denominación genérica de "tupes" acogía. De esta manera, en la provincia de Maracaibo se encontraban los *sabriles* en valle del río Sucuy, más al sur los *coyamo*, entre los ríos Palmar

[9] En necesario señalar que, durante el periodo colonial, cuando no existían los limites nacionales entre Colombia y Venezuela, la provincia de Maracaibo estaba conformada por los actuales estados venezolanos de Zulia, Trujillo, Mérida, Táchira, Apure y Barinas, y su gobierno hacía parte de la Real Audiencia del Nuevo reino de Granada, localizada en la ciudad de Santafé (hoy Bogotá).

[10] Durante este periodo los españoles denominaban a todos miembros indígenas de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, sin embargo, por la ubicación tradicional que dichos pueblos han tenido es probable que se tratara de ancestro de los pueblos wiwas o kankuamos.

y Apón los *macos* y al sur los *Aratomo.* En el actual sector colombiano, en la entonces provincia de Santa Marta, se distinguían los *coyaimo*, después denominados como *tocaimos*, y en inmediaciones de Becerril, los *acanayuto* y *pampanillas,* y los tupe, probablemente localizados en el arroyo del mismo nombre (Ruddle y Wilbert, 1963:43). Es gracias a la acción misionera que algunos de estos grupos indígenas fueron sometidos y reunidos en asentamiento nucleados, así en 1703 fueron fundados los pueblos de Jesús de Nazareno del Becerril, Nuestra Señora del Topo y San Joseph del Polo Itûtûtû que reunió a los acanayutos; los indígenas pampanillas fueron congregados en el pueblos del Tucuy y en 1739 se fundó el pueblo Nuestra señora del Rosario, el cual fue traslado en 1740 a Santa Ana de los Tupes, luego de una rebelión indígena contra los misioneros (Quiroga, 2010: 227).

Estos asentamientos sobrevivieron hasta la Independencia, período en el cual los misioneros fueron expulsados y por ende las misiones abandonadas (Cariage, 1979). Luego, durante casi un siglo, las relaciones entre los no indígenas y los yukpa estarán acompasadas por esporádicos ataques de los indígenas y las represalias armadas de los no indígenas, de modo que hasta los inicios del siglo XX el territorio de los yukpas siguió siendo considerado como una zona "hostil" para la sociedad nacional (Ruddle y Wilbert, 1963: 47). Entre 1914 y 1934, los capuchinos regresan y reconstruyen las misiones en el valle de Sicarare y Socomba (Cariage, 1979). Paralelamente, se inicia lentamente el proceso de colonización que dio origen a las poblaciones que conocemos hoy en la región. (Ruddle y Wilbert, 1963).

Posteriormente, en el siglo XX, los datos sobre los grupos que conformaban el pueblo yukpa son el fruto del interés de investigadores colombianos, venezolanos y extranjeros, sus informaciones escritas en distintos momentos de este siglo y hasta la década de los setenta continuaban subrayando las características sociales de fragmentación y aislamiento de las unidades sociales yukpa, y, en consecuencia, las grandes dificultades para establecer los distintos grupos que los conformaban. Así por ejemplo Ruddle y Wilbert (1963: 39) manifestaban: "Además de la confusión ocasionada por el uso indiscriminado del término

"Motilones", la plétora de gentilicios que han sido aplicados a las sub-tribus y grupos locales más pequeños hacen más confuso su examen en la literatura". El ejercicio de sistematización más reciente sobre la localización y los grupos que integraban este pueblo fue realizada a finales de los años setenta por el antropólogo Pierre Cariage quien para este momento distinguía entre Colombia y Venezuela las agrupaciones que aparecen en la tabla No 1.

Tabla No 1 Grupos Yukpa (Carriage, 1979: 22-25)

Colombia	Venezuela
Región de San Jose de oriente (La Laguna, Caño Padilla, Las Minas)	Irapa
Región de Fernambuco (Río Fernambuco y Caño Frio)	Schaparru
Finca de Manzano	Macoita
Región de Sicarare	Rionegrino
Región Casacara- Candela (Valle del Casacara y Candela)	Pariri y wasama
Maraca- Socompa- Socorpa (Maraca, San Genaro, Socomba y Yowa)	Viakshi
	Japreia ou Sabriles

En las últimas décadas del siglo pasado, en el contexto colombiano, estos grupos dieron origen a los seis resguardos yukpas titulados: Iroka (8.678 ha.) y Menkue (309 ha) en el municipio de Codazzi; Socorpa en el municipio de Becerril (25.000 ha), Caño padilla (92,8 ha.), El Rosario (137, 2 ha.) y La Laguna- El Coso (156 ha.) en el municipio de la Paz. Desafortunadamente, hoy en día no existen estudios sistemáticos que permitan establecer las dinámicas de reconfiguración de los yukpas al interior de los terrenos titulados, y que

permitan establecer más precisamente cómo sus unidades de organización social-política (sub-tribus) o grupos locales se organizan al interior de ellos.

Este breve recuento histórico trató de ilustrar de forma muy general las distintas migraciones que experimentaron los antepasados de los yukpas como consecuencia de las dinámicas históricas originadas con la llegada de los españoles y la construcción del Estado-nación colombiano. De acuerdo con los datos presentados es claro que antiguamente los sitios de habitación y de uso tradicionales de este pueblo, y de los distintos grupos que lo conformaban, abarcaron una gran extensión territorial. Sin embargo, es necesario precisar que en este amplio territorio los antepasados de los yukpas ocuparon el espacio de forma fragmentaria y discontinua (Ruddle y Wilbert,1963), y por tanto antes del contacto con el mundo no indígena y del proceso de configuración de los resguardos, no tenían una forma de ocupación territorial limitada y unificada, por lo menos en los términos que podríamos entenderlo los miembros de la sociedad no indígenas, cuya forma principal de delimitación del territorio es la propiedad privada.

Desde el siglo XVI, en los intersticios de estos espacios no ocupados por los indígenas poco a poco se fueron instalando los *watiya* (blancos), replegándolos espacialmente, y poniendo en confrontación dos formas de percepción, de relación y de uso del territorio distintas; dando origen, igualmente, al ciclo de violencia que ha caracterizado las relaciones entre los yukpas y no indígenas hasta nuestros días. Por lo demás, la llegada de los españoles y el avance de los colonos ocasionaron entre los ancestros de los actuales yukpa una serie de movimientos migratorios de las partes planas colindantes a la Serranía del Perijá hacia su interior y las partes más altas. Estos desplazamientos de "larga duración" configuran una primera forma de migración histórica que alteró el hábitat tradicional de los yukpas, y que, junto a otras transformaciones, han ocasionado grandes cambios y procesos adaptativos en su sociedad.

2. *Movilidad y semi-nomadismo.*

Entre los pueblos yukpa existen una serie de movimientos espaciales promovidos por la práctica de sus formas tradicionales de subsistencia (agricultura itinerante, caza, pesca y recolección), que pueden ser definidos bajo la categoría de *movilidad*, en tanto dichos desplazamientos son cíclicos e inducidos por la condiciones climáticas y ecológicas (Bourgeot, 2008). Sin embargo, en el caso yukpa este tipo de desplazamientos es estacionario y se combina con largos periodos de sedentarismo, de allí su condición de semi-nomadas. Cuando hablamos de movilidad o semi-nomadismo, hacemos referencia a una forma de desplazamiento espacial que se integra a otros aspectos de la vida social, entre ellos la organización interna (organización social) y territorial de los grupos humanos. Por esta razón antes de entender dicha forma de movilidad es importante comprender las formas de la organización social yukpas.

Como lo habíamos mencionado los pueblos yukpas se caracterizan por la atomización socio-política, el aislamiento y la dispersión territorial de sus unidades. Sin embargo, a partir de las informaciones de Ruddle y Wilbert, (1963) es posible establecer un modelo social, territorial y político sustentado en las unidades denominadas por los antropólogos como sub-tribus o grupos locales[11]. Así, por ejemplo, en términos territoriales:

> "Cada subtribu tiene un territorio reconocido donde los miembros de las otras tribus no pueden explotar ningún recurso: la totalidad del territorio subtribal pertenece a cada miembro de la subtribu, con todos los derechos de uso conferidos al grupo. Del mismo modo la tierra no cultivable (sabana), los árboles *sará*...los pozos sagrados y las cuevas osarías pertenecen a la sub-tribu como un todo y está prohibida su enajenación individual." (96)

El territorio de la subtribu tradicionalmente se localizaba u "orientaba hacía un valle fluvial" (Ruddle y Wilbert, 1963:40)[12]. Así, los ríos configuraban su hábitat tradicional y

[11] Las informaciones de estos antropólogos son resultado del trabajo de campo entre los yukpas de Venezuela, cuyas prácticas culturales estaban menos transformadas, por la menor presión del mundo blanco.

[12] La localización de estas unidades sociales nos aclara algunos elementos de las informaciones obtenidas del periodo colonial sobre los antepasados yukpas. Pues si recordamos las expediciones españolas hacía los "tupes" estaban dirigidas a jefaturas que se encontraban ubicados a lo largo de los ríos o en valles: Magiriaimo, Toto, chiryamo, etc. En este sentido, cada una de estas jefaturas en cabeza de un "cacique" podía configurar una subtribu o un grupo local.

por esta razón el pueblo yukpa guarda una relación simbólica e histórica con ellos. (Largo, 2018). Por lo demás, este nivel de la organización social (la subtribu) estaba configurado por varios sitios de habitación, separados espacialmente. Las características descritas por estos autores proponen que esta unidad social definida como subtribu, corresponde a lo que la antropología define teóricamente como *grupos locales*, de allí que autores con Cariage (1979) y Dolmattoff (1945) utilicen este término para referirse a ellos. El *grupo local* puede ser definido como una unidad social conformada por un grupo de familiares que habitan un territorio común y al interior de la cual sus miembros realizan todas las actividades para su subsistencia. Dicha agrupación tiene una configuración particular que se sustenta en las relaciones de parentesco de la sociedad y sus normas de residencia; en el caso de los yukpas el grupo local, que es la unidad social y política más importante, agrupa en un mismo lugar a un hombre, su esposa, sus hijas, y los esposos de sus hijas (sus yernos) y su descendencia, integrando varias familias nucleares. Pues siguiendo la norma de residencia cuando un hombre yukpa se casa y forma un nuevo hogar debe residir en el lugar de origen de su esposa y trabajar para su suegro (*uxorolocalidad*) (Cariage, (1979), quien, por lo demás se erige como la autoridad política tradicional más importante, el *yuwatpu*. La información recogida en nuestro trabajo de campo muestra que es gracias al suegro que se obtiene el acceso a la tierra y a un territorio para realizar las actividades de subsistencia. Si no es así, la tierra puede heredarse por línea paterna. Desde la segunda mitad del siglo pasado este patrón de asentamiento tradicional disperso, orientado por la organización social, ha variado notablemente por las presiones sobre el territorio que han experimentado los indígenas. En la actualidad los grupos locales pueden reagruparse en un poblado, como consecuencia de la acción de las misiones que tendieron a reagrupar a los indígenas, y la ocupación de las tierras por los no indígenas. De tal manera, que los grupos locales ya no se distribuyen a lo largo de los valles fluviales por la falta de tierras.

Por otra parte, la organización social yukpa está orientada por un principio de fisión (división) que hace que dichos grupos puedan escindirse dando forma a una nueva agrupación con las mismas características, dinámica que se traduce en la fragmentación socio-política y territorial de este pueblo (Cariage 1979). En términos prácticos esto quiere decir que cuando las hijas de un hombre que vive con su suegro se casan, este nuevo conjunto, en cabeza del yerno, se separa configurando un nuevo grupo local en otro territorio. Esta práctica delimita otra forma de migración al interior de la sociedad yukpa, está vez orientada por las normas de residencia de la organización social yukpa. La nueva agrupación o grupo local, según Cariage (1979), no guarda ninguna relación de identificación o de vínculo con el grupo local originario del cual se desprendió. Sin embargo, a un nivel de relaciones más discreto, ya no entre grupo sino entre personas, de acuerdo con algunas de las personas que entrevistamos, las obligaciones del yerno con el suegro se mantienen incluso después de la división del grupo, ya no bajo la forma de trabajo sino a través de "regalos" o dones. De hecho, al preguntarle a algunos hombres por cuánto tiempo debían trabajarle al suegro, ellos contestaban riendo -: "*cien años*". En conclusión, podríamos decir que en la economía yukpa el acceso a los recursos para la subsistencia está orientado, principalmente, por las relaciones de afinidad (suegro-yerno).

Desde un punto vista tradicional, las formas de subsistencia que recaen en el grupo local se soportan en una economía mixta, que combina actividades de agricultura itinerante, caza, pesca y recolección de frutos silvestres e insectos (Ruddle y Wilbert, 1963). Como se mencionó, la realización de estas actividades involucra diversas formas de movilidad que los caracteriza como un pueblo semi-nomada, como ellos mismos lo declaran (Epünmatpo, 2014). En este tipo de desplazamiento vinculado con las formas de subsistencia, además del desarrollo de un tipo de agricultura rotativa, se subraya la práctica de la caza, pesca y recolección, la cual hasta hace poco impulsaba migraciones estacionales, que imponían un cambio temporal de residencia, y la construcción de un lugar de una vivienda transitoria para su realización, durante ciertos periodos del año que se armonizaban con las prácticas agrícolas:

> "La frecuencia de la cacería varía mucho, dependiendo de las exigencias cíclicas de las actividades del cultivo. La cacería cerca de los asentamientos la llevan a cabo durante todo el año, especialmente en la noche. Las expediciones de varios días de duración se realizan especialmente en febrero y marzo y entre junio y agosto. Bañeres (1950:20-21) anotó que durante el verano y los veranillos los cazadores trataban de almacenar suficiente caza y pesca para que le durase el resto del año" (Ruddle y Wilbert, 1963: 68)"

Actualmente, estas actividades se siguen realizando, aunque con grandes restricciones. Así los miembros de los asentamientos yukpa se desplazan varios días para obtener recursos pesqueros en las partes bajas de los ríos. En el caso de los asentamientos cercanos a Iroka, por ejemplo, algunos lugares de pesca se sitúan en las partes bajas de afluentes al río Cesar como los ríos Fernambuco, Sicarare, Casacara en los sitios colindantes a la vía pavimentada que conduce a la ciudad de Riohacha. Por su parte, las actividades de caza y recolección son practicadas en sitios más cercanos a los asentamientos. Es evidente que los ritmos y los tiempos para la realización de estas actividades de subsistencia tradicional se han limitado notablemente por la aparición en el siglo XX de predios privados cuyos propietarios no autorizan su práctica. En este sentido, existe una contradicción entre los usos y formas de propiedad territorial de la sociedad nacional y las formas de subsistencia tradicionales de los yukpas, que ha tenido grandes incidencias en la práctica del semi-nomadismo:

> "Visto en perspectivas, en casi un siglo los yukpas pasaron de ser comunidades semi-nomadas a productores agrícolas y muchos fueron subordinados a procesos de salarización, descomponiendo el trabajo y el uso colectivo de la tierra.
>
> Además, para todas las comunidades yukpas, la relación con el territorio se ha venido transformando, no solo por habitar ahora en las zonas montañas, sino porque el campesinado instala una racionalidad donde prima la propiedad privada sobre la tierra y consigo aparece el tendido de alambrados y cercas para subdividir terrenos de los colonos" (Epünmatpo, 2014: 67)

Estas transformaciones territoriales han afectado no sólo las actividades de pesca, caza y recolección, sino también la práctica de la agricultura itinerante, pues la presión por la tierra

que ha impulsado el proceso de colonización, junto al crecimiento demográfico de la población yukpa y por ende la aparición de nuevos grupos locales, ha limitado el acceso a tierras suficientes para su correcta práctica. A saber, que esta forma de agricultura incipiente propone un uso rotativo de la tierra (1 a 3 años) que impone periodos de descanso para su regeneración (ciclos de barbecho); de esta manera la imposibilidad de rotar los cultivos se traduce en una sobreexplotación de la tierra y el desplazamiento hacia "nichos ecológicos desconocidos" que restringen el rendimiento productivo que ofrecían sus técnicas tradicionales de cultivo (Jaramillo, 1993: 217)[13].

La falta de tierras para la correcta práctica de la agricultura itinerante, así como la carencia de espacios para la caza, la pesca y la recolección ocasionados por los cambios en las formas de posesión de la tierra, pero también por las variaciones ambientales introducidas por los colonos son factores que en las últimas décadas han debilitado la seguridad alimentaria de este pueblo (Ruddle y Wilbert, 1963, Jaramillo, 1993). En algunos casos, dicha dificultad para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia ha dado origen a situaciones "anómalas" como el robo de cosechas a miembros del mismo grupo o a los campesinos, así como las migraciones estacionarias o definitivas en núcleos urbanos circunvecinos y lejanos de su hábitat tradicional, lugares en donde los yukpas sobreviven ya sea a través de la mendicidad o desarrollando actividades precarias como la venta de carbón vegetal que ellos mismos producen. Estas situaciones, aunque confirman las condiciones dramáticas ocasionadas por los cambios del dominio territorial entre algunos de los miembros de la sociedad yukpa, pueden también ser leídas como una de las tantas estrategias adaptativas que sus miembros han desarrollado ante la degradación del contexto socio-económico tradicional. En efecto, la influencia de la sociedad nacional ha orientado distintos cambios en las formas tradicionales de explotación de los recursos que es imposible hablar de un solo modelo económico para dicho pueblo (Cariage, 1979):

[13] Es importante señalar que los asentamientos yukpas también dejan al interior de sus territorios extensiones de tierra libres para la conservación de especies animales y vegetales.

> "Actualmente, encontramos indígenas en situaciones que van de la abundancia de tierras que practican la roza, la caza, la recolección, etc....hasta la ausencia total de tierras. En estos casos la sobrevivencia es asegurada gracias a la fuerza de trabajo. Entre estos dos extremos, las posibilidades y variantes son numerosas, grupos cultivan en tierras exiguas, café y plantas destinadas a la venta, otros al margen de los precedentes continúan a practicar la quema, que forzosamente se ha degenerado" (173)[14].

Desde esta perspectiva, las transformaciones del modelo tradicional de subsistencia, entre los miembros de la sociedad yukpa es un problema complejo y sería necesario realizar investigaciones detalladas para comprender mucho mejor las distintas estrategias de sobrevivencia económica que sus miembros han configurado al interior de un territorio fragmentado por el proceso de titulación de resguardo y el avance de la colonización.

3. Dispersión y aislamiento

Además de las prácticas de movilidad que promueven la economía tradicional, los yukpas desarrollan otro tipo de migraciones ocasionadas por eventos de orden sobre natural y político. En el primer caso podemos señalar incidentes como la muerte de un miembro de la familia, la cual obliga al abandono de los sitios de habitación, la destrucción de la casa del difunto, y la práctica del segundo entierro (Dolmatoff, 1945) (Ruddle y Wilbert, 1963), estrategias de protección frente los "malos espíritus" (Largo, 2018)[15]. En segundo caso, están relacionados con aquellos eventos causados por la forma tradicional de relacionamiento político de este pueblo fundado en la guerra y la hostilidad entre los grupos locales. En efecto, como lo señalan los distintos trabajos etnográficos, entre los yukpas, el conflicto, la guerra y la vendetta, como entre muchas sociedades indígenas, son un motor

[14] Traducción libre

[15] De acuerdo con Cariage (1979) cuando alguien muere se convierte en un "espíritu de los muertos" o "doble" (*okatí*), este espíritu permanece en el plano físico hasta que del cadáver solo queda en huesos, momento en que debe ser realizado el segundo entierro. La ceremonia del segundo entierro tiene como fin permitir su paso a "la casa de los okatis" que se encuentra en un mundo inverso. (Cariage, 1979:93). Según, Ruddle y Wilbert para los yukpas, estos espíritus malignos residen en los troncos de los árboles próximos a los osarios, principalmente localizados en cuevas, o en sitios cercanos a los caminos que conducen a ellos. Estos sitios son el objeto de prohibiciones para sus miembros, pues allí no se pueden talar árboles ni realizar actividades de siembra (1963: 103).

de construcción social: "El indio motilón es guerrero no solamente por odio, envidia o puro gusto sino porque para él la guerra es una necesidad fundamental" (Dolmatoff, 1945: 62). Para algunos autores, gran parte de la dispersión territorial que caracterizó a las tribus yukpas se explica por esta práctica, la cual se encuentra igualmente relacionada con la configuración y la morfología social de los grupos locales (Cariage, 1979).

Por paradójico que pueda parecer esta forma tradicional de "hacer política" aún opera al interior de la sociedad yukpa. De acuerdo con sus miembros sus causas pueden ser variadas: la envidia, el robo de las cosechas, los insultos o la competición por mujeres. Las tres comunidades visitadas durante nuestro recorrido son un ejemplo de estas migraciones, pues fueron promovidas hace pocos años como consecuencia de los conflictos intra-étnicos entre grupos locales próximos. En este momento es pertinente traer a colación la diferenciación hecha por Cariage (1979) entre guerra y vendetta, ya que la guerra se realiza entre miembros del mismo pueblo que viven en regiones diferentes y no tienen ninguna relación, mientras que la vendetta puede entenderse como una forma de conflicto interno entre parientes o grupos cercanos. Estas dos formas de agresividad delinean dos tipos de percepción del conflicto al interior de la sociedad yukpa, como lo explica Cariage: "Un hombre que mató numerosos enemigos en encuentros guerreros será respectado y temido, y sus muertos no creará ningún adversario en la región. Si los muertos son de su entorno, el será temido, pero no respectado, muy seguramente el tendrá muchos enemigos potenciales entre las personas cercanas..." (1979:93). La venganza que sigue al asesinato de otro miembro yukpa, por parte de sus parientes, es el mayor aliciente para abandonar los sitios de habitación. En el caso de las comunidades visitadas, estas migraciones forzadas fueron realizadas por los miembros de familias extensas *uxorolocales* (un hombre, su esposa, sus hijos, sus hijas y sus esposos), es decir los *germanos* (los hijos hombres y mujeres de una pareja) quienes están unidos entre ellos por un vínculo de alianza de guerra con su padre (Cariage, 1979). Estas familias extensas conformaron nuevos grupos locales, dos de ellos en contextos urbanos, lejos de la Serranía del Perijá; en estos nuevos espacios dichos

grupos se reconfiguran de manera tradicional compartiendo un mismo lugar de residencia, y velando por la supervivencia económica de todos sus miembros[16].Los conflictos intra-étnicos son una dinámica importante al interior de la sociedad yukpa, entre las personas entrevistadas, por ejemplo, algunas señalaron que sus familias cambiaron hasta seis veces de lugar de residencia por su aparición en distintos momentos. Si bien esta actividad constituye un elemento importante en el *ethos* de este pueblo, hoy en día su práctica da lugar a situaciones disfuncionales, como la expulsión de sus miembros lejos de su hábitat tradicional, en lugares desconocidos, en donde es imposible reproducir las prácticas económicas tradicionales, como los núcleos urbanos de los departamentos del Cesar, e incluso otros cercanos. En parte, estos nuevos desplazamientos pueden ser leídos como un relato colateral de la presión territorial que ha causado la colonización, y que en la actualidad no ha dejado ningún espacio de refugio para estos grupos cuya dinámica ha orientado una organización social en donde priman el aislamiento y la fragmentación de sus unidades sociales y políticas.

***

A lo largo de estas páginas hemos observado cómo la sociedad yukpa conserva una serie de estrategias de movimiento espacial en su territorio, relacionadas con sus formas tradicionales de organización económica y socio-política. Con el ánimo de diferenciarlas, pues a pesar de estar integradas en el ámbito cultural responden a distintas motivaciones, hemos clasificado dichas estrategias bajo las categorías de semi-nomadismo, migración y dispersión. De la misma manera, hemos observado cómo los miembros de este pueblo se han visto obligados a moverse, ya no por factores culturales internos sino por las transformaciones históricas de su contexto social.

[16] Es necesario señalar que las normas de matrimonio yukpa permiten la supervivencia socio-cultural y biológica de estos grupos fuera de su habitad tradicional, pues los yukpas son endogámicos y tiene como norma de preferencia de alianza matrimonial, la unión entre primos cruzados, es decir, entre los hijos de hermanos de sexo diferentes. Así, en dos de las comunidades visitadas, los matrimonios eran realizados entre primo cruzados del mismo grupo local.

Si se toma en cuenta la pregunta que originó este concepto, podemos concluir entonces que, desde un punto de vista técnico, los yukpas practican distintas formas de movimiento espacial en su territorio, orientadas por el carácter fragmentario y la autonomía de sus unidades socio-políticas, así como por sus formas económicas de subsistencia. Es en función de este último aspecto que podemos definir a la sociedad yukpa como una sociedad semi-nómada, pues dichas prácticas económicas combinan movimientos cíclicos y estacionarios, con periodos largos de sedentarización.

Para terminar, debemos subrayar que las prácticas de movilidad de los pueblos nómadas o semi-nómadas responden a una organización social y territorial interna coherente, y por lo tanto no son realizadas al azar. En el caso de este concepto los datos recolectados sobre la sociedad yukpa no permiten detallar algunos de estos aspectos como, por ejemplo, los recorridos tradicionales que son realizados por sus miembros para el desarrollo de estas actividades, y establecer cómo en la actualidad dichos desplazamientos se organizan en función del uso y apropiación territorial de unidades sociales tales como las sub-tribus o grupos locales; los cuales se han visto obligados, por las transformaciones del contexto social, a cambiar lentamente sus lugares y patrones de residencia, y en última instancia, su relación con el hábitat tradicional. En este sentido sería pertinente profundizar con el pueblo yukpa y más precisamente con sus autoridades tradicionales, los *yuwatpu*, los puntos señalados, para alcanzar una compresión integral de la práctica del semi-nomadismo al interior de este pueblo.

Bibliografía Citada

Archivo General de Indias (Sevilla- AGI), Fondo: Santafé.

Archivo General de la Nacion de Colombia (AGNC), Fondos : Poblaciones varias y Encomiendas.

Becerra Cabrera, Gabriel (1999), " Gentes con cerbatana, canasto y canoa", Nómadas, p.145-155.

Bourgeot, André (2008), *La notion de nomadisme : Le différents types de nomadisme*, Paris, FMSH, traducción libre, conferencia disponible en línea en el sitio web : https://www.canal-.tv/video/fmsh/la_notion_de_nomadisme_les_differents_types_de_nomadisme.30787

Cariage Pierre (1979). *Contribution à l'étude des Yuko: un groupe indigène du nord-est de la Colombie.* Paris : EHESS.

D' Hont, Olivier (2005), *Techniques et savoirs de communautés rurales,*Paris, Karthala.

Franki , Carlos Eduardo, Cabrera Becerra ,Gabriel y Mahecha Rubio, Dany.(1995) *Demografía y movilidad socio-espacial de los Nukak*, Bogotá: Fundación Gaia Amazonas.

Jaramillo Gómez, Orlando (1993) "Los yuko-yukpa", *Geografía Humana de Colombia,* t. 2, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, p: 204-236.

Khanazov Anatoly (1994)*Nomads and the outside wold*, trad. Julia Crookenden, 2a ed.; Madiscon: University of Wisconsin Press, 1994.

Krader, Lawrence (1959) , « Ecologie du nomadisme pastoral » *Revue internationale de Sciences Sociales* (XI-4), p.519-531.

Ivanoff, Jacques (1994), "Comme le moken prirent la mere",*Le courrier de l'Unesco,* p. 14-15.

Largo Sichaca Wilson (2018), *Los yukpas una cultura del movimiento a la restricción territorial,* Bogotá: FDPM, p: 1-14.

Le Grand Jacques (2007), Migration ou nomadisme, 7 (218) *Diogéne,*p.126-123.

(2016) *El Saber Espiritual en sentido étnico - Perspectiva desde el pueblo yukpa en Colombia*, Bogotá, Universidad Santo Tomás, Facultad de Educación.

ONIC (2014) Epünmatpo: Plan de Salvaguardia yukpa, disponible en línea en la pagina web: https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_yukpa_-_diagnostico_comunitario.pdf

Quiroga Zuluaga, Marcela (2009) *La domination coloniale au pluriel : Le pouvoir colonial et la conquête des peuples Muiscas, Paeces et Chimilas dans la Nouvelle Grenade,* tesis doctoral sostenida en la EHESS, París.

Reichel Dolamtoff, Gerardo (1951), *Datos histórico culturales sobre las tribus de la antigua gobernación de Santa Marta*, Bogotá: Imprenta del Banco de la Republica.

(1960) "Contribuciones al conocimiento de las tribus de la región del Perijá", Revista *Colombiana de Antropología,* 9, ICAN, p 161-193.

(1945) "Los indios motilones. Etnografía y lingüística". *Revista del Instituto* Etnológico Nacional, vol. II, Entrega 1ª, Bogotá, p. 15-115.

Retaille, Denis (1998), "Concepts du nomadisme et nomadisme des concepts, *Géocarrefour,* 73-1, p.71 – 82.

Ruddle, Keneth y Johannes Wilbert (1983): "Los Yukpa"; *Los Aborígenes de Venezuela.* Vol. II. Caracas: Fundación La Salle / Monte Avila Editores, p. 32-124

Sletto, Bjørn (2013) Cartographies of remembrance and becoming in the Sierra de Perijá, Venezuela, *Transactions of the Institute of British Geographers* 39(3), p. 360-372

Williams Patrick (1994) " Odyssée européenne de Tsiganes », *Le courrier de l'Unesco,* p.21-24

Instituto Colombiano de Antropología e Historia
ICANH

La cultura es de todos
Mincultura

ICANH 105 4962

Bogotá, 10 SEP 2019

Doctor
MANUEL EDUARDO ALJURE SALAME
Director de Asuntos, Indígenas, Rom y Minorías (E)
Ministerio del Interior
Calle 12 B No. 8 – 42
manuel.aljure@mininterior.gov.co
Bogotá

Asunto: Adaración al concepto para la definición de la condición de nómada y semi-nómada del pueblo yukpa. Competencias misionales del ICANH.

Respetado Director,

Agradezco la solicitud presentada ante el ICANH referida a la condición nómada o semi-nómada del pueblo yukpa, para lo cual preciso que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura que tiene por objeto el fomento, la realización, la publicación y divulgación de investigaciones antropológicas, arqueológicas, históricas y sobre el patrimonio cultural de la Nación. Como bien señala en su comunicación, conforme al artículo 4 del Decreto 2667 de 1999, las funciones del Instituto Colombiano de Antropología e Historia son las siguientes:

1."Establecer los criterios científicos y técnicos y planificar el desarrollo de la investigación en los campos de la antropología social, arqueología, bioantropología, lingüística aborigen, historia colonial, etnohistoria y patrimonio arqueológico y etnográfico colombiano.
2.Difundir y publicar los resultados de sus investigaciones.
3.Fomentar, asesorar y apoyar las investigaciones en las áreas afines al Instituto que efectúen instituciones e investigadores nacionales y extranjeros.
4.Prestar asesoría científica a los organismos de carácter público o privado en el diseño y ejecución de estudios de impacto cultural, arqueológico y antropológico.
5.Promover, desarrollar y divulgar la investigación científica sobre los trabajos realizados por la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada.
6.Emitir concepto acerca de los bienes que deban ser considerados como patrimonio arqueológico y antropológico de la Nación.
7.Adelantar los procesos técnicos de las bibliotecas Cervantes y de Antropología y prestar el servicio al público en los temas de su especialidad.
8.Mantener actualizado el registro del patrimonio arqueológico y etnográfico Nacional, desarrollando y aplicando metodologías y programas actualizados.
9.Velar por la conservación y el mantenimiento de los parques arqueológicos cuya custodia le sea encargada, como espacios depositarios de bienes de interés cultural.
10. Promover mecanismos de integración y apoyo a las universidades nacionales e internacionales que trabajen en áreas del ámbito de su competencia.
11. Efectuar declaratorias de áreas de potencial arqueológico en el territorio nacional.
12. Evaluar y divulgar el estado de la investigación antropológica, arqueológica y etnohistórica, auspiciando la discusión académica sobre el particular, en un ámbito interdisciplinario.
13. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con su naturaleza."

Calle 12 N° 2-41 Bogotá D.C., Colombia. Conmutador: (57-1) 4440544 – Fax: 4440530
contactenos@icanh.gov.co/ www.icanh.gov.co

En tal sentido, en lo que respecta al concepto presentado ante su entidad el 26 de agosto de 2019, bajo el número de radicado No. CE 4446, aclaramos que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia de acuerdo a sus competencias misionales no emite actos administrativos para determinar características culturales específicas de poblaciones o sociedades sino que elabora conceptos, resultado de procesos investigativos, con el objetivo de orientar la implementación de políticas públicas a nivel nacional, para las entidades y organismos con injerencia en la materia. Por ende, en cuanto al requerimiento de elaborar un acto administrativo que determine la condición nómada o semi-nómada del pueblo Yukpa, el ICANH no posee las competencias para emitirlo.

Agradecemos haber tomado en cuenta nuestra participación en la reiterada solicitud que ha realizado el pueblo Yukpa y en espera de contribuir con los procesos a su cargo.

Atentamente,

MARTA SAADE GRANADOS
Directora General (E)

Elaboró: Subdirección Científica
Revisó: Subdirección Científica
VoBo. Oficina Jurídica

Calle 12 N° 2-41 Bogotá D.C., Colombia. Conmutador: (57-1) 4440544 – Fax: 4440530
contactenos@icanh.gov.co/ www.icanh.gov.co

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA

CONCEPTO SOBRE NOMADISMO Y MOVILIDAD EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS HISTÓRICOS, TERRITORIALES Y CULTURALES DEL PUEBLO YUKPA

Antropólogas investigadoras:

Claudia Cano Correa
María Clara van der Hammen Malo
Claudia Patricia Platarrueda Vanegas
Carolina Portela García
Diana Lucía Torres Ariza

Bogotá, D.C., 8 de agosto de 2019

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

1. INTRODUCCIÓN

Este concepto, elaborado por un equipo de investigadoras del Programa de Antropología de la Universidad Externado de Colombia, se produce para dar respuesta a una solicitud expresa de las autoridades de los Cabildos Gobernadores de los seis resguardos del pueblo Yukpa, dirigida a las directivas del Programa de Antropología de la Universidad Externado de Colombia el 27 de junio de 2019, en la que se solicita "expedir un concepto académico sobre la condición del pueblo Yukpa, de nómada, seminómada y agricultores itinerantes" (ver Anexo 1). En correspondencia, el concepto tiene el objeto de contribuir, a partir de la información de fuentes primarias y secundarias disponibles, a las discusiones de la mesa técnica que se llevan a cabo entre este pueblo indígena y el Gobierno nacional, en el marco del proceso de consulta previa ordenado por la Sentencia 713 del 7 de diciembre de 2017 de la honorable Corte Constitucional colombiana.

Los Yukpa son un pueblo indígena de la familia lingüística Caribe; su territorio en Colombia abarca la vertiente oriental "de la Sierra de Perijá, la Serranía de Valledupar y la Serranía de los Motilones, territorio que forma parte de la frontera colombo-venezolana" (Suárez, 2017). Es decir, son un pueblo binacional, conformado aproximadamente por 15.000 personas; de ellas, 5.000 habitan en Colombia y 10.000 en Venezuela (Halbmayer & Goletz, 2019). En Colombia, este pueblo es también conocido con el nombre de Yuko (Yuco), mientras que en Venezuela se les reconoce como Yukpa o Yupa, etnónimos que han sido asociados con los calificativos de "indios salvajes", "indios de monte" o "indios mansos" (Reichel-Dolmatoff, 1960).

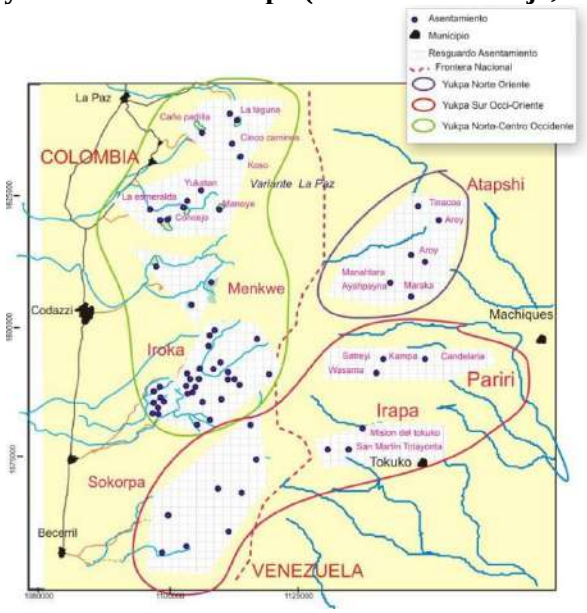
De acuerdo con la información más reciente, ellos se encuentran distribuidos en Colombia en 55 asentamientos, concentrados en seis resguardos legalmente constituidos hasta hoy, tres de ellos ubicados en el municipio de La Paz (Caño Padilla, El Koso y El Rosario), dos en el municipio de Agustín Codazzi (Iroka y Menkwe) y uno en el municipio de Becerril (Sokorpa). En Venezuela, se asientan principalmente en el Estado del Zulia, habitando un territorio que va desde la parte oriental de la Serranía del Perijá en límite con Colombia (específicamente Rosario y Machiques de Perijá) hasta el lago de Maracaibo, donde se encuentran siete subgrupos, a saber: Irapa, Macoíta, Parirí, Shaparu, Viakshi, Wasama y los Rionegrinos (Suárez, 2017, p. 39) (véase Mapa 1).

Las autoridades del pueblo Yukpa han manifestado ante diversas instancias su auto-reconocimiento como pueblo nómada, seminómada y de agricultura itinerante, condición que sustentan a través de su historia de poblamiento, sus leyes de origen, los usos del territorio, sus prácticas rituales y su organización social. Dicho auto-reconocimiento ha sido formalizado a través de Escritura pública No. 0307 del 2 de agosto de 2019. El ejercicio de esa condición de pueblo nómada, seminómada y de agricultura itinerante tiene para ellos una premisa fundamental: la posibilidad de acceso y uso a lo que ellos consideran su territorio ancestral, el que hoy, por múltiples razones históricas de las que hablaremos más adelante, se ha transformado y limitado significativamente. Tales limitaciones han causado fuertes impactos en su cultura y han generado un movimiento de resistencia que los ha hecho reorganizarse hacia un proceso de autodeterminación y de recuperación del territorio, para lo

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

que el reconocimiento de su condición de pueblo nómada, seminómada y de agricultura itinerante es fundamental.

Mapa 1. Resguardos y asentamientos Yukpa (Serranía del Perijá, Colombia y Venezuela)



Fuente: (Duarte, 2015, p. 67).

En consecuencia, en este concepto elaboramos algunos referentes antropológicos pertinentes para pensar las problemáticas que afronta el pueblo Yukpa, abordamos los procesos históricos relacionados con las transformaciones territoriales correspondientes y argumentamos que las prácticas territoriales relacionadas con la alimentación, la ritualidad y la organización social muestran que la movilidad en el territorio es fundamental para la supervivencia del pueblo y que esas formas de movilidad se encuentran obstaculizadas por procesos históricos relacionados con el despojo del territorio, procesos que continúan siendo muy preocupantes en la actualidad. De este modo, el presente concepto termina por ser congruente con otros conceptos ya emitidos por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (2018), la Defensoría del Pueblo (2019), el Ministerio del Interior (2018) y el Departamento de Antropología Cultural y Social de la Philipps-Universität Marburg, Alemania (2019).

Nomadismo, semi-nomadismo y agricultura itinerante

Para iniciar, es importante indicar el modo como se han utilizado los conceptos de nómada, semi-nómada y agricultura itinerante al hacer referencia a diferentes modos y grados de movilidad espacial entre los grupos humanos. En su trayectoria, la antropología más clásica ha reconocido cuatro tipos económicos o estrategias adaptativas de sociedades no industriales: forrajeros, horticultores, agricultores y pastores. En la actualidad existen pueblos que se pueden asociar a estos tipos económicos, que implican distintas formas de

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

asentamiento y movilidades particulares, aunque están siendo rápidamente articuladas, incorporadas o desvanecidas como parte de sistemas económicos mayores.

Los grupos forrajeros también se conocen como cazadores y recolectores. En la historia de la humanidad, hasta hace 10.000, todos los seres humanos seguían esta estrategia adaptativa que se expresaba de manera distinta de acuerdo con el contexto. En algunos casos, se trataba de pueblos que cazaban unas pocas grandes especies; otros, ubicados en zonas tropicales, recolectaban, cazaban y pescaban una variedad mucho mayor de especies. La domesticación de animales (inicialmente ovejas y cabras) y de plantas (inicialmente trigo y cebada) tuvo lugar entre 10.000 y 12.000 años atrás, en el medio oriente. Otras plantas como el maíz, la yuca y la papa fueron domesticadas en distintos lugares casi simultáneamente, hace 3.000 a 4.000 años. Esta nueva economía se divulgó rápidamente por el mundo y la mayoría de pueblos adoptaron la producción de alimento.

Hoy en día, los forrajeros o cazadores recolectores y los pastores que existen tienen algún tipo de dependencia de la producción agrícola de alimentos. Sin embargo, la caza, la pesca y la recolección exclusivas han sobrevivido en algunos medios y lugares, selvas, bosques, islas, desiertos y áreas muy frías, lugares donde el cultivo no es fácil con una tecnología sencilla. Los grupos de hoy que siguen esta estrategia adaptativa pueden tener acceso fácil a las formas de producción de alimento, hacen parte de Estados-Nación y, en la mayoría de los casos, interactúan con el Estado y con grupos que siguen otras estrategias adaptativas como la agricultura. Han elegido continuar con su forma de subsistencia, en ocasiones adoptando algunas tecnologías modernas; en otros casos, buscando un aislamiento voluntario, para así evitar contactos con enfermedades y otras problemáticas que les son amenazantes.

Estudios muy clásicos como el de Richard Lee and Irven Devore (1968) muestran que la cacería y la recolección son formas de subsistencia exitosas para suplir las necesidades de los grupos. Es el caso de los ¡Kung Bushmen de Botswana, que se alimentan de una gran variedad de especies recolectadas, pescadas y cazadas sin mayor esfuerzo, pudiendo alimentar a toda la población sin que los menores y los adultos mayores deban participar en esas actividades. Existen algunos correlatos asociados a esta estrategia adaptativa; sin embargo, es claro que no son deterministas; es decir, algunas características se encuentran en sociedades no forrajeras y algunas sociedades forrajeras no responden a estos correlatos. Por lo general, la mayoría de estas sociedades se organizan en bandas, es decir, grupos pequeños de menos de 100 personas, relacionados por lazos de parentesco y matrimonio. El tamaño de las bandas varía no solo de un grupo a otro, sino que también puede variar según la época o estación del año. En ocasiones, es más sencillo suplir los alimentos en grupos pequeños; en otros momentos se pueden reunir para trabajos cooperativos y ceremonias colectivos.

La investigación antropológica ha elaborado varias categorías para hablar acerca de los pueblos móviles, que abarcan desde comunidades de cazadores-recolectores totalmente nómadas hasta comunidades semi-nómadas que practican formas de pastoreo y de agricultura itinerante. Los pueblos semi-nómadas son aquellos que se mueven estacionalmente en busca de ciertos recursos, aunque mantienen un lugar de asentamiento durante buena parte del año. La agricultura itinerante, basada en la técnica de tala y quema, implica que las parcelas que

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
facesh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

se abren para fines agrícolas solo se usan durante pocos años, para luego abrir un nuevo lugar y dejar que la vegetación vuelva a crecer en las parcelas abandonadas. Esta forma de agricultura está asociada a una permanencia de 15 a 30 años en un lugar fijo hasta cuando se considera que todo el asentamiento requiere un periodo de recuperación, por lo que el grupo se traslada a un nuevo lugar.

Estos pueblos han llamado siempre la atención de la antropología. Uno de los grandes debates sobre los pueblos nómadas se conoce como el "Kalahari Debate" que lleva ya varias décadas y en la que se confrontan dos perspectivas: una perspectiva tradicionalista que señala que, a pesar que los pueblos de Kalahari Central en África se enfrentan a muchas presiones y se encuentran en contacto con otros pueblos y sociedades, mantienen su modo de vida en gran medida; la perspectiva revisionista enfatiza que estos pueblos, dada su larga interacción con otros pueblos, solo se pueden entender como parte de un sistema mucho más grande de capitalismo mercantil, en el que ellos forman una clase o clase inferior en un sistema de clases sociales. Este debate ya no es tan álgido, pues si bien estos pueblos mantienen muchas prácticas de movilidad es claro que han ido cambiando profundamente y se encuentran integrados al sistema capitalista más amplio.

Aquí, retomamos una de las compilaciones reseñadas, *Marking the Land: Hunter-Gatherer Creation* de Lovis y Whallon (2016), que aborda el uso de la tierra de los cazadores-recolectores, la asignación de significado a los paisajes, la orientación, la territorialidad, el marcado de límites y redes sociales y que retoman en parte el debate que ha existido en la antropología sobre si estos pueblos reconocen conceptos de propiedad y límites en su territorialidad; los ejemplos muestran en todos los casos descritos que los cazadores-recolectores tienen mapas conceptuales de sus tierras y tienen conceptos sofisticados de tenencia de la tierra, reconocen territorios y fronteras, tanto con marcaciones físicas como a través de la toponimia. En general, la revisión presentada por Hitchcock (2019) muestra que estos pueblos son muy conscientes de los retos económicos, ambientales y políticos que ellos están enfrentando y están tratando de abordar estos desafíos junto con organizaciones de apoyo e investigadores en una intentar garantizar su seguridad y bienestar a largo plazo.

Los conceptos de nómada, seminómada y de agricultura itinerante fueron objeto de mucha discusión y debate en la antropología en general. Ahora, estas distinciones han perdido su centralidad en las discusiones antropológicas sobre modos de vida y formas de adaptación, pues todos los pueblos que tienen estas formas de movilidad no se pueden definir exclusivamente en función de estos rasgos, ya que han sido profundamente permeados por el sistema económico global, han estado bajo presión en sus territorios. Por esta razón, en este concepto hablaremos de formas de movilidad que están vinculadas con los modos de vida de los Yukpa, en una perspectiva de su persistencia, pervivencia y transformación sociocultural como pueblo.

2. CONTEXTO HISTÓRICO Y ETNOLOGÍA DEL PUEBLO YUKPA

Para una mejor comprensión de las formas de movilidad del pueblo Yukpa es necesario esbozar brevemente el proceso histórico y territorial que explica su presencia y

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

permanencia en la Serranía del Perijá, así como puntualizar algunos aspectos que son fundamentales para entender las condiciones actuales de vida y las problemáticas que enfrentan. En este sentido, nos permitimos ese breve esbozo a continuación.

Dispersión caribe y diversificación lingüística del pueblo Yukpa

Es necesario siempre considerar la profundidad histórica de los pueblos para dimensionar la envergadura de sus procesos de configuración y valorar la importancia de su presencia y de su persistencia en los territorios. En relación con eso, los autores se han ocupado de elaborar modelos explicativos para comprender la complejidad de esos procesos con base en investigaciones arqueológicas, etnohistóricas, lingüísticas, biogenéticas, entre otras aproximaciones. Es así como existe hoy un relativo consenso en considerar que la historia del pueblo Yukpa está vinculada con un proceso de dispersión de pueblos pertenecientes a diversos *filum* lingüísticos (arawak, tukano, caribe, entre varios otros) en un área geográfica muy amplia, en la que los diversos grupos confluyeron con interacciones socioculturales dinámicas y variadas que tienen muchos siglos. Aunque el devenir de los grupos de filiación arawak es quizá el más estudiado hasta el momento, en general se ha dado la evidencia suficiente para conjeturar que existió un núcleo de dispersión poblacional y de variación lingüística de los múltiples pueblos amazónicos a partir del Alto río Negro – Alto y Medio Orinoco, a través de las redes fluviales del Orinoco hasta arribar y poblar a las Antillas, la Costa Caribe, el piedemonte llanero, yendo incluso más allá del valle interandino del Magdalena hacia el interior del país (véase Oliver, 1989 y 1990).

Las investigaciones acerca de la expansión amazónica han mostrado la existencia de una simbiosis, común a toda esa macro-región, entre pueblos de agricultura itinerante más o menos sedentarios y habitantes de las zonas ribereñas y aquellos pueblos más móviles, que basaron su subsistencia en la caza, la pesca y la recolección, primordialmente; tal simbiosis fue posible en el marco de un complejo multi-lingüístico de intercambio regional de productos de diversos microambientes, que abarcaba a los Llanos y a las regiones circunvecinas de los Andes, la selva, el Alto Orinoco, la costa Atlántica y las Antillas. En este panorama de diversidad, no fue inusual que grupos móviles optaran por la sedentarización o viceversa, como posibilidad para responder al cambio.

Sin embargo, con los procesos de la colonización, se alteró dramáticamente este panorama simbiótico. Víctimas de la guerra colonial, de los conflictos intertribales acrecentados por el colonialismo, de las enfermedades, del comercio de esclavos o siendo reclutados en las misiones, los agricultores ribereños desaparecieron o se transformaron significativamente, mientras que los grupos más móviles, defendidos por su nomadismo, resistieron los embates colonizadores resguardados en las cabeceras de los ríos, principalmente. Siguiendo esa perspectiva, el antropólogo Francisco Ortiz argumenta que el nomadismo no debe entenderse como una cuestión jerárquica de desarrollo social, sino como un hecho significativo de adaptación a las condiciones medioambientales y a los procesos históricos de poblamiento y de colonización (véase Ortiz, 1976, 1986 y 1997).

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

Teniendo como referente ese panorama macro-regional, desde principios del siglo XX se planteó que los Yukpa son un pueblo de filiación lingüística Caribe (véase Jahn, 1927). A partir de allí, son varias las investigaciones que han discutido las características del proceso de segmentación social y de divergencia lingüística de los que derivan los Yukpa de hoy (véase Swadesh, 1960; Durbin y Seijas, 1975; Durbin, 1977; Tarble, 1985; Acuña, 1998). En términos generales, se conoce que los pueblos de habla Caribe en América forman un gran *filum* lingüístico al que se le ha asignado una divergencia interna máxima de por lo menos 49 siglos, lo que significa que hace unos 5.000 años el Caribe era un grupo lingüístico bastante homogéneo, siendo probable que, desde entonces –hasta 1.000 años antes del presente–, haya comenzado un proceso de dispersión gradual por el Orinoco, cuyo origen se ubica bien sea en una zona adyacente al Bajo Amazonas o en la región nororiental venezolana del continente, fenómeno que dio lugar a la gran pluralidad lingüística que se observa hoy. Así, las evidencias indican que los pueblos de la familia Caribe provienen de un proceso migratorio dado en un lapso de más de 4.000 años hasta ubicarse en las vertientes oriental y occidental de la Serranía del Perijá, en la zona limítrofe entre Venezuela y Colombia, con una profundidad histórica de poblamiento en la región de por lo menos 1.000 años (Ruddle y Wilbert, 1983, pp. 44-45; véase también Acuña 1998, pp. 12-17).

Los Yukpa durante el proceso colonial y misional

Sabemos, por la crónica del español Esteban Martín (1534), "lengua e intérprete de los yndios" (Bastin, 1996) que los Yukpa estuvieron expuestos por primera vez a la violencia de los conquistadores con el arribo de la expedición particularmente devastadora del conquistador alemán Ambrosio Alfinger y de sus lugartenientes, quienes exploraron entre 1530 y 1533 las márgenes del Lago de Maracaibo, cruzaron la Sierra de Perijá y luego pasaron al sur bajando al "Valle de Upar" y realizando el trayecto de vuelta (véase Oliver, 1990). Según Ruddle y Wilbert (1983), desde ese momento y durante toda la Colonia, se estableció sobre el territorio ubicado entre el Lago de Maracaibo y el Valle del César (asiento de los Yukpa para el momento de la Conquista) un patrón de violencia cíclico que obligó a las poblaciones nativas a buscar refugio en la Serranía del Perijá, lo que a la larga dificultó el establecimiento efectivo de las encomiendas (p. 45).

Con el arribo de los capuchinos a finales del siglo XVII, se establecieron misiones sobre las tierras bajas occidentales de Maracaibo y en el Valle del río Cesar, que resultaron en el ataque y la resistencia indígena continua frente a los asentamientos misionales y civiles, así como en incursiones punitivas sobre los indios, las que contribuyeron a incrementar el nivel general de violencia. Con la Independencia y la expulsión de los capuchinos en 1818, se puso un coto momentáneo a las actividades misioneras y con ello las incursiones sobre el territorio se hicieron esporádicas y, por lo general, violentas. Como lo argumenta Ruddle y Wilbert (1983), pese a las tempranas visitas de los europeos sobre esta región estratégica de entrada a América septentrional, el territorio yukpa fue una zona hostil y desconocida hasta la segunda mitad del siglo XX y su devenir se caracterizó por continuas guerras inter e intratribales y por las luchas contra los intrusos coloniales y republicanos (pp. 46-47).

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

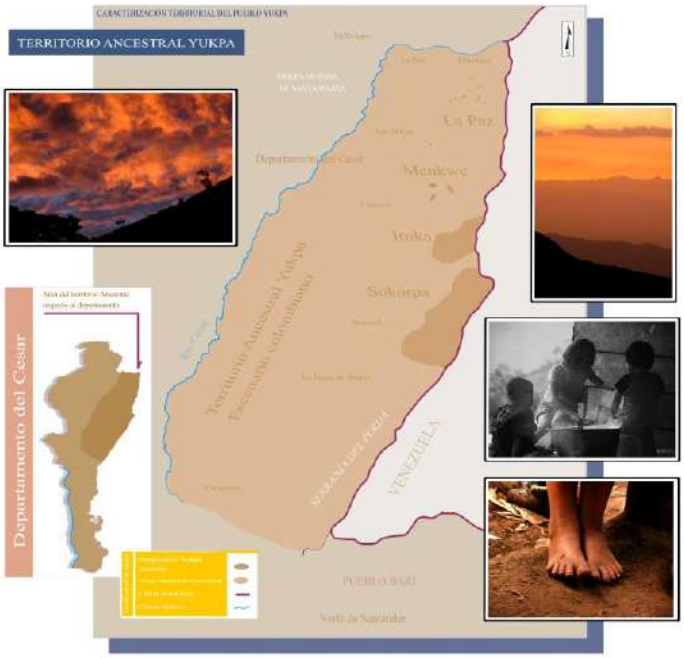
En los albores del siglo XX, se dio un avance progresivo de colonos y el establecimiento de hatos de ganado sobre el valle del río Cesar, lo que incrementó la violencia desde la primera década del siglo, pese al intento de reinstauración de la actividad capuchina en 1910, con el puesto misional del Espíritu Santo en Codazzi, que al fin y al cabo no tuvo trascendencia (Ruddle y Wilbert, 1983, pp. 46-47). Por su parte, Reichel-Dolmatoff (1960) anota que a comienzos del siglo XX (en Venezuela) y partir de 1935 (en Colombia) se intensificaron las actividades de las compañías petroleras y aumentaron también los ataques de los "indios motilones" (Barí y Yukpa) a campamentos aislados o a grupos de trabajadores, resultando heridos y muertos en ambos lados. En 1935, los Gobiernos de Colombia y Venezuela designaron comisiones para el arreglo de límites entre las dos Repúblicas y desde entonces se dieron comisiones oficiales, particulares o católicas para evangelizarlos o estudiarlos (pp. 168-170; la descripción más detallada de ese proceso se encuentra en Martin Gusinde, 1956).

Del lado venezolano, se estableció desde 1945 una misión en El Tukuko y desde 1961 una reserva indígena sobre las estribaciones de la Sierra de Perijá hasta el límite con Colombia y entre el río Tukuko y el río de Oro, lo que previno la expropiación de tierras indígenas por parte de los hacendados en esa zona e incentivo el establecimiento de los indígenas en las zonas bajas de la Sierra. Por otra parte, la información acerca de la presencia misional en el territorio yukpa del lado colombiano no ha sido estudiada en detalle, por lo que está pendiente una comprensión más profunda de ese proceso (al respecto véase Bastidas Valecillos, 2011 y Bosa, 2015).

Según las observaciones del antropólogo Gerardo Reichel-Dolmatoff, para 1960 el territorio ancestral yukpa alcanzaba hacia el sur amplias zonas del departamento del Cesar, en los municipios de Curumaní, con límite en la Quebrada de Anime Grande; por el norte, su territorio alcanzaba el municipio de La Paz hasta las márgenes del río del mismo nombre, lo que actualmente conforma los límites con el departamento de La Guajira (1960, p. 162-164). En suma, su territorio en Colombia abarcaba, para la época, desde la parte occidental de la Serranía del Perijá, bajando y ocupando el valle del río Cesar, el cual constituía una especie de límite natural dentro de su lógica territorial. En Venezuela, su territorio ancestral comprende la parte oriental de casi toda la Serranía del Perijá, sobrepasando el filo de la Serranía e internándose en territorio venezolano hasta las orillas del lago Maracaibo (véase Mapa 2).

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

Mapa 2. Territorio ancestral yukpa y ubicación de los resguardos en Colombia



Fuente: (ONIC, MinInterior y Yukpa, 2014, p.24)

Etnología general del pueblo Yukpa

Independientemente de la categoría académica utilizada (nómada, seminómada, agricultor itinerante, entre otras), la etnología indígena, en general, reconoce al pueblo Yukpa como un pueblo que se mueve, que es dinámico, que transita el territorio no solamente en búsqueda de su subsistencia física en términos de alimentación y recursos, sino de su cultura, en la medida que los movimientos realizados marcan también el cumplimiento de sus preceptos cosmológicos y espirituales (Ruddle y Wilbert, 1983; Halbmayer, 2013; Largo, 2016 y 2018, entre otros). La continua movilidad del pueblo se da entonces a partir de actividades como la caza, la pesca, la agricultura itinerante a pequeña escala, pero también debido a las muertes, los matrimonios, la guerra, los conflictos internos e interétnicos (Ruddle, 1974; Ruddle y Wilbert, 1983; Jaramillo, 1993; Halbmayer, 1998; Oliveros, 2017). En el caso de las actividades de subsistencia, es importante mencionar que estas exigen el uso amplio del territorio por el que estos circulan, tanto en las partes bajas como altas y selváticas, relacionadas con sus patrones de asentamiento.

En relación con ello, es fundamental señalar de manera antecedente el hecho de que, desde la cosmología yukpa, se encuentran en diversas narrativas del mito de origen una serie de preceptos ontológicos según los cuales los seres humanos, las plantas y los animales son semejantes: poseen las cualidades semejantes, son seres vivos, pensantes, racionales, que establecen una relación horizontal entre lo que en occidente llamaríamos lo humano y lo no humano. Siguiendo a Bastidas (2013), el mito genera entre los Yukpa una noción de territorio

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

comunal, "no como tierra comunal para usufructuarla" (p. 103), sino como un todo interdependiente cuyas relaciones configuran vínculos vitales. De esta manera, nada en el comportamiento y en las formas de subsistencia que establecen los Yukpa con su territorio es gratuito: danza, cacería, siembra y tejido son actividades mediadas por lo espiritual. Como menciona Halbmayer (2013a y 2013b), lo secular y lo espiritual no se separan, todo se relaciona. La cotidianidad está impregnada del mundo espiritual y cosmológico, mientras que lo espiritual se relaciona directamente con las labores yukpa.

Documentos clásicos y contemporáneos nos muestran que los Yukpa han sido "nómadas dentro de un mismo territorio", antes de ser obligados a un proceso acelerado de sedentarización (Largo, 2018, p. 6). La elaboración de la vivienda, que podemos tomar como experiencia ejemplificante, era realizada generalmente con materiales básicos provenientes del monte tales como troncos, palmas, hojas y otros elementos, para poder ser montadas y desmontadas fácilmente (Ruddle y Wilbert, 1983; Halbmayer, 1998; Bastidas, 2013; Largo, 2016 y 2018;). Esto se debe a diversas razones que implican la necesidad de reubicar la vivienda siempre de manera temporal. Por ejemplo, se ha señalado que la búsqueda de alimentos a través de la caza, la pesca y la recolección requieren movilidad por el territorio; así mismo, los conflictos y desavenencias entre familias o grupos generan la necesidad de alejarse del "enemigo" con el fin de garantizar la armonía social, mientras que la muerte de un pariente implica un movimiento de domicilio para evitar la contaminación que el espíritu del difunto, que allí permanece, pueda generar a su familia y a la comunidad (Largo, 2018). También se ha señalado que las enfermedades y el contacto interétnico han sido estimulantes del movimiento, en la medida que el alejamiento tiene el potencial de evitar el contagio y reducir el peligro (Ruddle y Wilbert, 1983; Jaramillo, 1993; Bautista, 2013; Largo, 2016; Oliveros, 2017).

En relación con la pesca, Largo (2018) señala que un aspecto importante de la cultura yukpa, es su relación constante con los ríos, territorio privilegiado y vital en su calendario alimentario, ya que el pescado ha proveído la proteína necesaria durante los veranos de principio y mitad de año. Como nos indica el mismo autor, "la pesca no solo es una práctica de recolección desde una perspectiva económica, esta tiene unas implicaciones rituales que son las que posibilitan el buen relacionamiento con el mundo natural y espiritual" (p. 6). A través de su práctica se recrean los principios de relación y cuidado con el territorio de una manera significativa. También, en relación con esa y las otras actividades de subsistencia, es posible ver que no se da una lógica de acumulación entre los Yukpa y, por lo tanto, se reafirma en los procesos alimentarios y productivos la premisa de "no tomar más de lo necesario" (Bautista, 2013; Largo, 2018). Sin embargo, la pesca, en particular, es una práctica que se ha visto amenazada en mayor medida debido a la apropiación privada de las riveras de los ríos y a las afectaciones directas sobre los cauces donde los Yukpa solían pescar hasta hace relativamente poco y que hoy logran visitar cada vez menos (Largo, 2018, p. 6).

En relación con las prácticas agrícolas, se observa entre los Yukpa una forma de la agricultura itinerante, en la que, cuando se tenía territorio suficiente, se daban procesos de utilización de la tierra por un espacio de varios años, para luego dejarla en barbecho, de modo que el suelo pudiera recuperarse (Ruddle y Wilbert, 1983). Esta utilización se hacía incluso en zonas de selva:

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

> "[…] los Yukpas hablan de un sistema de chagra en donde los grupos familiares se asentaban por un determinado período de tiempo, tumbaban un trozo de selva, creaban un claro dentro del entorno selvático, realizaban uno o dos ciclos de cultivo y luego se trasladaban a otro espacio selvático para repetir nuevamente el proceso" (ONIC, MinInterior y Pueblo Yukpa, 2014, p. 25).

Ese sistema de agricultura itinerante o rotativo obligaba a los Yukpa a moverse a otros territorios para iniciar de nuevo el ciclo de agricultura rotativa, configurando una dinámica de movimiento constante.

Al igual que la pesca, las prácticas asociadas a la agricultura se encuentran ritualizadas y dan cuenta de la relación entre actividades económicas, cosmología y espiritualidad. Tal y como enuncian Ruddle y Wilbert (1983), antes de efectuar la tala para establecer espacios de cultivo, los Yukpa deben realizar ceremonias propiciatorias para satisfacer a los espíritus dueños de las cosas. La quema también sería un momento ritualizado y comunal, indicando la disponibilidad del pueblo para empezar a sembrar y en señal de que las lluvias ya pueden ser enviadas (Ruddle y Wilbert, 1983, p. 104).

Los antropólogos Ernst Halbmayer y Anne Goletz (2019) señalan que existe otro tipo de movilidad estacional relacionada con la agricultura y que tiene que ver con el movimiento de las familias Yukpa en torno a la vida tradicional a lo largo del ciclo de vida anual agrícola.

> "En momentos de alta carga de trabajo, tales como la preparación y la siembra de los cultivos, muchas familias o partes de la familia se trasladan a sus campos […]. Esta práctica de migración estacional apunta a la preferencia y la tendencia continua en condiciones cambiadas a estructuras de asentamiento no centralizadas" (p. 3).

En la actualidad, estas prácticas agrícolas de subsistencia están fuertemente amenazadas por la colonización y el despojo del territorio ancestral yukpa, como presentaremos más adelante.

Los ciclos de la vida, asociados al nacimiento, al matrimonio y a la muerte, son también momentos que exigen dinámicas de movilidad al pueblo Yukpa. El ritual de nacimiento marca importantes hitos para la relación con el territorio. Al respecto, Largo (2016) ha señalado que:

> "[…] cuando el padre se entera del nacimiento de su hijo, este procede según su tradición a guardar la placenta o el ombligo. Esto tiene una condición, si es niña toman la placenta y la guardan envuelta en telas y la colocan cerca de la casa en una parte baja. Este comportamiento refiere a que las mujeres siempre deben ser personas dedicadas a su hogar, tranquilas y sujetas a los hombres. Pero si es un niño, el padre guarda de la misma manera el ombligo y lo lleva más lejos de su casa y lo coloca en la parte más alta de un árbol, con esto está indicando que su rol será lejos del asentamiento y será arriesgado, valiente de la montaña. Así, de esta manera se

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
facccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

> determina culturalmente parte de la identidad de la persona, sus vínculos vitales con el asentamiento o con la montaña, cada uno según su género" (p. 15).

En relación con el parentesco y las alianzas matrimoniales, la etnología menciona que, para este grupo, la familia nuclear es una unidad socio económica fundamental. Según Ruddle y Wilbert (1983), con la alianza, la residencia es inicialmente uroxilocal, generando algunos movimientos en los que el hombre pasa a residir en la casa o en la comunidad donde habita la mujer. Luego, uno o dos años después del matrimonio, la residencia pasa a ser neolocal, con el establecimiento de un hogar en un lugar diferente.

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH, 2018) señala que las concepciones culturales acerca de la muerte, así como los respectivos ritos funerarios del primer y segundo entierro, evidencian la importancia tanto material como simbólica de la movilidad espacial entre el pueblo Yukpa (Ruddle y Wilbert, 1983; Jaramillo, 1993; Oliveros, 2017, citados en ICANH 2018, p. 4). Según Wilson Largo (2016), el ritual de los muertos consiste en que:

> "[…] al fallecer una persona, su familia queda inmediatamente aislada, se considera que está contaminada porque el espíritu del muerto queda allí cerca de ellos, en su casa y con sus cosas […]. La ropa, su cama, su casa, sus armas, sus pertenencias deben ser quemados, nada puede quedar como excusa para que él vuelva o lo haga aferrarse a este mundo […]. Existe la creencia de que el cuerpo se renueva y esto sólo es posible mediante la destrucción del primer cuerpo. Por eso los Yukpa hoy dicen que hay que destruir todo lo que pertenecía a la persona que ha fallecido, esto permite la renovación de la persona para que habite en otro lugar" (pp. 13-14).

En la tipología de los sitios sagrados realizada por el ICANH (2018), los Yukpa identificaron a los cementerios de cada asentamiento, los *Ekane yuwechpo*, como lugares sagrados del pueblo. En el mapeo correspondiente, realizado en el marco del *Plan de Salvaguard*a (2014), se señala que luego del abandono forzoso de los territorios originales, pervivieron ciertos sitios sagrados en la memoria yukpa que son fundamentales como "marcas territoriales de la cultura y de su identidad propia. Varios de los sitios sagrados son accesibles en la actualidad, pero otros quedaron localizados en las zonas arrebatadas abruptamente" (ONIC, MinInterior y Pueblo Yukpa, 2014, p. 31). Esa situación genera rupturas en las prácticas rituales actuales, porque, aunque los cementerios son lugares sagrados que requieren cuidados y usos especiales, estos no puedan ejercerse a cabalidad porque no tienen un acceso pleno a los mismos.

A partir de esta recopilación sintética de la etnología del pueblo Yukpa, nos es posible establecer claramente la intensidad y la intimidad de la relación entre el territorio y la subsistencia, al evidenciarse el modo como estas dependen de la movilidad y del desarrollo de una serie de prácticas que garantizan la subsistencia en sus términos materiales, que conversan directamente con su concepción cosmológica. La versatilidad de formas de subsistencia a través de las cuales el pueblo Yukpa ha pervivido denota también un amplio conocimiento del territorio, al tiempo que la noción de no acumulación nos permite vislumbrar una lógica del cuidado del lugar en el que viven. A partir de este ítem, podríamos

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

concluir que, lo espiritual y lo cosmológico se relacionan directamente con el territorio y que el territorio se configura a partir de formas de movilidad que hoy persisten (Largo, 2016, p. 9), por lo que la pérdida del territorio compromete y deteriora la espiritualidad que configura su vínculo social (Surrallés y García Henao, 2004, p. 327; véase también Halbmayer, 2017), poniendo en situación de vulnerabilidad el modo de vida de este pueblo.

Infortunadamente, y como se ha ido anticipando en algunos lugares del presente concepto, el territorio yukpa se ha visto sometido históricamente a una serie de impactos asociados a procesos coloniales y de otras índoles, que ponen en peligro las posibilidades de su continuidad como pueblo hacia el futuro. Esa situación hace necesarias acciones que permitan su permanencia en el territorio en condiciones de una vida digna y de pervivencia cultural, derecho que diversos instrumentos de la legislación internacional buscan proteger y garantizar. En este sentido, nos proponemos abordar a continuación los desafíos actuales que enfrenta el pueblo Yukpa, dando cuenta del avance de la ocupación territorial producida por procesos de colonización agrícola, de monocultivo de palma o vinculados con proyectos de mega-minería y con el conflicto social y armado en la región. Posteriormente, haremos una reflexión en materia de derechos humanos y en relación con la legislación nacional e internacional en torno al tema que nos convoca.

3. TRANSFORMACIONES E IMPACTO EN EL TERRITORIO Y LA CULTURA DEL PUEBLO YUKPA

La reducción territorial del pueblo Yukpa y las transformaciones ambientales que los afectan se acentuaron durante las primeras décadas del siglo XIX, con el desarrollo de la ruralidad en la región Caribe, lo que ha implicado hasta hoy una gran presión colonizadora. Los conflictos territoriales se agudizaron especialmente en el albor del siglo, cuando se dio un proceso importante de transformación de la estructura agraria en El Cesar, articulada a la demanda de carne de mercados como el de Maracaibo y el de la zona bananera, al igual que a la inserción de Colombia en los circuitos mundiales del café (Santos, 2015). Esto produjo la consolidación de hatos ganaderos y de cultivos de plantación (algodón, caña y cacao) sobre las partes bajas (el plan), así como de fundos cafeteros campesinos sobre las partes medias de la Serranía. De igual manera, el auge de los cultivos ilícitos (la marihuana, en las décadas del 70 y 80 del siglo XX, y luego la coca y la amapola) originó una alta migración de colonos y campesinos sobre las partes medias de la Serranía del Perijá. Más recientemente, a mediados de la década de los 90, se inició la explotación minera carbonífera y el auge de los cultivos agroindustriales de palma africana en tierras bajas, colindantes con la Serranía, que han causado un gran impacto sobre las fuentes de agua y el acceso de los Yukpa a los ríos, de donde derivaban parte de su subsistencia a través de la pesca (ONIC, MinInterior y Pueblo Yukpa, 2014).

Todos esos procesos se efectuaron sobre las tierras que el Estado consideraba baldías, pero que eran originalmente parte del territorio de movilidad del pueblo Yukpa, de modo que transformaron radicalmente el territorio y terminaron por confinarlos en los parajes más altos y poco fértiles de la Serranía. El sistema agrícola de complementariedad entre los diferentes pisos climáticos, que aprovechaba los recursos propios de las tierras altas y bajas, se

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

imposibilitó cuando perdieron las zonas bajas y medias de la Serranía. La caza de animales silvestres y la recolección de plantas y de animales para la subsistencia, cuyo hábitat eran las densas zonas selváticas de la Serranía, se redujeron sustancialmente ante los intensos procesos de deforestación causados por la avanzada campesina; así mismo, la pesca como actividad de supervivencia, ha sido afectada significativamente por la prohibición de los dueños de las fincas e industrias de entrar a sus predios.

La colonización sobre el territorio yukpa ha dado como resultado el arrinconamiento de su población en lo que hoy se ha establecido como tierras de resguardo, una figura de propiedad colectiva de la tierra que reconoce el Estado colombiano a los pueblos indígenas, a la cual se acogió este pueblo a finales de los años de 1970, con el fin de asegurar un espacio geográfico titulado (ONIC, MinInterior y Pueblo Yukpa, 2014, p. 29) (véase Imagen 2). En la actualidad, cerca del 99% de la población Yukpa se ubica en los resguardos legalmente constituidos. Sin duda, estos resguardos constituyen una forma de propiedad, acceso y uso de la tierra básica para la protección de los derechos fundamentales y colectivos del pueblo Yukpa. Sin embargo, tal como lo señalan los mismos Yukpa (ONIC, MinInterior y Pueblo Yukpa, 2014), los resguardos presentan diversas limitantes para el acceso y uso del territorio más amplio, del cual depende su supervivencia como pueblo.

Es así como, en algunos de estos resguardos (especialmente en Iroka) la mayoría de la población se encuentra asentada por fuera de los límites establecidos debido a la estrechez del acotamiento legal. Del mismo modo, una buena parte de los lugares considerados sagrados por ser fundamentales para su subsistencia y sus prácticas rituales, están localizados por fuera de las tierras de resguardo. Por estas razones, los resguardos resultan siendo figuras de propiedad colectiva que presentan serios problemas para los Yukpa, debido a que en la práctica sus límites restringen el acceso a los recursos necesarios para su subsistencia, producen confinamiento, además de ser causa de conflictos territoriales permanentes con los colonos.

Un indicador importante de este confinamiento en el territorio y de las consecuencias para la subsistencia es la gran diferencia que se presenta entre la Unidad Agrícola Familiar básica, establecida por el Estado para los municipios en donde están localizados los resguardos, que es de 26 a 30 hectáreas de tierra por familia, frente a los datos que arrojan las extensiones de tierra disponible en los resguardos para sus habitantes. Es especialmente crítica la situación en Iroka si consideramos que muchos de los asentamientos indígenas están por fuera de los resguardos (véase Tabla 1).

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

Tabla 1. Resguardos y población Yukpa

Municipio	Resguardo	N° de habitantes Yukpa 2014[1]	Año de creación del resguardo	N° de asentamientos	Extensión (en Ha.)	N° de hectáreas por habitante	UAF
Agustín Codazzi	Iroka[2]	2.934	1976	57 (24 dentro del resguardo)	8.678	2,95	Entre 26 y 36 Ha.
Agustín Codazzi	Menkue Misaya La Pista	745	1997	6	584	0,07	
La Paz	Caño Padilla	144	2000	1	280	1,94	
La Paz	Rosario Bellavista Yucatán	148	2000	7	530	3,50	
La Paz	La Laguna El Koso Cinco Caminos	241	2007	5	154	0,63	
Becerril	Sokorpa[3]	1.542	1983	13	25.000	10	

Fuentes: DANE, DNP, Ministerio del Interior y Pueblo Yukpa. Elaboración: Programa de Antropología de la Universidad Externado de Colombia con base en Otero-Cortes (2019), Duarte (2015) y ONIC, MinInterior y Pueblo Yukpa (2014).

Los datos poblacionales del pueblo Yukpa deben ser comprendidos a la luz de los procesos de colonización que ha experimentado a lo largo de su historia y muestran cifras muy discordantes entre sí. Con base en sus propias observaciones, Reichel-Dolmatoff (1945-1946) estimó que para 1883 la población no sería menor a 3.000 habitantes, avalando los datos de la *Geografía general física y política de los Estados Unidos de Colombia* frente a los que él mismo señala que "[…] generalmente no merecen fe", pero que aun así consideró pertinentes para la época (Pérez, 1883, pp. 42-353, citado en Reichel-Dolmatoff, 1945-1946, p. 20). Ya en 1960, el mismo Reichel-Dolmatoff estableció que los yukpa podrían ser alrededor de 500 o 600 individuos (1960, p. 3), lo que parece probable, ya que Ruddle (1974), quien entre 1969 y 1971 registró que la suma de los habitantes de los distintos poblados llegaba a ser de 696 personas para el momento (p. 27-28). Esas estimaciones significan una reducción de la población del 80% en 77 años, aproximadamente. Más allá de la veracidad de estas cifras, es claro que durante el siglo XIX y la mitad del siglo XX, el territorio yukpa sufrió los mayores rigores por la ampliación de la frontera agrícola, que tuvieron un impacto de reducción poblacional, como lo sugieren las cifras ofrecidas por los académicos.

[1] Datos poblacionales proporcionados por el Acuerdo 001 de abril de 2016 por el cual se fija el Plan de Desarrollo Municipal para Valledupar de la población que se auto-reconoce como étnica en 2014, según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE (Otero-Cortes 2019, p. 33).

[2] El número estimado por los mismos Yukpa en este resguardo es de 7.000 habitantes (ONIC, MinInterior y Pueblo Yukpa, 2014, p. 36).

[3] El número estimado por los mismos Yukpa en este resguardo es de 2.500 habitantes (ONIC, MinInterior y Pueblo Yukpa, 2014, p. 36). (ONIC, MinInterior y Yukpa 2014, p. 36).

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

Entre tanto, la cifra ofrecida por el Censo DANE 1993 habla de 2.126 personas Yukpa en el territorio colombiano. En el Censo 2005, 4.761 personas se auto reconocieron como pertenecientes al pueblo Yukpa (DANE 2005), mientras que estimaciones preliminares del Censo 2018 indican que 5.001 personas se auto reconocieron como Yukpa (DANE 2018). Esa información censal implica un aumento porcentual de la población del 5,12% entre los dos últimos censos.

Según los datos disponibles para el año de 2005 (DANE), el pueblo Yukpa se concentra en el departamento del Cesar, en donde habita el 98,9% (4.707 personas) de la población, mientras que 14 personas (el 0,3%) se registran como habitantes de La Guajira y 11 personas (0,2%) en Bogotá, sumando el 99,4% de la población. La población Yukpa que habita en zonas urbanas corresponde al 2,8% (135 personas), cifra inferior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43%. En total, los Yukpa representan el 0,3% de la población indígena de Colombia (Ministerio de Cultura, 2010, p. 302) (véase Tabla 2).

Tabla 2. Distribución y concentración de la población Yukpa por municipio en el departamento del Cesar (Censo DANE 2005)

Municipio	N° habitantes Población Yukpa	Porcentaje población Yukpa sobre el total de población municipal
Agustín Codazzi	2.933	5,60%
Becerril	1.362	10%
La Paz	334	1,60%

Fuente: Censo DANE 2005. Procesamiento Ministerio de Cultura (2010).

En la actualidad, las cifras poblacionales son sumamente contradictorias. En el *Plan de Salvaguarda del pueblo Yukpa* (ONIC, MinInterior y Pueblo Yukpa, 2014) se afirma que el total de población es mayor a 10.000 habitantes; especialmente discordantes son las cifras para los resguardos de Iroka (7.000 habitantes en el *Plan de Salvaguarda* frente a 2.934 de las estimaciones DANE) y Sokorpa (2.500 habitantes en el *Plan de Salvaguarda* frente a 1.542 de las estimaciones del DANE) (ONIC, MinInterior y Yukpa, 2014, p. 36 y Otero-Cortes, 2019, p. 37) (véase Tabla 3); Esta discordancia en los datos hace urgente estimaciones más precisas.

Tabla 3. Variaciones en los volúmenes poblacionales del pueblo Yukpa según fuentes

Fuente	Total personas yukpa
Censo Dane 1993	2.126
Censo Dane 2005	4.757
Censo Dane 2018	5.001
Plan de Salvaguarda pueblo Yukpa 2014	10.517
DNP y Ministerio del Interior, 2014	5.754

Fuente: DANE, (ONIC, MinInterior y Yukpa 2014) (Otero-Cortes 2019)

Datos provenientes del *Plan de salvaguarda Yukpa* (2014) muestran los efectos de desplazamiento causado por el conflicto armado y por el narcotráfico. Estos efectos permiten

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
facccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

señalar que la distribución y concentración actual de la población Yukpa ha variado respecto al Censo DANE 2005. En ese documento, los Yukpa señalan desplazamientos en varios sentidos: 1) desde los resguardos La Laguna y El Koso (en La Paz) e Iroka (en Agustín Codazzi) hacia el municipio de Valledupar; 2) desde el resguardo de Iroka hacia el municipio de Bosconia; 3) del resguardo de La Laguna hacia Santa Marta y Buritaca, y 4) desde los resguardos de Menkue (en Agustín Codazzi) y Sokorpa (en Becerril) hacia Venezuela (ONIC, MinInterior y Pueblo Yukpa, 2014, p. 144-154). En la actualidad, los Yukpa documentan migración de gente Yukpa venezolana en situación de miseria, que buscan atención en el país (Saenz, 2019; véase también Pueblo Yukpa, [S. F.]).

Desde la década de los 70's del siglo XX, grupos armados insurgentes, FARC-EP, ELN y EPL, mantuvieron presencia y dominio de la parte alta de la Serranía del Perijá, donde controlaban las rutas de narcotráfico de marihuana y de contrabando de gasolina, armas, mercancías y precursores químicos, rutas de secuestro y extorsión. Posteriormente, a finales de los noventa, las Autodefensas Unidas de Colombia AUC generaron una serie de dinámicas de desplazamiento y de conflicto en el territorio que afectaron a los Yukpa (ONIC, MinInterior y Pueblo Yukpa, 2014), no solamente por las violencias cotidianas y la necesidad de desplazarse de manera forzada de sus territorios, sino porque también imposibilitaron su acceso al agua y, de manera general, al territorio, impidiendo con ello mantener sus dinámicas de movilidad (Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH, 2018, p. 20).

Aunado al conflicto y despojo territorial, entre los años de 1998 y 2006 se intensificó en la región la llegada de proyectos de megaminería y de agroindustria palmífera, que han venido acompañados de sustracciones a la Reserva Forestal Los Motilones, reserva que se traslapa con algunos de los resguardos yukpa y que constituye parte de su territorio ancestral. Las actividades mineras y agroindustriales han restringido el acceso a zonas importantes del territorio ancestral han causado desviaciones de ríos. Ese es el caso del río Cicarare, que es una fuente vital de acceso al agua y a recursos de subsistencia por parte de la comunidad del resguardo de Iroka (ICANH, 2018).

Si bien los datos de población son ambiguos, es claro que muchas de las tierras de los resguardos son áreas de conservación (zonas montañosas de bosque y rocosas donde se ubican manantiales y fuentes de agua) o zonas de pastos y ganadería usados por los colonos y que han dejado de ser aptas para los cultivos y las actividades productivas propias. En esas condiciones, los Yukpa se enfrentan hoy a una crisis de seguridad y soberanía alimentaria y a la negación de sus posibilidades de existencia y reproducción física y cultural, como lo muestran las altas tasas de mortalidad infantil causadas por desnutrición y enfermedades respiratorias (Corporación de Apoyo a Comunidades Populares –Codacoop, 2010), que revelan una tasa de mortalidad infantil del 200 niños por cada mil (la nacional es 19 por mil), situación que ha sido denunciada por el pueblo Yukpa ante las autoridades estatales colombianas con la denuncia de que en el último año las muertes de niños por desnutrición ascienden a 27 (*Diario del Cesar*, 24 de mayo de 2019)[4].

[4] La noticia de prensa refiere a una reunión con el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en la que los Yukpa señalan que "las muertes de los infantes se presentaron entre el 8 de agosto de 2018 y 25 de marzo de 2019, porque tenemos una situación de abandono y desprotección por parte del Estado. Con el fallecimiento de estos menores por temas asociados

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

Considerando las dinámicas de movilidad del pueblo Yukpa que fueron descritas anteriormente, las diferentes dinámicas históricas que han afectado el territorio tradicional de este pueblo y sus impactos más recientes, es posible visibilizar la dificultad que este pueblo enfrenta para poder mantener su cultura y formas de subsistencia. En este sentido es de fundamental importancia considerar que, para la pervivencia, se hace absolutamente necesario garantizar el acceso a territorios y lugares sagrados de los cuales dependen su subsistencia, sus dinámicas sociales, su cultura y su espiritualidad. Debido a que leyes nacionales e internacionales han previsto la necesidad de garantizar la pervivencia cultural y el derecho al territorio de pueblos tradicionales y móviles en el mundo, a continuación, recogemos de manera general esas discusiones, permitiéndonos señalar aspectos que, consideramos, deben ser tenidos en cuenta para analizar el caso del pueblo Yukpa.

4. NOMADISMO, DERECHOS HUMANOS, ACCESO AL TERRITORIO

Pareciera una paradoja tratar los derechos de los pueblos llamados nómadas como un fenómeno universal cuando se trata de sociedades culturalmente muy diversas. Sin embargo, estas enfrentan, además de una profunda discriminación, problemáticas similares en cuanto al acceso a sus territorios y a los obstáculos para mantener su modo de vida móvil. Aunque el acceso al territorio (no necesariamente la propiedad) es crucial para la supervivencia, aun en varios países se considera que estos pueblos no tienen derechos sobre la tierra, pues su nomadismo no es una ocupación efectiva y productiva sino algo del pasado que debe ser abolido. Sus territorios se han considerado territorios vacíos que pueden ser ocupados por el Estado, porque con su tránsito y movilidad no los ocupan realmente, desconociendo la abundante literatura antropológica que evidencia lo contrario.

Gilbert (2007) explora la evolución de la legislación internacional sobre derechos humanos en relación con pueblos nómadas y señala que la principal respuesta legal ha sido forzar a estos pueblos a integrarse y a asentarse. El autor muestra que, bajo la sombrilla de los derechos humanos, estos pueblos han adquirido poco a poco un corpus legal específico para reivindicar derechos particulares que son accesorios para la forma de vida nómada (de caza, pesca o recolección) y los que se relacionan con un enfoque ampliado de la libertad de movimiento. En este sentido, los derechos más relevantes para los pueblos nómades serían los de usufructo (vinculados a la tierra y a servicios móviles específicos) y aquellos relativos a la libertad de movimiento, que refiere al cruce de fronteras, al acceso a sitios sagrados y lugares de asentamiento temporal o de campamento.

Estos derechos están estrechamente vinculados al derecho a una cultura propia, que también se menciona en el Convenio 169 de la OIT. En este sentido, existen a nivel internacional importantes soportes para el reconocimiento de los derechos territoriales y de movilidad, entre ellos el reconocimiento de pueblos nómadas como pueblos indígenas. A

a la pérdida del territorio, problemas ambientales y minero-energéticos, las multinacionales desviaron cinco ríos y eso agravó la problemática en la etnia Yukpa" (*Diario del Cesar*, 24 de mayo de 2019).

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

nivel internacional, el Convenio 169 de la OIT (1989) es el que hace referencia explícita a los pueblos nómadas al establecer que:

> "Se reconocerán las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, se tomarán medidas en los casos apropiados para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras no exclusivamente ocupadas por ellos, pero a los que tradicionalmente han tenido acceso para su subsistencia y actividades tradicionales. Se prestará especial atención a la situación de pueblos nómadas y cultivadores itinerantes a este respecto" (Artículo 14).

En relación con lo anterior, diferentes antropólogos han concluido, en primer lugar, que el concepto de territorio indígena no se puede limitar a las áreas de resguardo, que es el título de propiedad colectiva que otorga el Estado a los pueblos indígenas. A partir de los conceptos la Corte ha señalado:

> "[…] la importancia de ampliar el concepto de territorio de las comunidades étnicas a nivel jurídico, para que comprenda no sólo las áreas tituladas, habitadas y explotadas por una comunidad –por ejemplo bajo la figura del resguardo, sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales y económicas, de manera que se facilite el fortalecimiento de la relación espiritual y material de estos pueblos con la tierra y se contribuya a la preservación de las costumbres pasadas y su transmisión a las generaciones futuras" (T-693 de 2011).

En este sentido, la Corte ha precisado que la consulta previa debe realizarse no solamente cuando un proyecto dado se ubica dentro de los resguardos de las comunidades, sino también cuando se planea realizarlos en territorios de usos ancestrales y donde las comunidades desarrollan prácticas tradicionales.

Para determinar con mayor precisión el ámbito territorial de una comunidad indígena, el antropólogo Herinaldy Gómez estableció algunos criterios como perito de la Corte Constitucional en la sentencia T 693 de 2011. Acorde con lo anterior, su concepto plantea que la verificación de la existencia de una comunidad indígena no se debe agotar "en la presencia física o en la residencia, sino en el desarrollo actual y regular de prácticas tradicionales de supervivencia o simbólicas, tales como la caza, la pesca, la recolección de frutos, la práctica de rituales, entre otras más". Gómez propone algunos elementos que deben guiar la verificación de la presencia de comunidades en el área de influencia de proyectos de desarrollo, entre ellos: la realización histórica y regular de prácticas colectivas tradicionales de orden económico (agricultura, caza), cultural (prácticas sagradas, ceremoniales y ritos especiales) y funcional (acceso o tránsito); la existencia de propiedad colectiva de tierras o terrenos de la comunidad étnica y la posesión de hecho de tierras o terrenos. El autor señala que:

> "[…No obstante, se puede presentar otra serie de situaciones que eventualmente las comunidades étnicas pueden argumentar como presencia efectiva dentro del área de influencia, tales como: (a) Residencia de varias familias y/o personas pertenecientes a una comunidad étnica. (b) Existencia de compromisos institucionales con el Estado

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

> tendientes a satisfacer aspiraciones territoriales de una comunidad o pueblo étnico. (c) Área de territorio ancestral, reclamado políticamente. (d) Cercanía relativa al área de influencia por residencia, propiedad, posesión o realización de prácticas tradicionales. (e) Interdependencia sistémica por razones ambientales, sociales o económicas con lugares ubicados dentro del área de influencia".

Territorio ancestral y territorio tradicional

En su intento por definir ámbito territorial de las comunidades indígenas, la Corte ha hecho mención en varias ocasiones al concepto de territorio ancestral y al concepto de territorio tradicional sin establecer una diferencia clara entre los dos. La discusión sobre lo ancestral del territorio la pone de presente la Corte para señalar las dificultades que conlleva asimilar la noción de territorio de las comunidades indígenas a la noción tradicional de propiedad del Código civil. Al respecto, la Corte señala que:

> "El reconocimiento de las dificultades a las que conduciría asimilar la noción de territorio de las comunidades étnicas a la visión tradicional de propiedad regulada en el ordenamiento civil llevaron a la Corte a adoptar una visión más amplia de la propiedad colectiva de estas comunidades que, siguiendo los parámetros fijados por la jurisprudencia y la doctrina, le da la más importancia a la ancestralidad que a los títulos de dominio".

Y agrega la Corte:

> "Para efectos de la consulta, lo relevante es que la intervención avalada por la administración tenga la capacidad de generar la afectación directa […]. Y esa afectación puede ocurrir cuando la medida interviene en una zona con presencia de minorías étnicas, independientemente de quién aparezca como su propietario. En ese marco, debatir la titularidad del derecho de dominio carece de trascendencia".

Para el antropólogo Rodolfo Stavenhagen (2001), la ocupación ancestral de la tierra se determina por: "[…] la continuidad histórica de un grupo que durante siglos ha mantenido una identidad y de la cual deriva precisamente su situación actual en el país del que se trate […]". Sin embargo, Stavenhagen no desconoce que por razones de cambios históricos los grupos indígenas se han visto en la necesidad de cambiar de hábitat para poder mantener esa continuidad. Para él, el territorio tradicional está definido como el espacio "[…] que es actualmente imprescindible para que un pueblo indígena acceda a los recursos naturales que hacen posible su reproducción material y espiritual, según sus características propias de organización productiva y social".

Para efectos de la consulta previa y de acuerdo con el Convenio 169 y la Corte constitucional, el concepto de territorio abarca tanto el carácter de lo ancestral como de lo tradicional para determinar el ámbito en el cuál es necesario consultar a las comunidades indígenas por la posible afectación de un proyecto de desarrollo en su integridad étnica y cultural. Sin embargo, y de acuerdo con otros autores, el concepto tradicional obedece más a

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
facccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

la realidad y a la posibilidad de determinarse jurídicamente. Además, las definiciones de territorio tradicional que aportan los antropólogos en diferentes peritajes para la Corte Constitucional o para la CIDH, el concepto de territorio tradicional es indisoluble del concepto de subsistencia físico y espiritual.

En el marco de esta discusión, el Convenio 169 de la OIT manifiesta que: "los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión" (Artículo 14). Para el caso del pueblo Yukpa, la corte Constitucional en sentencia T 713 de 2017 ordenó al Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras:

> "(…) emprender en forma inmediata la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación del territorio ancestral yukpa que a la fecha se encuentran pendientes, actuación que deberá culminar con una decisión de fondo respecto de tales solicitudes, en el término máximo de un (1) año contado a partir de la notificación de esta sentencia".

Para dar cumplimiento a dicha orden el Gobierno nacional deberá tener en cuenta los criterios establecidos por la Corte Constitucional aquí mencionados (económicos, sociales, culturales y funcionales), en el sentido de que la noción de territorio tradicional yukpa debe incluir el conjunto de prácticas colectivas tradicionales de orden económico (la caza, pesca y la recolección), cultural (prácticas sagradas, ceremoniales y ritos especiales) y funcional (acceso o tránsito) que son necesarias para su reproducción física y cultural y que involucran espacios a los que tradicionalmente han tenido acceso incluso si no han estado ocupados exclusivamente por ellos.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

A lo largo de este concepto se ha podido señalar que el pueblo Yukpa es portador de una memoria biocultural sumamente valiosa relacionada con el conocimiento del macro-territorio, del establecimiento de caminos asociados a la oferta estacional de flora y fauna, al conocimiento de los ciclos de vida de las especies, al funcionamiento del calendario ecológico, y a la siembra de especies útiles que enriquecen el paisaje, el territorio y los ecosistemas. Por esta razón, son muy importantes para la configuración étnica y cultural del país y de la humanidad. Se pudo establecer que han sufrido un proceso histórico de reducción de su territorio que ha afectado sus prácticas culturales de movilidad asociados a elementos tan importantes como su subsistencia (la caza, pesca, agricultura itinerante) y su espiritualidad (el contacto con el entorno, los ecosistemas y sus ciclos, movilidad asociada a la muerte y visitas a lugares sagrados que se caracterizan por tener dueños espirituales y están asociados a los recorridos y conocimientos míticos), lo que amenaza su pervivencia cultural como pueblo.

Para ilustrar el nivel de hacinamiento que se vive en los resguardos, basados en los datos presentados en la Tabla 1, se puede hacer una aproximación a la cantidad de tierra que

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
facsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

le correspondería a cada familia nuclear, considerando como tamaño promedio de la familia 5 personas. Los cálculos se hicieron descontando al resguardo más grande, Sokorpa, pues este se encuentra principalmente sobre tierras escarpadas y que por lo tanto no brinda soporte para actividades de subsistencia como la agricultura. De esta manera, se obtiene que en promedio una familia Yukpa en su resguardo cuenta con 12,1 hectáreas (10.226 hectáreas para 842 familias) lo que contrasta con la UAF, que para esta región se encuentra entre 26 y 36 hectáreas, y por lo tanto es altamente insuficiente.

Esta situación, sumada a su carácter de víctimas muy vulnerables del conflicto armado y otras formas de discriminación social, demandan una acción urgente que requieren medidas de reparación y salvaguarda, para asegurar su acceso al territorio y los recursos.

Es urgente documentar, cartografiar y rescatar la memoria biocultural del territorio ancestral y los patrones de movilidad para buscar formas de reconocimiento de propiedad colectiva, así como documentar y rescatar los saberes asociados a los calendarios ecológicos y el acceso estacional a los recursos asociados a prácticas tan importantes como la caza, la pesca y la recolección y que requieren la libre movilidad y la conectividad entre lugares estratégicos para su subsistencia física y cultural. De la misma manera, es urgente identificar los lugares sagrados como base para el establecimiento de acuerdos de uso y movilidad en el territorio.

Para promover una adecuada convivencia en el territorio entre los Yukpa y los demás ocupantes y usuarios, será conveniente generar espacios para el establecimiento de acuerdos de convivencia y uso compartido en aquellos territorios sobre los que no se pueden establecer derechos de propiedad para los Yukpa.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acuña Delgado, Ángel (1998) *Yu´pas. En la frontera de la tradición y el cambio*. Quito: Abya-Yala.

Bastidas, Luis (2013) "Etnohistoria y etnogénesis del pueblo Yukpa". *Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología*, Vol. 23, No. 66 (ene-abr). pp. 85-110.

Bastidas Valecillos, Luis (2011) "Conquista y colonización de la Sierra de Perijá. La resistencia indígena yukpa y las misiones capuchinas de Valencia". *Presente y Pasado. Revista de Historia*, Año 16, No. 32 (jul-dic), pp. 299-318.

Bastin, Georges (1996) "Bases para una historia de la traducción en Venezuela". *Livius*, No. 8, pp. 9-25.

Bosa, Bastien Andre (2015) "Volver: retorno de los capuchinos españoles al norte de Colombia a finales del siglo XIX". *Historelo*, Vol 7, No. 14, pp. 141-179.

Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH (2018) Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa Fe. Bogotá: CNMH.

Corporación de Apoyo a Comunidades Populares –Codacoop (2010) *Investigación:* "*Una mirada sobre el futuro de los pueblos indígenas a partir de la situación actual de su*

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

niñez". Informe de la investigación "La niñez y el futuro de los pueblos indígenas". Bogotá: Codacoop.

Diario del Cesar (2019) "Denuncian ante Alto Comisionado muerte de 27 niños Yukpas". Publicación digital, 24 de mayo de 2019. Disponible en: https://www.diariodelcesar.com/archivos/28731

Duarte Reyes, Soraya María (2015) Los Yukpas: transformaciones territoriales y de alimentación en la Serranía del Perijá, departamento del Cesar. Estudio de los resguardos Iroka y El Rosario, Bellavista y Yucatán. Tesis de Maestría en Desarrollo Rural, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá: documento inédito.

Durbin, Marshal (1977) "A Survey of the Carib Language Family". En: Basso (ed.) *Caribe Speaking Indiana*. Tucson, Arizona: Anthropological papers of the University of Arizona.

Durbin, Marshal & Haydee Seijas (1975) "The Phonological Structure of the Western Carib Languages of the Sierra de Perijá, Venezuela". *Atti del XL Congreso Internazionale degli Americansti*, Vol. 3, pp. 69-77.

Gusinde, Martin (1956) "The Yupa Indians in Western Venezuela". *Proceedings of the American Philosophical Society*, Vol. 100, No. 3 (Jun), pp. 197-222.

Halbmayer, Ernst (2013a) "Mission, Food, and Commensality among the Yukpa: Indigenous Creolization and Emerging Complexities in Indigenous Modernities". *Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America*, Vol. 11, No. 1, Article 5, pp. 65-86.

-------- (2013b) "Securing a Life for the Dead among the Yukpa. The Exhumation Ritual as a Temporary Synchronisation of Worlds. *Journal de la Société des Américaniste*, Vol. 99, No. 1, pp. 105-140.

-------- (2017) "Del suicidio y las concepciones de la muerte entre los Yukpa y otros pueblos amerindios de las tierras bajas suramericanas. En: Campo Aráuz, Lorena & Miguel Aparicio, coords. *Etnografías del suicidio en América del Sur*, pp. 11-43. Quito: Abya Yala; Universidad Politécnica Salesiana: NEAL; Núcleo de Estudios da Amazonía Indígena.

Halbmayer, Ernst & Anne Goletz (2019) Informe sobre las prácticas de movimiento y de migración del pueblo Yukpa. Departamento de Antropología Cultural y Social, Philipps-Universität Marburg. Marburg, Alemania: documento inédito.

Hitchcock, Robert (2019) "Hunters and Gatherers Past and Present: Perspectives on Diversity, Teaching, and Information Transmission". *Reviews in Anthropology*, Vol. 48, No. 3, pp. 1-33.

ICANH (2018) *Cartografía social de los lugares sagrados, lugares con petroglifos y otros lugares de importancia cultural para el Resguardo de Iroka del pueblo indígena Yukpa en la Serranía del Perijá*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH.

Jahn, Alfredo (1927) *Los aborígenes del occidente de Venezuela*. Caracas: Litografía y Tipografía del Comercio.

Jaramillo Gómez, Orlando (1993) Los Yuko-Yukpa. En: *Introducción a la Colombia amerindia*, pp. 293-339. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

Largo, Wilson (2016) Elementos que constituyen el saber espiritual Yukpa de Colombia. Tesis de pregrado. Universidad Santo Tomás, Facultad de Educación. Bogotá: documento inédito.

------- (2018) Los Yukpa, una cultura del movimiento a la restricción territorial. Concepciones de una cultura nómada, recolectora, cazadora y de guerra, y no trashumante. Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Marginados. Bogotá: documento inédito.

Lee, Richard & Irven DeVore, eds. (1968) *Man the Hunter. The First Intensive Survey of a Single, Crucial Stage of Human Development—Man's Once Universal Hunting Way of Life*. Chicago: Aldine Publishing Company.

Lovis, William & Robert Whallon, eds. (2016) *Marking the Land: Hunter-gatherer Creation of Meaning in their Environment*. London and New York: Routledge.

Martín, Esteban ([1534] 1977) "Declaración de una lengua". En: Nectario, María. *Los orígenes de Maracaibo*, pp. 487-506. Madrid: [S. E.].

Ministerio de Cultura (2010) "Yukpa del Perijá, cazadores, recolectores, agricultores". Bogotá: Ministerio de Cultura.

Oliveros Fortiche, Diana Ezperanza (2017) "Plan de vida Yukpa: relaciones entre el territorio y el buen vivir". *Nómadas*, No. 46 (Oct), pp. 81-93.

Oliver, José Ramón (1989) The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia. Tesis doctoral. University of Illinois. Urbana, Champaign: documento inédito.

---------- (1990) "Reflexiones sobre el posible origen del wayu (guajiro)". En: Ardila Calderón, Gerardo (ed.) *La Guajira. De la memoria al porvenir. Una visión antropológica*, pp. 81-135. Bogotá: Fondo FEN; Universidad Nacional de Colombia.

Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC, Ministerio del Interior & Pueblo Yukpa (2014) "*Epünmatpo. Plan de salvaguarda Yukpa*". [Bogotá]: ONIC, MinInterior.

Ortiz Gómez, Francisco (1976) "Taxonomía de los grupos Guahibo". *Revista Instituto Colombiana de Antropología*. Bogotá, Vol. 20, p. 281-294.

---------- (1986) "Mitología y organización social en el oriente de Colombia". *Maguaré*, Vol. 3, No. 3, pp. 9-20.

---------- (1997) "Condiciones sociales de las lenguas indígenas de los Llanos orientales en Colombia". En: Pachón, Ximena & Correa, François (Coord.). *Lenguas Amerindias. Condiciones sociolingüísticas en Colombia*, pp. 385-442. Bogotá: Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo.

Otero-Cortes, Andrea; Herrera, Fernando & Juan Manuel Monroy (2019) "Análisis de la pobreza y condiciones de vida en Valledupar". *Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana* (Banco de la República), No. 278, p. 78.

Reichel-Dolmatoff, Gerardo (1945-1946) "Los indios motilones". *Revista del Instituto Etnológico Nacional*, Vol. 2, pp. 15-115 + [36].

---------- (1960) "Contribución al conocimiento de las tribus de la región del Perija". *Revista Colombiana de Antropología*, Vol. 8, pp. 159-198.

Ruddle, Kenneth (1974) *The Yukpa Cultivation System: A Study of Shifting Cultivation in Colombia and Venezuela*. Berkekley and Los Angeles, Latin American Center: University of California Press.

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

Ruddle, Kenneth & Wilbert, Johannes (1983) "Los Yukpa". En: Coppens, Walter & Escalante, Bernarda (eds.). *Los aborígenes de Venezuela*, Vol. II, pp. 33-124. Caracas: Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Instituto Caribe de Antropología y Sociología. Monografía No. 29.

Saenz, Julián (2019) "Colombia: indígenas Yukpa acorralados por la deforestación y el conflicto armado". *Semana Sostenible*, 20 de marzo de 2019. Disponible en: https://es.mongabay.com/2019/03/indigenas-yukpa-deforestacion-desvio-rios-frontera-colombia-venezuela/

Santos Delgado, Adriana; Sánchez Mejía, Huges & Miguel Blanquiceth (2015) "Tierras públicas y privadas para la cría de ganados y cultivos de café en una zona de frontera del Caribe colombiano: Valledupar (Magdalena), 1920-1940". *Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe*, No. 27, pp. 244-275.

Suárez, María (2017) "La política del despojo: el conflicto territorial del pueblo yukpa de la Sierra de Perijá (Venezuela)". *TraHs. Poblaciones vulnerables y derechos humanos*, No. 1, pp. 37-52.

Swadesh, Maurice (1960) *Tras la huella lingüística de la prehistoria*. México: Universidad Nacional de México. Suplementos, Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, 2da Serie, No. 26.

Tarble, Kay (1985) "Un nuevo modelo de expansión Caribe para la época prehispánica". *Antropológica*, No. 63-64, pp. 45-82.

Yukpa, Pueblo (S. F.) "Autodiagnóstico de la situación de los derechos fundamentales y colectivos del Pueblo Indígena Yukpa de la Serranía del Perija (Colombia). [S. L.]: documento inédito. Disponible en: file:///C:/Users/claudia.platarrueda/Downloads/Autodiagno%CC%81stico%20del%20pueblo%20Yukpa.pdf

Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia

Corte Constitucional de Colombia, Sala Cuarta de Revisión (7 de diciembre de 2017) Sentencia T-713/17. "Derecho a la consulta previa de la comunidad indígena Yukpa". [MP Antonio José Lizarazo Ocampo]. Referencia Expediente T-5.990.287.

Corte Constitucional de Colombia, Sala Séptima de Revisión de tutelas (23 de septiembre de 2011) Sentencia T-693/11. "Derecho a la libre determinación y participación de comunidades étnicas". [MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub]. Referencia: expediente T-2.291.201

Congreso de la República de Colombia (Ley 21 de 4 de marzo de 1991) "Por la cual se aprueba el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra 1989".

Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH

Charles Rice Hale, antropólogo especialista en culturas indígenas, en peritaje rendido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Comunidad Mayagna (sum) Awas Tingni vs. Nicaragua. Sentencia del 31 de agosto de 2001.

Roddolfo Stavenhagen en peritaje rendido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Comunidad Mayagna (sum) Awas Tingni vs. Nicaragua. Sentencia del 31 de agosto de 2001.

Calle 12 n.° 1-17 este. PBX (57-1) 341 9900
342 0288 Exts. 1502 a 1505
FAX (57-1) 341 81 58
faccsh@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Bogotá - Colombia

El futuro es de todos | Mininterior

Al responder cite este número:
OFI19-52777-DAI-2200

Bogotá D.C. miércoles, 27 de noviembre de 2019

Señor
JAIME LUIS OLIVELLA MARQUEZ
Gobernador del Cabildo del Resguardo el Rosario, Bella Vista Yucatán.
Municipio de La Paz, Serranía de Perijá.

Señora
ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO
Gobernadora del Cabildo del Resguardo Sokorpa
Municipio de Becerril del Campo, Serranía del Perijá.

Señor
EMILIO OVALLE MARTINEZ
Gobernador del Cabildo del Resguardo Menkwe, Mishaya, La Pista.
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía de Perijá.

Señor
ALIRIO OVALLE REYES
Gobernador del Cabildo del Resguardo Caño Padilla.
Municipio de La Paz, Serranía del Perijá.

Señor
ANDRES VENCE VILLAR
Gobernador del Cabildo del Resguardo Caño Padilla
Municipio de La Paz, Serranía del Perijá.

Señor
ALFREDO PEÑA FRANCO
Gobernador del Cabildo del Resguardo Iroka.
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá.

Asunto: Petición Pueblo Yukpa, Sentencia T -713 de 2017 – Medidas de Manejo, acta 13 de septiembre de 2019

Referencia: Solicitud de Concepto jurídico frente a la condición de nómadas y semi-nómadas del Pueblo Yukpa e implementación de la Política Pública Especial

Respetados Señores,

En consideración a los compromisos establecidos en el marco del proceso de consulta previa que surgió con ocasión a lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-713 del 7 de diciembre de 2017 y, acorde con el contenido del acta de fecha 13 de septiembre de 2019, donde, en el desarrolló del taller de impactos relacionado con la

condición de nomadismo y semi-nomadismo del pueblo Yukpa, se identificó que uno de estos es la "*violación de los derechos fundamentales del Pueblo Yukpa, en su condición de nómada, semi-nómada, agricultores itinerantes, cazadores y recolectores en la Serranía del Perijá, que goza de especial protección en sus territorios, y más cuando estos se encuentran en área de Reserva Forestal (Ley 160 de 1994)*", en consecuencia, se solicitó como medida de manejo a este Ministerio, definir la elaboración de un ***"Acto administrativo para establecer la condición de nómada y semi-nómada del pueblo Yukpa"***

Sobre el particular, nos permitimos señalar que teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio del Interior revisó las funciones establecidas en la Ley 489 de 1998 y en el Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por el Decreto 1140 de 2018 y encontró que no tiene competencia para expedir el acto administrativo en mención, y en virtud de ello, elevó una consulta ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), mediante OFI19-17971-DAI-2200 del 30 de mayo de 2019, con el objetivo de que se pronunciara sobre la condición de nomadismo y semi-nomadismo con la que se auto reconoce el pueblo Yukpa.

En este orden, conforme al principio de coordinación y colaboración armónica entre las entidades del Estado, consagrado en el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 113 de la Constitución Política y dentro del marco del derecho fundamental de petición reglamentado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1755 de 2015, les informamos que este Ministerio comparte el pronunciamiento realizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), por ser la entidad oficialmente competente para pronunciarse sobre el asunto, de conformidad con su naturaleza y funciones establecidas en los artículos 4 y 13 del Decreto 2667 de 1999, especialmente la establecida en el numeral 4° del artículo 4 que reza, *"Prestar asesoría científica a los organismos de carácter público o privado en el diseño y ejecución de estudios de impacto cultural, arqueológico y antropológico"*, en virtud de la cual emitió un **CONCEPTO TÉCNICO CIENTIFÍCO**, con radicado No. **C.E 3461** de 25 de junio del 2018 y en el oficio –**ICANH 105- 4446** del 26 de agosto de 2019, no sin antes precisar, que de los aspectos estrictamente técnicos y científicos contenidos en este documento, esta cartera ministerial se abstiene de realizar observaciones de cualquier tipo, toda vez que no se cuenta con la competencia ni los elementos de juicio para ello.

1. Problema jurídico.

¿Puede el Ministerio del Interior, expedir un acto administrativo sobre la condición de nómadas y semi-nómadas del pueblo Yukpa agricultores, recolectores, itinerantes, cazadores acorde con documentos científicos y académicos aportados o puede plantear una política pública que permita dinamizar derechos a dicho pueblo en el marco del enfoque deferencial?

2. Consideraciones.

i. <u>De las funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías</u>.

Esta Dirección, se permite señalar que acorde con nuestras competencias legales definidas en el artículo 13 del Decreto 2893 de 2011, modificado por el artículo 1 del Decreto 2340 de 2015, tenemos las siguientes:

> *"1. Asesorar, elaborar y proponer la formulación de la política pública en beneficio de los pueblos indígenas y Rom en el marco de la defensa, apoyo, fortalecimiento y consolidación de sus derechos étnicos y culturales.*
> *2. Diseñar programas de asistencia técnica, social y de apoyo para las comunidades indígenas, Rom y población lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI).*
> *3. Coordinar interinstitucionalmente el diálogo político con los pueblos indígenas y Rom previsto por la ley, y promover la participación de las organizaciones y autoridades que los representen.*
> *4. Propender por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales, en coordinación con las entidades y organismos competentes.*
> *5. Coordinar con las instituciones gubernamentales la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a comunidades indígenas, minorías y Rom, y el ejercicio de las libertades y derechos de la población LGBTI.*
> *6. Apoyar a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior en la realización de los procesos de consulta previa que se efectúen en terreno, para proyectos de desarrollo que afecten a las comunidades indígenas y Rom.*
> *7. Coordinar y realizar los procesos de consulta previa para la presentación de iniciativas legislativas y administrativas del nivel nacional, de conformidad con los lineamientos acordados para el efecto.*
> *8. Llevar el registro de los censos de población de comunidades indígenas y de los resguardos indígenas y las comunidades reconocidas, de las autoridades tradicionales indígenas reconocidas por la respectiva comunidad y de las asociaciones de autoridades tradicionales o cabildos indígenas y su actualización.*
> *9. Llevar el registro de los censos de población, autoridades tradicionales reconocidas por la respectiva comunidad y asociaciones del pueblo Rom.*
> *10. Diseñar y ejecutar programas y proyectos de fortalecimiento de los procesos organizacionales de las comunidades indígenas y Rom.*
> *11. Promover la resolución de conflictos de conformidad con los usos y costumbres de las comunidades indígenas y Rom.*
> *12. Promover acciones con enfoque diferencial, tanto de parte del Ministerio como de las demás entidades del Estado, orientadas a atender la población indígena, Rom y LGBTI, y la formulación de acciones conjuntas.*
> *13. Prestar asesoría a las gobernaciones y alcaldías municipales para la debida atención a las comunidades indígenas, a las minorías, al pueblo Rom y a la población LGBTI.*
> *14. Promover en coordinación con el Sistema Nacional Ambiental la formulación de agendas ambientales conjuntas con las comunidades indígenas y Rom.*
> *15. Proponer proyectos de ley o de actos legislativos, así como efectuar el análisis normativo y jurisprudencial en coordinación con la Dirección de Asuntos Legislativos, en las materias de su competencia.*

16. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
17. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
18. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia."

De tal manera que, esta Dirección a groso modo cumple con funciones de asesoría técnica en la elaboración de políticas públicas en beneficio de los pueblos Indígenas, Rom y Minorías en el marco de la defensa, apoyo, fortalecimiento y consolidación de sus derechos, mediante espacios de diálogo y acompañamiento institucional de los procesos y aplicación del enfoque diferencial, atendiendo la Ley 21 del 4 de marzo de 1991 por medio de la cual se aprobó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptada en la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.

Ahora bien, poniendo especial cuidado a los numerales 12 y 13 de la norma señalada, esta dependencia brinda acompañamiento a las solicitudes de las comunidades indígenas y articula con las instituciones del orden nacional, departamental y local, en diferentes reuniones, con el propósito de buscar concertación y diálogo en la creación de rutas y estrategias que permitan aunar esfuerzos de atención con enfoque diferencial, y construcción de políticas públicas con los pueblos indígenas, de tal forma que, **obrando en el marco de un gobierno propio y bajo su autonomía, la ley faculta a los pueblos indígenas a organizarse, a dirigir su vida interna, de acuerdo a sus propios usos y costumbres**, poder para aplicar sus valores, crear instituciones propias y mecanismos que impliquen el ejercicio de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, delimitados por el Estado Colombiano, es decir, que tenga la capacidad para adoptar sus propias normas dentro de su territorio, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la Ley.

ii. <u>De los estudios técnicos frente a la organización y enfoque diferencial del Pueblo Yukpa</u>.

La Constitución Política, adoptó el contenido del convenio 169 de la OIT, aprobado mediante la Ley 21 de 1991[1], y su incorporación a la legislación vigente por medio del Bloque de Constitucionalidad[2], permitiendo el desarrollo de derechos políticos y medios que garantizan la pervivencia y el fortalecimiento de los pueblos étnicos en el país, en los diferentes niveles normativos.

Lo primero que se advierte, es que el pueblo Yukpa se encuentra distribuido actualmente en un promedio de 55 asentamientos, concentrados en seis resguardos legalmente constituidos hasta hoy, tres de ellos ubicados en el municipio de La Paz (Caño Padilla, El Koso y El Rosario), dos en el municipio de Agustín Codazzi (Iroka y Menkwe) y uno en el municipio de Becerril (Sokorpa).

---

[1] **Ley 21 de Marzo 4 de 1991.** "Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989"
[2] **Constitución Política de Colombia, Artículo 93.** "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."

Frente a su condición de nómadas y semi-nómadas, las autoridades del pueblo Yukpa han manifestado ante diversas instancias su auto reconocimiento, a través de diversos testimonios etnohistóricos y expresiones culturales, y en particular, a partir de la ratificación del convenio 169 de 1989, aprobado mediante la Ley 21 de 1991, como pueblo nómada, semi-nómada y de agricultura itinerante, condición que sustentan a través de su historia de poblamiento, sus leyes de origen, los usos del territorio, sus prácticas rituales y su organización social. Tal auto reconocimiento ha sido formalizado a través de Escritura pública No. 0307 del 2 de agosto de 2019.

De esta manera, el Ministerio del Interior admite la urgencia de implementar políticas públicas a nivel nacional, y asimismo, de elaborar un instrumento jurídico que permita que estas sean definidas por las entidades y organismos que interactúan con el pueblo Yukpa. Para el caso en particular, contamos con un concepto emitido por el ICANH, que es un soporte con valor científico y académico para las demás entidades públicas, por lo que finalmente se constituye como un criterio orientador para desarrollar programas, planes, proyectos y políticas públicas en pro del pueblo Yukpa.

Ahora bien, para dar claridad sobre la condición del pueblo Yukpa, se hace necesario traer a colación algunos criterios expuestos por el ICANH, como resultado de la investigación realizada por esta entidad, la cual se desarrolló en el marco de una perspectiva etnográfica, en la que se describen sus actores, las comunidades, su situación espacial e histórica, así como las formas de movilidad espacial, a partir de todos estos factores se extrae lo siguiente:

Para hacer el estudio del ICANH se visitaron tres asentamientos Yukpa, localizados fuera de los territorios de resguardo y de su área de influencia política, pues no les fue permitido el ingreso a los investigadores, toda vez que las autoridades indígenas esperaban que este tema fuera tratado a lo largo de un taller. A partir de las informaciones recabadas, el concepto concluye distintas formas de movilidad y su relación con la cultura yukpa, como se explica a continuación:

Formas de movilidad nomadismo y semi-nomadismo planteadas en tres apartados:

1. Las migraciones y las transformaciones territoriales que sufrieron los ancestros de este pueblo desde el momento de la llegada de los españoles.
2. La práctica del semi-nomadismo, y otras formas de migración orientadas por las características de la organización social Yukpa.
3. Otras dinámicas de migración estimuladas por la organización social y las formas de "hacer política" de estos pueblos.

- **Nomadismo.**

  Se define un principio organizador de la vida social, sustentado en una forma particular de relación con la naturaleza, e implicando una organización de la sociedad concreta- incluso en el desarrollo de sus desplazamientos- que se expresa en todos los ámbitos de la vida social.

El nomadismo constituye un *"modo de vida"*, una experiencia de desplazamiento específica, que se distingue de otras formas de desplazamiento espacial como: **i.** las migraciones, **ii** la dispersión, **iii** la trashumancia.

Características.

"Modo de vida móvil consolidado por grupos sociales organizados ... que sostienen relaciones orgánicamente mediadas con la naturaleza, a través de formas particulares, y que propician actividades específicas adaptadas a la explotación de recursos que se encuentran en la naturaleza"

Clases de sociedades nómadas:

1. Los cazadores -recolectores; pueblos con alta movilidad que fundan sus formas de subsistencia, principalmente, en la actividad de recolección, y en menor medida en la caza y, en algunos casos, en la pesca
2. los pastores nómadas; aquellas sociedades en las cuales el nomadismo se asocia con formas de subsistencia como el pastoreo de animales domesticados
3. los pescadores nómadas; movilidad está determinada por la actividad de la pesca en la estación seca y una *"agricultura simbólica"* en la época de lluvias
4. los fzigane, gens du voyages o gitanos.

Para estas 4 sociedades nómadas las relaciones sociales priman sobre aspectos como la posesión de la tierra y los límites político-administrativos.

El territorio: es espacialmente discontinuo, constituido por sitios alejados unos de otros y vinculados por una circulación causada por motivos variables que son reconocidos por todos aquellos que son susceptibles de frecuentar los mismos sitios.

Espacio: los pueblos nómadas siguen un itinerario fijo, a través de desplazamientos estacionarios anuales, escalonados o en varios años; dichos desplazamientos están restringidos a ciertos límites y se desarrollan de manera cíclica o periódica.

La forma de movilidad cíclica, distingue al nomadismo de otras formas de desplazamiento como la migración, trashumancia, semi-nomadismo.

- **Semi-nomadismo.**

Grupos o poblaciones que alternan en un período de tiempo un año, por ejemplo, una fase de carácter nómada, a mínima con una instalación de larga duración en el mismo sitio.

Características.

Los semi-nómadas disponen de un sitio de anclaje regular, estacionario, en su territorio, orientado por el ejercicio de un modelo económico, que combina la agricultura itinerante, la caza, la pesca y la recolección corresponde a una forma de movilidad practicada por los miembros de dicho pueblo.

El estudio concluyó que el Pueblo Yukpa- es semi-nómada por las siguientes razones:

Por tener un desplazamiento vinculado con las formas de subsistencia, desarrollo de un tipo de agricultura rotativa, la práctica de la caza, pesca y recolección, que impulsan las migraciones estacionales, e imponen un cambio temporal de residencia, construcción de un lugar de vivienda transitoria para armonizar prácticas agrícolas.

Teniendo en cuenta la diversificación cultural y circulación y por su combinación; es posible argumentar que el pueblo Yukpa es en primera instancia semi-nómada

Razones del semi-nomadismo

1. Práctica de diversos tipos de migraciones y desplazamientos espaciales anclados culturalmente.
2. Las distintas maneras de moverse por el territorio constituyen unas lógicas prácticas de relacionamiento espacial orientadas por las formas de organización socio-políticas y productivas de los yukpas;
3. Pueblos errantes y mendigos en busca de recursos alimenticios sin ningún orden social, como consecuencia de la dificultad de acceso a los recursos económicos tradicionales.

Características del Pueblo Yukpa en el semi-nomadismo.

- Diversas formas de movilidad que los caracteriza como un pueblo semi-nómada, como ellos mismos lo declaran.
- La atomización socio-política, el aislamiento y la dispersión territorial de sus unidades.
- Establecen un modelo social, territorial y político sustentado en las unidades denominadas por los antropólogos como sub-tribus o grupos locales.
- Grupos locales que se soportan en una economía mixta, que combina actividades de agricultura itinerante, caza, pesca y recolección de frutos silvestres e insectos.
- Las actividades de caza y recolección son practicadas en sitios más cercanos a los asentamientos.
- Los yukpas desarrollan otro tipo de migraciones ocasionadas por eventos de orden sobre natural y político.
- La sociedad yukpa conserva una serie de estrategias de movimiento espacial en su territorio, relacionadas con sus formas tradicionales de organización económica y socio-política.

- Movilidad por factores culturales internos sino por las Transformaciones históricas de su contexto social, estacionarios, con períodos largos de sedentarización.

Evaluadas las anteriores características del pueblo Yukpa, es necesario por parte del Ministerio del Interior, promover con enfoque diferencial una política pública que se encuentre articulada con las demás entidades del Estado, y que, además, esté relacionada con aspectos de orden cultural y de identidad, de conformidad con el numeral 12 del artículo 13 del Decreto Ley 2893, modificado Decreto 2340 de 2015.

Por lo anterior, es importante señalar que la formulación de la política pública que realiza el Ministerio del Interior, tiene como objetivo una coordinación institucional con las demás entidades del Estado para que propicien espacios y coordinen sus ofertas dirigidas a un pueblo que debe tratarse de manera diferencial, es decir, con esto no se interfiere en las competencias funcionales de ninguna de las entidades.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asunto indígenas, Rom y Minorías, en virtud de los autos 04 de 2009 y 266 de 2017, y de conformidad con la sentencia T-025 de 2004, elaboró el diagnóstico para la formulación e implementación del plan de salvaguarda, dentro del cual hacen mención a la condición de semi-nomadismo del pueblo Yukpa, situación que se afirma desde la perspectiva del estudio antropológico y que permite para cada pueblo la implementación de sus planes.

3. Conclusiones.

Para cerrar la temática expuesta, se debe decir que:

- Efectivamente de los estudios científicos y académicos enunciados y en particular el concepto emitido por el ICANH, se concluye desde su perspectiva técnica la condición de semi-nómada del pueblo Yukpa.

- Con base en tal realidad cultural evidenciada, coherente con el desarrollo de los artículos 7, 10 y 70 de la Constitución, es viable establecer una política pública específica para este pueblo indígena, con enfoque étnico diferencial que evite daños irreparables a la vida, a la salud, a la pervivencia del pueblo y a su territorio.

- Lo anterior, ligado a la siguiente función de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior:

  "10. Formular y hacer seguimiento a la política de los grupos étnicos para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y social, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado."

- Igualmente, es necesario indicar que el Ministerio del Interior, no es competente para reconocer derechos de carácter territorial, los cuales por ley están en función de diferentes entidades del orden nacional y territorial, así mismo, los aspectos territoriales reconocidos por el Juez de tutela en la sentencia T-713 de 2017, están

vinculados directamente con la orden cuarta de la misma y es función de la Agencia Nacional de Tierras dar cumplimiento a esta. Ahora bien, en relación con lo estipulado en la Ley 160 de 1994- Decreto 2164 de 1995 – Incorporado en el Decreto Ley 1071 de 2015, es pertinente indicar que estos también son aspectos de competencia exclusiva de ANT y solo con esta entidad podrán ser discutidos.

- Teniendo en cuenta lo conceptuado por el ICANH, en el sentido de señalar que el pueblo Yukpa practica el semi-nomadismo, es necesario que en la Mesa de Diálogo Institucional que se creará, se identifique cuál es el instrumento idóneo para definir las estrategias de atención institucional, en el ámbito de la salud, la educación, la atención a la primera infancia y de registro civil, que tomen en cuenta las distintitas dinámicas de movilidad del pueblo Yukpa, garantizando la cobertura de toda su población. Sin embargo, dado a que los conceptos elaborados por el ICANH y el pueblo Yukpa, no alcanzan a detallar las dinámicas territoriales precisas de esta práctica, para la elaboración del respectivo instrumento, es necesario trabajar en acuerdo con los miembros y las autoridades tradicionales Yukpas, para determinar de manera más precisa, los términos espaciales y temporales en los que se desarrolla dicha práctica.

Esperando dar guía a sus inquietudes, me permito recordar que el trabajo que se viene adelantando en favor de los pueblos indígenas de Colombia, es sin duda uno de los retos más grandes que tiene el país y la sociedad, quienes vemos con esperanza el desarrollo y la superación de las condiciones de vulnerabilidad por parte de estos pueblos.

Cordialmente,

RICARDO ARIAS MACÍAS
Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos (e)
Ministerio del Interior

Proyecto: Jorge Ospina Dairm
Reviso: Cesar Armando Fandiño, Manuel Eduardo Aljure - María Inés Londoño
Aprobo: Ricardo Arias Macias m.e.a.s.

Defensoría del Pueblo

Bogotá D.C.

Señores,
Jaime Luis Ovella Marquez
Alfredo Peña Franco
Esneda Saavedra Restrepo
Emilio Ovalle Martinez
Andrés vence Villamizar
Gobernadores Indígenas Pueblo Yukpa.
Valledupar (Cesar)

REFERENCIA: Respuesta solicitud concepto sobre nómadas o seminómadas del pueblo indígena Yukpa.

Respetado señor, en atencion a su solicitud me permito responder lo siguiente:

Los Yukpa son un pueblo indígena ubicado en ambos lados de la frontera de Colombia con Venezuela. En Colombia el censo de 2005 contabilizó 4.761 personas Yukpas, y en Venezuela el censo de 2011 contabilizó 10.640

De acuerdo con la literatura historiográfica, antropológica y etnográfica, los Yukpa han tenido un territorio ancestral, que si bien no alcanzó alguna forma de reconocimiento jurídico temprano (en la Colonia), como en cambio sí lo lograron otros pueblos indígenas del país, ha estado ligado al desarrollo de varias prácticas sociales, económicas y culturales con las cuales construyeron una frontera espacial definida.

Hablamos de prácticas como:

- Ciertas formas de nomadismo o itinerancia en función de las ofertas naturales estacionales, a las que han accedido mediante faenas de caza, la pesca y la recolección, pero alternadas con algunos tipos de horticultura básica;
- Un patrón disperso de residencia y de ocupación del territorio, comandado por unidades familiares que entre sí han establecido vínculos matrimoniales y de parentesco en general, bajo reglas específicas de autoridad doméstica (suegro).
- Un sistema de organización social en el que la figura de *gran jefe* (jefatura), ha asumido la función de liderazgo para enfrentar la necesidad de alianzas y de resolución de diferencias entre los diferentes segmentos.

Estas y otras prácticas han entrado en crisis, en buena medida por el conflicto armado, el confinamiento en las partes altas de la Serranía del Perijá y la colonización, de modo que también su territorio ancestral ha sido igualmente afectado. Sin embargo no han desaparecido. Aúnque en mucho menor medida, los Yukpa practican actividades económicas (caza, pesca, reolección) conjuntamente con la agricultura, que implican que la movilidad en el territorio tiene un gran valor. Igualmente cuentan con una noción de

efensoría
el Pueblo

territorio ancestral, donde se encuentran sus lugares de origen, donde habita su memoria, su historia, que hace parte fundamental de su identidad cultural. Igual que otros pueblos indígenas, el Wayùu por ejemplo, los Yukpa tienen un complejo territorial que incluso es transfronterizo, toda vez que los de ambos lados de la frontera observan diferentes formas de intercambio.

Los derechos territoriales de los pueblos indígenas comprenden dos acepciones: el ámbito territorial sobre el que ejercen prácticas culturales, funcionales y de supervivencia material, independientemente del régimen de propiedad de la tierra; y la tierra titulada de forma colectiva (resguardo), considerada inembargable, imprescriptible e inajenable.

Tal rasero aplica también para el pueblo Yukpa. Ellos poseen un territorio ancestral (y un ámbito territorial), que si bien está lesionado por fenómenos como los descritos, no inhibe la observancia de otros derechos asociados a su supervivencia (como moverse, cazar, pescar, asentarse), así como el derecho a que se les delimite y reconozca en los términos del Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT) el Decreto 2333 de 2014, y la Sentencia T/713 de 2017.

Reiteramos que la Defensoría estará presta a brindar el acompañamiento que se requiera y atenta a cualquier información sobre este particular.

Cualquier inquietud comunicarse al teléfono 3125328183 y/o al correo electrónico mpinilla@defensoria.gov.co.

Cordialmente,

PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO
DEFENSOR DELEGADO PARA INDIGENAS Y MINORIAS

Proyectó: Carlos A. Ruiz, Bernardo Pinilla
Revisó: Pedro Santiago Posada Arango
Consecutivo Dependencia: 40120-0591

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

Bogotá D.C. julio de 2019

CORTE CONSTITUCIONAL
2019 JUL 24 A 10:51
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO

Doctora
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada Presidente
Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004
Corte Constitucional
Palacio de Justicia Calle 12 No. 7-65
Ciudad

Referencia: Informe de seguimiento al cumplimiento del Auto 004 de 2009 Plan de Salvaguarda Indígena yukpa.

En el marco del seguimiento que realiza la Defensoría del Pueblo, al cumplimiento de lo ordenado en el Auto 004 de 2009, de manera atenta nos permitimos dar a conocer los avances y barreras presentadas para avanzar con el pueblo yukpa, así como otros hechos asociados al estado de las cosas inconstitucional para la garantía de los derechos de estos indígenas.

I. Sobre el Auto 004.

1

Para dar cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional el Ministerio del Interior concertó una ruta metodológica para la formulación de los planes, que consiste en los siguientes pasos: (i) preconsulta, (ii) formulación de un diagnóstico de afectaciones, (iii) concertación interinstitucional del plan de acuerdo al diagnóstico de las afectaciones, (iv) protocolización del plan de acción, e (v) implementación.

En cumplimiento de la ruta metodológica pactada con las autoridades indígenas yukpa el Ministerio del Interior firmo un convenio interadministrativo con la Organización Nacional indígena de Colombia para la formulación del diagnóstico y las líneas de acción del Plan de Salvaguarda del Pueblo Yukpa. A continuación, se referencian las principales actividades desarrolladas en relación con el Auto 004 de 2009:

1. Entre el año 2013 y el año 2015 se adelantaron las fases de preconsulta y formulación del diagnóstico de afectaciones.

2. El día 09 de febrero de 2017 se realizó reunión de concertación del documento diagnóstico y líneas de acción del Plan de salvaguarda con la presencia de las instituciones de gobierno de nivel nacional. El Ministerio de Ambiente, Ministerio del Interior, Dirección de Consulta Previa, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio y Artesanías de Colombia, Gobernación, Secretaría de Salud Departamental, Alcaldías, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, Instituto Nacional de Salud, URT, ANLA, ANM, ANH, IGAC,

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ICBF, IPS y EPS Indígenas, UARIV, UNP, MINTIC, DPS, Pueblo Yukpa, Unidad Nacional de Protección, DAICMA, Alcaldía Becerril.

Dentro de los acuerdos interinstitucionales, el Ministerio del Interior se comprometió la a actualización del documento diagnóstico y líneas de acción del Plan de Salvaguarda Yukpa en relación con las afectaciones territoriales y ambientales resultado de la actividad minera en el territorio. Así como la realización de tres (3) mesas técnicas para la definición de un Plan de Acción para la implementación Plan Salvaguarda del pueblo Yukpa, de acuerdo con los mínimos de racionalidad establecidos por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009.

3. Entre el año 2017 y junio de los corrientes los indígenas yukpas han denunciado que su situación territorial es crítica, debido a que se encuentran en pequeños resguardos en la serranía de Perijá en el departamento del Cesar en los municipios de Codazzi, La Paz, Manaure, Becerril, con un déficit en materia de tierras por el aumento de su población. Si bien existen compromisos institucionales para la ampliación, el saneamiento y la titulación de territorios no hay avances en el cumplimiento.

Su movilidad y sus prácticas económicas tradicionales como la caza y la recolección están en riesgo por el despojo territorial debido a intereses económicos legales asociados a la gran minería y la expansión de agroindustria, en su mayoría Palma de aceite, e ilegales en sus territorios. Esta situación implica una pérdida de su autonomía y su seguridad alimentaria la cual ha generado problemáticas de desnutrición en la población infantil en los últimos años. Frente a esta problemática los Yukpa han denunciado la muerte de 27 niños yukpa entre el año 2018 y lo que va de 2019 por causas asociadas a la falta de territorio para garantizar la subsistencia alimentaria y, a la desnutrición.

Igualmente se han agudizado conflictos territoriales entre campesinos e indígenas, y con otros pueblos indígenas, relacionados con incumplimientos institucionales en los cronogramas de adquisición de predios. Estos conflictos territoriales han dado lugar a amenazas y señalamientos de las autoridades y líderes indígenas Yukpa, debido a desinformación sobre las aspiraciones territoriales del pueblo Yukpa y su relación con derechos de terceros.

Frente a esta situación la Defensoría del Pueblo realizó jornada de promoción y divulgación de derechos a la población campesina, con la Delegada para Asuntos Agrarios y de Tierras, la Delegada para Grupos Étnicos y la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana.

En dicha jornada se socializaron los avances en cumplimiento de la sentencia T-713 de 2017 y se acordó el acompañamiento y la gestión de la Defensoría del Pueblo para la garantía de los derechos campesinos y la implementación de una ruta concertada para prevenir y abordad posibles conflictos interculturales ocasionados entre otras razones por el incumplimiento de la ANT en materia de tierras.

En este sentido, las autoridades yukpa han puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo que desde febrero del año 2017 el Ministerio del Interior no adelanta acciones en el marco del Plan de Salvaguarda yukpa, tampoco ha llevado un seguimiento del avance de los compromisos institucionales adquiridos ni ha presentado un Plan para desbloquear los procesos de concertación que priorice al Pueblo Yukpa de acuerdo con lo ordenado en el Auto 266 de 2017. Tampoco se adelantaron las mesas técnicas de manera que no cuenta con un Plan de Acción para la implementación del Plan de Salvaguarda, concertado con las entidades del Estado, con responsables y acciones a corto, mediano y largo plazo, con las respectivas metas presupuestales y con componentes de atención, prevención, protección, reparación y garantías de no repetición

Por otro lado, el Ministerio del Interior no ha continuado con el fortalecimiento organizativo y el gobierno propio del pueblo indígena yukpa de acuerdo con los compromisos adquiridos o avanzado en la actualización del documento diagnóstico y líneas de acción en relación con las afectaciones territoriales y ambientales asociadas a la gran minería.

II. Situaciones asociadas al estado de las cosas inconstitucional para la garantía de los derechos de estos indígenas

También, la Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento de otras situaciones relacionadas con:

a) El desplazamiento forzado de esta población, en la actualidad hay indígenas yukpa en condición de desplazamiento en diferentes municipios y/o departamentos del país, como Valledupar, Bosconia, Codazzi, Aguachica, Chiriguana, Chimichagua, Fundación, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, Dibulla. Su principal preocupación es la atención humanitaria de emergencia a la población desplazada, los indígenas en situación de desplazamiento manifiestan que las entidades de los municipios les informan que no cuentan con los recursos necesarios para brindar la atención.

b) Los procesos de reparación y restitución de derechos de las víctimas del conflicto armado en el marco del decreto ley 4633 de 2011, las autoridades yukpa denuncian atrasos por parte del UARIV en la entrega de ayudas humanitarias de emergencia y transición, así como falencias en los procesos de reparación integral una vez que están inscritos en el RUV, pues no se tiene en cuenta el enfoque diferencial étnico ni la situación de vulnerabilidad acentuada de la población.

c) Indígenas yukpa migrantes de Venezuela. De acuerdo con las autoridades yukpa los municipios de Becerril, Codazzi, y La Paz respectivamente han sido receptores de población yukpa proveniente de Venezuela. Se habla de un número aproximado a los mil (1000) habitantes. Parte de esta población se encuentra en los cascos urbanos de Becerril y Codazzi.

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

En relación con la garantía de los derechos fundamentales de la población yukpa proveniente de Venezuela la situación es crítica[1]. De acuerdo con el reporte de riesgo de mayo de 2018 en Norte de Santander, esta población ha sido víctima de discriminación, amenazas y de falta de respuesta institucional en materia de salud, alimentación, educación, vivienda digna y atención a la primera infancia. No se le ha resuelto su situación jurídica, algunos cuentan con cédula venezolana y otros no tienen documento. Se está trabajando en una ruta con la Registraduría para resolver si situación teniendo en cuenta su condición de pueblo binacional.

d) Identificación de los indígenas yukpa. Tampoco se ha garantizado el registro civil para la población infantil, esta situación es un obstáculo para el acceso a los servicios del Estado para la garantía de los derechos, presentándose:

- Desescolarización en materia de educación primaria, secundaria, técnica y universitaria, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

- Desatención en salud en los niveles primarios, en los componentes de citas médicas, tratamiento y medicamentos. Sólo están siendo atendidos por urgencias. Los medicamentos formulados en urgencias, no están siendo suministrados por los centros de Salud.

- Falta de atención con enfoque diferencial para ser incluidos en programas de primera infancia, y de madres gestantes y lactantes.

- Falta de oportunidades en los derechos económicos, sociales y culturales.

d) Derecho a la autonomía. En relación con este derecho las autoridades indígenas yukpa han denunciado falta de garantía del derecho fundamental a la Consulta previa a través de derechos de petición y en los espacios institucionales para el cumplimiento de la T-713 de 2017. Manifiestan que en los casos de proyectos de exploración, explotación y aprovechamiento de recursos naturales en territorio ancestral y/o tradicional del pueblo yukpa, el Ministerio del Interior no certifica la presencia de comunidades Yukpa. La falta de certificación de las comunidades, ya vulnerables, y puede causar daños irreparables a su integridad étnica y cultural. Esta situación se presentó en la certificación de presencia de comunidades para el proyecto Represa Multipropósito del río Majiriaimo en el municipio de Codazzi departamento del Cesar.

La Defensoría observa que el Ministerio del Interior no tiene en cuenta el territorio tradicional y/o ancestral del pueblo yukpa más allá del resguardo, para certificar la presencia y garantizar el derecho fundamental a la consulta previa. En este sentido no se aplica lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a que el territorio tradicional de los pueblos indígenas

[1] La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha denunciado desalojos forzados y violentos que terminan en fuertes enfrentamientos entre los indígenas y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

incluye el espacio que estos ocupan o utilizan de alguna manera.

Esta situación se refleja igualmente en la sentencia T-713 de 2017 en la cual la Corte Constitucional falló a favor del pueblo yukpa para que se determine si el Espacio Transitorio de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de San José de Oriente ubicado en el municipio de La Paz Cesar, se encuentra en territorio ancestral del pueblo Yukpa y si así se determina y se define su vocación de permanencia se garantice el proceso de consulta previa. A la fecha si bien el gobierno nacional en cabeza del Alto Comisionado para la Paz adelanta el proceso de consulta previa, no se ha definido o por lo menos no se ha informado la decisión del gobierno nacional sobre la vocación de permanencia de la ETCR y en ese caso las medidas de manejo que se deberán implementar para la protección de la integridad étnica y cultural del pueblo indígena Yukpa.

e) En relación con los derechos económicos sociales y culturales existe omisión de las autoridades estatales en formular e implementar programas que atiendan a la realidad de las comunidades destinatarias y que tengan en cuenta ***los usos y costumbres*** que los circunscriben.

Teniendo en cuenta lo anterior, y en atención a las solicitudes reiteradas de las autoridades indígenas del pueblo yukpa, la Defensoría llama la atención sobre la agudización de factores de riesgo identificados en el Auto 004 de 2009.

Recomendación.

Teniendo en cuenta que desde el año 2016 a la fecha, no se ven avances concretos por parte del gobierno nacional, departamental y local para dar cumplimiento al Auto 004 de 2009 y el Auto 266 de 2017, que permitan destrabar los procesos de concertación del Plan de Salvaguarda, construir el Plan de Acción y realizar acciones concretas de implementación que permitan avanzar hacia la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), respetuosamente solicitamos a la Honorable Corte Constitucional adelante las acciones que considere pertinentes para que el gobierno nacional avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el pueblo yukpa para culminar la formulación e implementación del Plan de Salvaguarda, el Plan de Acción con acciones de atención, prevención, protección, reparación y garantías de no repetición, con el concurso de las diferentes entidades nacionales, departamentales y municipales llamadas a dar cumplimiento al Auto 004 de 2009.

Atentamente,

FELIPE VERNAZA PINZÓN
Delegado para los Derechos de la Población en Movilidad Humana

Proyecto: Janneth Moreno M, Manuel Bernardo Pinilla.
Reviso: Felipe Vernaza Pinzón.
Archivado en: Seguimiento Auto 004 de 2009
Consecutivo Dependencia: 4090-093- 2019

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 27-02-2020 15:56
Al Contestar Cite Este No.: 2020EE0015266 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7130-OFICINA ASESORA DE PLANEACION / JULIO CESAR PINILLOS PATIÑO
DESTINO AUTORIDADES YUKPA COLOMBIA SERRANIA DEL PERIJÁ
ASUNTO RESPUESTA DERECHO DE PETICION- SOLICITUD INFORMACIÓN DE REGALÍAS
OBS

2020EE0015266

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2020

RESGUARDO INDIGENA
YUKPA IROKA
NIT. 824.002.010-2
RECIBIDO
Folios 10
Hora 10:39 AM
09/03/2020

Señores
AUTORIDADES YUKPA COLOMBIA SERRANÍA DEL PERIJÁ
Calle 12 # 15-26
Agustín Codazzi-Cesar

ASUNTO: Respuesta derecho de Petición- Solicitud información de regalías
Radicado Ministerio 2020ER0009884

Respetados Señores,

En atención al comunicado con radicado; 2020ER0009884 mediante el cual solicitan información de los recursos de regalías asignados a los municipios de Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Curumaní, así como los proyectos aprobados de acueductos y alcantarillados en área urbana y rural de los municipios mencionados, nos permitimos informar lo siguiente:

En el año 2012, con el fin de realizar una distribución equitativa de los recursos de regalías y promover el desarrollo y competitividad regional de todos los departamentos, distritos y municipios; el Gobierno Nacional expidió la Ley 1530 cuyo fin es: "(...)*determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios*".

La destinación de los recursos de regalías se debe realizar a través de proyectos de inversión. Es por ello que en el artículo 6 de la mencionada Ley se definen a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), como los responsables de establecer los proyectos de inversión que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías; así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar; además, designarán su ejecutor que será de naturaleza pública.

Las decisiones que se definen en los OCAD se adoptan con un mínimo de dos votos favorables sobre tres (3); Uno del Gobierno Nacional, Uno del Gobierno Departamental y Uno Municipal. Dado que el Gobierno Nacional debe emitir un voto, es allí donde se requiere la participación de los Ministerios para respaldar al delegado con un concepto sectorial, el cual describe si el proyecto cumple técnicamente.

Complementario a lo anterior, bajo los acuerdos 045 de 2017 y 052 de 2018 expedidos por la Comisión Rectora del SGR, se establecieron los requisitos de los proyectos susceptibles a ser financiados con recursos de regalías y se definió como plazo para la emisión de conceptos a los Ministerios, de 5 días hábiles (artículo 3.1.7.1 del acuerdo 045)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 27-02-2020 15:56
Al Contestar Cite Este No.: 2020EE0015266 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7130-OFICINA ASESORA DE PLANEACION / JULIO CESAR PINILLOS PATIÑO
DESTINO AUTORIDADES YUKPA COLOMBIA SERRANÍA DEL PERIJÁ
ASUNTO RESPUESTA DERECHO DE PETICION- SOLICITUD INFORMACIÓN DE REGALÍAS
OBS

2020EE0015266

De acuerdo a las anteriores consideraciones, el rol del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ante el Sistema General de Regalías, está enfocado en brindar asistencia técnica a las Entidades Territoriales para la formulación de proyectos y emitir conceptos técnicos de proyectos postulados en los diferentes OCAD.

Ahora, respecto a las consultas realizadas en el derecho de petición, nos permitimos dar respuesta a los numerales 10 y 13, dentro de las competencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Pregunta No. 10. *Favor informar cuántos proyectos de agua potable y saneamiento urbano sector urbano, cuántos recursos, los lugares y el valor han sido financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en los municipios de: Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Curumaní. Favor indicar año tras año desde el año 1990 al año 2019*.

Pregunta 13. *Favor informar cuántos proyectos de agua potable y saneamiento urbano sector rural, cuántos recursos, los lugares y el valor, han sido financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en los municipios de: Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Curumaní. Favor indicar año tras año desde el año 1990 al año 2019*.

Respuesta:
Al revisar ***El Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico SIGEVAS*** del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; no se encontraron registros de proyectos con concepto favorable en los municipios de Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Curumaní. Lo anterior concluye que no fueron postulados proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico ante los OCAD Departamental o Regional por parte de la Gobernación del Cesar o de los municipios antes mencionados.

Para solicitar información de los OCAD Municipales, debe realizarse directamente al Departamento Nacional de Planeación, ya que hace parte de sus competencias.

Cualquier información adicional sobre el particular puede comunicarse con la Oficina Asesora de Planeación, al teléfono 3323434, extensión 4210.

Cordialmente,

JULIO CESAR PINILLOS PATIÑO
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Elaboró: Luis Ramirez-Contratista
Fecha: 27-02-2020

Bogotá D.C., martes, 12 de marzo de 2019

Al responder cite este Nro.
20194600173961

DSGR

Señores
JAIME LUIS OLIVELLA MARQUERZ
Gobernador
Cabildo del Resguardo El Rosario
ALFREDO PEÑA FRANCO
Gobernador
Cabildo del Resguardo Iroka
EMILIO VALLE MARTÍNEZ
Gobernador
Cabildo del Resguardo Menkwe Mishaya
ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO
Gobernadora
Cabildo del Resguardo Sokorpa
ALIRIO VALLE REYES
Gobernador
Cabildo del Resguardo Caño Padilla
ANDRÉS VENCE VILLAR
Gobernador
Cabildo del Resguardo La Laguna
Calle 12 N°15-28
Agustín Codazzi - Cesar
Correo electrónico: serraniaresguardosokorpa@gmail.com
Correo electrónico: yukpadeiroka@hotmail.com

Asunto: Su comunicación 20196630086372.

En relación con su comunicación radicada ante el Departamento Nacional de Planeación bajo el número 20196630086372, relacionada con la inversión de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) a través de la ejecución de proyectos de inversión en los municipios en los que tienen asentamiento las comunidades indígenas que representan y del proceso de consulta previa para realizar tales inversiones, de manera atenta se da respuesta con base en los lineamientos dado por la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando 20193200032043, en los siguientes términos:

En primer lugar, se señala que en virtud de lo dispuesto por el artículo 287[1] de la Constitución Política, las entidades territoriales gozan de la autonomía para la gestión de sus intereses, sin perjuicio del cumplimiento de la misma Constitución y de la ley.

[1] Constitución Política de Colombia. "***Artículo 287.*** *Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales.*"

Ahora bien, el artículo 7[2] de la Constitución Política estableció como principio fundamental el reconocimiento y protección por parte del Estado a la diversidad étnica y cultural de la Nación que *"supone la aceptación de cosmovisiones y de estándares valorativos diversos y hasta contrarios a los valores de una ética universal"*[3]. En ese sentido, el Estado debe procurar el desarrollo de políticas dirigidas a proteger a las comunidades étnicas.

En cumplimiento del mandato constitucional, el artículo 2 de la Ley 1530 de 2012[4] señaló como uno de los objetivos del SGR propiciar la inclusión, equidad, participación y desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, del pueblo Rom o Gitano y de los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con sus planes de etnodesarrollo y planes de vida respectivos.

Para el logro del objetivo del Sistema antes mencionado, el parágrafo primero del artículo 34 de la mencionada Ley 1530 de 2012, establece que del total de los recursos del 40% del Fondo de Compensación Regional, que financia proyectos de impacto local, se destine por parte de las entidades beneficiarias hasta un 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y, hasta otro 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades indígenas.

Así mismo, el artículo 40 de la mencionada Ley 1530 de 2012, indica que los municipios con ingresos de asignaciones directas superiores a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) recibidos el año inmediatamente anterior, en los que se encuentran asentadas comunidades indígenas y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras acreditadas por la autoridad competente, destinarán al menos el 3% de estos recursos para proyectos de inversión con enfoque diferencial en esa población. De la misma forma se señala, que los departamentos con ingresos de asignaciones directas superiores a 2.000 smlmv recibidos el año inmediatamente anterior, destinarán al menos el 1% de dichos recursos para el mismo fin.

En relación con la formulación y presentación de proyectos de inversión con enfoque diferencial susceptibles de ser financiados con recursos del SGR, el artículo 25 de la precitada Ley 1530 de 2012 señaló que todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y las comunidades étnicas podrán formular proyectos de inversión ante las secretarías técnicas, de conformidad con las metodologías y lineamientos que defina el Departamento Nacional de Planeación[5] y con base en los lineamientos que definió la Comisión Rectora del SGR en el Acuerdo Único del SGR (Acuerdo 45 de 2017).

Una vez estructurada la iniciativa que se pretenda financiar, se procede a su revisión por parte de la respectiva secretaría de planeación de la entidad territorial y a su presentación ante la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión (OCAD), por los representantes legales de las entidades territoriales, por los representantes de las comunidades étnicas o por el Gobierno nacional, para surtir la verificación de requisitos contenidos en el mencionado Acuerdo Único del SGR.

Si el proyecto cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012, los lineamientos de la Metodología General Ajustada (MGA)[6] y los requisitos señalados en el Acuerdo 45 de 2017, la secretaría técnica del OCAD lo someterá a consideración de los miembros del órgano colegiado para su viabilización, priorización, aprobación y designación de la entidad ejecutora.

---

[2] Constitución Política de Colombia. "***Artículo 7.*** *El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.*"
[3] Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia No. T-254/94
[4] *"Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías"*
[5] *"Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo"*
[6] http://sgr.dnp.gov.co/Proyectos/MGA.aspx.

El mencionado artículo 25 de la Ley 1530 de 2012 también indicó que los proyectos de inversión serán presentados por las entidades territoriales al respectivo OCAD y tratándose de proyectos que tengan enfoque diferencial en las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la presentación de los mismos se realizará por los representantes de estas comunidades, elegidos de manera autónoma por las Organizaciones de Base de Comunidades Negras o Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, debidamente inscritas en el registro único del Ministerio del Interior.

Concordante con lo anterior, el artículo 3.5.3 del mencionado Acuerdo Único del SGR estableció que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) dispondrá de una ventanilla para la presentación de proyectos de inversión por parte de los representantes de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y de las comunidades Indígenas registradas en el Ministerio del Interior, para ser considerados por el respectivo OCAD. En cumplimiento de lo anterior, la Dirección del Sistema General de Regalías del DNP en desarrollo de sus funciones, apoya a las comunidades étnicas para la creación de usuarios de ventanilla única para presentación de proyectos con enfoque diferencial.

El artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.4.3.1.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Planeación Nacional (Decreto 1082 de 2015), señalan que los OCAD son los responsables de definir los proyectos de inversión que sean sometidos a su consideración para ser financiados con recursos del SGR, así como de evaluar, viabilizar, priorizar y aprobar la conveniencia y oportunidad de financiarlos, previa verificación de la disponibilidad de los recursos certificada en las leyes de presupuesto del SGR. Los OCAD también son responsables de la designación de la entidad ejecutora y la entidad encargada de contratar la interventoría, de los proyectos de inversión.

Por su parte el artículo 2.2.4.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, indica que los OCAD debe tener como insumo para la toma de sus decisiones el Plan Bienal de Caja y el cronograma de flujos por ellos definido, la identificación estimativa de proyectos de inversión susceptible de financiamiento con cargo a los recursos del SGR contenida en los documentos anexos del Presupuesto Bienal del Sistema y la aplicación de las herramientas de apoyo a la priorización de proyectos que diseñe el DNP.

Adicionalmente, el artículo 3.5.2 del Acuerdo Único del SGR señala que, corresponde a los OCAD evaluar, priorizar y aprobar al menos en una sesión del año proyectos de inversión con enfoque diferencial que pretendan su financiación con recursos de las asignaciones directas; y por lo menos en una sesión del bienio proyectos con enfoque diferencial, con los recursos provenientes del 40% del Fondo de Compensación Regional en las entidades territoriales donde se encuentren asentadas comunidades étnicas, de conformidad con la información que al respecto certifique el Ministerio del Interior.

Ahora bien, la consulta previa tiene su fundamento jurídico en los artículos 7, 8, 9, 10, 13, 95 y 330 de la constitución Política, en el Convenio 169 de la OIT, en los artículos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991, en el Decreto 1320 de 1998 y en las Directivas Presidenciales 01 de 2010 y 10 de 2013. Así mismo, la Corte Constitucional ha definido en sus pronunciamientos, los parámetros que se deben tener en cuenta por las entidades y sujetos responsables, por las comunidades étnicas afectadas, por los particulares que resulten inmersos y por el Ministerio del Interior como coordinador de la consulta correspondiente.

La consulta previa ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como el derecho fundamental de las comunidades indígenas, tribales y afrocolombianas a ser consultadas sobre cualquier decisión que pueda

afectarles directamente, como expresión del derecho a la libre determinación de los pueblos y a la participación[7], es necesaria en los casos previstos en los artículos 329 y 330 de la Constitución Política, así como para la adopción de medidas legislativas o administrativas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas y tribales.

En ese sentido y conforme a lo solicitado en el punto noveno de su comunicación, se indica que en la actualidad no se está adelantando reforma al Sistema a iniciativa del Gobierno Nacional, de adelantarse, se realizarán los respectivos análisis jurídicos sobre la procedencia de dicha consulta. Se sugiere que en caso de requerir mayor información frente a este tema se dirijan al Ministerio del Interior para que se señale el procedimiento y casos en los que procede, dada sus competencias.

Respecto del punto cuarto y octavo de su comunicación, de acuerdo con la exposición realizada en este documento sobre las asignaciones a favor de las comunidades con enfoque diferencial, nuestra asesora para asuntos étnicos Carolina Alvarado Ovalle, tiene programada para los días 28 y 29 de marzo una reunión con el fin de capacitar y brindar asistencia técnica al pueblo Yukpa en el sistema general de regalías. Cualquier inquietud al respecto se podrá comunicarse a través del correo electrónico: caralvarado@dnp.gov.co.

En cuanto a los puntos quinto, sexto y séptimo de su comunicación, de manera atenta le informamos que mediante los radicados 20194600097531, 20194600097541, 20194600097571, 20194600097581, 20194600172431, 20194600172481, 20194600172551 y 20194600172601, los cuales se anexan, se le dio traslado a las Secretarias Técnicas de los OCAD de los municipios de la Paz, Codazzi, Becerril y departamento del Cesar, por ser de su competencia.

La presente comunicación, no constituye concepto jurídico alguno toda vez que no es competencia de esta Dirección, y se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015.

Cordialmente,

JULIÁN EDUARDO POLANIA POLANIA
Director Sistema General de Regalías

Anexo: 20194600097531, 20194600097541, 20194600097571, 20194600097581, 20194600172431, 20194600172481, 20194600172551 y 20194600172601.

Preparó: Fidelia Isabel Barrios Díaz -Abogada DSGR.
Revisó: María Clara Mojica R. -Asesora DSGR
Carolina Alvarado – Asesora Enfoque.

[7] Sentencia T-660/15. Referencia: Expediente T-4.520.563. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015)

El futuro es de todos

Bogotá D.C., miércoles, 20 de febrero de 2019

Al responder cite este Nro.
20194600097531

DSGR

Señor
SECRETARÍA TÉCNICA
OCAD municipio de Becerril
Cl. 9 #72 código postal 203001
Becerril – Cesar

Asunto: Traslado de solicitud 20196630086372.

Cordial saludo,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011[1], respetuosamente se da traslado de la petición contenida en la comunicación relacionada en el asunto, mediante la cual, los gobernadores indígenas de la Serranía del Perijá solicita:

"QUINTO: Informar a los seis (6) resguardos indígenas y comunidades no resguardadas del pueblo Yukpa (...) Cuantos recursos del porcentaje del Sistema General de Regalías correspondientes a los pueblos indígenas, se han aprobado desde (...) los OCAD municipios de Becerril (...), vigencias fiscales año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, en que proyectos, que valores y presentar las actas de aprobación de nuestras autoridades indígenas Yukpa.

SEXTO: Informar a los seis (6) resguardos indígenas y comunidades no resguardadas del pueblo Yukpa (...) cuantos recursos están disponibles del porcentaje del Sistema General de Regalías correspondientes a los pueblos indígenas (...) del OCAD municipio de Becerril (...)".

Lo anterior, toda vez que, como lo dispone el Acuerdo 045 de 2017 y sus modificaciones, las Secretarías Técnicas de los OCAD son las encargadas proporcionar la información aquí trasladada.

Agradezco su amable atención y aprovecho la oportunidad para manifestar la disposición del Departamento Nacional de Planeación para atender cualquier inquietud o sugerencia.

Atentamente,

JULIAN EDUARDO POLANIA POLANIA
Director Sistema General de Regalías

Anexo: solicitud 20196630086372.

Preparó: Carolina Alvarado Ovalle - Contratista Convenio 215050
Fidella Isabel Barrios Diaz – Contratista Convenio 215050.
Revisó: María Clara Mojica R. -Asesora DSGR.

[1] Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015"*Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente*".

El futuro es de todos

DNP Departamento Nacional de Planeación

Bogotá D.C., miércoles, 20 de febrero de 2019

Al responder cite este Nro.
20194600097541

DSGR

Señor
SECRETARÍA TÉCNICA
OCAD municipio de Agustín Codazzi
Carrera16 # 17 - 02 código postal 202050
Agustín Codazzi -Cesar

Asunto: Traslado de solicitud 20196630086372.

Cordial saludo,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011[1], respetuosamente se da traslado de la petición contenida en la comunicación relacionada en el asunto, mediante la cual, los gobernadores indígenas de la Serranía del Perijá solicita:

"QUINTO: Informar a los seis (6) resguardos indígenas y comunidades no resguardadas del pueblo Yukpa (...) Cuantos recursos del porcentaje del Sistema General de Regalías correspondientes a los pueblos indígenas, se han aprobado desde (...) los OCAD municipio de Agustín Codazzi (...), vigencias fiscales año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, en que proyectos, que valores y presentar las actas de aprobación de nuestras autoridades indígenas Yukpa.

SEXTO: Informar a los seis (6) resguardos indígenas y comunidades no resguardadas del pueblo Yukpa (...) cuantos recursos están disponibles del porcentaje del Sistema General de Regalías correspondientes a los pueblos indígenas (...) del OCAD municipio de Agustín Codazzi (...)".

Lo anterior, toda vez que, como lo dispone el Acuerdo 045 de 2017 y sus modificaciones, las Secretarías Técnicas de los OCAD son las encargadas proporcionar la información aquí trasladada.

Agradezco su amable atención y aprovecho la oportunidad para manifestar la disposición del Departamento Nacional de Planeación para atender cualquier inquietud o sugerencia.

Atentamente,

JULIAN EDUARDO POLANIA POLANIA
Director Sistema General de Regalías

Anexo. solicitud 20196630086372.

Preparó: Carolina Alvarado Ovalle - Contratista Convenio 215050.
Fidelia Isabel Barrios Diaz – Contratista Convenio 215050.
Revisó: María Clara Mojica R. -Asesora DSGR.

[1] Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015"*Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente*"

El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Bogotá D.C., miércoles, 20 de febrero de 2019

Al responder cite este Nro.
20194600097571

DSGR

Señor
SECRETARÍA TÉCNICA
OCAD departamento del Cesar
Cra. 14 #14-100 código postal 200001
Valledupar, Cesar

Asunto: Traslado de solicitud 20196630086372.

Cordial saludo,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011[1], respetuosamente se da traslado de la petición contenida en la comunicación relacionada en el asunto, mediante la cual, los gobernadores indígenas de la Serranía del Perijá solicita:

"QUINTO: Informar a los seis (6) resguardos indígenas y comunidades no resguardadas del pueblo Yukpa (...) Cuantos recursos del porcentaje del Sistema General de Regalías correspondientes a los pueblos indígenas, se han aprobado desde (...) los OCAD departamento del Cesar (...), vigencias fiscales año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, en que proyectos, que valores y presentar las actas de aprobación de nuestras autoridades indígenas Yukpa.

SEXTO: Informar a los seis (6) resguardos indígenas y comunidades no resguardadas del pueblo Yukpa (...) cuantos recursos están disponibles del porcentaje del Sistema General de Regalías correspondientes a los pueblos indígenas (...) del OCAD departamento del Cesar (...)".

Lo anterior, toda vez que, como lo dispone el Acuerdo 045 de 2017 y sus modificaciones, las Secretarías Técnicas de los OCAD son las encargadas proporcionar la información aquí trasladada.

Agradezco su amable atención y aprovecho la oportunidad para manifestar la disposición del Departamento Nacional de Planeación para atender cualquier inquietud o sugerencia.

Atentamente,

JULIÁN EDUARDO POLANÍA POLANÍA
Director Sistema General de Regalías

Anexo: solicitud 20196630086372.

Preparó: Carolina Alvarado Ovalle - Contratista Convenio 215050.
Fidelia Isabel Barrios Díaz – Contratista Convenio 215050.
Revisó: María Clara Mojica R. -Asesora DSGR.

[1] Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015"*Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente*".

El futuro es de todos

DNP Departamento Nacional de Planeación

Bogotá D.C., miércoles, 20 de febrero de 2019

Al responder cite este Nro.
20194600097581

DSGR

Señor
SECRETARÍA TÉCNICA
OCAD municipio de La Paz
Cra. 7 No. 8A -09 código postal 202010
La Paz - Cesar

Asunto: Traslado de solicitud 20196630086372.

Cordial saludo,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011[1], respetuosamente se da traslado de la petición contenida en la comunicación relacionada en el asunto, mediante la cual, los gobernadores indígenas de la Serranía del Perijá solicita:

"QUINTO: Informar a los seis (6) resguardos indígenas y comunidades no resguardadas del pueblo Yukpa (...) Cuantos recursos del porcentaje del Sistema General de Regalías correspondientes a los pueblos indígenas, se han aprobado desde (...) los OCAD municipio de La Paz (...), vigencias fiscales año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, en que proyectos, que valores y presentar las actas de aprobación de nuestras autoridades indígenas Yukpa.

SEXTO: Informar a los seis (6) resguardos indígenas y comunidades no resguardadas del pueblo Yukpa (...) cuantos recursos están disponibles del porcentaje del Sistema General de Regalías correspondientes a los pueblos indígenas (...) del OCAD municipio de La Paz (...)".

Lo anterior, toda vez que, como lo dispone el Acuerdo 045 de 2017 y sus modificaciones, las Secretarías Técnicas de los OCAD son las encargadas proporcionar la información aquí trasladada.

Agradezco su amable atención y aprovecho la oportunidad para manifestar la disposición del Departamento Nacional de Planeación para atender cualquier inquietud o sugerencia.

Atentamente,

JULIÁN EDUARDO POLANÍA POLANÍA
Director Sistema General de Regalías

Anexo: solicitud 20196630086372.

Preparó. Carolina Alvarado Ovalle - Contratista Convenio 215050.
Fidelia Isabel Barrios Diaz – Contratista Convenio 215050.
Revisó: María Clara Mojica R. -Asesora DSGR.

[1] Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015*"Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente".*

El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Bogotá D.C., martes, 12 de marzo de 2019

Al responder cite este Nro.
20194600172431

DSGR

Señor
SECRETARÍA TÉCNICA
OCAD municipio de Agustín Codazzi
Carrera16 # 17 - 02 código postal 202050
Agustín Codazzi -Cesar

Asunto: Traslado de solicitud 20196630086372.

Cordial saludo,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011[1], respetuosamente se da traslado de la petición contenida en la comunicación relacionada en el asunto, mediante la cual, los gobernadores indígenas de la Serranía del Perijá solicita:

*"**SÉPTIMO:** Suspender inmediatamente la totalidad de los proyectos y por todas las fuentes, que se encuentren en estudio por los OCAD del departamento del Cesar, OCAD de los municipios de Becerril, Codazzi y la Paz, DNP y demás instituciones sectoriales, hasta que no se concerté los proyectos prioritarios y justos con los Pueblos indígenas Yukpa".*

Lo anterior, toda vez que, como lo dispone el Acuerdo 045 de 2017 y sus modificaciones, las Secretarías Técnicas de los OCAD son las encargadas proporcionar la información aquí trasladada.

Agradezco su amable atención y aprovecho la oportunidad para manifestar la disposición del Departamento Nacional de Planeación para atender cualquier inquietud o sugerencia.

Atentamente,

JULIÁN EDUARDO POLANIA POLANIA
Director Sistema General de Regalías

Anexo: solicitud 20196630086372. *

Preparó: Carolina Alvarado Ovalle - Contratista Convenio 215050.
Fidelia Isabel Barrios Diaz – Contratista Convenio 215050.
Revisó: María Clara Mojica R. -Asesora DSGR.

[1] Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015*"**Artículo 21. Funcionario sin competencia.** Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitiré la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente".*

El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Bogotá D.C., martes, 12 de marzo de 2019

Al responder cite este Nro.
20194600172481

DSGR

Señor
SECRETARÍA TÉCNICA
OCAD municipio de La Paz
Cra. 7 No. 8A -09 código postal 202010
La Paz - Cesar

Asunto: Traslado de solicitud 20196630086372.

Cordial saludo,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011[1], respetuosamente se da traslado de la petición contenida en la comunicación relacionada en el asunto, mediante la cual, los gobernadores indígenas de la Serranía del Perijá solicita:

*"**SÉPTIMO:** Suspender inmediatamente la totalidad de los proyectos y por todas las fuentes, que se encuentren en estudio por los OCAD del departamento del Cesar, OCAD de los municipios de Becerril, Codazzi y la Paz, DNP y demás instituciones sectoriales, hasta que no se concerté los proyectos prioritarios y justos con los Pueblos indígenas Yukpa".*

Lo anterior, toda vez que, como lo dispone el Acuerdo 045 de 2017 y sus modificaciones, las Secretarías Técnicas de los OCAD son las encargadas proporcionar la información aquí trasladada.

Agradezco su amable atención y aprovecho la oportunidad para manifestar la disposición del Departamento Nacional de Planeación para atender cualquier inquietud o sugerencia.

Atentamente,

JULIÁN EDUARDO POLANIA POLANIA
Director Sistema General de Regalías

Anexo: Solicitud 20196630086372.

Preparó: Carolina Alvarado Ovalle - Contratista Convenio 215050.
Fidelia Isabel Barrios Diaz – Contratista Convenio 215050.
Revisó: María Clara Mojica R. -Asesora DSGR.

[1] Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015"***Artículo 21. Funcionario sin competencia.*** *Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente".*

El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Bogotá D.C., martes, 12 de marzo de 2019

Al responder cite este Nro.
20194600172551

DSGR

Señor
SECRETARÍA TÉCNICA
OCAD departamento del Cesar
Cra. 14 #14-100 código postal 200001
Valledupar, Cesar

Asunto: Traslado de solicitud 20196630086372.

Cordial saludo,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011[1], respetuosamente se da traslado de la petición contenida en la comunicación relacionada en el asunto, mediante la cual, los gobernadores indígenas de la Serranía del Perijá solicita:

*"**SÉPTIMO:** Suspender inmediatamente la totalidad de los proyectos y por todas las fuentes, que se encuentren en estudio por los OCAD del departamento del Cesar, OCAD de los municipios de Becerril, Codazzi y la Paz, DNP y demás instituciones sectoriales, hasta que no se concerté los proyectos prioritarios y justos con los Pueblos indígenas Yukpa".*

Lo anterior, toda vez que, como lo dispone el Acuerdo 045 de 2017 y sus modificaciones, las Secretarías Técnicas de los OCAD son las encargadas proporcionar la información aquí trasladada.

Agradezco su amable atención y aprovecho la oportunidad para manifestar la disposición del Departamento Nacional de Planeación para atender cualquier inquietud o sugerencia.

Atentamente,

JULIÁN EDUARDO POLANIA POLANIA
Director Sistema General de Regalías

Anexo: solicitud 20196630086372.

Preparó: Carolina Alvarado Ovalle - Contratista Convenio 215050
Fidelia Isabel Barrios Diaz – Contratista Convenio 215050
Revisó: Maria Clara Mojica R. -Asesora DSGR.

[1] Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015"*Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente".*

El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Bogotá D.C., martes, 12 de marzo de 2019

Al responder cite este Nro.
20194600172601

DSGR

Señores
SECRETARÍA TÉCNICA
OCAD municipio de Becerril
Cl. 9 #72 código postal 203001
Becerril – Cesar

Asunto: Traslado de solicitud 20196630086372.

Cordial saludo,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011[1], respetuosamente se da traslado de la petición contenida en la comunicación relacionada en el asunto, mediante la cual, los gobernadores indígenas de la Serranía del Perijá solicita:

*"**SÉPTIMO:** Suspender inmediatamente la totalidad de los proyectos y por todas las fuentes, que se encuentren en estudio por los OCAD del departamento del Cesar, OCAD de los municipios de Becerril, Codazzi y la Paz, DNP y demás instituciones sectoriales, hasta que no se concerté los proyectos prioritarios y justos con los Pueblos indígenas Yukpa".*

Lo anterior, toda vez que, como lo dispone el Acuerdo 045 de 2017 y sus modificaciones, las Secretarías Técnicas de los OCAD son las encargadas proporcionar la información aquí trasladada.

Agradezco su amable atención y aprovecho la oportunidad para manifestar la disposición del Departamento Nacional de Planeación para atender cualquier inquietud o sugerencia.

Atentamente,

JULIAN EDUARDO POLANIA POLANIA
Director Sistema General de Regalías

Anexo: solicitud 20196630086372.

Preparó: Carolina Alvarado Ovalle - Contratista Convenio 215050.
Fidelia Isabel Barrios Diaz – Contratista Convenio 215050.
Revisó: María Clara Mojica R. -Asesora DSGR.

[1] Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015"*Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente*".

3

9. Trasladado lo
Min Interior
Dirección correcta
Prevías.

Autoridades Yukpa Colombia Serranía del Perijá

Resguardos Caño Padilla, El Rosario, Bella Vista y Yukatán, y La Laguna, El Coso y Cinco Caminos, municipio La Paz; Resguardos Iroka y Menkue, municipio Agustín Codazzi; y Resguardo Sokorpa, municipio Becerril.

Valledupar, febrero 11 de 2019

DNP
Rad No.: 20196630086372
Fecha: 2019-02-13 16:25:33 Usr. Rad.: CCRODRIGUEZ
Asunto: EN USO DEL DERECHO DE PETICION EL SR. JAIME LUIS OLIVELLA
Destino: DIRECCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Doctora
GLORIA AMPARO ALONSO MASMELA.
Directora de Planeación Nacional

Doctor
JULIAN POLANIA
Director - Direccion Sistema General de Regalias
DNP

Doctora
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
Ministra del Interior

Doctor
FERNANDO CÁRRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación

REF: Derecho de petición, regalías para donde no hay afectaciones ambientales.

"Hace mucho tiempo la tierra se empezó a llenar de agua, muchos Yukpa murieron porque el agua cubria todo, los animales también se murieron, pero estaban los cerros que tenían vida y empezaron a crecer, ellos le decían a la gente que se subieran para que se salvaran, entonces el cerro más fuerte vencía subiendo más alto que los demás, ese se llama Sekeimu y así fue como se salvó el Yukpa".[1]

Excelentísimos servidores públicos: Nosotros: **JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ**, mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con cédula de ciudadanía **N° 1.067.808.333** expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo el Rosario, Bella Vista y Yukatan asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según constancia expedida por el Ministerio del Interior con fecha de 2 de abril del 2014 y acta de posesión del 17 de marzo de 2014 suscrita por la Alcaldía Municipal de La Paz, **ALFREDO PEÑA FRANCO** mayor de edad, con domicilio en el municipio Agustín Codazzi, Cesar, identificado con la

[1] Parte de la historia del diluvio, primer encuentro del Plan de Salvaguarda, Valledupar- Cesar

9 folios. y
1 Copia

cédula de ciudadanía **N° 18.956.993** expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Iroka asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 28 de junio de 2018, acta de elección del 20 de junio de 2018 y acta de posesión N° 0378 del 25 de junio de 2018 suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, **ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO,** mayor de edad, con domicilio en el municipio Becerril del Campo, Cesar, identificada con la cédula de ciudadanía **N° 49.748.586** expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADORA DEL CABILDO del Resguardo Sokorpa asentado en la serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Becerril, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 21 de julio de 2015 y acta de elección del 28 de mayo de 2015 y acta de posesión del 12 de junio de 2015 suscrita por la Alcaldía Municipal de Becerril, **EMILIO OVALLE MARTÍNEZ,** mayor de edad, con domicilio en el municipio Agustín Codazzi, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía **N° 18.939.440** expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Menkwe, Mishaya, La Pista asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, según acta de posesión N° 0347 del 29 de enero de 2018 suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, **ALIRIO OVALLE REYES,** mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía **N° 77.040.052** expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Caño Padilla asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 12 de junio de 2016 y acta de posesión de fecha 13 de marzo de 2002 suscrita por la Alcaldía Municipal del Municipio de La Paz, **ANDRÉS VENCE VILLAR,** mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía **N° 6.676.395** expedida en el municipio San José de Oriente, Cesar, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El Coso asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según acta N° 03 del 14 de junio de 2016, en ejercicio de nuestro derechos inobservados por parte del Gobierno Nacional, de conformidad con lo consagrado en los artículos 23 de la Constitución Política, artículo 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, buscando de ustedes una pronta respuesta por este medio legítimo de comunicación, tal como lo señala la Honorable Corte Constitucional en su Sentencia T-490/98, cuando afirma EL DERECHO DE PETICIÓN busca *"pronta resolución y decisión de fondo. En este sentido, la Corte ha sido enfática al resaltar que no basta un mero pronunciamiento sobre el objeto de la petición, sino que la contestación de la administración debe contener la respuesta al problema planteado por el ciudadano, lo que resulta esencial en el desarrollo de la actividad administrativa y en el cumplimiento de sus fines consagrados en el artículo 2º de la Constitución".* (Cfr. T- 395 de 1998, M. P: Dr. Alejandro Martinez Caballero). Con el propósito de.

ciudadano, lo que resulta esencial en el desarrollo de la actividad administrativa y en el cumplimiento de sus fines consagrados en el artículo 2° de la Constitución".

7. **Sentencia T-312/06 de la Corte Constitucional:**
"En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes".

8. Corte Constitucional **Sentencia C-826/13** "al **principio de celeridad**, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que éste implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en general" la "Corte ha concluido que el logro de la efectividad de los derechos fundamentales por parte de la administración pública se basa en dos principios esenciales: el de eficacia y el de eficiencia. A este respecto ha señalado que la eficacia, hace relación "*...al cumplimiento de las determinaciones de la administración* "y la eficiencia a "*...la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos*". En este sentido, ha sostenido que estos dos principios se orientan hacia "***la verificación objetiva de la distribución y producción de bienes y servicios del Estado destinados a la consecución de los fines sociales propuestos por el Estado Social de Derecho. Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado administrativo de prestaciones***".

IV. NOTIFICACIONES.

Se recibirá las notificaciones en la calle 12 # 15 – 26 centro, municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar: Teléfono: Cel. 3114114548, 3005011049, 3135939951, 3173837809. Correo electrónico serraniaresguardosokorpa@gmail.com, yukpadeiroka@hotmail.com.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado.

3. ARTÍCULO 14 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

4. Sentencia C-274 del 9 de mayo de 2013 de la honorable Corte Constitucional.
Donde se declaró exequible la *"Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional"*. Por consiguiente, el proyecto de ley No. 228/2012 Cámara, 156/11 Senado.

5. Sentencia T-1160 de 2001 de la Corte Constitucional:
"El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión".

6. Cfr. T- 395 de 1998, M. P: Dr. Alejandro Martínez Caballero de la Corte Constitucional.
"pronta resolución y decisión de fondo. En este sentido, la Corte ha sido enfática al resaltar que no basta un mero pronunciamiento sobre el objeto de la petición, sino que la contestación de la administración debe contener la respuesta al problema planteado por el

Autoridades Yukpa Colombia Serranía del Perijá
Resguardos Caño Padilla, El Rosario, Bella Vista y Yukalán, y La Laguna, El Coso y Cinco Caminos, municipio La Paz; Resguardos Iroka y Menkue, municipio Agustín Codazzi; y Resguardo Sokorpa, municipio Becerril.

Indígenas y las comunidades afrodescendientes, frente a proyectos de exploración y/o explotación minera, turística o portuaria, planes de erradicación de cultivos ilícitos, proyectos extensivos de monocultivos agrícolas, obras de infraestructura, y cualquier otra medida que pueda afectarlos directamente, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación".

II. SOLICITUD AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PRIMERO. Solicitamos al señor Procurador General de la Nación, Doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, y a la **PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS CONSTITUCIONALES,** en el marco de sus funciones, consagradas en el numeral 3, del artículo 8, del decreto Ley 262 del año 2000, y en concordancia con lo dispuesto en la resolución 496 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación, Supervigilar y promover el cumplimiento de las disposiciones que regulan el derechos de petición interpuesto.

SEGUNDO. Solicitamos al señor Procurador General de la Nación, Doctor **FERNANDO CARRILLO FLÓREZ**; investigar y sancionar al Director Nacional de Planeación, Gobernador del Departamento del Cesar y alcaldes de la Paz, Agustín Codazzi y Becerril, por ejecutar los recursos del Sistema General de Regalías sin tener en cuento el Pueblo Yukpa..

III.SOLICITUD AL RESPETUOSA

PRIMERO. Concertar la realización de una mesa técnica preparatoria a la convocatoria del proceso de consulta previa, con el acompañamiento de la Defensoría y la Procuraduría General de la Nación,

INFORMAR: Que el pueblo Yukpa, a delegado y le ha dado instruciones a la autoridad Guillermo cabrales, y nuestro asesor, el doctor Edwar Alvarez Vacca, para que este alfrente de esta actividad técnica.

IV. JURISDICPRUDENCIA DEL DERECHOS DE PETICIÓN.

Invocamos como fundamentos de derecho lo siguiente:

1. **Artículo 23 de la Constitución Política**: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

2. **Artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo**: **Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades.** Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución.

algún sector de la población en razón de su origen étnico, de su género o de su condición socioeconómica. Una justicia participativa[4] significa que en las decisiones ambientales se exige la intervención activa y significativa de las personas que resultan afectadas por la ejecución de determinada actividad. El principio de sostenibilidad, reclama que los sistemas económicos y sociales deben ser reproducibles sin el deterioro de los ecosistemas en que se apoyan, esto es, la viabilidad ecológica. Conforme a este principio, las actividades humanas tienen la obligación de respetar los límites de absorción y de regeneración del ambiente, de modo que no se comprometa su disfrute para las generaciones futuras y para otras especies vivas no humanas[5]. En este escenario, se construyó un "imperativo ambiental". El principio de precaución prescribe que los agentes ambientales deben abstenerse de ejecutar una actividad que causa una perturbación ambiental inaceptable, siempre y cuando exista una duda razonable de que el acto pueda causar un daño a la naturaleza. Este principio se convierte entonces en una guía de acción humana para comportarse ante la incertidumbre de perjuicio en un ecosistema y prevenir ese riesgo. Además, reconoce la falibilidad de la ciencia, lo cual impone al ser humano la obligación de ser prudente ante la incertidumbre de una eventual lesión. El principio de precaución materializa los deberes de protección y salvaguarda del medio ambiente.

10.5. En las sentencias T-294 de 2014, SU-133 de 2017, SU-217 de 2017 y T-272 de 2017, la Corte consideró que el derecho a la consulta previa puede ser entendido, entre otras cosas, como una garantía procedimental para lograr justicia ambiental para las minorías étnicas. La razón: la justicia ambiental permite referirse a la administración y al manejo de las acciones humanas que impactan en el ambiente, la distribución de los costos negativos que causan los actos productivos de las personas, y el acceso a los recursos naturales, como sucede en los casos de exploración y extracción de recursos bióticos no renovables, ya sea minería o hidrocarburos-."

DECIMO PRIMERO: Recordarle de mandera respetuosa al a la Doctora **GLORIA ALONSO**, Directora de Planeación Nacional, Doctor **JULIAN POLANIA**, Director - Direccion Sistema General de Regalias, DNP, Doctora **NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA**, Ministra del Interior, que es su obligación en el marco de sus funciones, acatar lo mencionado por la Honorable de la Corte Cosntitucional en l parte resoutiva novena, del auto 266 del 12 de junio de 2017, setennecia T-025 de 2009,

" Noveno.-ORDENAR al Ministro del Interior que, junto con el Ministro de Minas y Energía, la Directora General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y los Presidentes de las Agencias Nacionales de Hidrocarburos y de Infraestructura y demás autoridades concernidas, garantice el cumplimiento del deber de adelantar los procesos de consulta previa para la protección de los derechos de los pueblos

[4] Esto incluye la intervención de las comunidades étnicas diversas a través de la consulta previa. Tal elemento incluye la apertura de espacios para comunidad con el fin de que ésta intervenga en: i) las decisiones del proyecto; ii) la planeación; y iii) la evaluación de impactos, al igual que la forma de mitigarlos, compensarlos y prevenirlos. En este aspecto, la idea es que coexista el conocimiento técnico con el saber nativo sobre los asuntos locales.

[5] En Sentencia T-411 de 1992, la Corte manifestó que la protección al medio ambiente está ligada al derecho a la vida de las generaciones actuales y de las ulteriores. Así consideró que: "*El patrimonio natural de un país pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes*"

Autoridades Yukpa Colombia Serranía del Perijá

Resguardos Caño Padilla, El Rosario, Bella Vista y Yukatán, y La Laguna, El Coso y Cinco Caminos, municipio La Paz; Resguardos Iroka y Menkue, municipio Agustín Codazzi; y Resguardo Sokorpa, municipio Becerril.

I. SOLICITUD RESPETUOSA AL DOCTO JULIÁN POLANIA

PRIMERO: Informarle que en la Serranía del Perijá, departamento del Cesar, se encuentra el territorio ancestral del Pueblo Indígena Yukpa, únicos hablantes de la lengua Caribe, semi-nómadas, en riesgo de exterminio físico y cultural mediante auto 004 del 2009, que fue traslapado de manera violenta con la industria del carbón sin ningún tipo de consulta previa. Que dicha actividad nos viene ocasionando daños incalculables espirituales, culturales, sociales, físicos y naturales entre ellos la destrucción de dos grandes ríos de la Serranía del Perijá.

SEGUNDO: Informarle que nuestro territorio ancestral Yukpa, aporta el 60% de la producción del carbón del país y por lo menos medio billón de pesos en regalías anuales para la República de Colombia, regalías que con la reforma del señor expresidente Santos se esparce en todo el territorio nacional.

TERCERO: Informarle que en toda la historia de la industria del Carbón no nos ha llegado un solo peso y proyecto del Sistema General de Regalías, del plan de compensaciones sociales y forestales y las multinacionales no han realizado ningún tipo de acciones en el marco de sus políticas de responsabilizada social empresarial.

CUARTO: Informar a los seis (6) Resguardos indígenas y comunidades no resguardadas del Pueblo Yukpa, únicos hablantes de la lengua Caribe, semi-nómada, ubicado en la Serranía del Perijá, frontera con Venezuela, en riesgo de exterminio físico y cultural mediante auto 004 del 2009; los motivos jurídicos y técnicos por las cuales no se ha aprobado un solo proyecto del Sistema General de Regalías para el Pueblo Yukpa en los diferentes OCAD. De igual manera informar porque no han realizado ningún tipo de acompañamiento técnico a nuestros resguardos.

QUINTO: Informar a los seis (6) Resguardos indígenas y comunidades no resguardadas del Pueblo Yukpa, únicos hablantes de la lengua Caribe, semi-nómadas, ubicado en la Serranía del Perijá, frontera con Venezuela, en riesgo de exterminio físico y cultural mediante auto 004 del 2009; Cuantos recursos del porcentaje del Sistema General de Regalías correspondientes a los pueblos indígenas, se han aprobado desde El OCAD departamento del Cesar, y los OCAD de Municipios de Becerril, Agustín Codazzi y la Paz, vigencias fiscales año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, en qué proyectos, que valores y presentar las actas de aprobación de nuestras autoridades indígenas Yukpa.

SEXTO. Informar a los seis (6) Resguardos indígenas y comunidades no resguardadas del Pueblo Yukpa, únicos hablantes de la lengua Caribe, semi-nómadas, ubicado en la Serranía del Perijá, frontera con Venezuela, en riesgo de exterminio físico y cultural mediante auto 004 del 2009; Cuantos recursos están disponibles del porcentaje del Sistema General de Regalías correspondientes a los pueblos indígenas, del OCAD departamento del Cesar y los OCAD de Municipios de Becerril, Agustín Codazzi y la Paz.

SÉPTIMO: Suspender inmediatamente la totalidad de los proyectos y por todas las fuentes, que se encuentran en estudios, por los OCAD del departamento del Cesar, OCAD de los Municipios de Becerril, Agustín Codazzi y la Paz, DNP y demás instituciones sectoriales, hasta que no se concerté los proyectos prioritarios y justos con el Pueblo indígena Yukpa.

OCTAVO: Realizar de manera urgente una reunión entre el doctor **JULIAN POLANIA**, director - Direccion Sistema General de Regalias, DNP, con los seis (6) , Gobernadores

indigenas del pueblo Yukpa, para estudiar en comun acuerdo la intervención del Sistema General de Regalias en nuestro territorio.

NOVENO: Solicitarle a la Doctora **GLORIA ALONSO,** Directora de Planeación Nacional, Doctor **JULIAN POLANIA,** Director - Direccion Sistema General de Regalias, DNP, Doctora **NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA,** Ministra del Interior; que es su obligación en el marco del articulo 6 del convenio 169 de la OIT, convocar a los seis (6), Gobernadores indigenas del pueblo Yukpa, a un proceso de consulta previa, al momento de presentarse el proyecto de Ley de reforma al Sistema General de Regalias.

DECIMO: Recordarle de mandera respetuosa a la Doctora **GLORIA ALONSO,** Directora de Planeación Nacional, Doctor **JULIAN POLANIA,** Director - Direccion Sistema General de Regalias, DNP, Doctora **NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA,** Ministra del Interior, que es su obligación en el marco de sus funciones, acatar lo mencionado por la Honorable de la Corte Cosntitucional en Setencia SU 123 de 2018, cuando menciona en la página en la parte 8 Consulta previa y justicia ambiental :

> *"10.1. En caso de afectaciones ambientales, el derecho a la consulta previa tiene conexiones íntimas con la justicia ambiental, como lo ha mostrado esta Corte, pues ante la perturbación ambiental de los pueblos indígenas y tribales ha activado la consulta previa para recomponer, a través de la participación, el reparto desigual de las cargas y los beneficios ambientales.*
>
> *10.2. La justicia ambiental ha sido entonces utilizada por esta Corte para resolver asuntos de distribución inequitativa de cargas ambientales entre los diferentes grupos sociales y defender la participación de colectividades afectadas. Esta construcción teórica ha servido para identificar afectaciones directas a una comunidad como resultado de un proyecto productivo que trae consecuencia o efectos a los ecosistemas.*
>
> *10.3. Según la Sentencia T-294 de 2014, la justicia ambiental puede ser entendida como el "tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales". La justicia ambiental es entonces un marco analítico que ha permitido terciar ante un conflicto ecológico distributivo, dado que intenta eliminar la discriminación que padecen algunas comunidades en relación con el acceso de servicios ambientales y de la exposición superlativa a los desechos de ciertas industrias. La Corte ha considerado que la justicia ambiental, dentro del marco de la Constitución[2], está compuesta por cuatro elementos interrelacionados: i) la justicia distributiva; ii) la justicia participativa; iii) el principio de sostenibilidad; y iv) el principio de precaución.*
>
> *10.4. El componente de justicia distributiva[3] respalda el reparto equitativo de las cargas y beneficios ambientales para los habitantes de un Estado, sin que sea aceptable diferenciar*

[2] Sentencia T-294 de 2014.

[3] Esa característica se justifica en los siguientes mandatos: i) un principio de equidad ambiental prima facie, esto es, debe justificarse el reparto inequitativo de bienes y cargas ambientales en el diseño, implementación y aplicación de una política ambiental o en la realización de un programa, obra o actividad que entraña perjuicios ambientales; y ii) un principio de efectiva retribución o compensación, que implica que las personas que padecen cargas o pasivos ambientales producto de una obra o proyectos deben ser compensadas.

Autoridades Yukpa Colombia Serranía del Perijá

Resguardos Caño Padilla, El Rosario, Bella Vista y Yukatán, y La Laguna, El Coso y Cinco Caminos, municipio La Paz; Resguardos Iroka y Menkue, municipio Agustín Codazzi; y Resguardo Sokorpa, municipio Becerril.

Atentamente,

JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo el Rosario, Bella Vista Yukatan
Municipio de la Paz, Serranía del Perijá.

ALFREDO PEÑA FRANCO.
GOBERNADOR DEL CABILDO del resguardo Iroka
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá.

ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO.
GOBERNADORA DEL CABILDO del Resguardo Sokorpa
Municipio de Becerril del Campo, Serranía del Perijá.

EMILIO OVALLE MARTÍNEZ.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Menkwe, Mishaya, La Pista
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá.

ALIRIO OVALLE REYES.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Caño Padilla.
Municipio de La Paz, Serranía del Perijá.

ANDRÉS VENCE VILLAR.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El Coso
Municipio de La Paz, Serranía del Perijá.

12

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
20202300009781
contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20202300009781
Fecha: Viernes 31 de Enero de 2020

RESGUARDO INDIGENA YUKPA ROKA
NIT 824.000.000-2
RECIBIDO
HORA: 11:20 AM

Bogotá D.C

Señores (a)

AUTORIDADES YUKPA COLOMBIA SERRANÍA DEL PERIJA
JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ
Gobernador del Cabildo del Resguardo el Rosario, Bella Vista Yukatán
Municipio de la Paz – Serranía del Perijá
ALFREDO PEÑA FRANCO
Gobernador del Cabildo del Resguardo Iroka
Municipios de Agustín Codazzi – Serranía del Perijá
ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO
Gobernador del Cabildo del Resguardo Sokorpa
Municipio de Becerril del Campo – Serranía del Perijá
EMILIO OVALLE MARTINEZ
Gobernador del Cabildo del Resguardo Menkue, Misaya, La Pista
Municipio de Agustín Codazzi – Serranía del Perijá
ALIRIO OVALLE REYES
Gobernador del Cabildo del Resguardo Caño Padilla
Municipio de La Paz – Serranía del Perijá
ANDRES VENCE VILLAR
Gobernador del Cabildo del Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El Coso
Municipio de La Paz – Serranía del Perijá

Asunto: Respuestas de derecho de petición, regalías para donde no hay afectaciones ambientales

Respetados gobernadores

En respuesta a su comunicación de fecha 15 de enero de 2020 y recibido en el DANE el 17 de enero con Radicado No. 20203130011382 en el cual solicita la siguiente información ***para el pueblo indígena yukpa*** al respecto me permito dar respuesta a cada una de sus preguntas de acuerdo con las competencias de la entidad:

1. **Favor informar cuantos habitantes tiene cada uno de los municipios de: Manaure la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, Departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá.**

Rta. El departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, quiere agradecer su interés por los resultados del censo nacional y de vivienda CNPV 2018 esta operación estadística logró establecer la información demográfica y social del territorio nacional y sus entidades territoriales a nivel de hogares y personas así como de las características estructurales de la vivienda en la que habitan.

La desagregación geográfica definida por el DANE para la producción y entrega de resultados del CNPV 2018, tiene como base la División Político Administrativa[1], es decir, total nacional, departamental, municipal, cabecera y área resto municipal (que incluye centros poblados, rural disperso).

En este sentido, en la Tabla 1 se informa que la población total efectivamente censada para los municipios del departamento del Cesar que conforman la Región Serranía del Perijá es la siguiente:

Tabla 1. Población Total Censada CNPV 2018

Código DIVIPOLA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	TOTAL	CABECERA	CENTROS POBLADOS Y RURAL DISPERSO
20443	Cesar	Manaure	9.313	8.083	1.230
20621	Cesar	La Paz	26.109	18.740	7.369
20750	Cesar	San Diego	18.531	10.319	8.212
20013	Cesar	Agustín Codazzi	58.621	48.030	10.591
20045	Cesar	Becerril	20.477	15.736	4.741
20400	Cesar	La Jagua de Ibirico	37.356	28.560	8.796
20178	Cesar	Chiriguaná	27.006	16.423	10.583
20228	Cesar	Curumaní	34.838	24.844	9.994

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018

Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, se encuentran disponibles para su consulta en el siguiente link: https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-VIHOPE-v3.xls; y los datos anonimizados se encuentran disponibles en el siguiente link: http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/643.

Es importante informar que, los Censos de Población y Vivienda presentan omisión de aquellas personas que no fueron censadas debido a que durante la etapa de recolección de información no contaron con una entrevista satisfactoria por alguno de los siguientes motivos: i) se encontraron viviendas ocupadas con todas las personas ausentes o los miembros del hogar rechazaron al censista; ii) al momento de la realización del censo, no se recolectó la información de todos los miembros del hogar, ya sea por omisión del censista o del censado incurriendo en la subenumeración de personas al interior del hogar y iii) por omisión en zonas no visitadas e incompletas ocasionadas por situaciones relacionadas con accesibilidad, seguridad, condiciones climáticas, que impidieron la realización del censo de manera exitosa.

Por lo anterior, el 14 de octubre de 2019 el DANE realizó la entrega de la cobertura censal desagregada con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, donde se presentó el ajuste

1 **Cabecera municipal:** Delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, alusiva al área geográfica delimitada por el perímetro censal. A su interior se localiza la sede administrativa del municipio, es decir la alcaldía.
Resto municipal: Delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, comprendida entre el perímetro censal de las cabeceras municipales y el límite municipal, se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella, generalmente no cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas. En esta área se incluyen los centros poblados los cuales son concentraciones de al menos veinte (20) viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí.
Perímetro censal: Delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, alusiva a una frontera geográfica que incluye la zona comprendida por el perímetro urbano vigente y los conglomerados con características urbanas (viviendas adosadas, y vías) que se encuentren por fuera, y que tengan continuidad especial con el área urbana del municipio.

por municipio y área; información estadística que se envía en la Tabla 2 para los municipios del departamento del Cesar que conforman la Región Serranía del Perijá:

Tabla 2. Población censal ajustada por cobertura y porcentajes de omisión municipal por área

IDENTIFICACIÓN			POBLACIÓN AJUSTADA POR COBERTURA			OMISIÓN CENSAL		
Código DIVIPOLA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	TOTAL	CABECERA	CENTROS POBLADOS Y RURAL DISPERSO	TOTAL	CABECERA	CENTROS POBLADOS Y RURAL DISPERSO
20443	Cesar	Manaure	10.047	8.389	1.658	7,3%	3,6%	25,8%
20621	Cesar	La Paz	27.759	19.622	8.137	5,9%	4,5%	9,4%
20750	Cesar	San Diego	19.022	10.517	8.505	2,6%	1,9%	3,4%
20013	Cesar	Agustín Codazzi	60.768	48.157	12.611	3,5%	0,3%	16,0%
20045	Cesar	Becerril	21.611	16.123	5.488	5,2%	2,4%	13,6%
20400	Cesar	La Jagua de Ibirico	46.722	35.513	11.209	20,0%	19,6%	21,5%
20178	Cesar	Chiriguaná	27.694	16.576	11.118	2,5%	0,9%	4,8%
20228	Cesar	Curumaní	37.399	26.422	10.977	6,8%	6,0%	9,0%

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018.
Estimaciones de población ajustada por cobertura censal.

Información que puede consultar en el siguiente *link*: https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-Poblacion-Ajustada-por-Cobertura.xls

Es de resaltar que del análisis de la cobertura del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, se establece la población estimada que es el referente base para la elaboración y actualización de las proyecciones de población. Información que podrá consultar en el siguiente link: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

2. ***Informar cuantas personas se encontraban o se encuentran en pobreza, pobreza extrema y pobreza monetaria en cada uno de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumani, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. Favor indicar año tras año desde el año 1990 al año 2019.***

Rta. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en cumplimiento de su misión institucional y conforme a lo establecido en el CONPES 150 de 2012, que determina las metodologías oficiales y arreglos institucionales para la medición de pobreza en Colombia, es la entidad encargada de la oficialización de las cifras de pobreza en Colombia. En la actualidad existen dos mediciones complementarias de la pobreza: pobreza monetaria y pobreza multidimensional.

Por una parte, los ingresos y la pobreza monetaria se calculan usando los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Los dominios geográficos que se reportan, de acuerdo a la representatividad de la encuesta, son: total nacional, 23 ciudades capitales, el agregado de las cabeceras municipales, el agregado de los centros poblados y rural disperso, y 23 departamentos. La GEIH es una encuesta continua cuyo periodo de recolección inicia en enero de cada año y culmina en diciembre, en el caso específico de las cifras de ingresos, su cálculo y periodicidad de publicación es anual por esta razón se presentarán los datos de pobreza del 2018 que es el último año disponible.

Adicionalmente, la muestra de la GEIH no es representativa a nivel de municipal para los municipios solicitados, por tal razón no se cuenta con disponibilidad de información de pobreza extrema ni pobreza monetaria para estos dominios. En ese sentido, la Tabla 3 contiene información de la incidencia de la pobreza monetaria y pobreza extrema para la población del departamento de Cesar para los años 2002-2018.

Tabla 3. Incidencia de la Pobreza Monetaria y Pobreza Monetaria Extrema. Departamento de Cesar. Cifras en porcentaje. Años 2002-2018.

Año	Monetaria	Extrema
2002	61,9	19,2
2003	60,1	15
2004	59,2	17,6
2005	56,2	14,9
2008	63,2	30,2
2009	58,6	23,7
2010	53,6	18,6
2011	47,2	17,2
2012	46,8	16
2013	44,8	12,5
2014	40,9	12
2015	42,3	11
2016	41,9	12,1
2017	40,7	13
2018	42,9	12,5

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2018.

Por otra parte, la pobreza multidimensional se define como un fenómeno de múltiples dimensiones, es decir, integra factores adicionales al monetario. Las personas que se encuentran en situación de pobreza enfrentan restricciones en el acceso a salud, educación, trabajo, servicios para niños y jóvenes que componen sus hogares e incluso en las condiciones de las viviendas que habitan, por tanto, este indicador busca incorporar estas restricciones haciendo seguimiento a las carencias de los más vulnerables. La metodología oficial para Colombia para el cálculo del IPM fue desarrollada por expertos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y transferida al DANE para su publicación oficial mediante el CONPES 150 de 2012.

Asi, el IPM de Colombia incluye 5 dimensiones que agrupan 15 indicadores, cada dimensión tiene un peso de 20% y a su vez, los indicadores que componen cada dimensión repartirán este 20% en el total de indicadores que componen la dimensión. Adicionalmente, cada indicador tiene definido un umbral que genera una condición de privación al hogar (unidad de análisis para este fin) cuando al menos un miembro del mismo no alcanza el umbral establecido para esa condición.

Si un hogar está privado en por lo menos 5/15 de los indicadores[2], todos sus miembros se consideran en situación de pobreza multidimensional. El indicador es calculado utilizando como fuente de información la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) con una periodicidad anual para los dominios total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso y 9 regiones para la serie 2010-2016, únicamente para el dominio cabeceras en el año 2017 y para los dominios total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso, 9 regiones y 32 departamentos en el año 2018.

Al igual que la GEIH, la muestra de la ECV no es representativa a nivel municipal. En ese sentido, la Tabla 4 contiene información de la incidencia de la pobreza multidimensional para el agregado del departamento del Cesar, sus cabeceras y sus centros poblados y rural disperso en el año 2018 (único año con disponibilidad de información departamental.

Tabla 4. Índice de Pobreza Multidimensional. 2018.

Departamento	IPM total	IPM cabeceras	IPM centros poblados y rural disperso
Cesar	33,2	26,7	53,5

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2018.

Adicionalmente, la Tabla 5 muestra los resultados obtenidos para el departamento de Cesar, sus cabeceras y sus centros poblados y rural disperso para cada uno de los 15 indicadores que conforman el IPM para 2018.

Tabla 5. Proporción de hogares privados por indicador. 2018.

Variable	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
Analfabetismo	15,9	11,8	28,6
Bajo logro educativo	51,6	43,3	77,8
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	15,2	15,3	15,1
Barreras de acceso a servicios de salud	10,1	9,4	12,2
Desempleo de larga duración	10,4	11,5	6,8
Hacinamiento crítico	19,5	19,6	19,5
Inadecuada eliminación de excretas	14,3	9	30,8
Inasistencia escolar	6,3	5,4	9,2
Material inadecuado de paredes exteriores	3,3	3,4	3
Material inadecuado de pisos	11,3	5,7	28,6
Rezago escolar	37,6	36,3	41,8
Sin acceso a fuente de agua mejorada	10	1,5	36,7
Sin aseguramiento en salud	15,3	13,5	20,6
Trabajo infantil	3,3	2,7	5
Trabajo informal	86,9	85,1	92,3

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2018.

2 Los 5/15 se definen según la ponderación de cada indicador. En el caso de Colombia el indicador da la misma ponderación a todas las dimensiones, por lo que cada una pesa 20% y al interior de cada dimensión, cada indicador tiene el mismo peso.

Así mismo, el DANE como parte de sus estudios post-censales generó una aproximación de la medida de pobreza multidimensional a nivel municipal utilizando como fuente de información el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018. En sentido, en la Tabla 6 se presentan los resultados de la medida de pobreza municipal para los municipios del departamento de Cesar listados.

Tabla 6. Incidencia de la pobreza municipal. Cifras en porcentaje. 2018.

MUNICIPIO	POBREZA
AGUSTIN CODAZZI	47,9
BECERRIL	50,2
CHIRIGUANA	43,1
CURUMANI	46,2
LA JAGUA DE IBIRICO	36,8
LA PAZ	44,4
SAN DIEGO	44,3
MANAURE	39,7

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018.

3. ***Informar cuales son los municipios con mayor número de pobreza, pobreza extrema y pobreza monetaria en el departamento del Cesar. Favor indicar año tras año desde el año 1990 al año 2019.***

Rta. Como se mencionó en el numeral 2, la única medida de pobreza con representatividad municipal disponible es la aproximación de la pobreza municipal con información censal. En ese sentido, según los resultados de dicha medida los municipios con mayor incidencia de la pobreza del departamento de Cesar fueron: Pueblo Bello con 74,4%; Gonzalez con 56,5% y Astrea con 52,2%.

4. ***Informar los índices de pobreza, pobreza extrema y pobreza monetaria en cada uno de los municipios del departamento del Cesar. Favor indicar año tras año desde el año 1990 al año 2019.***

Rta. Como se mencionó en el numeral 2, la única medida de pobreza con representatividad municipal disponible es la aproximación de la pobreza municipal con información censal. En ese sentido, la Tabla 7 contiene los resultados del índice mencionado para todos los municipios del departamento de Cesar para el año 2018.

Tabla 7. Incidencia de la pobreza municipal. Cifras en porcentaje. 2018.

MUNICIPIO	POBREZA
SAN ALBERTO	30
VALLEDUPAR	33,1
AGUACHICA	36,7
LA JAGUA DE IBIRICO	36,8
MANAURE	39,7
SAN MARTIN	41,4
CHIRIGUANA	43,1
EL PASO	43,6
LA GLORIA	43,6
SAN DIEGO	44,3
LA PAZ	44,4
PAILITAS	45,1
BOSCONIA	45,3
TAMALAMEQUE	45,7
CURUMANI	46,2
GAMARRA	46,7
AGUSTIN CODAZZI	47,9
PELAYA	48,2
EL COPEY	48,8
RIO DE ORO	48,9
BECERRIL	50,2
ASTREA	52,2
GONZALEZ	56,5
PUEBLO BELLO	74,4

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018.

5. ***Informar cual es el puesto que ocupa a nivel departamental y nacional en pobreza, pobreza extrema y pobreza monetaria en cada uno de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. Favor indicar año tras año desde el año 1990 al año 2019.***

Rta. Como se mencionó en el numeral 2, la única medida de pobreza con representatividad municipal disponible es la aproximación de la pobreza municipal con información censal. En ese sentido, la Tabla 8 contiene el número de puesto que ocupa cada uno de los municipios listados en el ranking de pobreza nacional y departamental utilizando la metodología mencionada para el año 2018. En este caso, el municipio que ocupa el primer puesto será aquel que tiene mayores niveles de pobreza.

Tabla 8. Puesto del municipio en ranking de pobreza departamental y nacional según índice de pobreza municipal con información censal. 2018.

MUNICIPIO	PUESTO DEPARTAMENTAL	PUESTO NACIONAL
AGUSTIN CODAZZI	8	453
BECERRIL	4	358
CHIRIGUANA	18	543
CURUMANI	10	420
LA JAGUA DE IBIRICO	21	762
LA PAZ	14	532
SAN DIEGO	15	569
MANAURE	20	546

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018.

6. ***Informar cuantas personas del sector urbano de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá, cuentan con agua potable y saneamiento básico.***

7. ***Informar cuantas personas del sector rural de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá, cuentan con agua potable y saneamiento básico.***

8. ***Informar cuantas personas del sector urbano de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá, NO cuentan con agua potable y saneamiento básico.***

9. ***Informar cuantas personas del sector rural de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá, NO cuentan con agua potable y saneamiento básico.***

Respuesta para las preguntas 6, 7, 8 y 9:

De acuerdo con la información disponible en la entidad y a partir de los resultados del CNPV 2018, en el archivo Excel adjunto denominado: [***Info_CNPV2018_servicios_públicos_mpios_Región_Perijá***], encontrará la información respecto de la cantidad de viviendas por acceso a los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Recolección de Basuras, así como la cantidad de personas que residen en dichas viviendas, en los municipios objeto de la presente solicitud desagregado por clase (cabecera, centros poblados y rural disperso).

En cuanto a la información de personas que cuentan con agua potable y saneamiento básico en los municipios reseñados, tanto el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como la Superintendencia de Servicios Públicos, pueden suministrar dicha información.

12. ***A. Informar cuantas niños y niñas menores de un año, Informar cuantas niños y niñas de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas de seis años (6) a catorce (14) años, han muerto por desnutrición o enfermedades asociadas a la desnutrición en el sector urbano de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. B. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. C. Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.***

13. ***A. Informar cuantas niños y niñas menores de un año, Informar cuantas niños y niñas de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas de seis años (6) a catorce (14) años, han muerto por desnutrición o enfermedades asociadas a la desnutrición en el sector rural de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. B. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. C. Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.***

14. ***Informar cuantas niños y niñas Yukpa menores de un año, Informar cuantas niños y niñas Yukpa de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas Yukpa de seis años (6) a catorce (14) años, han muerto por desnutrición o enfermedades asociadas a la desnutrición en los municipios de la Costa Caribe. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios.***

17. ***Informar cuantas niños y niñas Yukpa menores de un año, Informar cuantas niños y niñas Yukpa de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas Yukpa de seis años (6) a catorce (14) años, han muerto por enfermedad asociada o enfermado de infecciones respiratorias agudas (IRA), en los municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. B. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. C. Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.***

19. ***A Informar cuantas niños y niñas Yukpa menores de un año, Informar cuantas niños y niñas Yukpa de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas Yukpa de seis años (6) a catorce (14) años, han muerto de diarrea aguda (EDA), en los municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. B. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. C. Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.***

Respuesta para las preguntas 12, 13, 14, 17 y 19:

- Se hace entrega de la información a partir del año 2008, año en que se incluye la variable de pertenencia étnica en los certificados de nacido vivo y de defunción.

- Se tuvieron en cuenta todas las defunciones correspondientes a las personas pertenecientes a pueblos indígenas, sin especificar la Étnia Yukpa. Lo anterior, porque la información estadística producida por el DANE se basa en lo consignado por los médicos en los certificados y mayoritariamente esta variable no es diligenciada.
- Se anexan los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), tenidos en cuenta para el procesamiento de la información relacionada con Desnutrición, IRA y EDA son:

Para Desnutrición:

- **E40-E46 desnutrición:** incluye kuashiorkor, marasmo, kwashiorkor marasmático, desnutrición proteicocalórica, retardo del desarrollo por desnutrición.
- **E50-E64 deficiencias nutricionales:** incluye deficiencia de vitamina A, deficiencia de tiamina, deficiencia de Niacina, deficiencia vitaminas del grupo B, deficiencia de ácido ascórbico, deficiencia vitamina D, deficiencia vitaminas E y K, deficiencia de calcio, selenio, zinc, cobre, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, vanadio, deficiencia de ácidos grasos, secuelas de desnutrición.
- **D50-D53 anemias nutricionales:** anemia por deficiencia de hierro, anemia por deficiencia de vitamina B12, anemia por deficiencia de folatos, otras anemias nutricionales.
- **P050 desnutrición fetal,** con bajo peso para la edad gestacional.
- **P051 desnutrición fetal,** pequeño para la edad gestacional.
- **P052 desnutrición fetal,** sin mención de bajo peso o talla para la edad gestacional.

Para EDA:

- **A00** cólera
- **A01** fiebre tifoidea y paratifoidea
- **A02** otras infecciones debidas a Salmonella
- **A03** Shiguelosis
- **A04** otras infecciones intestinales bacterianas
- **A05** otras infecciones alimentarias bacterianas
- **A06** amebiasis
- **A07** otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios
- **A08** infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados
- **A09** otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado

Para IRA:

- **J00** rinofaringitis aguda
- **J01** rinusitis aguda
- **J02** raringitis aguda
- **J03** amigdalitis aguda
- **J04** raringitis y traqueítis agudas
- **J05** raringitis obstructiva, aguda [crup] y epiglotis
- **J06** infección aguda de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados
- **J09** influenza debida a virus de influenza zoonotica o pandémico identificados
- **J10** influenza debida a virus de la influenza estacional identificado

- **J11** influenza debida a virus no identificado
- **J12** neumonía viral, no clasificada en otra parte
- **J13** neumonía debida a streptococcus pneumoniae
- **J14** neumonía debida a haemophilus influenza
- **J15** neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte
- **J16** neumonia debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte
- **J17** neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte
- **J18** neumonía, organismo no especificado
- **J20** bronquitis aguda
- **J21** bronquiolitis aguda
- **J22** infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores

En ese sentido, se adjunta archivo denominado ***Defunciones_ DNT_EDA_IRA.xlsx,*** donde encontrará la información de las personas fallecidas cuya causa de muerte corresponde a las requeridas en su solicitud, desagregada por grupos de edad a nivel municipal.

Finalmente, me permito informar que se dio traslado de las preguntas 10, 11 y 15 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con Radicado DANE No. 20202300005821 el 24 de enero de 2020, y al Instituto Nacional de Salud con Radicado DANE No. 20202300006091 el 24 de enero de 2020.

Por lo anterior, quedamos atentos a cualquier duda o pregunta adicional.

Con un cordial saludo,

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Anexo: Traslado ICBF Rad. DANE No. 20202300005821 – Dos (2) Folios
Traslado INS Rad. DANE No. 20202300006091 – Dos (2) Folios

Antecedente: Rad DANE No. 20203130011382

VoBo. Liliana Acevedo Arenas – Directora Técnica de Censos y Demografía
VoBo. Laura Juliana Vargas Rueda – Asesora – Coordinadora GIT Pobreza

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
20202300006091
contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20202300006091**
Fecha: Viernes 24 de Enero de 2020

Bogotá
230

Doctora
MARTHA LUCÍA OSPINA MARTÍNEZ
Directora General
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
mospina@ins.gov.co
contactenos@ins.gov.co
procesosjudiciales@ins.gov.co
La Ciudad

Asunto: **Derecho de Petición, regalías para donde no hay afectaciones ambientales. Traslado por competencia Radicado DANE No. 20203130011382**

Cordial saludo doctora Ospina,

En atención a la comunicación enviada por ***las Autoridades Yukpa Colombia Serranía del Perijá,*** en el cual solicitan información del Territorio Ancestral Yukpa, me permito dar traslado a las siguientes preguntas por considerarlo tema de su competencia:

> ***16. Informar cuantas niños y niñas Yukpa menores de un año, Informar cuantas niños y niñas Yukpa de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas Yukpa de seis años (6) a catorce (14) años, se han enfermado de infecciones respiratorias agudas (IRA) en los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. B. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. C. Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.***
>
> ***18. Informar cuantas niños y niñas Yukpa menores de un año, Informar cuantas niños y niñas Yukpa de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas Yukpa de seis años (6) a catorce (14) años, se han enfermado de diarrea aguda (EDA), en los municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. B. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. C. Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.***

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
20202300006091
contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20202300006091
Fecha: Viernes 24 de Enero de 2020

Este traslado se realiza de conformidad con el artículo 21 de la Ley Estatutaria, que regula el derecho fundamental de petición Ley 1755 de 2015 y la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De las consideraciones y trámites dados directamente por su despacho, agradecemos informarnos la respuesta emitida por ustedes a esta petición.

Cordialmente,

LILIANA ACEVEDO ARENAS
Directora Técnica de Censos y Demografía

Antecedente: Rad. No 20203130011382

C.C. Autoridades Yukpa Colombia Serrania del Perijá - serraniaperijacosokorpa@gmail.com ; yukpaperroka@hotmail.com

Revisó: Alexander Ernesto Paez Almonacid - Coordinador GIT Censo y Estudios Especiales

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
20202300005821
contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20202300005821**
Fecha: Viernes 24 de Enero de 2020

Bogotá
230

Doctora
ZULMA YANIRA FONSECA CENTERO
Director Técnico
Dirección de Nutrición
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
zulma.fonsecaC@icbf.gov.co
La Ciudad

Asunto: **Traslado por competencia Radicado DANE No. 20203130011382**
Derecho de Petición, regalías para donde no hay afectaciones ambientales.

Cordial saludo doctora Fonseca.

En atención a la comunicación enviada por ***las Autoridades Yukpa Colombia Serranía del Perijá,*** en el cual solicitan información del Territorio Ancestral Yukpa, me permito dar traslado a las siguientes preguntas por considerarlo tema de su competencia:

> ***10. A. Informar cuantos niños y niñas menores de un año, informar cuantas niños y niñas de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas de seis años (6) a catorce (14) años, han padecido desnutrición en el sector urbano de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. B. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. C. Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.***
>
> ***11. A. Informar cuantas niños y niñas menores de un año, Informar cuantos niños y niñas de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas de sies años (6) a catorce (14) años, han padecido desnutrición en el sector rural de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. B. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. C. Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.***
>
> ***15. Informar cuantas niños y niñas Yukpa menores de un año, Informar cuantos niños y niñas Yukpa de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas Yukpa de seis años (6) a catorce (14) años, han padecido desnutrición o enfermedades asociadas a la desnutrición en los municipios de la Costa Caribe. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios.***

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
20202300005821
contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20202300005821**
Fecha: Viernes 24 de Enero de 2020

Este traslado se realiza de conformidad con el artículo 21 de la Ley Estatutaria, que regula el derecho fundamental de petición Ley 1755 de 2015 y la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De las consideraciones y trámites dados directamente por su despacho, agradecemos informarnos la respuesta emitida por ustedes a esta petición.

Cordialmente,

LILIANA ACEVEDO ARENAS
Directora Técnica de Censos y Demografía

Anexo. Once (11) folios

C.C Autoridades Yukpa Colombia Serranía del Perijá – [illegible]

Antecedente Rad. No 20203130011382

Revisó: Alexander Ernesto Paez Almonacid - Coordinador GIT Censo y Estudios Especiales

Agustín Codazzi, 15 de enero de 2020.

Doctor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de Colombia
contacto@presidencia.gov.co
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co

Doctor
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director Nacional del DANE
direccion@dane.gov.co
notjudicialesdf@dane.gov.co
rrvalenzuelag@dane.gov.co
wgbustost@dane.gov.co
ljvargasr@dane.gov.co

Doctora
MARTHA OSPINA
Directora Instituto Nacional de Salud
contactenos@ins.gov.co
procesosjudiciales@ins.gov.co

Doctor
CARLOS NEGRET
Defensor Nacional del Pueblo.
hijojoa@defenoria.gov.co
fherrera@defensoria.gov.co

Doctor
PAULO ABRÃO
Secretario Ejecutivo de la CIDH
cidhoea@oas.org
cidhproteccion@oas.org
cidhdenuncias@oas.org
bernardo_pz@hotmail.com

Doctora
CLAUDIA CANO COREREA
Directora Programa de Antropología
Universidad Externado de Colombia
claudia.cano@uexternado.edu.co

Doctora
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Presidenta Corte Constitucional
Seguimiento Auto 2004, de 2009, 266 de 2016 y 471 de 2019, sentencia T-025 de 2004.

Señores
REVISTA SEMANA, EL ESPECTADOR Y NOTICIAS UNO
cmunos@elespectador.com
jdlaverde@caracoltv.com.co
nmarin@elespectador.com
pachosantoscal@gmail.com
carielruiz@gmail.com
jcoter@semana.com
nachogomez@colombia.com

Doctor
LUIS FERNANDO ARIAS
Consejero Mayor de la ONIC
administracion@onic.org.co
consejeromayor@onic.org.co
consejeromayor@onic.org.co
dtojuridico@onic.gov.co

REFERENCIA:	Solicitud información Territorio Ancestral Yukpa
ACCIONANTE:	Pueblo Indígena Yukpa, Departamento del Cesar, Serranía del Perijá

REF: Derecho de petición, regalías para donde no hay afectaciones ambientales.

"Hace mucho tiempo la tierra se empezó a llenar de agua, muchos Yukpa murieron porque el agua cubría todo, los animales también se murieron, pero estaban los cerros que tenían vida y empezaron a crecer, ellos le decían a la gente que se subieran para que se salvaran, entonces el cerro más fuerte vencía subiendo más alto que los demás, ese se llama Sekeimu y así fue como se salvó el Yukpa".[1]

Excelentísimos servidores públicos: Nosotros: JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ, mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.067.808.333 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo el Rosario, Bella Vista y Yukatan asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según constancia expedida por el Ministerio del Interior con fecha de 2 de abril del 2014 y acta de posesión del 17 de marzo de

[1] Parte de la historia del diluvio, primer encuentro del Plan de Salvaguarda, Valledupar- Cesar

2014 suscrita por la Alcaldía Municipal de La Paz, ALFREDO PEÑA FRANCO mayor de edad, con domicilio en el municipio Agustín Codazzi, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.956.993 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Iroka asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 28 de junio de 2018, acta de elección del 20 de junio de 2018 y acta de posesión N° 0378 del 25 de junio de 2018 suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO, mayor de edad, con domicilio en el municipio Becerril del Campo, Cesar, identificada con la cédula de ciudadanía N° 49.748.586 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADORA DEL CABILDO del Resguardo Sokorpa asentado en la serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Becerril, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 21 de julio de 2015 y acta de elección del 28 de mayo de 2015 y acta de posesión del 12 de junio de 2015 suscrita por la Alcaldía Municipal de Becerril, EMILIO OVALLE MARTÍNEZ, mayor de edad, con domicilio en el municipio Agustín Codazzi, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.939.440 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Menkwe, Mishaya, La Pista asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, según acta de posesión N° 0347 del 29 de enero de 2018 suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, ALIRIO OVALLE REYES, mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 77.040.052 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Caño Padilla asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 12 de junio de 2016 y acta de posesión de fecha 13 de marzo de 2002 suscrita por la Alcaldía Municipal del Municipio de La Paz, ANDRÉS VENCE VILLAR, mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.676.395 expedida en el municipio San José de Oriente, Cesar, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El Coso asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según acta N° 03 del 14 de junio de 2016, en ejercicio de nuestro derechos inobservados por parte del Gobierno Nacional, de conformidad con lo consagrado en los artículos 23 de la Constitución Política, artículo 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, buscando de ustedes una pronta respuesta por este medio legítimo de comunicación, tal como lo señala la Honorable Corte Constitucional en su Sentencia T-490/98, cuando afirma EL DERECHO DE PETICIÓN busca *"pronta resolución y decisión de fondo. En este sentido, la Corte ha sido enfática al resaltar que no basta un mero pronunciamiento sobre el objeto de la petición, sino que la contestación de la administración debe contener la respuesta al problema planteado por el ciudadano, lo que resulta esencial en el desarrollo de la actividad administrativa y en el cumplimiento de sus fines consagrados en el artículo 2º de la Constitución".* (Cfr. T- 395 de 1998, M. P: Dr. Alejandro Martínez Caballero). Con el propósito de.

I. PUEBLO YUKPA GOZA DE ALTA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR SU COMPLEJO ESTADO DE DESPROTECCIÓN Y DISCRIMINACIÓN

1. AÑO DE 1989 Y 1991, PUEBLO INDÍGENA YUKPA GOZA DE ALTA PROTECCIÓN INTERNACIONAL POR SU CONDICIÓN DE NÓMADA Y SEMINÓMADA.

El Estado Colombiano contrajo la obligación internacional al suscribir el convenio 169 de 1989 de la OIT, convenio que fue ratificado por el Estado Colombiano mediante la Ley 21 de 1991 y declarado exequible en sentencia de la Honorable Corte Constitucional.

En tal sentido el Estado Colombino, se obligó a proteger de manera especial al pueblo indígena Yukpa, por su condición de nómada, seminómada y agricultores itinerantes. Al respecto el artículo 14 del Convenio 169 de 1989 de la OIT, menciona:

"Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho al Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, ***deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes***[2].

En tal sentido es una obligación **proteger de manera particular** al pueblo Yukpa, en su condición de pueblo Indígena Nómada y de agricultor itinerantes.

2. AÑO 1995, PROTECCIÓN DE LAS TIERRAS DEL PUEBLO YUKPA POR SU CONDICIÓN DE NÓMADA Y SEMINÓMADA.

El Estado Colombiano promulgó la Ley 2 da de 1959, con el fin de desarrollar la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, en una parte del territorio nacional, y para ello crea la figura de protección de Zonas de Reserva Forestal. En este orden de ideas, creó en territorio ancestral Yukpa de la Serranía del Perijá la Zona de Reserva de los Motilones y la Zona de Reserva del Río Magdalena.

El estado colombiano mediante Decreto Presidencial 2164 del siete (7) de diciembre del año 1995, menciona claramente en su Artículo "3o. Protección de los derechos y bienes de las comunidades*." Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, semi-nomada o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de la ley 160 de 1994, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas. Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sólo podrán adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos".*[3]

Es decir, desde el año 1994 en adelante, no se debieron haber sustraído áreas de las zonas de reserva forestal de la Serranía de los Motilones y del Río Magdalena, pues su función solo es compatible para la constitución y ampliación del territorio ancestral Yukpa. Lamentablemente el Estado desde el día 3 de agosto de 1994 al 4 de junio de 2019, "sustrajo" despojó 10.176,3 ha, de la zona de reserva de los motilones y la zona de reserva del río magdalena, que son del territorio ancestral yukpa, para darle paso a la minería, las cuales han secado los ríos y matar más de 90 niños al año.

[2] Artículo 14 de Convenio 169 de La OIT
[3] Decreto Presidencial 2164 del 7 de diciembre de 1995.,

La condición cultural del pueblo indígena Yukpa, como semi-nomada y agricultores itinerantes, fue ampliamente analizada mediante conceptos número 105. 4446, numero recibido 3013-2019, del 26 de agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN) y aclarado con el número 4962 del 10 de septiembre de 2019. De la misma manera la Facultad de Antropología, de la Universidad Externado de Colombia, emitió el pasado 8 de agosto de 2019, un concepto sobre nomadismo y movilidad en relación con los procesos históricos, territoriales y culturales del pueblo indígena.

3. AÑO 1996, PUEBLO YUKPA, DECLARADO PRIMER PUEBLO AMENAZADO EN COLOMBIA

Debido a la grave discriminación, la desatención del Estado, la grave situación social, humanitaria, territorial, y ambiental de nuestro pueblo Yukpa, el Estado colombiano por primera vez en nuestra historia de vida republicana, por intermedio de la propia Presidencia de la Republica de Colombia, suscribe el Decreto Presidencial con fuerza de Ley 397 de 7 de agosto de 1996, donde de manera contundente declara al pueblo Yukpa junto con seis (6) pueblo indígenas más de Colombia, como pueblos indígenas amenazados, todos ellos tienen la misma características: son nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes y con graves afectaciones territoriales por fenómenos de colonización, conflicto armado, minería e hidrocarburos.

En tal sentido el decreto presidencial menciona lo siguiente:

"Artículo 2o. funciones ***(…)*** *3o. Concertar la programación para períodos anuales de las acciones de constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardos y saneamiento y conversión de reservas indígenas que se requieran de acuerdo con la información a que se refiere el numeral anterior, para su ejecución a partir de la vigencia presupuestal de 1997; priorizando las siguientes(…) b) Ampliación, constitución y/o saneamiento de resguardos para pueblos indígenas* ***amenazados:*** *Chimila, Nukak,* ***Yukpas****, Kofan, Embera de Risaralda (Caldas), pueblos indígenas de Arauca, la comunidad Kuti del Río Tolo en el Departamento del Chocó y la conversión de reservas en resguardos y su saneamiento; Artículo* ***3o. apropiación presupuestal.*** *El Gobierno Nacional incluirá anualmente en el proyecto de ley de presupuesto, las partidas necesarias para la ejecución de la programación de que trata el numeral 3o. de conformidad con el estimativo de costos de que trata el numeral 4o. del mismo artículo y de acuerdo con los procedimientos determinados por las normas vigentes. Articulo 8o. obras e inversiones****. Ninguna obra, exploración, explotación o inversión podrá realizarse en territorio indígena sin la previa concertación con las autoridades indígenas, comunidades y sus organizaciones. Artículo 10. mesa de concertación****. Créase la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas.*[4]

4. AÑO 2009, PUEBLO INDÍGENA YUKPA EN EXTERMINIO FÍSICO Y CULTURAL.

En el año 2008, el conflicto armado y los conflictos territoriales desplazaron forzosamente a 1.200 miembros de nuestro pueblo Yukpa desde la Serranía del Perijá hacia Valledupar y Bosconia, departamento del Cesar, Buriticá y el casco urbano de Santa Marta, en el departamento del Magdalena y Dibulla en el departamento de la Guajira. Hoy nuestros familiares Yukpas están viviendo en situación de miseria y en riesgo de indigencia, bajo la indiferencia y abandono del Estado en su conjunto.

[4] Ddecreto presidencial397 de 7 de agosto de 1996

Es por ello que la Honorable Corte Constitucional declaró nuestro pueblo Yukpa y su territorio en riesgo de exterminio físico y cultural mediante Auto 004 del 2009. En el marco del estado de cosas inconstitucionales en sentencia T-025 de 2004. Es decir, la máxima instancia constitucional y garante de los derechos fundamentales y territoriales, ha constatado que nuestro pueblo y nuestro territorio presenta vulneración masiva, repetida y constante de derechos fundamentales que afectan al conjunto de nuestro pueblo.

La Honorable Corte Constitucional, nuevamente mediante Auto 266 de 2017, mantiene el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a las comunidades indígenas y afrodescendientes afectados por el desplazamiento, en riesgo de estarlo y con restricciones a la movilidad entre ellas el pueblo Yukpa.

Recientemente la Corte Constitucional emite el Auto 471 de 2019 en favor del pueblo Yukpa, motivado entre otros aspectos por el informe de fecha 24 de julio del año 2019, por la Defensoría Nacional del Pueblo, a la honorable presidenta de la Corte Constitucional, doctora **GLORIA ESTELLA ORTIZ DELGADO**, en dicho informe la Defensoría manifiesta su preocupación por que el Ministerio del Interior viene certificando la no presencia del pueblo Yukpa en su territorio ancestral.

Lamentablemente por el no acatamiento de estas sentencias del máximo poder constitucional del Estado Colombiano, la situación al interior de los territorios empeoró drásticamente, por lo que el pueblo Yukpa tiene más de 2. 800 miembros recorriendo las calles de más de quince (15) ciudades de Colombia en total indigencia, bajo la mirada indiferente del Gobierno Nacional y los entes territoriales.

II. SOLICITUD RESPETUOSA, DOCTOR IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, PRESIDENTE DE COLOMBIA, DOCTOR, JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO, DIRECTOR NACIONAL DEL DANE, MARTHA OSPINA, DIRECTORA INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

1. Favor informar cuantos habitantes tiene cada uno de los municipios de: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumani, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá.

2. Informar cuantas personas se encontraban o se encuentran en pobreza, pobreza extrema y pobreza monetaria en cada uno de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumani, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. Favor indicar año tras año desde el año 1990 al año 2019.

3. Informar cuales son los municipios con mayor número de pobreza, pobreza extrema y pobreza monetaria en el departamento del Cesar. Favor indicar año tras año desde el año 1990 al año 2019.

4. Informar los índices de pobreza, pobreza extrema y pobreza monetaria en cada uno de los municipios del departamento del Cesar. Favor indicar año tras año desde el año 1990 al año 2019.

5. Informar cual es el puesto que ocupa a nivel **departamental y nacional** en pobreza, pobreza extrema y pobreza monetaria en cada uno de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. Favor indicar año tras año desde el año 1990 al año 2019.

6. Informar cuantas personas del sector urbano de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá, cuentan con agua potable y saneamiento básico.

7. Informar cuantas personas del sector rural de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá, cuentan con agua potable y saneamiento básico.

8. Informar cuantas personas del sector urbano de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá, NO cuentan con agua potable y saneamiento básico.

9. Informar cuantas personas del sector rural de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá, N0 cuentan con agua potable y saneamiento básico.

10. A. Informar cuantos niños y niñas menores de un año, informar cuantas niños y niñas de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas de seis años (6) a catorce (14) años, han padecido desnutrición en el sector urbano de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. **B**. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. **C.** Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.

11. A. Informar cuantas niños y niñas menores de un año, Informar cuantas niños y niñas de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas de síes años (6) a catorce (14) años, han padecido desnutrición en el sector rural de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. **B**. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. **C.** Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.

12. A. Informar cuantas niños y niñas menores de un año, Informar cuantas niños y niñas de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas de seis años (6) a catorce (14) años, han muerto por desnutrición o enfermedades asociadas a la desnutrición en el sector urbano de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. **B**. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. **C.** Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.

13. A. Informar cuantas niños y niñas menores de un año, Informar cuantas niños y niñas de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas de seis años (6) a catorce (14) años, han muerto por desnutrición o enfermedades asociadas a la desnutrición en el sector rural de los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. **B**. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. **C.** Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.

14. Informar cuantas niños y niñas Yukpa menores de un año, Informar cuantas niños y niñas Yukpa de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas Yukpa de seis años (6) a catorce (14) años, han muerto por desnutrición o enfermedades asociadas a la desnutrición en los municipios de la Costa Caribe. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios.

15. Informar cuantas niños y niñas Yukpa menores de un año, Informar cuantas niños y niñas Yukpa de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas Yukpa de seis años (6) a catorce (14) años, han padecido desnutrición o enfermedades asociadas a la desnutrición en los municipios de la Costa Caribe. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios.

16. Informar cuantas niños y niñas Yukpa menores de un año, Informar cuantas niños y niñas Yukpa de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas Yukpa de seis años (6) a catorce (14) años, se han enfermado de infecciones respiratorias agudas (IRA) en los siguientes municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. **B**. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. **C.** Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.

17. Informar cuantas niños y niñas Yukpa menores de un año, Informar cuantas niños y niñas Yukpa de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas Yukpa de seis años (6) a catorce (14) años, han muerto por enfermedad asociada o enfermado de infecciones respiratorias agudas (IRA), en los municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. **B**. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. **C.** Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.

18. Informar cuantas niños y niñas Yukpa menores de un año, Informar cuantas niños y niñas Yukpa de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas Yukpa de seis años (6) a catorce (14) años, se han enfermado de diarrea aguda (EDA), en los municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. **B**. Favor indicar el total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. **C.** Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.

19. A Informar cuantas niños y niñas Yukpa menores de un año, Informar cuantas niños y niñas Yukpa de un año (1) a cinco (5) años, informar cuantos niños y niñas Yukpa de seis años (6) a catorce (14) años, han muerto de diarrea aguda (EDA), en los municipios: Manaure, la Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguana y Curumaní, departamento del Cesar, Región Serranía del Perijá. **B**. Favor indicar el

total y año tras año desde el año 1990 al año 2019 en los respectivos municipios. **C.** Cuántos de estos son de la Etnia Yukpa.

III. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

1. Solicitamos al señor Procurador General de la Nación, Doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, y a la PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS CONSTITUCIONALES, en el marco de sus funciones, consagradas en el numeral 3, del artículo 8, del decreto Ley 262 del año 2000, y en concordancia con lo dispuesto en la resolución 496 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación, Supervigilar y promover el cumplimiento de las disposiciones que regulan el derecho de petición interpuesto. Para ello se deberá comprobar que la información es fidedigna y que no se nos oculte o disimule la información.

2. Solicitamos a los medios de comunicación y a la CIDH, estar vigilantes sobre las respuestas a la presente solicitud.

IV. JURISDICPRUDENCIA DEL DERECHOS DE PETICIÓN.

Invocamos como fundamentos de derecho lo siguiente:

1. Artículo 23 de la Constitución Política: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

2. Artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado.

3. ARTÍCULO 14 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

4. Sentencia C-274 del 9 de mayo de 2013 de la honorable Corte Constitucional.
Donde se declaró exequible la *"Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional*". Por consiguiente, el proyecto de ley No. 228/2012 Cámara, 156/11 Senado.

5. Sentencia T-1160 de 2001 de la Corte Constitucional:
"*El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión*".

6. Cfr. T- 395 de 1998, M. P: Dr. Alejandro Martínez Caballero de la Corte Constitucional.
"pronta resolución y decisión de fondo. En este sentido, la Corte ha sido enfática al resaltar que no basta un mero pronunciamiento sobre el objeto de la petición, sino que la contestación de la administración debe contener la respuesta al problema planteado por el ciudadano, lo que resulta esencial en el desarrollo de la actividad administrativa y en el cumplimiento de sus fines consagrados en el artículo 2º de la Constitución".

7. Sentencia T-312/06 de la Corte Constitucional:
"En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes".

8. Corte Constitucional Sentencia C-826/13 "al principio de celeridad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que éste implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en general" la "Corte ha concluido que el logro de la efectividad de los derechos fundamentales por parte de la administración pública se basa en dos principios esenciales: el de eficacia y el de eficiencia. A este respecto ha señalado que la eficacia, hace relación "…*al cumplimiento de las determinaciones de la administración* "y la eficiencia a "…*la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos".* En este sentido, ha sostenido que estos dos principios se orientan hacia "*la verificación objetiva de la distribución y producción de bienes y servicios del Estado*

destinados a la consecución de los fines sociales propuestos por el Estado Social de Derecho. Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado administrativo de prestaciones".

V. NOTIFICACIONES.

Se recibirá las notificaciones en la calle 12 # 15 – 26 centro, municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar: Teléfono: Cel. 3114114548, 3005011049, 3135939951, 3173837809. Correo electrónico serraniaresguardosokorpa@gmail.com, yukpadeiroka@hotmail.com.

Atentamente,

JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo el Rosario, Bella Vista Yucatán
Municipio de la Paz, Serranía del Perijá.

ALFREDO PEÑA FRANCO.
GOBERNADOR DEL CABILDO del resguardo Iroka
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá.

ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO.
GOBERNADORA DEL CABILDO del Resguardo Sokorpa
Municipio de Becerril del Campo, Serranía del Perijá.

EMILIO OVALLE MARTINEZ.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Menkwe, Mishaya, La Pista
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá.

ALIRIO OVALLE REYES.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Caño Padilla.
Municipio de La Paz, Serranía del Perijá.

ANDRÉS VENCE VILLAR.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El Coso
Municipio de La Paz, Serranía del Perijá.

CONSTANCIA A LA HONORABLE CORTE COSNTITUCIONAL

Los suscritos Gobernadores, del Pueblo Indígena Yukpa, de la Serranía del Perijá, Departamento del Cesar: **JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ,** mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con cédula de ciudadanía **N° 1.067.808.333** expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo el Rosario, Bella Vista y Yukatan asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según constancia expedida por el Ministerio del Interior con fecha de 2 de abril del 2014 y acta de posesión del 17 de marzo de 2014 suscrita por la Alcaldía Municipal de La Paz, **ALFREDO PEÑA FRANCO** mayor de edad, con domicilio en el municipio Agustín Codazzi, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía **N° 18.956.993** expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Iroka asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 28 de junio de 2018, acta de elección del 20 de junio de 2018 y acta de posesión N° 0378 del 25 de junio de 2018 suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, **ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO,** mayor de edad, con domicilio en el municipio Becerril del Campo, Cesar, identificada con la cédula de ciudadanía **N° 49.748.586** expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADORA DEL CABILDO del Resguardo Sokorpa asentado en la serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Becerril, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 21 de julio de 2015 y acta de elección del 28 de mayo de 2015 y acta de posesión del 12 de junio de 2015 suscrita por la Alcaldía Municipal de Becerril, **EMILIO OVALLE MARTÍNEZ,** mayor de edad, con domicilio en el municipio Agustín Codazzi, Cesar, identificado con la cédula de ciudadania **N° 18.939.440** expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Menkwe, Mishaya, La Pista asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, según acta de posesión N° 0347 del 29 de enero de 2018 suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, **ALIRIO OVALLE REYES,** mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía **N° 77.040.052** expedida en el mismo municipio, actuando

en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Caño Padilla asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 12 de junio de 2016 y acta de posesión de fecha 13 de marzo de 2002 suscrita por la Alcaldía Municipal del Municipio de La Paz**, ANDRÉS VENCE VILLAR,** mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía **N° 6.676.395** expedida en el municipio San José de Oriente, Cesar, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El Coso asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según acta N° 03 del 14 de junio de 2016, **SE PERMITEN PRESENTAR BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO LAS SIGUIENTE CONSTANCIA EN EL MARCO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE REGALÍAS 2056 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. "*POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS,*"; POR NO SURTIR EL PROCESO DE COSNULTA PREVÍA CON EL PUEBLO INDIGENA YUKPA**

QUE, Los siguientes resguardos Indígena asentados en el Departamento del Cesar, Serranía del Perijá: **A.** Resguardo Indígena el Rosario, Bella Vista y Yukatan, jurisdicción del municipio de La Paz, **B,** Resguardo Indígena Iroka asentado en el municipio de Agustín Codazzi, **C,** Resguardo Indígena de Menkwe, Mishaya, La Pista asentado en el municipio de Agustín Codazzi, **D,** Resguardo Indígena Caño Padilla, asentado en el Municipio de La Paz y **E**, El Resguardo Indígena de La Laguna, Cinco Caminos y El Coso asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz.

1. Nunca hemos hecho parte de la Organización Indígena de Colombia ONIC, ni de manera formal e informal.
2. Tampoco hemos hecho parte de la Mesa Peramente de Concertación (MCP).

QUE, De los seis (6) Resguardos Indígenas Yukpa de la Serranía del Perijá, tan solo el resguardo de Sokorpa, ha hecho y hace parte de la ONIC y por ende de la Mesa permanente de Concertación (MPCP) y que pese a ellos no fue invitado a la Consulta previa de Ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. "*POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*,"

QUE, el Gobierno de **IVAN DUQUE MARQUEZ,** no consultó con los seis (6) Cabildos Gobernadores del Pueblo indígena Yukpa, Ley de Regalías 2056 del 30 de septiembre de 2020. *"POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS,"*

Atentamente,

JAIME LUIS OLIVELLA MARQUEZ.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo el Rosario, Bella Vista Yukatan
Municipio de la Paz, Serranía del Perijá.

ALFREDO PEÑA FRANCO.
GOBERNADOR DEL CABILDO del resguardo Iroka
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá.

ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO.
GOBERNADORA DEL CABILDO del Resguardo Sokorpa
Municipio de Becerril del Campo, Serranía del Perijá.

EMILIO OVALLE MARTÍNEZ.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Menkwe, Mishaya, La Pista
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá.

ALIRIO OVALLE REYES.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Caño Padilla.

Municipio de La Paz, Serranía del Perijá.

ANDRÉS VENCE VILLAR.

GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El Coso

Municipio de La Paz, Serranía del Perijá.

MININTERIOR	**REUNIÓN DE CONSULTA PREVIA EN ETAPA DE: MEDIDAS DE MANEJO EN EL MARCO DE LA ORDEN TERCERA DE LA SENTENCIA T-713 DE 2017, LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL PUEBLO YUKPA**	**Código: SI-G1-F12**
		Versión: 02
		Vigente desde: 02/11/2016

Proyecto: **CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN TERCERA DE LA SENTENCIA T-713 DE 2017, LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL PUEBLO YUKPA**
Valledupar – Departamento del Cesar.
FECHA: 21-22-23 de noviembre 2018.
Hora Inicio: 09:00 am
Lugar: Auditorio Hotel El Bosque.

ETAPA		**ETAPA SURTIDA**	
		SI	**No**
Pre consulta.	**13/06/2018** **14/06/2018**	X	
Apertura.	**04/07/2018**		x
Apertura.	**12/07/2018**	X	
Análisis e Identificación de Impactos*	**16/07/2018**		X
	13-14/11/2018* **21-22-23/11-2018**	X	
Formulación de Medidas de Manejo			x
Formulación de Acuerdos			
Protocolización.			
Seguimiento de Acuerdos.			
Cierre de Consulta.			

* Pendientes los impactos en tema de seguridad y Derechos Humanos.

CONVOCADOS

NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD O COMUNIDAD**
Jaime Luis Olivella Márquez	Gobernador del Cabildo	Resguardo El Rosario, Bellavista, Yucatán
Andrés Vence Villar	Gobernador del Cabildo	Resguardo El Koso, La Laguna, Cinco Camino
Alirio Ovalle Reyes	Gobernador del Cabildo	Resguardo Caño Padilla
Emilio Ovalle Martínez	Gobernador del Cabildo	Resguardo Menkwe, Misaya, La Pista
Alfredo Peña Franco	Gobernador del Cabildo	Resguardo Iroka
Esneda Saavedra Restrepo	Gobernadora del Cabildo	Resguardo Sokorpa
Luis Joaquín Uribe Ramírez	Presidente Sekeimu	Pueblo Yukpa
Javier Clavijo Franco	Líder	Pueblo Yukpa

1 - 53

Wilson Largo	Asesor	Pueblo yukpa
Eduar Álvarez	Asesor	Pueblo yukpa
Malka Cuello	Asesor	Consultor Ambiental
Guillermo Cabrales	Secretario General Sekeimu	Pueblo Yukpa

ENTIDADES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD O COMUNIDAD
Alfonso Jiménez Echeverría	Delegado	DCP Ministerio del Interior
Jorge León Ospina.	Delegado	DAIRM Ministerio del Interior
Klipxman Amín Hernández Núñez.	Delegado	DAIRM Ministerio del Interior
Angie Ariza Quintero	Contratista	DAIRM Ministerio del Interior
Elbia Cuadro Pizarro	Delegada	Defensoría del Pueblo
Cesar Armando Fandiño Pineda	Coordinador Gestión Interinstitucional	DAIRM Ministerio del Interior
Hosman Hernández	Delegado	Procuraduría General de la Nación - Regional del Cesar
Yanitza Carrillo Maestre	Delegada	Defensoría del Pueblo
Antonio Rudas Muñoz	Delegado	Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
Vivian Arbesu Murgas	Delegada	Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
Marcela Quiroga	Delegada	Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP
Marcela Triana Ruiz	Delegada	Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP

(54)

Javier Cediel Cruz	Delegado	Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OAÇP
Juan Carlos Barbosa Salamanca	Enlace Local	Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP
Diana Pérez	Delegado	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Edgar Alonso Diaz	Profesional. Especializado	DAIRM Ministerio del Interior
Jairo Velázquez	Delegado	Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP

AUSENTES			JUSTIFICADO SI __NO_X
1	Alcaldía de la Paz – Cesar.		NO
2	Ministerio de Hacienda		NO
4	Agencia de Desarrollo Rural		NO
5	Alta Consejería para el Posconflicto		NO
6	Agencia de Renovación del Territorio		NO
7	Departamento Nacional de Planeación – DPN		NO
8	Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización – ARN		NO

Se debe considerar si es importante para el desarrollo de la reunión la presencia de los ausentes para el normal curso de la convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

I. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN.

Reunión convocada mediante OFI18-42476-DAI-2200 del 24 de octubre de 2018.

21 de noviembre de 2018

1. Instalación por parte del Ministerio del Interior.
2. Instalación por parte del Pueblo Yukpa.
3. Ritual por parte del Pueblo Yukpa.
4. Revisión de los compromisos del acta anterior.
5. Identificación de nuevos impactos Pueblo Yukpa
   5.1 Intervención del Pueblo Yukpa en cabeza del Profesor Wilson Largo.
   5.2 Presentación de otros impactos.
6. Medidas de manejos sobre los impactos definidos anteriormente.
7. Lectura, aprobación y firma del acta.

(55)

DESARROLLO

1. Instalación por parte del Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior, instala la reunión de consulta previa, agradeciendo a toda la participación y oficializando el inicio del evento.

2. Instalación por parte del Pueblo Yukpa.

El Gobernador Jaime Luis Olivella Márquez, del *resguardo el Rosario da la bienvenida a los participantes* y da por instalada la reunión de consulta previa.

3. Ritual por parte del Pueblo Yukpa.

Sabas López, del Resguardo La Laguna, realiza el ritual por parte del Pueblo Yukpa.

4. Revisión de compromisos.

Cesar Fandiño delegado del Ministerio del interior comunica que se le dio traslado del auto 13 de noviembre a la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y que además de esto, se está trabajando en la coordinación interinstitucional entre La Alta Consejería para la Seguridad y defensa, El Ministerio de Defensa y el Ministerio del interior, todas estas decisiones sobre la identificación y evaluación de las medidas de seguridad y de derechos humanos serán notificados al pueblo Yukpa y sus autoridades.
En relación con la mesa de concertación para el pueblo yukpa, se viene realizando el respectivo estudio para definir límites y alcances a través de la oficina jurídica del ministerio del interior.
La OACP, informa que ellos extendieron la solicitud de la próxima reunión del taller de impactos en materia de seguridad y derechos humanos, al Ministerio de Defensa y al consejero para la seguridad, y que hay una fecha tentativa antes de la protocolización.
El Pueblo Yukpa, aclara que la reunión de seguridad es muy importante y que dentro de esta misma deben estar presentes las entidades tales como procuraduría, la defensoría del pueblo, además de la presencia de los delegados de la OACP, y del Ministerio del interior debido a que la información debe permanecer en confidencialidad y no debe ser diluida.
Frente al tema de la ANT, a través de título informativo el ministerio del interior se comunicó con la doctora Lisbeth de la ANT, la cual comunica que debido a la renuncia de la anterior directora, hay problemas para delegar a una persona para la asistencia a la reunión por tal motivo, se podría lograr por video llamada. Frente a dirección de bosques y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se envió copia del acta y se reiteró la convocatoria, ellos respondieron que había colapsado el sistema de Min-ambiente y que por tal motivo nunca llego la respuesta.
Para precisar la corte ya estableció las funciones que le competen a cada entidad, el Ministerio del interior no tiene facultad para exigir la asistencia de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ANT.
No hay garantías si no asisten el Min Ambiente y ANT, establece el pueblo Yukpa, además de esto comunica su preocupación sobre las medidas de manejo establecidas en temas ambientales, debido a que las instituciones que les competen este tema no asistieron.
Alfonso delegado de consulta previa aclara que los únicos responsables de asistir a esta consulta, son el Ministerio del Interior y La OACP, debido a la orden tercera de la sentencia T- 713.

(56)

Procuraduría plantea dos soluciones. Atendiendo la necesidad del pueblo Yukpa de la asistencia de estas dos entidades.
1 .Copia del acta y convocatoria para hoy en horas de la tarde donde se realizará un requerimiento para establecer que si se invitó a la presente reunión.

2. Si consideran que es necesario que haya una investigación se realizara y ellos explicaran por qué no están presente por medio de un informe.

Cesar Fandiño manifiesta que se enviara copia del acta a las entidades que no estén presentes en esta reunión de medidas.

5. Identificación de nuevos impactos

5.1 Presentación Lengua Yukpa por medio de una exposición denominada territorio ancestral del Profesor Wilson Largo.

Solicitud formal del Pueblo Yukpa a la Doctora Marcela, usted como coordinadora de la OACP, por favor evalué el impacto **P17** tal como quedo el debilitamiento de la lengua Yukpa en la zona, ustedes colocan que este impacto no existía, el pueblo Yukpa solicita que después de la presentación del profesor Wilson Largo, La OACP valoren la estimación como vean conveniente.
La doctora Marcela dice que los nuevos impactos se deben evaluar por parte de todos de acuerdo a la metodología en la matriz de impactos.

5.2 Presentación de nuevos impactos y corrección de los ya presentados por medio del Pueblo Yukpa.
Se anexa en CD la matriz consolidada con los impactos y medidas de manejo, concertado con el Pueblo Yukpa y la OACP hasta donde se llegó. Logrando concertar entra las partes una medida de manejo. Dicha matriz será firmada por las partes.
El pueblo Yukpa entrega a la OACP los siguientes documentos:

1. Denuncia sobre desplazamiento ocurrido en el 2016 **(Anexo 1).**
2. Oficio informando del desplazamiento al gobierno nacional **(Anexo 2).**
3. Comunicado a la opinión pública nacional e internacional. **(Anexo 3).**

Nota: El día 22 de noviembre a las 10 am se recogerán las muestras de aguas residuales, por parte de las siguientes personas.
Por parte del pueblo yukpa: Armando Ovalle, Albeiro Ovalle, por parte de la OACP Juan Carlos Barbosa y por parte de Corpocesar Juan Carlos Rodríguez.

A las 4:30 p.m. Se cierra la sesión por parte del Ministerio del interior y la OACP, se quedan en la mesa de trabajo el pueblo Yukpa, revisando la matriz unificada de impactos.

6. Medidas de Manejo

Se da inicio a las 9:00 a.m. del 22/11/2018, sobre el tema de medidas de manejo frente a los impactos ya estipulados, de acuerdo a esto se desarrolló una metodología en el cual consistió en establecer medidas de manejo por parte del pueblo Yukpa y la OACP, para así poder concretar estas mismas en mutuo acuerdo.

(57)

Hace presencia la delegada del Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible como apoyo técnico al taller de medidas de manejo acorde a la invitación por parte del viceministerio de políticas y normalización ambiental,
A las 11:43 am el pueblo yukpa solicita un espacio autónomo para analizar el tema de la certificación de presencia o no presencia del pueblo yukpa en el territorio ancestral de acuerdo a la propuesta de medida de manejo presentada por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Interior.

La OACP Deja constancia que están dispuestos a seguir con el debido proceso de las medidas de manejo y que se está cumpliendo con lo que ordena la sentencia T-713.

A las 2:40 pm se retoma la mesa y toma la palabra Alfonso Giménez de parte de consulta previa para dar respuesta a las cuatro preguntas planteadas por parte del pueblo Yukpa, pero de ante mano el pueblo Yukpa decide seguir en espacio autónomo.

El día 23-11-2018 a las 8:52 el pueblo yukpa continua en espacio autónomo. La delegada Marcela (OACP) de manera respetuosa pregunta cuánto tiempo perdurará este espacio para poder retomar el objetivo principal de la mesa en el marco de la consulta previa relacionado con el taller de medidas de manejo.

A las 2:34 p.m. se termina el espacio autónomo y el delegado de consulta previa emite las respuestas de las cuatro preguntas realizadas anteriormente. A continuación se exponen cuales son.

1. ¿Por qué estamos haciendo un proceso de consulta previa fuera del territorio ancestral?
Porque así quedó planteado en la reunión de pre-consulta donde se estableció la ruta metodológica.

2 ¿Fue legal que el gobierno no certificara la no presencia del pueblo Yukpa en la ETCR?
La Dirección de consulta previa actuó en derecho conforme a la ley y de acuerdo a la corte constitucional está en la sentencia en el numeral 7.16 (iv) el certificado que emite la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior es un documento que ayuda a establecer, pero que no determina cuándo debe hacerse la consulta pues el análisis se debe hacer conforme al Convenio 169 de 1989 de la OIT y la jurisprudencia de esta Corte.

La corte planteó que la OACP y el Min interior debían ajustar sus actuaciones al concepto jurídico a la debida diligencia, por eso determino hacer un estudio a la ANT para determinar si esta estaba en un territorio ancestral. Dado la situación difícil con el área de certificaciones del DCP para evitar este tipo de conflicto, la Corte Constitucional, exhortó al gobierno nacional y al congreso a que tomen las medidas que permitan ajustar los certificados de presencia étnicos, a fin de otorgarle independencia administrativa y financiera a la entidad encargada de expedirlos.

3 ¿Es legal la postura de la dirección de la DCP, en desconocer el artículo 8 del decreto presidencial 1397 de 1996, a la luz del que mismo decreto en su artículo 2do, habla del pueblo Yukpa en ser el primer pueblo amenazado en extermino en Colombia?

La corte planteó que la OACP y el Min interior debían ajustar sus actuaciones al concepto jurídico a la debida diligencia, por eso determino hacer un estudio a la ANT para determinar si esta estaba en un territorio ancestral. Dado la situación difícil con el área de certificaciones del DCP para evitar este tipo de conflicto, la Corte Constitucional, exhortó al gobierno nacional y al congreso a que tomen las medidas que permitan ajustar los

58

certificados de presencia étnicos, a fin de otorgarle independencia administrativa y financiera a la entidad encargada de expedirlos.

4. Han sido legales las actuaciones de los diferentes directores al no certificar la presencia del pueblo Yukpa en el territorio ancestral incluyendo la ETCR, cuando su territorio ancestral hay dos particulares conexos. 1) hace parte de la reserva de la motilona, 2) son pueblos nómadas recolectores itinerantes todo esto a luz del artículo 14 del convenio 169 de OIT, y El decreto 2164 de 1995, art 3

Todo acto administrativo tiene la presunción de legalidad, sin embargo, si existen dudas y reclamos de las decisiones, las personas afectados están en su deber de acudir a las autoridades competentes.

Una vez respondidas las preguntas se procede a dar lectura de la constancia presentada por el pueblo Yukpa denominado "Fase de terminación de impactos e inicio de medidas de manejo" por parte del pueblo Yukpa, **(Copia y pega documento)**.

CONSTANCIA DEL PUEBLO YUKPA
Consulta Previa, Sentencia T-713 del año 2017
Fase de terminación de impactos e inicio de medias de manejo.
Fachea 21,22 y 23 noviembre del año 2018

En cuanto a la terminación de la presentación de impactos:
1. El pueblo Yukpa, en su condición de exterminio físico y cultural según auto 004 de 2009, no ha podido presentar los impactos en materia de seguridad y de derechos humanos, porque los funcionarios encargados de escuchar estos delicados y confidenciales impactos no hicieron presencia. El Gobierno Nacional informa que antes de terminar el proceso de consulta previa vendría el señor alto consejero para la seguridad y el ministerio de defensa.
2. El pueblo Yukpa, en su condición de exterminio físico y cultural según auto 004 de 2009, ve con profunda preocupación que, al Gobierno Nacional, el pasado 12 al 16 de julio de 2018, se le haya presentado en el taller de identificación de impactos el desplazamiento de 1.200 Yukpas en septiembre de 2016, por amenazas recibidas por solicitar la consulta previa con ocasión de la instalación de la ETCR. Denuncia de desplazamiento que fue recepcionada en la personería municipal de Valledupar, tal como lo establece la Ley, con los respectivos formularios de registro del censo masivo de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas **(UARIV).**
Y que el pasado 13 y 14 de noviembre de 2018, en la continuación del taller de identificación de impactos, al momento de reconocerlo y ponderarlos, el Gobierno Nacional haya mencionado que no sabe, que está pendiente para su verificación, cuando tuvieron 4 meses para hacer la verificación.
Medidas de Manejo.
3. El pueblo Yukpa, en su condición de exterminio físico y cultural según auto 004 de 2009, observa con profunda preocupación que se haya iniciado el taller de medidas de manejo de los impactos, sin que el gobierno no sepa si la ETCR se va o se queda. El pueblo Yukpa, considera que las medidas de manejo pueden variar sustancialmente, si esta figura se va, se mantiene, se prorroga, se muta en otra figura o se queda definitivamente.

59

Es por ello que, en esta fase, el pueblo Yukpa solicita que el Gobierno Nacional, le diga al pueblo Yukpa, de manera franca, seria y sin dilaciones que quiere hacer con la ETCR en nuestro territorio, para poder establecer de manera correcta las medidas.

4. El pueblo Yukpa, en su condición de exterminio físico y cultural según auto 004 de 2009, se encuentra muy dolido, ofendido y doblemente estigmatizado y discriminado porque el Gobierno del doctor Iván Duque, al no reconocer la presencia del pueblo Yukpa, en territorio ancestral Yukpa, Serranía del Perijá. Pues mencionan en esta fase de la consulta previa, como medida de manejo, que para certificar la presencia del pueblo Yukpa, realizar una visita con el fin de certificar si existimos o no en nuestro territorio.

5. Pero lo que realmente se sale de toda lógica, es que ni si quiera el Gobierno reconoce que se debe certificar nuestra presencia en la zona de Reserva Forestal de los Motilones, Serranía del Perijá, departamento del Cesar, cuando claramente en este territorio de manera directa y constante nos movemos, cazamos y recolectamos, en nuestra condición de nómadas y seminómadas.

El mismo estado colombiano reconoció este derecho, cuando aprobó, reconoció, ratificó el convenio 169 de la OIT, de 1989, que está dentro del bloque de constitucionalidad y mediante decreto 2164 del 7 de diciembre de 1995.

Al respecto las normas que nos protegen son las siguientes.

"El artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, señala lo siguiente "Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho al Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes"[1].

*"Decreto **2164** del 7 de diciembre de 1995, señala en su artículo "3º. Protección de los derechos y bienes de las comunidades. Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, semi-nomada o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de la ley 160 de 1994, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas. Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sólo podrán adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos".*[2]

Situación ocurrida en la visita a la ETCR para realizar muestras de la calidad de las aguas residuales.

6. El pueblo Yukpa, en su condición de exterminio físico y cultural según auto 004 de 2009, se encuentra extrañado por que ayer 22 de noviembre del año 2018, en el marco de la vista del ETCR junto con el Gobierno, para verificar la toma de muestras de aguas residuales, un miembro de las antiguas FARC- EP, le dicen a nuestras autoridades que por favor faciliten el ingreso de la comunidad internacional para realizar turismo en el Perijá, que concreten con ellos la gestión de un proyecto de electrificación y que faciliten la construcción de la ciudadela en la ETCR.

Es decir, mientras acá se define los impactos, allá en la ETCR se planean acciones que generarían nuevos impactos.

Situaciones frente a la participación de las entidades y el tiempo de la Consulta previa.

[1] Artículo 14 de Convenio 169 de La OIT
[2] Decreto Presidencial 2164 del 7 de diciembre de 1995.,

60

7. El pueblo Yukpa, en su condición de exterminio físico y cultural según auto 004 de 2009, deja constancia que el Gobierno Nacional inicia el proceso de consulta previa con el pueblo Yukpa 6 meses después que fueron notificados de hecho, pues la información salió de forma pública y notificados formalmente el día 19 de abril de 2018.

8. El pueblo Yukpa, en su condición de exterminio físico y cultural según auto 004 de 2009, que el Gobierno le propuso a nuestro pueblo, sacar la consulta previa en tal solo... meses, pues el periodo de gobierno actual en ese momento terminaba en pocos días, pues le había cogido tarde el tiempo ordenado por la Corte Constitucional.

9. El pueblo Yukpa, en su condición de exterminio físico y cultural según auto 004 de 2009, que el Gobierno en el mes de julio, determinó suspender el proceso de consulta previa, hasta consultar si debía abordar los temas de derechos territoriales. El juez natural le obliga a abordar los temas de derechos territoriales.
Lo grave es que el Gobierno nos pone a correr por qué no acata la consulta previa, y luego de iniciarla la suspende.

10. El pueblo Yukpa, en su condición de exterminio físico y cultural según auto 004 de 2009, cree que el nuevo gobierno le cogió la noche con la orden del auto del juez natural que prorrogo por cuatro (4) meses más la consulta previa, Pus tan solo reactiva la consulta previa, el 13 de noviembre, es decir 2 meses después de la nueva notificación de prórroga.

11. Hoy cuando el pueblo Yukpa, requiere tiempo interno, para analizar las medidas, el Gobierno se incomoda por la espera de un día, pero el pueblo Yukpa tiene que esperarlos cundo ellos quieran.

12. El pueblo Yukpa, en su condición de exterminio físico y cultural según auto 004 de 2009, solicita que se respeta sus tiempos en el marco del *espacio interno* para analizar las medidas.

13. El pueblo Yukpa, en su condición de exterminio físico y cultural según auto 004 de 2009, informa que después de esta preocupación frente a la metodología de certificación que propone el Gobierno, en los próximos días se estará informado este incidente con el Gobierno, pues es una determinación que pone en riesgo a un más nuestra existencia.

Igualmente la OACP procede a leer la constancia denominada "La reunión de formulación de medidas de manejo en el marco de la orden tercera de sentencia 713 de 2017" (**Copia y pega documento**). Se deja en claridad que este es un ejercicio en construcción y de dialogo.

CONSTANCIA DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ ANTE LA REUNION DE FORMULACION DE MEDIDAS DE MANEJO EN EL MARCO DE LA ORDEN TERCERA DE SENTENCIA 713 DE 2017.

Valledupar, 23 de noviembre de 2018

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con el respecto que se merecen las Autoridades del Pueblo Yukpa, desea dejar constancia de lo siguiente:

1. Que durante este proceso de Consulta Previa hemos expresado que para resolver los problemas jurídicos y atender las posibles o eventuales violaciones de los derechos que se pudieron haber vulnerado con ocasión de la Instalación del ETCR de San José de Oriente, se requiere aplicar un modelo dialógico de protección de derechos que involucre a las autoridades directamente implicadas en la solución de la problemática específica. Este planteamiento parte de la consideración de que, con frecuencia, la exigibilidad judicial de los derechos sociales está en tensión con otros derechos del mismo rango como lo es, en este caso, el derecho fundamental a la Paz y a la vida, que son igualmente obligación del Estado garantizarlos.

61

2. Esta estrategia dialógica, la consideramos no solo más respetuosa, sino necesaria porque garantiza una revisión más racional y precisa de la incidencia del hecho de haber constituido el ETCR de San José de Oriente en dicho lugar.

3. Por lo anterior planteamos que se hace forzoso y urgente que actuemos de manera respetuosa, tanto en la presentación de la información para identificar el problema como en la propuesta de soluciones, las cuales, como hemos insistido, deben ser suficientes, plausibles y corresponder a las reales capacidades de las partes y del problema identificado en la orden tercera de la sentencia 713 de 2017.

4. Para ello, el dialogo así planteado, debe ser intercultural, es decir un dialogo de doble carril donde cada parte aprende de ida y de regreso. Es de esta forma que podemos llegar a conclusiones pertinentes que resulten constructivas para determinar cuál es y en qué consiste la vulneración del derecho e identificar cuál es la causa de la vulneración y señalar cuáles son las políticas públicas existentes en relación con las causas de la vulneración, comprobar su suficiencia para resolver los problemas identificados y establecer medidas de protección a corto, mediano y largo plazo, culturalmente apropiadas, que garanticen el interés y necesidades del Pueblo Yukpa, todo ello dentro de la Constitución y la Ley. .

5. Lo anterior implica proponer medidas plausibles, proporcionales e idóneas para resolver la vulneración de los derechos del Pueblo Yukpa que se identifiquen conjuntamente.

6. Veíamos que, en la medida de lo posible, con el diálogo surgiría un acuerdo para materializar el compromiso del actual gobierno de generar acciones encaminadas a reivindicar y prevenir que se sigan amenazados sus derechos tal como lo viene planteando el Pueblo Yukpa.

7.La OACP entiende que lo anteriormente expresado es así en la medida que de conformidad con el artículo 1° de nuestra Constitución Política, Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, que tiene en el pluralismo una de sus características fundamentales.

8. Es en desarrollo de estas concepciones que la OACP ha actuado y se encuentra en este espacio de consulta.

9.Por lo anterior, no entendemos los actos inapropiados no correspondientes a sus usos y costumbres, presentados a lo largo de este proceso y el hecho de que después de una discusión juiciosa y seria se haya entrado en un espacio autónomo desde el día de ayer a las 12 del medio día sin que al día de hoy tengamos una respuesta respecto a la continuación del proceso para el cual fuimos convocados por el Ministerio del Interior que incluye la definición de medidas de manejo, en el marco de la orden tercera de sentencia 713 de 2017.

10. Vemos, igualmente, que no se ha entendido, o al menos nos quedan serias dudas, que la consulta debe ser un verdadero espacio de diálogo que debe buscar el entendimiento entre las partes, en la cual no debe haber arbitrariedad de ninguna de ellas.

11. Finalmente, los llamamos a la reflexión para llegar a acuerdos concertados en beneficio del Pueblo Yukpa. Pues a pesar de haber hecho esfuerzos de coordinación y gestión no se han escuchado a las entidades cuya presencia fue solicitada por ustedes como la Agencia Nacional de Territorios, presente en la reunión pasada y el Ministerio del Medio Ambiente en la actual reunión.

12. Vemos con preocupación que ya transcurridas varias horas, no se van a alcanzar los objetivos establecidos en la convocatoria hecha por el Ministerio del Interior faltando a los principios de eficacia y celeridad administrativa que tienen estos procesos de consulta por la dilación que se presenta.

13. Dejamos en forma física a las autoridades del Pueblo Yukpa la matriz de impactos y posibles medidas de manejo identificadas por la OACP a partir de lo presentado por ustedes.

14. Dejamos constancia frente a la duda del pueblo yukpa expuesta el día 22 de noviembre, que lo referido a las certificaciones que se deben dar para constatar o no la presencia del Pueblo Yukpa en un Proyecto, Obra o Actividad es resorte de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y no de la OACP. No obstante,

62

nos consta que el funcionario de la mencionada entidad, presente en esta reunión, planteó la medida de manejo al impacto concertado con las Autoridades del Pueblo Yukpa.

15. Para finalizar le solicitamos al Ministerio del Interior convocar al Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar – Sala Jurisdiccional Disciplinaria - para que dentro de sus funciones responsables de hacer seguimiento al cumplimiento de la orden tercera de la Sentencia 713 de 2017 haga presencia en la próxima reunión.

16. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en calidad de invitado al proceso de consulta previa a cargo del Ministerio del Interior para el cumplimiento de la Sentencia T 713 de 2018, realizó el acompañamiento técnico ambiental enfocado a las medidas de manejo de los impactos ambientales identificados en sesiones anteriores por parte de la Comunidad Yukpa, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para el ETCR San José de oriente, Municipio Manaure Balcón del Cesar. Se aclara que el Ministerio de Ambiente no está vinculado al cumplimiento de la Orden Tercera de la mencionada Sentencia, lo cual es competencia del Ministerio del Interior y la Alta Consejería para la Paz, ello teniendo en cuenta que las funciones de Minambiente están supeditadas a ser la entidad rectora de la política ambiental del país, conforme a las funciones y competencias asignadas en la Ley 99 de 1993, en concordancia con el Decreto-Ley 3570 de 2011, y no tiene dentro de sus funciones atender los temas referentes a la consulta previa.

17. En el marco de la visita de toma de muestra de aguas del sistema de tratamiento residual, la OACP declara que no participio ni impulsó la comunicación o conversación entre los representantes del pueblo Yukpa y los miembros del ETCR sobre presencia de las organizaciones internacionales y demás proyectos mencionado en la constancia presentada el día 23 de noviembre de 2018.

La defensora solicita la presencia del área de certificaciones para la próxima reunión además hace un llamado que el espacio autónomo es un espacio legítimo de los pueblos indígenas en general.

La delegada de La OACP presento disculpas por el mal entendido relacionado con la cultura del pueblo YUKPA y la disposición de continuar dialogando en el proceso de consulta.

El Pueblo Yukpa, aclara que el acto realizado el día de ayer es propio de su cultura.

Seguidamente la OACP hace aclaración a la constancia presentada en el sentido que se entienda que este es un ejercicio de dialogo de diversas culturas y por tanto se tiene el derecho de expresar los disensos que se tienen.

Próxima reunión

a) Continuación de la etapa de Medidas de Manejo.
b) Formulación de Acuerdos.

Fecha: 3, 4 y 5 de diciembre de 2018.
Hora: 9:00 am
Lugar: Hotel Campestre El Bosque.

7. Lectura, aprobación y firma del acta.

El día 23 de noviembre de 2018 se da lectura, se aprueba el acta, en el marco del proceso de Consulta Previa.

(63)

Se da por terminado la etapa de Análisis e Identificación de Impactos (Ambiental, cultural), en el marco de la Orden Tercera de la Sentencia T-713 de 2017 con el Pueblo Yukpa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quedan pendientes los Impactos de Seguridad y Derechos Humanos.

No se da por surtida la etapa de Formulación de Medidas de Manejo en el marco de la Orden Tercera de la Sentencia T-713 de 2017 con el Pueblo Yukpa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Transcriptores: Klipxman Amín Hernández Núñez. **(DAIRM),** Angie Natalia Ariza **(DAIRM),** Guillermo Cabrales **(YUKPA).**

Anexos:
Listados de Asistencia
Denuncia sobre desplazamiento ocurrido en el 2016 (Anexo 1).
Oficio informando del desplazamiento al gobierno nacional (Anexo 2).
Comunicado a la opinión pública nacional e internacional (Anexo 3).

Firmas de los responsables,

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD O COMUNIDAD	FIRMAS
Jaime Luis Olivella Márquez	Gobernador del Cabildo	Resguardo El Rosario, Bellavista, Yucatán	
Andrés Vence Villar	Gobernador del Cabildo	Resguardo El Koso, La Laguna, Cinco Camino	
Alirio Ovalle Reyes	Gobernador del Cabildo	Resguardo Caño Padilla	
Emilio Ovalle Martínez	Gobernador del Cabildo	Resguardo Menkwe, Misaya, La Pista	
Alfredo Peña Franco	Gobernador del Cabildo	Resguardo Iroka	
Esneda Saavedra Restrepo	Gobernadora del Cabildo	Resguardo Sokorpa	
Luis Joaquín Uribe Ramírez	Presidente Sekeimu	Pueblo Yukpa	
Javier Clavijo Franco	Líder	Pueblo Yukpa	
Wilson Largo	Asesor	Pueblo yukpa	
Eduar Álvarez	Asesor	Pueblo yukpa	

64

Guillermo Cabrales	Secretario General Sekeimu	Pueblo Yukpa	
Malka Cuello	Asesora	Consultor Ambiental	

Alfonso Jiménez Echeverría	Delegado	DCP Ministerio del Interior	
Jorge León Ospina.	Delegado	DAIRM Ministerio del Interior	
Klipxman Amín Hernández Núñez.	Delegado	DAIRM Ministerio del Interior	
Angie Ariza Quintero	Contratista	DAIRM Ministerio del Interior	
Elbia Cuadro Pizarro	Delegada	Defensoría del Pueblo	
Cesar Armando Fandiño Pineda	Coordinador Gestión Interinstitucional	DAIRM Ministerio del Interior	
Hosman Hernández	Delegado	Procuraduría General de la Nación - Regional del Cesar	
Yanitza Carrillo Maestre	Delegada	Defensoría del Pueblo	
Antonio Rudas Muñoz	Delegado	Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR	
Vivian Arbesu Murgas	Delegada	Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR	
Marcela Quiroga	Delegada	Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP	
Marcela Triana Ruiz	Delegada	Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP	
Javier Cediel Cruz	Delegado	Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP	

Juan Carlos Barbosa Salamanca	Enlace Local	Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP	
Diana Pérez	Delegado	Ministerio de Medio Ambiente	
Edgar Alonso Díaz	Profesional. Especializado	DAIRM Ministerio del Interior	
Jairo Velázquez	Delegado	Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP	

66

El futuro es de todos | Mininterior

Al responder cite este número:
OFI2020-4214-DAI-2200
Bogotá D.C. jueves, 20 de febrero de 2020

Señor
ALFREDO PEÑA FRANCO
Gobernador Resguardo Iroka
Ciudad

Asunto: Convocatoria Sesión de la Mesa Permanente de Concertación para concertar y protocolizar la ruta metodológica del proyecto de Ley *"Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías"*

Respetado Sr Gobernador:

En cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 1397 del 8 de Agosto de 1996 "*Por el cual se crea la Mesa Permanente de Concertación y se dictan otras disposiciones*", comedidamente me permito invitarlo a la sesión de la MPC con el fin de concertar y protocolizar la ruta metodológica para la consulta previa del Proyecto de Ley "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías", texto que fue radicado el pasado 19 de Febrero ante la Secretaría Técnica de la Mesa Permanente de Concertación.

Dicha sesión se llevará a cabo los días 24 y 25 de Febrero de 2020 en la ciudad de Bogotá en el Hotel Dann Av 19 5-72. Cabe resaltar que el día lunes se instalará oficialmente la sesión.

Agradecemos confirmar su asistencia a Luz Elena Izquierdo al correo electrónico secretariatecnicampc@mininterior.gov.co; teléfono 2427400 ext. 2658.

Sea esta la oportunidad para brindarle mi más sincero y cordial saludo.

Atentamente,

MANUEL ALJURE SALAME
Director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (E)

Elaboró: Andrea Coronell Ramírez/ Mónica Gómez
Revisó: Cesar Fandiño P
Aprobó: Manuel Aljure Salame

Serranía del Perijá, febrero 21 de 2020

Doctora
ALICIA RANGO
Ministra del Interior

Doctor
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ.
Procurador General de la Nación
quejas@procuraduria.gov.co
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
procurador@procuraduria.gov.c

Doctor
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor Regional del Pueblo
hijojoa@defenoria.gov.co
asuntosdefensor@defensoria.gov.co
jescruceria@defensoria.gov.co
bernardo_pz@hotmail.com

Doctor
PAULO ABRAO
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos (OEA)
idhoea@oas.org
cidhdenuncias@oas.org
cidhproteccion@oas.org

Doctor
EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos (OEA)
idhoea@oas.org
cidhdenuncias@oas.org
cidhproteccion@oas.org

Doctora
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Presidenta Corte Constitucional

Seguimiento Auto 2004, de 2009, 266 de 2016 y 471 de 2019, sentencia T-025 de 2004.

Señores
REVISTA SEMANA, EL ESPECTADOR Y NOTICIAS UNO
cmunos@elespectador.com
jdlaverde@caracoltv.com.co
nmarin@elespectador.com
pachosantoscal@gmail.com
carielruiz@gmail.com
jcoter@semana.com
nachogomez@colombia.com

REFERENCIA:	Derecho de petición de fondo, Solicitud de Consulta Previa expedita Pueblo Yukpa, Ley de Regalías.
ACCIONANTE:	Pueblo Indígena Yukpa, Departamento del Cesar, Serranía del Perijá

"Hace mucho tiempo la tierra se empezó a llenar de agua, muchos Yukpa murieron porque el agua cubría todo, los animales también se murieron, pero estaban los cerros que tenían vida y empezaron a crecer, ellos le decían a la gente que se subieran para que se salvaran, entonces el cerro más fuerte vencía subiendo más alto que los demás, ese se llama Sekeimu y así fue como se salvó el Yukpa".[1]

Excelentísimos servidores públicos, CIDH, amigos y medios de comunicación: Nosotros: JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ, mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.067.808.333 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo el Rosario, Bella Vista y Yukatan asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según constancia expedida por el Ministerio del Interior con fecha de 2 de abril del 2014 y acta de posesión del 17 de marzo de 2014 suscrita por la Alcaldía Municipal de La Paz, ALFREDO PEÑA FRANCO mayor de edad, con domicilio en el municipio Agustín Codazzi, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.956.993 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Iroka asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 28 de junio de 2018, acta de elección del 20 de junio de 2018 y acta de posesión N° 0378 del 25 de junio de 2018 suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO, mayor de edad, con domicilio en el municipio Becerril del Campo, Cesar, identificada con la cédula de ciudadanía N° 49.748.586 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADORA DEL CABILDO del Resguardo Sokorpa asentado en la serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Becerril,

[1] Parte de la historia del diluvio, primer encuentro del Plan de Salvaguarda, Valledupar- Cesar

según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 21 de julio de 2015 y acta de elección del 28 de mayo de 2015 y acta de posesión del 12 de junio de 2015 suscrita por la Alcaldía Municipal de Becerril, EMILIO OVALLE MARTÍNEZ, mayor de edad, con domicilio en el municipio Agustín Codazzi, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.939.440 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Menkwe, Mishaya, La Pista asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, según acta de posesión N° 0347 del 29 de enero de 2018 suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, ALIRIO OVALLE REYES, mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 77.040.052 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Caño Padilla asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 12 de junio de 2016 y acta de posesión de fecha 13 de marzo de 2002 suscrita por la Alcaldía Municipal del Municipio de La Paz, ANDRÉS VENCE VILLAR, mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.676.395 expedida en el municipio San José de Oriente, Cesar, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El Coso asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según acta N° 03 del 14 de junio de 2016, en ejercicio de nuestro derechos inobservados por parte del Gobierno Nacional, de conformidad con lo consagrado en los artículos 23 de la Constitución Política, artículo 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, buscando de ustedes una pronta respuesta por este medio legítimo de comunicación, tal como lo señala la Honorable Corte Constitucional en su Sentencia T-490/98, cuando afirma EL DERECHO DE PETICIÓN busca *"pronta resolución y decisión de fondo. En este sentido, la Corte ha sido enfática al resaltar que no basta un mero pronunciamiento sobre el objeto de la petición, sino que la contestación de la administración debe contener la respuesta al problema planteado por el ciudadano, lo que resulta esencial en el desarrollo de la actividad administrativa y en el cumplimiento de sus fines consagrados en el artículo 2º de la Constitución".* (Cfr. T- 395 de 1998, M. P: Dr. Alejandro Martínez Caballero). Con el propósito de.

I. PUEBLO YUKPA GOZA DE ALTA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR SU COMPLEJO ESTADO DE DESPROTECCIÓN Y DISCRIMINACIÓN

1. AÑO DE 1989 Y 1991, PUEBLO INDÍGENA YUKPA GOZA DE ALTA PROTECCIÓN INTERNACIONAL POR SU CONDICIÓN DE NÓMADA Y SEMINÓMADA.

El Estado Colombiano contrajo la obligación internacional al suscribir el convenio 169 de 1989 de la OIT, convenio que fue ratificado por el Estado Colombiano mediante la Ley 21 de 1991 y declarado exequible en sentencia de la Honorable Corte Constitucional.

En tal sentido el Estado Colombino, se obligó a proteger de manera especial al pueblo indígena Yukpa, por su condición de nómada, seminómada y agricultores itinerantes. Al respecto el artículo 14 del Convenio 169 de 1989 de la OIT, menciona:

"Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho al Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes[2].

2. AÑO 1995, PROTECCIÓN DE LAS TIERRAS DEL PUEBLO YUKPA POR SU CONDICIÓN DE NÓMADA Y SEMINÓMADA.

El Estado Colombiano promulgó la Ley 2da de 1959, con el fin de desarrollar la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, en una parte del territorio nacional, y para ello crea la figura de protección de Zonas de Reserva Forestal. En este orden de ideas, creó en territorio ancestral Yukpa de la Serranía del Perijá la Zona de Reserva de los Motilones y la Zona de Reserva del Río Magdalena.

En tal sentido el propio Estado colombiano previó en dicha ley, que estas zonas bajo aparentes procedimientos rigurosos podrían ser sustraídas y que su función del suelo y demás cambien, pero puso como única salvaguarda y protección de los territorios y tierras de los pueblos indígenas nómadas y seminómadas la siguiente:

Artículo "3o. Protección de los derechos y bienes de las comunidades*." Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, semi-nomada o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de la ley 160 de 1994, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas. Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sólo podrán adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos".*[3]

Es decir, desde el año 1994 en adelante, no se debieron haber sustraído áreas de las zonas de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones y del Río Magdalena, pues su función solo es compatible para la constitución y ampliación del territorio ancestral Yukpa. Lamentablemente el Estado desde el día 3 de agosto de 1994 al 4 de junio de 2019, sustrajo o despojó 10.176,3 ha, de la Zona de Reserva de los Motilones y la Zona de Reserva del Río Magdalena, que son del territorio ancestral Yukpa, para darle paso a la minería, las cuales han secado los ríos y matar a nuestros niños y niñas.

La condición cultural del pueblo indígena Yukpa, como nómada, semi-nomada y agricultores itinerantes, fue ampliamente analizada mediante los siguientes conceptos documentos y conceptos jurídicos:

A. El pueblo Yukpa mediante escritura pública número 0317 del 2 de agosto del año 2019, se auto reconoció como pueblo indígena nómada, semi-nomada, semi-nomada y agricultores itinerantes. En dicho documento se mencionan los conceptos de la Defensoría del pueblo y los demás documentos públicos.

[2] Artículo 14 de Convenio 169 de La OIT
[3] Decreto Presidencial 2164 del 7 de diciembre de 1995.,

B. Concepto número 105. 4446, numero recibido 3013-2019, del 26 de agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN) y aclarado con el número 4962 del 10 de septiembre de 2019, se reconoce la condición de semi- nomadismo del pueblo indígena Yukpa.

C. Concepto de la a Facultad de Antropología, de la Universidad Externado de Colombia, emitió el pasado 8 de agosto de 2019 un concepto sobre nomadismo y movilidad en relación con los procesos históricos, territoriales y culturales del pueblo indígena. Donde se reconoce la condición del pueblo Indígena Yukpa como nómada y seminómada y señala las afectaciones de nuestro pueblo por la minería a gran escala, como la muerte de nuestros niños y niñas.

D. Por último, el Ministerio del Interior, mediante concepto firmado por el señor viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, radicado número OFl19-52777-DAl-2200, del 27 de noviembre de 2019, emitió el siguiente Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y semi nómadas del Pueblo Yukpa e implementación de la Política Pública Especial. El concepto menciona "*Efectivamente de los estudios científicos y académicos enunciados y en particular el concepto emitido por el ICANH se concluye desde su perspectiva técnica la condición de semi-nomada del pueblo Yukpa".*

Al respecto transcribiremos los apartes de la página número 5.

"De esta manera, el Ministerio del Interior admite la urgencia de implementar políticas públicas a nivel nacional, y, asimismo, de elaborar un instrumento jurídico que permita que estas sean definidas por las entidades y organismos que interactúan con el pueblo Yukpa. Para el caso en particular, contamos con un concepto emitido por el ICANH, que es un soporte con valor científico y académico para las demás entidades públicas, por lo que finalmente se constituye como un criterio orientador para desarrollar programas, planes, proyectos y políticas públicas en pro del pueblo Yukpa".[4]

3. AÑO 1996, PUEBLO YUKPA, DECLARADO PRIMER PUEBLO AMENAZADO EN COLOMBIA

Debido a la grave discriminación, la desatención del Estado, la grave situación social, humanitaria, territorial, y ambiental de nuestro pueblo Yukpa, el Estado colombiano por primera vez en nuestra historia de vida republicana, por intermedio de la propia Presidencia de la Republica de Colombia, suscribe el Decreto Presidencial con fuerza de Ley 397 de 7 de agosto de 1996, donde de manera contundente declara al pueblo Yukpa junto con seis (6) pueblo indígenas más de Colombia, como pueblos indígenas amenazados, todos ellos tienen la misma características: son nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes y con graves afectaciones territoriales por fenómenos de colonización, conflicto armado, minería e hidrocarburos.

En tal sentido el decreto presidencial menciona lo siguiente:

"Artículo 2o. funciones ***(…)*** *3o. Concertar la programación para períodos anuales de las acciones de constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardos y saneamiento y conversión de*

[4] Trasnscribemos aprates de la pagina 5 concepto seminomadismo número OFI19- 52777- DAI-2200, viceministro del Interior,

reservas indígenas que se requieran de acuerdo con la información a que se refiere el numeral anterior, para su ejecución a partir de la vigencia presupuestal de 1997; priorizando las siguientes(…) b) Ampliación, constitución y/o saneamiento de resguardos para pueblos indígenas ***amenazados:*** *Chimila, Nukak,* ***Yukpas****, Kofan, Embera de Risaralda (Caldas), pueblos indígenas de Arauca, la comunidad Kuti del Río Tolo en el Departamento del Chocó y la conversión de reservas en resguardos y su saneamiento; Artículo* ***3o. apropiación presupuestal.*** *El Gobierno Nacional incluirá anualmente en el proyecto de ley de presupuesto, las partidas necesarias para la ejecución de la programación de que trata el numeral 3o. de conformidad con el estimativo de costos de que trata el numeral 4o. del mismo artículo y de acuerdo con los procedimientos determinados por las normas vigentes. Articulo 8o. obras e inversiones****. Ninguna obra, exploración, explotación o inversión podrá realizarse en territorio indígena sin la previa concertación con las autoridades indígenas, comunidades y sus organizaciones. Artículo 10. mesa de concertación****. Créase la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas.*[5]

4. AÑO 2009, PUEBLO INDÍGENA YUKPA EN EXTERMINIO FÍSICO Y CULTURAL.

En el año 2008, el conflicto armado, la minería y los conflictos territoriales desplazaron forzosamente a 1.200 miembros de nuestro pueblo Yukpa desde la Serranía del Perijá hacia Valledupar y Bosconia, departamento del Cesar, Buriticá y el casco urbano de Santa Marta, en el departamento del Magdalena y Dibulla en el departamento de la Guajira. Hoy nuestros familiares Yukpas están viviendo en situación de miseria y en riesgo de indigencia, bajo la indiferencia y abandono del Estado en su conjunto.

Es por ello, que la Honorable Corte Constitucional declaró nuestro pueblo Yukpa y su territorio en riesgo de exterminio físico y cultural mediante Auto 004 del 2009. En el marco del estado de cosas inconstitucionales en sentencia T-025 de 2004. Es decir, la máxima instancia constitucional y garante de los derechos fundamentales y territoriales, ha constatado que nuestro pueblo y nuestro territorio presenta vulneración masiva, repetida y constante de derechos fundamentales que afectan al conjunto de nuestro pueblo.

La Honorable Corte Constitucional, nuevamente mediante Auto 266 de 2017, mantiene el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a las comunidades indígenas y afrodescendientes afectados por el desplazamiento, en riesgo de estarlo y con restricciones a la movilidad entre ellas el pueblo Yukpa. Recientemente la Corte Constitucional emite el Auto 471 de 2019.

Lamentablemente por el no acatamiento de estas sentencias del máximo poder constitucional del Estado Colombiano, la situación al interior de los territorios empeoró drásticamente, por lo que el pueblo Yukpa tiene hoy más de 2. 800 miembros recorriendo las calles de más de quince (15) ciudades de Colombia en total indigencia, bajo la mirada indiferente del Gobierno Nacional y los entes territoriales.

En conclusión, como se ha dicho hasta la saciedad, el propio Estado determinó que en el artículo 3°, Decreto 2164 del 7 de diciembre de 1995 "*Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, semi-nomada o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de la ley 160 de 1994, sólo podrán destinarse a la constitución de*

[5] Ddecreto presidencial397 de 7 de agosto de 1996

resguardos indígenas. Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sólo podrán adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos".[6]

II. SOLICITUD RESPETUOSA, DOCTORA ALICIA RANGO, MINISTRA DEL INTERIOR

1. Informar que no nos es posible asistir el próximo 24 y 25 de febrero de 2020 a la sesión de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y las Organizaciones Indígenas, para realizar el proceso de consulta previa del "Proyecto de Ley por la cual se Regula la Organización y el Funcionamiento del Sistema General de Regalías". Por qué en dicha ´fecha el pueblo Yukpa se encuentra en reunión con la Agencia Nacional de Tierras en la ciudad de Valledupar.

2. Informar que no nos es posible asistir el próximo 24 y 25 de febrero de 2020 a la sesión de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y las Organizaciones Indígenas, para realizar el proceso de consulta previa del "Proyecto de Ley por la cual se Regula la Organización y el Funcionamiento del Sistema General de Regalías"., porque cinco (5) de los síes (6) resguardos indígenas Yukpas de la Serranía del Perijá, no hacemos parte de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y Organizaciones Indígenas.

Por primera vez y en la pasada Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo, fuimos invitados a una consulta previa de una medida legislativa, pero el resultado fue nefasto, no pudimos de manera apropiada participar y presentar nuestras observaciones y preocupaciones, ni tampoco fueron tiendas en cuenta, pues nuestra asistencia fue más protocolaría que activa y sentimos que se nos cuartaba nuestra participación por no hacer parte del espacio mencionado.

3. Informarle que el escenario acordado o pactado con el Gobierno Nacional y en especial con el Ministerio del Interior, sobre los procesos de consulta previa en a aquellas medidas legislativas, administrativas, proyectos obras o actividades susceptibles de afectarnos, es la Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa (MCP- YUKUPA).

Este espacio fue pactado como medida de manejo de la consulta previa de la orden Tercera, sentencia T- 713 de 2017, en talleres de los días veintidós (22), veintitrés (23) y veinticuatro (24) de noviembre del año 2018, donde claramente se acordó que dicho o espacio de concertación tendrá como "*Funciones de la Mesa: Dialogar, Concertar y Consultar al pueblo Yukpa sobre las medidas administrativas, legislativas, proyectos de orden nacional susceptibles de afectar. De acuerdo; 11 artículo 6 del convenio 169 de la OIT ley 21 de 1991."*[7].

4. En tal sentido nos permitimos de manera respetuosa solicitar, se nos garantizar el derecho fundamental del pueblo indígena Yukpa de la Serranía del Perijá, a la consulta previa del "Proyecto de Ley por la cual se Regula la Organización y el Funcionamiento del Sistema General de Regalías", de una forma adecuada y al

[6] Decreto Presidencial 2164 del 7 de diciembre de 1995.,
[7] Tomada del acta del 22,23 y 23 de noviembe de 2019

interior de la Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa (MCP- YUKUPA). Para lo cual deberá de manera rápida concertar con el pueblo indígena Yukpa el acto administrativo (MCP- YUKUPA).

5. El pueblo Yukpa le solicita al ministerio del Interior, convocarnos de manera urgente al pueblo indígena Yukpa de la Serranía del Perijá, a la consulta previa del "Proyecto de Ley por la cual se Regula la Organización y el Funcionamiento del Sistema General de Regalías", Al interior de Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa (MCP- YUKUPA). Todo esto para dar cumplimiento a los siguientes principios que rigüe la consulta previa, según sentencia SU -123 de 2018.

> *"Entre otras, en las sentencias T-129 de 2011, C-389 de 2016, SU-133 de 2017, SU- 217 de 2017, T-298 de 2017 y T-103 de 2018, esta Corte ha explicado que el objetivo de la consulta es intentar genuinamente lograr un acuerdo con las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre medidas que las afecten directamente (esto es, normas, políticas, planes, programas, etc.)*[8]*. Así mismo se ha decantado que el principio de buena fe debe guiar la actuación de las partes, condición imprescindible para su entendimiento y confianza y, por lo tanto, para la eficacia de la consulta y que por medio de las consultas se debe asegurar una participación y efectiva*[9] *de los pueblos interesados. Sobre este tópico la jurisprudencia ha explicado que el significado de la participación es que no pueda admitirse como tal a la simple notificación a los pueblos interesados o a la celebración de reuniones informativas. Que esa participación sea efectiva significa que el punto de vista de los pueblos debe tener incidencia en la decisión que adopten las autoridades concernidas.*
>
> *6.3. La Corte igualmente ha señalado que la consulta constituye un proceso de diálogo intercultural entre iguales, en el entendido de que esto significa que ni los pueblos indígenas tienen un derecho de veto que les permita bloquear decisiones estatales, ni el Estado tiene un derecho a la imposición sobre los pueblos indígenas para imponerles caprichosamente cualquier decisión*[10] *sino que opera un intercambio de razones entre culturas que tiene igual dignidad y valor constitucional (CP art 70). Esto no significa que, desde el punto de vista fáctico, los pueblos indígenas o las comunidades afrodescendientes tengan un igual poder a los particulares o al Estado en este proceso de consulta pues usualmente se encuentran en una situación de desventaja frente a ellos por la discriminación a que han sido sometidos. Por eso el Estado tiene el deber de tomar las medidas compensatorias necesarias para reforzar la posición de estos pueblos en estos procesos de consulta para que efectivamente opere ese diálogo intercultural entre iguales.*
>
> *6.4. La jurisprudencia también ha indicado que la consulta debe ser flexible*[11] *de manera que se adapte a las necesidades de cada asunto, sin que esto se pueda desconocer con la simple alusión del interés*

[8] Véase, además, la Observación 2010/81 sobre el Convenio 169 de la OIT

[9] Este aspecto fue abordado, entre otras, en Sentencias SU-039 de 1997, Sentencia T-376 de 2012 y T-550 de 2015. Así mismo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam del de 28 de noviembre de 2007, párr. 140; Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia (fondo y reparaciones) del 27 de junio de 2012 Párr. 163 y 179; Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras. Sentencia de 08 de octubre de 2015 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 160 – 162 y 216; y Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Sentencia de 25 de noviembre de 2015 Fondo, Reparaciones y Costas. Párr.181 y 204

[10] Véase sentencia T-704de 2016. Fundamento 2.30.

[11] Véase el artículo 6.1.a del Convenio 169 OIT, y las sentencias de la Corte IDH Saramaka vs Surinam y Sarayaku vs Ecuador y C-175 de 2009 de esta corporación.

general, pues debe atenderse a la diversidad de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Además, la consulta debe ser informada[12]*, por lo cual no puede tratarse de un asunto de mero trámite formal sino de un esfuerzo genuino del Estado y los particulares implicados por conocer las perspectivas de los pueblos afectados y por efectivamente lograr un acuerdo. Es entonces imperativo respetar la diversidad étnica y cultural*[13] *lo que permitirá encontrar mecanismos de satisfacción para ambas partes."*[14]

II. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

1. Solicitamos al señor Procurador General de la Nación, Doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, y a la PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS CONSTITUCIONALES, en el marco de sus funciones, consagradas en el numeral 3, del artículo 8, del decreto Ley 262 del año 2000, y en concordancia con lo dispuesto en la resolución 496 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación, Supervigilar y promover el cumplimiento de las disposiciones que regulan el derecho de petición interpuesto. Para ello se deberá comprobar que la información es fidedigna y que no se nos oculte o disimule la información.

2. Solicitamos a los medios de comunicación y a la CIDH, estar vigilantes sobre las respuestas a la presente solicitud.

IV. JURISDICPRUDENCIA DEL DERECHOS DE PETICIÓN.

Invocamos como fundamentos de derecho lo siguiente:

1. Artículo 23 de la Constitución Política: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

2. Artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado.

[12] Sentencias C-891 de 2002, C-389 de 2016, SU-039 de 2003 y T-769 de 2009, así mismo en Corte IDH el Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras. Sentencia de 08 de octubre de 2015 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 160 – 162 y 216.
[13] La Corte IDH ha señalado que los procedimientos deben ser culturalmente adecuados, según las costumbres y tradiciones de los pueblos. Al respecto, es obligación tener en cuenta los métodos de toma de decisión de las comunidades. Ello implica respetar las autoridades escogidas por el colectivo para entablar el diálogo. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam del de 28 de noviembre de 2007, párr. 133. En el mismo sentido ver Sentencia (fondo y reparaciones) Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, del 27 de junio de 2012 Párr. 177
[14] Sentencia SU 123 de 2018

3. ARTÍCULO 14 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

4. Sentencia C-274 del 9 de mayo de 2013 de la honorable Corte Constitucional.
Donde se declaró exequible la *"Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional*". Por consiguiente, el proyecto de ley No. 228/2012 Cámara, 156/11 Senado.

5. Sentencia T-1160 de 2001 de la Corte Constitucional:
"*El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión*".

6. Cfr. T- 395 de 1998, M. P: Dr. Alejandro Martínez Caballero de la Corte Constitucional.
"pronta resolución y decisión de fondo. En este sentido, la Corte ha sido enfática al resaltar que no basta un mero pronunciamiento sobre el objeto de la petición, sino que la contestación de la administración debe contener la respuesta al problema planteado por el ciudadano, lo que resulta esencial en el desarrollo de la actividad administrativa y en el cumplimiento de sus fines consagrados en el artículo 2º de la Constitución".

7. Sentencia T-312/06 de la Corte Constitucional:
"En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes".

8. Corte Constitucional Sentencia C-826/13 "al principio de celeridad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que éste implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en general" la "Corte ha concluido que el logro de la efectividad de los derechos fundamentales por parte de la administración pública se basa en dos principios esenciales: el de eficacia y el de eficiencia. A este respecto ha señalado que la eficacia, hace relación "…*al cumplimiento de las determinaciones de la administración* "y la eficiencia a "…*la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos".* En este sentido, ha sostenido que estos dos principios se orientan hacia "*la verificación objetiva de la distribución y producción de bienes y servicios del Estado destinados a la consecución de los fines sociales propuestos por el Estado Social de Derecho. Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado administrativo de prestaciones".*

V. NOTIFICACIONES.

Se recibirá las notificaciones en la calle 12 # 15 – 26 centro, municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar: Teléfono: Cel. 3114114548, 3005011049, 3135939951, 3173837809. Correo electrónico serraniaresguardosokorpa@gmail.com, yukpadeiroka@hotmail.com.

Atentamente,

JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo el Rosario, Bella Vista Yucatán
Municipio de la Paz, Serranía del Perijá.

ALFREDO PEÑA FRANCO.
GOBERNADOR DEL CABILDO del resguardo Iroka
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá.

ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO.
GOBERNADORA DEL CABILDO del Resguardo Sokorpa
Municipio de Becerril del Campo, Serranía del Perijá.

EMILIO OVALLE MARTINEZ.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Menkwe, Mishaya, La Pista
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá.

ALIRIO OVALLE REYES.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Caño Padilla.
Municipio de La Paz, Serranía del Perijá.

ANDRÉS VENCE VILLAR.
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El Coso
Municipio de La Paz, Serranía del Perijá.

ACTA DE SESIÓN MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CON LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS
Fecha: 28, 29, 30 y 31 de julio y 1 de agosto de 2020
Lugar: sesión virtual

Decreto 1397 de 1996

Temas: protocolización del proceso de consulta previa del proyecto de ley por la cual se regula el funcionamiento y la organización del Sistema General de Regalías

Consecutivo: Sesión MPC No. 3 del año 2020
Fecha y ciudad: 28, 29, 30 y 31 de julio y 1 de agosto de 2020
Lugar: sesión virtual

ASISTENTES
***Quórum* Organizaciones Indígenas**

DELEGADOS INDÍGENAS OFICIALES			
N°	**NOMBRE**	**CARGO**	**REPRESENTA A**
1.	Luis Fernando Arias Arias	Consejero Mayor Delegado ante la MPC	Organización Nacional Indígena de Colombia. ONIC
2.	Julio Cesar López Jamioy	Delegado	Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana. OPIAC
3.	Geremías Torres Izquierdo	Delegado MPC	Confederación Indígena Tayrona. CIT
4.	Saúl David Carrillo Urariyu	Delegado MPC	Macro Región Norte
5.	Wilson Galindo	Delegado MPC	Macro Región Orinoquía
6.	Juan de Jesús Domicó	Delegado MPC	Macro región Occidente

7.	Orlando Rayo Acosta	Delegado MPC	Macro Región Amazonía
8.	Juan Titira Aserndora	Delegado MPC	Macro Región Centro Oriente
10.	Alfonso Peña Chepe	Delegado MPC	Ex constituyente
11.	Francisco Rojas Birry	Delegado MPC	Ex constituyente
INVITADOS PERMANENTES INDÍGENAS			
1.	Miryam Chamorro Caldera	Delegada	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor
2.	Polivio Leandro Rosales	Delegado	Autoridades Indígenas de Colombia AICO por la Pacha Mama.

DELEGADOS DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL			
1.	Carlos Alberto Baena	Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos	Ministerio del Interior
2.	Carolina Rojas	Viceministra de Minas	Ministerio de Minas y Energía
3.	Amparo García	Subdirectora General y Territorial	Departamento Nacional de Planeación
4.	Yesid Parra	Director de Inversiones y Finanzas Públicas	Departamento Nacional de Planeación
5.	José David Insuasti	Coordinador Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo y Regalías	Ministerio de Minas y Energía
6.	Pamela Fonrodona	Coordinadora Grupo Sistema General de Regalías	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
7.	Fernando Aguirre Tejada	Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías	Ministerio del Interior

8.	Guillermo Salah Zuleta	Asesor	DNP
9.	David Santander	Asesor DIFP	DNP
10.	Mónica Marcela Verdugo Parra	Asesora-Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo y Regalías	Ministerio de Minas y Energía
11.	Luis Leguizamon	Asesor	Ministerio de Minas y Energía
12.	Juan Pablo Arias Londoño	Abogado DIFP	DNP
13.	Carolina Alvarado Ovalle	Coordinadora Enfoque Étnico-SGR	DNP
14.	Lucia Torres Parra	Abogada-SGR	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
15.	Lina Leal	Oficina Asesora Jurídica	Ministerio de Minas y Energía
16.	César Armando Fandiño Pineda	Coordinador de Gestión Interinstitucional-DAIRM	Ministerio del Interior
17.	Martha Xiomara Aguirre Del Real	Subdirección General Territorio	DNP
18.	María Teresa Ramírez	Contratista	DNP
19.	Camilo Pérez	Delegado	ANLA
20.	Carlos Gordillo	Equipo Técnico	DNP
21.	Carlos Andrés Hurtado Pérez	Consejero de Relaciones Exteriores	Ministerio de Relaciones Exteriores

22.	Doris Jacanamijoy	Contratista	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
23.	Manuel Maldonado	Oficina Asesora de Planeación	Parques Nacionales Naturales
24.	Diego Fernando Hernández Losada	Viceministro	Viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

ORGANISMOS DE CONTROL			
1.	Judit del Pilar Vidal	Delegada de Asuntos Étnicos	Defensoría del Pueblo
2	Omaira Marcela Cárdenas Mendoza	Delegada de Asuntos Étnicos	Procuraduría General de la Nación
3.	Laura Obando	Delegada de Asuntos Étnicos	Procuraduría General de la Nación
4.	Mary Rosero	Profesional	Contraloría General de la Nación

SECRETARIA OPERATIVA MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN Y COMISIONES			
1.	Gerardo Antonio Jumí Tapias	Delegado ante la Secretaria Operativa	Pueblos Indígenas de Colombia
2.	Luz Elena Izquierdo Torres	Delegada ante la Secretaria Operativa	Ministerio del Interior

AGENDA

MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CON LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS

Fecha: 28, 29, 30 de julio y 1 de Agosto de 2020

Sesión : VIRTUAL

MARTES 28 DE JULIO DEL 2020

9:30 a.m. – 9:45 a.m. Armonización.

9:45 a.m. - 10:00 a.m. Instalación oficial de la MPC a cargo del Ministerio del Interior y Autoridades Indígenas

10:00 a.m. Verificación del Quórum por parte de las Secretarías Técnica de la MPC.

10:00 a.m. – 3:00 p.m. Espacio autónomo

3:00 p.m. Concertación política del proyecto de ley por la cual se regula el funcionamiento y la organización del SGR

29 DE JULIO DE 2020

9:00 a.m.- 11:00 p.m. Presentación de informe de la comisión accidental y concertación de acuerdos.

30 DE JULIO DE 2020

2:00 p.m.- Presentación de informe de la comisión accidental y concertación de acuerdos.

31 DE JULIO DE 2020

11:40 a.m.-3:00 a.m Concertación de acuerdos

1 DE AGOSTO DE 2020

11:00 a.m. – 8:00 p.m. Concertación de acuerdos

8:35 p.m. Protocolización del proceso de consulta del proyecto de ley por medio del cual se regula el funcionamiento y la organización del SGR.

DESARROLLO

El Señor Julio César López, Presidente de la OPIAC, saluda a todos los presentes dentro de la sesión virtual, resaltando el trabajo que se a realizado para la regulación al SGR, se inicia la consulta por parte de los pueblos con sus propuestas desde que se inició, con unos principios, partiendo que aunque se participa no se da el paso a aceptar el uso de los recursos no renovables, sin embargo, el análisis es que el daño está hecho en los territorios, por eso se solicitó la participación de las riquezas porque no se ve las incidencias en los territorios, por eso se hace la participación en la parte administrativa y la toma de decisiones, por eso se crea la propuesta técnica que permita estar en la participación de SGR,

de manera concertada, si realmente se puede dar la protocolización, dejando los temas resaltados.

El Señor Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC saluda a todos los miembros y delegados de la MPC, al Gobierno Nacional en cabeza de los Viceministros y demás, carteras y entidades que se encuentran presentes en la reunión. Señala que después de 500 años de explotación y sustracción, por primera vez los pueblos indígenas participan dentro del SGR, valora el proceso que se ha tenido pero hasta este punto se materializa esta deuda histórica y no cuantificable, ningún porcentaje podría sanar las consecuencias que ha tenido la extracción, el posicionamiento político y la voluntad de la MPC, el movimiento indígena no renuncia a la lucha en contra de la explotación y extracción de los recursos, acá no se transan los principios y luchas, que se han venido dando, se necesita con el territorio, la reconciliación con la madre tierra como especie, no podemos seguir siendo depredadores, los pueblos hacen el llamado al Gobierno Nacional, que los Pueblos Indígenas no negocian los principios de lucha, debemos buscar otras alternativas y formas. Se deben buscar otros caminos y ser visionarios, mantener la armonía y el equilibrio. La segunda parte, ha estado lleno de contenido político, técnico y económico, se considera que el reconocimiento de la diversidad cultural, el SGR debe reconocer el enfoque interétnico y debe avanzar en el reconocimiento, esta reforma debe partir del reconocimiento y debe ir adecuándose a la realidad plurinacional y pluricultural, dicho esto el mensaje es un proceso de concertación, las partes han cedido en las posturas, que se tengan en los puntos de convergencia y si deben habilitar los espacios autónomos, los aspectos técnicos, y que se solicita la presencia de la Ministra del Interior, el director del DNP, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minas, porque los acuerdos son políticos y no podemos ir hacia atrás sino ser progresivos, esta oportunidad es importante y el escenario de paz con sus diferentes externalidades y caminar hacia adelante en pro de la lucha y la deuda.

El Señor Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC extiende un saludo a las personas presentes en el espacio y manifiesta que, después de recibir el informe del equipo técnico, observó con preocupación que los asuntos estructurales propuestos por las autoridades indígenas, de carácter local y regional, en los diferentes espacios de consultas y concertación adelantados para la reforma al SGR, siguen sin resolverse; lo que no es buena señal; no es buena señal que temas estructurales no se hayan definido y espera que ellos logren concretarse en la presente sesión. Así mismo, considera que estos asuntos no pueden ser un saludo a la bandera, ya que para ser utilizados de esa manera prefieren apartarse del espacio y presentar su propia propuesta de reforma; porque la actual va en contravía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entregándoles migajas a pesar de los impactos que ello tiene sobre estos pueblos y territorios. Reitera que espera que se logre una concertación

argumentada teniendo en cuenta la realidad de las comunidades indígenas. De este modo, afirma que esta es la primera vez que pueblos indígenas participan de consultas de esta naturaleza y, por ende, es importante que se aproveche para saldar la deuda histórica que con ellos se tiene; y si bien hay muchos intereses en este debate, es en los territorios indígenas donde se realizan los procesos de explotación, lo que los dota de legitimidad ante el debate. En este sentido, expresa que encuentra con preocupación que sobre la propuesta de porcentajes de asignación presupuestal, presentada por el equipo de técnicos de los delegados indígenas, no se haya considerado ninguna propuesta; le preocupa que el Gobierno Nacional siga anclado en la propuesta que presentó desde el principio, ya que ello no representa una progresividad en los derechos indígenas. Si bien, algunos asuntos no se pueden modificar por elementos del orden constitucional, si se aprovechará el marco constitucional para que los Gobiernos Nacional e Indígena encuentren las fórmulas para reconocer los planteamientos que se realicen. Sobre las asignaciones de manera directa, resalta que desde la delegación indígena se ha propuesto que estos porcentajes asciendan al 6,5%, lo cual cuenta con un sustento técnico, social y ambiental. Reitera la preocupación en la oferta del gobierno, quien además no especifica rubros para indígenas sino solo para grupos étnicos y les coloca en una disputa entre ellos mismos. Los pueblos indígenas necesitan que se realicen asignaciones específicas para Pueblos Indígenas, no sólo por los impactos que ello ha tenido en sus territorios sino por las mismas prácticas de discriminación racial que se presentan (como se evidencia en el Pacífico). Así mismo, considera que el porcentaje debe moverse de manera progresiva. De otro lado, sobre la participación en los OCAD regional, desde el Gobierno se ha propuesto una participación con voz y sin voto y considera que esto no se debe realizar así, resaltando que son sujetos de derecho y que en el marco de procesos de democratización deben tener la posibilidad de hablar y votar, considera que la propuesta del Gobierno no tiene presentación en tanto los Pueblos Indígenas deben contar con voz y voto en estos espacios. En relación con las asignaciones de carácter local, afirma que estas son las que realmente se van a distribuir en el marco de la Instancia creada y considera que el porcentaje presentado es ínfimo, en tanto corresponde al 0.71%. Se está lejos de lograr un acuerdo en porcentajes, el cual es un tema fundamental y se requieren los recursos para que se cumplan los acuerdos. Señala que se han reducido asignaciones, del 20% y 5% (en departamentos y municipios respectivamente) para el año 2000, hoy solo se propone el 0,71% de las asignaciones locales. En lo que respecta a las asignaciones ambientales y de ciencia y tecnología, se necesitan enfoques étnicos diferenciales para poder acceder a estos recursos si definitivamente se accede a ellos de manera concursable; estas convocatorias deben ser para grupos étnicos y no para ONGs ambientalistas y demás cercanas al Gobierno. Por ello, reitera la necesidad de mantener criterios diferenciales para que pueblos indígenas puedan acceder y ejecutar estos recursos. Ha identificado que los mayores hallazgos de la Contraloría están en municipios que ejecutan recursos del SGR y ninguno de los

resguardos certificados tuvo un solo hallazgo; luego, solicita que se les permita desarrollar su autonomía política y administrativa reconocida por la Constitución Política del 91. Finalmente, señala que los puntos enunciados, evidencian la necesidad de que el Gobierno dé una muestra de voluntad.

La Señora Viceministra de Minas, Carolina Rojas manifiesta que todas las propuestas han sido estudiadas con rigurosidad, señala que hay dos puntos en el debate, uno hace referencia al tema de la participación, frente al cual se debe reconocer que ha habido un avance, se están haciendo consultas internas sobre si es posible elevar el porcentaje. El segundo punto hace referencia a la mayor participación en las instancias de decisión.

El Señor José Insuasti, Coordinador del Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo y Regalías manifiesta que la propuesta a partir del análisis constitucional es que la participación de los Pueblos Indígenas sea con voz y con voto, además se propone incluir un artículo adicional donde se defina que esa participación va a permitir la fluidez en la ejecución del Sistema. Se propone que se abordó cómo se podría definir la delegación con la participación de los Pueblos Indígenas en los OCAD regionales.

Se conforma una comisión accidental para la redacción del artículo.

Frente a la Comisión Rectora la apuesta es que haya una participación de los Pueblos Indígenas con voz y voto para los temas que son competencia de ellos.

En relación con la destinación de las Asignaciones Directas, ahora bien, se propone una fórmula que refleje la destinación de los recursos teniendo en cuenta composición poblacional de los territorios, con lo cual se consolida un gran avance porque hoy no existe esa destinación. Finalmente están las asignaciones locales, señala que hoy en día no hay asignación directa de éstas, y con el proyecto lo habrá por aproximadamente 150 mil millones, así como todo un ciclo de planeación y formulación autónoma. Se informa que en el bienio actual sobre el cual se hizo la reforma se proyectó sobre 18 billones pero se ha visto afectado por el impacto de la pandemia y la disminución de los precios, en ese sentido se estima que los ingresos van a ser de 15 billones, aproximadamente, se propone incrementar al 1% para los Pueblos y Comunidades Indígenas por primera vez en la historia será de alrededor de 150 mil millones. El segundo rubro por el cual se benefician los Pueblos y Comunidades Indígenas son las asignaciones directas donde los alcaldes deberán invertir mínimo el 3% en los municipios y el 1% en los departamentos. Cada alcalde y gobernador deberá aplicar una fórmula para dividir las asignaciones en las comunidades de su territorio según la composición poblacional étnica.

El Senador Feliciano Valencia informa que los recursos del SGR han sido utilizados para politiquería en las diferentes regiones, por otro lado los Pueblos Indígenas ponen los territorios donde se extrae el petróleo, han sido excluídos de ese beneficio en la proporción que merecen, considera que no se ve el enfoque de derechos respecto del aporte que hacen en la propuesta del 1% para los Pueblos Indígenas, partiendo de los altos índices de necesidades básicas insatisfechas, se está solicitando una asignación específica en las regiones para no entrar en conflictos con los demás grupos étnicos.

El Señor Julio César Estrada señala que cuando se dice en la propuesta hasta el 1% puede significar que en la práctica no haya un porcentaje para los Pueblos Indígenas, en ese sentido deberá decir mínimo 1% y mínimo 3% en el caso de las asignaciones directas, partiendo de la necesidad de cerrar las brechas sociales y generar bienestar en los territorios que han sido donde se realizan las actividades de explotación.

El Mayor Alfonso Peña, Exconstituyente manifiesta que se debe mostrar la voluntad en defensa de la constitución, la ley y los derechos de los Pueblos Indígenas, consideran que las condiciones actuales no garantizan la pervivencia y el buen vivir de los Pueblos Indígenas.

El Señor Carlos Albeiro Balcazar, delegado por el Pueblo Wayuu informa que la situación del Pueblo Wayuu es compleja, han muerto más de 5000 niños, y tuvieron que acudir a la Corte Interamericana. Informa que es vergonzoso que Uribia tiene un porcentaje de pobreza del 95%, Manaure tiene mucho gas pero la situación es de pobreza, señalan que la oferta del Gobierno subió en 0.2 para los territorios donde se realiza la explotación, considera no se da respuesta a las solicitudes de los Pueblos Indígenas.

El Señor Julio César López, Presidente de la OPIAC recuerda que se está en el marco de la consulta previa de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y del bloque de constitucionalidad, recuerda que siempre se ha insistido que las tierras son de los pueblos indígenas, cita que el artículo 15 del Convenio 169 establece el derecho de los pueblos de participar de los beneficios que se reportan de las actividades de extracción, señala que se debería como mínimo contar con el 50% de las regalías porque dependen de las tierras de los pueblos indígenas y han sido ellos quienes aportan a disminuir el cambio climático.

El taita Polivio Leandro Rosales manifiesta que los pueblos indígenas de acuerdo a como se está proponiendo la asignación se estaría dependiendo de los alcaldes y gobernadores y eso no compensa los daños en los territorios indígenas. En el segundo punto propone que se redacte la propuesta para poder ver la discusión.

El Señor Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC destaca que se haya identificado ya un porcentaje específico para Pueblos Indígenas, aparte de los demás grupos étnicos, señala que hay una propuesta que versa sobre el 1% y una de los Pueblos Indígenas que versa sobre el 6.5%, señala que hay ya suficientes justificaciones desde el punto de vista social, económico y demás. En primer lugar manifiesta que los Pueblos Indígenas desafortunadamente tienen una situación de pobreza extrema, discriminación estructural, brechas abiertas, como consecuencias entre otras cosas de la intervención de la industria extractiva que no van a ser eternas porque los recursos no renovables se está agotando, en ese sentido estos acuerdos serán transitorios, si se continúa con esa forma de explotar los recursos en Colombia. Señala que los Pueblos Indígenas son hoy el 4.5% de la nación colombiana, más de 900 resguardos indígenas con títulos colectivos, toda una riqueza biodiversa y biocultural. Manifiesta que hubiera sido importante partir de que el 1.5% fuera para los pueblos indígenas, señala que la reforma del año 2000 habló del 20% en los municipios y el 10% en los departamentos, la reforma del Gobierno de Juan Manuel Santos señaló hasta el 8%, entonces se espera que esta reforma de respuesta a la realidad socio económica de los Pueblos Indígenas.

La Señora Viceministra de Minas Carolina Rojas aclara que en el acto legislativo no se incorporó ningún porcentaje específico para los Pueblos y Comunidades Indígenas, pues este definió el sistema de manera general, pero que el Gobierno Nacional reconociendo la importancia de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como la necesidad de su autonomía propone esta participación así como la creación de una Instancia mediante la cual se definan los proyectos de la asignación local de manera autónoma. Ratifica la voluntad del Gobierno de dar una participación específica a los Pueblos Indígenas. Aclara que la propuesta del 1% se refiere específicamente a la bolsa de recursos de la asignación local, que actualmente no hay una asignación específica para Pueblos Indígenas, en segundo lugar el 1% no son los únicos recursos en el sistema, porque en las regalías directas se pasa de un hasta a un mínimo, en gobernaciones y municipios va a haber mínimos para las comunidades étnicas, ahora bien en la distribución de esos recursos hay una formulación asociada a la población de cada comunidad étnica asentada en el territorio, adicionalmente esa asignación tiene una metodología de destinación donde las comunidades y Pueblos Indígenas tienen una mayor independencia y autonomía para presentar las propuestas. Ratifica que el Gobierno Nacional respaldará el articulado en el Congreso de la República.

La Señora Amparo García, Subdirectora Territorial General manifiesta que el 1% hace referencia a las asignaciones locales, la propuesta que se está analizando es que el recurso de asignaciones directas que hoy es una bolsa para los grupos étnicos, a partir de una fórmula basada en criterios poblacionales tenga una asignación específica para los Pueblos Indígenas. Así mismo informa que en los OCAD regionales, donde los Pueblos Indígenas tendrán un delegado con voz y

voto podrán presentar proyectos, un espacio importante en el ciclo de asignaciones directas con una metodología, que se caracteriza por la autonomía e los Pueblos, la posibilidad de aplicar a proyectos que van a los OCAD regionales, adicionalmente unos espacios a través de convocatorias públicas y abiertas en los recursos de ciencia.

La Señora Viceministra de Minas Carolina Rojas manifiesta que atendiendo las intervenciones realizadas por los delegados de los Pueblos Indígenas se propone que en las asignaciones directas se pase en los municipios se tenga mínimo del 3% al 4% y en los departamentos del 1% mínimo el 2%, de acuerdo con la participación poblacional y en las asignaciones locales se mantiene un punto porcentual específico para los Pueblos Indígenas.

El Señor Yesid Parra, Director de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP informa que la distribución de las asignaciones directas se tendrá en cuenta criterios de conformación de la población étnica y conforme ese resultado será la asignación.

La Señora Miryam Chamorro, Representante Legal de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia-Gobierno Mayor manifiesta que en departamentos como el Chocó esa fórmula dejaría en desventaja a los Pueblos Indígenas porque son territorios con población que en su mayoría son comunidades afrodescendientes.

El Señor Yesid Parra, Director de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP manifiesta que para dar respuesta a esa situación se puede definir un parágrafo que defina un porcentaje mínimo del 20% para la población con menos carga poblacional.

29 DE JULIO DE 2020

Se inicia la sesión con la presentación de resultados de los acuerdos alcanzados en la comisión accidental conformada por los delegados de los Pueblos y Organizaciones Indígenas y los delegados del Gobierno Nacional.

Los delegados del Pueblo Wayuu manifiestan estar en desacuerdo con la conformación de la Instancia, señalan que lo han manifestado reiteradamente, en el Marco de la Consulta previa del mandato de las Autoridades Tradicionales, en ese sentido solicitan contar con un delegado en la Instancia por el Pueblo Wayuu, partiendo de las definiciones que se han hecho respecto de las particularidades del Pueblo Wayuu a través de la Sentencia T-302 de 2017 o la Sentencia T-172.

El Señor Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC hace un llamado a que se tenga en cuenta que en la ruta de consulta el Pueblo Wayuu participó, en

las sesiones de concertación técnica también participaron, señala que lo que se está acordando son las mismas disposiciones del artículo 10 del Decreto 1397 de 1996 en el cual se señala que los delegados de las macro regiones son los que deben elegir los delegados, en ese sentido ellos como Pueblo Wayuu se encuentran incluidos en la región caribe y participarán de la elección del delegado que corresponda. Reitera que este espacio nunca se ha cerrado para ninguno de los Pueblos.

Los delegados del Pueblo Wayuu manifiestan que ellos participaron en la consulta, así mismo han participado en las concertaciones técnicas y han realizado importantes aportes, entonces invitan a que se pueda realizar un diálogo autónomo entre los Pueblos Indígenas donde puedan definir una salida para la participación del Pueblo Wayuu en el marco de la Instancia.

El Señor Norey Quigua, delegado de la Confederación Indígena Tayrona manifiesta que la Mesa Permanente de Concertación es el resultado de una lucha de todos los Pueblos Indígenas, en ese orden es necesario que se deje de manifestar que hay pueblos que no pertenecen a la MPC, informa que los equipos técnicos que estuvieron en el proceso de consulta previa participaron en igualdad de condiciones en las concertaciones técnicas, incluido el equipo del Pueblo Wayuu, asimismo han participado en la MPC en igualdad de condiciones de los demás. Expresa que hay que tener en cuenta que había que realizar un proceso de unificación entre las organizaciones indígenas y de allí se sabía que seguramente muchas apuestas propias de los Pueblos no iban a poder quedar porque se debe presentar una propuesta unificada. Solicitan al Gobierno Nacional que no intervengan en la agudización de las posibles tensiones que se puedan presentar entre los Pueblos Indígenas.

El Señor Luis Fernando Arias, Consejero mayor de la ONIC solicita que de acuerdo con los planteamientos realizados el día de ayer sobre la situación de los Pueblos Indígenas del Pacífico se defina en las asignaciones directas un porcentaje específico para Pueblos Indígenas. Proponen que el 1.5% de las asignaciones locales debería ser específico para los Pueblos Indígenas.

El Señor Fernando Fierro, Delegado del Defensor Delegado para Asuntos Étnicos de la Defensoría del Pueblo extiende un saludo a las personas participantes de la sesión. Ante la discusión que se ha presentado considera pertinente su intervención, presentando las siguientes consideraciones: Primero, expresa que no se ha respondido el interrogante de Matero Estrada, sobre las asignaciones de recursos para las áreas no municipalizadas, pues se habla de 3 departamentos con indicadores de pobreza alarmantes, la no respuesta a esta pregunta es preocupante teniendo en cuenta que no se ha dado a cabalidad el desarrollo del reconocimiento de todas las entidades territoriales. Señala que el acto legislativo

desequilibró el poder público en el país porque no tuvo en cuenta los territorios indígenas, aún contando con la existencia de consejos indígenas constituidos legalmente. Si el acto legislativo no concibió ello, es necesario pensar en los términos de la Constitución Política. En este sentido, expresa la necesidad de comprenderse el acto legislativo como un instrumento de desarrollo de fines constitucionales y no como un obstáculo para la realización de éstos. Así, reitera la necesidad de dar respuesta al interrogante por el delgado indígena. Segundo, en relación con lo mencionado por el Senador Feliciano Valencia sobre sus preocupaciones frente el trámite legislativo, considera tener en cuenta para la discusión que hay unos elementos constitucionales que orientan la acción del Congreso de la República. Afirma que lo acordado en la Mesa no debería ser modificado en el Congreso porque, por un lado, la Corte Constitucional ya mencionó que los acuerdos de consulta previa son acuerdos vinculantes para el Estado, así, al ser esto producto de la consulta no deberá someterse a modificación. Por otro lado, en el Congreso de la República se presentan casos en los que se delibera, pero no se pueden modificar las disposiciones presentadas, tal es el caso de los tratados internacionales, es decir, hay casos en los que el Congreso no está habilitado para modificar contenidos, debido que en estos documentos se expresa la voluntad del Estado y no del Gobierno. Por último, en relación con el principio de progresividad de derechos, señala que este principio también vincula al Congreso de la República, y, por ende, limita su poder; siendo ello una limitación del orden constitucional. En este sentido, si bien la anterior legislación no contemplaba la participación de pueblos indígenas, este no puede ser un argumento, en tanto que no se puede obtener provecho de la propia culpa. Adicionalmente, afirma que el Gobierno Nacional puede expresar su voluntad, la cual se materializa en acuerdos políticos y se desarrolla, a su vez, a través del impulso de estos por medio de la mayoría en la bancada de Gobierno. En atención a lo anterior, señala que en la deliberación se deben tener en cuenta las consideraciones enunciadas para no considerar la existencia de un poder absoluto en el Congreso de la República. Expresa que este aporte es importante para destrabar la discusión, resaltando la intención de ambos Gobiernos en avanzar en la concertación. Finaliza, manifestando el apoyo para que el diálogo sea fructífero.

La Señora Viceministra de Minas Carolina Rojas procede a informar que para departamentos serán 38.000 millones para comunidades étnicas y 72.000 millones en los municipios además de los cerca de 155.000 millones de asignaciones locales. Respecto a la Instancia se propone que no este sujeta a la MPC porque es un espacio técnico y todas las decisiones del sistema no pueden estar sujetas a otra instancia. Se reitera que el reglamento de la instancia será definido por los Pueblos Indígenas y eso será respetado. Sobre la asignación directa en los recursos de ciencia y tecnología en virtud de las convocatorias públicas, abiertas y transparentes no podría definirse un porcentaje específico.

La Señora Viceministra de Ambiente, María Claudia García Dávila manifiesta que ya en el marco del PND se ha definido los acuerdos en el marco de construir una política ambiental indígena y una comisión para los mismos efectos, sin embargo la Ley de SGR no reemplaza el PND ni la ley 99 y demás normatividad, sino que identifica unos recursos que deben ser operativizados en el marco de la Ley del SGR, que son recursos que tienen una orientación y unas características. Señala que cuando se habla de conservación no hay lugar a excluir a nadie, entonces respetando el enfoque diferencial, siempre se hace con el mayor respeto, pero también se deben abordar temas con los indígenas, con el monitoreo y el control de la deforestación.

El Señor José Insuasti, Coordinador del Ministerio de Minas manifiesta que se viene de un sistema en el que la ejecución dependía de las entidades territoriales, ahora se está proponiendo la conformación de una instancia autónoma. En el caso de las regalías directas, los alcaldes y gobernadores tienen derecho a acceder a las regalías, sin embargo tienen la obligatoriedad de invertir en sus comunidades y territorios, se propone una fórmula para que en los territorios se priorice la inversión sobre las comunidades étnicas de mayor participación poblacional, adicionalmente se dispone de un mínimo de inversión. Ahora bien, van a ser los Pueblos y Comunidades Indígenas los que prioricen la inversión y adelanten todo el ciclo del proyecto y posteriormente van con el alcalde a materializar el proyecto mediante un convenio, teniendo en cuenta las disposiciones del Decreto 252 y 1088.

Los delegados de los Pueblos Indígenas manifiestan que es necesario que se dejen definidos todos los porcentajes de manera específica para los pueblos indígenas. Señalan que el mandato ha sido recibido por parte de las autoridades indígenas en los territorios en el marco del proceso de consulta previa.

La Señora Viceministra de Minas, Carolina Rojas manifiesta que cuentan con 1% de las regalías locales para el bienio, que justamente de acuerdo con las solicitudes de los Pueblos Indígenas se destinará el 4.5% de las regalías directas de los municipios para comunidades étnicas y el 2% de los departamentos.

ESPACIO AUTÓNOMO

La Señora Viceministra de Minas hace el informe respecto de los puntos que se ha avanzado y propone que se pueda avanzar en la definición de los puntos donde hay acuerdo, aquellos puntos donde no hay acuerdo y se den las respectivas discusiones sobre el texto.

Se procede a dar lectura punto por punto y se dará el debate respecto de los que se considera ha faltado mayor argumentación.

El Señor Fernando Fierro, Delegado por la Defensoría Delegada para Asuntos Étnicos manifiesta que es necesario que se pueda revisar todos los puntos con los respectivos aportes y salvaguardas.

El Señor Fabio Valencia, autoridad indígena del Vaupés manifiesta que se debe dejar claro que los recursos llegarán de manera directa a las áreas no municipalizadas.

Los delegados de los Pueblos Indígenas solicitan que se revisen todos los puntos que están pendientes por debatir, puesto que en ellos se encuentran las apuestas políticas y de participación de los Pueblos Indígenas. Señalan que es fundamental poder ser parte de la Comisión Rectora con voz y voto no sólo en los temas indígenas sino en todos los temas que tengan que ver con el Sistema General de Regalías. Hacen un llamado al reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos políticos. Señalan que es necesario que haya coherencia respecto al reconocimiento de la participación de los Pueblos Indígenas, solicitan que se den los argumentos jurídicos sobre por qué no es viable que haya participación en todos los temas de la Comisión Rectora.

La Señora Viceministra de Minas Carolina Rojas manifiesta que este Gobierno ha demostrado el respeto al proceso de consulta previa, se han tenido varios días de discusiones técnicas donde se ha evidenciado la disposición de tener el diálogo. Respecto de la Comisión rectora, recuerda que al iniciar el proceso de consulta no existía la posibilidad que los Pueblos Indígenas de tener voz y voto de los asuntos específicos que le competen a los mismos. Al respecto ya se ha dado un avance importante en el reconocimiento de tener voz pero sin voto, sin embargo la MPC solicitó contar con voz y fue acordado, pero la propuesta va más allá en términos de que puedan votar sobre todos los temas. Se ha acordado la conformación de una Instancia que defina los asuntos propios, para decidir sobre sus propios recursos y lineamientos sobre la misma. Resalta que en la Comisión Rectora se invitan a los congresistas y no votan, aclara que la Comisión pide por ejemplo vigencias futuras, se expiden lineamientos que se someten a la normatividad vigente sobre temas operativos del DNP o el Ministerio de Hacienda. Esta Comisión Rectora se pronuncia sobre la Ley de Presupuesto pero no es vinculante y en lo relativo a determinar criterios y lineamientos del Sistema. En

cuanto a los temas que considera no afectan a los Pueblos Indígenas, igual estarían invitados con voz, y en aquellos donde tengan afectaciones sobre la reglamentación del sistema tendrán voto.

Los delegados de los Pueblos Indígenas indican que es ambiguo señalar cuáles son los asuntos que le competen a los Pueblos Indígenas y cuáles no, si bien es un gran avance estar en la Comisión Rectora no es posible que se determine sobre cuáles temas si y cuáles no. Consideran que no hay un tema jurídico o técnico que impida la participación y el voto en la Comisión. Señalan que son un grupo poblacional que hace mucho tiempo existe en los territorios, han cuidado la heredad a través de la conservación de los territorios y por ende consideran importante estar en la Comisión Rectora para poder sentar su voz en materia ambiental. Aclaran que no están en contra del desarrollo, siempre y cuando haya una vocación ambiental y finalmente exhortan al Gobierno Nacional a continuar con la voluntad de diálogo.

El Gobierno Nacional manifiesta que este es un diálogo que ha avanzado y se ha dado un reconocimiento sin precedentes, informan que la Comisión Rectora no aprueba proyectos de inversión, de acuerdo a las reglas actuales lo aprueban los órganos colegiados, que dejarán de existir quedando sólo los órganos colegiados regionales, donde los pueblos y comunidades indígenas participarán con voz y con voto en la misma capacidad de diálogo y discusión de los demás miembros de dichos órganos de decisión. Señala que por primera vez se ha definido un porcentaje para los Pueblos Indígenas sobre el cual decidir autónomamente. Se aclara que la Comisión Rectora define los formatos que se deben presentar, los órganos de control han pedido tener voz y voto en la misma, sin embargo teniendo en cuenta el alcance de ésta no se ha considerado ampliar la participación en la misma. No obstante de acuerdo con la propuesta de los Pueblos Indígenas se determinó ampliar la participación con voz y voto en los asuntos que les competen. Aclaran que los congresistas hacen parte con voz pero sin voto. Señalan que se ha sido respetuoso de la consulta previa y por eso a pesar de haber tenido que radicar en marzo el proyecto de ley, por los efectos de la pandemia se continúo esperando hasta tanto se pudiera dar cumplimiento a la ruta metodológica concertada en el mes de febrero.

Los delegados de los Pueblos Indígenas manifiestan que se tiene claro que los proyectos se definen en los OCAD y en el caso de los Pueblos Indígenas en la Instancia de Decisión, pero la participación se está solicitando para estar en el

órgano rector del Sistema, puesto que éste no se resume a definir formatos sino a dar los lineamientos del Sistema. Resaltan que en la Comisión Rectora el tema no es el recurso económico sino el principio de participación de los Pueblos Indígenas. Se propone incluir un parágrafo en el artículo en el siguiente sentido: La Comisión Rectora contará con un miembro elegido por la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas con voz y voto. Su participación, será prioritariamente sobre las funciones contempladas en los numerales 1, 2, 6, 8 y 10 del artículo 5 de esta ley.

La Señora Viceministra de Minas reitera que el Gobierno Nacional quiere que la participación se dé por la garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas, señala que la Comisión Rectora tiene un rol de carácter administrativo en el SGR, aclara que sin desmedro del derecho a la consulta previa, no se quiere que las decisiones de la Comisión Rectora estén sujetas a la consulta previa. En ese sentido se propone la siguiente redacción: La Comisión Rectora contará con un miembro elegido por la Instancia de Decisión de los pueblos y comunidades indígenas, en la cual participará con voz y voto. Su participación será sobre las funciones contempladas en los temas que se enmarquen en los numerales contemplados en los numerales 1, 2, 6, 8 y 10 del artículo 5 de la presente ley. Esta participación se realizará con plena autonomía sin que su voto requiera refrendación. Para el efecto, la Comisión Rectora emitirá un acuerdo que determine esta particularidad.

Los delegados de los Pueblos Indígenas señalan que esa propuesta tiene tres ideas la participación con voz y voto del delegado, la participación sobre las funciones que han incluido y la tercera idea es el tema de la refrendación. Por lo tanto se sugiere el siguiente texto:

Parágrafo cuarto. La Comisión Rectora contará con un miembro elegido por la Instancia de Decisión de los pueblos y comunidades indígenas con voz y voto.

Su participación será sobre las funciones contempladas en los numerales 1, 2, 6, 8 y 10 del artículo 5 de la presente Ley.

Esta participación se realizará con plena autonomía sin que su voto requiera refrendación.

Respecto del tema de las convocatorias para los recursos de ciencia y tecnología el Gobierno Nacional informa que el acto legislativo define que deberán destinarse los recursos a través de convocatorias públicas, abiertas y concursables el 2%

para investigación o invención de proyectos de ciencia tecnología e innovación en asuntos relacionados con desarrollo sostenible. Se informa que los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación-CODECTI son los que definen cuanta plata le corresponde a ciencia, tecnología e innovación. Consideran fundamental que los indígenas tengan participación en los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación-CODECTI de los departamentos, en ese sentido se está trabajando en un Decreto que defina esa participación.

Los delegados de los Pueblos Indígenas señalan que es fundamental que en los órganos del Sistema quede la participación de los Pueblos Indígenas en los consejos regionales, advierten que actualmente ya hay convocatorias específicas para Pueblos Indígenas en el ordenamiento jurídico, sin embargo en la Ley 1276 indica que hay una función específica sobre conocimientos tradicionales, no obstante, no se ha permitido tener convocatorias específicas. Manifiesta que en este momento no hay protección jurídica a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, entonces poner a competir con las universidades y los institutos científicos es perder un recurso estratégico para la diversidad colombiana. Informan que las patentes se reconocen en un 3% a nacionales y 97% a extranjeros. Informan además, que la MPC ha solicitado el proceso de consulta previa para el plan de ciencia y tecnología agropecuaria 2017-2027, en lo que hace referencia a la protección de los conocimientos tradicionales, señalan que existe la invitación directa en el manual de contratación de MinCiencias, a través de la cual es posible articular con los Pueblos Indígenas. Indican que es viable en el marco del artículo 7 definir convocatorias específicas.

La Señora Viceministra de Minas Carolina Rojas aclara que es justamente en la política de ciencia y tecnología donde se podrán incluir los conceptos de participación de los pueblos indígenas. Manifiestan que no considera jurídicamente viable, de acuerdo con lo establecido determinar convocatorias específicas. **Reitera que la voluntad del Gobierno es que en el marco de los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación-CODECTI los pueblos indígenas tengan una participación.**

El Gobierno Nacional se compromete a invitar a los pueblos indígenas en las mesas regionales que se adelantarán sobre la política de ciencia y tecnología, para que en la misma vele por la protección de la sabiduría de los Pueblos Indígenas. Ahora bien la participación de los Pueblos Indígenas en los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación-CODECTI se incluirá mediante un Decreto que está siendo trabajado.

Se aclara que la figura de la invitación directa se emplea para la ejecución de recursos directos desde el presupuesto general de la nación, mientras que la ejecución de recursos de ciencia, tecnología e innovación está definida en el acto

legislativo 05 de 2019, donde se especifica la figura de convocatorias abiertas, públicas y competitivas.

Los delegados de los Pueblos Indígenas señalan que es fundamental que se incluya un texto en el artículo 55 del proyecto de ley que promueva la participación de los Pueblos Indígenas en los recursos de ciencia, tecnología e innovación, en cumplimiento del artículo 8J del Convenio de Diversidad Biológica. Solicita que quede en el artículo 55 que en los CODECTI se invitará a las organizaciones indígenas regionales. Solicitan que los sabedores indígenas, las organizaciones e instituciones puedan participar en los procesos a partir del enfoque diferencial, de los usos y costumbres y fortalecer sus instituciones, garantías para acceder en igualdad de condiciones a esos recursos y a las convocatorias. Proponen la siguiente redacción:

Parágrafo xxx en el Artículo 55. Para que los recursos de que trata este capítulo tenga enfoque diferencial, en los departamentos en que existan pueblos indígenas, estos serán incluidos en proporción poblacional en los Consejos Departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI).

Parágrafo segundo. También en el presupuesto bienal se señalarán los recursos que como mínimo deben destinarse a la inversión en proyectos relacionados con el objetivo del numeral 11 del artículo 6 de la ley 1286 de 2009, Promover y fortalecer la investigación intercultural, en concertación con los pueblos indígenas sus autoridades y sabedores, destinado a proteger la diversidad cultural, la biodiversidad, el conocimiento tradicional y los recursos genéticos.

La Señora Viceministra de Minas Carolina Rojas manifiesta que se han escuchado las propuestas e intervenciones, ratifica la disposición de diálogo frente a los temas de ciencia, tecnología e innovación y ambiente. Sin embargo el lugar de la materialización de las propuestas no es la ley que reglamenta el SGR sino otras disposiciones normativas que ya han sido mencionadas. En el caso de ambiente si es posible adelantar unas convocatorias específicas para los Pueblos Indígenas.

Los delegados de los Pueblos Indígenas manifiestan que la conformación de los CODECTI no es objeto de esta norma pero si el enfoque diferencial en las convocatorias para los recursos de ciencia, tecnología e innovación.

El Gobierno Nacional ratifica que la participación de los CODECTI no debe ser incluida en este proyecto de ley, asimismo las convocatorias no podrán tener un tratamiento diferencial de conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 05 de 2019.

El Señor Julio César López manifiesta que se está pidiendo enfoque diferencial en las convocatorias y el Gobierno Nacional no está atendiendo la solicitud.

El Gobierno Nacional aclara que el enfoque diferencial se garantizará en el marco de la norma que corresponde la reglamentación de los CODECTI, porque se considera que no es este el espacio para dar la discusión de acuerdo con lo señalado en el acto legislativo 05 de 2019.

30 DE JULIO DE 2020

La Señora Amparo García, Subdirectora General Territorial del Departamento Nacional de Planeación inicia resaltando los acuerdos que se han alcanzado en temas fundamentales que generarán resultados positivos en los Pueblos Indígenas de Colombia.

La Señora Guilliana Arrieta, delegada del equipo técnico de los Pueblos y Organizaciones Indígenas procede a realizar la socialización de los resultados e informa que hasta el momento se han alcanzado acuerdos en los objetivos y fines del SGR; la conformación de la Instancia para Pueblos Indígenas, su naturaleza y sus funciones, así como la garantía de la toma de decisión del delegado por los Pueblos Indígenas. Se acordó la participación de los Pueblos Indígenas en los Órganos Colegiados del SGR, así mismo los porcentajes de participaciones en las asignaciones locales y en las asignaciones directas.
Comunica que quedan tres puntos pendientes por concertar: i) la asignación de recursos ambientales, ii) la fórmula para las asignaciones directas y iii) las convocatorias de ciencia, tecnología e innovación.

Se conforma nuevamente la comisión relatora para llegar a acuerdos sobre la redacción definitiva.

El Senador Feliciano Valencia, invita al Ministerio del Interior y al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a presentar una proposición para reformar el acto legislativo No. 5 de 2019 para que las convocatorias públicas de las que trata el inciso 5 del presente artículo, prioricen los proyectos presentados por los Pueblos Indígenas con el fin de reconocer y fortalecer los sistemas de conocimientos tradicionales y saberes ancestrales asociados a la biodiversidad y contarán con acompañamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para su formulación y presentación.

Los delegados de los Pueblos Indígenas manifiestan que de conformidad con la importancia que representan la biodiversidad cultural y natural, así como la jurisprudencia constitucional que hace referencia a la necesidad de adelantar una adecuación institucional, se deben abrir convocatorias específicas para que los

Pueblos Indígenas puedan acceder a los recursos de ciencia, tecnología e innovación.

El Gobierno Nacional señala que hay argumentos legales y constitucionales establecidos en el acto legislativo que señalan específicamente la obligatoriedad de adelantar las convocatorias de manera pública, abierta y competitiva, de manera que no es posible atender la propuesta de los Pueblos Indígenas.

El Señor Francisco Fierro, Delegado de la Defensoría Delegada para Asuntos Étnicos manifiesta que bajo el respeto debe ser la manera en que se continúe con el diálogo, señala que encontrarse en las diferencias es la mayor riqueza que puede tener una sociedad plural, indica que ojalá se puedan encontrar los argumentos constitucionales. Manifiesta que el acto legislativo es solo uno que reglamenta la Constitución, pero se debe dar el debate en el marco de los fines de la Constitución y uno de los fines es la protección de la diversidad y la igualdad, entonces es necesario establecer acciones de carácter correctivo y afirmativo, señala que se entiende que la propuesta indígena está tratando de cerrar la brecha para superar las condiciones de acceso para los Pueblos Indígenas. Consideran que desde el punto de vista jurídico es procedente, pero además deseable, asimismo en el marco del artículo 13 superior y del artículo 2 del literal c del Convenio 169 de la OIT, norma que tiene carácter prevalente, incluyendo medidas a los miembros de los Pueblos a eliminar barreras respecto del resto de la sociedad. Considera que no se ha mencionado cómo se ve transgredido el marco constitucional, puesto que la mejor manera de establecer el Estado Social de Derecho es proteger a sus ciudadanos, recalca que más allá del inciso del acto legislativo se encuentra la Constitución.

La Señora Omaira Cárdenas, Delegada de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos reconoce la voluntad de diálogo que han tenido tanto los Pueblos Indígenas como el Gobierno Nacional, señala que se debe propender por un Estado Social de Derecho que promueva una consulta previa, libre e informada, donde la conservación y la preservación de los territorios indígenas sean una realidad. Invita a buscar fórmulas para poder alcanzar acuerdos, considera que hay unos desarrollos normativos como la Sentencia 009 que permiten materializar la propuesta de los Pueblos Indígenas.

La Señora Viceministra de Minas, Carolina Rojas manifiesta que gracias al diálogo que se ha podido adelantar en el espacio, se avanzó en una nueva propuesta sobre las asignaciones directas serán el 2% de los departamentos sea para comunidades étnicas y el 4,5% para los municipios.

El Señor José Insuasti, Coordinador del Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo y Regalías en relación con lo señalado por la Viceministra agrega que se parte de un porcentaje que tendrán la obligación de destinar a las

comunidades étnicas, así mismo, los Pueblos podrán planear, priorizar, viabilizar y ejecutar a través de un Convenio suscrito con la alcaldía o gobernación, según corresponda. Se informa que la propuesta para definir la fórmula de la asignación de directas para las comunidades étnicas es que se tenga en cuenta la certificación de población por parte del DANE o una segunda propuesta es que la Comisión Rectora determine el lineamiento particular.

El Señor Wilson Herrera, delegado del equipo técnico de la ONIC manifiesta que la propuesta desde los Pueblos Indígenas es incluir la variable de tierras incluidos los territorios, aclara que no se ha hecho el cálculo sobre las dos propuestas para saber cuál generará mayores beneficios a los Pueblos Indígenas, adicionalmente definir buenos mecanismos de control de los recursos.

Los Delegados de los Pueblos Indígenas solicitan espacio autónomo.

Los Delegados de los Pueblos Indígenas manifiestan que teniendo en cuenta lo álgido del tema de ciencia, tecnología e innovación se propone sea debatido al final e iniciar con el tema de asignaciones directas.

La Señora Viceministra de Minas Carolina Rojas manifiesta que desde el Gobierno Nacional se tienen tres propuestas; la primera es que la fórmula se base en criterios de distribución poblacional según la información de la autoridad estadística del país, el DANE, la segunda es que se defina la fórmula en la Comisión Rectora y la tercera propuesta frente a las asignaciones directas es la siguiente:

> *"Artículo XX. Destinación de los recursos para grupos étnicos de las Asignaciones Directas. Los municipios y departamentos con ingresos corrientes por concepto de asignaciones directas destinarán el 4,5% y 2% de su presupuesto bienal vigente por dicho concepto, respectivamente, para proyectos de inversión con enfoque diferencial en los pueblos y comunidades indígenas y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, que se encuentren asentadas en aquellas entidades territoriales, debidamente acreditadas por la autoridad competente.*
>
> *De conformidad con lo anterior, los municipios y departamentos destinarán los recursos entre los pueblos y comunidades indígenas y las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras aplicando la fórmula adoptada por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.*
>
> *Parágrafo transitorio. La fórmula de distribución será elaborada de manera coordinada por los delegados del Gobierno nacional y el delegado de la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de la*

Instancia de Decisión de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para ser adoptada por la Comisión Rectora. En el evento en que al 1 de marzo de 2021 la fórmula no sea adoptada, la Comisión Rectora adoptará la presentada por el Gobierno nacional."

El Gobierno Nacional señala que se reconoce que se debe dar una discusión técnica para definir la fórmula para el cálculo de las asignaciones directas por Pueblo Étnico, en ese sentido para dar tranquilidad a las partes se propone que la fórmula sea acogida por la Comisión Rectora.

31 DE JULIO DE 2020

Se inicia la sesión a las 11:40 a.m. con los saludos de los participantes.

Los delegados de los Pueblos y Organizaciones Indígenas manifiestan que no consideran conveniente que la fórmula de las asignaciones directas se adopte en la Comisión Rectora ni en el marco de un diálogo interétnico que pueda suscitar conflictos entre los diferentes pueblos étnicos. En ese sentido solicitan que se estudie la posibilidad de definir un porcentaje específico como en otros instrumentos normativos. Insisten en que este proceso de consulta se ha adelantado con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, y se quieren evitar inconvenientes con los demás grupos étnicos.

El Gobierno Nacional manifiesta que entiende la preocupación respecto de dejar la fórmula de distribución de las asignaciones directas para otras instancias, señala que la intención es que quede definido de una manera técnica pero que también de respuesta a los llamados de justicia realizados por los Pueblos Indígenas.

El Señor Jorge Pacheco, delegado del DNP manifiesta que la variable de población es una fuente actualmente disponible, mientras que el censo nacional agropecuario es una fuente pensada en el análisis de la tenencia de tierras, pero basada en autodeclaraciones, lo que obligaría a cruzar con fuentes primarias de otras entidades.

El Señor Yesid Parra, Director de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP informa que ya se ha definido el porcentaje específico para los Pueblos Indígenas, así mismo se ha propuesto una salvaguarda para los municipios y departamentos donde haya una participación poblacional de los Pueblos Indígenas mínima, en la cual se deberá garantizar el 20% del porcentaje específico.

ESPACIO AUTÓNOMO DE GOBIERNO

La Señora Viceministra de Minas, señala que se están discutiendo las regalías directas y de manera particular la distribución de éstas. Informa que se ha acordado todo el ciclo de proyecto de asignaciones directas. El equipo del Gobierno Nacional procede con la presentación del modelo indicativo.

El Señor Yesid Parra, Director de Inversiones y Finanzas Públicas presenta el estimativo de asignaciones directas entre departamentos y municipios que arrojó un acumulado de aproximadamente $105.324.936.708 teniendo como criterio poblacional una distribución de las asignaciones globales serían $48.841.690.054 para Pueblos Indígenas y $56.483.246.653 para NARP. Adicionalmente presentan los 10 departamentos y municipios donde se reciben más asignaciones directas y donde la mayor participación poblacional corresponde con los Pueblos Indígenas. Reitera que el Censo Nacional Agropecuario no aplica porque se base en las unidades productoras agrícolas sobre las autodeclaraciones, enfocándose en los temas rurales, con lo cual no permite reconocer la población indígena urbana. Otro elemento es la estructura de población, pero a través de un instrumento que no fue de población y tomado en 2014, es decir está por debajo de las cifras actuales, condición bajo la cual no habría ninguna entidad que pueda certificar esa información desactualizada. Finalmente está el tema de la igualdad, el Censo Nacional Agropecuario reconoce la territorialidad de los Pueblos Indígenas, pero no la de los NARP.

El Señor Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC señala que la fórmula no aporta la reparación directamente proporcional con el uso de los territorios. Propone que se aborde desde los Resguardos legalmente constituidos.

La Señora Viceministra de Minas, Carolina Rojas señala que la propuesta presentada atiende a criterios técnicos con el propósito de promover como Gobierno Nacional la equidad entre los grupos étnicos.

Los delegados de los Pueblos Indígenas reiteran que se está concertando es con los Pueblos Indígenas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, insisten en que es necesario definir la asignación directa de manera específica.

ESPACIO AUTÓNOMO

Los Delegados de los Pueblos Indígenas presentan propuesta de artículo y reiteran que en este espacio se debe abordar únicamente lo correspondiente a los Pueblos y Comunidades Indígenas. La propuesta de artículo es:

Artículo XX. Destinación de los recursos para Pueblos y comunidades indígenas de las Asignaciones Directas. Los municipios y departamentos con ingresos corrientes por concepto de asignaciones directas, destinarán el 4,5% y 2% de su presupuesto bienal vigente por dicho concepto, respectivamente, para proyectos

de inversión con enfoque diferencial en los pueblos y comunidades Indígenas, que se encuentren asentadas en aquellas entidades territoriales, debidamente acreditadas por la autoridad competente. Atendiendo al buen vivir y cierre de brechas entre las poblaciones.

La Señora Viceministra de Minas, Carolina Rojas manifiesta que la propuesta no puede ser adoptada, toda vez que se está hablando de definir de manera específica el presupuesto para los Pueblos Indígenas, sin embargo, como se ha explicado deberá responder a las particularidades de cada territorio, de manera especial sobre la población. Reconoce que se hicieron varias propuestas, entre ellas el trabajo de coordinación, el Gobierno presentó una propuesta para acoger los términos de construcción de la fórmula. Señala que este proceso de consulta ha logrado acuerdos fundamentales sobre los objetivos y fines, sobre la participación en los OCAD, la participación sobre regalías, en las convocatorias ambientales, pero quedan dos puntos que son las asignaciones directas y los recursos de ciencia y tecnología. Señala que la ruta que se acordó disponía que las mesas de concertación técnica se adelantarían los días 24, 25 y 26 de Julio y la protocolización los días 27 y 28 de julio, sin embargo se han ampliado las jornadas en aras de alcanzar los acuerdos con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, ratifica la voluntad del Gobierno Nacional en mantener el diálogo y dar todas las garantías en el proceso de consulta previa, no obstante, se considera que una vez dado el debate técnico suficiente en los dos puntos no se ha llegado a un acuerdo. Reitera que la intención ha sido que los recursos de asignaciones directas se definan con criterios de transparencia.

La Señora Miryam Chamorro, Representante Legal de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia-Gobierno Mayor señala que desde el inicio se insistió en el deslinde de los porcentajes porque seguramente se estaba adelantando el proceso de consulta previa con los demás grupos étnicos, sin embargo, el Gobierno paulatinamente aumentó en el porcentaje, pero no lo deslindó. Señala que se debe tener en cuenta que de aquí en adelante no se puede hacer referencias a grupos étnicos, sino a Pueblos y Comunidades Indígenas de forma especifica.

El Señor Julio César López Jamioy, Presidente de la OPIAC manifiesta que los Pueblos Indígenas son los que más saben de consultas previas, los mayores la han practicado incluso en los temas espirituales, señala que hay unos principios básicos de la consulta previa y hay algunas poblaciones que tienen derecho a la consulta, en ese sentido fueron a las bases a adelantar la consulta, regresaron con los técnicos y empezaron a formular los documentos, posteriormente se encontraron con los equipos técnicos del Gobierno Nacional. Aclaran que desde la OPIAC no se concertó con los afros o los Rom, entonces consideran que no pueden concertar algo de los demás grupos étnicos. Señala que es necesario que en el artículo quede, definido que se sumará lo que se concerté con los demás

Pueblos. Considera que es fundamental definir los porcentajes para evitar conflictos con los NARP.

El Señor Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC señala que el tema de asignaciones directas se hubiera definido si se deja de manera específica el porcentaje para Pueblos Indígenas. Manifiesta que ellos adelantaron la consulta con las autoridades indígenas no con los afros o los Rom, en el mismo sentido no se incluyó en la propuesta ningún acápite con los demás grupos étnicos. Por lo anterior, señala que la propuesta desde el inicio ha sido la asignación directa para los Pueblos Indígenas, manifiesta que se han planteado fórmulas que han sido descalificadas.

El Señor Leandro Rosales, Representante Legal de AICO por la Pacha Mama manifiesta que la razón por la cual no se ha adoptado la propuesta de unificar a todos los grupos étnicos atiende al principio de buena fe y consideran que puede haber inconvenientes en muchos temas, como pasa en los temas territoriales con otros grupos étnicos. Propone que se diseñe una fórmula que incluya diferentes variables como las necesidades básicas insatisfechas.

La Señora Viceministra de Minas, Carolina Rojas reitera la voluntad de llegar a un acuerdo, señala que la propuesta involucra todos los grupos étnicos por la naturaleza de las regalías y el contexto jurídico de las bolsas de asignaciones directas. Manifiesta que se entiende la posición de los Pueblos Indígenas de no querer generar conflictos con los demás grupos étnicos. Propone dos alternativas, la primera es que la fórmula se defina posteriormente entre un delegado de la Instancia y el Gobierno Nacional y la segunda que el porcentaje específico esté definido en el 1% de las asignaciones directas de los Departamentos y 2.25% de los municipios para Pueblos Indígenas. Se aclara que con la propuesta se mejora la situación de los mismos, puesto que en el proyecto de ley inicial se tenía una asignación del 1% y del 3% para todos los grupos étnicos y no específica. La propuesta presentada es:

> *Artículo XX. Destinación de los recursos para Pueblos y comunidades indígenas de las Asignaciones Directas. Los municipios y departamentos con ingresos corrientes por concepto de asignaciones directas, destinarán el 2.25% y 1% de su presupuesto bienal vigente por dicho concepto, respectivamente, para proyectos de inversión con enfoque diferencial en los pueblos y comunidades Indígenas, que se encuentren asentadas en aquellas entidades territoriales, debidamente acreditadas por la autoridad competente y atendiendo sus planes de vida y cierre de brechas entre las poblaciones.*

Los delegados de los Pueblos Indígenas proponen la siguiente redacción:

"Artículo XX. Destinación de los recursos para grupos étnicos de las Asignaciones Directas. Los municipios y departamentos con ingresos corrientes por concepto de asignaciones directas, destinarán el 4,5% y 2% de su presupuesto bienal vigente por dicho concepto, respectivamente, para proyectos de inversión con enfoque diferencial en los pueblos y comunidades étnicas, que se encuentren asentadas en aquellas entidades territoriales, debidamente acreditadas por la autoridad competente.

La fórmula buscará contribuir al buen vivir y cierre de brechas entre las poblaciones a partir de criterios proporcionales: (i) población (50%) y (ii) territorio (50%), conforme a la información oficial certificada por la entidad competente.
*Participación = (TI/Tt)*X + (P.et/Pt)*X*

*La participación= [(Población Indígena) / (Población pueblo y comunidad Indígena + Población NARP) *0.5 + (Territorio indígena Ha) / (Territorio Indígena reconocido Ha + Territorio NAR P) *0.5)] X [Total de recursos de la entidad destinados a la inversión con enfoque diferencial]*

Parágrafo: la Instancia de Decisión para pueblos indígenas presentará a más tardar 6 meses de la entrada en vigencia de la presente ley una incorporación de otras variables como medición de las condiciones de calidad de vida de las poblaciones, los territorios coloniales y ancestrales entre otras que puedan certificarse oficialmente. Las cuales se concertarán con el gobierno nacional y la comisión consultiva de alto nivel para ser adoptada por la comisión rectora."

El Señor José Insuasti, Coordinador del Ministerio de Minas y Energía manifiesta que el primer logro de la discusión es que independientemente del porcentaje, los Pueblos Indígenas son autónomos en el ciclo de proyectos, adicionalmente siempre se solicitó el aumento del porcentaje y en ese sentido se propone definir de manera directa el 1% de todos los departamentos y 2,25% de todos los municipios para Pueblos Indígenas. Señala que en la segunda propuesta la fórmula atiende las variables que han propuestos los Pueblos Indígenas, para lo cual se disponía la coordinación entre el Gobierno Nacional y el delegado de la Instancia para Pueblos Indígenas.

El Señor Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC manifiesta que en la nueva fórmula se ve una disminución de los porcentajes.

El Señor José Insuasti, Coordinador del Ministerio de Minas manifiesta que, si se toma el valor agregado en el nivel nacional, la población de las comunidades indígenas es menor a las de NARP, pero cuando se hace la especificación hay

un valor agregado mayor para Pueblos Indígenas. Propone que se trabaje en la fórmula conjuntamente con el delegado de la Instancia para Pueblos Indígenas.

El Señor Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC manifiesta que uno de los principios que han dicho de la reforma es que devuelve parte de las regalías a las regiones productoras, en ese sentido se debe tener cuidado con la fórmula que se adopte. Reitera que la fórmula debe incorporar el criterio poblacional y territorial.

El Señor José Insuasti, Coordinador del Ministerio de Minas reitera la propuesta que incluye todas las solicitudes realizadas por los Pueblos Indígenas.

La Señora Amparo García, Subdirectora General del DNP manifiesta que para concertar el plazo de definición de la fórmula se debe tener en cuenta la entrada en vigencia de la ley, así como, la puesta en marcha de la institucionalidad que se crea a través de la ley, incluida la conformación de la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

El Señor Wilson Herrera, equipo técnico de la ONIC propone que se agregue en la fórmula el criterio poblacional y el territorial, para dejar definida la situación desde este Proyecto de Ley.

El Señor Julio César López, Coordinador General de la OPIAC considera que una salida es la definición del 2% y el 4.5% de manera específica para los Pueblos Indígenas o la segunda propuesta es definir en este mismo espacio la fórmula con los criterios que ya han sido expuestos.

La Señora Miryam Chamorro, Representante Legal de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia-Gobierno Mayor celebra la voluntad del Gobierno Nacional en definir porcentajes específicos para los Pueblos Indígenas. Manifiesta que para el caso del Chocó no es favorable la variable poblacional ni la territorial, sin embargo, en solidaridad por los demás Pueblos Indígenas se deberá definir la fórmula que beneficie en mayor manera.

La Señora Viceministra de Minas, Carolina Rojas reconoce la voluntad de diálogo en alcanzar un acuerdo. Reitera la propuesta de dejar los porcentajes específicos, la segunda es que la fórmula se defina a través de la coordinación con el delegado de la Instancia y finalmente la tercera propuesta es incluir la variable territorial, dejando como plazo marzo de 2021 sin perjuicio de ir avanzando en la definición de la fórmula.

El Señor José Insuasti, Coordinador del Ministerio de Minas manifiesta que se requiere definir un régimen transitorio para la definición del bienio 2021-2022, para lo cual propone que la primera fórmula sea bajo la variable poblacional.

Los delegados de los Pueblos Indígenas están de acuerdo en incluir el régimen transitorio que contemple la fórmula bajo la variable población para el bienio 2021-2022 y para los años subsiguientes la fórmula acordada en los parágrafos anteriores.

El Señor Julio César López, Coordinador General de la OPIAC manifiesta que la fórmula acordada ya se encuentra definida en el Proyecto de Ley inicial sobre el 34%, con lo cual considera no hay ninguna ganancia.

La Señora Viceministra de Minas, Carolina Rojas aclara que este es un acuerdo fundamental en términos de que se establece una fórmula que garantiza la distribución de las asignaciones directas para los Pueblos Indígenas. Señala que actualmente no hay ningún criterio para la definición de éstas, sino que quedan a discrecionalidad de los alcaldes y gobernadores.

El Señor José Insuasti, Coordinador del Ministerio de Minas aclara que la asignación de la cual se está hablando corresponde con las asignaciones directas que vienen de la ganancia de la explotación, adicionalmente se ha acordado todo el ciclo de proyectos de manera autónoma, así como la suscripción de un convenio para la ejecución de los recursos. Partiendo de una fórmula que se definirá de manera coordinada.

El Señor Yesid Parra, Director de Inversiones y Finanzas Públicas manifiesta que, con el criterio poblacional, en los municipios donde llegan mayores recursos por asignaciones directas la población indígena es mayoría sobre la población de otros grupos étnicos.

La propuesta de acuerdo es:

> *"Parágrafo. La fórmula de destinación será elaborada de manera coordinada por los delegados del Gobierno nacional y la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas, para ser adoptada por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. La fórmula buscará contribuir al cierre de brechas entre las poblaciones y podrá incluir, entre otros, criterios territoriales, de población y de medición de las condiciones de calidad de vida de las poblaciones certificados por el DANE.*
>
> *Parágrafo transitorio. Sólo para el siguiente bienio, la fórmula de destinación será definida por el Gobierno nacional y contendrá criterios de población."*

La Señora Amparo García, Subdirectora Territorial del DNP manifiesta que no considera conveniente que se condicionen las variables de la fórmula toda vez

que el proceso normativo de modificación posterior en caso de que se requiera no es fácil, adicionalmente resalta que la propuesta es que la fórmula se construya de manera conjunta con la Instancia, para que se conserve el rigor técnico.

1 DE AGOSTO DE 2020

Se inicia la sesión siendo las 11:11 a.m. con las palabras de armonización por parte del Señor Armando Valbuena.

El Señor Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Baena extiende un agradecimiento por el diálogo adelantado en este espacio.

La Señora Amparo García, Subdirectora General Territorial del DNP manifiesta su agradecemiento por el proceso adelantado y el compromiso de las partes en avanzar en un díalogo respetuoso.

La Señora Viceministra de Minas, Carolina Rojas agradece el diálogo, extiende toda su admiración por los Pueblos Indígenas por su rigurosidad y el compromiso para construir el país conjuntamente, reitera que este es el inicio de un amplio trabajo conjunto. Retoma los acuerdos sobre los objetivos y los fines, la participación en la Comisión Rectora, con voz y voto, la participación en los OCAD regionales, la creación de una Instancia para Pueblos Indígenas, el ciclo de proyectos coordinador con el DNP, el 1% de las asignaciones locales para los Pueblos Indígenas, el mínimo de asignaciones directas y el diseño de la fórmula de destinación coordinado con la Instancia de Pueblos Indígenas. Así mismo, solicita se presente el resumen sobre los temas referentes a ciencia, tecnología e innovación.

La Señora Amparo García, Subdirectora General Territorial del DNP recuerda la postura del Gobierno Nacional frente al SGR como un hito importante para ciencia, tecnología e innovación, desde el análisis de Gobierno Nacional, se han dado dos argumentos de dos actos legislativos, 04 de 2017 y 05 de 2019, por su característica de abiertas, libres y competitivas, no es posible definir convocatorias específicas, segundo sin perjuicio de las posturas, el Gobierno Nacional, hace en otros espacios para la participación de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la intervención del Viceministro Diego, hace parte a la participación de los pueblos en ciencia, tecnología e innovación, lo primero es el CONPES para ciencia, tecnología e innovación, luego el trámite de un proyecto de decreto, donde los pueblos hacen parte de los CODECTI; teniendo en cuenta la conclusión se mantiene en la posición.

El Señor Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Baena reafirma que siempre se ha buscado la salida y considera que la salida no puede ser en el texto por los argumentos jurídicos expresados y la salida es a través de

las Políticas pública, a través de la participación en Comités y el CONPES. Argumenta que los temas de investigación en los resguardos ES UNA PRIORIDAD DEL GOBIERNO Y se va a construir una política pública. Así, menciona que si no se puede por medio del articulado se está dando respuesta por otros lados. Y si no hay un acuerdo solicita que quede explícito en el acta.

El Señor Viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Fernando Hernández extiende un saludo a delegados del Gobierno y Pueblos Indígenas. Reitera que el compromiso del Gobierno Nacional es la construcción del CONPES de Ciencia, tecnología e innovación y se va a trabajar en el tema de democratización y regionalización de la ciencia y con enfoque diferencial. La Ministra Mabel Torres ha sido enfática en diferentes espacios sobre este compromiso. En términos de gobernanza reitera el compromiso del Gobierno Nacional por reglamentar el tema; y dentro de la reglamentación se ha defendido la importancia de los CODECTI regionales y además la participación de comunidades indígenas y comunidades negras, raizales y palenqueras. La meta es tener el CONPES y el Decreto este mismo año. La socialización del Decreto iniciará en agosto. Estos son los dos compromisos que se derivan de la reunión, los cuales se honrarán a final de año. Reafirma que estos dos elementos son de avance y durante mucho tiempo no se han tenido en cuenta y es en el gobierno del Presidente Iván Duque donde se tendrá en cuenta. Reafirma que el conocimiento se construye a partir de la democratización.

El Señor Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, reitera la importancia de retomar el tema de la medicina tradicional y salud propia, pregunta si este elemento responde a la política pública planteada en el CONPES, puesto que es de vital interés de la Señora Ministra del Interior.

El señor Viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hernández señala que la democratización del conocimiento es ser incluyente de la diversidad de conocimiento. La apropiación social del conocimiento implica que se dé a conocer, explica que ha habido cambios institucionales entre Colciencias y el Ministerio y hoy hay un viceministerio sobre conocimiento y apropiación social, lo que tienen como objetivo su difusión e incorporación en todos los ámbitos del conocimiento. Así, la intención es que el conocimiento que existe en las comunidades se transfiera, pero también se salve el conocimiento y permita el intercambio de conocimientos, ese es el propósito de la política de apropiación social, esta política estuvo en la página del ministerio recogiendo apreciaciones. En relación con la política diferencial incluyente en el tema de ciencia y tecnología, quiere decir que en las convocatorias se espera contar con la participación de los diversos saberes para lo cual se deben buscar mecanismos diferenciales para el reconocimiento del actor. El espacio en el CODECTI no es menor, pues es una instancia de máxima gobernanza, donde se definen prioridades del departamento,

es ahí donde se pueden exponer inquietudes y propuestas para entablar diálogos con varios actores se construya el plan de ciencia, tecnología e innovación, allí se contienen prioridades y lineamientos para el desarrollo posterior de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas. Los CODECTI son la base para construir las propuestas de convocatorias públicas, abiertas y competitivas. Reiteró que el espacio de gobernanza no es un tema menor, más aún cuando se entiende que no se contaba con este espacio y desde allí se proyecta la política desde el territorio.

El Senador Feliciano Valencia, manifiesta que el tema de ciencia, tecnología e innovación es fundamental para el derecho propio y derecho mayor para los Pueblos Indígenas, señala que los Pueblos han sido asaltados en sus conocimientos y en sus saberes, consideran que se ha privilegiado el desarrollo y la investigación de las universidades y no de los Pueblos, advierte que es muy importante que el enfoque diferencial quede planteado para que los Pueblos Indígenas puedan desarrollarse como lo que son y lo que quieren ser. Indica que se habla de la gobernanza en la participación de los escenarios posteriores a la presente ley, asunto que consideran de vital importancia, solicita que se incluya como constancia que cuando se aborde el debate sobre la participación de los Pueblos Indígenas en los CODECTI, así como en la construcción y diseño de la Política Pública se avance en los temas que han sido planteados acá, reitera la propuesta de modificar el acto legislativo 05 para anexar el parágrafo 4 donde quede explícita la propuesta de los Pueblos Indígenas.

El Señor Jhon Jairo Tapie, delegado del equipo técnico de AICO recalca que en este punto los Pueblos Indígenas exigen como se ha manifestado en la propuesta unificada la participación y eso implica estar en las diferentes instancias en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, con un carácter vinculante con voz y voto, con la capacidad y la oportunidad en la formulación de lineamientos o directrices que impliquen esos espacios. Indica que debe haber una asignación directa para los Pueblos Indígenas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Considera no se ha dado respuesta desde la unidad de materia, la Constitución y demás normatividad.

El Señor Leandro Rosales, Representante Legal de AICO por la Pacha Mama aclara que la investigación de los Pueblos Indígenas no se enmarca únicamente en la construcción de malocas o casas de pensamiento, también hay indígenas con formación postdoctoral, doctoral y magistral, que están haciendo procesos de convergencia entre el saber occidental y el propio, sin embargo, esas iniciativas no se pueden materializar porque no hay recursos destinados para ello. Indica que para los Pueblos y Comunidades Indígenas competir contra los grandes centros de investigación los deja en desventaja. Propone que se deje una oferta específica para grupos étnicos al menos mientras se diseñe la participación en las instancias de ciencia, tecnología e innovación.

El Señor Saúl Carrillo, Delegado por la Macroregión Norte ante la MPC propone que como no hay acuerdo se dejen las constancias, pero solicita que se de respuesta sobre unas preguntas puntuales del departamento de la Guajira en la cual está circulando un documento sobre la realización de consultas previas en los territorios. Cuestiona cómo es posible que hoy el Ministerio del Interior esté convocando a una reunión semipresencial de consulta previa sobre el parque eólico de Winpeshi. Señala que no comprenden cómo el Ministerio cuando hay sentencias está propiciando ese tipo de espacios. Reitera la preocupación en que se esté extendiendo una convocatoria de consulta, cuando no se ha acordado un protocolo para desarrollar este tipo de reuniones. Solicita que se revise qué es lo que pasa con la Guajira, por qué el Pueblo Wayuu siempre se le vulneran los derechos, se hacen normas y luego se deshacen para poder penetrar los territorios de ellos, entonces indaga qué se va a hacer cuando los empresarios y los delegados del Gobierno Nacional lleguen y se puedan presentar contagios en el Pueblo Wayuu. Hace un llamado a realizar el acompañamiento al Pueblo Wayuu y al Departamento de La Guajira, porque serán engañados por la necesidad de obtener comida en este escenario de pandemia y permitirán sin conocer, la realización de las reuniones, con consecuencias críticas para ellos.

El Señor Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Baena manifiesta que analizará el tema específico, adicionalmente se ha pedido a la Procuraduría acompañar en la definición de acuerdos para adelantar los procesos de consulta previa, aclara que el único tema que está autorizado de común acuerdo es el tema del Sistema General de Regalías.

El Señor Saúl Carrillo, Delegado por la macroregión norte manifiesta que remitirá las convocatorias y todos los documentos correspondientes al tema al Director de Asuntos Indígenas. Señala que se ha venido planteando que se defina un protocolo de consulta previa para atender los casos de consulta previa en el país, porque los Pueblos y Comunidades Indígenas han sido señalados de oponerse al desarrollo del país, situación que pone en riesgo a sus líderes y representantes.

El Señor Darío Mejía, delegado Indígena, reconoce y valora la apertura, pero en el acto legislativo hubo una interpretación política. Lamenta el mensaje y la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Señala que la propuesta ha sido pasar del saqueo a compartir, pasar de la mentalidad anquilosada a pasar a una sociedad incluyente. No obstante, hay unas propuestas de aperturar en otros frentes, considera se debe aprovechar que aquí esta naciendo esta institucionalidad y se debe ir avanzando sobre el fondo, y no sobre el instrumento, bien sea un CONPES, un Decreto o una política. Reafirma que los Pueblos y Comunidades Indígenas no aceptan la interpretación jurídica que se le ha dado al artículo 4.

El Señor Diego Chiguachi, delegado del equipo técnico manifiesta que se requiere un 50/50 en la conformación del Consejo Superior del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del cual se pueden hacer invitaciones directas. Indica que se requiere que el CONPES que se está construyendo se consulte con la MPC, porque así ha sido señalado por el Convenio de Nagoya, requieren la devolución de las semillas sustraídas de los territorios, requieren retribución de las ganancias de las ventas de esas semillas sustraídas. Requieren distribución justa y equitativa de los 256 contratos de acceso a recursos genéticos del Ministerio de Ambiente sin consultarlos. Proponen una fórmula equitativa para la distribución de recursos por número de años en investigación.

El Señor Armando Wouriyu, asesor político de la ONIC manifiesta que se debe dar el reconocimiento de los conocimientos de los Pueblos Indígenas, y deben estar en el Consejo Superior del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Señala que en el caso del Pueblo Wayuu el sol se unió a la mar y de allí salió la tierra y de la tierra salió la gente, hoy el sistema alimentario de los cubeos y los sirianos, sus alimentos vienen del proceso de fotosíntesis producido por el Dios Sol, que provee nutrientes a los animales y las plantas.

El Señor Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC inicia la intervención solidarizándose con el Pueblo Wayuu frente a lo manifestado por el señor Saúl Carrillo en este escenario de pandemia. Informa que los indígenas ya llevan más de 4000 personas contagiadas y uno de los Pueblos más afectados es el Pueblo Wayuu. Solicita que se dé la orden de manera inmediata de suspender los procesos de consulta previa en la Guajira, so pena de asumir la responsabilidad de posibles brotes de contagio. Hace un llamado a que se tomen decisiones de manera urgente. Indica que habían entendido de acuerdo a lo informado por la Procuraduría que las circulares de las consultas virtuales estaban derogadas, en ese sentido la convocatoria a las reuniones de consulta es una violación al planteamiento realizado por la Procuraduría General de la Nación y al compromiso que había hecho el Ministerio del Interior de no adelantar consultas virtuales. Recuerda que en la anterior sesión de la MPC se hizo un pronunciamiento que se hizo público sobre los temas de consultas previas virtuales. Manifiesta su preocupación frente a que se esté actuando de mala fé. Reitera que se debe suspender la convocatoria de manera inmediata, solicita además que la Procuraduría consulte inmediatamente al Ministerio del Interior si las consultas se han suspendido o las están realizando. En segundo lugar, celebra los avances del proceso de consulta porque por primera vez desde la República los Pueblos Indígenas van a participar con capacidad de decisión en los órganos regionales y en la Comisión Rectora, paso que consideran fundamental, se han definido las asignaciones específicas para Pueblos Indígenas del orden nacional, así como la fórmula para las asignaciones directas. Manifiesta su preocupación en que sobre los fondos de ciencia y tecnología no se vaya a tener un acuerdo, puesto que representan el 10% del SGR. Reitera que no encuentra argumentos

jurídicos que no permitan la participación de los Pueblos Indígenas en esos recursos. Hace un llamado a que la señora Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación asista y se pueda definir una fórmula que permita que los Pueblos Indígenas y los NARP puedan acceder a dichos recursos. De lo contrario cualquier proyecto que se derive de esos recursos deberá ser objeto de consulta con los Pueblos y las Comunidades Indígenas.

El Señor Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Baena manifiesta que se hubiera querido llegar a un acuerdo en este punto, pero considera que se ha dado suficiente argumentación respecto del tema de ciencia, tecnología e innovación basados en las disposiciones de la norma. Propone que se deje consignado el acuerdo en el acta.

El señor Gerardo Jumí, delegado indígena ante la Secretaría Técnica de la MPC manifiesta que el acto legislativo no sustituye el artículo 7 de la Constitución Política ni el Convenio 169 de la OIT.

El Señor Viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Diego Fernando Hernández Losada, reitera la importancia de los avances que se han logrado, situación que hace parte de lo que se abordará en la política de ciencia, tecnología e innovación, reitera que la propuesta es que el CONPES de ciencia, tecnología e innovación será con enfoque diferencial y la participación en la construcción por parte de los Pueblos Indígenas será incluida. Ratifica el compromiso del Gobierno como lo ha venido mostrando el Ministerio, por ejemplo, en el encuentro de sabios donde participó Carlos Jacanamijoy. En segundo lugar, habrá participación de los Pueblos Indígenas en todos los CODECTI, instancias de gran importancia para la construcción de la política y las prioridades de las regiones.

La Señora Viceministra de Minas, Carolina Rojas señala que la propuesta de acuerdo parte del reconocimiento de los conocimientos de los Pueblos Indígenas y justamente en virtud de continuar en el trabajo conjunto sobre el sector de ciencia, tecnología e innovación se proponen los siguientes espacios como agenda de trabajo.

PROPUESTA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación promoverá el enfoque diferencial y la participación de los Pueblos y Comunidades Indígenas en la formulación del CONPES de la política pública de ciencia, tecnología e innovación y en la reglamentación y participación de los CODECTI.

La Señora Gloria Erazo, asesora técnica de los Pueblos y Comunidades Indígenas pone a consideración una propuesta que involucra todas las propuestas del Gobierno Nacional. Así mismo, indaga que el acto legislativo 05 de 2019 señala que los recursos de ciencia, tecnología e innovación se ejecutarán

a través de convocatorias abiertas, públicas y competitivas y de las cuales el 2% corresponde a investigación, además da lectura del objeto para la asignación de ciencia, tecnología e innovación, en ese sentido pide agregar al objeto el siguiente texto. Si la ley desarrolló el objeto que quieren incluir,debería revisarse, primero la inclusión de los asuntos como la pandemia y crisis climática, teniendo en cuenta los desarrollos de convenios internacionales de desarrollo sostenible y no crecimiento sostenible. Segundo, teniendo en cuenta los reconocimientos a los pueblos indígenas que ha presentado el Gobierno Nacional propone incluir un acuerdo de voluntad en el que se pueda concertar una ruta. Los tres textos propuestos son:

"Propuesta 1. Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación Artículo 54. La Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como objeto incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, incorporando un enfoque diferencial que incluya a los pueblos indígenas y demás pueblos étnicos, sus conocimientos, innovaciones y prácticas, y mediante proyectos de inversión que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general, contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al desarrollo sostenible y una mayor prosperidad para toda la población"

Propuesta 2. La Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como objeto incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, con aplicación del enfoque diferencial para incluir la participación de los pueblos indígenas y étnicos, mediante proyectos de inversión que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general, contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al desarrollo sostenible y una mayor prosperidad para toda la población.
Propuesta 3. Artículo 54. Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación. La Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como objeto incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante proyectos de inversión que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general, contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al desarrollo sostenible y una mayor prosperidad para toda la población.
Parágrafo. En desarrollo del Objeto definido en esta Ley, se incluirá el enfoque diferencial en lo que se refiere a los usos, la integración de los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad biológica y el buen vivir de los pueblos étnicos."

El Señor Francisco Rojas Birry, Exconstituyente manifiesta que los argumentos de los Pueblos Indígenas se encuentran respaldados en la Constitución Política y en los tratados suscritos por Colombia, hace un llamado a que la Constitución sea aplicada en su integralidad. En los convenios de recursos genéticos, bioseguridad, biodiversidad están mencionados los Pueblos Indígenas. Propone que se avance definiendo la ruta metodológica para abordar el tema de ciencia, tecnología e innovación.

El Señor Jose Insuasti Coordinador del Ministerio de Minas y Energía, reitera que en lo que no hay acuerdo es que en la ley que regula el funcionamiento y la organización del SGR quede incluido el tema. Aclara que no se está diciendo que no se pueda, sino que se deberá abordar en el marco de la política de ciencia, tecnología e innovación, en las cuales el Viceministro ya se comprometió a traerla a la MPC, consultar el CONPES y trabajar conjuntamente. Indica que el Gobierno Nacional no se ha levantado del diálogo, hay un compromiso de desarrollar el tema en la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ratifica que el Gobierno Nacional considera que si es posible pero no en el marco de la Ley de Regalías sino en el marco de la política pública de ciencia, tecnología e innovación.

El Señor Guillermo Salah, asesor del DNP manifiesta que en la propuesta se está relacionando algo que tiene que ver con las funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aclara que el argumento que se ha manifestado desde el Gobierno Nacional es que no se deben abrir convocatorias públicas, abiertas y competitivas con nombre propio.

El Señor Julio César Estrada, Coordinador General de la OPIAC manifiesta que la misma normativa permite a los Pueblos Indígenas, bien sea como entidades territoriales a través del Decreto 632 o como entidades territoriales indígenas definir una asignación directa.

El Señor Darío Mejía, delegado de los Pueblos Indígenas manifiesta que en la metodología de toda la sesión se ha propuesto que se busquen fórmulas para alcanzar acuerdos. Señala que el Señor Salah se ha pronunciado todas las veces sobre la primera propuesta respecto de las convocatorias, sin embargo, la propuesta actual sobre el objetivo ya no guarda la misma imposibilidad, sino que corresponde al ejercicio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Propone que la señora Ministra haga presencia en el espacio.

El Señor Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Baena aclara que el Señor Viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con capacidad de decisión expresa por la Señora Ministra.

El Señor José Insuasti, Coordinador del Ministerio de Minas y Energía manifiesta que frente a la nueva propuesta no se ha revisado jurídicamente, frente al objeto del enfoque de la asignación de CTeI, considera que se deben esbozar argumentos jurídicos y técnicos respecto de la conveniencia, por el tipo de norma de incluir la modificación en el objeto.

El Señor Viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación reitera que esas disposiciones corresponden con la política de CTeI, reitera el compromiso de garantizar la participación en los CODECTI. Aclara que dentro de los objetivos del Ministerio está la creación de la política que se adelantará de manera coordinada con los Pueblos Indígenas. La Ley 1286 establece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, por eso la Ley de SGR no puede modificar el sistema.

La Señora Gloria Erazo, delegada del equipo técnico manifiesta que la plataforma de recursos ecosistémicos ha dicho que se debe articular con los conocimientos de los Pueblos Indígenas porque estamos en una era de pérdida de la diversidad, en ese sentido se requiere incluirlo en el sistema de ciencia, tecnología e innovación.

El Señor Viceministro de CTeI, Diego Fernando Hernández Losada manifiesta que la política social en cuanto a temas de CTeI es incluyente para toda la población, en ese sentido ratifica la lectura del artículo 54. Ejemplifica que el CONPES de inversión estratégica y capacitación de recurso humano de alto nivel establece cuanto se va a financiar durante este Gobierno y las respectivas proporciones, ya con ese CONPES se establecen los instrumentos como las convocatorias, por ejemplo la promoción para que la gente se forme, la propuesta es que se establezca un porcentaje como instrumento en el marco de la política o con un puntaje definido para atender a las convocatorias; de la misma manera se ha hecho con la vinculación de personal cuando llegan del exterior con alta formación. Señala que en los instrumentos se ponen las estrategias de inclusión. Reitera la propuesta de incluir en la construcción de la política a través de talleres y medios virtuales el enfoque diferencial.

El Señor Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC manifiesta que en vista que no va a ser posible el diálogo en este espacio se gestionará una audiencia con la Señora Ministra de CTeI, la cual se está solicitando de manera conjunta con los NARP.

El Señor Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Baena manifiesta frente a la propuesta que estamos en un espacio de consulta con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, y esa ha sido la solicitud durante toda la sesión, en segundo lugar considera que no es necesaria la intermediación por parte de la Procuraduría General toda vez que este espacio se ha caracterizado

por el diálogo y la concertación. En tercer lugar, el Gobierno Nacional trabaja con delegaciones, los ministros pueden delegar y el Señor Viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene todas las competencias para poder tomar las decisiones en el espacio. Frente a la propuesta de acuerdo de trabajar el tema de ciencia, tecnología e innovación, si los delegados indígenas lo consideran se podrá dejar como desacuerdo. Ahora bien, propone que, en las convocatorias en el desarrollo de la política pública se involucre el enfoque diferencial. **El compromiso asumido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es:**

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación promoverá el enfoque diferencial y la participación de los Pueblos y Comunidades Indígenas en los CODECTI. Dicho Ministerio también promoverá la participación de los Pueblos y Comunidades Indígenas en las socializaciones regionales que se harán dentro del proceso de construcción del CONPES de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación e incluirá en sus instrumentos de política pública convocatorias con enfoque incluyente y diferencial.

La Señora Viceministra de Minas, Carolina Rojas manifiesta que se han tenido 10 puntos de discusión en el proceso de concertación en los cuales se ha llegado a acuerdo en 9, y queda uno en el cual se está dejando como propuesta que se incorporará en escenarios posteriores de construcción de la política pública de ciencia, tecnología e innovación, partiendo del alcance del proceso de reglamentación del SGR. Señala que se ha realizado la ampliación de las jornadas de concertación bajo el convencimiento de que prevalecía la concertación, sin embargo, sobre este punto indica que hay un desacuerdo. Invita a avanzar con la protocolización del proceso. Ratifica que se ha dado un amplio debate, pero no se ha logrado el consenso en el punto de ciencia, tecnología e innovación.

El Señor Exconstituyente Francisco Rojas Birry manifiesta que la propuesta de los Pueblos Indígenas no se trataba de buscar alianzas con las comunidades negras para presionar al Gobierno, sino que a través de la Procuraduría General de la Nación para Asuntos Étnicos se buscará una cita con la Señora Ministra de CTeI para llegar a un acuerdo ya que en esta MPC no se ha podido llegar a un consenso. Aclara que la propuesta no constituía una estrategia de acorralar al Gobierno Nacional.

La Señora Miryam Chamorro, Representante Legal de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia-Gobierno Mayor aclara que las propuestas de los Pueblos Indígenas no han tenido la intención de acorralar al Gobierno, considera que los Pueblos Indígenas deben promover el desarrollo normativo en beneficio de ellos mismos y no de los demás grupos étnicos. Indica que ya se han expuesto argumentos técnicos y jurídicos suficientes sobre un tema en el cual se ha dado

la usurpación sobre los saberes, así como el aprovechamiento de los rubros. Manifiesta que, si no se ha podido llegar a un acuerdo, se debe dejar la constancia que no se sustituye el derecho fundamental a consulta previa de los actos administrativos que afecten a los Pueblos Indígenas. Propone que se protocolicen los logros que se han obtenido hasta el momento que se consideran fundamentales en el marco de la reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas, aunque no sean suficientes.

El Señor Jhon Jairo Tapie, delegado de AICO por la Pacha Mama señala que no es capricho que las entidades del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la Constitución hagan control. Manifiesta que los Decretos 1396 y 1397 contemplan la presencia de otros organismos adicionales al Gobierno Nacional, en ese sentido la propuesta no pretendía acorralar a los Pueblos Indígenas. Expresa que la propuesta era conseguir una fórmula de acuerdo, sin embargo, el desacuerdo puede representar intereses sobre los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas. Deja constancia que se le está dando prevalencia a la ciencia occidental en detrimento de la protección de los conocimientos tradicionales. Considera que la consulta debe derivar en acuerdos concretos y no en promesas políticas. Resalta que los Pueblos Indígenas han contribuido mucho a la humanidad y a la soberanía alimentaria, sin embargo, en este escenario de consulta donde debe prevalecer el diálogo no se logró ese acuerdo sobre ciencia, tecnología e innovación y se deberá continuar desde los escenarios de gobierno propio.

El Señor Viceministro para la Participación e Igualdad de Derecho, Carlos Baena aclara que no hay ningún interes oculto sobre los conocimientos ancestrales de los Pueblos Indígenas, por el contrario hay interés en continuar con el diálogo en el marco de otros escenarios.

El Señor Julio César López, Coordinador General de la OPIAC manifiesta que una de las estrategias políticas planteadas por los Pueblos Indígenas fue buscar un espacio de diálogo de manera directa con la Señora Ministra de CTeI para escuchar de ella la respuesta a las diferentes propuestas planteadas.

El Señor Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Baena manifiesta que justamente el Viceministro Hernández se encuentra presente con capacidad de decisión por parte de la Señora Ministra.

La Señora Gloria Erazo, asesora técnica de los Pueblos Indígenas manifiesta que se perdió una gran oportunidad para Colombia, porque hay muchos procesos que aportarían a la prosperidad social y al entendimiento entre la sociedad. Expresa la presión que sienten los abogados cuando deben proteger a un Taita que le decomisan sus remedios o cuando una empresa tiene la propiedad sobre un producto tan importante como la jagua.

El Señor Diego Chiguachí, delegado del equipo técnico manifiesta que este debate ha sido fundamental porque permite reafirmar la propiedad de los pueblos indígenas sobre los conocimientos tradicionales y la importancia de proteger a los sabedores.

El Señor Manuel Mavisoy, delegado de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia-Gobierno Mayor manifiesta que se han logrado importantes acuerdos, señala que se ha perdido la oportunidad de avanzar en esta nueva era sobre los conocimientos tradicionales, expresa que el Gobierno Nacional con la negativa en este espacio sobre los conocimientos propios condena al desconocimiento de los saberes de los Pueblos Indígenas. Considera que se están viendo acorralados por la mala información científica y producto de ello es la actual pandemia. Expresa que se ha negado la posibilidad de concertar, manifiesta que es un terrorismo con la salud, y que la salud no es un negocio, sino debe estar orientada a servir.

El Señor Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC manifiesta en primer lugar, que el movimiento indígena representado en la MPC ni él en su calidad de Consejero Mayor de la ONIC han pretendido acorralar y mucho menos amenazar al Gobierno y los funcionarios presentes, puesto que se han puesto sobre la mesa los derechos que el movimiento indígena ha tenido que luchar, en la movilización, que ha tenido que ganarse en muchos escenarios de debate y discusión a lo largo de la historia. Aclara que se apeló a uno de los órganos que prevee la democracia. Señala que el Gobierno Nacional el día de hoy perdió una gran oportunidad de hacer un gran acuerdo con el movimiento indígena. Expresa que como movimiento indígena van a exigir procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos de investigación en todos los territorios indígenas que sean financiados con las convocatorias que aquí se han abordado. En segundo lugar, los Pueblos Indígenas en el marco de su autonomía y en aras de proteger el conocimiento tradicional podrán adoptar medidas de prohibición de investigaciones a cualquier entidad que quiera adelantar ejercicios de investigación en los territorios, pero además se va a construir una proposición para llevarla al Congreso de la República y el Senador Feliciano deberá presentarla, sustentarla y defenderla para lograr la incorporación en ese escenario democrático, todos los elementos aquí expuestos deberán ser recogidos y suscritos por todos los delegados de la MPC. Solicita que se cite una audiencia pública a la Señora Mabel Torres, televisado de cara a todos los medios del país, de cara a los Pueblos Indígenas. Reconocen la legitimidad que le asiste al Señor Viceministro de CTeI y resalta el proceso técnico que se adelanta previo a llegar a este espacio con las comunidades. Adicionalmente solicita organizar el expediente porque se deberá llegar a la Corte Constitucional para modular la ley, a partir del principio de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y que le ordene al Gobierno Nacional consultar

con los Pueblos Indígenas un mecanismo especial de participación en materia de ciencia y tecnología, que salvaguarde el conocimiento tradicional y que garantice un enfoque étnico y diferencial. Reitera que no van a renunciar a la posibilidad que en el marco de esta norma o posterior a ella haya un escenario de participación para los Pueblos Indígenas. Reconoce todo el equipo técnico y político de la MPC por la gallardía, por la fuerza, por la argumentación que se ha dado durante toda la jornada, se ha dado un paso fundamental que deben recoger y seguir fortaleciendo y consolidando en la perspectiva de fortalecer la lucha, la unidad y los principios de la defensa del territorio, la cultura y la autonomía.

El Señor Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Baena manifiesta que en este espacio debe prevalecer el diálogo y la concertación, sin embargo también se debe poder expresar lo que se siente. Señala que no es la intención que no se haga nada en ciencia, tecnología e innovación sino que habrá mucho trabajo conjunto. Manifiesta que los acuerdos alcanzados son históricos para el Gobierno Nacional y para los Pueblos y Organizaciones Indígenas. Expresa su gratitud y reconocimiento en nombre del Señor Presidente de la República y la Señora Ministra del Interior.

La Señora Omaira Cárdenas, delegada de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos agradece y reconoce el trabajo realizado no solamente por la voluntad de los Pueblos y Comunidades Étnicas, sino por parte del Gobierno Nacional para poder alcanzar un acuerdo frente a la reglamentación del SGR. Resalta que la finalidad principal de los procesos de consulta previa es el cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, considera que es un hito que demuestra el empuje del movimiento indígena a los derechos que les asisten. Indaga que en los 9 acuerdos se materializa el Estado social de derecho y el Estado pluricultural, entonces no comprenden por qué en el tema de ciencia, tecnología e innovación no se logró el acuerdo. Señala que es necesario que se incluya una variable étnica y la posibilidad clara de que los Pueblos Indígenas puedan acceder a los recursos sin tener que competir con los demás organismos del país, así como el reconocimiento de los saberes milenarios, salvaguarda de la protección de los Pueblos Indígenas. Considera ambigua la definición del Gobierno Nacional en no poder incluir dentro del proceso de consulta la inclusión de la variable étnica en las convocatorias. En tercer lugar,expresa que en este proceso de consulta, los Pueblos Indígenas podrán definir en el marco de su autodeterminación todas las medidas que requieran sobre las actividades en sus territorios así como las rutas metodológicas que se determinen, así mismo podrán disponer todas las actuaciones que consideren para salvaguardar su inclusión. En cuarto lugar, respecto de la denuncia de las consultas en La Guajira, manifiesta su preocupación por que la circular expedida por la Señora Ministra no sea tenida en cuenta, así como el concepto de la Procuraduría respecto de la inconveniencia de adelantar procesos de consulta virtual. Solicitan que se revise esa situación de remisión de las convocatorias por parte de la Autoridad Nacional

de Consulta Previa cuando se conoce que hay territorios que no cuentan con condiciones y protocolos de bioseguridad. Hace un llamado a todas las instituciones a propender por los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en el marco del Estado de derecho y pluricultural. Reitera los grandes logros que se han alcanzado en este proceso de consulta.

El Senador Feliciano Valencia, manifiesta que el día de hoy se cierra la palabra con el Gobierno Nacional en términos del proceso de consulta previa, sin embargo, continúa el trabajo interno, en llevar la información a las comunidades, así como a los escenarios organizativos y fortalecer agendas para la materialización de los derechos. Señala que en otras ocasiones no se han alcanzado acuerdos, pero en este escenario se han acordado los puntos que avanzan en la materialización de los derechos. Agradece a los Pueblos Indígenas y al Gobierno Nacional por el trabajo adelantado durante las concertaciones técnicas, indica que lo más importante es que hay una Constitución Política y el Gobierno Nacional está obligado a cumplirlo, por lo tanto, se estará vigilantes a que lo acordado se cumpla. Espera que la audiencia que se solicitará sea más nutrida y con amplia participación para aquellos que requieren la materialización de sus derechos.

La Señora Viceministra de Minas, Carolina Rojas celebra los acuerdos alcanzados y el diálogo fructífero, considera que los avances son fundamentales para los Pueblos Indígenas, sobre los objetivos y fines, la participación en los OCAD regionales es histórica, sobre las asignaciones locales, sobre las asignaciones directas, sobre la creación de la Instancia de Decisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y el ciclo de proyectos. Señala que no se logró un acuerdo sobre el tema de ciencia, tecnología e innovación, sin embargo, el Gobierno ratificó el compromiso para que en el marco de la política pública se incluya el enfoque diferencial. Agradece al equipo de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, así como al equipo del Gobierno Nacional.

El Señor Viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Fernando Hernández Losada extiende su agradecimiento por el aprendizaje obtenido en este diálogo, reitera la posición del Ministerio de CTeI y la invitación del Ministerio que lleva apenas seis meses, a construir la política diferencial con la democratización del conocimiento. Considera que el CONPES se debe utilizar como una gran oportunidad que no se puede perder, reconoce que los instrumentos materializarán la voluntad del Señor Presidente de la República y la Señora Ministra. Señala que en el CONPES se va a lograr, que con la participación de los Pueblos Indígenas se alcance una participación en la política diferencial de ciencia, tecnología e innovación.

La Señora Amparo García, Subdirectora General Territorial del DNP agradece el diálogo a todas las autoridades de la MPC, señala que con estos acuerdos se va

a transformar las vidas de muchos indígenas en los territorios, informa que desde el DNP se va a contar con un equipo para materializar los acuerdos y el trabajo conjunto.

El Señor José Insuasti, Coordinador del Ministerio de Minas y Energía extiende el agradecimiento a todo el equipo técnico de los Pueblos y Organizaciones Indígenas por la rigurosidad en los debates. Señala que esto ha trazado una hoja de ruta sobre el Sistema General de Regalías donde se continuará trabajando de manera conjunta.

El Señor Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos Carlos Baena señala que ha obtenido muchos aprendizajes de este espacio, reconoce la rigurisidad, la disciplina y la constante búsqueda de soluciones de todas las partes. Considera que se ha hecho un aporte fundamental para la democracia y el país. Agradece al equipo de Gobierno.

El Taita Leandro Rosales, Representante Legal de AICO por la Pacha Mama manifiesta que a pesar de todos los acuerdos allegados se debe aclarar que esta ley no tiene un enfoque étnico. Señala que ha habido otros escenarios fundamentales para los Pueblos Indígenas, indaga si el acuerdo respecto del tema de ciencia, tecnología e innovación ha quedado claro alrededor de traer el CONPES a definir una ruta metodológica en el marco de la MPC.

La política pública de ciencia, tecnología e innovación y la ruta para la construcción de esta será abordada nuevamente en el marco de la próxima sesión de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.

ACUERDOS

Reunidos los Delegados Indígenas de los Pueblos y Organizaciones Indígenas y los Funcionarios del Gobierno Nacional, previa verificación de quorum y según lo establecido en el Decreto 1397 de 1996, acuerdan:

1. Protocolizar los acuerdos en el marco del proceso de consulta previa del "Proyecto de ley por la cual se regula el funcionamiento y la organización del Sistema General de Regalías", así:

Art. 2. Objetivos y fines. Conforme con lo dispuesto por los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, son objetivos y fines del Sistema General de Regalías los siguientes:

1. Crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, en orden a generar ahorros para épocas de escasez, promover el carácter contracíclico de la política económica y mantener estable el gasto público a través del tiempo.

2. Propiciar la adopción de mecanismos de inversión de los ingresos minero-energéticos que prioricen su distribución hacia la población más pobre y contribuya a la equidad social.

3. Promover el desarrollo y competitividad regional de todas las entidades territoriales dado el reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad del Estado.

4. Fomentar la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo de la producción minero-energética, en particular la minería pequeña, mediana y artesanal.

5. Fortalecer la equidad regional en la distribución de los ingresos minero-energéticos, a través de la integración de las entidades territoriales en proyectos comunes; promoviendo la coordinación y planeación de la inversión de los recursos y priorización de grandes proyectos de desarrollo.

6. Propiciar mecanismos y prácticas de buen gobierno.

7. Implementar mecanismos que hagan efectiva la inclusión, igualdad, equidad, participación y desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, del pueblo Rrom o Gitano y de los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con sus planes de etnodesarrollo, planes de vida respectivos y demás instrumentos propios de planificación.

8. Incentivar o propiciar la inversión en la restauración social y económica de los territorios donde se desarrollen actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, así como en la protección y recuperación ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que le asiste a las empresas que adelanten dichas actividades, en virtud de la cual deben adelantar acciones de conservación y recuperación ambiental en los territorios en los que se lleven a cabo tales actividades.

9. Propender que las actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, promuevan los procesos de la transición energética, la protección ambiental y los derechos humanos, en el marco de la normativa vigente y los estándares internacionales reconocidos por el Estado colombiano.

10. Fomentar la estructuración y aprobación de proyectos de inversión que

permitan la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en los términos establecidos en las normas vigentes.

INCLUIR ARTÍCULOS EN CAPÍTULO NUEVO

Artículo xx: Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Es la responsable de definir los proyectos de inversión susceptibles de financiación con cargo al porcentaje de los recursos de la Asignación para la Inversión Local correspondiente a los pueblos y comunidades indígenas. Esta instancia de decisión viabilizará, priorizará y aprobará los proyectos de inversión y designará la entidad ejecutora, en los términos señalados en la presente Ley.

Artículo xx. Naturaleza e integración de la Instancia de Decisión de los Pueblos y las Comunidades Indígenas. La Instancia desempeñará funciones públicas en los términos establecidos en la Ley, su propio reglamento y lo señalado por la Comisión Rectora y no tendrá personería jurídica. Estará integrada por: (i) Un delegado de cada una de las cinco (5) organizaciones que conforman la Mesa Permanente de Concertación y (ii) Un delegado por cada Macrorregión de conformidad con el artículo 10 del Decreto 1397 de 1996 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Elegidos para periodos de dos años. Esta Instancia contará con una secretaría técnica ejercida por uno de sus integrantes que será elegido conforme con su reglamento. Para su funcionamiento la Instancia contará con el apoyo de un equipo técnico. La Instancia podrá invitar a delegados de Ministerios o Departamentos Administrativos de acuerdo con los proyectos de inversión objeto de cada sesión, quienes participarán con voz y sin voto. Los miembros de la Instancia elaborarán su propio reglamento, así como el de la secretaría técnica, los cuales deberán estar en concordancia con las normas que regulan el Sistema General de Regalías.

Parágrafo. Las decisiones sobre la regulación de esta Instancia estarán guiadas por los mandatos de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, en el marco del Sistema General de Regalías.

INCLUIR ARTÍCULOS EN CAPÍTULO NUEVO

Artículo XX. Decisiones relacionadas con los Pueblos y Comunidades Indígenas. Las decisiones adoptadas por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regionales y la Instancia de Decisión de los Pueblos y las Comunidades Indígenas, en las que los representantes de los pueblos y comunidades indígenas participen en su condición de miembros con voz y voto, no están sometidas a pronunciamientos o refrendaciones posteriores dado que estos delegados representan y expresan la voluntad de los pueblos y comunidades indígenas en

estas instancias. Estas decisiones producen plenos efectos y gozan de validez legal desde su adopción por las citadas Comisión, Órganos e Instancia, sin perjuicio de la procedencia de los medios de control previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo: Las decisiones que se deriven de la participación de los delegados indígenas en la Comisión, Órganos e Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Sistema General de Regalías, no sustituyen los procesos de consulta que en el marco de la ley se deban adelantar.

INCLUIR ARTÍCULOS EN CAPÍTULO NUEVO

Artículo xx. Funciones de la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Son funciones de la instancia las siguientes:

1. Colaborar a las políticas de transparencia, vigilancia, control, fiscalización y evaluación de las funciones de los demás órganos del Sistema General de Regalías en lo concerniente a los recursos destinados a los Pueblos Indígenas.
2. Coordinar a través del delegado de la Instancia para la Comisión Rectora los parámetros generales, procesos, lineamientos, metodologías, criterios para el funcionamiento y direccionamiento estratégico, que garanticen la participación real y efectiva de los Pueblos y comunidades Indígenas en el Sistema General de Regalías.
3. Promover la inclusión, equidad, autonomía y participación de los Pueblos y Comunidades Indígenas y acompañar la planeación, formulación, presentación, viabilidad, priorización, aprobación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión, en concordancia con la Ley de Origen, Derecho Mayor, Derecho Propio, Planes de vida o sus equivalentes, apoyando los ejercicios de planeación propia territorial indígena y las normas del Sistema General de Regalías.
4. Asesorar, capacitar y prestar la asistencia técnica a los pueblos indígenas en el ciclo de los proyectos de inversión.
5. Coordinar con los Órganos del Sistema General de Regalías el fortalecimiento del enfoque diferencial étnico para la formulación de proyectos de inversión, teniendo en cuenta los planes de vida o sus equivalentes, de los pueblos y comunidades indígenas.
6. Coordinar con el Departamento Nacional de Planeación en el marco de sus funciones, las capacitaciones a los equipos técnicos de los pueblos y comunidades Indígenas para la formulación de proyectos inversión, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
7. Convocar la presentación y sustentación de los proyectos de inversión financiados con los recursos destinados a pueblos y comunidades indígenas.
8. Dictar los mecanismos necesarios para la coordinación con los espacios propios reconocidos de los pueblos y comunidades indígenas y los demás entes de coordinación y concertación departamentales y regionales indígenas.

9. Coordinar con el Gobierno nacional la socialización de la normativa del Sistema General de Regalías y demás políticas, en los pueblos indígenas, una vez entre en vigencia la presente ley.
10. Designar la secretaría técnica.
11. Hacer su propio reglamento, el cual deberá estar en concordancia con las normas que regulan el Sistema General de Regalías.
12. Elegir a un representante para que participe en la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.
13. Informar a las Secretarías Técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regional los representantes de los Pueblos y Comunidades Indígenas elegidos de acuerdo con el Reglamento.
14. Aprobar los informes de gestión de la Instancia.
15. Recibir los proyectos de inversión por el medio señalado en el reglamento que formulen y presenten los pueblos y comunidades indígenas a través de sus autoridades debidamente inscritas en el registro único del Ministerio del Interior, y registrarlo en los sistemas de información para dar inicio al trámite de viabilidad, priorización y aprobación, con cargo al porcentaje de la Asignación Local correspondiente a los pueblos y comunidades indígenas.
16. Verificar la disponibilidad de caja y saldo presupuestal, conforme a la Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de Regalías y la plataforma del Sistema de Presupuesto y Giro del Sistema, para la priorización y aprobación de los proyectos de inversión.
17. Viabilizar y registrar a través de su Secretaría Técnica los proyectos de inversión a ser financiados con cargo al porcentaje de la Asignación por la inversión Local correspondiente a los pueblos y comunidades indígenas.
18. Priorizar y aprobar de acuerdo con los criterios que se determinen en el reglamento de la Instancia, así como realizar la designación del ejecutor, de los proyectos de inversión a ser financiados con cargo al porcentaje de la Asignación para la inversión Local correspondiente a Pueblos y comunidades Indígenas.
19. Aprobar los ajustes y la liberación de recursos de los proyectos de inversión a ser financiados con cargo al porcentaje de la Asignación por la inversión Local correspondiente a los pueblos y comunidades indígenas.
20. Autorizar la ejecución de compromisos que excedan la bienalidad, cuando se disponga de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio, los cuales se cancelarán con cargo a la disponibilidad inicial del presupuesto del bienio siguiente.
21. Las demás que señale la ley, el reglamento y los acuerdos de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.
Parágrafo primero. Los miembros de la Instancia Nacional de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas no son responsables por la ejecución de los proyectos de inversión; tal responsabilidad es exclusiva del ejecutor designado por dicha Instancia.
Parágrafo segundo. La Instancia a que se refiere el presente artículo emitirá las actas o acuerdos en los que conste las decisiones adoptadas por ésta.

Artículo XX. Informes de gestión de la Instancia Decisoria de Pueblos y Comunidades Indígenas. La Secretaría Técnica de la Instancia informará cada seis meses a la Mesa Permanente de Concertación, al Ministerio del Interior y al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control de la gestión de esta. El informe contendrá como mínimo: (i) resumen de la gestión en función de los proyectos de inversión aprobados, (ii) valor de los proyectos de inversión aprobados, (iii) articulación con los planes de vida y otros instrumentos de planeación propios y (iv) Puntaje obtenido de la aplicación del mecanismo de evaluación de puntajes de los proyectos de inversión.
Incluir en el artículo 4: Comisión Rectora. **Parágrafo cuarto.** La Comisión Rectora contará con un miembro elegido por la Instancia de Decisión de los pueblos y comunidades indígenas con voz y voto. Su participación será sobre las funciones contempladas en los numerales 1, 2, 6, 8 y 10 del artículo 5 de la presente Ley. Esta participación se realizará con plena autonomía sin que su voto requiera refrendación.
Inciso 4 del Artículo 6° Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regional. En cada uno de estos órganos habrá un representante de los pueblos y comunidades indígenas con voz y con voto, el cual será informado por la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Esta participación se realizará con plena autonomía sin que su voto requiera refrendación.
Incluir parágrafo en Artículo 11. Administración del Sistema General de Regalías. Parágrafo. La Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas dispondrá de un porcentaje para su funcionamiento, proveniente del porcentaje de que trata el numeral 1º del presente artículo, el cual será equivalente al porcentaje destinado para los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regionales y fijado directamente por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.
Artículo xx. Ejercicios de planeación. Para la identificación y priorización de las iniciativas y proyectos de inversión susceptibles a financiarse, los Pueblos y Comunidades Indígenas a través de sus autoridades, organizaciones, asociaciones u otras formas organizativas, realizarán ejercicios de planeación que respondan a su autonomía y la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, conforme lo dispone el artículo 15 del Decreto 1953 de 2014 y el artículo 5, numeral 3, del Decreto 632 de 2018 y a los objetivos y fines del Sistema General de Regalías. El acta o su equivalente, en la que conste la decisión, la cual deberá anexarse al correspondiente proyecto de inversión. **Parágrafo primero**. Los proyectos de inversión identificados y priorizados conforme lo dispuesto en este artículo que sean susceptibles a ser financiados con cargo al porcentaje de la Asignación para la Inversión Local, deberán ser

presentados a la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas por las autoridades a las que se refiere el inciso primero del presente artículo.

Parágrafo segundo. Las iniciativas y proyectos de inversión identificados y priorizados conforme lo dispuesto en este artículo que sean susceptibles de ser financiados con Asignaciones Directas para los pueblos y comunidades indígenas, se presentarán por las autoridades a las que se refiere el inciso primero de este artículo en las mesas de participación de las que trata el artículo 28 de la presente ley y serán incluidos por las entidades territoriales, respetando el principio de armonización y coordinación en los ejercicios de planeación territorial.

Artículo XX. Formulación y presentación de los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión serán formulados de conformidad con la metodología y lineamientos del Departamento Nacional de Planeación en su condición de entidad nacional de planeación y serán presentados con los respectivos estudios y soportes, previa revisión del cumplimiento de las características a que se refiere la presente ley. Tratándose de proyectos de inversión presentados por los pueblos y comunidades indígenas, la formulación incluirá el enfoque diferencial étnico que se definirá e implementará en coordinación con la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas.Para los efectos del presente capítulo, la presentación de los proyectos de inversión a ser financiados con recursos provenientes del porcentaje destinado a Pueblos y Comunidades Indígenas de la Asignación para la Inversión Local, estará a cargo de los pueblos y comunidades indígenas a través de su representante legal o autoridad debidamente inscrita en el registro único del Ministerio del Interior y se realizará ante la Secretaría Técnica de la instancia quien realizará el correspondiente registro para su respectivo trámite.

Artículo XX. Viabilidad y registro de los proyectos de inversión. La viabilidad de los proyectos de inversión de los que trata este capítulo se adelantará con sujeción a la metodología general que defina el Departamento Nacional de Planeación, en el marco del artículo anterior.

Los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con cargo al porcentaje de la Asignación para la Inversión Local correspondiente a los pueblos y comunidades indígenas, serán viabilizados y registrados por la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Artículo XX. Priorización y aprobación de proyectos de inversión. La Instancia de Decisión de las Comunidades Indígenas será la encargada de priorizar y aprobar los proyectos de inversión que se financiarán con cargo al porcentaje de la Asignación para la Inversión Local correspondiente a los pueblos y las comunidades indígenas, así como de verificar su disponibilidad de caja y saldo presupuestal, conforme a la Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de Regalías – SGR y la plataforma del Sistema de Presupuesto y Giro del SGR - SPGR.

Parágrafo. Se podrán aprobar proyectos de inversión únicamente hasta por el monto de la apropiación de cada bienio que haya sido asignada para los pueblos y comunidades indígenas, sin perjuicio que las entidades territoriales asignen recursos adicionales para tal fin.

Artículo XX. Ejecución de proyectos de inversión. la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas, designará la entidad ejecutora que se encargará de contratar la ejecución del proyecto de inversión y la interventoría de este cuando aplique, con cargo al porcentaje de la Asignación para la Inversión Local correspondiente a los pueblos y comunidades indígenas, teniendo en cuenta la propuesta de ejecutor que se presente en la iniciativa o proyecto de inversión.

Artículo XX. Entidades Ejecutoras. Las entidades ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea, la información de la gestión de los proyectos de inversión que se requiera e implementar las acciones que sean pertinentes para encauzar el desempeño de los proyectos y decidir, de manera motivada, sobre la continuidad de los mismos, sin perjuicio de las acciones de control a las que haya lugar.

Parágrafo primero. Además de las señaladas en la presente Ley, podrán ser designadas como entidad ejecutora los resguardos y asociaciones de resguardos, las asociaciones de cabildos y las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas u otras formas de organización debidamente inscritas en el registro único del Ministerio del Interior y las organizaciones indígenas a que se refiere el Decreto 252 de 2020 o el que lo modifique o sustituya.

La Entidad ejecutora y su representante legal o quien haga sus veces serán responsables por la correcta ejecución del proyecto de inversión y reportará al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías los actos, hechos u omisiones que puedan constituir una presunta irregularidad o incumplimiento en la ejecución de los proyectos de inversión.

Parágrafo segundo. La ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías se adelantará con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley, y al de contratación pública y las normas legales vigentes. El ejecutor será el ordenador del gasto y garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

Parágrafo tercero. Los ejecutores de los proyectos de inversión financiados con recursos de regalías serán sujetos de control administrativo y responsables fiscal, penal y disciplinariamente por la administración de dichos recursos.

Parágrafo cuarto. La entidad designada ejecutora deberá expedir el acto que ordena la apertura del proceso de selección o acto unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados.

Artículo XX. Ejecución de recursos. Los actos o contratos que expidan o celebren los ejecutores se regirán por las normas presupuestales contenidas en la presente Ley, el Estatuto de Contratación Estatal, los Decretos 1088 de 1993 y 252 de 2020, las normas contables que para este efecto defina la Contaduría General de la Nación y las demás disposiciones complementarias.

Artículo XX. Incorporación de recursos del ejecutor de proyectos de inversión de los pueblos y comunidades indígenas. En el caso que la entidad ejecutora sean los resguardos y asociaciones de resguardos, las asociaciones de cabildos y las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas u otras formas de organización debidamente inscritas en el registro único del Ministerio del Interior y las organizaciones indígenas a que se refiere el Decreto 252 de 2020 o el que lo modifique o sustituya, esta deberá incorporar los recursos en un capítulo presupuestal independiente de su presupuesto o el instrumento que corresponda, mediante Acta de la Asamblea General, o aquella que haga sus veces, del resguardo y asociaciones de resguardos, asociaciones de cabildos y asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, u otras formas organizativas, debidamente inscritos en el registro único del Ministerio del Interior y de las organizaciones indígenas, siempre y cuando estén conformadas exclusivamente por cabildos indígenas, resguardos indígenas, asociaciones de cabildos, asociación de autoridades u otra forma de autoridad indígena propia.

Artículo xx. Proyectos financiables con recursos de la Asignación Directa. Para el caso de los proyectos de inversión con cargo a la asignación directa para Pueblos y Comunidades Indígenas, una vez sean formulados, serán sus autoridades o representantes legales quienes realizarán la viabilidad, registro, priorización y aprobación conforme su derecho propio y las nomas del Sistema General de Regalías. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la aprobación del proyecto de inversión, se suscribirá un convenio entre el alcalde o gobernador y el representante o autoridad indígena que lo haya presentado, mediante el cual se formalizará la entrega del proyecto. En caso de que transcurrido este término no se haya suscrito el correspondiente convenio, el alcalde o Gobernador estará sujeto a las sanciones a las que haya lugar.

Mediante acto administrativo el alcalde o gobernador designará a la entidad ejecutora propuesta en el proyecto de inversión, la cual debe corresponder a una de las entidades previstas en el estatuto de contratación estatal o el Decreto 1088 de 1993 adicionado por el Decreto 252 de 2020, quien se encargará de contratar la ejecución del proyecto de inversión y la interventoría de éste cuando aplique.

Artículo XX. Destinación de los recursos para grupos étnicos de las Asignaciones Directas. Los municipios y departamentos con ingresos corrientes por concepto de asignaciones directas destinarán el 4,5% y 2% de su presupuesto bienal vigente por dicho concepto, respectivamente, para proyectos de inversión con enfoque diferencial en los Pueblos y Comunidades Indígenas y las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que se encuentren asentadas en aquellas entidades territoriales, debidamente acreditadas por la autoridad competente.
De conformidad con lo anterior, los municipios y departamentos destinarán los recursos aplicando la fórmula adoptada por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Parágrafo primero. La fórmula de destinación será elaborada de manera coordinada por el Gobierno nacional y la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas, para ser adoptada por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. La fórmula buscará contribuir al buen vivir, al cierre de brechas entre las poblaciones y podrá incluir, entre otros, criterios territoriales, de población y de medición de las condiciones de calidad de vida de las poblaciones, certificados por el DANE y las entidades competentes.

Parágrafo transitorio. Sólo para el siguiente Presupuesto del Sistema General de Regalías, la fórmula de destinación será la siguiente:

La participación = [(Población grupo étnico) / (Población pueblo y comunidad Indígena + Población NARP)] X [Total de recursos de la entidad destinados a la inversión con enfoque diferencial]

Parágrafo segundo. Lo anterior sin perjuicio de que los alcaldes o gobernadores destinen recursos adicionales de las asignaciones directas en proyectos de inversión para Pueblos y Comunidades Indígenas y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP).

Artículo xx Distribución de los recursos para los pueblos y comunidades indígenas de la Asignación para la Inversión Local. De la asignación del porcentaje de que trata el numeral 3 del artículo 49 de la presente Ley, se destinará un punto porcentual para los pueblos y comunidades indígenas.

Parágrafo. En cumplimiento del inciso 4° del artículo 361 de la Constitución Política, en el presupuesto bienal del Sistema General de Regalías se identificarán los recursos que, como mínimo, deben destinarse a proyectos de inversión relacionados con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible, que serán invertidos de acuerdo con la estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas a las que se refiere el artículo 20 de la presente Ley, conforme a las políticas expedidas por el Gobierno nacional para la adecuada

administración de los recursos naturales y en armonía con sus planes de vida o equivalentes.
Eliminar Artículo 52.
Adicionar un parágrafo al Artículo 53. Convocatorias públicas de los proyectos de Ambiente y el Desarrollo Sostenible, así: **Parágrafo:** Dentro de las convocatorias a las que se refiere el presente artículo, se realizarán convocatorias particulares que beneficien a los pueblos y comunidades indígenas coordinadas previamente entre el Gobierno nacional con la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades indígenas, en las cuales participarán los resguardos indígenas, asociaciones de resguardos, las asociaciones de autoridades o cabildos, autoridades propias, consejos indígenas y demás formas organizativas propias registradas en el Ministerio del Interior y las organizaciones de que trata el Decreto 252 de 2020 o las normas que lo modifiquen o adicionen. Estás también podrán presentarse en alianzas con otras entidades.
Incluir un parágrafo al artículo 54: **Parágrafo**: En cumplimiento del inciso 7º del artículo 361 de la Constitución Política, en el presupuesto bienal del sistema se señalarán los recursos que como mínimo deben destinarse a la inversión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible de los cuales participarán los pueblos y comunidades indígenas con derecho a una postulación de por lo menos 10 proyectos con enfoque diferencial bianuales. **NO ACORDADO**

NOTA: Se dio lectura de la presenta acta en la sesión la cual fue aprobada por los delegados indígenas oficiales y los delegados del Gobierno Nacional.

ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL ACTA:

1. Listado de asistencia.
2. Registro Audiovisual de la sesión de protocolización.
3. Relatoría.
4. Acta de la concertación técnica de los días 24, 25, 26 y 27 de julio de 2020.
5. Registro audiovisual de la concertación técnica.

En constancia firman.

Por los Pueblos y Organizaciones Indígenas,

LUIS FERNANDO ARIAS ARIAS
Consejero Mayor
Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC

JULIO CESAR LOPEZ JAMIOY
Coordinador General
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana. OPIAC

GEREMÍAS TORRES IZQUIERDO
Delegado MPC
Confederación Indígena Tayrona

WILSON GALINDO HERNANDEZ
Delegado MPC
Macro región Orinoquia

JUAN TITIRA ASERNDORA
Delegado MPC
Macro Región Centro Oriente

ORLANDO RAYO ACOSTA
Delegado MPC
Macro Región Amazonia

SAÚL DAVID CARRILLO
Delegado Macro región norte

ALFONSO PEÑA CHEPE
Ex constituyente

POLIVIO LEANDRO ROSALES
Representante Legal
Autoridades Indígenas de Colombia AICO por la Pacha Mama.

MIRYAM CHAMORRO CALDERA
Representante legal
Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia
Gobierno Mayor

JOSÉ LUIS QUIROGA
Delegado H. Representante a la Cámara Abel David Jaramillo

FELICIANO VALENCIA MEDINA
H.Senador

FRANCISCO ROJAS BIRRY
Exconstituyente

JUAN DE JESUS DOMICO
Delegado Macro Región Occidente

Por las entidades del Gobierno Nacional,

CARLOS ALBERTO BAENA LÓPEZ
Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos
Ministerio del Interior

CAROLINA ROJAS HAYES
Viceministra de Minas
Ministerio de Minas y Energía

AMPARO GARCÍA MONTAÑA
Subdirectora General Territorial
Departamento Nacional de Planeación

MARÍA CLAUDIA GARCÍA DÁVILA
Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA
Viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

YESID PARRA VERA
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación

FERNANDO AGUIRRE TEJADA
Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Ministerio del Interior

PAMELA FONRODONA ZAPATA
Coordinadora de Regalías
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

JOSE INSUASTI AVENDAÑO
Coordinador Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo y Regalías
Ministerio de Minas y Energía

CÉSAR ARMANDO FANDIÑO P.
Coordinador Grupo de Gestión Interinstitucional-DAIRM
Ministerio del Interior

Por organismos de control:



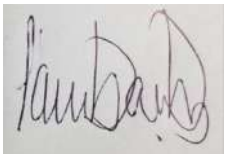
FERNANDO FIERRO GÓMEZ
Contratista
Defensoría Delegada para Grupos Étnicos
Defensoría del Pueblo



OMAIRA CÁRDENAS MENDOZA
Delegada
Procurador Delegado para Asuntos Étnico Procuraduría General de la Nación



JUDITH DEL PILAR VIDAL
Profesional Especializada
Defensoría Delegada para Grupos Étnicos
Defensoría del Pueblo



LAURA OBANDO
Delegada
Procurador Delegado para Asuntos Étnicos
Procuraduría General de la Nación

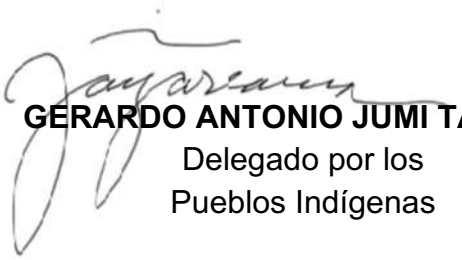


MARY LUZ ROSERO
Delegada
Dirección Estudios Intersectoriales
Contraloría General de la República

Por Secretarías Técnicas de la MPC.



LUZ ELENA IZQUIERDO TORRES
Delegada por el
Ministerio del Interior



GERARDO ANTONIO JUMI TAPIAS
Delegado por los
Pueblos Indígenas

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

87111-

Bogotá

Contraloria General de la Republica :: SGD 22-06-2018 14:23
Al Contestar Cite Este No.: 2018EE0076686 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 87111-DESPACHO DEL CONTRALOR DELEGADO PARA EL MEDIO AMBIENTE / DIEGO ALVARADO ORTIZ
DESTINO NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA / FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ASUNTO TRASLADO DE HALLAZGOS CON POSIBLE INCIDENCIA PENAL. AUDITORÍA ANLA ?
OBS HALLAZGOS CON POSIBLE INCIDENCIA PENAL. AUDITORÍA ANLA ?MINERÍA CESAR, VIGENCIA 2017
2018EE0076686

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
28 JUN 2018
DIRECCIÓN DE IMPRENTA, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

Doctor
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)
La Ciudad.

Asunto: Traslado Hallazgos con posible incidencia penal. Auditoría ANLA – MINERÍA, vigencia 2017

Respetado señor Fiscal,

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas en el artículo 267 de la Constitución Política, realizó una auditoría de cumplimiento al proceso de *"Licenciamiento ambiental a los proyectos de minería de carbón en el departamento del Cesar"*; de conformidad con las fuentes de criterio, los criterios y hechos evaluados, se determinaron los siguientes hallazgos con presunto alcance penal[1], los cuales se describen en el informe de auditoría con los siguientes títulos para lo de su competencia:

HALLAZGO N° 08 – D8. P1. AUTORIZACIONES DE CAMBIOS MENORES QUE GENERAN IMPACTOS AMBIENTALES ADICIONALES- Presunta connotación disciplinaria y penal. Pág 76.

HALLAZGO N°. 10 – D10. P2. MODIFICACIONES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL- Presunta connotación disciplinaria y penal. Pág 86.

HALLAZGO N° 11 – D11. P3. PLANTACIÓN DE BARRERAS VIVAS FICHA PMA_CALF01_01 AIRE (PLAN DE MANEJO PARA MATERIAL PARTICULADO Y RUIDO)- Presunta connotación disciplinaria. Pág 99.

HALLAZGO N°. 13 – D13 – P4. PRODUCCIÓN DE CARBÓN A ESCALA DE GRAN MINERÍA CON PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA MEDIANA MINERÍA- Presunta connotación disciplinaria y penal. Pág 117.

[1] La numeración de los hallazgos corresponde a la establecida en el Informe de Auditoría que estamos adjuntando.

HALLAZGO N° 18- D17- P5. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EXPEDIENTE LAM0027 – Con presunta connotación disciplinaria y penal. Pág 146.

HALLAZGO N°23 -D22–P6. COMPETENCIAS DE ANLA PARA EXPEDIR REGLAMENTACIONES EN MATERIA AMBIENTAL- Presunta connotación disciplinaria y penal. Pág 179.

HALLAZGO N° 27-D24- P7. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO PARA EL CONTROL DE ESTABILIDAD DE TALUDES (FICHA PMA-SLJ-BF-12) y PARA EL CONTROL DE AGUAS DE ESCORRENTIA (PMAU-SLJ-BF-14) DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UNIFICADO - RESOLUCION 2375 DE 2008 ANLA -Presunta connotación Disciplinaria y Penal. Pág 201

HALLAZGO N° 40- D34 – P8.- IMPULSO PROCESAL Y CUMPLIMIENTO DE TÈRMINOS EN PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES. Presuntas connotaciones Disciplinaria y Penal. Pág 305.

Asimismo, es preciso señalar que debido a que la CGR, no tiene facultad de determinar si una conducta es o no penal, se da traslado a la entidad competente, tanto del hallazgo de la auditoría como de los argumentos expuestos por la entidad auditada.

Conforme a lo anterior, se procede para lo de su competencia a dar traslado de los hechos citados en el informe final de auditoría en el CD anexo.

Cordial Saludo,

DIEGO ALVARADO ORTIZ
Contralor Delegado para el Sector Medio Ambiente

Anexo: Un (1) CD con Informe final de Auditoría

Revisó: Javier Ernesto Gutierrez Oviedo -DVF

Proyectó: Luis Alfonso Burbano líder Aud. / Eduardo Tapias Martínez Supervisor